

DIARIO DE SESIONES

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

03 y 04 de Diciembre de 2008

47ª Reunión – 44º Sesión Ordinaria

Vicgobernador:	CAMPANA , Héctor.
Presidente Provisorio:	FORTUNA , Francisco José.
Vicepresidente:	CARBONETTI , Domingo.
Vicepresidente 1ª:	VARAS , Augusto.
Vicepresidente 2ª:	POZZI , Hugo.
Secretario Legislativo:	ARIAS , Guillermo.
Secretario Administrativo:	DIB , Héctor Daniel.
Secretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	DANIELE , Fredy.
Secretaría Técnica Parlamentario:	COCCIOLO , María Belén.
Prosecretaría Legislativa:	PASTOR , Graciela del Carmen.
Prosecretaría Administrativa:	JURE , Laura.
Prosecretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	SCANDIZZO , Héctor.
Prosecretario Técnico Parlamentario:	MANZUR , Horacio.

Legisladores presentes:

ALARCIA, María Leonor.
 ALBARRACIN, Raúl Humberto
 ALESANDRI, Carlos Tomás.
 ALTAMIRANO, Alfredo.
 ARANDA, Martha Liliana.
 ASBERT, Enrique Mario.
 BIRRI, Roberto César.
 BISCHOFF, Eduardo Efraín.
 BRESSAN, Estela Beatriz.
 BRUGGE, Juan Fernando.
 BUSSO, Sergio Sebastian.
 CALVO AGUADO, María Soledad.
 CARBONETTI, Domingo Angel (h).
 CARRERAS, José Benito.
 CORIA, Adela.
 CUELLO, Hugo Oscar.
 CUGAT, Alfredo Jesús.
 DANDACH, Kasem Merched.
 DRESSINO, Ana María.
 FALO, Marcelo
 FAUSTINELLI, Hipólito.

FERAUDO, Evelina Margarita.
 FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
 FLORES, Ernesto Ramón.
 FORTUNA, Francisco José.
 FROSSASCO, Horacio Marcelo.
 GENESIO DE STABIO, Modesta M. Teresa
 GENTA, Mabel del Carmen.
 GIAVENO, Carlos José.
 GRAGLIA, José Emilio.
 GUDIÑO, Italo.
 HEREDIA, Dante Fortunato.
 IPÉRICO, Nelson José.
 JIMÉNEZ, Raúl Ernesto.
 LIZZUL, Nancy Fabiola.
 LOBO, Héctor Reinaldo.
 MAIOCCO, José Antonio.
 MANZANARES, María Graciela.
 MATAR, María Alejandra.
 MONIER, José Omar.
 NARDUCCI, Alicia Isabel.
 NICOLÁS, Miguel Osvaldo.

NIETO, Gladys del Valle.
 OCHOA ROMERO, Pedro.
 OLIVERO, María Liliana.
 ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel.
 PAGLIANO, Roberto Oscar.
 PASSERINI, Daniel Alejandro.
 PODVERSICH, Norberto Luís.
 PONCIO, Norma María.
 POZZI, Hugo Alberto.
 RIVERO, Silvia Graciela.
 RODRIGUEZ, Esmeralda del Tránsito.
 ROSSI, Dante Valentín.
 ROSSO, Milena Marina.
 RUIZ, Omar Antonio.
 SAIEG, Walter Eduardo.
 SCARLATTO, José Luís.
 SECULINI, César Omar.
 SELLA, Orlando Enrique

SENN, Horaldo Alejo.
 SERNA, Rodrigo Leandro
 SERRA, César Miguel José.
 SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
 VALAROLO, Mirtha del Carmen.
 VARAS, Augusto Enrique.
 VÁSQUEZ, Mario Alberto.
 VEGA, Horacio Daniel.
 VILLENA, José Eduardo.

Legisladores ausentes justificados:

CARGNELUTTI, Alicia. *(Licencia desde 18/11 al 17/12 de 2008, R2120/08)*

Legisladores ausentes no justificados:

SUMARIO

- 1.- Izamiento de la Bandera Nacional3592
 2.- Versión taquigráfica. Aprobación3592
 3.- Asuntos entrados:
 I.- Comunicación oficial3592

De los señores legisladores

II.- Ciudad de Villa Dolores. Antena de telefonía celular. Instalación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1956/L/08) del legislador Varas3592

III.- Hospital de Villa Dolores. Recursos humanos y materiales y funcionamiento del Programa Federal de Salud (PROFE). Pedido de informes. Proyecto de resolución (1957/L/08) del legislador Varas3592

IV.- Empresas subsidiadas por el Estado provincial. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1959/L/08) de los legisladores Faustinelli, Pozzi, Rossi, Cugat, Calvo Aguado, Dressino, Gaveno, Gudiño y Nicolás3592

V.- Programa Provincial de Forestación Vial. Creación. Proyecto de ley

(1960/L/08) de los legisladores Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi, Matar, Poncio y Nicolás 3592

VI.- Ciudad de Villa Carlos Paz. Basurales a cielo abierto. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1961/L/08) de la legisladora Genesio de Stabio 3592

VII.- Camino entre Villa Huidobro, Dpto. Gral. Roca, y la Provincia de La Pampa. Pavimentación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (1962/L/08) del legislador Pagliano 3593

VIII.- Ruta Provincial Nº 26. Acceso a la Comuna de Ranqueles, Dpto. Gral. Roca. Pavimentación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (1963/L/08) del legislador Pagliano 3593

IX.- Ruta Provincial Nº 26. Tramo Villa Huidobro-límite con la Provincia de San Luis. Pavimentación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (1964/L/08) del legislador Pagliano 3593

X.- Lotería de Córdoba. Recaudación y fondos destinados al Fondo para la Asistencia e Inclusión Social. Pedido de

informes. Proyecto de resolución (1965/L/08) de los legisladores Giaveno, Rossi, Dressino, Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat ... 3593

XI.- Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1966/L/08) del legislador Birri ... 3593

XII.- Iglesia San Juan Bautista, en Nono, Dpto. San Alberto. Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1967/L/08) de los legisladores Rodríguez y Seculini ... 3593

XIII.- Escuelas de nivel primario. Programa para incentivar la lectura y comprensión de textos. Implementación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (1968/L/08) del legislador Ochoa Romero ... 3593

XIV.- Política educativa con plena vigencia de los Derechos Humanos. Consolidación. Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el INADI, la DAIA y el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Interés y adhesión. Proyecto de declaración (1970/L/08) de los legisladores Chiofalo y Passerini ... 3593

XV.- Planta de Personal Ocupado del Sector Público No Financiero Provincial. Cantidad de agentes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1971/L/08) del legislador Varas ... 3593

XVI.- Ley Nº 9315. Incorporación a la currícula escolar de contenidos referidos al genocidio armenio. Artículo 2º. Modificación. Artículos 2º bis y ter. Incorporación. Proyecto de ley (1972/L/08) de los legisladores Chiofalo y Passerini ... 3593

XVII.- Villa de Soto. Fiestas Patronales en honor a "Nuestra Señora Inmaculada del Valle. Adhesión y beneplácito. Pro-

yecto de declaración (1973/L/08) del legislador Monier ... 3594

XVIII.- Radio Sur 90.1 FM, en la Ciudad de Córdoba. 20º Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1974/L/08) del legislador Passerini ... 3594

XIX.- 14º Curso de Educación Continua en Pediatría 2009, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1975/L/08) del legislador Passerini ... 3594

XX.- Biblioteca Popular Vélez Sársfield. Centenario. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1976/L/08) del legislador Passerini ... 3594

XXI.- Sistema de Riego del Río Los Sauces. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1977/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Poncio, Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño, Dressino, Faustinelli, Pozzi y Rossi ... 3594

XXII.- Imagen de la Virgen de los Dolores. Llegada a Villa Dolores, Dpto. San Javier. 150º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (1978/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Poncio, Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño, Dressino, Faustinelli, Pozzi y Rossi ... 3594

Del Poder Ejecutivo

XXIII.- Ley Nº 9456, Fondo para el Desarrollo Agropecuario, modificado por la Ley Nº 9505. Artículo 6º. Sustitución. Proyecto de ley (1950/E/08) del Poder Ejecutivo ... 3594

XXIV.- Programa de Estadísticas 2008. Cumplimiento. Convenio Marco entre el INDEC y la Provincia. Aprobación. Proyecto de ley (1951/E/08) del Poder Ejecutivo ... 3594

XXV.- Despachos de comisión ... 3594

4.- José D. Pioli, empelado legislativo. Fallecimiento. Homenaje ... 3595

5.- Distinción Profesor Doctor Ramón Carri-
llo. Entrega 3595

6.- A) Hospital Municipal Gumersindo Sa-
yazo, en Villa Carlos Paz. Aportes reali-
zados por la Provincia. Destino. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1603/L/08) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuel-
ta a comisión, para su archivo. Se
aprueba..... 3604

B) Programa Provincial de Atención de
Pacientes Obesos en el Hospital Cór-
doba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1717/L/08) del legislador Va-
ras, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba 3604

C) Tierras destinadas a la construcción
de viviendas. Financiamiento para la
adquisición. Acta Acuerdo firmada por el
Ministerio de Solidaridad. Pedido de in-
formes. Proyecto de resolución
(1734/L/08) de la legisladora Genesio
de Stabio. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba 3604

7.- A) Plantas Almacenadoras, Clasificado-
ras, Acondicionadoras y de Conserva-
ción de Granos. Situación actual. Diver-
sos aspectos. Pedido de informes. Pro-
yecto de resolución (1546/L/08) de los
legisladores Faustinelli, Nicolás, Pozzi,
Calvo Aguado, Poncio, Rossi y Matar,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba 3605

B) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Balances genera-
les de los últimos cuatro años. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0879/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba 3605

C) Ex Molino Centenario. Posible adqui-
sición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0347/L/08) del legislador Va-
ras, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba 3605

D) Corporación Inmobiliaria Córdoba SA
(Ley N° 8836). Diversos aspectos. Pedi-
do de informes. Proyecto de resolución
(0695/L/08) de los legisladores Cugat,
Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Fausti-
nelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo
Aguado y Rossi, con moción de prefe-
rencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba 3605

E) Casino Provincial de la ciudad de Al-
ta Gracia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0484/L/08) de los legisladores Varas y
Ortiz Pellegrini, con moción de prefe-
rencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba 3605

F) Plan anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego y Fondo para la Pre-
vención y Lucha contra el Fuego. Pedi-
do de informes. Proyecto de resolución
(1328/L/08) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuel-
ta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..... 3605

G) Empresa Kolektor. Diversos aspec-
tos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1391/L/08) de los legislado-
res Calvo Aguado, Poncio y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuel-
ta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..... 3605

H) Proyecto del Instituto de Planificación
Metropolitana de Conectividad Vial
(IPLAM). Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1454/L/08) de los legisla-
dores Serna y Bischoff, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comi-
sión, con preferencia. Se aprueba 3605

I) Poblaciones del noroeste del Gran
Córdoba. Problema de aprovisionamien-
to de agua potable. Medidas, obras y
proyectos para solucionarlo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0963/L/08) de los legisladores Seculini,
Coria y Birri, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3605

J) Decreto N° 945/08 (Subsecretaría de Recursos Hídricos). Pedido de informes. Proyecto de resolución (1209/L/08) de los legisladores del bloque Concertación Plural, y de los legisladores Rodríguez, Birri, Bischoff, Jiménez y Seculini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba..... 3605

K) Sierras Chicas. Servicio de agua potable. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1211/L/08) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba..... 3605

L) Escuela Armando Rótulo, en Río Tercero. Problemas edilicios y falta de equipamiento para el funcionamiento del PAICOR. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1537/L/08) de los legisladores Matar, Poncio, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado, Giaveno, Cugat, Nicolás y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3605

M) Sucursales del Banco Provincia de Córdoba. Inmuebles. Enajenación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0488/L/08) de los legisladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3605

N) Registro General de la Provincia. Cuenta Previsión para Juicios y balance 2007. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1495/L/08) de los legisladores Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba..... 3606

O) Localidad de Chaján, Dpto. Río Cuarto. Expropiación de terrenos. Pedido de informes. Proyecto de resolución

(1612/L/08) de los legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Dressino y Cugat, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba..... 3606

P) Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto. Carencia de médicos neurólogos y fonoaudiólogos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1405/L/08) del legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3606

Q) Plan Agua Para Todos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0793/L/08) de los legisladores Matar, Faustinelli, Dressino, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3606

R) Censo de Población Córdoba 2008. Cartografía utilizada y límites de radios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1243/L/08) de los legisladores Seculini, Birri y Serra, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3606

S) Comunidad Regional San Javier. Fondos transferidos por la Provincia. Período 2006-2007. Monto y destino. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0708/L/08) de los legisladores Gudiño y Calvo Aguado, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3606

T) Ley N° 26.075, de Financiamiento Educativo. Convenio Bilateral 1163/06 con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0446/L/08) de la legisladora Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3606

U) Escuelas rurales y urbanas. Sistema de calefacción. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (0538/L/08) de las legisladoras Coria y Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3606

V) Ministerio de Justicia. Proyectos y acciones sobre políticas anticorrupción. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1693/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3606

W) Cuenta de Inversión, Ejercicio Financiero 2007. Comunicaciones Oficiales (0315/N/08 y 0675/N/08), del Poder Ejecutivo, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3606

X) Hogar de Menores Madres "Padre Luis Feliú", en La Calera. Traslado de menores, refacciones edilicias y actividades educativas y formativas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1716/L/08) de los legisladores Seculini, Rodríguez, Coria y Rivero. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3606

8.- A) Fondo de Enfermedades Catastróficas. Erogaciones y destinatarios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0892/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Poncio, Matar y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3609

B) Basurales a cielo abierto en la Provincia. Erradicación total. Estado de gestión. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1082/L/08) del legislador Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3609

C) Programa de Salud Familiar de la Provincia. Período 2007. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1286/L/08) de los legisladores Jiménez y Varas, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3609

D) Clínicas y/o Sanatorios del interior de la Provincia de Córdoba. Cierres y/o reducciones de servicios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1468/L/08) de los legisladores Giaveno, Faustinelli, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Rossi, Dressino, Nicolás, Poncio, Matar y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3609

E) Nuevo Hospital San Roque. Problemas edilicios y de infraestructura. Estudios ambientales ejecutados en el Polo Sanitario. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1545/L/08) de los legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi, Poncio, Rossi y Matar, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba..... 3609

F) Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados en Pediatría (CEDEPAP). Proyectos de investigaciones clínicas realizados en hospitales públicos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1567/L/08) de los legisladores Jiménez, Rodríguez, Coria, Ortiz Pellegrini, Seculini, Birri, Ruiz y Poncio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3609

G) Programas para reducir la mortalidad materna e infantil y tasas de mortalidad materna y fecundidad. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1581/L/08) de los legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Nicolás y Poncio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3610

H) Laguna Mar Chiquita. Salinización del terreno, biodiversidad, sustentabilidad y humedades del Río Dulce y construcción de un acueducto. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1585/L/08) del legislador Serna, con moción de preferencia. Moción de vuel-

ta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3610

I) Juego compulsivo. Promoción y desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención y asistencia y recuperación de personas con ludopatía. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0999/L/08) de los legisladores Birri, Seculini, Lizzul y Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3610

J) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1479/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3610

K) Río de Los Sauces, en San Pedro, Dpto. San Alberto. Extracción de áridos. Ley N° 7343. Incumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1160/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti, Matar, Dressino, Rossi y Poncio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3610

L) Trata de personas con fines de explotación sexual en la Provincia. Políticas preventivas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0572/L/08) de los legisladores Coria, Fernández, Ortiz Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3610

M) Secretaria de Trabajo de la Provincia. Inspecciones y fiscalizaciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0451/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3610

N) Municipalidades y comunas del interior. Aumento a pasivos. Pedido de in-

formes. Proyecto de resolución (0857/L/08) de los legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustini y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3610

O) Metales pesados en el aire, en la Provincia. Acciones previstas para su eliminación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1047/L/08) del legislador Albarracín, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3610

P) Áreas naturales de la Provincia. Evaluación y tratamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1332/L/08) del legislador Albarracín, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3610

Q) Enterramiento sanitario, en Bouwer. Planteos de vecinos y autoridades. Acciones emprendidas para dar respuestas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1349/L/08) de los legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3610

R) Censo 2008, en Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1350/L/08) de los legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3610

S) Consejo Asesor (Ley N° 7734). Integración. Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo. Monto y destino. Período 2000-2008. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1440/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3610

T) Programa Nutricional la Copa de Leche. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1452/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3610

U) Hogar de Ancianos, en Villa Huidobro. Construcción. Finalización. Partidas presupuestarias comprometidas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1223/L/08) de los legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3610

V) Localidad de Vicuña Mackenna. Hecho en el que perdió la vida un Suboficial de la División de Investigaciones. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1496/L/08) del legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3610

W) Plan Director Provincial de Sistemas de Gasificación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1499/L/08) del legislador Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3610

X) Empresa Caminos de las Sierras SA. Convenio para la realización de obras sobre Avenida Padre Luchesse, en Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1523/L/08) de los legisladores Bischoff y Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3610

Y) Régimen Nacional de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (RNHPGD). Listado de hospitales provinciales incluidos. Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Cumplimiento. Convenios con entidades de seguridad social comprendidas en la Ley N° 23.660. Realización.

Pedido de informes. Proyecto de resolución (1531/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3610

Z) Proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN). Pedido de informes. Proyecto de resolución (1532/L/08) de la legisladora Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3610

A') Río de Soto. Extracción de áridos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1543/L/08) de los legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar, Poncio, Cugat y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3610

B') Policía de la Provincia. Adquisición de armamento y equipos, período 2004 al 2008. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1276/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3610

C') Agencia Córdoba Turismo SEM. Programas y planes implementados, presupuestos ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1587/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3611

D') Ministerio de Salud. Programas, planes, obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1588/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3611

E') Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Obras, proyectos y presupuestos

ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1589/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3611

F') Secretaría de Ambiente. Programas, planes, obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1590/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3611

G') Ley N° 9504, Emergencia Previsional. Monto retenido, destino, jubilados afectados y monto recibido desde la Nación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1601/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3611

H') Motocicletas. Programas y campañas de educación vial y medidas de control en los puntos de venta sobre el uso del casco. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1604/L/08) de los legisladores Rodríguez, Seculini, Birri, Coria y Bischoff, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3611

I') Policía de la Provincia. Cumplimiento de las normas de tránsito. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1632/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3611

J') Policía de la Provincia de Córdoba. Lucha contra los delitos contra la propiedad y la delincuencia organizada y programas de capacitación de personal.

Pedido de informes. Proyecto de resolución (1641/L/08) de los legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3611

K') Escuelas provinciales. Registro de alumnos con discapacidad de la DIPE y DRE. Inserción laboral de los alumnos con discapacidad egresados de instituciones públicas como privadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1530/L/08) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba... 3611

L') Barrio El Talar, en Mendiola. Destacamento policial. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0687/L/08) de los legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3611

M') Procedimiento de detención de militantes sindicales. Convocatoria al Ministro de Gobierno para informar. Proyecto de resolución (1341/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3611

N') Escuela de Policía San Martín. Sometimiento a actividades extremas a los cadetes y uso de armas en las prácticas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1281/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3611

O') Secretaría de la Juventud. Vehículo oficial. Supuesta sustracción. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1408/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 3611

P') Ministerio de Educación. Designación de personal. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1023/L/08) de los legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3611

Q') Registro de Poseedores. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1228/L/08) de los legisladores Coria y Seculini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3611

R') Urbanización Tierra Alta, en Malagueño. Colocación de una toma de agua y descarga de líquidos cloacales en el Lago San Roque. Autorización. Plan de Abastecimiento de Agua para la Provincia. Existencia. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0925/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3611

S') Servicio Penitenciario. Retiro de agentes y beneficios otorgados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1409/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3611

T') IPEM Nº 315, en San Francisco. Director y Vicedirector. Pase a tareas administrativas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1691/L/08) de los legisladores Coria, Ortiz Pellegrini, Birri y Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3611

U') Programas Asistenciales para menores alojados en Institutos Correccionales. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1696/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno, Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Gudiño, Poncio y Rossi. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3611

V') Empresas Volkswagen Argentina SA, Renault Argentina SA e IVECO Argentina SA. Convenios aprobados por las Leyes Nº 9501, 9500 y 9499. Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1718/L/08) de los legisladores Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Poncio, Gudiño, Pozzi y Cargnelutti. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3611

W') Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1723/L/08) de los legisladores Cugat, Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3611

X') Ley Nacional Nº 24.449, de Tránsito. Artículo 30. Inciso f (tonalidades permitidas en los vidrios de los automóviles). Control por parte de la Policía Caminera. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1731/L/08) de la legisladora Genesio de Stabio. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3611

Y') Emergencia hídrica. Red de Alerta Temprana. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1741/L/08) de los legisladores Bischoff y Serna. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3611

Z') Ecosistemas naturales. Medidas adoptadas tendientes a la protección. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1770/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3612

A'') Residuos peligrosos. Generadores y operadores. Contaminación ambiental. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1771/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3612

B'') Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

- (PPGIRSU). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1773/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 3612
- 9.- Campaña Provincial de Detección Precoz de Escoliosis, en Córdoba, Laguna Larga, Monte Cristo y Las Varillas. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1628/L/08) de los legisladores del bloque Concertación Plural, con despacho de comisión. Se considera y aprueba ...3619
- 10.- Asuntos entrados a última hora:
- XXVI.- Libro “Evaluación Nutricional de Ancianos. Conceptos, métodos y técnicas”, de Magíster Lic. Raquel S. Acosta. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1980/L/08) del legislador Jiménez ... 3620
- XXVII.- Copa Rotax de Karting, en Lecce, Italia. Facundo Chapur, kartista cordobés. Obtención del Campeonato Mundial. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1981/L/08) del legislador Serna ... 3620
- XXVIII.- Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba “Prof. Dr. Juan Martín Allende”. 120º Aniversario. Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de resolución (1982/L/08) de los legisladores Podversich, Fortuna y Passerini ... 3620
- XXIX.- Premios “Contacto+ 2ª edición”, en Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1983/L/08) del legislador Monier ... 3621
- XXX.- Desaparición de Javier Echenique y Miriam Domínguez, en Villa Carlos Paz. Investigación y esclarecimiento. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (1986/L/08) del legislador Serna ... 3621
- XXXI.- Día Internacional de las personas con Discapacidad. Adhesión y reconocimiento. Proyecto de declaración (1987/L/08) de los legisladores del bloque Concertación Plural ... 3621
- XXXII.- Despachos de comisión 3621
- 11.- Huinca Renancó, Dpto. Gral. Roca. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (0777/E/08) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular ... 3621
- 12.- Bienes y lotes (Expediente N° 0045-014508). Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación. Proyecto de ley (1919/E/08) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular ... 3626
- 13.- A) Capilla de Santa Bárbara, en Pampa de Olaen. Fundación. Aniversario. Festejos patronales. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (1820/L/08) de la legisladora Narducci. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con modificaciones 3629
- B) Villa de Soto. Fiestas Patronales en honor a “Nuestra Señora Inmaculada del Valle. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1973/L/08) del legislador Monier. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba 3629
- C) Imagen de la Virgen de los Dolores. Llegada a Villa Dolores, Dpto. San Javier. 150º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (1978/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Poncio, Nicolás, Matar, Gaveno, Gudiño, Dressino, Faustinelli, Pozzi y Rossi. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba 3629
- D) Libro “Evaluación Nutricional de Ancianos. Conceptos, métodos y técnicas”, de Magíster Lic. Raquel S. Acosta. Inte-

rés legislativo. Proyecto de declaración (1980/L/08) del legislador Jiménez. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con modificaciones ... 3629

E) Copa Rotax de Karting, en Lecce, Italia. Facundo Chapur, kartista cordobés. Obtención del Campeonato Mundial. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1981/L/08) del legislador Serna. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con modificaciones3629

F) Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba "Prof. Dr. Juan Martín Allende". 120º Aniversario. Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de resolución (1982/L/08) de los legisladores Podversich, Fortuna y Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con modificaciones3629

G) Premios "Contacto+ 2ª edición", en Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1983/L/08) del legislador Monier. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3629

H) Día Internacional de las personas con Discapacidad. Adhesión y reconocimiento. Proyecto de declaración (1987/L/08) de los legisladores del bloque Concertación Plural. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3629

14.- Asuntos entrados a última hora:

XXXIII.- Despachos de comisión3636

15.- Código Electoral provincial. Proyectos de ley compatibilizados (1861/L/08, 05661/L/04, 06254/L/04, 11646/L/07, 0404/L/08, 0407/L/08, 0911/L/08, 1674/L/08, 1700/L/08, 1701/L/08, 1703/L/08, 1763/L/08, 1814/L/08, 1872/L/08 y 1880/L/08) de los legislado-

res del bloque Unión por Córdoba – Frente para la Victoria y el bloque Concertación Plural; de los legisladores Guzmán, Maiocco y Valinotto; de los legisladores Gastaldi y Soleri; del legislador Rossi; de los legisladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño; de los legisladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño; del legislador Cugat; del legislador Ruiz; de la legisladora Genesio de Stabio; de la legisladora Genesio de Stabio; de la legisladora Genesio de Stabio; de los legisladores Varas, Ortiz Pellegrini y Birri; del legislador Brügge; del legislador Faustinelli; y del legislador Maiocco, respectivamente, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión. Se consideran y aprueban en general y en particular, con modificaciones..... 3637

16.- A) Régimen Jurídico de los Partidos Políticos. Proyectos de ley compatibilizados (1860/L/08, 11308/L/07, 11647/L/07 y 1733/L/08) de los legisladores del bloque Unión por Córdoba – Frente para la Victoria y el bloque Concertación Plural; de los legisladores Olivero, Fonseca y Valinotto; del legislador Rossi; y del legislador Birri, respectivamente, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto sobre tablas. Se consideran y aprueban en general y en particular, con modificaciones 3793

B) Ley Nº 8102, Orgánica Municipal. Renovación de autoridades, elecciones, campañas electorales, publicidad oficial y actos inaugurales de obras. Artículos 143 y 218. Modificación. Título VIII, Capítulo VII. Incorporación. Proyecto de ley (1897/L/08) de los legisladores Passerini y Fortuna, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular, con modificaciones 3793

- 17.- A) Reforma de la Constitución provincial. Necesidad. Comunicación oficial (0153/N/08) de la legisladora Genesio de Stabio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ... 3845
- B) Constitución Provincial. Reforma parcial. Necesidad. Declaración. Proyecto de ley (0176/L/08) de la legisladora Genesio de Stabio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ... 3845
- C) Constitución provincial. Reforma Parcial. Necesidad. Declaración. Proyecto de ley (1048/L/08) del legislador Albarracín, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ... 3845
- D) Constitución provincial. Reforma. Necesidad. Consulta Popular no vinculante. Convocatoria. Proyecto de ley (1572/L/08) de los legisladores Ruiz, Ri-

vero, Asbert, Maiocco y Genesio de Stabio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ...3845

E) Constitución de la Provincia de Córdoba. Reforma parcial. Necesidad. Declaración. Proyecto de ley (1832/L/08) de los legisladores del Bloque Frente Cívico y Social y el Bloque de Unión Vecinal Federal, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ...3845

F) Constitución provincial. Reforma parcial. Necesidad. Proyecto de ley (1873/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ...3845

G) Constitución provincial. Reforma parcial. Necesidad. Proyecto de ley (1877/L/08) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ...3845

– En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de diciembre de 2008, siendo la hora 16 y 07:

- 1 -

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 37 señores legisladores, declaro abierta la 44ª sesión ordinaria del 130 período legislativo.

Invito a la señora legisladora Liliana Olivero a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Olivero procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

- 2 -

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

- 3 -

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.

**I
COMUNICACIÓN OFICIAL**

**DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES**

1969/N/08

De la Secretaría de Coordinación Operativa y

Comisiones: Remitiendo al archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº: 05375, 05435, 05612, 06275/L/04, 07823, 07913/L/05, 09486, 09771, 09983, 10024/L/06, 11499, 11504, 11522, 11532, 11533, 11547, 11548, 11563, 11565, 11570, 11575, 11589, 11592, 11593 y 11594/L/07.

Al Archivo

**PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES**

II

1956/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la existencia de una antena de telefonía celular en el centro de la ciudad de Villa Dolores.

A la Comisión de Asuntos Ecológicos

III

1957/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del hospital de la ciudad de Villa Dolores.

A la Comisión de Salud Humana

IV

1959/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Pozzi, Rossi, Cugat, Calvo Aguado, Dressino, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas subsidiadas por el Estado provincial y la implementación de la capacitación en nuevos oficios.

A la Comisión de Industria y Minería

V

1960/L/08

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi, Matar, Poncio y Nicolás, por el que crea el Programa Provincial de Forestación Vial.

A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

VI

1961/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los basurales a cielo abierto situados en la entrada de la ciudad de Villa Carlos Paz.

A la Comisión de Asuntos Ecológicos**VII****1962/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización del proyecto para la pavimentación del tramo que une la localidad de Villa Huidobro con el límite con la Provincia de La Pampa.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**VIII****1963/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización del proyecto para la pavimentación del acceso que une la comuna de Ranqueles con la Ruta Provincial N° 26, a la altura del km. 48.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**IX****1964/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización del proyecto para la pavimentación de la Ruta Provincial N° 26, en el tramo que une la localidad de Villa Huidobro con el límite con la Provincia de San Luis.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**X****1965/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino, Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación de la Lotería de Córdoba, en virtud de lo establecido por la Ley N° 9505, así como el dinero destinado al Fondo para la Asistencia e Inclusión Social.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**XI****1966/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Sr. Ministro de Salud

(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto, funcionamiento de equipos y el monto de recupero de pacientes mutualizados del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.

A la Comisión de Salud Humana**XII****1967/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el cual adhiere al Centenario de la Iglesia “San Juan Bautista” de la localidad de Nono, departamento San Alberto.

A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes**XIII****1968/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, implemente un programa para incentivar la lectura y comprensión de textos a alumnos de nivel primario.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**XIV****1970/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Chiofalo y Passerini, por el cual adhiere al “Convenio Marco de Cooperación” suscripto entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el INADI, la DAIA y el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, para la consolidación de una política educativa con plena vigencia de los Derechos Humanos.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**XV****1971/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que componen la planta de personal ocupado del sector público no financiero del Estado provincial.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**XVI**

1972/L/08

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo y Passerini, por el que modifica el artículo 2º e incorpora los artículos 2º bis y ter a la Ley N° 9315, sobre la incorporación a la currícula escolar de contenidos referidos al genocidio armenio y a su conmemoración por parte de empleados y alumnos de dicho origen.

A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XVII**1973/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales en honor a "Nuestra Señora Inmaculada del Valle" de Villa de Soto, que se celebra del 29 de noviembre al 8 de diciembre.

A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

XVIII**1974/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo el 20º aniversario de la Radio Sur 90.1 FM de la ciudad de Córdoba, a conmemorarse el 10 de diciembre.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XIX**1975/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo el 14º Curso de Educación Continua en Pediatría 2009, a desarrollarse del 13 de marzo al 5 de diciembre en la ciudad de Córdoba.

A la Comisión de Salud Humana

XX**1976/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo el Centenario de la Biblioteca Popular Vélez Sársfield, a conmemorarse el 11 de mayo de 2009.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XXI**1977/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño, Dressino, Faustinelli, Pozzi y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al consorcio de riego del río Los Sauces.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

XXII**1978/L/08**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño, Dressino, Faustinelli, Pozzi y Rossi, por el cual adhiere a los 150 años de la llegada de la imagen de la Virgen de los Dolores a la ciudad de Villa Dolores, a celebrarse el 8 de diciembre.

A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO

XXIII**1950/E/08**

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que sustituye el artículo 6º de la Ley N° 9456 -Fondo para el Desarrollo Agropecuario-, modifica por la Ley N° 9505.

A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía, Presupuesto y Hacienda

XXIV**1951/E/08**

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Marco celebrado entre el INDEC y la Provincia, con el objeto de dar cumplimiento al Programa de Estadísticas 2008 en distintas actividades.

A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXV DESPACHO DE COMISIÓN

Despachos de la Comisión de Salud Humana

1)0806/L/08

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cugat, Gudiño, Pozzi, Calvo Aguado, Matar, Poncio, Dressino, Nicolás y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incorporar al Sistema de Residencias a los Psicólogos, Trabajadores Sociales, Nutricionistas y demás integrantes del los Equipos de Salud.

Al Orden del Día

2)1323/L/08

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Giaveno, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, considere la factibilidad de establecer en los Hospitales Regionales de la Provincia Juntas Certificadoras de Discapacidad.

Al Orden del Día

3)1583/L/08

Proyecto de Declaración

Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al H. Congreso de la Nación recomiende al Poder Ejecutivo, incluya en el Calendario Nacional de Vacunación la denominada vacuna contra el neumococo, según lo recomendado por la OMS.

Al Orden del Día

- 4 -

**JOSÉ D. PIOLI, EMPELADO LEGISLATIVO.
FALLECIMIENTO.
HOMENAJE**

Sr. Presidente (Campana).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, todos ustedes saben que el jueves pasado, 27 de noviembre, falleció, en un trágico accidente, un empleado de la Intendencia de esta Legislatura, el señor José Daniel Pioli, por lo que en su honor y en su memoria, vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.

– Puestos de pie los señores legisladores y público presente, se guarda un minuto de silencio.

- 5 -

DISTINCIÓN PROFESOR DOCTOR RAMÓN CARRILLO. ENTREGA.

Sr. Presidente (Campana).- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento Interno, y a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a hacer entrega de la distinción “Profesor Doctor Ramón Carrillo” a profesionales de la salud de nuestro medio, destacados por sus colegas y por la Comisión de Salud de esta Unicameral.

Quiero hacer mención a las autoridades presentes: el Reverendo Padre licenciado Rafael Orona, presidente de la Fundación para el Progreso de la Medicina, de la Universidad Católica de Córdoba; el doctor Nelson Montoya Jaramillo, director médico de la Clínica Universitaria Privada Reyna Fabiola; la profesora María Graciela Cañete, directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba; el doctor Ramón Ocanto, vicepresidente del Círculo Odontológico de Córdoba; el doctor Pedro Saracho Cornet, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba; y la licenciada Elsa Cristina Bravo, presidenta del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.

Tiene la palabra el señor legislador Podversich.

Sr. Podversich.- Señor presidente: como primera obligación, debo hablarle a mis pares sobre los motivos de este acontecimiento legislativo, donde homenajeamos a la salud de Córdoba en sus figuras más señeras desde el año 2005.

La entrega de la “Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo a la Excelencia en Salud” fue instituida por la anterior Comisión de Salud Humana, integrada por quien les habla y por la señora legisladora Liliana Olivero, pero quince legisladores con mandato vigente integraban la anterior Cámara, por lo cual casi el 80 por ciento de los legisladores presentes desconocen el sentido y el espíritu de este acontecimiento.

La idea surgió de la necesidad de distinguir, en una única sesión, por la tarea de la excelencia en salud, la labor de profesionales de la medicina dedicados a la investigación, docencia y atención de la salud, y toda otra actividad que promueva el pleno bienestar psicofísico y social en el ámbito del territorio provincial, como reza el decreto que lo instituye.

En aquella oportunidad, se creyó conve-

niente fijar como fecha de entrega el 12 de septiembre en conmemoración de la Asamblea de Alma-Ata, que estableció como paradigma la atención primaria en salud. Hoy, transcurrido el tiempo, creemos que la prevención de la salud está absolutamente asumida por todos sus actores, y la atención primaria de la salud se ha constituido en una política de Estado, tanto en el orden nacional como provincial y municipal.

Por ese motivo le planteamos al señor Vicegobernador la necesidad de establecer una nueva fecha, más acorde con la historia de los cordobeses y más ligada a la excelencia en salud. Encontramos el eco necesario y el acompañamiento de quien hoy preside esta sesión, señor Héctor Campana, para hacer coincidir la fecha de entrega de las distinciones que hoy otorgamos, en nombre del pueblo de Córdoba, con el aniversario de la creación de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, que celebra sus 120 años de vida pasado mañana, 5 de diciembre.

Además, por su sugerencia, extendimos este acontencimiento también como un homenaje post mortem a quienes hoy no están físicamente con nosotros, pero que eran los primeros merecedores de esta distinción de parte de los representantes del pueblo.

Con este espíritu hoy estamos reconociendo en esta sesión legislativa la excelencia en salud de nueve personalidades, dos de ellos, Andrés Urrutia Sans y Mónica Tobares, con la plenitud de su fuerza creadora vigente; otro de ellos, el profesor doctor Rafael Garzón, reliquia viviente de esta historia, en la plenitud de su sabiduría al servicio de sus semejantes; y los seis restantes, los profesores Pablo Mirizzi, Juan Martín Allende y Rodolfo Tannchen; los bibliotecarios Teodoro Cañete y Ofelia Sipowicz García, y el Reverendo Padre Jean Sonet, sacerdote jesuita –como decía-, ausentes sólo materialmente.

Como hombre de fe y creyente, estoy convencido que estos seis próceres de la salud, que nos dejaron sólo corporalmente, están en medio de nosotros, porque si cerramos los ojos e invocamos sus nombres tomados de la mano, los veremos con una sonrisa de satisfacción, porque para ellos, que no transcurre el tiempo, el homenaje de los políticos de hoy será el homenaje de los políticos de todos los tiempos.

Quizás también se atreverían a un reproche, en la intemporalidad de sus vidas, porque en

silencio, con su ejemplo, nos están marcando un camino. Un camino que, al mostrarnos la infinitud de la vida de los pueblos, nos haría ver que lo nuestro es pasajero, es coyuntural, que la vida no es sólo este instante y que el pueblo merece que construyamos una vida mejor, que pensemos en el futuro sin mezquindades ni intereses materiales, porque ellos nos están mostrando que lo material desaparece y sólo quedan los frutos de las obras que hayamos realizado por nuestros semejantes.

Mirizzi y Allende, y otros de quienes no se pudo ubicar familiares, como Nicolás Albarellos, Pedro Ara, Temístocles Castellano y José Verna, donaron sus colecciones particulares de libros para constituir la primera Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas; me pregunto: ¿quién de nosotros sería capaz de un gesto así, de desprenderse de los libros que nos acompañaron en nuestra formación profesional? Este es el ejemplo que nos están mostrando silenciosamente con sus actos y con su compromiso para con las generaciones de estudiantes que los sucederían.

Los bibliotecarios Tannchen, Cañete y Sipowicz García, sucesivamente, desde sus funciones se constituyeron en la custodia de ese patrimonio cultural, no como cancerberos de un tesoro intocable sino para abrir al público todo ese conocimiento y la sapiencia escrita y, una vez sistematizada, ponerla al servicio de quienes eran sus herederos y destinatarios, las futuras generaciones de estudiantes de la salud.

Cómo no iban a mamar esos estudiantes el espíritu de esos próceres cordobeses si allí está, entre otros, como un verdadero incunable, en una agenda de anotaciones, la tesis doctoral manuscrita del profesor Pablo Mirizzi, con los dibujos de su propio puño y letra!

El compromiso de la Biblioteca y de sus responsables no se agotó en la custodia de los libros, sino que, conscientes de la dinámica de los tiempos y del conocimiento que se generaba en un mundo ávido por descubrir los secretos de la vida, que incesantemente producía avances científicos para curar la salud y alcanzar la plenitud psicofísica y social, con una dinamia inimaginable, pusieron todo su empeño y conocimientos para estar acorde con los tiempos.

Al cumplir su primer centenario de vida, en 1988, con la donación por parte de la OPS de una computadora, una lectora de discos compactos y un aparato de fax, se constituye en la primera bi-

blioteca de la Universidad Nacional de Córdoba poseedora de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, incorporándose en 1990 a la Red Académica Nacional a través del correo electrónico, que como medio de comunicación recién se encontraba en sus albores.

Es debido a la importancia e impacto de la Biblioteca en el área de las ciencias de la salud que es designada por la OPS como centro estratégico de publicación, crecimiento que continuó en 1999 cuando implementó su página web, y luego la apertura del aula virtual para la comunidad médica, lo que hoy le permite integrar el Comité Técnico Consultivo de la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud y Centro Cooperante de la Red Latinoamericana y del Caribe.

Evidentemente, es un logro de los cordobeses para la excelencia en salud, y por eso hemos instituido esta fecha para la entrega de la distinción. El mismo doctor Carrillo, desde su pensamiento, avala esta determinación cuando dice: “Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo”. Es, sin lugar a dudas, lo que la biblioteca virtual de la Facultad de Ciencias Médicas ha logrado con su desarrollo: que el conocimiento de las conquistas científicas en salud sean accesibles a la comunidad médica para que sirvan al pueblo.

Además, estamos distinguiendo en esta sesión a la enfermera de Las Jarillas, Mónica Tobares; su historia de vida no se puede resumir ni expresar en palabras, porque ella es la síntesis viva de la palabra con la acción. Asumió el sentido profundo del concepto de solidaridad, no como resignación sino como alegría de vivir por sus semejantes.

Es, sin dudas, una elegida de Dios para mostrarnos, desde lo más inhóspito de la Tierra, que con voluntad y convicciones es posible soñar con una vida mejor; tiene todas las carencias imaginables para desarrollar su tarea, pero no llora ante la adversidad, no se arrodilla para mendigar porque confía en el ser humano; sabe que en el instante supremo de inflexión el hombre abrirá su corazón para darle la mano que necesita a su hermano. Como diría Almafuerte: “no se dio por vencida ni aun vencida”.

Es nuestra obligación, como representantes del pueblo, mostrar y reconocer estos ejem-

plos de vida para que sirvan de espejo a la juventud, convenciéndonos de que no hace falta tener todas las comodidades en la vida para dejar una huella reconocible en nuestro propio destino.

El de Mónica era el ejemplo de humildad y de vocación personal. Junto con ella, desde el otro extremo de las realizaciones personales, la vocación por el estudio, la capacitación permanente, la investigación y la enseñanza, estamos reconociendo como ejemplo para la juventud la enseñanza de vida de Andrés Ignacio Urrutia Sans, doctor en Psicología, de tan sólo 41 años, al igual que Mónica.

El doctor Urrutia Sans ha logrado un extenso currículum de una calidad y excelencia inimaginables para su edad, y lo ha alcanzado sin aislarse del mundo, ya que no se encerró en un laboratorio ni un aséptico gabinete de estudio sino que estuvo en permanente contacto con la gente, reconociendo sus necesidades y trabajando en estrategias de calidad de vida, para hacer cierta la definición de “salud” de la Organización Mundial de la Salud: “lograr el pleno bienestar psicofísico y social”.

Su objetivo estuvo acorde con los avances de la ciencia médica, porque a medida que las expectativas de vida de la humanidad se acrecentaban él impulsaba nuevas estrategias de integración de la vejez: con salud mental, educación e inserción institucional. Su total y plena identificación y dedicación a ese sector social –el de los viejos, tantas veces olvidados– lo hacen merecedor de la distinción “Ramón Carrillo”.

He dejado para el último, intencionalmente, la recordación y el homenaje de la Legislatura para el sacerdote jesuita Reverendo Padre Jean Sornet, y su vinculación con la Clínica Universitaria Reina Fabiola, de la Fundación para el Progreso de la Universidad Católica de Córdoba, que fue creada con el objetivo de generar los espacios necesarios para la formación profesional ofrecida en su Facultad de Medicina.

Es tan rica en su historia esta conjunción de acontecimientos, tienen tanta simbología para Córdoba la creación de la Facultad de Medicina y la Clínica Reina Fabiola, que hubieran ameritado una sesión legislativa especial, pero está bien que sea hoy aquí, está bien la decisión de la Presidencia que acompaña a la Comisión de Salud en re-

conocer en una misma sesión, junto a la distinción de la Biblioteca de Ciencias Médicas de la Universidad del Estado, los aportes de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y del Padre Jean Sonet a la excelencia en salud de los cordobeses y a la integración de sus cuerpos técnicos.

Este homenaje, que nunca realizó la Legislatura de los cordobeses, es una deuda pendiente que hoy estamos saldando. La historia se remonta a un 12 de octubre de 1959, cuando se fundó la clínica por iniciativa del Rector de la Universidad, el sacerdote jesuita Jorge Camargo; es decir, estamos entrando en la conmemoración de sus primeros 50 años.

El objetivo fundacional de la Clínica fue y es el apoyo a la Universidad Católica de Córdoba mediante el desarrollo de un centro científico y médico asistencial, con una clara función social comunitaria.

En 1961, por propuesta del Padre Jean Sonet, la Institución recibe el nombre de Clínica Reina Fabiola-Hospital Esquiú. Desde agosto de 1974, fecha de inauguración del edificio de Barrio General Paz, la institución desarrolla todas sus actividades en su actual emplazamiento, junto a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba.

El compromiso de vida del Padre Jean Sonet, nacido en Bélgica en 1905 y ordenado sacerdote en 1938, está marcado a fuego por su misión de Capellán de la Resistencia Belga, en Saboya, en los años de guerra de 1939 a 1944. Su empeñosa dedicación al desarrollo de las relaciones bilaterales de Argentina con su país natal, a través de la firma de Convenios de Integración Cultural le valió, por estos méritos, la Condecoración del Gobierno Argentino con la Orden del Libertador General San Martín, en grado de oficial y, posteriormente, en el grado de Comendador. La Nación se nos adelantó, pero hoy estamos saldando esta deuda.

Señor presidente, tengo la obligación de ser breve, en un homenaje que excede mi capacidad de síntesis, por la riqueza de vida de los distinguidos, obligación devenida en urgencia por el tema central de tratamiento en esta sesión: sancionar la reforma política.

Decía hace unos instantes, del valor a desentrañar en la conjunción de simbologías en los acontecimientos producidos en este homenaje, yo me atrevo a pensar y a expresarlo en voz alta: lle-

vó 120 años, que celebramos hoy, consolidar la excelencia de los conocimientos brindados por la Biblioteca Virtual de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba: le llevé 90 años a la Reforma Universitaria, hasta este 2008, consolidar sus ideales de cambio en los paradigmas de la educación, todavía con algunos dolores por las realidades que faltan. Lleva casi 50 años, la Clínica Universitaria Reina Fabiola construyendo, día a día, la excelencia en salud que se planteó como objetivo. Pero, apenas llevamos 25 años de plena democracia ininterrumpida, democracia que estamos construyendo entre todos, desde 1983, con esfuerzo, con errores, con dolorosos aprendizajes, con falta de autocríticas sobre los roles no asumidos y por los roles que equivocadamente asumimos.

Frente a esta pléyade de hombres, sus descendientes o representantes que hoy distinguimos con el premio Profesor Doctor Ramón Carrillo, no podemos menos que renovar nuestro compromiso para con el pueblo, de juramentarnos a seguir su ejemplo, porque ellos creyeron que otra Argentina es posible y la construyeron.

Nosotros debemos creer que otra Legislatura es posible, sin agravios, sin chicanas, con respeto para con el disenso, con respeto por los derechos de las minorías y con respeto por las obligaciones de la mayoría.

No podemos desmerecer esta entrega de distinciones marchando a contramano con los ideales que ellos preconizaron.

Lo están exigiendo ellos con su memoria, lo está exigiendo la sociedad que sufre la crisis de sus instituciones y la necesidad de recuperarlas en su credibilidad y pleno funcionamiento.

Gracias a los ausentes que están presentes, gracias por el ejemplo de vida que nos legaron, esperamos ser merecedores de continuar sus sueños.

Gracias a todos por la paciencia de escucharlos. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.

Sr. Serra.- Señor presidente: cuando esperaba para entrar al recinto -fue una espera prolongada para la gente que no conoce la actividad dentro de la Legislatura-, más de uno de acercó a preguntarme qué hacía en la Legislatura. Tuve que explicar, una vez más, que mi vocación de médico no había muerto, pero que me sentía en el

deber de conocer algo más para ayudar a mi país.

Quiero decirles, como explicación para nuestros ilustres visitantes que hace dos o tres horas que están esperando este momento que los legisladores presentes –a quienes han visto llegar en tandas- no vienen de dormir la siesta ni de comer ni de descansar sino de discutir temas inherentes a la Legislatura de acuerdo a sus distintas opiniones.

También quiero aclarar, porque todos los días se aprende algo, que en este recinto solamente pueden hablar los elegidos por el pueblo, por lo tanto, la magnífica reseña que hizo el profesor Garzón de las personas, ausentes algunas y presentes otras, que van a ser condecoradas con el premio Carrillo tiene su explicación. Al no ser legislador no puede hablar, por eso, me interesa insistir especialmente sobre uno de los galardonados, tal vez menos conocido, aunque el presidente de la Comisión de Salud hizo una síntesis de su vida, que es -no dudo- la más humilde de los presentes pero, sin duda alguna, con el alma más grande de todos nosotros. Me refiero a la enfermera Mónica Tobares. Hay miles de enfermeras en Córdoba y conozco a muchísimas que merecerían esta distinción, pero Mónica es un caso muy particular. Me tocó conocerla donde ella se desempeña, por esas cosas de la vida, porque íbamos con un grupo de médicos a Traslasierra, más exactamente a Chancaní, a atender chagásicos pobres.

El primer día que fuimos a atender, en el momento justo que emprendíamos la retirada, a las cuatro o cinco de la tarde para llegar a la medianoche del domingo y estar el lunes para cumplir con nuestras obligaciones, llegó una camionada de gente y pregunté, dolorido, de dónde provenían, y me respondieron que eran de Las Jarillas. Me costaba admitir que hubieran hecho tantos kilómetros, ensuciándose con tierra, para buscar auxilio médico y siempre me quedé con una sensación de culpabilidad por no haberles brindado la ayuda que ellos, esperanzadamente, habían ido a buscar.

Después de concurrir durante tres o cuatro años a la localidad de Chancaní, por una cuestión de principios al no coincidir con la distribución de los medicamentos, ropa y alimentos, un buen día me enojé y dije: “no vuelvo más por acá”. El grupo de médicos que me tocaba controlar, o comandar,

me preguntó adónde iríamos; les respondí: “nos vamos a Las Jarillas”. No sabía nada de esa localidad, pero nunca pude olvidarme de ese camión lleno de gente que, frustradamente, tuvo que volverse a su lugar de origen.

Fuimos a conocer Las Jarillas; se trataba de un casco de estancia -digo esto porque las paredes no eran de barro sino de ladrillo- que contaba también con un colegio, y le solicité al director que me autorizara o hiciera las gestiones correspondientes para atender a los enfermos en las aulas. Este hombre parecía medio cansado o agotado en su vocación de maestro, pero una maestra me dijo que su cuñada podía ayudarme, y le pedí que me la presentara. Mientras íbamos caminando a su casa pude observar las ruinas de un dispensario a medio construir, una pequeña capilla cerrada donde se celebraban las fiestas patronales una vez al año, inmensamente blanca que reflejaba el sol de esa zona, y un rancho de paja y de barro donde vivía Mónica.

Se trataba de una mujer delgada que en la actualidad ha engordado un poco a raíz del reposo que tuvo que hacer producto de un accidente. Cuando vi a Mónica tan frágil, tan delgada, tan pobrecita, me dije: ¿será capaz de ayudarnos? Y -como suelo hacer algunas veces en mi vida- me equivoqué; Mónica no solamente hizo que me equivocase sino que superó todo lo que había pensado.

Dada la negativa del colegio, inmediatamente pedimos autorización a nivel eclesiástico, nos habilitaron la capilla y allí montamos consultorios con hule negro. La odontóloga comenzó a realizar extracciones apoyadas por un frontoluz y por la luminosidad blanca de la pared de la capilla que se reflejaba y la proyectaba sobre la cavidad bucal. Extrajo piezas dentarias al por mayor porque todas eran irrecuperables.

Hicimos muchos viajes a Las Jarillas y, en uno de ellos, le propusimos a Mónica otorgarle una beca que consistía en un pasaje ida y vuelta a Córdoba, alojamiento en una pensión y comida. Ella preguntó: ¿para qué?; le dijimos: “para que hagas un curso intensivo de medicina”; ¿adónde me va a mandar?, y le respondí: “dos días al Hospital de Urgencias, dos a la Maternidad, dos al Hospital de Niños y dos a nuestra institución cardiológica”. Así fue como vino Mónica; en todos la-

dos hablaron maravillas de ella porque trabajaba incansablemente, desde el amanecer hasta la noche.

En esa semana, me llegó una invitación del Colegio Taborín para dar una charla sobre esos viajes. Entonces, me dije: “nada más oportuno que la presencia de Mónica”. Fuimos y se enfrentó a casi quinientos niños, de entre diez y catorce años, y contó su experiencia. Luego, los chicos le preguntaron si tenía hijos y dijo que tenía tres. Le preguntaron con quién los había dejado y dijo que con su esposo. Le preguntaron: ¿y no te van a extrañar?, ella empezó a llorar y dijo que sí, pero que se volvía el domingo.

De vez en cuando, uno tiene momentos de inspiración; entonces, les dije a los chicos que le preguntaran qué le hacía falta. Ella contestó que lo que más deseaba era tener un medio de locomoción; tenía una motito vieja y gastada que tardaba dos o tres horas para arrancar, una bicicleta que usaba para recorrer entre diez y doce kilómetros para ver, con espíritu samaritano, a todo aquel que la necesitase. Ante esto, les propuse a los chicos que hicieran un sacrificio: “no compren el alfajor para el próximo recreo y juntemos en una alcancía las monedas necesarias para comprar una nueva moto para Mónica”. A los quince días, con la colaboración de los hermanos del Colegio Taborín, le trajeron una hermosa motito de color negro, con una cruz roja que tenía inscripto: “Donación de los chicos del Colegio Taborín”. Se la llevamos. ¡Para qué contar su emoción! Preguntó: ¿tengo que firmar algún papel por haberla recibido? Le dije: “no, Mónica, esto es para vos, cuidala, que es tu medio de locomoción. Nunca te vamos a pedir explicaciones de lo que hagas con la motocicleta.” Todavía la tiene y funciona.

Gracias a esa moto, se cayó en un guadal –de los muchos que hay por esa zona- y se quebró la columna. Por eso, tuvo que hacer reposo por mucho tiempo, pero ahora sus cachetes son más redondos.

Por la crisis del año 2001 tuvimos que dejar de viajar, pero ella, en lugar de retirarse, continuó nuestra labor. Terminó de construir el dispensario, hizo un curso de bachiller en dos años, estudiando a la noche a la luz de las velas; luego se recibió de enfermera auxiliar y sigue atendiendo. Ha organizado un club de fútbol de mujeres, donde es presidenta, capitana y arquera; para atraerlas, a modo de anzuelo, reparte profilácticos, práctica muy

adecuada a su rol de sanitarista. Lo hace porque está cansada de ver nacimientos producto de borracheras, abortos provocados y muertes en situación de gran pobreza.

Mónica vive en ese páramo, que no ha cambiado mucho. Me contó que lamentablemente han abierto un “boliche” donde, por supuesto, se expende alcohol; pero, según sus textuales palabras: “gracias a Dios no toman tanto porque no tienen plata”.

Mónica Tobares siguió con esa obra y un periodista de matutino local la descubrió. Tal fue el efecto de su historia que ha sido propuesta como la cordobesa de año, lo que representó para mí una sorpresa y alegría inmensa. Cuando leí el diario, a primera hora de la mañana, la llamé para decirle: “Mónica, andá a comprar el diario que has salido”. A lo que me contestó: “Pero, doctor, estoy a 80 kilómetros de Villa Dolores”. Entonces le sugerí que le encargara a alguien que le llevara el diario.

Le agradezco mucho al presidente de la Comisión de Salud por convocarla hoy; honestamente, yo había postulado al señor Urrutia, del que también aprendí mucho en su CEPRAM, pero creo que este tributo a Mónica, que se autoestimula en medio de la soledad para seguir desempeñando cristiana y humanamente su labor médica, es realmente meritorio.

Muchas gracias, Mónica. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, quiero manifestar que el bloque del Vecinalismo Independiente adhiere al homenaje a estos servidores de la salud, en un día en que la casualidad calendario ha permitido que fuera también el Día del Médico.

Este bloque quiere felicitar a los que están presentes y han sido meritorios de esta distinción y a los ausentes-presentes –como lo ha manifestado el presidente de la Comisión de Salud– que han dado testimonio con su vida en pro de la salud humana.

Brevemente, quiero referirme a uno de ellos, el Reverendo Padre Jean Sonet, sacerdote jesuita, a quien he tenido el privilegio de conocer y acompañar, junto a mi familia, en muchos de sus viajes titánicos de lucha, bregando por un apoyo político, material o simplemente por oídos que prestaran atención a la gran tarea que había ini-

ciado.

Como médica, he tenido la suerte de formarme en medicina en el Hospital Reina Fabiola, de manera que, en nombre del bloque y el mío propio, como profesional de la medicina, quiero rendir este sencillo homenaje al Reverendo Padre Jean Sonet.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Poncio.

Sra. Poncio.- Señor presidente, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, quiero manifestar que estamos todos de acuerdo en apoyar este proyecto de homenaje, y felicitar, en este día especial, el Día del Médico, a todos los médicos presentes.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- A continuación, vamos a proceder a la entrega de distinciones a los homenajeados.

- La legisladora Norma Poncio y el legislador Norberto Podversich, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo al profesor doctor Rafael Garzón. (Aplausos).

- La legisladora Esmeralda Rodríguez y el legislador Horaldo Senn, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo al doctor en psicología Andrés Ignacio Urrutia Sans. (Aplausos).

- El legislador César Serra y la legisladora Lilia Olivero, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo a la enfermera Mónica Tobares. (Aplausos).

- El legislador César Serra y la legisladora Modesta Genesio de Stabio, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo al Reverendo Padre Jean Sonet, sacerdote jesuita. Recibe en su nombre el Reverendo Padre Rafael Orona, sacerdote jesuita. (Aplausos).

- El legislador Raúl Jiménez y el legislador Norberto Podversich, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo al profesor doctor Pablo Luis Mirizzi. Recibe en su nombre la doctora María Inés Sheriff. (Aplausos).

- La señora legisladora María Graciela Manzañares y el señor legislador Roberto Pagliano, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba,

hacen entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo al profesor doctor Juan Martín Allende. Recibe en su nombre el doctor Norberto Allende (h). (Aplausos).

- La señora legisladora Norma Poncio y el señor legislador Horacio Frossasco, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo al profesor bibliotecario Rodolfo Tannchen. Recibe en su nombre el doctor Leonardo Vanilla. (Aplausos).

- La señora legisladora María Graciela Manzañares y el señor legislador Ítalo Gudiño, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo al bibliotecario Teodoro Cañete. Recibe en su nombre el señor Rodolfo Cañete. (Aplausos).

- El señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, y presidente de la Legislatura, señor Héctor Oscar Campana, hace entrega de la Distinción Profesor Doctor Ramón Carrillo a la bibliotecaria señora Ofelia Sipowicz García. Recibe en su nombre, el señor Raúl Sipowicz. (Aplausos).

- El señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, señor Héctor Oscar Campana y el presidente de la Comisión de Salud Humana de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, doctor Norberto Podversich, con motivo de los 120° años de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas "Profesor Doctor Juan Martín Allende", hacen entrega de un diploma a su directora, la profesora Graciela Cañete, y al asesor médico de la Biblioteca, doctor Enrique Lastreto. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera se ha cumplido con la entrega de las Distinciones Profesor Doctor Ramón Carrillo.

Pasamos a un breve cuarto intermedio en las bancas para despedir a los visitantes con un fuerte aplauso. (Aplausos).

- Es la hora 17 y 04.

- Siendo la hora 17 y 36:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para formular una

moción de orden.

Estamos hoy citados en este recinto para tratar las llamadas “leyes de Reforma Política”; el tema fue tratado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria; son las seis menos veinte de la tarde y la comisión todavía no ha emitido despacho. Nuestra bancada –y seguramente gran parte de la bancada oficialista- todavía no conoce cuál es el texto definitivo de los proyectos a tratar.

Este tema es tan importante que ha sido motivo de discusión y tratamiento en comisiones, con idas y vueltas, durante más de un año; su aplicación práctica va a ser en 2011, por eso nuestra bancada entiende que no hay ningún motivo para apresurarnos a tratar una ley como esta, de más de 250 artículos -105 de la Ley de Partidos Políticos-, a tontas y a locas, sin saber exactamente cuál es la redacción definitiva del texto. Nos parece que a esta altura es una falta de seriedad.

No se puede cambiar la legislación electoral de la Argentina, en este caso particular de la Provincia de Córdoba, que tiene puntuales resguardos constitucionales, de la manera en que se está presentando en la sesión del día de la fecha.

En consecuencia, el bloque del Frente Cívico quiere mocionar que, por una razón de elemental seriedad para con las instituciones de la Provincia, los proyectos que van a ser tratados sobre tablas en el día de la fecha -y que conviniere en la reunión de Labor Parlamentaria- vuelvan a comisión.

Señor presidente: solicito que se ponga a consideración la moción de orden formulada.

Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia, junto con el señor Secretario Legislativo, entiende que aún no se ha puesto en consideración el tratamiento sobre tablas de los proyectos referidos por el señor legislador Ortiz Pellegrini, por lo que se considera inoportuna la moción formulada.

De todas maneras, se va a poner en consideración la moción de orden de volver los proyectos a comisión para que no se enojen porque sé que son susceptibles. Una moción de orden –esto no se discute, señor legislador- tiene que ser sometida a consideración.

En consideración la moción de orden formulada por el legislador Ortiz Pellegrini.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: quiero subrayar algunos aspectos, ya que me parece que se está faltando a la verdad.

En primer lugar, quiero resaltar que todos los legisladores que estuvimos presentes en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria –sobre todo aquellos que realmente tienen voluntad de debatir este proyecto de ley, y no quienes, como el legislador preopinante, manifestaron públicamente que van a rechazar este proyecto de ley y que no les interesa- sabemos que los proyectos que se trataron en comisión fueron sometidos a un trabajo en que tuvieron muchísima participación los legisladores de todos los bloques.

Sabido es por todos que el proyecto original que presentó el oficialismo, lejos de ser propuesto para ser votado a libro cerrado, fue abierto y puesto a consideración. Justamente, producto de todas las sugerencias y acotaciones que efectuaron muchos legisladores y legisladoras –no sólo de nuestro bloque sino del resto-, dicho trabajo –del que participaron varias comisiones de manera simultánea- requirió que para la compatibilización de todos los artículos se establezca un tiempo de trabajo, que ha culminado, por lo que el despacho de comisión será puesto a consideración de todos los bloques.

En tal sentido, le pido, señor presidente, que pasemos a un cuarto intermedio por el tiempo que sea necesario para que lean el despacho. Sinceramente, la voluntad de muchos legisladores de la oposición es la de votar en contra cualquier despacho que lean, por lo que –quiero que quede claro- no vamos a rehuir ningún debate y el despacho de comisión que tienen en sus manos ha sido producto del esfuerzo de todos los legisladores que han trabajado para alcanzar este objetivo.

Es una artimaña de muy baja calaña decir que este proyecto vamos a discutirlo recién esta tarde; hace un año, en este recinto, el Gobernador les propuso a los cordobeses la reforma político-electoral de la Provincia de Córdoba; a partir de allí, la Comisión Consultiva de Expertos trabajó durante 180 días y cumplió con los tiempos; esta Legislatura, por unanimidad, creó la Comisión para la Reforma Política, que trabajó mucho, salvo el legislador preopinante, que sólo asistió a dos de

las quince reuniones que se llevaron a cabo. En fin, hemos trabajado muchísimo para llegar hasta esta instancia, en que contamos con todos los elementos necesarios para llevar adelante el debate sobre el presente proyecto.

Este bloque –al igual que la mayoría de los legisladores que tienen voluntad de resolver los problemas y discutir las cosas como corresponde– no tiene ningún problema de permanecer aquí hasta la hora que sea y generar el cuarto intermedio que haga falta para que lean los despachos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.

Sr. Faustinelli.– Señor presidente: lo cierto es que se conformó una comisión de trabajo en esta Legislatura para tratar un tema tan importante como la reforma política que necesitamos en la Provincia de Córdoba; también es cierto que el Gobernador Schiaretti manifestó en este recinto que se debían mejorar la convivencia y el funcionamiento institucional, por lo que se necesitaba un cambio profundo en el sistema. Pero para llevar adelante una verdadera reforma política se necesita del consenso, y cuando no se logra, hay que tener la voluntad para buscarlo.

Hoy fuimos citados a las 10 de la mañana para la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que comenzó alrededor de la hora 14. Desde que terminó estamos reclamando el despacho de comisión, más allá de que el bloque de la Unión Cívica Radical adelantó el rechazo a estos proyectos del oficialismo porque considera que no se arribó, en el marco de una verdadera reforma política, al consenso que se necesita.

A quienes pregunten –ya que adelantamos el rechazo– para qué queremos conocer el proyecto, les respondo que, precisamente por una cuestión de respeto, queremos saber al menos a qué nos vamos a oponer, puesto que muchos miembros de los bloques de la minoría todavía, a esta hora, no conocen su texto.

Respecto de este tema tan importante, compartimos la postura del bloque de Frente Cívico en el sentido que este proyecto debe volver a comisión. Podrán decirme que ya ha sido votada y rechazada la propuesta, pero creemos que no hay ningún apuro en hacer una reforma electoral que, con suerte, si el Gobernador no convoca a elec-

ciones el mismo día que la Nación, se va a poner en funcionamiento en esta Provincia recién en el año 2011.

Nos parece que por la hora y por los inconvenientes planteados, es inadmisibles la presencia de la Unión Cívica Radical en este recinto.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el legislador Maiocco.

Sr. Maiocco.– Señor presidente: he participado de todas las reuniones de comisiones permanentes de la Legislatura -aunque pude no haber estado en alguna especial-, por lo que puedo afirmar que hubo un trabajo amplio pero a contrareloj; se decía: “pasemos al próximo artículo porque no llegamos”. Tanto es así que en un momento pregunté por qué no pasábamos el tratamiento del tema para otra fecha. Si el 10 de diciembre tenemos que tratar el Presupuesto y quieren aprobar las leyes de la Reforma Política antes de fin de año, tendrían que pasar su tratamiento para el 17 de diciembre.

Fíjese usted, señor presidente, que no tenemos el despacho. Con todo respeto, el legislador Passerini tendrá que reconocer que una coma que se cambie -más allá de todo lo que trabajamos y consensuamos- modifica la esencia de la cuestión. Una persona decía: “comía como bestia, dormía sobre una vieja, esta era la vida de un santo”. Y cuando le ponían bien la puntuación decía: “comía como vestía, dormía sobre una vieja estera, la vida de un santo”. Cuando uno le cambia una coma a una frase, le cambia el sentido y puede cambiar la interpretación de una ley. Entonces, con todo respeto, legislador Passerini, no nos pueden decir que nos van a dar el tiempo que querramos para leer ahora el despacho porque, si estuvimos tres días trabajando y no pudimos terminar de leerlo, cómo vamos a poder hacerlo en este momento teniendo, además, que comparar artículo por artículo, si se hizo un agregado, si está correcto, si se cambió algo. No es serio, más allá de que lo aprobemos o no, o que nos parezcan insuficientes estos proyectos que se van a tratar.

Todavía no tenemos el despacho, hay que esperar que lo traigan, después pedir un cuarto intermedio, luego pasar tres, cuatro o cinco horas leyéndolo para ver si está bien, y recién empezar

a tratarlo.

Señor presidente, coincido con lo que dijeron los legisladores Ortiz Pellegrini y Faustinelli de que ya lo votaron, pero realmente es poco serio pensar que ahora nos vamos a poner a leer el despacho para ver si lo tratamos en el día de hoy.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, quisiera saber si está en tratamiento el tema de la Reforma Política, puesto que obra en mi poder el resumen de Labor Parlamentaria y recién estamos cumpliendo con el tercer punto.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene razón, señora legisladora, no está en tratamiento, si no hay objeciones y si lo que usted propone es una moción de orden, sugiero que continuemos con el tratamiento del Orden del Día, y llegado el momento del tratamiento del proyecto de la Reforma cada uno de los legisladores podrá expresarse a su gusto.

Me parece que estamos adelantando una discusión que se puede hacer en el momento del tratamiento. Sinceramente, creo que lo más correcto —a pesar de que no puedo opinar en este recinto— es continuar con el trabajo que está agendado, o sea, continuar con el Orden del Día, tal como lo acordamos en Labor Parlamentaria; cuando llegue el momento cada uno podrá expresarse.

Por lo tanto, legisladora Olivero, si no tiene objeciones, me gustaría que lo que tenga que decir sobre este tema lo diga cuando llegue el momento.

Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

Sra. Olivero.- Señor presidente: quiero hacer una breve reflexión al respecto, porque no es un tema menor y lo que están haciendo es un acto de irresponsabilidad.

Quiero mostrarle a la Cámara el proyecto que conseguí al mediodía, porque, “al estar en negro”, no pude distinguir las modificaciones realizadas en el proyecto original. Además de ser poco serio, no se nos puede impedir solicitar explicaciones al oficialismo de por qué a esta hora no tenemos el despacho, más allá de la actitud política que adopte cada partido.

Adelanté que iba a rechazar esta “pseudo reforma política”, pero para rechazarla debo cono-

cer el texto definitivo, el texto llamado “del consenso y del diálogo”, que con esta actitud están demostrando que efectivamente no existe. Estamos pidiendo tenerlo en tiempo y forma, para poder hablar sobre él. Quisiera estudiar las modificaciones, pero con el despacho que tengo en mi poder sería imposible, porque —como dije— está en negro, ya que es una fotocopia del original —que seguramente está en colores.

Creo que sería serio avanzar en un análisis exhaustivo y detenido, pero no en un cuarto intermedio en la jornada de hoy. Llamo a la reflexión al bloque de la mayoría y a quienes acompañan el proyecto, para que tengamos la posibilidad de pasar a comisión y tener las modificaciones en nuestro poder, independientemente del acompañamiento o rechazo.

Por eso, acabo de votar a favor la moción del legislador Miguel Ortiz Pellegrini en el sentido que este proyecto pase a comisión. Esto, señor presidente, bastardea la voluntad del pueblo de Córdoba que podría albergar la esperanza de tener una reforma política que en el futuro lo beneficie.

Muchas gracias.

- 6 -

A) HOSPITAL MUNICIPAL GUMERSINDO SAYAZO, EN VILLA CARLOS PAZ. APORTES REALIZADOS POR LA PROVINCIA. DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.

B) PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN DE PACIENTES OBESOS EN EL HOSPITAL CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.

C) TIERRAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN. ACTA ACUERDO FIRMADA POR EL MINISTERIO DE SOLIDARIDAD. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sr. Presidente (Campana).- Continuamos con el tratamiento del Orden del Día.

Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- He pedido la palabra, señor presidente.

Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión de la Comi-

sión de Labor Parlamentaria, solicito el pase a archivo de los puntos 10, 70 y 77 del Orden del Día.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 10, 70 y 77 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Señor presidente: tiene que darme la palabra.

PUNTO 10

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1603/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre posibles aportes que realiza al Hospital Municipal Gumersindo Sayago de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 70

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1717/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa Provincial de Atención de Pacientes Obesos en el Hospital Córdoba.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 77

Pedido de Informes–Artículo 195

1734/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Acta Acuerdo firmada por el Ministerio de Solidaridad para obtener financiamiento a fin de adquirir tierras destinadas a 416 familias para construcción de viviendas.

Comisión: Solidaridad

- 7 -

A) PLANTAS ALMACENADORAS, CLASIFICADORAS, ACONDICIONADORAS Y DE CONSERVACIÓN DE GRANOS. SITUACIÓN ACTUAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.

C) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

D) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA (LEY N° 8836). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

E) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

F) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.

G) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

H) PROYECTO DEL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA DE CONECTIVIDAD VIAL (IPLAM). PEDIDO DE INFORMES.

I) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. PROBLEMA DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE. MEDIDAS, OBRAS Y PROYECTOS PARA SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.

J) DECRETO N° 945/08 (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS). PEDIDO DE INFORMES.

K) SIERRAS CHICAS. SERVICIO DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L) ESCUELA ARMANDO RÓTULO, EN RÍO TERCERO. PROBLEMAS EDILICIOS Y FALTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.

M) SUCURSALES DEL BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. INMUEBLES.

ENAJENACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

N) REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA. CUENTA PREVISIÓN PARA JUICIOS Y BALANCE 2007. PEDIDO DE INFORMES.

O) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. PEDIDO DE INFORMES.

P) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN RÍO CUARTO. CARENCIA DE MÉDICOS NEURÓLOGOS Y FONOAUDIÓLOGOS. PEDIDO DE INFORMES.

Q) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

R) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA 2008. CARTOGRAFÍA UTILIZADA Y LIMITES DE RADIOS. PEDIDO DE INFORMES.

S) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER. FONDOS TRANSFERIDOS POR LA PROVINCIA. PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.

T) LEY N° 26.075, DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO. CONVENIO BILATERAL 1163/06 CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

U) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

V) MINISTERIO DE JUSTICIA. PROYECTOS Y ACCIONES SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

W) CUENTA DE INVERSIÓN, EJERCICIO FINANCIERO 2007.

X) HOGAR DE MENORES MADRES "PADRE LUIS FELIÚ", EN LA CALERA. TRASLADO DE MENORES, REFACCIONES EDILICIAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 6, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 39, 42, 43, 50, 53, 55, 59, 60, 63, 64, 69, 71 y 73 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la próxima sesión, esto es, la 45ª

sesión ordinaria.

Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Tiene que darme la palabra, señor presidente. Tiene la obligación de dármela.

– Se retiran los bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico, de Unión Vecinal Federal, de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda de los Trabajadores y de Afirmación para una República Igualitaria-Coalición Cívica.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 45ª sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 6, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 39, 42, 43, 50, 53, 55, 59, 60, 63, 64, 69, 71 y 73 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 45ª sesión ordinaria.

PUNTO 6**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–**

1546/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Nicolás, Pozzi, Calvo Aguado, Poncio, Rossi y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación actual de las plantas almacenadoras, clasificadoras, acondicionadoras y de conservación de granos.

Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

PUNTO 17**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–**

0879/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances generales de los últimos cuatro años de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

PUNTO 19**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–**

0347/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación actual del ex Molino Centenario.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 20**Moción de Preferencia**

–Artículo 122 y Concordantes–

0695/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Faustine-Ili, Matar, Gudíño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 21**Moción de Preferencia**

–Artículo 122 y Concordantes–

0484/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cierre del Casino Provincial de la ciudad de Alta Gracia.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 22**Moción de Preferencia**

–Artículo 122 y Concordantes–

1328/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 26**Moción de Preferencia**

–Artículo 122 y Concordantes–

1391/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Empresa Kolektor.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 29**Moción de Preferencia**

–Artículo 122 y Concordantes–

1454/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Bischoff, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de Conectividad Vial del Instituto de Planificación.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 30**Moción de Preferencia**

–Artículo 122 y Concordantes–

0963/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Coria y Birri, por el cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre proyectos tendientes a dar solución al aprovisionamiento de agua potable a las poblaciones del noroeste del Gran Córdoba, especialmente a las del departamento Colón.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 31**Moción de Preferencia**

–Artículo 122 y Concordantes–

1209/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural y por los Legisladores Rodríguez, Birri, Bischoff, Jiménez y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del Decreto Nº 945/08, referido a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 32

Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1211/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de agua potable en Sierras Chicas.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1537/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado, Giaveno, Cugat, Nicolás y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas edilicios de la cocina, comedor y falta de equipamiento para el funcionamiento del PAICOR de la escuela Armando Rótulo de la ciudad de Río Tercero.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0488/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la enajenación de inmuebles en que funcionan sucursales del Banco Provincia de Córdoba.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1495/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con los Balances 2006 y 2007 del Registro General de la Provincia.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1612/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Dressino y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una expropiación de terrenos en la localidad de Chaján del departamento Río Cuarto.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1405/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto carece de médicos neurólogos y fonoaudiólogos.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0793/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Dressino, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política hídrica del gobierno para garantizar el programa Agua Para Todos.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1243/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Birri y Serra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Censo de Población Córdoba 2008, en relación a cartografía utilizada y radios municipales.

Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 60**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****0708/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los fondos y destino de los mismos girados a la Comunidad Regional San Javier en los años 2006 y 2007.

Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 63**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****0446/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el marco de la Ley N° 26.075, de financiamiento educativo.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 64**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****0538/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 69**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****1693/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre proyectos y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas anticorrupción.

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y

Acuerdos

PUNTO 71**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****0315/N/08 – 0675/N/08**

Comunicaciones Oficiales: Cuenta de Inversión del Ejercicio Financiero del Año 2007, remitida por el Poder Ejecutivo Provincial.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 73**Pedido de Informes–Artículo 195****1716/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Coria y Rivero, por el cual solicita al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la situación del Hogar de Menores Madres “Padre Luis Feliú” de la localidad de La Calera.

Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

- 8 -

A) FONDO DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. EROGACIONES Y DESTINATARIOS. PEDIDO DE INFORMES.

B) BASURALES A CIELO ABIERTO EN LA PROVINCIA. ERRADICACIÓN TOTAL. ESTADO DE GESTIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

C) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DE LA PROVINCIA. PERÍODO 2007. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

D) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CIERRES Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.

E) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. PROBLEMAS EDILICIOS Y DE INFRAESTRUCTURA. ESTUDIOS AMBIENTALES EJECUTADOS EN EL POLO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.

F) CENTRO DE DESARROLLO DE PROYECTOS AVANZADOS EN PEDIATRÍA (CEDEPAP). PROYECTOS DE

INVESTIGACIONES CLÍNICAS REALIZADOS EN HOSPITALES PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.

G) PROGRAMAS PARA REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL Y TASAS DE MORTALIDAD MATERNA Y FECUNDIDAD. PEDIDO DE INFORMES.

H) LAGUNA MAR CHIQUITA. SALINIZACIÓN DEL TERRENO, BIODIVERSIDAD, SUSTANTIBILIDAD Y HUMEDADES DEL RÍO DULCE Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO. PEDIDO DE INFORMES.

I) JUEGO COMPULSIVO. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS, ACCIONES Y PROGRAMAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON LUDOPATÍA. PEDIDO DE INFORMES.

J) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

K) RÍO DE LOS SAUCES, EN SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. LEY Nº 7343. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

L) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA PROVINCIA. POLÍTICAS PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.

M) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA. INSPECCIONES Y FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.

N) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL INTERIOR. AUMENTO A PASIVOS. PEDIDO DE INFORMES.

O) METALES PESADOS EN EL AIRE, EN LA PROVINCIA. ACCIONES PREVISTAS PARA SU ELIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

P) ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

Q) ENTERRAMIENTO SANITARIO, EN BOUWER. PLANTEOS DE VECINOS Y AUTORIDADES. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DAR RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.

R) CENSO 2008, EN CÓRDOBA.

DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

S) CONSEJO ASESOR (LEY Nº 7734). INTEGRACIÓN. FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR COOPERATIVO. MONTO Y DESTINO. PERÍODO 2000-2008. PEDIDO DE INFORMES.

T) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA DE LECHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

U) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN. FINALIZACIÓN. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS COMPROMETIDAS. PEDIDO DE INFORMES.

V) LOCALIDAD DE VICUÑA MACKENNA. HECHO EN EL QUE PERDIÓ LA VIDA UN SUBOFICIAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

W) PLAN DIRECTOR PROVINCIAL DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

X) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS SOBRE AVENIDA PADRE LUCHESSE, EN CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.

Y) RÉGIMEN NACIONAL DE HOSPITALES PÚBLICOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA (RNHPGD). LISTADO DE HOSPITALES PROVINCIALES INCLUIDOS. PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA. CUMPLIMIENTO. CONVENIOS CON ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPRENDIDAS EN LA LEY Nº 23.660. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

Z) PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) Y COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS (COTBN). PEDIDO DE INFORMES.

A') RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B') POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPOS, PERÍODO 2004 AL 2008. PEDIDO DE

INFORMES.

C') AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. PROGRAMAS Y PLANES IMPLEMENTADOS, PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.

D') MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS, PLANES, OBRAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.

E') MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. OBRAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.

F') SECRETARÍA DE AMBIENTE. PROGRAMAS, PLANES, OBRAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.

G') LEY N° 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. MONTO RETENIDO, DESTINO, JUBILADOS AFECTADOS Y MONTO RECIBIDO DESDE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

H') MOTOCICLETAS. PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL Y MEDIDAS DE CONTROL EN LOS PUNTOS DE VENTA SOBRE EL USO DEL CASCO. PEDIDO DE INFORMES.

I') POLICÍA DE LA PROVINCIA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO. PEDIDO DE INFORMES.

J') POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LUCHA CONTRA LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.

K') ESCUELAS PROVINCIALES. REGISTRO DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE LA DIPE Y DRE. INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EGRESADOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO PRIVADAS. PEDIDO DE INFORMES.

L') BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA. DESTACAMENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.

M') PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DE MILITANTES SINDICALES. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA

INFORMAR.

N') ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN. SOMETIMIENTO A ACTIVIDADES EXTREMAS A LOS CADETES Y USO DE ARMAS EN LAS PRÁCTICAS. PEDIDO DE INFORMES.

O') SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. VEHÍCULO OFICIAL. SUPUESTA SUSTRACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

P') MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.

Q') REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

R') URBANIZACIÓN TIERRA ALTA, EN MALAGÜÑO. COLOCACIÓN DE UNA TOMA DE AGUA Y DESCARGA DE LÍQUIDOS CLOACALES EN EL LAGO SAN ROQUE. AUTORIZACIÓN. PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA PROVINCIA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.

S') SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y BENEFICIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.

T') IPEM N° 315, EN SAN FRANCISCO. DIRECTOR Y VICEDIRECTOR. PASE A TAREAS ADMINISTRATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.

U') PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA MENORES ALOJADOS EN INSTITUTOS CORRECCIONALES. PEDIDO DE INFORMES.

V') EMPRESAS VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, RENAULT ARGENTINA SA E IVECO ARGENTINA SA. CONVENIOS APROBADOS POR LAS LEYES N° 9501, 9500 Y 9499. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

W') OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

X') LEY NACIONAL N° 24.449, DE TRÁNSITO. ARTÍCULO 30. INCISO F (TONALIDADES PERMITIDAS EN LOS VIDRIOS DE LOS AUTOMÓVILES). CONTROL POR PARTE DE LA POLICÍA CAMINERA. PEDIDO DE INFORMES.

Y') EMERGENCIA HÍDRICA. RED DE ALERTA TEMPRANA. DIVERSOS ASPECTOS.

PEDIDO DE INFORMES.

Z') ECOSISTEMAS NATURALES. MEDIDAS ADOPTADAS TENDIENTES A LA PROTECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

A'') RESIDUOS PELIGROSOS. GENERADORES Y OPERADORES. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.

B'') PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (PPGIRSU). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80 y 81 del Orden del Día, vuelvan a comisión, con una preferencia de 14 días, esto es, para la 46ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 46ª sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80 y 81 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 46ª sesión ordinaria.

PUNTO 1**Moción de Preferencia**

-Artículo 122 y Concordantes-

0892/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Poncio, Matar y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el descuento que se les hace a los empleados públicos destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 2**Moción de Preferencia**

-Artículo 122 y Concordantes-

1082/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de gestión se encuentra la erradicación total de los basurales a cielo abierto en la provincia.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 3**Moción de Preferencia**

-Artículo 122 y Concordantes-

1286/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Salud Familiar de la provincia del año 2007.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 4**Moción de Preferencia**

-Artículo 122 y Concordantes-

1468/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Faustinelli, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Rossi, Dressino, Nicolás, Poncio, Matar y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los numerosos cierres y reducciones de servicios en varios nosocomios del interior provincial.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 5**Moción de Preferencia**

-Artículo 122 y Concordantes-

1545/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi, Poncio, Rossi y Matar, por el cual solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al edificio del Nuevo Hospital San Roque.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 7**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****1567/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Coria, Ortiz Pellegrini, Seculini, Birri, Ruiz y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a proyectos de investigaciones clínicas en desarrollo en hospitales de la provincia.

Comisión: Salud Humana**PUNTO 8****Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****1581/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los programas creados y ejecutados tendientes a reducir la mortalidad materna e infantil y tasas de mortalidad materna y fecundidad global.

Comisión: Salud Humana**PUNTO 9****Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****1585/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la salinización de los terrenos de la laguna Mar Chiquita y sobre las consecuencias que traerá la construcción de un acueducto por parte de los gobiernos de Santa Fe y de Santiago del Estero.

Comisión: Asuntos Ecológicos**PUNTO 11****Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****0999/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y de la Lotería de la Provincia de Córdoba (Art. 102 CP),

informe si existe a la fecha promoción y desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención del juego compulsivo.

Comisiones: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 12**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****1479/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 13**Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****1160/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti, Mar, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la degradación de la ribera del río de Los Sauces por la extracción de áridos.

Comisión: Asuntos Ecológicos**PUNTO 14****Moción de Preferencia****–Artículo 122 y Concordantes–****0572/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Fernández, Ortiz Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a políticas preventivas de la explotación sexual y trata de personas en la provincia.

Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 15**Moción de Preferencia**

-Artículo 122 y Concordantes-**0451/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizaciones en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo.

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

PUNTO 16**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****0857/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al pago de jubilaciones y pensiones en municipalidades y comunas del interior.

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

PUNTO 18**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1047/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la supuesta presencia de metales pesados en el aire de nuestra provincia y acciones previstas por el gobierno al respecto.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 23**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1332/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita a la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la evaluación y tratamiento de las áreas naturales de la provincia, de conformidad con la Ley N° 6964.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 24**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1349/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a los vecinos y autoridades de la localidad de Bouwer sobre el enterramiento sanitario.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 25**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1350/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el censo efectuado en la provincia.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 27**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1440/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al Consejo Asesor y al Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, creado por Ley N° 7734, que adhiere a la Ley Nacional de Educación y Promoción Cooperativa.

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

PUNTO 28**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1452/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la puesta en marcha del Programa Nutricional la Copa de Leche.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 33

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1223/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la finalización del Hogar de Ancianos en la localidad de Villa Huidobro.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 34

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1496/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados al hecho ocurrido en la zona rural de la localidad de Vicuña Mackena el 25 de septiembre, en el cual perdió la vida el suboficial Carlos Miranda.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 35

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1499/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Director Provincial de Sistemas de Gasificación.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 36

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1523/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio

firmado con la Empresa Caminos de las Sierras SA, para la realización de obras sobre Avenida Padre Luchesse en la ciudad de Córdoba.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 37

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1531/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hospitales provinciales incluidos dentro del Régimen Nacional de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, sobre el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y sobre convenios con entidades de seguridad social comprendidas en la Ley N° 23.660, de mutuales.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 38

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1532/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el cumplimiento del proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la constitución de la Comisión respectiva.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 40

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1543/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar, Poncio, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental y control de extracción de áridos en las márgenes del río de la localidad de Soto.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 41

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1276/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de armamento y equipos para la Policía de la Provincia desde el año 2004 al 2007.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 44**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1587/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y presupuestos ejecutados y a ejecutar por la Agencia Córdoba Turismo SEM.

Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

PUNTO 45**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1588/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas, planes, obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a ejecutar por el Ministerio de Salud.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 46**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1589/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a ejecutar por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 47

Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

1590/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas, planes, obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a ejecutar por la Secretaría de Ambiente, propios y del Gobierno Nacional.

Comisión: de Asuntos Ecológicos

PUNTO 48**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1601/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto retenido a través de la aplicación de la Ley N° 9504 - Emergencia Previsional-, destino del mismo, jubilados afectados y monto recibido desde la Nación.

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

PUNTO 49**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1604/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini, Birri, Coria y Bischoff, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas y campañas de educación vial y medidas de control en los puntos de venta de motocicletas respecto del casco.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 51**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1632/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de la Policía de la Provincia.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 52

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1641/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a la lucha contra los delitos contra la propiedad y la delincuencia organizada por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 54

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1530/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la nómina de alumnos con discapacidad pertenecientes a las escuelas dependientes del mismo.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 56

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

0687/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los medios de seguridad implementados en el barrio El Talar de la localidad de Mendiola.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 57

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1341/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-

lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre los procedimientos de detención de militantes sindicales el pasado 6 de septiembre.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 58

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1281/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe si oficiales de la Escuela de Policía San Martín, en marzo, sometieron a actividades extremas a los cadetes, resultando lesionados varios y si usan armas en esas prácticas.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 61

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1408/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta sustracción de un vehículo oficial de la Secretaría de la Juventud el 12 de septiembre.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 62

Moción de Preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–

1023/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación, incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia y en el marco de programas y comisiones provinciales.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 65**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1228/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el Registro de Poseedores, conforme la Ley N° 9150.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 66**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****0925/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el acta acuerdo entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Municipalidad de la ciudad de Villa Carlos Paz y South American Trust SA, referido a la toma de agua destinada a la urbanización Tierra Alta.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 67**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1409/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio Penitenciario de los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 68**Moción de Preferencia****-Artículo 122 y Concordantes-****1691/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini, Birri y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de pasar a tareas administrativas al Director y Vicedirector del IPEM N° 315 de la ciudad de San Francisco.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno-

logía e Informática

PUNTO 72**Pedido de Informes-Artículo 195****1696/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno, Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Gudiño, Poncio y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Programas Asistenciales para menores alojados en Institutos Correccionales.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 74**Pedido de Informes-Artículo 195****1718/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Poncio, Gudiño, Pozzi y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos referidos al avance en la ejecución de los convenios firmados con las empresas Volkswagen Argentina SA, Renault Argentina SA e IVECO Argentina SA, aprobados por las Leyes N° 9501, 9500 y 9499.

Comisión: Industria y Minería

PUNTO 75**Pedido de Informes-Artículo 195****1723/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de la "Estación Transformadora Arroyo Cabral".

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 76**Pedido de Informes-Artículo 195****1731/L/08**

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera controla las tonalidades permitidas en los vidrios según lo establece el inciso f) del artículo 30 de la Ley Nacional N° 24.449 -de Tránsito-.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 78

Pedido de Informes–Artículo 195

1741/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Red de Alerta Temprana Hídrica, prevista en el marco del Plan Federal de Recursos Hídricos.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 79

Pedido de Informes–Artículo 195

1770/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos referidos con las medidas adoptadas para atenuar los problemas surgidos en los ecosistemas naturales en general.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 80

Pedido de Informes–Artículo 195

1771/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con la gestión de residuos peligrosos.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 81

Pedido de Informes–Artículo 195

1773/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación vinculado a la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el marco de la política trazada por el Gobierno Provincial.

Comisión: Asuntos Ecológicos

- 9 -

CAMPAÑA PROVINCIAL DE DETECCIÓN PRECOZ DE ESCOLIOSIS, EN CÓRDOBA, LAGUNA LARGA, MONTE CRISTO Y LAS VARILLAS. INTERÉS LEGISLATIVO.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 82 del Orden del Día, que cuenta con despacho favorable de su comisión respectiva, sea aprobado en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, al expediente correspondiente al punto 82 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

**PROYECTO DE DECLARACION – 01628/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

De Interés Legislativo la Campaña Provincial de Detección Precoz de Escoliosis organizada por la Secretaría de Políticas Universitarias, a través del Programa de Voluntariado Universitario, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el aval del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Programa de Atención Primaria de la Salud "Detección Precoz de Alteraciones Anatomofuncionales del Aparato Locomotor", que viene desarrollándose desde el mes de octubre del año 2007 en las ciudades de Laguna Larga, Monte Cristo y Las Varillas, de nuestra Provincia de Córdoba.

Bloque de la Concertación Plural.

FUNDAMENTOS

La Campaña Provincial de Detección Precoz de Escoliosis, está organizada por la Secretaría de Políticas Universitarias, a través del Programa de Voluntariado Universitario, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el aval del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,

en el marco del Programa de Atención Primaria de la Salud "Detección Precoz de Alteraciones Anatomofuncionales del Aparato Locomotor".

Esta Campaña Provincial tiene como objetivo el conteo de datos sanitarios y la detección precoz de casos clínicos para su derivación a atención preventiva.

A los fines de su implementación, primeramente los agentes sanitarios participantes coordinan acciones con los Organismos de Salud Comunitarios orientadas a la prevención, educación sanitaria y labor con la comunidad. Asimismo se informa a la población acerca de la enfermedad, anticipadamente y con adecuada difusión, propiciando, de esta manera, su colaboración y el consentimiento de los padres para los estudios.

La metodología de trabajo para la detección precoz de la escoliosis y otras alteraciones de la estructura de la columna vertebral, consiste en el estudio y observación de la población infantil de los establecimientos educativos de nivel primario de cada localidad, relevando datos morfológicos, antecedentes personales y familiares de la persona en estudio, medición de parámetros antropomórficos y evaluación semiológica de las actitudes, posturas y marcha del individuo.

Sostenemos que la Campaña Provincial de Detección Precoz de Escoliosis amerita la declaración de Interés Legislativo del presente proyecto ya que representa un significativo aporte: a la exteriorización del conocimiento científico hacia la comunidad y la vinculación de las instituciones de formación superior con la misma; la contribución en pos de elevar la calidad sanitaria de las localidades del interior cordobés, y el fortalecimiento de la capacitación de los estudiantes y el compromiso con el medio social.

La escoliosis es la alteración de la columna vertebral caracterizada por una desviación o curvatura anormal en el sentido lateral, en una vista anterior o posterior de la columna. Los factores de riesgo de la afección se encuentran relacionados con la edad infantil, juvenil y adolescente; con los antecedentes familiares, ya que es una enfermedad hereditaria, y con la pubertad tardía y menarquía en las niñas, por ello es elemental la detección en la edad escolar para un tratamiento inmediato.

Cabe destacar que la Organización Panamericana de la Salud en la publicación "Escuelas Promotoras de Salud. Fortalecimiento de la Iniciativa Regional. Estrategias y Líneas de Acción 2003-2010" de Mayo de 2003, en los Resultados de Encuesta Regional 1995-2002, en referencia a la variable Oferta de Servicios Escolares Preventivos, atención de la enfermedad y nutrición o complementación nutricional, indica que existe una muy baja proporción de intervenciones como la detección precoz de la escoliosis en los servicios médicos que debe recibir la población escolar. Iniciativas como la que aquí tratamos vienen a complementar la tarea del Estado en materia sanitaria.

Reiteramos entonces, que esta Campaña Pro-

vincial merece el apoyo e interés de este cuerpo legislativo, y es por ello que solicitamos a los Señores Legisladores el respaldo pertinente para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Bloque de la Concertación Plural.

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra **Comisión de SALUD HUMANA**, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración N° 1628/L/08, iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual declara de Interés Legislativo la Campaña Provincial de Detección Precoz de Escoliosis, que viene desarrollándose desde el mes de octubre de 2007 en la ciudad de Córdoba y las localidades de Laguna Larga, Montecristo y Las Varillas, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación, en la forma que fuera presentado por el artículo 146 del Reglamento Interno.

DIOS GUARDE A UDS.

Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Manzanares, Serra, Jiménez, Poncio, Olivero.

- 10 -

ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXVI

1980/L/08

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de Interés Legislativo el libro "Evaluación Nutricional de Ancianos. Conceptos, métodos y técnicas", de la Magíster Lic. Raquel Susana Acosta.

XXVII

1981/L/08

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa beneplácito al kartista cordobés Facundo Chapur, quien obtuvo el Campeonato Mundial en la "Copa Rotax" de Karting disputada en Lecce, Italia.

XXVIII

1982/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Podversich, Fortuna y Passerini, por el cual adhiere al 120º aniversario de la creación de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad

Nacional de Córdoba “Prof. Dr. Juan Martín Allende”, incluyendo a las mismas en la distinción “Prof. Dr. Ramón Carrillo”, instituida por Decreto N° 235/08 de la Presidencia del Cuerpo.

XXIX

1983/L/08

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la entrega de premios “Contacto+ 2ª edición”, que tendrá lugar el 5 de diciembre en la ciudad de Cruz del Eje.

XXX

1986/L/08

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, el pronto esclarecimiento de la desaparición de la ciudad de Villa Carlos Paz de los jóvenes Javier Echenique y Miriam Domínguez.

XXXI

1987/L/08

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual adhiere al “Día Internacional de las personas con Discapacidad”, que se conmemora el 3 de diciembre.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXII DESPACHOS DE COMISIÓN

Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

0777/E/08

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de Huinca Renancó, departamento General Roca.

Despachos de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

1919/E/08

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra: “Recons-

trucción y sistematización de Ruta Provincial U-110 – Av. Ricardo Rojas – Tramo: Av. Rafael Núñez – Calle Manuel de Falla, entre calles Francisco Vidal (Avenida Roque Sáenz Peña) y Avenida Heriberto Martínez, Mocovíes y Tomás Garzón y entre ésta y Antequiera Castro (Expediente N° 0045-014508)” lotes de terreno afectados en forma total o parcial.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.

- 11 -

HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.

Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 777/E/08, que cuenta con despacho de comisión, la que se lee a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba**

Sr. Héctor Campana
S. / D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 0777/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se modifica el radio municipal de Huinca Renancó, Dpto. General Roca.

Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, que han evaluado positivamente dicha modificación, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída

por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: solicito que en el expediente 1779 se incorpore como coautora a la legisladora Esmeralda Rodríguez.

Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.

Sr. Pagliano.- Señor presidente: en mi carácter de miembro informante, paso a exponer los fundamentos del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo por el que se procura la ampliación del radio municipal de Huinca Renancó, del Departamento General Roca de nuestra Provincia.

Mediante estas iniciativas, cuyo despacho obtuviera aprobación unánime en el seno de ambas comisiones intervinientes, se continúa con una etapa fundamental e histórica en el municipalismo de nuestra Provincia, ya que confiere expreso cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal 8102.

Se siguen, además, principios constitucionales rectores en este sentido, como es el de la fijación territorial de los límites de los municipios y comunas.

La Constitución de la Provincia de Córdoba adoptó el sistema de municipio-ciudad, ya que la competencia alcanza hasta donde pueden prestarse sus servicios públicos. La única restricción constitucional para la fijación de los límites dentro de los cuales va a prestar servicios está dada por la prohibición de exceder los correspondientes límites del Departamento respectivo, tal como reza el artículo 185 de nuestra Carta Magna Provincial.

Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un elemento esencial, cual es la determinación de un territorio sobre el cual ejerce su propia jurisdicción y sin ningún tipo de cuestionamiento. Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde la municipalidad o comuna ejerce plena y efectivamente su potestad.

Fijar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de

una ley específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que, a veces, permitan que establecimientos industriales, comerciales y de servicios e, inclusive, actividades prohibidas o reñidas con la moral y las buenas costumbres, quedarán excluidas de su jurisdicción. Esto provocaba y provoca un sinnúmero de conflictos en lo referente a la prestación de los servicios, la ejecución de la obra pública, la regulación del uso de suelo y la obligación del pago de los tributos.

Todas estas situaciones impedían, en definitiva, que el municipio ejerciera plenamente su poder de policía.

Fácil es deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando desactualizados e insuficientes por el propio progreso de toda comunidad organizada. El desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, la necesidad de generar más y mejores servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como se desprende del último censo poblacional realizado hace apenas unos meses.

Hay que enfatizar la importancia del paso fundamental que está dando este Gobierno provincial y de la tarea encarada por esta Legislatura para comenzar a normalizar la base territorial de los municipios y comunas, para así generar plena seguridad jurídica en el ejercicio de las potestades municipales y comunales, garantizando su ejercicio pleno.

Puntualizar los aspectos técnicos y geográficos de cada uno de estos proyectos sería insistir con datos que ya fueron profundamente analizados en el trabajo de cada una de las comisiones.

Se han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes, desde la pretensión del nuevo radio solicitado, la confección de los planos, la sanción de las ordenanzas respectivas y el dictamen de los organismos técnicos, para que luego el Poder Ejecutivo remita a esta Legislatura los pertinentes proyectos de ley.

Todo ello se hizo con la participación de la Dirección General de Catastro, ente encargado de llevar el registro oficial de los documentos cartográficos donde se asientan los nuevos límites territoriales de las municipalidades y comunas de nuestra Provincia.

Se han cumplido, entonces, todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con la legalidad requerida sino también, muy especialmente, con la legitimidad que todo procedimiento administrativo y legislativo exige.

Celebro, señor presidente, que este despacho fuera aprobado, como los precedentes, en forma unánime por los legisladores que conforman ambas comisiones actuantes, pues ello da la clara pauta de que los radios municipales y comunales son de interés común, trascendiendo cualquier diferencia política.

Por ello, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba al proyecto de ley en tratamiento para ampliar el radio municipal de Huinca Renancó, Departamento General Roca.

Por todas estas razones, solicito a mis pares de los restantes bloques me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en general y en particular, en una misma votación.

En consideración el proyecto 777/E/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY - 0777/E/08 MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Municipalidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a instancias de la citada Municipalidad.

Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.

A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los

Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.

Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.

Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9026, de Regionalización y creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.

En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego de la reforma Constitucional de 1987.

Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.

En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.

Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.

La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de su lugar corresponde a una u otra jurisdicción.

Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunas Regionales, en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9026 y 9354.

Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la

Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.

Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de Huinca Renancó, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Huinca Renancó.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el municipio fijó su radio, aprobándolo por Ordenanza N° 1072/07 y su Decreto de Promulgación N° 35/2007, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.

Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-029834/2007, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.

Saludo al señor Presidente de la Legislatura Provincial, con distinguida consideración y estima.

Cr. Juan Schiaretta, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de Huinca Renancó, Departamento General Roca, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, conforme al plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la siguiente descripción de los Polígonos 1 y 2:

POLÍGONO 1: Desde el Vértice 1 (E: 4374442,0602; N: 6148397,4473), ubicado en la intersección entre el lado Oeste de la calle J. B. Justo y la prolongación del lado Nor-Este de la Ruta Nacional N° 35 con rumbo Sud-Este, el lado 1-2 mide 3.382,40 m, que corre paralelo a la Ruta Nacional N° 35 y cruzando la Ruta Provincial N° 26. Desde el vértice 2 (E: 4375806,2067; N: 6145302,2851) con rumbo al Este, el lado 2-3 mide 379,80 m. Desde el vértice 3 (E:

4376185,7454; N: 6145315,5389) con rumbo Sud-Este, el lado 3-4 mide 480,50m. Desde el vértice 4 (E: 4376245,9368; N: 6144838,8632) el lado 4-5 mide 1379,10 m. Estos lados descriptos incluyen el Hogar Geriátrico, el Corralón y el Restaurante. Desde el vértice 5 (E: 4376727,6172; N: 6143546,6298) con rumbo Oeste paralelo a 100,00 m al Sur de la calle Carlos Gardel, el lado 5-6 mide 2.025,30 m. Desde el vértice 6 (E: 4374703,5648; N: 6143475,9483) con rumbo Sur, el lado 6-7 mide 944,50 m, a una distancia paralela a 100,00 m al Este de la Avenida San Martín. Desde el vértice 7 (E: 4374736,5262; N: 6142532,0565) con rumbo Este, el lado 7-8 mide 644,30 m. Desde el vértice 8 (E: 4375380,4189; N: 6142554,5417) con rumbo Sur, el lado 8-9 mide 230,40 m. Desde el vértice 9 (E: 4375388,4606; N: 6142324,2561), con rumbo Oeste, el lado 9-10 mide 874,30 m. Estos tres lados descriptos costean al Jockey Club. Desde el vértice 10 (E: 4373514,7081; N: 6142293,7440) con rumbo Norte, el lado 10-11 mide 944,90 m. paralelo a 100,00 m al Oeste de la Avenida San Martín. Desde el vértice 11 (E: 4374481,7318; N: 6143238,0616) ubicado 100,00 m. al Sur de la calle Pichincha, con rumbo Oeste, el lado 11-12 mide 1.440,00 m, este lado incluye al Tiro Federal y al Cementerio. Desde el vértice 12 (E: 4373042,6090; N: 6143187,8063) con rumbo Norte, el lado 12-13 mide 651,10 m. paralelo 100,00 m. de la calle Sáenz Peña. Desde el vértice 13 (E: 4373019,8855; N: 6143838,5207) con rumbo Oeste, el lado 13-14 mide 395,00 m. Desde el vértice 14 (E: 4372625,0902; N: 6143824,7342) con rumbo Norte, el lado 14-15 mide 592,90 m. Desde el vértice 15 (E: 4372606,1474; N: 6144354,2897) con rumbo Este, el lado 15-16 mide 130,00 m. Desde el vértice 16 (E: 4372736,0688; N: 6144358,1895) con rumbo Norte, el lado 16-17 mide 308,70m. Desde el vértice 17 (E: 4372728,7378; N: 6144666,8238) con rumbo Este, el lado 17-18 mide 134,00 m. Desde el vértice 18 (E: 4372862,6369; N: 6144671,4996) con rumbo Norte, el lado 18 mide 237,90. Desde el vértice 19 (E: 4372856,3344; N: 6144909,2795) con rumbo Este, el lado 19-20 mide 236,00 m. Desde el vértice 20 (E: 4373092,0869; N: 6144919,5121) con rumbo Norte, el lado 20-21 mide 351,10 m. Estos tres lados corren por el eje de las calles Honduras, Francia y Cuba. Desde el vértice 21 (E: 4373082,7356; N: 6145270,4754) con rumbo Este paralelo a 100,00 m. al Norte de la calle Alemania, el lado 21-22 mide 1.208,70 m. Desde el vértice 22 (E: 4374290,7120; N: 6145312,6589) con rumbo Norte paralelo a 220,00 m. de la calle J. B. Justo, el lado 22-23 mide 1.344,10 m. este incluye la Sociedad Rural y el Aeroclub. Desde el vértice 23 (E: 4374260,7822; N: 6146656,4508) con rumbo Este, el lado 23-24 mide 220,00 m. Desde el vértice 24 (E: 4374480,7277; N: 6146661,3495) con rumbo Norte, el lado 24-1 mide 1.736,50 m. costeanado el lado Oeste de la calle J. B. Justo e interceptando a la Ruta Nacional N° 35 con lo que se cierra el Polígono 1.

POLÍGONO 2: Se incluye en este Radio Municipal el basural ubicado hacia el Este en el camino a Ranqueles a una distancia aproximada de 3,2 km., se encuentra encerrado por el siguiente polígono desde el vértice 25 (E: 4380258,6549, N: 6144528,1516) con rumbo Sur, el lado 25-26 mide 373,40m. Desde el vértice 26 (E: 4380162,2225, N: 6144154,8102) con rumbo Sud-Oeste, el lado 26-27 mide 232,90 m. Desde el vértice 27 (E: 4379987,2938, N: 6144001,0227) con rumbo Oeste, el lado 27-28 mide 391,40 m. Desde el vértice 28 (E: 4379596,2880, N: 6144018,0293) con rumbo Norte, el lado 28-29 mide 501,30 m. Desde el vértice 29 (E: 4379594,9566, N: 6144519,3077) con rumbo Este, el lado 29-25 mide 563,80 m. con lo que se cierra la figura.

Artículo 2.- La Documentación Cartográfica definitiva a que hace referencia el artículo 6° de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, será elaborada con posterioridad por la Oficina Técnica que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Cr. Juan Schiaretto, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de **ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN**, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 0777/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Huinca Renancó del departamento General Roca, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de Huinca Renancó, localidad ubicada en el Departamento General Roca de esta Provincia de Córdoba, según lo establecido por el artículo 4º de la Ley N° 8102, conforme al plano confeccionado por la Municipalidad de la citada localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la siguiente descripción de los Polígonos 1 y 2:

Polígono 1: Desde el Vértice N° 1 (X=6148398,7773 - Y=4374443,1602), ubicado sobre el lado Oeste de calle Juan B. Justo en su intersección con la prolongación del lado Noreste de la Ruta Nacional N° 35, con rumbo Sudeste se extiende el Lado 1-2, que mide

de tres mil trescientos ochenta y dos metros con cuarenta centímetros (3.382,40 m) y corre paralelo a la Ruta Nacional N° 35, atravesando la Ruta Provincial N° 26.

Desde el Vértice N° 2 (X=6145303,6121 - Y=4375807,2215) con rumbo Este, se encuentra el Lado 2-3 que mide trescientos setenta y nueve metros con ochenta centímetros (379,80 m).

Desde el Vértice N° 3 (X=6145316,8689 - Y=4376186,8454) con rumbo Sudeste, se halla el Lado 3-4 que mide cuatrocientos ochenta metros con cincuenta centímetros (480,50 m).

Desde el Vértice N° 4 (X=6144840,1932 - Y=4376247,0368) con rumbo Sudeste, se prolonga el Lado 4-5 que mide un mil trescientos setenta y nueve metros con diez centímetros (1.379,10 m). Estos tres (3) últimos lados descriptos incluyen el hogar geriátrico, el corralón y el restaurante.

Desde el Vértice N° 5 (X=6143547,9598 - Y=4376728,7172) con rumbo Oeste, se extiende el Lado 5-6 que mide dos mil veinticinco metros con treinta centímetros (2.025,30 m) y corre paralelo a calle Carlos Gardel a una distancia de cien metros (100,00 m) hacia el Sur.

Desde el Vértice N° 6 (X=6143477,2783 - Y=4374704,6648) con rumbo Sur, se encuentra el Lado 6-7 que mide novecientos cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros (944,50 m) y corre paralelo a Avenida San Martín, a una distancia de cien metros (100,00 m) al Este.

Desde el Vértice N° 7 (X=6142533,3865 - Y=4374737,6262) con rumbo Este, se halla el Lado 7-8 que mide seiscientos cuarenta y cuatro metros con treinta centímetros (644,30 m).

Desde el Vértice N° 8 (X=6142554,8717 - Y=4375381,5189) con rumbo Sur, se halla el Lado 8-9 que mide doscientos treinta metros con cuarenta centímetros (230,40 m).

Desde el Vértice N° 9 (X=6142325,5861 - Y=4375389,5606) con rumbo Oeste, se extiende el Lado 9-10 que mide ochocientos setenta y cuatro metros con treinta centímetros (874,30 m). Estos tres (3) últimos lados descriptos costean al Jockey Club.

Desde el Vértice N° 10 (X=6142295,0740 - Y=4374515,8081) con rumbo Norte, se encuentra el Lado 10-11 que mide novecientos cuarenta y cuatro metros con noventa centímetros (944,90 m) y corre paralelo a Avenida San Martín, a una distancia de cien metros (100,00 m) al Oeste.

Desde el Vértice N° 11 (X=6143239,3916 - Y=4374482,8318) con rumbo Oeste, se extiende el Lado 11-12 que mide tres mil trescientos sesenta y un metros (3.361,00 m) y corre paralelo a calle Pichincha, a una distancia de cien metros (100,00 m) al Sur. Este lado incluye el Tiro Federal, el cementerio y el predio destinado al desarrollo de actividades de tipo industrial.

Desde el Vértice N° 12 (X=6143122,0643 - Y=4371123,0172) con rumbo Norte, se encuentra el lado 12-13 que mide un mil setecientos once metros con ochenta centímetros (1.711,80 m) y corre paralelo a calle pública, a una distancia de quinientos metros (500,00 m) al Este.

Desde el Vértice N° 13 (X=6144833,0739 - Y=4371071,0718) con rumbo Este, se halla el Lado 13-14 que mide dos mil veinticuatro metros (2.024,00 m).

Desde el Vértice N° 14 (X=6144920,8421 - Y=4373093,1869) con rumbo Norte por eje de calle Cuba, se extiende el Lado 14-15 que mide trescientos cincuenta y un metros con diez centímetros (351,10 m).

Desde el Vértice N° 15 (X=6145271,8054 - Y=4373083,8356) con rumbo Este, se encuentra el Lado 15-16 que mide un mil doscientos ocho metros con setenta centímetros (1.208,70 m) y corre paralelo a calle Alemania a una distancia de cien metros (100,00 m) al Norte.

Desde el Vértice N° 16 (X=6145313,9889 - Y=4374291,8120) con rumbo Norte, se extiende el Lado 16-17 que mide un mil trescientos cuarenta y cuatro metros con diez centímetros (1.344,10 m) y corre paralelo a calle Juan B. Justo a una distancia de doscientos veinte metros (220,00 m) al Oeste. Este lado incluye a la Sociedad Rural y al Aeroclub.

Desde el Vértice N° 17 (X=6146657,7808 - Y=4374261,8822) con rumbo Este, se encuentra el Lado 17-18 que mide doscientos veinte metros (220,00 m).

Desde el Vértice N° 18 (X=6146662,6795 - Y=4374481,8277) con rumbo Norte, se extiende el Lado 18-1 que mide un mil setecientos treinta y seis metros con cincuenta centímetros (1.736,50 m), costearlo el lado Oeste de calle Juan B. Justo e interceptando a la Ruta Nacional N° 35, con lo que se cierra el Polígono 1 del Radio Municipal de la localidad de Huinca Renancó, determinando una superficie de un mil doscientas cincuenta y tres hectáreas tres mil ochocientos veinticinco metros cuadrados (1.253 has 3.825,00 m²).

Polígono 2: Se incluye en este Radio Municipal el basural ubicado hacia el Este de la localidad, al Sur del camino a Ranqueles y a una distancia aproximada de tres mil doscientos metros (3.200,00 m). Se encuentra encerrado por el siguiente polígono:

Desde el Vértice N° 19 (X=6144529,4816 - Y=4380159,7549) con rumbo Sur, se encuentra el Lado 19-20 que mide trescientos setenta y tres metros con cuarenta centímetros (373,40 m).

Desde el Vértice N° 20 (X=6144156,1402 - Y=4380163,3225) con rumbo Sudoeste, se extiende el lado 20-21 que mide doscientos treinta y dos metros con noventa centímetros (232,90 m).

Desde el Vértice N° 21 (X=6144002,3527 - Y=4379988,3938) con rumbo Oeste, se halla el Lado 21-22 que mide trescientos noventa y un metros con cuarenta centímetros (391,40 m).

Desde el Vértice N° 22 (X=6144019,3593 - Y=4379597,3880) con rumbo Norte, se prolonga el Lado 22-23 que mide quinientos un metros con treinta centímetros (501,30 m).

Desde el Vértice N° 23 (X=6144520,6377 - Y=4379596,0566) con rumbo Este, se encuentra el Lado 23-19 que mide quinientos sesenta y tres metros con ochenta centímetros (563,80 m), con el que se cierra la figura, determinando una superficie de veintisiete hectáreas, ocho mil setecientos treinta y dos metros cuadrados (27 has 8.732,00 m²).

La superficie total del nuevo Radio Municipal de la localidad de Huinca Renancó, considerando los dos (2) polígonos que lo componen, es de un mil doscientas ochenta y un hectáreas, dos mil quinientos cincuenta y siete metros cuadrados (1.281 has 2.557,00 m²).

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.

Ipérico, Brügge, Genta, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco, Busso, Birri, Varas, Rossi, Ochoa Romero.

- 12 -

BIENES Y LOTES (EXPEDIENTE N° 0045-014508). DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.

Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1919/E/08, el que cuenta con despacho de comisión que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S. / D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1919/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra: Reconstrucción y Sistematización de

Ruta provincial U-110-Av. Ricardo Rojas – Tramo: Av. Rafael Núñez – calle Manuel de Falla, entre calles Francisco Vidal y Av. Heriberto Martínez, Mocovíes y Tomás Garzón y entre ésta y Antequiera Castro (Expte. N° 0045-014508), lotes de terreno afectados en forma total o parcial.

Contando con despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda, que acreditan la necesidad y urgencia de contar con esta expropiación para la concreción de dicha obra, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada. Tiene la palabra el legislador Ochoa Romero.

Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: vamos a dar tratamiento al proyecto de ley 1919/E/08, pero previo a exponer los fundamentos quiero hacer expresa mención de que el mismo cuenta con el apoyo de todos los bloques parlamentarios que integran este Cuerpo.

El presente proyecto se refiere a la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de una fracción de terreno que será destinada a la ejecución de la obra “Reconstrucción y sistematización de la Ruta Provincial U 110 – Avenida Ricardo Rojas, tramo Avenida Rafael Núñez, calle Manuel De Falla, Departamento Capital”; particularmente, en este caso, se trata de varias fracciones de terreno, algunas con afectación parcial y otros con afectación total.

Los inmuebles objeto de tratamiento en la presente ley se concentran en tres sectores distintos, siempre sobre la Avenida Ricardo Rojas. Uno de ellos es el de las calles Francisco Vidal (Avenida Roque Sáenz Peña) y Avenida Heriberto Martínez; otro sector afecta a una zona comprendida entre las calles Mocovíes y Tomás Garzón y, por último, el sector entre las calles Tomás Garzón y Antequiera Castro.

Citando los aspectos técnicos del proyecto en tratamiento, podemos decir que se trata de inmuebles sitos en el Departamento Capital, cuya designación catastral y afectación se corresponden con el siguiente listado: primero, Circunscripción 12, Sección 07, Manzana 001, Parcelas 04, 05 y 06, con afectación parcial; segundo, Circunscripción 12, Sección 07, Manzana 001, Parcelas 02, 03, 21 y 22, con afectación total; tercero, Circunscripción 12, Sección 07, Manzana 003, Parcelas 010, 011, 012 y 032, con afectación parcial; cuarto, Circunscripción 12, Sección 06, Manzana 004, Parcela 06, con afectación total; y quinto, Circunscripción 12, Sección 06, Manzana 004, Parcela 36, con afectación total.

Todos los inmuebles responden a los croquis de afectación y a sus respectivas planchas catastrales, los que, compuestos de nueve fojas útiles, forman parte integrante de la presente ley como Anexo Único. La documentación relacionada con el tema bajo tratamiento consta en el expediente 0045-014508/2008 de la Dirección Provincial de Vialidad.

Como en todos los casos de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un bien, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2° dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”. De esta manera, se garantiza la debida planificación previa a la determinación del bien, como también la razonabilidad de la misma.

En ese aspecto, podemos decir que están dadas las condiciones en cuanto a la documental que se acompaña para producir y aprobar el texto definitivo de la presente expropiación.

Señor presidente: atento a que en las dos sesiones anteriores se aprobaron los proyectos de ley 1744 y 1862/E/08, de similares características y que complementan al presente y, considerando que mediante la aprobación del proyecto en tratamiento se dará una solución definitiva para resolver la problemática de ese sector de la ciudad, es

que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa, no sin antes agradecer a los presidentes de las comisiones de origen y revisora, de las cuales formo parte, el haberme designado miembro informante del presente proyecto.

Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 1919/E/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.

A los fines de la votación en particular, se hará por número de artículos.

- Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY - 01919/E/08 MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declaran de Utilidad Pública y sujetos a expropiación, para la ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL U-110 - AVENIDA RICARDO ROJAS - Tramo: Avenida Rafael Núñez - calle Manuel de Falla, entre calles Francisco Vidal (Avenida Roque Sáenz Peña) y Avenida Heriberto Martínez, Mocovíes y Tomás Garzón y entre ésta y Antequiera Castro (Expediente N° 0045-014508)", todos los bienes necesarios, lotes de terreno afectados en forma total o parcial de acuerdo a la Memoria Descriptiva, Planos y Proyectos aprobados.

El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley N° 6394 -"Régimen de Expropiación" que en su artículo 2º dispone: "... La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..." garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.

Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del pre-

sente proyecto de ley.

Dios guarde a Ud.

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra: "RECONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL U-110 - AVENIDA RICARDO ROJAS - Tramo: Avenida Rafael Núñez - calle Manuel de Falla, entre calles Francisco Vidal (Avenida Roque Sáenz Peña) y Avenida Heriberto Martínez, Mocovíes y Tomás Garzón y entre ésta y Antequiera Castro (Expediente N° 0045-014508)", todos los bienes necesarios, lotes de terreno afectados en forma total o parcial, de acuerdo a la Memoria Descriptiva, Planos y Proyectos aprobados.

Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras **Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA**, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 1919/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Reconstrucción y Sistematización de Ruta Provincial U-110 - Av. Ricardo Rojas - tramo: Av. Rafael Núñez - calle Manuel de Falla, entres calles Francisco Vidal (Avenida Roque Sáenz Peña) y Av. Heriberto Martínez, Mocovíes y Tomás Garzón y entre ésta y Antequiera Castro (Expediente N° 0045-014508)" lotes de terreno, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra: "Reconstrucción y Sistematización de Ruta Provincial U-110 - Av. Ricardo Rojas - tramo: Av. Rafael Núñez - calle

Manuel de Falla, entres calles Francisco Vidal (Avenida Roque Sáenz Peña) y Av. Heriberto Martínez, Mocovíes y Tomás Garzón y entre ésta y Antequiera Castro, los inmuebles sito en departamento Capital, cuya designación Catastral y afectación se corresponde con el siguiente listado:

- a) Circunscripción 12, Sección 07, Manzana 001, Parcelas 04, 05 y 06, con afectación parcial;
- b) Circunscripción 12, Sección 07, Manzana 001, Parcelas 02, 03, 21 y 22, con afectación total;
- c) Circunscripción 12, Sección 07, Manzana 003, Parcelas 010, 011, 012 y 032, con afectación parcial;
- d) Circunscripción 12, Sección 06, Manzana 004, Parcelas 06, con afectación total;
- e) Circunscripción 12, Sección 06, Manzana 004, Parcelas 36, con afectación parcial.

Todos los inmuebles responden a los croquis de afectación, planchetas catastrales, parcelarias municipales y planchetas catastrales de distritos municipales, cuyas copias se acompañan, los que compuestos de nueve (9) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.

Toda la documentación fue gestionada en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente N° 0045–014508/2008.

Artículo 2°.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.

Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A UDS.

Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoff, Faustine-Ili, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier, Pagliano, Vásquez, Heredia, Coria, Falo, Giaveno, Graglia, Ipérico, Ruiz, Valarolo.

- 13 -

A) CAPILLA DE SANTA BÁRBARA, EN PAMPA DE OLAEN. FUNDACIÓN. ANIVERSARIO. FESTEJOS PATRONALES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

B) VILLA DE SOTO. FIESTAS PATRONALES EN HONOR A “NUESTRA SEÑORA INMACULADA DEL VALLE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

C) IMAGEN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES. LLEGADA A VILLA DOLORES, DPTO. SAN JAVIER. 150° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

D) LIBRO “EVALUACIÓN NUTRICIONAL

DE ANCIANOS. CONCEPTOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS”, DE MAGÍSTER LIC. RAQUEL S. ACOSTA. INTERÉS LEGISLATIVO.

E) COPA ROTAX DE KARTING, EN LECCE, ITALIA. FACUNDO CHAPUR, KARTISTA CORDOBÉS. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO MUNDIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

F) BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA “PROF. DR. JUAN MARTÍN ALLENDE”. 120° ANIVERSARIO. ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.

G) PREMIOS “CONTACTO+ 2ª EDICIÓN”, EN CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

H) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.

Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, corresponde dar tratamiento sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 1820, 1973, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987/L/08, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.

Expte. 1820/L/08

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S. / D.**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 1820/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el cual adhiere a los festejos del aniversario de la fundación de la Capilla de Santa Bárbara de La Pampa de Oláen, a celebrarse el 5 de diciembre.

Motiva la presente solicitud, la importancia y valor social que tiene esta celebración para los habitantes del lugar y de toda la región.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Daniel Passerini
Legislador provincial

**PROYECTO DE DECLARACION – 01820/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión a los Festejos Patronales en la Capilla de Santa Bárbara, en la Pampa de Oláen, que fundara el Obispo Diego de Salguero y Cabrera, a llevarse a cabo el día 4 de diciembre del corriente.

Alicia Narducci.

FUNDAMENTOS

La Pampa de Oláen es una extensa planicie ubicada a 1.200 metros sobre el nivel del mar, se trata de un amplio territorio anclado en el pasado en el que fue protagonista el Obispo Diego Salguero y Cabrera, propietario de estas tierras a partir del año 1763.

En la Pampa de Oláen, que fue un antiquísimo paradero indígena, se hallaron restos fósiles de antiguas culturas que superan los 8.000 años, según estudios realizados con el método de fechado radiocarbónico o C 14.

Uno de los atractivos más preciados de la zona de Oláen es la Capilla de Santa Bárbara, que está ubicada a 1.150 metros sobre el nivel del mar, sobre el camino Los Riojanos, que es un ramal del histórico Camino Real, que llegaba hasta el Alto Perú. Fue construida entre 1748 y 1756 por el Obispo Salguero y Cabrera, como una forma de dar señales de fe y protección a los viajeros que pretendían llegar hasta la región norteña de la colonia. Con una pequeña escalerilla que conduce al campanario; en su interior se conservan piezas religiosas. Muchos aseguran que esta capilla es una de las más bellas y simples de la provincia.

Por estos días, la Capilla de Santa Bárbara, constituye una de las reliquias más preciadas para todos los cordobeses, por lo que no debemos olvidar, ya que son la esencia y la historia y por sobre todo marca la continuidad de una misión de servicio y amor al prójimo, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y

la Virgen María.

Alicia Narducci.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1820/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a los festejos patronales que se realizarán en la Capilla de Santa Bárbara de la Pampa de Oláen, que fuera fundada por el Obispo Diego de Salguero y Cabrera, a desarrollarse el día 4 de diciembre de 2008.

Expte. 1973/L/08

Córdoba, 2 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S. / D.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria 44° del 130 período legislativo, a llevarse a cabo el día miércoles 3 de diciembre de 2008, del proyecto de declaración 1973/L/08 con relación a la celebración de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora Inmaculada del Valle, de la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje.

Sin otro particular, y agradeciéndole la atención brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmente.

José Omar Monier
Legislador provincial

**PROYECTO DE DECLARACION – 01973/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a los actos organizados con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en honor a “Nuestra Señora Inmaculada del Valle” de Villa de Soto, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, los que tendrán lugar en la localidad de Villa de Soto del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2008.

José Monier.

FUNDAMENTOS

En la Localidad de Villa de Soto, del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre de 2008 se llevara a cabo la

Novena y Celebración de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora Inmaculada del Valle Perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje.

Dicha celebración se realizara entre el 29 de Noviembre y 8 de Diciembre de 2008, con un Programa de Festejos, Celebrándose día a día Rosarios de Aurora y Misas con la participación de los distintos Barrios de la Localidad.

Finalizan los actos conmemorativos de las Centenarias Fiestas el día 8 de Diciembre con la solemne Procesión.

La Devoción Cristiana por Nuestra Señora Inmaculada del Valle crece día a día, convirtiéndola en una de las Celebraciones Católicas más importante de Villa de Soto.

La laboriosidad en las Comisiones de apoyo ha permitido el crecimiento edilicio del Templo que resulta de vital importancia para el desarrollo de las Tareas Comunitarias.

Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración representa para la Comunidad de Villa de Soto.

Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresaremos en su tratamiento solicitamos a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.

José Monier.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1973/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a los actos organizados con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en honor a “Nuestra Señora Inmaculada del Valle” de Villa de Soto, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, los que se desarrollan del 29 de noviembre al 8 de diciembre en la mencionada localidad.

Expte. 1978/L/08

Córdoba, 2 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S. / D.**

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legisladora del bloque de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin

de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del 130 periodo legislativo del día de la fecha, del expediente 1978/L/08 declarando beneplácito y adhesión por la celebración y homenaje a los 150 años de la llegada de la Imagen de la Virgen de los Dolores a la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, lo cual tendrá lugar el día 8 de diciembre del 2008.

Por motivos que oportunamente expondremos en el recinto, solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.

Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.

Atentamente.

María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial

**PROYECTO DE DECLARACION – 01978/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión por la celebración y homenaje a los 150 años de la llegada de la Imagen de la Virgen de los Dolores a la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, la Perla del Oeste, lo cual tendrá lugar el día 8 de diciembre del 2008.

María Calvo Aguado, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María Matar, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Dante Rossi.

FUNDAMENTOS

María tú eres la estrella, mira tú pueblo.

Con esta premisa, se desarrolla este encuentro Mariano que concluirá el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María y en esta oportunidad coincidente con los 150 años cuando aquel progresista y quijotesco Cura Riojano como lo fue el Padre Brizuela, trajo a lomo de mula el rostro y manos de madera, de la Virgen de los Dolores desde Catuna, Provincia de La Rioja hasta por aquel entonces el paraje Alto Paso del León hoy Ciudad de Villa Dolores, gracias a la Patrona Celestial que le dio el nombre.

A estos elementos que trajo el Cura Juan Vicente Brizuela, las señoras del lugar le confeccionaron el hábito en terciopelo negro bordado con hilos de oro, que es lo que aun hoy luce.

La Virgen de los Dolores tiene diferentes hábitos según sea a donde la veneran sobremano como es el caso de España, Méjico, la península itálica entre otros tantos.

Pero desde mi humilde punto de vista e investigación puedo inferir que a la imagen de la madre vestida

de negro manto es una presencia casi constante en las tradiciones populares que veneran a la Dolora, desde el comienzo de la devoción hasta nuestros días. Sin embargo, no es fácil encontrar una documentación exhaustiva que permita recoger las diversas formas con que la religiosidad popular, entendida en el sentido más amplio del término, ha expresado y sigue expresando su devoción a la Mater Dolorosa.

Muy recientemente todavía el editor de la Bibliografía mariana, G. Besutti, señalaba: "La historia de la piedad cristiana con la virgen María, que padece con su Hijo al pie de la cruz, no ha sido escrita aún por completo de forma que comprenda no sólo al oriente, sino a todas las regiones de occidente. Hay muchos aspectos, incluso importantes, que están más o menos diseminados por todas partes y que, si no se han ignorado, al menos no han sido valorados debidamente".

La Historia.

150 ANIVERSARIO DE ACONTECIMIENTOS RELEVANTES EN EL OESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Primitiva Capilla: Su construcción dio comienzo el 26 de mayo de 1856 cuando el padre Juan Vicente Brizuela y los vecinos del Alto Paso de León colocaron la piedra fundacional. Los trabajos se vieron afectados entre las postrimerías de abril y septiembre de 1857 a causa del juicio eclesiástico que le promovieron a Brizuela un grupo de vecinos sampedrinos. La acusación tenía como motivo la erección de la capilla. Demostrada su inocencia el cura Brizuela fue absuelto y restituido al frente del Curato de San Javier. Este episodio no permitió concluir la capilla y proceder a su habilitación en tiempo estimado (mediados de 1858). En noviembre de 1858 el sacerdote fue informado que debía hacerse cargo de la iglesia matriz de La Rioja por expreso pedido del gobernador de esa provincia. Brizuela y los vecinos decidieron trabajar sin descanso hasta terminar la obra. El éxito coronó aquel enorme esfuerzo solidario, y el 8 de diciembre de 1858 el cura riojano inauguró la capilla construida en tierra donada por doña Justa Ramona Arias.

El terremoto de Mendoza (1861) afectó y en 1873 Brizuela inició la construcción del actual templo en el mismo lugar donde antes había erigido la primitiva capilla del Alto del Paso del León.

Virgen de los Dolores: se trata de una imagen de vestir cuyo rostro y manos trajo Brizuela desde Catuna (La Rioja), al finalizar el año 1857. Depositada en la capilla de San Javier, el nombre Dolores se hizo habitual en el vecindario y se impuso de hecho a nivel oficial a partir del 8 de diciembre de 1858 cuando el padre Brizuela inauguró la capilla y entronizó la sagrada imagen de la Virgen de los Dolores, Madre y Patrona de nuestra ciudad.

El año 1858 fue generoso en acontecimientos relacionados con Villa Dolores

y su zona de influencia.

- Pedanía Dolores: De acuerdo con la resolución fechada el 19 de septiembre de 1853, el gobernador Alejandro Carmen Guzmán, teniendo al río como límite divisorio, dividió la Pedanía El Sauce en dos: al norte Pedanía San Pedro, y al sur hasta la provincia de San Luis, Pedanía El Sauce. En marzo de 1858 el presidente de la Municipal Departamental de San Javier, don Manuel Torres, propuso para esta última una nueva denominación. El gobierno le dio curso y la designó Pedanía Dolores o Villa de Dolores, prevaleciendo el primer nombre.

- Carta Orgánica: En marzo de 1858 las autoridades de la municipalidad departamental redactaron la Carta Orgánica o Reglamento de la Corporación Municipal, en base al instrumento legal promulgado por el gobierno. Integrada por 42 artículos fue aprobada en agosto del mismo año.

- Departamento San Alberto: El 4 de diciembre de 1858 el gobierno cordobés que presidía Mariano Fraguero, de común acuerdo con el obispado, dividió el primitivo Departamento San Javier - creado en 1783- en dos secciones político-administrativas: Departamento San Javier, al sur del Río de los Sauces, y al norte Departamento San Alberto. El nombre honra a quien fuera obispo de Córdoba y propulsor de la educación popular, especialmente de la mujer, Monseñor José Antonio de San Alberto.

- Pedanía Las Rosas: El paraje de Las Rosas y aledaños formaban parte de la Pedanía San Javier. Por sugerencia de Don Manuel Torres, cuando el gobierno creó el Departamento San Alberto (diciembre 1858) dividió en dos la Pedanía San Javier (art. 4): Pedanía San Javier y Pedanía Las Rosas.

- Parroquia de San Alberto: Mediante auto emitido el 24 de diciembre de 1858 el Vicario Capitular del obispo de Córdoba, Eduardo Ramírez de Arellano, dividió el Curato o Parroquia de San Javier, dando origen a la Parroquia de San Alberto. Las dos jurisdicciones eclesiásticas mantuvieron los límites geográficos de sus respectivos departamentos. La sede de la nueva parroquia se fijó en San Pedro.

María Calvo Aguado, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María Matar, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Dante Rossi.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1978/L/08 TEXTO DEFINITIVO LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la conmemoración de los 150 años de la llegada de la Imagen de la Virgen de los Dolores a la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, cuyos actos celebratorios y homenaje se

desarrollarán en la “Perla del Oeste” el día 8 de diciembre del 2008.

Expte. 1980/L/08

Córdoba, 2 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S. / D.**

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador del Frente Cívico y Social, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la sesión correspondiente al día de la fecha, del proyecto de declaración 1980/L/08.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Raúl Ernesto Jiménez
Legislador provincial

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1980/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

De Interés Legislativo el libro “Evaluación Nutricional de Ancianos. Conceptos, métodos y técnicas”, escrito por la Magíster Lic. Raquel Susana Acosta.

Raúl Jiménez.

FUNDAMENTOS

Ante la tendencia mundial de aumento en la esperanza de vida de la población, se torna necesario adoptar medidas preventivas para lograr “dar vida a los años y no solo años a la vida”, tal como es planteado en el prólogo del libro que presentamos.

El proceso del envejecimiento está condicionado por la interacción de factores genéticos y ambientales y una de sus características es la progresiva pérdida de masa corporal magra (músculos) y cambios en la mayor parte de los sistemas. Por lo tanto, resulta esencial lograr y mantener un buen estado nutricional para garantizar la salud y mantenimiento adecuado de las funciones de los ancianos.

La valoración del estado nutricional constituye un aspecto clave en la atención de la población anciana.

La mejor forma de realizar una evaluación es mediante la combinación de diversos métodos, entre los cuales se encuentran los Estudios Antropométricos. Sin embargo disponer de bibliografía de uso práctico, que al mismo tiempo presente una actualizada y coherente fun-

damentación teórica, no resulta una tarea sencilla.

Por lo expuesto pensamos que este trabajo constituirá un excelente trabajo para todos los profesionales y técnicos que trabajan en el área gerontogeriatrica, como también para estudiantes y graduados en Nutrición.

Raúl Jiménez.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1980/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Evaluación Nutricional de Ancianos. Conceptos, métodos y técnicas”, escrito por la Magíster Lic. Raquel Susana Acosta.

Expte. 1981/L/08

Córdoba, 2 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S. / D.**

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 1981/L/08, por motivos que oportunamente expondremos en el recinto.

Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.

Atentamente.

Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1981/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por haber obtenido, el señor Facundo Chapur, joven de 14 años, oriundo de Córdoba Capital, se coronó campeón del Mundo en la Copa “Rotax” de Karting, evento que se desarrolló en Lecce, Italia.

Rodrigo Serna.

FUNDAMENTOS

El piloto cordobés participó desde el Miércoles al Domingo (del 27 al 30 de Noviembre de 2008), en el mencionado evento donde participaron 102 pilotos de 50 países; donde fueron eliminándose sucesivamente, hasta llegar a la final donde participaron 30 pilotos, siendo ganador de este gran premio ante sala y vidriera de categorías mayores, tales como Fórmula 3 Europea, y Fórmula 1 Internacional.

En próximas semanas está pronto también a coronarse campeón Argentino, en la última competencia que se desarrollará en Buenos Aires, representando a la Provincia de Córdoba.

Por ello solicito a los Señores Legisladores, tengan a bien adherir esta declaración a éste joven, ejemplo en esta disciplina deportiva, con un futuro promisorio, dejando también representado a los cordobeses tanto en Argentina como en el mundo.

Rodrigo Serna.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1981/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito y felicitación al piloto cordobés Fernando Chapur, quien con sólo 14 años se coronó Campeón del Mundo en la Copa "Rotax" de Karting, en el evento que se desarrolló en Lecce, Italia, el pasado fin de semana.

Expte. 1982/L/08

Córdoba, 2 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S. / D.**

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito a usted el tratamiento sobre tablas en la 44ª sesión legislativa, a celebrarse el próximo día miércoles 3 del corriente, del proyecto de resolución que adhiere a los actos conmemorativos del centésimo vigésimo aniversario de la creación de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba "Profesor Doctor Juan Martín Allende".

Sin otro particular, lo saludo con la estima de siempre.

Norberto Luis Podversich
Legislador provincial

PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 1982/L/08

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:**

Artículo 1º.-ADHERIR a los actos conmemorativos del Centésimo Vigésimo Aniversario de la creación de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba "Prof. Dr. Juan Martín Allende" que se conmemoran el próximo día viernes 5 de diciembre.

Artículo 2º.-OTORGAR Diploma en reconocimiento por sus 120 años al servicio de la investigación en salud.

Artículo 3º.-INCLUIR la entrega del reconocimiento dentro de los Actos Legislativos programados en cumplimiento del Decreto N° 235/08 del Presidente de la Legislatura Provincial, instituyendo la Distinción "Prof. Dr. Ramón Carrillo".

Norberto Podversich, Francisco Fortuna, Daniel Passerini.

FUNDAMENTOS

Creemos fundadamente oportuno que con motivo de la entrega de la "Distinción Prof. Dr. Ramón Carrillo" a la Excelencia en Salud del año 2008, adhiramos, consecuentemente, al 120 Aniversario de la creación de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

En tal sentido, y en consonancia con el espíritu del Decreto N° 235/08 del Presidente de la Legislatura Provincial pretendemos, mediante un Diploma Conmemorativo de tal acontecimiento, dejar formal constancia de la adhesión de los representantes del pueblo a tan significativa fecha para la excelencia de la salud de los cordobeses.

Por lo expresado y los fundamentos que se explicitarán con motivo del tratamiento del presente proyecto es que solicito su aprobación por esta Asamblea Legislativa.

Norberto Podversich, Francisco Fortuna, Daniel Passerini.

**PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 1982/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:**

Artículo 1º.- OTORGAR a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba "Prof. Dr. Juan Martín Allende" diploma en reconocimiento por sus 120 años al servicio de la investigación en salud.

Artículo 2º.- INCLUIR la entrega del reconocimiento dentro de los Actos Legislativos programados en cumplimiento del Decreto N° 235/08 del Presidente de la

Legislatura Provincial, instituyendo la Distinción “Prof. Dr. Ramón Carrillo”.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.

Expte. 1983/L/08

Córdoba, 2 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S. / D.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 44ª sesión ordinaria del 130 período legislativo, a llevarse a cabo el día 3 de diciembre de 2008, del proyecto de declaración 1983/L/08, con relación a la celebración de la entrega de los “Premios Contacto – Segunda Edición”, de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje.

Sin otro particular y agraciándole la atención brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmente.

José Omar Monier
Legislador provincial

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1983/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a la entrega de los Premios “Contacto+ 2º Edición”, que organizada por la Productora de Eventos Gráficos, Radiales y Televisivos Cruz del Eje Producciones tendrá lugar en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba el día viernes 5 de diciembre de 2008.

José Monier.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Cruz del Eje la Productora de Eventos Gráficos, Radiales y Televisivos Cruz del Eje Producciones Publica La Revista “Contacto+”, en donde se refleja la actividad de la zona en todos los sectores y áreas.

En cada Aniversario se ha dispuesto la entrega de Premios y Menciones Especiales que tienen como objetivo valorizar a las personas que se destacan en su actividad, tratando de esta manera de incentivar a jóvenes y adultos a mejorar la calidad de vida siendo ejemplo para las demás personas .

La entrega de los Premios se concreta en un lugar Céntrico y con entrada libre y gratuita donde también participan artistas locales en sus diversas expresiones.

Esta Legislatura participa del JÚBILLO que tan importante celebración representa para la Comunidad de Cruz del Eje.

Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.

José Monier.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1983/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a la entrega de los Premios “Contacto+ 2ª Edición” que, organizada por la Productora de Eventos Gráficos, Radiales y Televisivos Cruz del Eje Producciones, se desarrollará el día 5 de diciembre de 2008 en la mencionada ciudad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.

Expte. 1987/L/08

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S. / D**

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 1987/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.

Realizo este pedido en virtud de la importancia de la fecha a la cual adhiere el proyecto de declaración referido.

Sin otro particular, en la seguridad de que los señores legisladores sabrán interpretar debidamente esta solicitud, saludo a usted muy atentamente.

Silvia Graciela Rivero
Legisladora provincial

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1987/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y reconocimiento al “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se conme-

mora el 3 de diciembre y fuese instituido en nuestro país por la Ley N° 25.346 del año 2000, como correlato a lo proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas del año 1982, con el propósito de divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad, fortalecer las acciones tendientes a establecer principios de igualdad de oportunidades y fomentar conductas responsables y solidarias, para recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro de los derechos universales para todas las personas con discapacidad.

Bloque de la Concertación Plural.

FUNDAMENTOS

Son miles las personas que padecen alguna discapacidad ya sea física, psíquica, o sensorial, en nuestro país.

También son numerosos los derechos que se les ha ido reconociendo a través del tiempo; reconocimientos éstos que no alcanzan a esos miles de discapacitados a la hora de la igualdad de derechos, derechos de igualdad de oportunidades y de facilidad de integración en la sociedad para un mejor desarrollo.

La celebración anual, el 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.

Se propone asimismo, promover la toma de conciencia sobre las ganancias que se derivarían de la integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Por ello es que consideramos necesaria la adhesión de este cuerpo legislativo a esta importante fecha, no como mera proclama sino en el compromiso de controlar la plena vigencia de los derechos universales de las personas con discapacidad, con un Estado que garantice el acceso a la educación especial como herramienta estratégica de inclusión, y ofrezca alternativas y medios para la integración en la vida social, en pos de la construcción de una sociedad solidaria y respetuosa de la diversidad.

Por estas razones y las que se expondrán al momento de su tratamiento es que solicitamos a nuestros pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.

Bloque de la Concertación Plural.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que al momento de tratar los proyectos que tienen que ver con las leyes de la Reforma Política Electoral, se proceda -tal como me he comprometido

con los presidentes de los bloques que han permanecido en el recinto- a pasar a un cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el señor legislador Passerini.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

- Es la hora 18 y 13.

- 14 -

ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

- Siendo la hora 20 y 08:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión

Por Secretaría se dará lectura a los despachos que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXIII DESPACHOS DE COMISIÓN

Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía, Presupuesto y Hacienda

**1)1860/L/08 – 11308 – 11647/L/07 y 1733/L/08
Compatibilizados**

Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba – Frente para la Victoria, el Bloque Concertación Plural y por el Bloque Recrear para el Crecimiento, por los Legisladores MC Fonseca y Valinotto y la Legisladora Olivero, por el Legislador Rossi y por el Legislador Birri, respectivamente, por los que establecen Régimen Jurídico de los Partidos Políticos y deroga la Ley N° 6875 –Ley Orgánica de los Partidos Políticos–.

2)1861/L/08 – 05661 – 06254/L/04 – 11646/L/07 – 0404 – 0407 – 0911 – 1674 – 1700 – 1701 – 1703 – 1763 – 1814 – 1872 – 1880/L/08

Compatibilizados

Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba – Frente para la Victoria, el Bloque Concertación Plural y por el Bloque Recrear para el Crecimiento, por los Legisladores MC

Guzmán, Valinotto, Fernández y el Legislador Maiocco, los Legisladores MC Gastaldi y Soleri, el Legislador Rossi, los Legisladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado, y Gudiño, el Legislador Cugat, la Legisladora Genesio de Stabio, los Legisladores Varas, Ortiz Pellegrini y Birri, el Legislador Brügge, el Legislador Faustinelli, y el Legislador Maiocco, respectivamente, por los que establecen el Código Electoral Provincial y deroga la Ley N° 8767 – Código Electoral–.

Sr. Presidente (Campana).– Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).– (Leyendo):

Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

1897/L/08

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini y Fortuna, por el que modifica los artículos 143 y 218 e incorpora el Capítulo VII al Título VIII de la Ley N° 8102, Orgánica Municipal, referidos a renovación de autoridades, elecciones, campañas electorales, publicidad oficial y actos inaugurales de obras.

Sr. Presidente (Campana).– Queda reservado en Secretaría.

- 15 -

CÓDIGO ELECTORAL PROVINCIAL
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
en comisión

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.– Señor presidente: en virtud del tratamiento de los proyectos de reforma política en la Provincia de Córdoba; que obran todos los despachos de comisión para cada uno de los legisladores y de los bloques; que está la voluntad manifiesta de nuestro bloque -y creo de la mayoría de los bloques legislativos- de dar un debate profundo, que realmente refuerce los consensos que hemos conseguido a lo largo de quince semanas de trabajo en la Comisión de la Reforma Política; porque queremos suprimir definitivamente las sumatorias en la Provincia de Córdoba; porque en-

tendemos que debemos modernizar el sistema electoral de nuestra Provincia marchando hacia a un sistema de boleta única, hacia un sistema que comience a discutir la implementación del voto electrónico; porque entendemos que la Provincia de Córdoba debe y merece tener su propio software electoral; porque entendemos que por pedido de la sociedad, por decisión de este Gobierno, y porque también hay voluntad mayoritaria de esta Legislatura para discutir acerca de un financiamiento serio de la política, de las campañas políticas; y, en virtud de que todos estos temas que estoy mencionando tienen un consenso total de todos los bloques legislativos -más allá del oportunismo mediático que a veces se utiliza en este recinto, porque aún sabiendo que están de acuerdo lo van a rechazar-, que la voluntad de este Cuerpo es debatir dando la discusión que nos merecemos, y porque la oposición ha pedido unas horas para leer el despacho, en nombre de mi bloque propongo que se pase a un cuarto intermedio hasta mañana a las 15 horas.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el legislador Asbert.

Sr. Asbert.– Señor presidente: por las razones que el legislador preopinante y presidente de la bancada mayoritaria ha esgrimido y, fundamentalmente, a los efectos de facilitar que la sociedad de Córdoba pueda entender acabadamente lo que está sucediendo en este recinto, no queremos perder la oportunidad de manifestar que este tema debe ser tratado en una sesión normal; porque tampoco media razón alguna para obrar con una premura que exija prolongar estas horas; y anticipando que hemos advertido algunas modificaciones en lo que ayer estábamos contestes con el despacho que iba a hacer esa comisión especial, desde el bloque Concertación Plural solicitamos para este proyecto una preferencia de siete días, o sea, que su tratamiento sea postergado hasta la próxima sesión ordinaria.

Nada más.

Sr. Presidente (Campana).– No voy a dar la palabra porque hay una moción de orden.

En consideración la moción del legislador Passerini, de pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 15 horas para tratar el proyecto de Reforma Política.

Los que estén por la afirmativa sírvanse

expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Se pasa a un cuarto intermedio hasta las 15 horas del día de mañana.

– Es la hora 20 y 15.

– Siendo la hora 18 y 17, del día 4 de diciembre de 2008:

Sr. Presidente (Campana).- Habiendo quórum para sesionar, se da por finalizado el cuarto intermedio y continúa la sesión.

Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley 1861/L/08, Código Electoral Provincial, compatibilizado con los proyectos 5661, 6254/L/04, 11646/L/07, 404, 407, 911, 1674, 1700, 1701, 1703, 1763, 1814, 1872 y 1880/L/08, que cuentan con despacho de comisión.

Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.

Sr. Faustinelli.- Señor presidente: en razón de todo lo acontecido ayer, tomando en cuenta la desprolijidad manifestada por parte del bloque de Unión por Córdoba al no girar oportunamente los despachos a los bloques de la oposición, nos parece muy atinado demostrar la voluntad que tenemos hoy todos los legisladores presentes en este recinto.

No es nuevo que queramos debatir la reforma política, pero quien plantee que esto se debe debatir hoy porque el proyecto fue presentado ayer no conoce la realidad que hemos vivido durante todos estos meses, luego de que el Gobernador Schiaretti planteó, en este mismo recinto, después de lo que ocurrió el 2 de septiembre, que Córdoba necesita una verdadera reforma política.

Por ser éste un hecho trascendental e importante para toda la sociedad cordobesa –más allá de que el radicalismo sostiene enfáticamente que para alcanzar una reforma política también hay que hablar en serio de una reforma constitucional–, queremos ver la posibilidad cierta de extender la prórroga para el tratamiento de este tema –tal como usted, señor presidente, lo planteó ayer– hasta el día martes. El cuarto intermedio votado por ustedes el día de ayer fue un hecho que debemos valorar, ante la actitud que tuvimos los bloques de la oposición, pero sería bueno demostrarle a todos los cordobeses que queremos deba-

tir en serio el proyecto. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo; para ello, nos parecería oportuno que votemos para que este cuarto intermedio se prorrogue hasta el día martes de la próxima semana, no digo hasta el miércoles porque tenemos una sesión muy importante en la que vamos a debatir el Presupuesto, en segunda lectura.

Lo quiero dejar planteado como una moción del bloque del radicalismo.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Faustinelli de prorrogar el cuarto intermedio hasta el martes de la semana que viene.

Los que estén por afirmativa sirvanse expresarlo.

– Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.

Por Secretaría se dará lectura a la moción de tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.

**Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana**
S. / D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1861/L/08, iniciado por los bloques de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, Concertación Plural y Recrear para el Crecimiento, compatibilizado con los proyectos de ley referidos al mismo tema, cuyos números serán leídos por Secretaría, por el que establece el Código Electoral Provincial y deroga la Ley Nº 8767, Código Electoral.

Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización; de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes; y de Economía, Presupuesto y Hacienda, y por los fundamentos que brindará el legislador miembro informante, se considera oportuno el tratamiento de dichos expedientes en la presente sesión ordinaria.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En considera-

ción la moción de tratamiento sobre tablas leída por Secretaría.

Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Antes de comenzar el tratamiento, habiendo acordado algunas modificaciones al despacho que obra en poder de todos los legisladores, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión, a fin de que esas modificaciones, propuestas por los legisladores de los distintos bloques, sean tenidas en cuenta para la redacción final del despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.

Sr. Fortuna.- Señor presidente, señores legisladores, nos hemos reunido en este recinto a fin de poner en consideración uno de los proyectos de ley más significativos para esta querida Provincia de Córdoba.

Lo primero que deseo manifestar es el agradecimiento de nuestro bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria por el compromiso, el esfuerzo y la dedicación puesta por este Poder Legislativo a lo largo del año que estamos culminando, y que comenzáramos el 10 de diciembre del año 2007.

Deseo agradecer, sinceramente, porque lo conozco, el compromiso de los señores legisladores y del personal del Poder Legislativo que permanentemente han venido auxiliando la tarea que hemos desarrollado. Quiero que mis primeras palabras sean también para dejar perfectamente en claro, en el ámbito de este Poder Legislativo, la voluntad política y la decisión política del Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, de impulsar una reforma política que satisficiera las necesidades y demandas de una democracia joven, como la cordobesa, que periódicamente necesita ir remozando sus instituciones.

Debo expresar, con todas las letras, que esa voluntad política siempre estuvo fundada en gestos que apuntaron a tratar de reafirmar la ne-

cesidad de la convivencia política en nuestra Provincia, y de defender las instituciones del Estado de Derecho. Por eso, nuestro Gobernador impulsó esta reforma política fijando como primera etapa la conformación de una comisión, convocada a tal fin, con personalidades reconocidas de nuestro medio y del nacional que elaboraron un diagnóstico y una propuesta ponderados por todos. Aunque debo remarcar que, como siempre ocurre con las propuestas relacionadas con la política, algunas veces cuenta con acuerdo y otras, por supuesto, generan ciertas disidencias.

En definitiva, por el trabajo puesto de manifiesto por esta comisión, por su calidad técnica, su envergadura intelectual; por la voluntad de consultar a todos los sectores de la ciudadanía, de contactarse con todas las instituciones vinculadas a la vida política e institucional de esta Provincia de Córdoba; por la libertad con que se expresaron acerca de sus diagnósticos y de los resultados que posteriormente formularon; por la independencia de criterios que mantuvieron durante todo su funcionamiento; y por el compromiso que pusieron de manifiesto al asumir una tarea que, evidentemente, demuestra la vocación ciudadana y de servicio de cada uno de sus integrantes, vaya nuestro más sincero agradecimiento por la tarea realizada, la buena predisposición y la tolerancia que tuvieron para soportar, a veces, algunas cuestiones totalmente inmerecidas.

Conjuntamente con la existencia de dicha comisión, este Poder Legislativo, desde que se dieron los primeros pasos, estuvo atento y comprometido en la tarea de ir sintonizando esta necesidad de producir leyes capaces de abordar de manera eficiente la solución requerida por todos.

Este año ha sido difícil, no sólo para los cordobeses sino para todos los argentinos y, obviamente, esta Casa, este Poder Legislativo se hizo eco de las situaciones que ocurrieron en el país y en la Provincia, reflejándose en su funcionamiento, en las manifestaciones que hacen los distintos legisladores, porque lógicamente es la Casa de las Leyes, el Parlamento, el lugar donde se debaten permanentemente las situaciones sociales, políticas y económicas que viven nuestros coprovincianos.

A pesar de que estuvimos en una absoluta sintonía atendiendo estas situaciones que ocurríe-

ron en la Provincia y el país, atendiendo permanentemente necesidades y enfrentando dificultades en el transcurso de estos meses, tengo perfectamente en claro, como integrante de este bloque parlamentario y presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política, la responsabilidad y compromiso de los que ninguno de nosotros ha estado ajeno y que asumimos para que a fin de este año pudiésemos contar con los instrumentos legales que los cordobeses están esperando.

Como presidente de esa Comisión Especial vengo a rendir cuentas. He tenido contacto permanente con los señores presidentes de bloque, de comisiones y legisladores, y sé que siempre ha estado en la responsabilidad y en la preocupación de cada uno tratar de concretar, al final de este período legislativo, las herramientas -con los consensos y consensos, los acuerdos y desacuerdos que fuese posible construir- para poder abordar esta problemática en Córdoba y, en definitiva, resolver las expectativas que se venían y que se vienen generando en ese sentido.

Debo decir que ni bien concluida su acción, la Comisión de Expertos -que pusimos en funcionamiento por una resolución votada por unanimidad por este Cuerpo- presentó su diagnóstico.

Con humildad debo decir que pudimos haber tenido aciertos y desaciertos, haber transitado algunos caminos juntos y otros separados, pero siempre, en definitiva, existió la mejor buena voluntad. Todas las semanas subsiguientes al 25 de junio de 2008, fecha en que se conformó esa Comisión, tuvo tarea, se reunió y trató todos los temas relacionados, precisamente, con un proyecto de reforma política importante para esta Provincia de Córdoba.

En ese aspecto, la Comisión llevó adelante reuniones diversas, adonde, luego de ponernos de acuerdo en el temario, convocamos a personas, entidades y representantes de los Gobiernos locales, además de miembros de la Comisión de Expertos y contactos con autoridades de las Universidades Católica, Nacional y Tecnológica de Córdoba, que nos fueron indicando el camino para tratar de construir los mejores consensos.

Siempre tuvimos en claro que en un tema tan particular, sensible y abierto al debate político como es una reforma política tan importante y profunda en la Provincia de Córdoba, iba a haber coincidencias y disidencias, acuerdos y desacuerdos.

Pero creo también que existió la más absoluta libertad para que los señores legisladores y bloques parlamentarios pudieran presentar proyectos de ley de todo tipo que, a su vez, avalaran los criterios políticos, ideológicos y doctrinarios que cada uno de ellos representaban.

Los presidentes de las comisiones abocadas a la reforma política, los presidentes de las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Institucionales y de la Región Centro, además de todos los presidentes de los bloques, participaron activamente, haciendo aportes valiosos para que, en definitiva, pudiéramos estar construyendo los consensos posibles en esta Legislatura.

En ese sentido, también debo decir que en el ámbito de lo que significa el trabajo de esa comisión, se realizó finalmente una Audiencia Pública, a la que felizmente concurrieron 54 entidades y personas que fijaron posición, debiendo decir con satisfacción que en la historia de las audiencias públicas que se realizaron en esta Unicameral, esta fue la que logró concitar la mayor cantidad de ponencias.

En definitiva, si solamente esa Audiencia, en la que participaron intendentes, representantes del Poder Judicial, de universidades, de los partidos políticos -en total 27 representantes de los partidos de nuestra Provincia de Córdoba-, profesores y académicos universitarios, representantes de los gremios, de los colegios profesionales, de las asociaciones profesionales, de las asociaciones civiles, y también ciudadanos que decidieron ir a opinar individualmente en el ámbito de la Audiencia Pública.

Debo destacar que el trabajo en la Audiencia Pública fue importantísimo y fue recogido ampliamente por las comisiones del Poder Legislativo que, una vez concluida la Audiencia, tenían la responsabilidad de sintetizar las posiciones sobre los 38 proyectos de ley que se pusieron en consideración. Estos proyectos de ley, más las posiciones de las entidades y de las personas que, sin haber tenido que ver en su elaboración, fijaron posición respecto de algunos de ellos y trajeron algunas ideas que después fueron, lógicamente, también tenidas en cuenta y recogidas por nuestra comisión. En ese sentido, creo que el trabajo ha sido fructífero.

Hoy estamos poniendo en consideración,

con la Cámara en comisión, los despachos compatibilizados del bloque de la mayoría, de Concertación Plural y de Recrear, y podemos decir que se les introdujeron más de 200 modificaciones desde que tomaron estado parlamentario al ser presentados por los bloques mencionados el día miércoles 12 de noviembre del año en curso.

Este tema no es menor porque entiendo, señor presidente, que los proyectos en consideración fueron impulsados por el Poder Legislativo, y cuando digo que son compatibilizados debo remarcar que, por ejemplo, el proyecto referido al Código Electoral fue compatibilizado con 14 proyectos de los bloques parlamentarios que componen el Poder Legislativo o que habían tomado estado parlamentario la semana previa a la Audiencia Pública, como también el proyecto que tiene que ver con el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos ha sido compatibilizado con otros proyectos de ley presentados por distintos legisladores o por bloques parlamentarios.

Ese no es un tema para dejar pasar, y se debe destacar la actitud de los bloques que presentaron los proyectos de ley como también la de otros bloques o de legisladores que, sin haber sido parte de lo que significó la presentación posterior, accedieron a compatibilizar proyectos, fijando posiciones claras en la elaboración de toda la legislación e incorporando matices propios que tienen que ver con la voluntad de poner en consideración los proyectos de ley que resumieron, en sí mismos, los mejores consensos.

Siempre que se lleva adelante una tarea se comenten aciertos y errores, pero en este Poder Legislativo no pueden quedar dudas de la cantidad de horas, trabajo y compromiso de los legisladores y de los bloques parlamentarios que han tenido voluntad para tratar de desarrollar las mejores propuestas, más allá de las disidencias y de otras cuestiones que son de público conocimiento.

Quiero poner de manifiesto, una vez más, la voluntad de trabajar de la mejor manera posible de parte de los bloques, de los señores legisladores, de los señores presidentes de las comisiones afectadas, de aquellos legisladores que han colaborado en el ámbito del desarrollo de sus actividades; el trabajo realizado por las Secretarías de este Poder Legislativo, los señores secretarios, prosecretarios y el personal técnico.

Estoy absolutamente convencido que, más allá de los fuegos de artificios, de las posiciones diametralmente opuestas que se expresan, de la falta de voluntad demostrada por algunos de no querer profundizar el debate, este Poder Legislativo, sancionadas estas leyes, va a haber cumplido con un cometido, con un deber, con una responsabilidad: dotar a la Provincia de Córdoba con leyes que van a generar instituciones que son inéditas en la historia política y democrática de este país y que van a contribuir a consolidar nuestra democracia y a fortalecer el Estado de Derecho. De esa manera, los ciudadanos de esta Provincia de Córdoba disponen de herramientas más eficientes que habilitan, de una forma más directa, la participación ciudadana para que la voz del pueblo -que se expresa periódicamente a través de las urnas- pueda ser escuchada y verdaderamente soberana, para conseguir y construir los consensos que, después, posibilitan el acceso de las autoridades provinciales y municipales, como también las del Estado.

En tal sentido, nuestra principal preocupación ha sido abordar los problemas que consideramos más importantes, buscando los instrumentos que permitieran garantizar una mayor eficiencia y transparencia. Por eso, cuando incorporamos la boleta única, cuando planteamos la supresión de las sumatorias, cuando proponemos fortalecer el Poder Judicial y la Justicia Electoral en Córdoba, cuando legislamos acerca de las campañas electorales y de su financiamiento público y privado, cuando apuntamos a fortalecer el sistema de los partidos políticos en nuestra Provincia y cuando comenzamos a avanzar en algunas soluciones para el régimen municipal, estamos convencidos de que en el día de la fecha vamos a hacerle un aporte valiosísimo, y sin ningún tipo de mezquindad, al futuro de la vida institucional de nuestra Provincia de Córdoba.

No nos debemos dejar confundir, porque existen los agoreros y quienes creen que son dueños de la verdad y que su verdad es la única. Por el contrario, con nuestros defectos y virtudes, hemos preferido asumir una actitud más simple, más sencilla, más comprometida y más humana.

Hoy, señor presidente, señores legisladores, estamos cumpliendo con un compromiso ineludible; no debería haber habido ningún motivo

para que alguien se posicionara en contra del debate político en la Provincia de Córdoba; no puede haber ningún argumento que les impida, a aquellos que tienen toda la libertad para expresarse a favor o en contra, venir a este Parlamento para discutir sus ideas con altura, a fijar sus criterios, a respetar lo que pensamos y a hacer respetar lo que ellos puedan pensar.

Creo, en definitiva, que con la mezquindad, el autoritarismo y la falta de compromiso de algunos nada se puede construir; todo se construye en la medida en que hay vocación y compromiso, pero uno no puede —o no debe— relacionarse con los defectos de sus semejantes; vale mucho más relacionarse con las virtudes, porque en ese caso uno tiene una mirada diferente y una actitud de tolerancia, de compromiso y de respeto por el trabajo diferente.

Para terminar, señor presidente, señores legisladores, quiero reiterar el agradecimiento sincero de todos los integrantes de nuestro bloque a todos los legisladores de este Poder Legislativo, porque sabemos que han puesto lo mejor de sí; asimismo, para aquellos legisladores que hoy no han querido acompañarnos, vaya también, por supuesto, nuestro reconocimiento por aquellas cosas que a lo mejor quisieron hacer y no pudieron. Pero, les recuerdo que este Poder Legislativo siempre tiene abierto el debate, sus puertas abiertas y la mejor predisposición para escuchar y aprender, tratando siempre de hacer lo mejor en la tarea en la que estamos empeñados.

No quiero terminar mis palabras sin dejar de decir, a nuestros comprovincianos, que aquí estamos los legisladores de Córdoba, con nuestras virtudes y nuestros defectos; estamos aquí los legisladores que tenemos el compromiso de cumplir con nuestras responsabilidades; estamos los que siempre trabajamos, con la convicción de que las leyes que vamos a sancionar en el día de la fecha van a significar un avance institucional importante para nuestra querida Provincia de Córdoba.

Desde nuestro bloque, que tiene el compromiso de impulsar las políticas y las decisiones de nuestro Gobierno y de acompañar a nuestro Gobernador en su gestión, estamos contribuyendo, y lo vamos a seguir haciendo, y en definitiva vamos a sancionar leyes que van a tener un espacio en la historia de esta Provincia y de este país.

Muchísimas gracias, señor presidente y

señores legisladores. (Aplausos).

— El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).— Perdón, señor legislador, tenía entendido que en la Comisión de Labor Parlamentaria habían acordado que iban a hablar dos legisladores y después todos los bloques. Evidentemente me han informado mal.

— El legislador Faustinelli habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).— Y muchos de ustedes no la cumplen.

Tiene la palabra el legislador Rossi.

Sr. Rossi.— Señor presidente: vengo a expresar la posición del bloque de la Unión Cívica Radical, adelantando el rechazo de mi bancada a estos proyectos de reforma política.

Antes, deseo hacer una referencia concreta a algunas cosas que escuché, hace unos minutos, en una conferencia de prensa, por parte de uno de los bloques que hoy no está presente en el recinto. El presidente del mencionado bloque decía que había “simpatías sospechosas” de parte de algunos legisladores o de algunos bloques parlamentarios para venir a debatir este tema. Deseo manifestar, claramente, que de ninguna manera vamos a permitir que quienes se creen dueños absolutos de la verdad sospechen de la honorabilidad de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical.

Hay quienes creen que todos tenemos que correr atrás de las estrategias electorales que ellos plantean y cuando uno no coincide con su posición piensan que le estamos haciendo el juego a otros sectores; asimismo, creen ver debajo del agua cuestiones de “corruptela” y que la política se maneja de la forma que ellos creen conveniente.

Este bloque de la Unión Cívica Radical, frente al mamarracho que se produjo en la sesión de ayer, se retiró porque le pareció un bochorno discutir un proyecto que estaba siendo redactado en el momento que Unión por Córdoba intentó avanzar en el debate, y cuyo texto no conocíamos. De ninguna manera rehuimos el debate ni vamos a consolidar nuestra ausencia frente a un tema tan trascendente; de ninguna manera nos vamos a quedar sin decir cuál es nuestra posición política y jurídica frente a estos temas.

Lo que pasa es que aquel bloque que habló de “simpatía sospechosa” tiene la metodología “chanta” del trabajo, porque si uno analiza cuál fue la tarea concreta de ese bloque, respecto a la re-

forma política, se da cuenta que, salvo la honrosa excepción del legislador Birri, no hubo proyectos presentados. La Unión Cívica Radical no sólo tiene dos proyectos integrales de reforma al régimen de partidos políticos, de financiamiento, de reforma del Código Electoral, sino que tiene muchísimas más iniciativas planteando cuestiones respecto a la publicidad oficial, a la fijación de la fecha de elecciones determinada en un calendario concreto, a cuestiones de publicidad y de acortamiento de las campañas.

Hemos trabajado arduamente, pero parece que si mienten y difaman aparecemos como sospechosos. Sospechan del bloque de la Unión Cívica Radical; tal vez los otros bloques parlamentarios presentes también hayan acordado alguna cosa para venir a debatir. La democracia es diálogo y debate y venimos a decir claramente por qué nos oponemos a estos proyectos de reforma política pero, de ninguna manera le vamos a hacer el “caldo gordo” a algunos antidemocráticos que piensan que la verdad absoluta reside en lo que ellos dicen.

Para avanzar concretamente en el tema –y pido perdón por la referencia que hice anteriormente-, quiero decir que el tema de la reforma política seguramente arrancó en la mente del partido gobernante, Unión por Córdoba, después de lo que sucedió el 2 de septiembre.

Escuché al legislador que me precedió en el uso de la palabra alabar la enorme decisión o la vocación que tuvo el Gobernador Schiaretti de sancionar la Reforma Política. Lo que distingue a los políticos mediocres de los grandes políticos es que estos son estadistas, se anticipan a las cosas que están por suceder para legislar sobre ellas o para centralizar el debate antes de que eso suceda, y el Gobernador Schiaretti, como seguramente también el ex Gobernador De la Sota, no son precisamente estadistas, porque permitieron que explotara lo del 2 de septiembre, llevando a la Provincia de Córdoba a una situación complicadísima para, recién allí, darse cuenta de que tenían que avanzar en el tema de la reforma política.

Pasaron casi nueve años sin regulación respecto del financiamiento de los partidos políticos en la Provincia, con la posibilidad de efectuar gastos ilimitados de campaña, con falta de regulación en muchísimas cuestiones. Pero, por supues-

to, cuando explotó el tema el 2 de septiembre, y se dieron los resultados que conocemos, se avanzó y hoy se celebra la decisión del Gobernador. Si no hubiera pasado lo de septiembre seguiríamos exactamente de la misma forma, hasta en temas tan importantes como la sumatoria, que es un grave problema para la democracia –me parece.

Frente al estrépito del 2 de septiembre, avanzamos en el tema de la reforma política y todos los políticos y los partidos de la Provincia nos pusimos a trabajar en estas cuestiones. Así surgió la decisión del Gobernador, que consideramos acertada, de conformar la Comisión Consultiva de Expertos para tratar este tema.

Al principio, y salvadas las diferencias que teníamos respecto de cuál era la jurisdicción que decidía respecto de la reforma, coincidimos con la comisión y debo hacer un reconocimiento por la tarea que ésta desarrolló a lo largo y ancho de la Provincia, hablando con todos los partidos políticos, con las universidades, viajando por el interior para auscultar la opinión de los ciudadanos respecto de este tema.

En ese sentido va mi reconocimiento al doctor Daniel Zovatto, a la doctora Carolina Scotto, al licenciado Rafael Velasco, al doctor Yanzi Ferreira, al doctor Antonio María Hernández, al doctor Jorge Gentile, a la licenciada Claudia Laub y a todos quienes integraron esa comisión y dejaron un texto, un trabajo completo que fue la base, junto con otros proyectos presentados por los legisladores, de la Reforma Política que hoy estamos discutiendo.

Después del trabajo de la Comisión Consultiva, también con buen criterio, la Unión Cívica Radical apoyó, aceptó y se puso a trabajar en la comisión legislativa constituida a ese efecto, trabajando codo a codo en estos temas de la Reforma Política, cada uno con sus ideas, proyectos y reafirmando las cosas en que creía.

Pero debo decir que el antecedente inmediato al bochorno que vivimos ayer se produjo cuando Unión por Córdoba, en un acto que no dudo en calificar de robo intelectual, en vez de seguir trabajando en esa comisión legislativa con cada una de las ideas que se habían aportado, no dudó en utilizarlas para plasmar un proyecto de reforma política de su exclusiva autoría.

¿Por qué hacen esto? ¿Nos debe llamar la

atención que el partido de Gobierno hubiera realizado esto? Seguramente no, porque, al igual que José Manuel De la Sota, el Gobernador Schiaretti busca generar un impacto político que, a veces, no se condice con la realidad. Viven del marketing y de hacerles creer a los cordobeses cosas que, en realidad, no suceden. Creyó que haciendo esto se convertiría en el “padre de la Reforma Política”, pero tiró por la borda los consensos que se estaban logrando en esa comisión legislativa que se había creado, y a partir de allí arrancamos mal.

La Unión Cívica Radical, a pesar de eso, siguió participando de la comisión porque entendía que la Reforma Política tenía muchísima más importancia que la decisión de Unión por Córdoba de echar por la borda el consenso que se había conseguido en esa comisión, haciendo caso omiso a la tarea intelectual que habían llevado adelante partidos políticos, legisladores en particular y bloques parlamentarios.

Seguimos discutiendo y llegamos a lo que sucedió ayer que, realmente, es una lástima. Miraba al doctor Zovatto, sentado, esperando que la Legislatura apruebe una ley fundamental que viene a modificar las formas de votación, de financiamiento de los partidos, de comportamiento cívico respecto a la participación política y, seguramente, se debe haber sentido abochornado como nos hemos sentido la mayoría de los cordobeses.

¿Qué apuro había en discutirlo ayer si el despacho no estaba listo? ¿Qué cambiaba si estas modificaciones se van a aplicar recién en el 2011? ¿Qué hubiera modificado el hecho de tratarlo más adelante, frente a la discusión que se estaba dando en las comisiones y a la imposibilidad de llegar a tiempo con un estudio concienzudo, acertado, para que después no tengamos que ponerle parches a lo que legislativamente se apruebe ahora? ¿Qué costaba que entre todos los bloques nos pusieramos de acuerdo para tratarlo más adelante?

Lo que pasa, claro, es que el Gobernador lo quería vender mediáticamente como su obra y cumplir con lo que dijo: antes de fin de año iba a estar plasmada la Reforma Política. Pero, quedó guardada una sorpresa: se utilizó el apuro para, mediante un ardid, introducir algo que habíamos escuchado en la mañana, casi pensando que se trataba de una broma. Apareció en el despacho el tema de los sticker pegados en la boleta única, y eso echó por la borda todo lo que se había venido

discutiendo hasta ese momento. Nos dimos cuenta de que, mediante el apuro o la rapidez, se intentaba introducir el engaño que echaba por la borda el enorme trabajo realizado.

A ninguno de los miembros de la Comisión Consultiva de Expertos, que conocen mucho del tema —plasmado en este librito “Así no va más”— se les había ocurrido semejante engaño a la sociedad, semejante picardía para desvirtuar, concretamente, uno de los mayores logros que Unión por Córdoba enarbolaba: la boleta única.

La reforma política se debe sancionar por consensos, se tiene que buscar acuerdos; no hay reforma política posible si la sociedad no se compromete en sus logros. Hoy empezamos muy mal, tirando a la basura la búsqueda de acuerdos, dando una mala señal respecto a la calidad legislativa que debemos tener. Les estamos mostrando a los cordobeses que en esta Legislatura vale más el marketing, las picardías, la necesidad de vender una ley concreta, que la búsqueda de consensos.

Frente a estas cosas, la Unión Cívica Radical no se puede quedar callada, por lo que decimos, claramente, que nos oponemos a estos proyectos de pretendida reforma política, además de hacerlo por cuestiones de fondo.

Se intenta vender como un avance estos proyectos, pero Unión por Córdoba no se animó a fijar, concretamente, una fecha en el calendario electoral, porque están especulando que pueden sacar unos votos más si la lista va pegada a la boleta nacional, buscando, de última, algún ardid o alguna posibilidad de mostrar a la sociedad que esa pretendida reforma se iba a aplicar incluso si coincidían las elecciones.

Entiendo, para ir terminando, que sin consenso no hay posibilidad de avanzar en una reforma política; que con un mamarracho jurídico no se puede avanzar en una reforma política; que con ardid, con engaño y con algunos artículos que se le han agregado sin el suficiente estudio, no se puede avanzar en una reforma política; que no se puede desdeñar el consenso ni la búsqueda de acuerdos para que la ley sirva para las próximas generaciones y que, una vez más, la sociedad va a ver absolutamente frustrada su expectativa de que la Provincia de Córdoba tenga una ley de vanguardia.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).— Tiene la palabra el señor legislador Asbert.

Sr. Asbert.- Señor presidente: creo que desde distintas ópticas y abordada desde diferentes ángulos, tanto el legislador opinante por el bloque de la mayoría, como quien me precedió en el uso de la palabra, han expuesto acabadamente la historia de este proyecto de reforma política.

Por ello, vamos a omitir por razones de economía de tiempo, repeticiones al respecto. Sólo nos vamos a referir a algunas cuestiones que o no han sido discutidas o, en su caso, responden a las concepciones políticas, que, desde nuestro bloque, hemos venido sosteniendo desde el inicio del abordaje de esta reforma política.

La primera impresión –que no se mencionó acá y que no podemos dejar de considerar– de prácticamente todo el arco de la oposición –me atrevo a decir– cuando escuchamos al señor Gobernador plantear la intención de llevar a cabo la reforma política, fue de desconfianza acerca de la verdadera intencionalidad que aquellas palabras estaban indicando. Hubo desconfianza.

También hubo desconfianza cuando se designó a la Comisión de Notables, que aparecía como una tentativa de reemplazar a la Legislatura en la elaboración de las leyes.

Después esa desconfianza fue cediendo gradualmente a partir de algunos hechos. En primer lugar –y me hago eco, en este caso en particular, del agradecimiento a quienes integraron aquella Comisión de Expertos que fuera convocada–, las figuras que estaban involucradas en este proyecto y que habían sido designadas e invitadas por el señor Gobernador, imponían respeto y llevaban casi al convencimiento de que su pronunciamiento no iba a ser como un saco a medida de una intención distinta de la expresada en el recinto por el señor Gobernador en su mensaje inicial; estaban involucradas las universidades y personalidades del quehacer político que, evidentemente, escapan a un eventual juego de bastardeo de esas intenciones.

Fue muy difícil inicialmente, aun cuando esa desconfianza fuera cediendo, poder compatibilizar algunas ideas. De arranque era tan abierto el menú de alternativas que la primera tarea que tuvimos en esa comisión fue la de imponer cierta racionalidad. Nos dijimos entonces que lo que debíamos hacer políticamente era tratar de sacar adelante algún proyecto de reforma, aunque sea

electoral, que pudiera entenderse –y nosotros lo entendemos así– simplemente como una parcialidad frente a todo un arco de necesidades políticas e institucionales a las que debemos dar respuesta. En ese momento dijimos: “Trabajemos sobre aquellos proyectos en los que de alguna manera va a ser posible llegar a un acuerdo, y no perdamos nuestro tiempo discutiendo acerca de cuestiones sobre las que –por circunstancias políticas, por diferencias ideológicas o por la oportunidad de tratamiento– no vamos a lograr un acuerdo”.

La primera muestra fue esa racionalidad que indicaba: “Hagamos un trabajo que podamos ver cristalizado en proyectos que respondan a un consenso”. Ahí comenzó el trabajo. Insisto, ninguno de los integrantes de este bloque entiende que esto agota la necesidad de reformar las instituciones políticas de la Provincia. Entendemos que también es necesaria una reforma constitucional pero, primero lo primero, lo demás va después.

Todo proceso político es un desarrollo que va cumpliéndose paso por paso. Aun un movimiento como la toma de la Bastilla, que fue un hecho significativo, un hito en la historia de la humanidad, no fue fruto del capricho de unos ciudadanos libertarios franceses contra la monarquía sino el resultado de un proceso, de situaciones que condujeron a las multitudes de París a reclamar que se liberaran a los presos que estaban en aquella prisión; así se inició la Revolución Francesa.

El hecho del 2 de setiembre tampoco es un hito que aparece como una mancha de aceite que se dispersa sobre el agua cristalina; más allá de ese hecho, este sistema que encorsetaba la voluntad política de los cordobeses debía ser modificado, estaba a punto de estallar desde hacía algún tiempo; fue la escasa diferencia y las acusaciones –que todos conocemos y no vale la pena repetir–, las que le confirieron a ese hecho el carácter de hito memorable. Pero antes, teníamos la sumatoria de los votos y lo que sucedió el 2 de setiembre fue un abuso.

En la inteligencia de trabajar sobre lo que era factible alcanzar en los acuerdos, se comenzó una ardua labor, y en ese sentido me hago eco de las palabras del legislador Fortuna de reconocimiento a los empleados de la Legislatura y a los

propios legisladores que asumimos el compromiso estando acá de lunes a lunes debatiendo y aportando ideas.

Hubo momentos en que las situaciones y el camino no fueron idílicos, no era una luna de miel sino un matrimonio, por momentos con fuertes desavenencias. Pero un primer llamado de atención fue que Unión por Córdoba –tal como dijo el legislador Rossi- apareciera imprevistamente apropiándose de conclusiones y elaboraciones que habían sido del colectivo de la Comisión de Reforma Política, dando comunicados a la prensa respecto de los avances que efectivamente se habían producido. Esto quebraba un pacto de caballeros que en aquella oportunidad, en el recinto de funcionamiento de la Comisión de Reforma, personalmente desde esta banca había sugerido –y que debía ser respetado- de no hablar individualmente, como fuerzas políticas que integraban esa Comisión, cuando se trataba de acuerdos ya alcanzados por ese colectivo.

Un segundo momento muy difícil de supervivencia, en el marco de esta coexistencia, fue el día de ayer. Al respecto, pretendo simplemente mencionar que particularmente desde este bloque nos sentimos traicionados por la aparición de alguna incorporación. Pero todos estos datos son absolutamente menores, todas las sensaciones relativas al orgullo, a la autoestima individual –e incluso a la del propio bloque– deben ser subordinadas a un interés superior, que es aquél por el que estamos aquí: la voluntad de los cordobeses, que nos dicen: “legislen, trabajen y establezcan políticas de Estado y políticas públicas que nos sirvan a todos”.

Y aquí estamos, señor presidente, dando quórum con nuestra presencia en este recinto; estamos aquí también aceptando que este Cuerpo se haya constituido en comisión para introducir algunas modificaciones al presente proyecto, que entendemos son imprescindibles y que vamos a someter a la voluntad del Pleno; estamos aquí porque para eso nos han votado los cordobeses y porque entendemos que el proyecto en discusión es –me animo a decirlo– ampliamente superador de las leyes contenidas en el Código Electoral aún vigente en la Provincia de Córdoba.

Esa dignidad, esa autoestima y ese orgullo los guardamos porque entendemos que estamos aquí para hacer lo que más les conviene a los cordobeses, esto es, la eliminación de las sumato-

rias. Este tema –que merecería un párrafo especial– en nuestro caso, que somos un partido minoritario y accedimos a estas bancas por participar de una sumatoria, nos lleva de alguna manera a obligarnos a asumir la responsabilidad de no utilizar más ese sistema; como partido chico que somos, asumimos ese riesgo y ese compromiso, pero no podemos permitir que los cordobeses entren a un cuarto oscuro –como sucedía hasta ahora– y se encuentren con dos o tres mesas donde están desplegadas decenas de votos con los mismos rostros, llevándolos a la confusión, prestándose a alguna maniobra en ese sentido.

De tal manera, señor presidente, subordinamos hoy nuestro interés como partido pequeño –con nuestras aspiraciones, pero pequeño al fin– y decimos “no” a las sumatorias; dejamos de lado nuestro interés individual, olvidando aquellas cosas que creemos afectaron nuestra vocación en el tratamiento de este proyecto.

Finalmente, señor presidente, antes de analizar algún artículo en particular, ya que voy a solicitar que se elimine algún párrafo del articulado, quisiera saber si la decisión adoptada es la de escuchar las distintas propuestas y luego someterlas a todas –obviamente, una por una– a votación; o vamos a someter a votación cada una de las modificaciones a medida que se propongan?

– Se le responde que es válida la primera opción.

Bien, entonces es la primera opción.

Así como me hice eco de sus palabras respecto de agradecer al personal de la Casa, no queremos dejar de agradecer a nuestros compañeros de trabajo y al equipo que integran los asesores y asistentes de nuestro bloque, que no dudaron en quedarse toda la noche trabajando a los efectos de garantizar que hoy nuestra labor, responda realmente a las necesidades e ideas respecto de qué y cómo debe reflejarse la intención de hacer la reforma política. Por todo ello, muchas gracias, compañeros.

Más allá de eso, quisiera mocionar, en concreto, que sea eliminado del artículo 53, inciso 9), en oportunidad de su votación, el párrafo referido a la posibilidad de la votación mediante un sticker. Creo que lo adecuado sería que por Secretaría Legislativa se lean los artículos. También, en el segundo párrafo del artículo 57, hay una referencia al sticker, cuando hace mención a la aprobación, por parte del Juzgado Electoral, de

ese mecanismo.

Señor presidente, mi intervención ha terminado. Agradezco sus palabras y sus deferencias en ocasión de atendernos en su condición de presidente de la Comisión de Reforma Política.

Sr. Presidente (Fortuna).- Hemos tomado debida nota de la moción del legislador Asbert.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo).-

Artículo 53.- Requisitos. La boleta única de sufragios estará dividida en espacios, franjas o columnas de igual dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas. Los espacios, franjas o columnas contarán: inciso 9) un casillero en blanco, de mayores dimensiones que lo especificado en el inciso anterior, ubicado en el margen superior derecho del espacio, franja o columna de cada una de las agrupaciones políticas intervinientes, para que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia con lista completa de candidatos.

Artículo 57.- Segundo párrafo: no existiendo observaciones o resueltas las formuladas, el Juzgado Electoral aprobará el modelo propuesto y mandará a imprimir la boleta única del sufragio oficializada que será la única válida para la emisión del voto”.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Aubert.

Sr. Asbert.- Señor presidente, entiendo que la lectura que se ha dado por Secretaría es adecuando, de acuerdo a nuestra solicitud, el nuevo articulado y el contenido de la ley, ¿verdad?

Sr. Presidente (Fortuna).- Así va a quedar cuando se ponga en consideración en particular. Se ha leído el tema resuelto.

Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque del ARI-Coalición Cívica, lo primero que queremos expresar es que estamos hoy en la Legislatura de Córdoba para reafirmar un compromiso que tiene nuestra fuerza política, en esta Provincia y a nivel nacional, con la reforma política y la reforma constitucional.

Consideramos que las reformas políticas, electorales y constitucionales son políticas de Estado y, por esa razón, tenemos conductas previsibles. Creemos que estas reformas graduales son las que se van consolidando; y, por esa razón, con

este mandato que nos toca cumplir en la Legislatura de Córdoba, vamos a seguir insistiendo en los próximos tres años para completar el conjunto de reformas que necesita la Provincia, en particular los cordobeses y las cordobesas.

Hablamos de un compromiso y corresponde, entonces, señor presidente, decir que el día de ayer nos retiramos, con otros bloques legislativos, por entender que la actitud, ante un debate tan serio e importante como el de la reforma política, debía empezar por nosotros, por hacer cumplir los reglamentos, las reglas de convivencia y de respeto mutuo, y el proyecto no estaba en condiciones de ser revisado antes de su tratamiento en este recinto.

Por esa razón, señor presidente, nos retiramos. Pero, tenemos que decir, con absoluta honestidad, que desde el día de ayer hasta hoy, y porque venimos trabajando desde el primer día en esta reforma político-electoral, tuvimos el tiempo suficiente para repasar y revisar el despacho que nos entregó la mayoría.

Por ese motivo estamos acá, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, en un marco que, en realidad, nos hubiera gustado que fuera otro y así lo dije hoy en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

La ausencia del principal partido de la oposición en la Provincia de Córdoba, el Frente Cívico y Social, no le hace bien al tratamiento de este tema. Les planteamos a ustedes, como mayoría, la necesidad de postergar esta sesión hasta la semana próxima, más allá de que estábamos en condiciones de dar este debate –y lo vamos a dar–, porque entendíamos que, además de la legalidad que debe tener un proyecto, más aún tratándose de reformas políticas, de reformas de leyes electorales y de partidos políticos, más allá de quién vota a favor o en contra, era necesaria la presencia de todas la fuerzas políticas en este recinto.

Estamos preocupados por ésta y otras ausencias de legisladores de otros bloques, pero –como dije– estamos aquí para manifestar nuestras observaciones, acuerdos y diferencias, porque tampoco estamos dispuestos a que esta reforma salga sin nuestra participación, porque los proyectos que se tratan incluyen el de boleta única que presentamos hace algunos meses en esta Legislatura, como también otros proyectos de distintos

bloques legislativos de esta Cámara.

De todas maneras, señor presidente, fue necesario anteponer al escepticismo de la razón – por decirlo de alguna manera-, que nos embargó ayer cuando lamentábamos una sesión que, habiendo sido convocada para debatir entre todas las fuerzas políticas, fracasaba, el optimismo del corazón en el sentido de sentarnos acá para defender lo que consideramos cambios muy importantes para el funcionamiento de las instituciones electorales y de los partidos políticos en la Provincia de Córdoba.

No creemos que esta tarea concluya con este debate, con la aprobación de estas leyes sino que es necesario que el oficialismo reflexione, haga el esfuerzo –más de los escasos o nulos que hizo este año- para alcanzar una reforma constitucional.

En este sentido, decimos que si hoy estamos debatiendo una reforma electoral y más tarde vamos a debatir la reforma de la Constitución de Córdoba es porque hubo un 2 de setiembre, más allá de las opiniones de aquellos que consideraban y consideran que se cometió un fraude en el resultado de esas elecciones o de otros que, por lo menos, aceptan que el proceso al igual que los resultados, fueron poco transparentes. En conclusión, más allá de las opiniones, el 2 de setiembre dejó una sensación de incertidumbre en la ciudadanía de Córdoba respecto de los resultados de esa elección.

Estamos aquí para debatir una reforma electoral e impulsar cambios que nos lleven a tener una boleta única que, de alguna manera, achique los márgenes de la picardía política tradicional de Córdoba para iniciar, en el 2011, un proceso de prueba piloto con el voto electrónico, como recientemente ha sancionado la Legislatura de Santa Fe con el impulso del Frente Progresista Cívico y Social. A fines del mes pasado se votó la implementación gradual del voto electrónico en la Provincia vecina, y la propuesta de boleta única y voto electrónico nos coloca a Córdoba dentro de las provincias pioneras.

Si hablamos de reforma constitucional es porque hubo una contrarreforma en el 2001, que si bien fue sometida a una consulta popular, muchos sectores consideramos que no significó un avance sino, por el contrario, un achicamiento de la representación legislativa.

Pero, como muy bien decía el legislador

Rossi, si bien llegamos a esta reforma electoral por el 2 de setiembre, hay que reconocer que en esta Legislatura hubo, durante muchos años, propuestas que, de haber sido aprobadas y acompañadas por la mayoría de Unión por Córdoba, posiblemente hubiesen evitado lo sucedido en esa fecha.

También relacionado con lo que nos pasó ayer, tenemos la tendencia de que la motivación puede más que la comprensión en la dirigencia política. En ese sentido, tenemos que hacer una autocrítica; porque si ayer se trabajó a las apuradas fue porque no se planificaron con tiempo todos los debates de comisión, más allá de que tengo que reconocer que muchos legisladores estuvimos trabajando muchas horas en los últimos días, pero tendríamos que haber comenzado antes.

Entonces, como autocrítica para los partidos políticos, quiero expresar que cuando tratemos temas tan importantes no dejemos espacio para la confusión, no dejemos espacio para que se argumente que no llegó el proyecto o que los proyectos no son debatidos.

En primer lugar –adelantando que voy a hacer una intervención larga porque creo que este tema lo merece y porque hemos trabajado durante todo un año, así como lo han hecho legisladores de otros bloques-, la creación de la Comisión de Expertos ha sido un acierto, y debo reconocer el impulso que el Gobernador le dio a esa comisión.

En segundo lugar, quiero leer algunas de las conclusiones que esa Comisión de Expertos produjo para esta Legislatura y para la sociedad cordobesa. Para empezar, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, su título “Así no va más” expresa mucho más que la necesidad de una reforma electoral, expresa la necesidad también de una reforma constitucional, como lo señala tanto en el prólogo como en las conclusiones.

Hay un párrafo del prólogo que quiero leer, que tiene que ver con la reflexión que hacemos permanentemente en esta Legislatura respecto que de nada sirven las reformas normativas, constitucionales y políticas si no van acompañadas de un cambio en los comportamientos y en las conductas; y este año tuvimos en esta Legislatura conductas alejadas del cumplimiento de la Constitución Provincial.

Decía la comisión: “Somos realistas y, por ello, advertimos que sin una modificación de las

actitudes y conductas políticas y ciudadanas no existirá Reforma Política efectiva y perdurable. Podrán cambiarse las leyes e incluso la Constitución, pero nada será eficaz si no hay voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley, si no hay respeto por el Estado de Derecho, si no hay vocación de construir un sistema político participativo al servicio de la ciudadanía”.

Primera reflexión: a la reforma política la tenemos que empezar nosotros, señor presidente, mejorando nuestros comportamientos y conductas, siendo respetuosos de nuestras propias instituciones y de nuestras reglas de juego. Mal le podemos pedir a la ciudadanía que participe o someterla a que cumpla el reglamento de una Audiencia Pública, si para nosotros todo eso termina siendo algo flexible. Tiene que haber más compromiso con la República y las instituciones; por ello estamos sentados acá, más allá de las lecturas políticas que se vinculen con ausencias o con presencias en este recinto.

Sigo leyendo algunas de las conclusiones finales vertidas por la Comisión de Expertos: “Por unanimidad de sus miembros, recomienda considerar a ambas modificaciones del sistema político electoral de la Provincia de Córdoba, vía proyecto de ley y vía proyecto de reforma constitucional, como necesarias, correspondiendo a los partidos políticos, por medio de sus legisladores y otras instancias, lograr los consensos necesarios que les permitan alcanzar las mayorías exigidas por la Constitución para cada una de las diferentes modalidades”.

Segundo punto: “Iniciar una modificación electoral amplia y profunda, vía proyecto de ley - que es lo que estamos haciendo en este momento- que verse sobre un número considerable de temas fundamentales para la calidad del sistema político electoral y sobre los cuales ya existe un amplio consenso en la mayoría de las fuerzas políticas”. Consenso, señor presidente, que también ha sido demostrado en algunos temas, como la prohibición de las sumatorias en la Comisión Especial que conformó esta Legislatura, a la que quiero destacar junto a la Comisión de Expertos.

Tercer punto de esas conclusiones de la Comisión de Expertos: “Complementar, asimismo, las modificaciones vía proyecto de ley con una reforma constitucional, para lo cual es requisito sine

qua non que las fuerzas políticas alcancen las mayorías necesarias que prescribe la Constitución provincial”. Sabemos que esa mayoría es de dos tercios, y necesitamos construirla y consensuarla en esta Legislatura.

Señor presidente: no quiero seguir leyendo, porque es bastante extenso el texto referido a las conclusiones de la Comisión de Expertos, pero sí destacar que este es un primer paso; que quienes vamos a votar este proyecto de reforma electoral y de partidos políticos consideramos esto un primer paso, tendiente a construir algunas confianzas que nos permitan sentarnos el año que viene a conformar la gran decisión política que necesita esta Provincia para una reforma constitucional.

Creo que tenemos que aprender que, más allá de las diferencias políticas –yo me considero un opositor del Gobierno provincial-, a los temas de reforma institucional y política, sobre todo para aquellos que consideramos que el desarrollo está íntimamente vinculado con la calidad institucional, tenemos que ponerlos aparte y hacer esfuerzos. Estar sentado acá, debatiendo, consensuando un proyecto de reforma electoral, no me quita mi condición de opositor. Señor presidente: “Lo cortés no quita lo valiente”, algo que debemos poner en práctica más seguido.

Decía que uno de los integrantes de esa comisión, el padre Rafael Velasco, Rector de la Universidad Católica de Córdoba, en una columna de La Voz del Interior decía: “Hay que dejar de lado las palabras que confunden y comenzar a hacer gestos que refrenden las palabras, gestos que devuelvan sentido y ayuden a construir otro tipo de sociedad posible”.

Señor presidente: estamos acá, corriendo riesgos, pero con la absoluta convicción de que hay que desandar el camino de desencuentros en la política cordobesa, desandar el camino de la lógica amigo-enemigo y reemplazarla por una lógica del adversario político, que es lo que estamos haciendo.

Estas palabras del Padre Velasco son correctas y apuntan, justamente, a esto del valor de las palabras, señor presidente, porque es necesario decir lo que pensamos, porque ya se sabe que quien no dice lo que piensa termina por dejar de pensar aquello que no dice.

Entonces, señor presidente, a veinticinco

años de democracia, venimos a esta Legislatura para decir que en estos veinticinco años hemos logrado estabilidad política y un sistema de elecciones periódicas, pero nos falta mucho. Podríamos decir que tenemos una democracia mínima, desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema de elecciones, pero que desde el punto de vista de la calidad institucional todavía estamos lejos. Por eso, esto es una contribución en ese camino.

Digo "una democracia mínima" porque ni siquiera estuvo jaqueada o en duda el 2 de septiembre.

Señor presidente: desde el ARI - Coalición Cívica consideramos que no sólo en Córdoba sino también en el país tenemos que superar la Argentina de los antagonismos, de los extremos. Es cierto que tenemos problemas de diseño institucional -cómo vamos a tratar de resolver o de mejorar estas leyes- pero también de cultura política. Si no, recordemos lo que pasó con el diálogo argentino; eran circunstancias mucho más difíciles para el país que las que estamos viviendo ahora y, sin embargo, todo el mundo se sentó en esa mesa y nadie fue capaz de reconocer que tenía una parte de culpa en las cosas que pasaban en el país.

Esa intransigencia de creer que es dueño de la verdad y que no comete errores, tiene que ser superada porque nuestro país y nuestra provincia tienen recursos humanos, naturales y materiales muy importantes. Sólo nos falta la capacidad de entendimiento, de acción colectiva, de asociarnos en política y de asociarnos detrás de ideas y de valores, y no de negocios políticos.

Por eso, las sociedades que lograron el desarrollo fundaron el camino del desarrollo a través de un pacto político público, como lo fue el Pacto de la Moncloa, en España, y tantas otras experiencias. Pero, más que los contenidos de esos pactos, hay que destacar los comportamientos y las reglas de juego que se despiertan y se disparan desde allí.

Por ello, es necesario tener una agenda de gobierno y una agenda de Estado. Nosotros cuestionamos duramente la agenda de gobierno, pero creemos que todas las fuerzas políticas debemos construir juntos una agenda de Estado.

No se trata de negar el conflicto político, sino que el conflicto político sea aceptable y que el juego de poder permita que el que pierde, no lo pierda todo y que el que gane, no lo gane todo.

Eso intentamos.

Después de estas consideraciones de tipo filosófico-políticas, aunque extensas, estamos convencidos de que era la oportunidad de hacerlas. Nuestra posición en este debate se relaciona con lo que sufrimos el 28 de octubre. Nuestra fuerza política fue privada de la posibilidad de más votos; incluso -es lo más importante-, quienes querían votarnos en la elección presidencial fueron privados de esa posibilidad porque a nivel nacional rige el sistema tradicional que hoy queremos empezar a cambiar en esta Provincia con la boleta única.

Nuestra posición también se relaciona con el proyecto nacional que ha presentado el senador Cabanchik, junto con otros senadores, por el que propician la boleta única. Esperamos que este impulso que les damos desde Córdoba, que cuenta con antecedentes en la provincia de Santa Fe, sirva para que antes de 2011 podamos contar, a nivel nacional, con la boleta única.

Señor presidente: quiero decir que el informe de la Comisión de Expertos recomendó 56 cambios constitucionales y de leyes, en este momento estamos dando un primer paso.

Durante este año, nuestro bloque presentó 8 proyectos de reformas política, constitucional y electoral; también hemos presentado un proyecto acerca de la Consulta Popular, la reforma de la Audiencia Pública y de las leyes de Iniciativa Popular y Referéndum; del sistema de doble lectura, de la legitimación activa para el Defensor del Pueblo y un Código de Ética.

El legislador Fortuna se refirió a la Audiencia Pública, destacando la amplia participación, y es cierto, pero le faltó decir -y nosotros lo hemos recogido- que la mayoría de los que participaron en ella se expresaron a favor de la reforma de la Constitución, y de eso hay que tomar nota.

Respecto al proyecto en tratamiento de reforma electoral -luego haremos las consideraciones pertinentes sobre la reforma de la ley de Partidos Políticos- quiero destacar el trabajo cumplimentado por el asesor de nuestro bloque, el doctor Marcelo Argañaraz, que no solamente nos sirvió a nosotros sino también a toda la Legislatura. Hizo un estudio profundo de todos estos cuerpos legislativos y realizó aportes que han sido considerados muy valiosos, reitero, no solamente por nuestro bloque sino por todos los que conforman esta Legislatura; va para él un fuerte reconoci-

miento por destacar su actuación.

Estos proyectos de reforma de las leyes Electorales y de Partidos Políticos, garantizan o mejoran la libertad de elección de los ciudadanos de Córdoba, mejora los controles y la transparencia de los resultados de esas elecciones, moderniza el sistema electoral y fortalecen a los partidos políticos apuntando a un sistema más chico en cuanto a su cantidad.

Córdoba no puede tener 70 partidos, tiene que haber una reforma que promueva un sistema que coincida con las preferencias políticas e ideológicas de los cordobeses, simplificándoles sus opciones para que la Legislatura, para que el sistema de partidos políticos de Córdoba, sea moderno, simplificado y promueva una nueva cultura asociativa; para que muchos partidos se replanteen de dónde vienen, hacia dónde van, con quién deben converger, y para tener un sistema con partidos más fuertes para fortalecer la democracia en Córdoba.

Quiero leer algunas consideraciones que tienen muchas semejanzas con lo que nos pasó en Córdoba, que justifican esta reforma electoral, que también tienen que ver con lo que ocurrió el 2 de setiembre y están relacionadas con opiniones que se dieron cuando se trató la Ley Sáenz Peña hace casi un siglo. Por ejemplo, Pellegrini, que era conservador, hablaba de vicios, fraude y subversión; el Ministro Joaquín V. González decía que el sistema electoral era insostenible; el diputado conservador, Mariano De Vedia, observaba que la reforma electoral era un verdadero anhelo del país y que el sistema de lista era el mejor aliado del fraude -citaba la frase de Sarmiento que la calificaba como fraudulenta, inconstitucional y perversa. Ramón J. Cárcano sostenía que la revolución era la protesta armada contra la corrupción electoral; Alfredo Palacio y Enrique Dickman, insistían en la legitimidad y necesidad de una reforma política; el radical Hipólito Irigoyen, y sus partidarios, estaban empeñados en la reforma y reorganización de los elementos constitutivos del Derecho Electoral.

Salvando las distancias y la importancia de las reformas, estamos frente a la necesidad de producir cambios muy importantes en el sistema electoral.

Por eso, quiero destacar la boleta única –

aunque, como decía una columna de La Voz del Interior: “Boleta única o viveza criolla”- porque significa un gran paso ya que vamos a ser la primera provincia argentina en adoptarla. Sin embargo, debemos reconocer, con vergüenza, que somos, junto con Uruguay –que tiene otro sistema electoral–, el único país de Latinoamérica que no cuenta con este mecanismo, mientras que países que tienen tasas de analfabetismo más altas que la nuestra han adoptado la boleta única. Digo esto para contestar aquellos argumentos por los que se sostiene que puede llegar a ser dificultoso para el ciudadano optar en el cuarto oscuro cuando aquella le es entregada, ya que en realidad, señor presidente, les saca a los partidos el diseño y la custodia de ese mar de boletas, como las que teníamos el 2 de setiembre en las aulas que oficiaban de cuarto oscuro, garantizando la elección de nuestros cordobeses y cordobesas.

Si bien la boleta única incluida en el proyecto en tratamiento no es la que nos conforma totalmente, consideramos que es un gran paso, sobre todo porque nuestra propuesta formula sobre este tema una distinción entre las diferentes categorías electorales, ya que para nosotros debe haber una boleta única para Gobernador y Vicegobernador y otra para los cuerpos legislativos y el Tribunal de Cuentas, de modo que el elector tenga muchas más opciones.

No nos conforma que no se adopte –tal como lo propusimos en comisión– el sistema de mesas únicas masculinas y femeninas, lo que no sólo representaría un avance sino también el reconocimiento de las minorías sexuales; tampoco nos conforma –le pedimos al oficialismo que considere este punto– que se coloque un casillero de mayor tamaño en un costado de la boleta única, de modo que el votante pueda ejercer su opción por un voto completo de todas las sábanas que estarán incluidas en ella.

De todas maneras, señor presidente, insistimos en que nuestra propuesta consiste en que en la boleta única los candidatos estén ordenados por columna y no por franja, lo que garantiza la visibilidad, sobre todo de la fórmula de candidato a Gobernador. También reclamamos –esto se discutió en comisión– que el sistema de boleta única sea fortalecido con otra disposición que haga referencia a que, en el caso que las elecciones sean

simultáneas en el 2011, esté absolutamente garantizada –ya sea vía convenio, por autonomía de la Provincia o por gestiones que se lleven adelante– la implementación de la boleta única para ese año.

Hemos sostenido, señor presidente –al igual que otros bloques legislativos–, la necesidad de separar las elecciones y de establecer fechas fijas; sabemos que esto lleva tiempo en la cultura política y reconocemos que para un partido mayoritario, o para las fuerzas mayoritarias de Córdoba, no es fácil adoptar esta decisión. De todas maneras –insisto–, el sistema de boleta única, por un lado, y la implementación de una prueba piloto para el proceso de adopción del voto electrónico en los próximos años, por el otro, ya justifican nuestro voto al proyecto en tratamiento. No obstante, vamos a efectuar algunas observaciones o reservas sobre aquellos puntos en los que no tenemos coincidencia.

Señor presidente, hemos hecho en comisión una propuesta –que fue aceptada, luego retirada y, según se nos ha comunicado desde el bloque oficialista, finalmente aceptada– que debe ser incluida; originalmente, tenía que ver con el artículo 158, relativo a la sanción de las conductas clientelares en política desde el Estado, y expresa: “Utilización indebida con fines clientelares: El que utilizare o facilitare con fines promocionales a favor de candidato, partido político, alianza o confederación, la distribución gratuita de bienes y servicios de carácter social subvencionados por la Provincia durante la campaña electoral y durante el acto comicial, siempre y cuando el hecho o acción no sea tipificado como delito, será sancionado con una multa equivalente de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis meses a un año, a partir del día de la elección, o suspensión de hasta 60 días, sin goce de haberes, en el cargo que estuviere ejerciendo, si fuere funcionario o empleado público”.

Nos parece un gran avance que este Código Electoral castigue las prácticas políticas clientelares porque consideramos que no sólo significan un atraso sino que están reñidas con la ética con la que se debe desempeñar la función pública o con la ética que los candidatos -o los partidos políticos y sus integrantes- deben tener al momento de una elección y durante toda la vida partidaria.

En la reunión de Labor Parlamentaria hemos señalado algo que nos preocupó pero nos tranquilizaron diciendo que iba a ser eliminado. El artículo 133 del Código Electoral tiene una disposición que se titula “Reclamos y Protestas”, y el tercer párrafo dice que la solicitud de nulidad de una, varias o todas las mesas sólo podrá realizarse si el impugnante acredita la participación de sus fiscales en la/s mesa/s objetada/s, caso contrario, sólo podrá requerir la revisión de la documentación existente y que la misma sea puesta a su disposición a los fines de constatar el contenido.

Para resumir, esto significa que aquellos partidos políticos que no tienen fiscales en una mesa no pueden cuestionar la validez o solicitar la nulidad. Nos parece que eso atenta contra un derecho que los partidos políticos tienen de cuestionar los resultados de una urna. Por esa razón proponemos retirar esa disposición del articulado del Código Electoral, y tenemos el compromiso del oficialismo de hacerlo.

Señor presidente, no voy a votar el Título VII, que tiene que ver con todo el sistema electoral de la Provincia, por estar repetido en la Constitución provincial, donde se establece para la elección de Gobernador y Vicegobernador el sistema a simple pluralidad de sufragios, además de establecer el actual sistema de elección de los legisladores, sistemas que no compartimos.

Como estamos pidiendo una reforma de la Constitución y que se rediscuta con una propuesta de ballotage y de otro sistema para la elección de legisladores, no vamos votar el Título VII del Libro Primero de este Código Electoral.

En virtud de que hay un conjunto de disposiciones que no nos quedan claras -y que le pido al oficialismo que las revea-, tampoco vamos a aprobar el voto de extranjeros, que fue ampliamente discutido en comisión, y sobre el que se había logrado un consenso para que tanto a nivel provincial como municipal sea optativo. Por muchas consideraciones que surgen de la lectura de las disposiciones del texto en tratamiento se nos presenta una confusión porque existen algunas disposiciones que señalan que el voto es optativo, mientras que otras manifiestan lo contrario, o sea que es obligatorio, y hay una serie de cuestiones que están desplegadas en el resto del texto del Código Electoral; por lo tanto, hacemos reserva en el tema del voto de extranjeros ya que para

nosotros tiene que ser optativo.

Reafirmo lo que dije al comienzo: era necesario más tiempo ya que, con toda seguridad, el próximo año vamos a tener que discutir la necesidad de reformar esta ley. No compartimos la urgencia porque, como bien dijeron algunos legisladores como Rossi, todavía faltan tres años para implementar esta reforma. Debido a eso –ya lo adelantamos- esta ley va a sufrir algunas modificaciones, pues sabemos que se corrigen legislativamente los errores que hay en las remisiones.

Señor presidente: tenemos un conjunto de observaciones que surgen del estudio realizado por el asesor de nuestro bloque, doctor Marcelo Argañaraz; son tres páginas con algunas consideraciones políticas y de otro tipo a las que, en todo caso, en una segunda intervención –ésta ha sido bastante larga- voy a darles lectura.

Cerrando esta exposición, quiero reafirmar nuestro compromiso con la reforma electoral y con lo que esperamos se dé en esta Provincia: la reforma constitucional. Creemos que estos debates tienen que ser abordados y asumidos con ideas para que nos entiendan y, fundamentalmente, con conducta para que nos crean.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Legislador Ruiz, le solicito que nos alcance las incorporaciones que ha propuesto para ver de qué manera reenumeramos los artículos –si autoriza a Secretaría Legislativa-, porque usted propone el 158 y en el despacho ya hay uno con ese número, entonces, habría que agregar uno más. Si nos puede alcanzar el texto completo, después –a través de Secretaría Legislativa- hacemos la reenumeración.

Sr. Ruiz.- Señor presidente: lo que acordamos en la reunión de la Comisión Labor Parlamentaria fue –como bien señalaban los legisladores de Concertación Plural- la eliminación del famoso sticker, la eliminación del párrafo del artículo 133 que no garantiza la posibilidad de cuestionar urnas donde no hay fiscales partidarios, y la inclusión de la tipificación de la figura de sanción del clientelismo político.

Al comienzo de este debate entregué al bloque oficialista las consideraciones que reafirman las posiciones políticas que hemos tenido en comisión y otras sugerencias de tipo técnico, en todo caso, que el bloque de Unión por Córdoba

considere o no hacerles lugar.

De todas maneras, solicito que se agreguen al Diario de Sesiones las tres páginas que mencioné para que quede constancia de mi voto en general, pero con las observaciones que hice verbalmente y que acompañaré por escrito.

Muchas gracias.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR RUIZ OBSERVACIONES AL PROYECTO DE CODIGO ELECTORAL

- **Artículo 3:** resulta incompatible con el sticker previsto en los arts. 53 inc. 9 y 57

- **Artículo 9:** establece el voto de los extranjeros con residencia de 5 años acreditada con un certificado expedido por el "organismo oficial".

No aclara que organismo es el encargado de certificar la residencia.

El art. 9 tampoco aclara el carácter obligatorio o facultativo del voto de los extranjeros desconociendo lo acordado en comisiones donde se resolvió darle carácter voluntario u optativo.

Cabe analizar el art. 9 conjuntamente con los arts. 17 (dispone quienes quedan exentos de la obligación de votar pero no ha incluido a los extranjeros entre los eximidos desconociendo lo acordado en comisiones), art. 20 (dispone que los extranjeros deben acreditar la residencia de 5 años para ser incluidos en el fichero de electores extranjeros creados por el art. 19 inc. 2 lo cual resulta incompatible con el carácter obligatorio. Si para la inclusión del extranjero en el fichero debe acreditar residencia, quienes no lo hagan no pueden ser considerados electores.

Tampoco resulta compatible estas normas con los arts. 31, 36 y 94 que solo aluden a los ciudadanos electores de modo que no siéndolo los extranjeros quedarían fuera de sus previsiones.

- **Artículo 19:** primer párrafo. Prevé incorporación de ciudadanos en los ficheros pero los extranjeros no lo son - incongruencia-.

- **Artículo 22:** los electores extranjeros pueden votar presentando cédula federal o pasaporte (no contempla DNI). El art. 115 que regula la constancia de la emisión del voto no prevé el voto de los extranjeros con cédula o pasaporte, es decir, donde asentar la constancia.

Tampoco está contemplado como debe proceder el presidente de mesa ante la presentación de los extranjeros para votar (cotejar con los arts. 104, 105 y 106).

- **Artículo 28:** la publicidad permanente del pa-

drón en la página web del juzgado electoral puede resultar violatoria de las leyes nacionales que tutelan la protección de los datos personales.

- **Artículo 31:** No se prevé la impugnación de los extranjeros incluidos en el padrón ni la forma en que se da de baja a los extranjeros fallecidos incluidos en el padrón correspondiente.

- **Artículo 36:** no contempla el caso de los extranjeros que pretendan subsanar errores u omisiones en el padrón provisorio.

- **Artículo 42:** desconociendo lo acordado en comisiones se dispone constituir mesas de 350 electores agrupados por sexo. Desconoce lo acordado sobre la constitución de padrones y mesas mixtas.

Segundo párrafo, en los casos excepcionales que autorizan mesas mixtas, obliga a diferenciar la BU por sexo y realizar escrutinios separados.

- **Artículo 50:** Segundo párrafo: quedan prohibidas la sumatoria de candidaturas de una misma persona en diferentes partidos políticos ... ni de listas entre sí.

Es una pésima redacción, debería decir: también quedan prohibidas la sumatoria de listas entre sí. El tercer párrafo, hace extensiva la prohibición para los candidatos a cargos nacionales. La provincia no puede legislar sobre la elección de cargos para autoridades federales puesto que invade facultades excluyentes del congreso. La ley sería inconstitucional.

- **Artículo 51:** el párrafo segundo declara apelable las decisiones del juzgado electoral ante la cámara electoral ad hoc. Dado que este tribunal no existe ni ha sido creado por la ley, sino que se difiere por el art. 181 a una ley especial futura, sin prever quien cumplirá sus funciones hasta tanto sea creada, resulta inaplicable y un verdadero despropósito.

- **Artículo 52:** atribuye al juzgado electoral la responsabilidad de confeccionar la boleta única pero no precisa a quien corresponde confeccionar y distribuir el Sticker previsto en el art. 53 inc. 9 y 57.

- **Artículo 53:** requisitos de la BU.

Inciso 2) el logotipo que los partidos puedan solicitar facultativamente al registrar su lista de candidatos no puede tener carácter facultativo, debe determinarse que sea obligatorio para asegurar la igualdad de todos los partidos.

Inciso 9) crea sorpresivamente el Sticker con el logo, escudo, etc., que los partidos hayan registrado y cuya función consiste en que su adhesión en cualquier lugar de la boleta única deberá computarse como voto válido por la lista completa de candidatos oficializados de la agrupación política de la que se trata.

Este inciso debe analizarse simultáneamente con el art. 57 cuyo segundo párrafo determina la facultad "podrán" de los partidos de someter al JE la aprobación del sticker del art. 53 que represente la opción de voto por lista completa.

El Sticker del art. 53 inc. 9 y 57 jamás fue siquiera insinuado o tratado en comisiones, no estuvo en ninguno de los proyectos presentados hasta hoy y altera el alcance y el espíritu y los objetivos de la BU. Por otra parte, ninguna norma del proyecto precisa quien es el responsable de la confección, distribución y entrega al elector del Sticker y en que momento este lo recibe, ni las consecuencias de que se adhiera a la boleta única un sticker falso, no oficializado, o incompleto o parcialmente destruido, estas imprevisiones hacen absolutamente inviable este aspecto del proyecto, además de ser políticamente inaceptable.

Tampoco hay previsiones en el proyecto sobre el envío de los sticker dentro de los elementos que deben ser entregados al presidente de mesa (ver art. 63 en especial, inc. 11).

- **Artículo 58:** ordena al JE publicar en el boletín oficial los facsímiles de la BU pero nada dice de los sticker de cada uno de los partidos. Cabe preguntarse como hará el elector para diferenciar el auténtico o aprobado de los truchos.

- **Artículo 59:** Faculta exclusivamente al JE a imprimir la BU, y nada dice respecto de los Sticker.

- **Artículo 60 y 61:** regula cantidades y plazos de impresión de la boleta única pero no regula en absoluto lo mismo en relación a los sticker.

- **Artículo 62:** regula la provisión de BU y formularios sin hacer mención a los stickers.

- **Artículo 63 inc. 13:** regula la impresión y distribución de los afiches con las listas, pese a que en comisiones se había acordado su supresión del proyecto, dado que la boleta única contiene listas completas en su texto.

- **Artículo 66 inc. 4:** la prohibición de exhibir facsímiles de BU en las proximidades de las escuelas se había decidido suprimir en las comisiones por que se consideró que no debería haber ninguna boleta en circulación, ni siquiera facsímiles o réplicas.

- **Artículos 68 inc. 1 y 82 inc. 1:** determinan que para ser presidente de mesa o fiscal público electoral debe tratarse de electores hábiles, sin aclararse si podrán desempeñar el cargo los electores extranjeros.

- **Artículo 70, 2do párrafo:** en comisiones se resolvió que las designaciones de las autoridades electorales se notificaría entre otra forma por correo, lo cual ha sido suprimido del proyec-

to.

- **Artículo 83 inc. d):** en comisiones se acordó que en caso de inasistencia del presidente de mesa y suplente, el fiscal público designaría a otro elector que reúna en lo posible las condiciones exigidas para el cargo y que se asegurase no se desempeñare como fiscal partidario.

Inc. h): agregar conforme a lo resuelto en comisiones que la firma de los fiscales partidarios en las actas no es condición de validez de las mismas, pudiendo no firmarlas.

En comisiones se habría resuelto que este artículo que regula las facultades de fiscal público electoral, debía agregarse un inciso mediante el cual se le ordenaba labrar un informe de las autoridades de mesa que no asistieron al cumplimiento de sus funciones y que dicho informe sería equivalente a la denuncia y requerimiento de elevación a juicio para que el JE inicie las acciones por la infracción con miras a aplicar las sanciones correspondientes. Tal determinación de la comisión no ha sido incorporada al proyecto.

- **Artículo 88:** prevé el caso de la inasistencia del fiscal público electoral "designado para una mesa" previendo su reemplazo por el fiscal designado para la mesa siguiente. Se trata de un error posiblemente no corregido del proyecto original que asignaba un fiscal por mesa, mientras que el actual proyecto asigna uno por escuela de modo que cabe corregir el texto y establecer otro mecanismo de sustitución no previsto en la norma.

- **Artículo 92 y 93:** crean los registros de voluntarios para presidente de mesa y fiscales públicos, en los que sólo podrán participar "ciudadanos". Cabe aclarar si podrán desempeñarse o no en tales calidades extranjeros, situación que no se aprecia con claridad en todo el proyecto.

- **Artículo 94:** clasifica por sexos los registros de aspirantes a presidentes y fiscales electorales, lo cual va en contra de lo acordado en establecer mesas mixtas.

- **Artículo 98 inc. 1:** pareciera que no debe proveerse al presidente de mesa de los stickers del art. 53 inc. 9, ¿quien se los provee a los electores?

- **Art. 98 inc. 9:** prevé colocar el afiche con la lista de candidatos "dentro o fuera del cuarto oscuro", en el supuesto de insistirse con el afiche, contrariando lo resuelto en comisiones, no es lícito colocarlo fuera del cuarto oscuro porque violentaría el art. 3 que prohíbe a las personas manifestar su voto, y de hecho cuando alguien se detenga frente a un afiche particular, está indicando su preferencia por la lista que va a votar.

- **Artículo 99:** prohibición de colocar insignias que la ley no autorice en el cuarto oscuro lo cual resultaría incompatible con el sticker de los art. 53 inc. 9 y 57.

- **Artículo 103:** error técnico: al citar en el 2do párrafo que el presidente debe verificar si el ciudadano figura en el padrón. Acaso no debe hacer lo propio con el elector extranjero que no es ciudadano?

- **Artículo 104 inc. 2:** en comisiones se aceptó nuestra objeción a que se habilite el voto de ciudadano que se identifique con documentos que carezcan de fotografía, no obstante ello, el proyecto insiste con habilitarlo.

- **Artículo 105:** no contempla la situación de la identificación de los electores extranjeros con documentos distintos al DNI

- **Artículo 106:** en comisiones se acordó que quedaba habilitado a votar quien figura en el padrón y exhiba su Documento de identidad "en forma". El proyecto omite agregar tal reforma, ignorando que no puede admitirse documentos en cualquier estado.

- **Artículo 108:** misma crítica al art. 105, contempla sólo a los ciudadanos y no a los extranjeros.

- **Artículo 113:** la emisión del voto está prevista con las marcas con tinta indeleble en la BU, no se prevé la adhesión de sticker alguno, resultando incompatible con los arts. 53 inc. 9 y 57.

- **Artículo 115:** constancia de emisión de voto, no contempla donde dejarla en el caso del voto de los extranjeros.

- **Artículo 117:** hace una remisión errónea a los inc. 5 y 8 del proyecto, debe decir, inc. 6 y 9 que tiene relación con el estado del cuarto oscuro.

- **Art. 159:** se contradice con lo dispuesto en art. En relación a que es la cámara electoral ad hoc y no el TSJ quien conoce de los recursos contra las decisiones del JE (ver arts. Y 181).

- **Art. 178:** no prevé cláusula de garantía de aplicabilidad de esta ley para el caso de simultaneidad de elecciones, conforme lo consensuado en comisiones.

- **Art. 181:** Diferimiento de creación de cámara ad hoc, para eludir reforma constitucional del art. 170 C Prov.

Errores repetidos de remisión de una norma a otra, respecto del número del artículo al que remite. Se trata de los casos de los arts. 117, 193, 196, 202, 240, 241 y 242,

- **Art. 201:** debería agregarse entre las prohibiciones de recibir contribuciones no solo a los partidos, sino también a los propios candidatos

individualmente y a fundaciones o asociaciones vinculadas a ellos (eje fundación Juan schiaretta gobernador, recibió 80 % de los fondos de campaña en 2007)

El 201 inc. 8 debería prohibir aportes a las obras sociales

- **Art. 202** segundo párrafo en comisión de aceptó en ese supuesto distrib. Uir el espacio de tv sobrante entre todos los partidos igualitariamente, en ligar de que uno pueda acrecer a costa del resto.

- **Art. 210** se consigna plazo de 24 horas cuando se aconseja sean todos en días.

- **Arts. 213: y 214**, imprecisión en la identificación de los medios electrónicos aludidos por las normas. Debería decir medios que emitan sus señales en territorio provincial. Además el 214 no es razonable que la prohibición alcance solo a los locales, dado que colmo esta redactada la norma permitirá la contratación de terceros a medios nacionales e internacionales que se receptan en la provincia.

214 in fine es de dudosa constitucionalidad la prohibición, puede afectar derecho de propiedad y de contratar de los medios. Ambas normas se inmiscuyen en materia legislativa federal, ley radiodifusión

- **Arts. 218 y 219** no se prevén sanciones al incumplimiento va a ser letra muerta sin sanciones. Debería ser posible pedir interrupción de las conductas oficiales y sancionar al funcionario que la encargó y al partido beneficiado.

- **Art. 225: inc. 4** es un privilegio el plazo abreviado de 4 años de conservación de la documentación contable. El plazo legal a fines contables y tributarios es de 10 años. En comisión se acordó elevarlo a 10, pero sigue igual.

- **Art. 226:** muy elevado el monto a partir del cual debe documentarse los gastos, en lugar de 1 salario mínimo debería ser del 10% del salario mínimo el piso a partir del cual debe documentarse.

- **Arts. 236 y 237** en comisiones se acordaron que esas regulaciones de los medios radios y tv, podrían ser inconstitucionales, por invadir la ley de radiodifusión federal.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente entiende que hoy iniciamos un camino que marcará un hito en la historia política de Córdoba.

Si bien se hizo referencia a la historia de este proceso que está culminando hoy, voy a hacer algunas menciones –sin extenderme demasiado– y, además, algunas consideraciones sobre lo

sucedido en el día de ayer.

Con respecto al inicio de esta tarea referente a la reforma política, a la que nos abocamos los bloques de esta Legislatura, desde que se inició esta gestión tuvimos conocimiento de que para el mes de diciembre debíamos tener elaborada una ley, de manera que no podemos aducir falta de tiempo. Transcurrimos un año legislativo sabiendo de este tema, trabajando en la Comisión para la Reforma Política con la Comisión de Expertos, y si tuvimos problemas de tiempo al final para su elaboración quizá fue por no saber compatibilizar los tiempos de trabajo.

Con respecto a la Comisión de Expertos, quiero destacar que la misma inició su trayectoria con una conferencia de prensa donde se la ha denostado y se ha dejado asentado que le correspondía a esta honorable Legislatura elaborar las normas y leyes de esta reforma política. La Comisión de Expertos ha sabido analizar el tema y expedirse con altura, y nos ha facilitado a los legisladores una serie de temas que hemos podido tratar.

Por eso, señor presidente, ato esta referencia de la situación del día de ayer con la de hoy. No entiendo que quienes tuvieron el temor de que la Comisión de Expertos ocupara nuestro espacio hoy dejen los espacios libres para no debatir estos temas que hemos venido analizando durante un año.

Es vocación de este bloque no dejar las bancas vacías, porque entendemos que el pueblo nos ha elegido para votar por un sí o por un no, no para ceder el lugar, estar ausentes o retirarnos. De manera que, humildemente, vaya nuestro repudio a lo sucedido en el día de ayer, porque consideramos que con ello sólo logramos desvirtuar más las instituciones y hacer que la ciudadanía descrea cada vez más de la política y los políticos.

Asimismo, quiero hacer alguna reflexión acerca del tema del derecho de autor intelectual. En esta ocasión y en otras anteriores, se ha referido a que si el derecho de autor es de uno u otro bloque. Debemos tener el suficiente desinterés moral y espiritual de adjudicarnos la autoría de este proyecto. Si hablamos de consenso, no nos puede molestar que no se nos nombre personalmente o queramos adjudicarnos el derecho intelectual.

Repito: hace un año que los diferentes bloques estamos debatiendo, en la Comisión de Re-

forma Política, ideas que hemos consensuado, y lo hemos hecho con altura y entendiendo que a todos los bloques les pertenece una parte de este proyecto.

Por eso, repito, no entiendo determinadas ausencias siendo que entre los proyectos compatibilizados están algunos presentados por esas ausencias.

También quiero referirme al despacho del día de ayer. Hemos estado hasta últimas horas del día de ayer, en comisión, analizando artículos que pretendíamos que se debatieran y se cambiaran, y todos éramos conscientes de que era materialmente imposible contar con el despacho para la hora en que se había fijado la sesión. Esto era razonable, pero no que manos traviesas introdujeran determinados artículos que no habían sido consensuados, ni siquiera mencionados o debatidos, aprovechando la premura manifiesta de su tratamiento.

Alguien ha tildado este proyecto de “mamarracho”. Realmente, me ha dolido porque este bloque, así como otros, venimos trabajando arduamente, con responsabilidad y con tesón, desde el mes de febrero, y hemos presentado un proyecto de reforma constitucional, por lo que no creo que este proyecto deba ser tachado de “mamarracho”. Podremos tener diferencias, discrepancias, tal vez no se pudo plasmar todo lo que pretendíamos, pero entendemos que es el inicio de un camino, que son los primeros pasos de una reforma política que aspiramos se concrete en una reforma constitucional, que nos permita a los cordobeses tener el orgullo de representar a Córdoba, la “Docta”, dando muestras al resto del país de que sabemos elaborar reformas políticas de envergadura.

También queremos hacer una reflexión sobre el tema de las sumatorias. El legislador Asbert ha dicho, en representación de uno de los bloques pequeños –entre los cuales se encuentra incluido este bloque– que ha llegado a estas bancas a través de la sumatoria- que la sumatoria viene de antes. Efectivamente; me permito recordar y recordarles que sólo en la elección que ungió al ex Gobernador De la Sota como Gobernador, cuando competía con el candidato de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad, el Partido Justicialista sacó menos votos que la Unión Cívica Radical, siendo la sumatoria de votos la que le dio al ex Goberna-

dor el plafón que le permitió, con solvencia, ganar la Gobernación. De manera que la sumatoria no ha sido invento de estos bloques unipersonales –o pequeños- que estamos hoy en la Legislatura; ese era el método utilizado por todas las fuerzas presentes.

También quiero manifestar, señor presidente, que este bloque ve con agrado que la reforma política permita la abolición de las sumatorias, para que muchos partidos con sellos de goma dejen de ser utilizados como moneda de cambio, a veces utilizando dos o tres partidos. Celebramos que de ahora en más esto no pueda suceder.

Queremos hacer algunas reflexiones con respecto a los proyectos presentados por este bloque. Repito: que en el mes de febrero hemos presentado el proyecto 176/L/08, de Reforma Político-Constitucional, donde proponemos una reforma política, electoral, institucional y social; entendemos que solamente se puede arribar a ello con una reforma constitucional, proponiendo mayor participación de la ciudadanía en la elección de diferentes rangos -que no voy a mencionar- que hoy no son electos, o mejorar diferentes rangos donde se vota con una elección acotada.

Hemos presentado, con posterioridad -viendo que no había vocación política del oficialismo de trabajar por una reforma electoral-, el proyecto de ley 1700, donde solicitamos la independencia y separación de las elecciones provinciales, nacionales y comunales. Ese proyecto es uno de los que está compatibilizado con el proyecto que estamos tratando; sin embargo, no vemos que haya sido incorporada esa propuesta, por lo cual solicitamos que sea tenida en consideración y debatida.

Hemos presentado el proyecto 1701, sobre la publicidad oficial, y vemos con agrado que en este proyecto que estamos tratando se acuerda lo que nuestro bloque y otros han propuesto.

Hemos presentado también el proyecto 1703, compatibilizado, donde proponemos que los cargos para legisladores no puedan ser reelectos más de una vez, o sea por dos períodos consecutivos. Eso tampoco ha sido tenido en cuenta en este proyecto en tratamiento, por lo que solicitamos sea debatido.

Hemos presentado el proyecto de ley 1702 que, pese a nuestros reiterados pedidos de que

sea compatibilizado con el proyecto en tratamiento, no ha sido tratado y no entendemos por qué. Dicho proyecto tiene estado parlamentario, por lo cual sigue en vigencia e instaremos, con posterioridad, a su tratamiento. En ese proyecto pedíamos que ningún ciudadano pueda postularse como candidato a legislador provincial y simultáneamente a otro cargo nacional, provincial o municipal. En segundo lugar, que el legislador que se postulare para un cargo electivo nacional o municipal, pierda su banca provincial para la cual fuera electo, si se postula para otro cargo. Y, tercero, que pierda el derecho a la banca el ciudadano electo que la asumiera y la dejara para ocupar otro empleo, público o privado; y, además, poníamos un cargo punitivo. Repito: este proyecto no ha sido incorporado en la compatibilización y tiene estado parlamentario, de manera que posteriormente pediremos su tratamiento.

Este bloque también ha propuesto, en reiteradas oportunidades, que se convoque al Consejo de Partidos Políticos para que debata dentro de su seno, las reformas políticas electorales que hacen a la vida y a la trascendencia de los partidos políticos.

De más está decir que cuando en la última instancia se resolvió convocar a los partidos políticos, la legisladora Ana Dressino, en tono de sorna, preguntó si dicho consejo iba a ser convocado con posterioridad a la aprobación de la reforma política. Este bloque tomó su pregunta con tono de sorna pero realmente ha sido un presagio, porque el Consejo de Partidos Políticos no ha sido convocado previo a esta reforma política electoral, cosa que lamentamos profundamente porque –repito– hace a la vida y a la protección de los partidos políticos.

Este bloque apoyará este proyecto, puesto que –reitero– es el inicio de algo que entendemos es un camino que vamos a transitar durante estos años que faltan para el 2011, donde seguiremos insistiendo con otros proyectos; seguiremos, no sólo nuestro bloque sino también los otros, tratando de mejorar nuestro sistema democrático.

Queremos manifestar que no acordamos con el inciso 9) del artículo 53, donde se establece el casillero en blanco de mayores dimensiones para que, con una crucecita, se vote toda una lista que, a nuestro entender, sigue siendo la lista sábana. No compartimos que esta boleta única sea única en llevar no sólo a todos los candidatos sino

también a todas las categorías que se votan. Proponemos –tal como lo dejamos sentado en nuestro proyecto de Reforma Político Constitucional– que las boletas sean separadas por rangos electivos. Es decir, que haya boletas únicas para gobernador, boletas únicas para legisladores y boletas únicas para intendente, en caso de coincidir las elecciones municipales o comunales, y así sucesivamente.

Al respecto, me permito referirme a una muestra que tiene el legislador Fortuna en su despacho sobre las boletas utilizadas en Costa Rica, las que están separadas por rango: la de gobernador y vice, la de legisladores y las de jefes comunales o intendentes.

Tampoco acordamos con lo establecido en el artículo 7º sobre la conformación de la Legislatura, dado que proponemos la bicameralidad, ni con la forma de elección de gobernador y vice, puesto que proponemos la doble vuelta en nuestra reforma constitucional. Pero entendemos que, así como estamos tratando el tema con este proyecto de ley, ello es inviable puesto que esas propuestas exigen reforma constitucional. De manera que, si bien tenemos un criterio diferente al respecto, vamos a votar favorablemente el artículo 7º con la posibilidad de debatir la reforma de la Constitución con posterioridad.

En cuanto a los sticker, ayer nos asombró su incorporación; pero entendemos que –según el despacho de comisión que se nos entregó antes del inicio de esta sesión– eso ya había sido retirado, por lo que no nos podemos oponer a algo que ya no existe, pero nos gustaría que constara en actas nuestro desacuerdo con esa iniciativa.

Finalmente, señor presidente, queremos manifestar nuestra satisfacción por la forma en que se ha debatido en el seno de la comisión, con altura, hemos compartido muchas horas de trabajo, hemos disentido y propuesto diferentes posibilidades y se nos ha escuchado. Queremos agradecer especialmente al personal técnico de esta Legislatura que ha sido solícito y eficiente en la tarea que le ha correspondido realizar.

Gracias.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el señor legislador Graglia.

Sr. Graglia.– Señor presidente: primero, quiero suscribir las palabras con las cuales dio inicio a este debate el legislador Fortuna y reconocer su trabajo como presidente de la Comisión

Especial para la Reforma Político Electoral en la Provincia de Córdoba y el de los presidentes de las Comisiones permanentes de nuestra Legislatura -de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, de Economía y de Asuntos Municipales y Comunales- por el trabajo serio y responsable desarrollado estos días.

Señor presidente: más allá de los acuerdos o desacuerdos, tal vez coyunturales y por lo tanto transitorios, entre los diversos partidos, bloques y legisladores; más allá de las mezquindades y oportunismos de turno, todos coincidimos en que la Provincia de Córdoba necesita una reforma político electoral.

Desde nuestro punto de vista, dicha reforma debe estar orientada por un conjunto de principios de fe política que sirven como guía al proceso en marcha. Para juzgar esos principios debemos saber, conocer y entender de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Paradójicamente, tal vez hoy más que ayer, debemos reflexionar sobre esos principios que iluminan el sentido y el alcance de esta reforma político electoral en marcha en nuestra Provincia. Esos principios son ocho, y voy a leerlos al término de mi intervención, pero, antes, permítame reflexionar sobre el proceso en marcha después de haber oído atentamente las intervenciones precedentes.

El 2 de setiembre de 2007, los ciudadanos cordobeses sufrimos la explosión de nuestro régimen electoral. Un resultado ajustado puso en evidencia un sistema vulnerable, agravado por una sucesión de errores operativos en la organización de los comicios. Sobre esas bases se montaron denuncias mediáticas de fraude que nunca llegaron formalmente a la Justicia, aumentando irresponsablemente la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y judiciales de nuestra Provincia.

Sin embargo, desde mi humilde punto de vista, aquel día no fue la causa de la reforma político electoral en Córdoba sino, tal vez, la consecuencia de no haberla hecho en tiempo y forma; por lo tanto, debe significar la oportunidad y, por qué no decirlo, el deber de hacerla para no repetir los errores y para empezar a recuperar la confianza perdida.

A pesar de las ausencias, de especulaciones y contradicciones; a pesar de errores por ac-

ción u omisión, el proceso en marcha fue –y sigue siendo- muy positivo, y abre las puertas para que se haga una reforma en serio, sin antecedentes en la Provincia de Córdoba.

Soy optimista respecto del proceso en marcha porque la reforma ha sabido superar muchos y diversos obstáculos y lo seguirá haciendo; ha superado escepticismos e incredulidades.

Primero, se dijo que el Gobernador de la Provincia nada haría al respecto; sin embargo, a pesar de los agoreros, el Gobernador Schiaretto puso el tema de la reforma político-electoral en el centro de la agenda gubernamental; se hizo cargo del problema y de la demanda; llamó a expertos y notables para que integrasen una Comisión Consultiva con el propósito de elaborar un diagnóstico participativo y una serie de propuestas de reforma. Esa decisión política del titular del Poder Ejecutivo provincial es el primer punto positivo que debe subrayarse, sin mezquindades ni especulaciones políticas.

Luego, se dijo que los notables y expertos llamados no aceptarían; sin embargo, a pesar de los agoreros, los rectores de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba –Carolina Scotto y Rafael Velasco, respectivamente–, junto con destacados expertos de las ciencias políticas y jurídicas de nuestra Córdoba, encabezados por Daniel Zovatto, respondieron afirmativamente y pusieron manos a la obra.

Después, se dijo que los notables no revestían tal condición, que los expertos, en realidad, no lo eran, que la Comisión Consultiva invadía la Legislatura y que trabajaba para el Gobierno. Al respecto, vale la pena recordar el desplante que sufrieron los integrantes de la Comisión Consultiva la primera vez que visitaron nuestra Legislatura; entonces, también hubo ausencias; no los atendieron, los criticaron y hasta los acusaron; sin embargo, a pesar de los agoreros, la Comisión Consultiva pudo y supo trabajar con libertad e imparcialidad –garantizadas por el Gobernador de la Provincia–, dando a luz un dictamen señero.

Finalmente, se dijo que la Legislatura iba a desconocer el dictamen, ignorando sus conclusiones, que nunca se discutirían; sin embargo, a pesar de los agoreros, a través de una Comisión Especial, con una Audiencia Pública, mediante el trabajo serio y responsable de las comisiones

permanentes de nuestra Legislatura, los legisladores receptaron el diagnóstico y las propuestas de la Comisión Consultiva y, sobre esa base y en función de otras consultas, debatieron sobre este tema. Por entonces, también hubo ausencias, pero se alcanzaron coincidencias básicas, después de muchos y buenos debates dirigidos, inteligentemente, por los legisladores Busso y Heredia, entre otros.

Así llegamos a este Plenario, con resultados promisorios y también con discusiones pendientes. La Comisión Consultiva había propuesto –como necesarias, urgentes y trascendentales, y no como un mero maquillaje– modificaciones de leyes con alto consenso de sus integrantes y de los actores consultados. Asimismo, había entendido que la reforma de la Constitución Provincial era necesaria, reservando a la decisión de la Legislatura su oportunidad y subordinándola a los consensos. Finalmente, había dicho que la reforma político-electoral a realizarse debía ser entendida como un proceso y no como un acto único y que, consecuentemente, se debía avanzar por etapas sucesivas, empezando por las cuestiones de menor complejidad y de mayor acuerdo.

Respecto de la reforma constitucional, hay puntos comunes en aspectos específicos: darle jerarquía constitucional al Consejo de la Magistratura, independizar el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial y atribuirle al Defensor del Pueblo legitimación procesal activa para demandar, entre otros ejemplos.

Pero hay disidencias en otros temas que son claves para poder avanzar; no hay acuerdo con respecto a la composición de la Legislatura: unos piensan que debe restablecerse el sistema bicameral pero no coinciden en la cantidad de miembros, otros creemos que se debe mantener el sistema unicameral. Tampoco hay acuerdo con respecto a la forma de elección del Gobernador: unos piensan que se debe introducir la doble vuelta electoral pero sin coincidir en las mayorías requeridas, y otros pensamos que se debe mantener el sistema de mayorías simples.

No hay acuerdo entre los legisladores y entre los bloques, tampoco lo hubo entre los integrantes de la Comisión Consultiva –vale la pena recordarlo– las opiniones están muy divididas entre políticos y académicos; hay argumentos teóricos y prácticos a favor y en contra, y no son desacuerdos pequeños ni menores.

Con relación a la reforma de la Constitución, como se puede ver, no están dados los consensos mínimos y, por lo tanto, parece inoportuna. Así que tenemos dos opciones, una vez más la realidad nos muestra las dos caras de la política: la agonal y la arquitectónica –privilegiar los intereses partidarios o el interés general, privilegiar los disensos o los consensos. Destruir las coincidencias en nombre de las disidencias parece ilógico. Plantear todo o nada autoritariamente, sin debatir democráticamente un nuevo Código Electoral y un nuevo régimen de partidos políticos, parece irresponsable.

Las conductas de cada uno son las respuestas. Los presentes, por encima de nuestras discrepancias, aciertos y desaciertos, creemos que los consensos se alcanzan debatiendo. Las ausencias provocan dudas más que acusaciones, dudas que me permito resumir en una serie limitada de preguntas: los ausentes, ¿están en contra de eliminar la sumatoria y de prohibir las candidaturas repetidas? -artículo 50 del proyecto del nuevo Código Electoral-, ¿están en contra de la boleta única en sustitución de la boleta por partidos? -artículos 52 al 61-, ¿están en contra de que los presidentes de mesa sean capacitados por la Justicia Electoral y tengan viáticos y refrigerios? -artículos 71 al 73-, ¿están en contra de la nueva figura de Fiscal Público Electoral? -artículos 80 al 91-, ¿están en contra del software estatal diseñado por las universidades? -artículo 179-, ¿están en contra de la Cámara electoral ad hoc que se debe crear mediante una ley especial? -artículo 181-, ¿están en contra de la incorporación progresiva del voto electrónico? -artículo 182-, ¿están en contra del financiamiento público de las campañas electorales en radio y televisión?, ¿están en contra de los topes y prohibiciones al financiamiento privado? -artículos 186 al 205-, ¿están en contra de que las campañas duren 45 días como máximo antes de las elecciones? -artículo 205-, ¿están en contra de que el Gobierno prohíba la publicidad oficial 30 días antes y de que se prohíba la inauguración de obras 15 días antes de las elecciones? -artículos 218 y 219-, ¿están en contra de las internas partidarias abiertas, simultáneas y obligatorias? -artículos 58 y 59 del proyecto del nuevo Régimen Jurídico de Partidos Políticos-, ¿están en contra del financiamiento público de los partidos políticos para funcionamiento y capacitaciones? ¿Están en contra de los montos máximos de apor-

tes prohibidos al financiamiento privado? -artículos 64 a 75 del proyecto de Nuevo Régimen Jurídico de los Partidos Políticos. ¿O simplemente están en contra?

No son temas pequeños ni menores, juntos suponen un cambio estructural; decir que se trata de un mero maquillaje sería inapropiado, estar de acuerdo pero votar en contra sería irresponsable e insostenible; las ausencias no ocultan las contradicciones.

Señor presidente: para concluir, voy a leer –como dije al inicio de esta intervención- los ocho principios de fe política que sostienen la reforma en marcha, los cuales asumimos como desafíos y como compromisos y deberían ser considerados como el preámbulo de los proyectos en tratamiento:

1) Poner la política al servicio de la dignidad humana y del bien común, exaltando los valores democráticos de libertad individual y de justicia social.

2) Someter a gobernantes y gobernados al cumplimiento de los derechos y las obligaciones de las Constituciones nacional y provincial.

3) Promover sistemáticamente la formación cívica y la cultura política de los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Córdoba.

4) Dotar a nuestra Provincia de una mejor calidad institucional buscando un balance entre representatividad y gobernabilidad en el sistema político electoral.

5) Fortalecer a los partidos políticos mediante la capacitación de sus miembros y su democratización interna facilitando el establecimiento de un sistema con alta institucionalización.

6) Mejorar los procedimientos y reglas procesales de la justicia electoral asegurando transparencia y generando condiciones de equidad en las campañas electorales.

7) Entender a la reforma no como un acto único sino como un proceso dentro del cual se debe avanzar de manera progresiva y por etapas sucesivas.

8) Comprender que la reforma debe asentarse sobre consensos sólidos que den legitimidad a cualquier modificación sobre la base de debates serios y responsables, vía proyecto de ley o reforma constitucional.

Señor presidente, hoy estamos en marcha.

Gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.

Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: como lo anticipáramos, nuestro bloque va a votar en contra de esta reforma, es imposible votar una reforma que violenta la autonomía municipal.

Hoy es mi deber y obligación estar en este honorable recinto para defender a los pueblos del interior y a los ciudadanos que confían en su intendente o jefe comunal. Quieren imponer la boleta única pero no han contemplado las realidades de cada región, que son todas distintas.

Señor presidente, el bloque del oficialismo está compuesto por muchos legisladores que han sido intendentes o jefes comunales, la mayoría llegó porque trabajó al lado del pueblo, junto a la gente, pero he aquí que cuando llegaron a la banca de la Legislatura se olvidaron de ellos y no los escucharon. Tenemos muchísima gente que no sabe leer ni escribir y, sin embargo, sé de muy pocos legisladores de la mayoría, ex intendentes, que defendieron la papeleta anterior, pero, ¿el resto, se olvidó de la gente?

Saben perfectamente, al igual que yo, que a nuestros jubilados les cuesta aprender a cobrar por cajero automático y hoy le van a imponer una boleta única para votar. Realmente, esto es imposible de creer, olvidarse de la gente que los votó es muy triste. Ahora deberán aprender no sólo a votar de nuevo sino también a cobrar con tarjeta.

Se olvidaron de lo que la gente quería; la gente no quería entrar a un cuarto oscuro y encontrarse con muchos votos, por ejemplo, 17 de un partido, 12 de otro, 7 de otro, porque eso los confundía. No querían que se cambiara la papeleta por una boleta única con la cual no van a saber qué votan ni lo que deben poner, si es un “sí” o una cruz, o lo que sea.

Señor presidente, nos debemos a la gente, la gente común no pidió en ningún momento la papeleta sino que la pidieron los expertos, los sabios y los que estudian, porque para nuestra gente es más fácil entrar a un cuarto oscuro, elegir y doblar un voto que tener que preguntar a un experto cómo se vota.

Realmente, me cuesta creer que los legisladores de Unión por Córdoba, sobre todo, se hayan convertido en “levantamano” oficiales, por-

que saben perfectamente, por el lugar donde viven, que la gente necesita otra reforma, no ésta.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical seguimos sosteniendo que la reforma política debe estar acompañada de la reforma constitucional.

Adelantamos nuestro voto negativo al proyecto en tratamiento.

Nada más.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: creí que hoy tampoco me iba a dar la palabra. Tengo que aprender a pedir un minuto, como en el básquet, para que me presten atención.

No referirme a lo que pasó ayer sería de hipócritas, señor presidente. El legislador que hizo la presentación del proyecto de reforma, doctor Fortuna, dijo que la mayoría siempre nos escucha, que daban la palabra a todos; y dijo: “¿por qué se armó un escándalo ayer?”. Fue porque en este mismo recinto, en medio de los empujones y sin darnos el uso de la palabra, se pretendía sacar un proyecto en donde el consenso no era el jugador principal. También dijo que el bloque de la mayoría nos daba todas las prerrogativas.

Después se agregó, es cierto, que faltaban los despachos, pero, lo real y concreto fue que ayer hasta cercenaban la palabra de la oposición.

También escuché decir que fue un “arduo trabajo”. Vaya mi humilde respeto hacia los miembros de la Comisión para la Reforma Política, porque sinceramente fue loable su actuación. Pero los que más trabajaron para que ayer u hoy tuviéramos el despacho fueron el legislador Carbonetti y el legislador Brügge; eran las siete y cuarto de la tarde y no podían terminarlo, mientras estúpidamente –por eso discrepo también con la presidenta del bloque Vecinalista– esperábamos en este recinto el resultado del arduo trabajo de dos legisladores a quienes les habían encomendado tan tremenda tarea. Eso fue lo que sucedió ayer.

Hoy escuchamos que una de las fuerzas que se rasgaban las vestiduras dijo que “hubo un sospechoso cambio de actitud de algunos bloques”; esas fueron las palabras utilizadas hoy por un legislador del Frente Cívico.

Como hombres de la Unión Cívica Radical, no ponemos ninguna sospecha sobre las actitudes del legislador, porque nuestro partido lo condenó fehacientemente por las actitudes que tuvo.

Quiero decir que en política, a los efectos

de la credibilidad, el tema de la coherencia también suma. Nuestro bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, la semana pasada, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de esta Ciudad -donde casualmente los que se rasgan las vestiduras por la reforma política son mayoría absoluta- de creación de una comisión para la reforma política en ese ámbito. ¿Cuál fue la actitud de estos que hoy desprecian la Legislatura, y pretenden hacernos quedar mal a los que entramos a debatir en este recinto? No lo pusieron ni en el Orden del Día, ni siquiera le dieron tratamiento preferencial, teniendo la mayoría. Entonces, la careta que tienen al hacer este tipo de denuncias se les tiene que caer a pedazos.

Si nos pusiéramos en lugar de fiscales, como hacen ellos, diría –a partir de mi corta o larga experiencia como legislador- que cuando uno falta es porque algún pacto de silencio se puede haber hecho para que sea respetado no sé qué tipo de prerrogativa. Pero, no quiero que esta reflexión sea tomada como una imputación del que habla, sino como que hago uso de la misma imaginación con la que ellos cuentan; porque, ¡más pacto de silencio que el que hoy no estén en el recinto para decir lo que realmente piensan...! Está de más que lo repita.

La Unión Cívica Radical no hubiera entrado a este recinto –y esto que quede bien claro- si el bloque de Unión por Córdoba no hubiera tenido quórum propio para sesionar; porque eso sí sería ser lo que posiblemente estén pensando estas criaturas que se ponen en lugar de fiscales. Que quede bien claro, la Unión Cívica Radical no le hubiera dado quórum para tratar esto; pero consiguieron quórum propio, se pidió ayer un cuarto intermedio por una semana y nos dieron sólo hasta hoy –para este tipo de ley es muy poco tiempo- y el bloque de la Unión Cívica Radical está preparado para fijar su posición política.

¿Por qué digo esto, señor presidente? Escuché a Graglia cuando hablaba de los agoreros; nosotros fuimos esos agoreros que decíamos que el Gobernador estaba buscando un traje, y lo repetimos hoy. Por eso, le digo que tendría que haber terminado de cerrar la frase, porque estamos dando la cara diciendo cuál es la posición de la Unión Cívica Radical, que sostenemos desde el comienzo.

Y quiero decir esto -para que quede bien claro y por algunas preguntas que me hicieron en

algunos medios-: que la imaginación la dejen volar los integrantes del frente Cívico; ojalá que la imaginación no la hagan volar ninguno de los que tienen la responsabilidad de manejar la información o los medios. Ojalá que la imaginación sea del Frente Cívico y no haya ningún otro tipo de imaginación. Estamos expresando la posición que tiene la Unión Cívica Radical.

¿Por qué digo: “la posición que tiene la Unión Cívica Radical? He solicitado el uso de la palabra para expresarme sobre los proyectos de reforma política sometidos a consideración. Ya adelantó el presidente de mi bloque que nos vamos a oponer al proyecto del oficialismo, pero no puedo dejar de hacer algunas reflexiones, siendo consecuente con mis propias acciones, ya que los proyectos del oficialismo tienen varias coincidencias con un proyecto que presentara hace más de un año en esta Legislatura, el proyecto 11508/07, que ha sido –permítame una humilde expresión- plagiado en varios artículos. No escuché a ningún legislador del bloque oficialista decir que habían copiado textualmente mucho del referido proyecto.

Cuando el legislador Graglia dijo que sí conoce el proyecto al que hago referencia –si no, le doy oportunidad de que me desmienta solicitando una interrupción-, y que muchos se opondrán a la financiación de los partidos políticos, y continuó con una enumeración de cuatro, cinco, seis o siete puntos, yo pensé: “Se ve que tiene presente el proyecto que presentó la Unión Cívica Radical, tanto como otros proyectos presentados por el legislador Rossi y la legisladora Ana Dressino, y ha tomado esos temas en el mismo sentido.” Como no me pidió la interrupción -muchos dicen: “el que calla otorga”-, debo advertir que es cierto que plagaron varios artículos del proyecto de la Unión Cívica Radical.

Los proyectos del oficialismo tienen muchos errores. Sin embargo, están avanzando - como lo estamos haciendo notar desde ayer- con bastante apuro en algunos temas que merecerían mayor reflexión. Un proyecto más simple, pero más efectivo, fue nuestra idea en aquella oportunidad, y si lo comparamos con el despacho en tratamiento vemos serios defectos que generarán nuevos conflictos político-electorales. Por ejemplo, se está llevando a cabo una reforma integral a la

Ley de Partidos Políticos, en la que el capítulo referido a las elecciones internas sólo ha copiado la norma constitucional –artículo 104, inciso 22-, estableciendo las elecciones internas obligatorias, abiertas y simultáneas. Han sido tantas y tan bien sostenidas las observaciones de los diferentes partidos políticos sobre la reglamentación -tarea que se debe llevar a cabo en este recinto-, que finalmente el oficialismo decidió dejar este tema para más adelante, según sus dichos: “para una nueva ley específica”. Pero, ¡cuidado! porque este Gobierno ya nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer otra. No vaya a resultar que reglamenten las elecciones internas partidarias por decreto del Poder Ejecutivo.

En primer lugar, sostengo que, así como se prohíbe la doble afiliación, también debe impedirse la doble postulación. Por ello, en su oportunidad propusimos la prohibición de la sumatoria de votos en coincidencia con el despacho oficial. Esta es una necesidad sobre la que no hay que abundar demasiado. Hemos dicho que la sumatoria complica y lentifica la emisión del sufragio por el elector y el escrutinio de mesa tanto provisorio como definitivo, y sus ventajas son poco claras.

Si la ley de partidos políticos tiene una doctrina expresada en su declaración de principios y una base de acción política, no resulta lógico que un candidato pueda suscribir a más de un programa, tampoco resulta conveniente que un candidato pueda serlo por un partido cuya doctrina no sostiene. Entonces, el principio de afiliación única debe traducirse también en el concepto de candidatura única.

En segundo lugar, otra cuestión importante a regular es la limitación temporal de las campañas electorales. Nuestra propuesta en aquella oportunidad era de sesenta días para las elecciones legislativas y de 90 días para las de gobernador y vicegobernador. Respecto de la campaña estrictamente publicitaria, referida a la emisión, publicación o avisos en la prensa televisiva, radial y escrita, no disintimos con el proyecto oficial ya que nosotros proponíamos acotarla a treinta días.

En tercer lugar, respecto a la publicidad electoral diferimos expresamente con el proyecto oficial ya que sostenemos la necesidad de establecer un régimen de publicidad televisiva gratuita para los partidos financiada por el Estado, pensa-

mos en espacios televisivos porque esa publicidad es la más fuerte dentro de los medios.

Los espacios televisivos gratuitos en tiempos electorales son moneda corriente en muchos países, por eso en nuestro proyecto incorporábamos una norma que expresamente establecía la creación de un sistema de cupos publicitarios televisivos gratuitos para los partidos políticos.

A los fines de resguardar el interés de las emisoras de televisión abierta, proponíamos que el Estado provincial solventara el 50 por ciento de la tarifa de los espacios publicitarios ocupados. Creemos que esta iniciativa es útil para equiparar las chances electorales de todos los partidos, ya que solventaría la difusión de las propuestas y candidatos de aquellos partidos con menor cantidad de afiliados y recursos. La asignación de cuotas publicitarias diversas, lejos de resultar discriminatoria, constituye una garantía de justa competencia ya que se prohíbe la publicidad televisiva fuera de la gratuita; de tal forma, los electores no se verían sobrepasados por los bombardeos publicitarios de los partidos con más recursos, ello en defensa de la igualdad de oportunidades, principio elemental de nuestro sistema republicano de gobierno.

Por otra parte, ese proyecto preveía un debate de candidatos; esta sería una novedad en la legislación provincial al incorporar una de las propuestas del Encuentro Federal para la Reforma Política de establecer la previsión de un debate público entre quienes se postulan para Gobernador que no excluiría a ningún candidato.

También en ese proyecto proponíamos la prohibición de la difusión de las encuestas a boca de urnas. Entendemos que la actual previsión de la ley que impide la difusión de encuestas a boca de urnas desde las 8 a las 18 horas del día de los comicios es total y absolutamente insuficiente.

Creemos que durante el periodo de veda electoral el ciudadano necesita un tiempo de reflexión sobre su voto, que no puede ser alterado por permanentes anticipaciones del resultado electoral, que, como hemos visto muchas veces, resulta totalmente errado.

Asimismo, en lo que respecta a los resultados a boca de urnas, es decir, las encuestas realizadas durante el comicio, en nuestro proyecto preveíamos la necesidad de que no pueden ser difundidas sino hasta la hora 21:00 del día del comicio. Creemos fundamental una iniciativa de esta

naturaleza, que encuentra diversos motivos que la fundan; entre ellos, la necesidad de impedir que un partido candidato se declare ganador antes de la realización del escrutinio, lo que evidentemente altera la libre expresión de la voluntad política del elector.

Otro de los puntos centrales de nuestro proyecto –que ha sido receptado en el proyecto oficial– es la propuesta de una transformación del Código Electoral a los fines de encargar las funciones de autoridades de mesa a los docentes provinciales. Hemos observado, en diferentes y diversas elecciones, los inconvenientes derivados de la inasistencia –y en algunos casos de la falta de preparación– de los presidentes de mesa, lo que ha redundado en demoras innecesarias en el desarrollo del acto comicial.

Por último, hay un tema que consideramos esencial –que ni siquiera ha sido considerado por el oficialismo–, cual es la modificación de la Ley de Partidos Políticos incorporando el impedimento para postularse como candidato a cargos públicos electivos provinciales o municipales a los ciudadanos que hayan resultado electos, o estén ejerciendo un cargo público nacional, provincial o municipal, cuando el mandato para el que pretenden postularse inicie al menos seis meses antes de la finalización del mandato del cargo para el que ya fueron reelegidos, aun cuando no hubieran asumido o dejaran de desempeñarlo por renuncia.

En tal sentido, nos referimos a los casos en que una persona va renunciando y presentándose a nuevas elecciones, aun cuando tiene mandato vigente que finaliza con posterioridad a la asunción de su nuevo cargo. Quizás el ejemplo reciente más paradigmático sea el del señor Giacomino, que en un periodo de cuatro años se ha postulado para tres candidaturas, renunciando en dos oportunidades. Creo que este mecanismo es una desvirtuación de la democracia, ya que los cargos implican una función pública, cuya ocupación no es una mera facultad sino un verdadero compromiso y obligación frente al pueblo que elige por periodos determinados.

Creemos también que algunas propuestas del oficialismo son demasiado riesgosas. Córdoba ha vivido un trauma en la elección del 2 de septiembre de 2007, por eso no podemos hacer experimentos electorales, ya que el sistema político de la Provincia, desgraciadamente, no podría resistir un nuevo cimbronazo. Estamos preocupados por

algunas propuestas de laboratorio –con las que algunos podrán coincidir y otros no–, como es el tema de la boleta única, que no existe en ninguna provincia argentina; evidentemente nuestro país tiene sus propias particularidades y, si hay una provincia donde hay que tener especial cuidado con los experimentos, es la nuestra.

En definitiva, señor presidente, creemos que la reforma política debe ser hecha con los pies en la tierra, reconociendo los aciertos y errores del pasado y, fundamentalmente, respetando las ideas de quienes supieron expresarlas antipadadamente.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra la legisladora Rivero.

Sra. Rivero.– Señor presidente: en realidad, ha sido –tal cual lo expresara en la primera intervención a cargo de este bloque– muy difícil sacar una conclusión con relación al camino a seguir con este proyecto en tratamiento.

No voy a abundar en detalles acerca de la trayectoria recorrida por todos nosotros para llegar a este día, porque mucho se dijo de la Comisión de Expertos y del discurso que hace casi un año hizo el actual Gobernador, contador Schiaretto con respecto a su compromiso asumido para revertir esta situación de precariedad política y democrática, formulando proyectos para que algo cambie en nosotros.

Es cierto que la Comisión de Expertos –discutida en un principio– fue puesta en tela de juicio, no por sí ni por quiénes la conformaban, sino porque el descreimiento nos había invadido a todos. También es cierto que venimos de un largo proceso de descomposición de la práctica democrática, en tan solo 25 años de esta joven vuelta a la democracia, con lo cual les digo que nos queda muchísimo por aprender.

También es cierto que cuando vimos –con el transcurso del tiempo– la actuación de esta Comisión de Expertos, comenzamos a valorar de manera diferente y a tener alguna expectativa distinta con relación al dictamen al que arribara, y dicha comisión no nos defraudó, realmente hubo objetividad, mucha calidad y nos brindaron una herramienta que resultó indispensable, como punto de partida y base de datos objetivos, para el análisis de estos proyectos que estamos tratando, y de

muchos más que espero que tratemos a lo largo de nuestro mandato.

Luego constituimos, por el voto de esta Cámara, la Comisión para la Reforma Política. Al principio trabajamos desorganizadamente, y luego perseguimos objetivos tratando de lograr y sentar acuerdos. De ese modo, llegamos a tener buenos avances, aunque no en todo lo que queríamos relacionado con los objetivos que nos proponíamos y con los primeros pasos que pretendíamos dar.

Hoy estamos aquí porque tuvimos avances; al día de hoy, con el nuevo Código Electoral y demás leyes que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones de esta democracia, este proyecto en tratamiento significa un avance. Después de un año tumultuoso, que ha sido muy complicado en materia de política provincial y nacional, como así también en el mundo, haber logrado avanzar para mejorar en algo nos pareció suficiente base como para estar aquí tratando este proyecto.

Si bien es cierto que sostuvimos nuestro discurso, desde un principio, la necesidad de reformular la Constitución para corregir de raíz los problemas que la democracia viene acarreado a nuestra Provincia y que hicieron crisis el 2 de septiembre del año 2007; si bien es cierto que nosotros hemos sido muy críticos a todo lo que sea reforma a medias, sin reforma de la Constitución; este año, que hemos convivido con el objetivo de la reforma política de la Provincia, nos ha servido para darnos cuenta de que lo que hoy estamos tratando es casi más de lo que podíamos lograr, porque coexistiendo a lo largo de todo este año con el tratamiento de los temas que tienen que ver con la reforma política, hemos sido testigos de pésimas prácticas políticas y democráticas, que fueron marcadas y denunciadas en este recinto en cada oportunidad que sucedieron.

Entonces, con semejante baja calidad de prácticas políticas, realmente este proyecto es muy bueno, y eso que todavía le falta para que sea lo que queremos. En ese sentido y con esa lógica, desde este bloque decidimos, casi sobre la culminación de las reuniones de la Comisión para la Reforma Política, acompañar con nuestra firma este proyecto, y sentíamos que no debíamos ser sólo nosotros los que lo hiciéramos sino cada uno de los bloques que habían conformado la comi-

sión, porque es cierto que aquellos famosos veinticinco puntos que el oficialismo propuso como base para la formulación de esta reforma tenían que ver, en gran medida, con lo que se había elaborado en conjunto en la Comisión para la Reforma Política.

Superada la sorpresa de ver traicionada la honestidad intelectual en la que creíamos en aquel momento, como lo expusimos en la última de las reuniones de esta Comisión de Reforma Política, cuando se nos ofreció acompañar, con la posibilidad de hacer aportes para la mejora del proyecto, lo consideramos muy importante, precisamente porque habíamos trabajado largos meses con ese objetivo.

Hoy estamos aquí porque este tema debe ser una política de Estado y, más allá de estas actitudes mezquinas, que ojalá se vayan corrigiendo con el tiempo, consideramos que vale la pena dar un primer paso en varios sentidos: como ejercicio de esta Cámara tan maltrecha, tan mal conformada en cuanto a la representatividad con relación a lo que fue la elección del 2 de septiembre, con esta unicameralidad que nos perjudica seriamente, con esta falta de presupuesto que nos perjudica en el funcionamiento democrático y representativo de esta Cámara pero que, a pesar de todo, ha logrado estos mínimos consensos para formular este proyecto.

Vale la pena estar acá, vale la pena estar hoy tratando de hacer aportes para que el proyecto sea lo mejor posible. Con esta frase: "lo mejor posible", que parece común, estamos significando ni más ni menos que esta es la reforma posible, tal como lo expusimos en la última reunión de la Comisión para la Reforma Política de la que participamos. No nos dio el "cuero" para más por las pequeñeces de cada uno, por las mezquindades y por este pésimo folclore de mala práctica política que ha venido imperando y creciendo a medida que avanzó esta joven democracia. Reitero, esta reforma es buena y sería muy bueno que, además, cambiara la práctica democrática.

Con motivo de la reunión que tuvo la Comisión para la Reforma Política con los decanos de las tres facultades, en algún momento sugerimos, desde este bloque, a las universidades que trabajaran de manera científica —como ellos bien saben hacerlo— en la constitución de una especie de observatorio de prácticas políticas porque, en realidad, nos hace falta permanentemente un espejo

que nos esté reflejando lo mal o bien que nos va con las prácticas que adoptamos. Porque, desafortunadamente, parece que con el tiempo han surtido un efecto anestésico en la población, que hoy debiera estar siguiendo esta sesión con todo interés y lamentablemente pasa como una más de tantas sesiones.

Fíjense que ni siquiera estamos todos los que deberíamos estar interesados en apoyar o no este proyecto. Ni siquiera hacia adentro hemos logrado tener un grado de conciencia cívica acorde con una verdadera reforma política, que primero pasa por una reforma de las actitudes de la clase política.

También pasa por una reforma de las actitudes en cuanto a la participación ciudadana. Es mucho más fácil sentarse en la vereda de enfrente a criticar y pensar que todo viene "por izquierda" y "mal nacido" que ponerse a trabajar, participando y proponiendo. Siempre es mucho más fácil sentarse en un bar y ser crítico.

Es mucho más difícil poner actitud para tratar de que algo mejore, aunque no sea todo. A esto pudimos llegar, no hemos podido llegar a más todavía, pero tenemos el desafío de hacerlo en los próximos tres años de gestión. Quienes no están sentados aquí tienen el desafío, pero si participan, revisando actitudes y volviéndose constructivos y preactivos, y no destruyendo aún más, en cuanto a la propaganda política que, a veces, desde la propia clase política se fomenta, este sistema democrático.

En este sentido, valoramos muchísimo esta sesión y estar sentados aquí, nos ha costado mucho y nos va a seguir costando la actitud que adoptamos, pero valoramos estar haciéndolo y lo hacemos con verdadera convicción.

En este sentido, quisiera pasar a una faz mucho más práctica, seguir haciendo proposiciones para que este proyecto que estamos tratando sea lo mejor posible, por lo menos a nuestro entender.

En cuanto a las disposiciones de este proyecto, hemos estado revisando lo relativo al voto de los extranjeros. Los artículos 9, 17 y 20 tienen medidas que hacen que el voto de los extranjeros se vuelva obligatorio.

En este sentido, antes de pasar a proponer las correcciones que nos parecen necesarias, voy a dar la fundamentación de manera corta pero bastante concreta. Es muy peligroso para la prác-

tica política –precaria y de muy baja calidad que tenemos en nuestra sociedad–, que el voto de los extranjeros sea obligatorio. Esto puede llegar a convertirse en otro elemento esclavizante de la inmigración que hoy está en nuestro país como mano de obra “barata”, puede llegar a convertirse en la amenaza de “o me votás o te tenés que volver a tu país y morirte de hambre”.

No podemos permitir que ese riesgo exista; no podemos permitir que exista ningún riesgo que ponga en juego, todavía más, lo desprestigiado que está la práctica política. De manera que proponemos que en el artículo 9 de este proyecto, donde dice que: “los extranjeros son también electores provinciales” –no voy a leer todo pero pido que por Secretaría se tome nota para la corrección, en caso que estén de acuerdo– se modifique por: “los extranjeros que, reuniendo los mismos requisitos establecidos en el artículo anterior, y teniendo una residencia permanente y continua en la Provincia de Córdoba superior a cinco años, que voluntariamente soliciten su incorporación en el fichero correspondiente”. Se refiere al fichero que corresponde a extranjeros. ¿Por qué? Porque necesitamos que el voto del extranjero sea voluntario, no obligatorio; no estamos preparados para extranjeros que voten obligatoriamente. Y a esto debemos reconocerlo, porque si no hoy seríamos muchos más aquí y habría mucho más interés en la calle por lo que está sucediendo en este recinto.

En relación al mismo tema, el artículo 17 debería modificarse, agregándose un inciso 7º que exprese: “Los extranjeros que no hubieren solicitado su incorporación a los ficheros, también quedan exentos de la obligación de votar”. El artículo 17 es el que justamente hace referencia a quienes quedan exentos de la obligación de votar.

El artículo 20 también debería modificarse para resultar congruente con lo expresado, y en su inciso 2º debiera decir: “El fichero de electores extranjeros contiene la ficha de todos los electores que voluntariamente hubiesen solicitado su incorporación...”, y sigue como estaba redactado. Esto en cuanto al voto de los extranjeros.

También hemos observado en el artículo 35º una cuestión práctica -casi de orden menor pero que sería muy bueno que fuera puesta a consideración porque suele ser una necesidad, sobre todo, de los partidos más chicos –que tiene

que ver con incorporar en este artículo, donde se refiere la distribución de ejemplares del padrón electoral, que este padrón se distribuya en “soporte papel y digital”, no como opción papel o digital, sino papel y digital por una necesidad luego de reproducción para acercar rápidamente a las distintas sedes de los partidos políticos el padrón correspondiente, o las partes que corresponda a cada jurisdicción. Esta es una cuestión exclusivamente de orden práctico, no de práctica política.

Para continuar con las modificaciones propuestas, en el artículo 66, que trata sobre las prohibiciones, sugerimos que en el inciso 4º se elimine el párrafo que dice “en un radio de 100 metros”, quedando redactado de esta manera: “Inciso 4º. Ofrecer o entregar a los electores facsímiles de boletas únicas de sufragio...”, eliminando la expresión posterior que lo reduce tan solo a los 100 metros. Y quiero contextualizar esta propuesta porque estas prohibiciones están referidas al día del comicio, y para eliminar todo resto de política clientelar debiera estar prohibida la distribución en cualquier ámbito de facsímiles de la boleta de sufragio, porque para la explicación y para las instrucciones que los partidos o la publicidad, oficial o privada, hagan del modo de votar, bastan los días anteriores al sufragio. No es saludable que ese día veamos combis cargadas de electores con el facsímil con la instrucción de cómo deben llenar la boleta. No es saludable que a la gente se la siga llevando de la nariz con un voto ya casi hecho; por eso solicitamos que también sea considerada la eliminación de ese párrafo, recordando que esto se refiere sólo al día de la elección.

A más de esto, también debo decir que, por supuesto, nos gustaría estar votando un Capítulo VII que sea diferente, tal cual el legislador preopinante por el ARI ha dicho de la misma manera. Nosotros quisiéramos estar votando un sistema electoral provincial que tenga que ver con una Constitución ya reformada; pero dado este pequeño racconto que hemos hecho de la pésima calidad de las prácticas políticas que todavía debemos reconocer que existen entre nosotros, no sería saludable hoy estar proponiendo ya mismo una reforma constitucional, porque todavía necesitamos crecer en los consensos y seguir puliendo las prácticas políticas de cada uno de nosotros y de los partidos a los que estamos representando en

esta Cámara.

También debo decir que al momento de acompañar en las firmas el proyecto en consideración, hicimos mención a que este modelo de boleta única no nos parecía el mejor, no nos parecía saludable, justamente, desde el punto de vista de sentar una verdadera diferencia al momento de la elección, sino que hubiésemos preferido que tuviera cuerpos separados para cada uno de los Poderes –Ejecutivo, Legislativo- y Tribunal de Cuentas porque de esa manera no estaríamos limitando a los electores a buscar, con bastante dificultad en el modo propuesto de boleta única en el caso de querer hacer una elección por una fuerza política para el Legislativo y por una fuerza diferente para cargos ejecutivos.

En realidad, creemos que lo que condiciona seriamente las elecciones que hasta hoy venimos teniendo es el corte de boletas; la elección diferenciada de tramos para distintas fuerzas nos hubiera parecido una práctica muy saludable desde el punto de vista político y desde el punto de vista democrático. El electorado debe tener la facilidad para votar de manera diferenciada, cuando así lo dispone.

Por otra parte, este modelo de boleta única que nos hubiera gustado tener –el que separa por cuerpos de boletas a los distintos Poderes- hubiese sido la mejor forma -despacio y respetando los tiempos de aprendizaje de la ciudadanía- de preparar el terreno para el voto electrónico, sistema que sí nos parece un verdadero avance y que debe ser emprendido como posibilidad de reforma a fin de terminar de limpiar todo vestigio de vieja práctica política. Pero necesariamente debemos avanzar primero en tratar de hacer funcionar lo que estamos reformulando hoy.

Estamos convencidos de que apoyando este proyecto y proponiendo mejoras se está contribuyendo a mejorar, al menos un poco y de manera tal vez simbólica para la población, las posibilidades de participación, de sentirse realmente representados por la clase política.

Tenemos ese compromiso y vamos a seguir llevándolo adelante. Este es tan sólo el primer paso en este año de gestión. Es tan sólo un primer paso, y verdaderamente estamos convencidos de que era necesario darle prontamente a la población una señal de que estamos dispuestos a avanzar en el sentido de reformular la vida democrática de nuestro pueblo. Era absolutamente ne-

cesario, por eso estamos acompañando este proyecto.

Por ello, vamos a seguir insistiendo durante el transcurso del próximo período legislativo en que se generen de manera urgente las necesidades para, por consenso, proponer la reforma de la Constitución.

Por lo tanto, estamos convencidos en apoyar en esta sesión el proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Heredia.

Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: en estas circunstancias de intemperancia, en las que se quieren imponer ideas a los gritos, con insultos y con descalificaciones de todo orden, es bastante difícil tratar de debatir con nobleza y sin cinismo este proyecto de ley. En los espacios donde la calumnia y la difamación aparecen en lugar de las ideas y las propuestas constructivas, es muy difícil debatir, y lo que acabo de mencionar no se da solamente en este recinto. Sin embargo, creemos que el progreso, el avance y la transformación de nuestra amada Córdoba no debe detenerse por la actitud de algunos perturbadores.

Señor presidente: somos respetuosos de las actitudes de los demás pero tenemos que ser sinceros, preferimos las razones a las verborragias chabacana; respetamos todas las ideas, sobre todo la de nuestros opositores, pero -entiéndase bien- nosotros también tenemos nuestras ideas, y en el marco de la representación política de la cual hemos sido investidos, tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlas efectivas y lograr concretarlas porque en ellas creemos.

Con esta reforma político electoral se inicia una nueva etapa en lo político para los cordobeses, en ella se exponen claramente los lineamientos básicos de una reforma que es inédita y se puede considerar audaz, y va más allá de lo que sus detractores hubiesen hecho de haber tenido la posibilidad de tener la iniciativa.

Todos aquellos que pensaban lo contrario tenían la oportunidad de plantear libremente sus opiniones en este recinto siempre que lo hicieran en el marco del respeto y el orden que este debate merece; sin embargo, hay quienes creen que pueden obtener mejores resultados recurriendo a la violencia verbal. Si son verdaderos demócratas su acción debe hacerse sentir aquí, en el Parlamento,

en la Casa de las Leyes, por los medios que nuestro sistema prevé y no con desplantes o desmanes verbales. ¡Qué causalidad!, todos estos desplantes se hacen contra los colegas y las autoridades que, como a ellos, el pueblo libre y democráticamente eligió.

Nosotros no tenemos la culpa de que el pueblo o gran parte de él –y sobre todo en el interior de la Provincia– no los acompañó con su voto porque no tuvieron la inteligencia, el tino o el valor para tomar la iniciativa política en este tema; no le deben echar la culpa ni al Gobierno ni a la oposición, y mucho menos inventar calumnias. Deben recapacitar sobre su conducta y buscar el remedio en ellos mismos. Decía el ex presidente Perón: “Es en la conducta de cada hombre, partido o legislador donde se encuentra su perdición, jamás en la conducta de los demás”.

Una actitud irresponsable o amenazadora no es la conducta propia de los que se dicen democráticos; la prudencia y la honradez suelen ser la mejor herramienta para entrar en todas partes, aún para ganar elecciones que seguramente los detractores de esto ambicionan para sí.

Señor presidente, señores legisladores: nosotros consideramos indispensable realizar en estos momentos las reformas que se están proponiendo, que han sido minuciosamente estudiadas y recopiladas en este cuerpo serio de modificaciones orientadas a mejorar y actualizar el sistema político electoral en la Provincia de Córdoba.

Hemos cumplido con lo que le prometimos a la sociedad cuando expresamos los 25 puntos sobre esta reforma –cuando pensábamos llevarla adelante–, y basta con hacer un análisis global sobre ella para comprender que estamos poniendo patas para arriba al sistema político-electoral en la Provincia de Córdoba, al que le introdujimos modificaciones importantísimas –revolucionarias, me atrevería a decir–, en el marco de la historia política de Córdoba y de toda la República Argentina.

Suprimir las sumatorias de votos entre los partidos y las candidaturas, repetidas en distintas categorías, no es sólo un avance y un paso sino, lo que es más, un salto cualitativo a la distancia y en profundidad, porque vamos a transformar, para no volver nunca más atrás, estos sistemas que fueron absolutamente cuestionados por toda la

sociedad.

La boleta única de sufragio, señor presidente, profundiza aún más los cambios revolucionarios que estamos planteando, y quizás muchos de los que planteaban avanzar en reformas porque denostaban el sistema actual, con la demostración que han hecho en estos últimos días, dudo que hubiesen llevado adelante reformas de este tipo.

Por otro lado, se plantea fortalecer el sistema de control del sufragio a través de los presidentes de mesa; se crea una figura nueva que va a garantizar, junto con ellos, que todo el trámite interno de los establecimientos donde se vote se haga con absoluta transparencia y seguridad.

En lo que hace a las campañas electorales, señor presidente, se disminuye el tiempo asignado a ellas: algo muy cuestionado, por eso es que se discute demasiado acerca de las fechas de las elecciones, porque en realidad lo más grave de ese sistema es que algunas campañas electorales pueden llegar a durar muchísimo tiempo, con los costos económicos, sociales y políticos que ello conlleva.

Hemos escuchado por allí que nos dijeron: “¿están seguros de que, siendo Gobierno, están dispuestos a ir tan lejos con estas reformas?” Piensen, señor presidente, señores legisladores, que el propio Gobierno impulsa una reforma que le va a limitar sus posibilidades de hacer publicidad oficial hasta 30 días antes de las elecciones; el propio Gobierno se limita impulsando una reforma que plantea que 15 días o más antes de las elecciones no podrá hacer inauguraciones de obras públicas ni podrá lanzar nuevos planes de Gobierno, salvo aquellos estrictamente necesarios o urgentes. No hay ninguna duda de que difícilmente otro partido político, desde el Gobierno, hubiese impulsado –como lo está haciendo en este momento el bloque de Unión por Córdoba y el Gobierno de la Provincia– una reforma de esta naturaleza.

Se regulan, además, las encuestas electorales; no es cierto, como se dijo por ahí, que en el caso de las encuestas de boca de urna solamente nos ocupamos de un determinado período; por el contrario, hemos propuesto que la publicidad para dar a conocer estas encuestas no sólo estén prohibidas hasta tres horas después de finalizado

el comicio, sino también durante todo su desarrollo: esto es, durante el comicio y hasta tres horas después de finalizado no se podrán difundir ni publicar encuestas de boca de urna, a fin de evitar la manipulación de la opinión pública, sobre todo de aquéllos que, hasta finalizado el cierre de las escuelas, todavía no han podido emitir su voto y que, sin embargo, están escuchando por los medios de comunicación el adelanto de los resultados.

Respecto del financiamiento de las campañas políticas, tomar una decisión de hacer una reforma inédita: no existe en la República Argentina un Estado provincial, ni siquiera el Estado nacional, que se haga cargo de financiar parte de las campañas políticas, con la finalidad de garantizar a todos los partidos políticos intervinientes en una contienda electoral y a todos los candidatos que tendrán acceso a los medios electrónicos de comunicación, radio y televisión, la igualdad de condiciones. Esto no existe –ni existió– en la Provincia ni en el país, y hay que tomarlo no sólo desde el punto de vista de un cambio trascendental sino para dar el puntapié inicial de lo que –seguramente– el resto del país acompañará porque plantea, en serio, el fortalecimiento del sistema democrático a través de sus instituciones naturales, como son los partidos políticos, garantizándoles que van a tener acceso a los medios de comunicación masivo, que resultan –de acuerdo al informe de los expertos– los más caros y difíciles de acceder para las fuerzas políticas, sobre todo las pequeñas o las que no tienen recursos.

Para estos recursos se establece un sistema de distribución por el cual todos van a tener acceso a lo mismo y permite que aquellos que tienen una mayor masa electoral y mayor compromiso puedan tener más recursos en función de esa categoría. Es por eso que se establece una distribución del 30 por ciento en condiciones iguales para todos los que participen de la contienda, y el otro 70 por ciento, a distribuirse en forma proporcional, de acuerdo a los resultados de las elecciones anteriores. Y no se queda sólo en esto, que de por sí es innovador y transformador, sino que avanza en el financiamiento público de los partidos políticos de la Provincia de Córdoba.

Todos sabemos que la Nación prevé, en su legislación, un financiamiento para los partidos políticos. En este caso hemos avanzado ya que consideramos que el fortalecimiento de estas institu-

ciones permite que las mismas puedan desarrollarse a lo largo de su historia, haciendo conocer quienes son, cuáles son sus propuestas, sus doctrinas, capacitando a sus cuadros dirigenciales que, eventualmente, podrían llegar a ser funcionarios de Gobierno. Para todo esto se necesitan recursos, de lo contrario las pequeñas instituciones más débiles tenderán a desaparecer; esto, en serio, apunta a promover, desarrollar y fortalecer a los partidos políticos. Es por esto que esta reforma introduce, por primera vez en un Estado provincial en la República Argentina, el financiamiento de los partidos políticos.

También se avanza, en la Justicia Electoral, con respecto al mejoramiento de sus sistemas técnicos para prestar el servicio relativo a la preparación, el control de las elecciones, candidaturas, gastos de campaña, gastos de los partidos políticos, dándosele un rol que no tiene, hasta ahora, al Consejo de Partidos Políticos.

Señor presidente, para no abundar, ya que este tema ha sido abordado por oradores que me precedieron, en el Régimen Municipal y Comunal Electoral se dispone que aquellas comunas y municipios que no tengan Carta Orgánica puedan utilizar el sistema de “voto único”. Se establece un plazo de hasta 120 días para las elecciones pero no se avanza sobre las autonomías municipales, como aquí mal se ha dicho.

Señor presidente, señores legisladores: esto es una apretada síntesis, simplemente para expresar que el alma de la concepción política que importa la reforma política, es decir, los fines que el Estado provincial persigue para garantizar a todos los ciudadanos de Córdoba un sistema adecuado a la realidad política actual y con vistas al futuro, implica concebir este proceso como una política de Estado.

Insisto nuevamente con el Estado; decía el ex Presidente Perón: “el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado”, y el Estado en la Provincia de Córdoba, y en esta reforma que se propicia, abandona la neutralidad en el sostenimiento y afianzamiento del sistema democrático y participa, dentro de las funciones que le son propias, en el fortalecimiento de un orden positivo asegurando a los ciudadanos la libertad y la seguridad de elegir a quienes los representen. Como dije, esto se hace a través de la ayuda del Estado con los recursos de todos los ciudadanos para que este sistema funcione.

El régimen de los partidos políticos, señor presidente, apunta a impedir la atomización de las fuerzas políticas y su continua división, así como la creación de nuevos partidos porque, en realidad, poco le importa el interés de la comunidad y se convierte en el representante de intereses sectoriales o espurios sin tener la finalidad de perseguir el bien de la comunidad. Entonces, el afianzamiento de los partidos políticos impide el debilitamiento del sistema democrático y la pérdida de su eficacia y agilidad permitiendo, a partir de este fortalecimiento, la difusión de las pautas culturales prodemocráticas.

Señor presidente, señores legisladores, somos los actores y, a su vez, las víctimas de la crisis acaecida a fines del 2007, y nos hacemos cargo de ellos; sin embargo, los más conspicuos representantes de la lucha por la transparencia y la legitimidad, los campeones de las denuncias por las supuestas barbaridades cometidas u ocurridas en el sistema en aquella oportunidad, rehuyen el debate, se niegan a asumir compromisos y a participar en la construcción de esa sociedad mejor que tanto pregonan.

Estos “cruzados” de la transparencia se callan, sí, señor presidente, callan, omiten y aún niegan hechos como el de la tristemente célebre “Tiendas Mechi”, ejemplo de fraude consumado del que, paradójicamente, hace dos días se cumplieron dos años, fenomenal fraude que efectivamente se consumó e hizo posible el ex Intendente de esta ciudad Luis Juez. Semejante fraude generó un escándalo tal que hizo que ese ex Intendente debiera suspender una Consulta Popular que había convocado.

Sin embargo, hoy no vemos en este recinto moños negros, divisas negras, carteles en las bancas, expresiones de la memoria para que tal hecho no vuelva a ocurrir, ni condenas públicas, porque los que hoy no están sentados en esas bancas son enemigos de las barbaridades, pero de las barbaridades de los demás no de las que ellos cometen cuando les toca llevar adelante la función de gobierno.

Hace menos de un año, cuando se hizo presente en esta Legislatura la Comisión Consultiva de Expertos designada por el Gobernador de la Provincia para emitir dictamen acerca de la situación político electoral e institucional de la Provincia

de Córdoba, en el patio se hizo una conferencia de prensa para repudiar la presencia de los miembros de este Cuerpo o de esta Comisión Consultiva de Expertos y, además, se reclamaba a este Poder Legislativo el privilegio de tratar y discutir una Reforma Política Electoral para los cordobeses. ¿Dónde están esos cordobeses, esos que reclamaban en el patio denostando a esta comisión y reclamando a este Cuerpo la posibilidad de debatir la reforma política que los cordobeses necesitan?

Hoy no solamente se niegan al debate sino que, además, tenían arteramente preparado un escándalo porque, como perdieron la iniciativa política, la capacidad de seguir engañando a los cordobeses con calumnias, infundios y falsas denuncias, decidieron pergeñar una estrategia escandalosa que les permitiera sacarse una foto en los medios de comunicación para denostar algo para lo cual ni siquiera habían presentado un proyecto o participado mínimamente de la comisión que se estableció en esta Legislatura.

Sr. Presidente (Campana).- Disculpe, señor legislador, el señor legislador Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Heredia.- No.

Hoy se plantea descaradamente, por parte de algunos, que esta sesión se lleva adelante por un acuerdo espurio. Rechazamos enfáticamente esta acusación, no solamente por las concepciones y convicciones políticas de nuestros compañeros de bloque sino también por respeto a cada uno de los legisladores y bloques que se hicieron presentes aquí. No tienen derecho a ensuciar la actitud política de quienes dan los debates que la democracia y el pueblo exigen.

La democracia implica, de hecho, un acuerdo de voluntades y espíritus sobre la base de la vida en comunidad. No se concibe una sociedad sin fe en sí misma, sin ideas, y desarmada frente a los que usan la libertad para destruirla.

Ahora bien, señor presidente, debemos saber que una reforma política modifica una estructura de poder dada y genera una nueva relación de poder. En ese sentido, debemos entender que la tolerancia democrática no consiste en tolerar al intolerante, sino en garantizar al ciudadano un marco de respeto a sus preferencias políticas y que las mismas serán valoradas a través de la se-

guridad jurídica que proponemos con este proyecto.

Por ello, señor presidente, podemos sintetizar las innovaciones que estamos planteando en tres expresiones globales: el fortalecimiento de las instituciones de la democracia; la democratización de los métodos de elegir a los sujetos del poder político y el perfeccionamiento técnico del proceso electoral, satisfaciendo con ello una necesidad que fue sintetizada por la Comisión Consultiva de Expertos en su informe "Así no va más".

Napoleón, al final de sus años, en Santa Elena, confesaba que su verdadera gloria no había sido ganar cuarenta batallas porque una sola, Waterloo, iba a borrar el recuerdo de todas las victorias. Pero lo que nadie podrá borrar, decía, lo que vivirá siempre, "será mi Código Civil".

A lo mejor nos resulta difícil captar cuáles son los motivos para que un político considere una labor jurídica como su gran obra. Pero, en verdad, señor presidente, todo cambio o revolución social, toda necesidad de reforma si se acepta y se trabaja para producirla, se solidifica y perdura en un nuevo ordenamiento jurídico. He ahí la cuestión.

Podemos decir entonces, sin avergonzarnos, que esta reforma política-electoral en la Provincia de Córdoba podrá ser exhibida tanto por el Gobierno de la Provincia como por los legisladores que debatieron su contenido, su significado y sus objetivos, así como por todos los cordobeses, como la obra que proyecta hacia el futuro todos los diálogos, los acuerdos o desacuerdos y los consensos, y que la misma seguramente estará impregnada de una precisa cosmovisión política, como anunciara nuestro Gobernador el 1º de febrero de este año. Nos decía que querían honrar su palabra, y que para seguir honrándola, luego de haber puesto en funcionamiento esta Comisión Consultiva de Expertos, íbamos a acometer la reforma política-electoral de Córdoba de una manera significativa.

Nos decía que la calidad de los integrantes designados para conformar la comisión que iba a trabajar en el tema con absoluta autonomía del Poder Ejecutivo, nos permite suponer que las conclusiones serán muy valiosas para quienes deberán debatir y aprobar la reforma, como son los integrantes de esta Legislatura. Es decir, sólo se atribuía para sí el inicio, el puntapié inicial, la iniciativa política, porque había entendido lo que la sociedad le había insinuado, le había querido de-

cir o le había dicho a los gritos.

Esto habla a las claras de que, a diferencia de la oposición de algunos, estamos en presencia de un dirigente de peso, de envergadura.

Por eso, señor presidente, decía Hegel en su "Fenomenología del Espíritu": "No es difícil darse cuenta de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época". Parafraseándolo, podemos decir que a partir de la sanción de esta ley habremos cerrado un período para iniciar otro, en que todos deben tener como regla de conducta política aquello que se acordó democráticamente y que permitió que se hiciera sólo lo que el pueblo quiere, y que además fuera reclamado por la mayoría de los cordobeses.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.

Sr. Faustinelli.- Señor presidente: recién escuchaba al legislador Dante Heredia, quien en distintas oportunidades hizo mención al notable trabajo de la Comisión de Expertos.

Es cierto que nosotros, en un momento dado, planteamos que el debate de esta reforma era un papel que nos correspondía a los legisladores de la Provincia de Córdoba.

Pero entendíamos el espíritu y el trabajo serio de estos expertos y, a su vez, creímos, en esa oportunidad, en las intenciones del Gobernador de la Provincia que advirtió la necesidad de una verdadera reforma política, después de lo sucedido el 2 de septiembre.

Esto lo planteamos desde el radicalismo, porque nunca hablamos de fraude; siempre planteamos la necesidad de establecer pautas claras en un sistema electoral, en la necesidad de no contar más con la sumatoria de votos.

Pero, parece que el legislador Heredia, tomó solamente parte de lo que expidió en su informe la Comisión de Expertos, porque también habla, en ese librito que titularon "Así no va más", de la necesidad de la reforma constitucional.

Nosotros decimos, tal cual lo planteó el legislador Nicolás, que el trabajo de la Comisión de Expertos es loable porque, por mayoría, dictaminó la necesidad de la reforma constitucional, a pesar de que no habían ni empezado a trabajar en los primeros días, cuando el propio Gobernador, a través de su Ministro de Gobierno, dijo que no estaba dispuestos a reformar la Constitución provincial.

Entonces, desde nuestra bancada, le decimos al legislador Heredia –no sé a quién se habrá referido con lo de los insultos o los desagrazos, la falta de respeto- que estamos aquí para plantear la postura de nuestro partido, para recordarle que Unión por Córdoba ya lleva nueve años en el Gobierno atropellando las arcas provinciales, hipotecando el futuro de los cordobeses, y en este último año también atropellaron a los jubilados provinciales. Hoy han atropellado el consenso al que se habían comprometido tener para que esta reforma sea una verdadera reforma política que contenga a todos los partidos representados en esta Legislatura.

Señor presidente, ¿por qué estamos aquí, más allá de que creemos que se ha atropellado el consenso? Estamos aquí porque el radicalismo quiere dejar sentado que es el único bloque partidario que se opone al proyecto oficial, lo que ratificamos luego de haber escuchado a los demás bloques presentes.

Digo esto porque debemos ser consecuentes y criteriosos en seguir la postura mantenida en la Audiencia Pública por nuestro presidente partidario. Si usted me lo permite, señor presidente, voy a leer algunos párrafos de la posición de nuestro partido en dicha audiencia. En esa oportunidad manifestamos que: “para que una reforma abarque importantes aspectos del proceso electoral, como se ha discutido, y pueda avanzar decididamente, y con rango constitucional sobre órganos de control para garantizar mayor transparencia de las políticas públicas, sobre el mejoramiento del sistema de justicia, del Ministerio Público y alentarnos definitivamente para resolver lo que, a nuestro criterio, es la desmesurada desproporcionalidad e inequitatividad de la representación parlamentaria que fuera el resultado de una apresurada reforma constitucional”.

Señor presidente: consideramos que es absolutamente imprescindible no frenar –como dijo el propio Gobernador- el avance y la profundidad de una reforma política seria y contundente que nos debemos.

Por eso, nos preguntamos por qué se tiene que aprobar hoy, con tanta rapidez, esta reforma que todos creemos necesaria. Existe una urgencia injustificada del bloque de la mayoría, porque estamos discutiendo a gran velocidad este tema que,

si el oficialismo no toma la decisión de convocar conjuntamente con las elecciones nacionales de 2011, todavía no sabemos si se va a poner en práctica en el 2015.

También queremos dejar totalmente en claro que coincidimos en muchos temas planteados en las primeras reuniones que hemos tenido en la Comisión de la Reforma Política: eliminatoria de la sumatoria de votos, revisión de la publicidad oficial durante la campaña, regulación de las encuestas en boca de urnas, acortamiento de las campañas, revisión para los requisitos de personería para los partidos provinciales y su personalidad jurídica, fecha fija de elección, prohibición de candidaturas independientes, dictar una ley vinculada a la transparencia y financiamiento de los partidos políticos, entre tantas otras iniciativas que seguramente en la oposición y en el propio oficialismo profundizan más las coincidencias que las diferencias.

Decía el presidente de nuestro partido, el doctor Negri: “Merece un párrafo aparte y nuestra honda preocupación el análisis de la implementación de la boleta única -que hoy están discutiendo en este recinto. “A nuestro criterio, subsisten serios interrogantes para su aplicabilidad y, fundamentalmente –como lo expresaron intendentes de distintos partidos políticos de esta Legislatura-, se puede vulnerar la autonomía municipal, bandera irrenunciable para nuestro partido”. A pesar de que el legislador Heredia dijo que no se vulnera dicha autonomía, si le quitamos las atribuciones que tienen los intendentes municipales, a través de la Ley Orgánica municipal -por ejemplo, en el acotamiento de la fecha del llamado a elecciones- se estaría invadiendo la autonomía municipal que hoy tienen los intendentes.

Una verdadera reforma no puede dejar de tratar la necesidad de reformar la Constitución provincial, darle rango al Consejo de la Magistratura o avanzar en un consenso generalizado para que se revisen las funciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Además, hay que dotar de transparencia, mayor efectividad e independencia a los órganos de control.

También es cierto que sería muy interesante revisar -o tal vez sea una asignatura pendiente del bloque de la mayoría- el régimen parlamentario; esto nos urge, si bien admitimos que no es

pacífica la opinión acerca de la uni o bicameralidad y los beneficios de cada uno, debemos admitir -porque es mayoritario el consenso- lo inequitativa, desproporcionada e injusta que resulta la representación parlamentaria que tenemos en la Provincia. La Comisión de Expertos dijo: "no va más"; por lo tanto, tenemos que animarnos a corregir el sistema electoral vigente.

En la Audiencia Pública, el presidente de nuestro partido decía textualmente: "vengo a manifestar, en nombre del radicalismo, que no existe para nosotros excusa alguna para impedir grados de consenso mínimos que hagan posible una sustancial mejora de la reforma de la Constitución provincial vinculada a una reforma política seria y profunda como anunciara el Gobernador en su momento".

Señor presidente: como bien lo dijeron los miembros de este bloque que hicieron uso de la palabra, el radicalismo rechaza el proyecto del oficialismo porque para concluir decimos que no hay reforma política seria y profunda si no hay reforma constitucional.

En consecuencia, y habiendo adelantado el Partido Justicialista su negativa al respecto y abandonado la búsqueda del indispensable consenso en forma unilateral, teniendo tiempo para discutir suficientemente un tema tan importante para los cordobeses, rechazamos la reforma planteada. Nos hubiese gustado consensuarla; de tal modo, hubiésemos podido abordar el camino que acabe con los fantasmas institucionales reflejados el 2 de septiembre y que, lamentablemente, a 25 años de la recuperación de la democracia, todavía no hemos podido develar.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente: en la exposición anterior no me referí a la Ley de Partidos Políticos y quería consultar si...

Sr. Presidente (Campana).- Ese tema no se encuentra en consideración.

Continúe con el uso de la palabra, legislador Ruiz.

Sr. Ruiz.- En primer lugar, voy a hacer algunos agregados a la propuesta de incorporar al texto del Código Electoral la sanción de las prácticas clientelares, que quedaría redactado en dos artículos.

El artículo 222, que lleva como título "Dis-

tribución de bienes y servicios", expresa: "Queda expresamente prohibido durante la campaña electoral y el acto comicial utilizar, facilitar o distribuir gratuitamente bienes y/o servicios de carácter social subvencionados, suministrados o provistos por el Estado Provincial, con el objeto de promocionar a un partido, alianza o confederación política o a los candidatos postulados por los mismos".

Por su parte, el artículo 244, que lleva como título "Distribución indebida de bienes y servicios", expresa: "La violación de la prohibición establecida en el artículo 222 de la presente ley, si ello no tipificara un delito, será sancionada de la siguiente forma: 1.- Si el responsable fuera un empleado o funcionario público, con multa equivalente a cinco salarios mínimos, vitales y móviles, suspensión en el desempeño de su cargo e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis meses a un año. 2.- Si el responsable fuera un partido, alianza o confederación política, con multa equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles, e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de un año a quien ejerza la máxima conducción política de la agrupación infractora". Esta es la reformulación del primer texto que oportunamente propusiera.

En segundo término, pasaré a relatar la interpretación que hacemos del artículo 193, sobre el modo de contratación de los espacios publicitarios. El referido artículo establece: "El Juzgado Electoral, como mínimo 60 días antes del inicio de la campaña electoral, determinará la cantidad de minutos diarios que se podrán ocupar con publicidad y propaganda electoral en los medios electrónicos de comunicación públicos y privados, provinciales y locales, el que no podrá superar el 90 por ciento del total del espacio publicitario ocupado o utilizado por la propaganda electoral en la campaña del año 2007". En su segundo párrafo, expresa: "De la totalidad de los espacios publicitarios fijados, el Juzgado Electoral contratará el 50 por ciento y los distribuirá entre los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la elección, conforme lo establecido en el artículo 190 de la presente ley, y por sorteo".

Según la interpretación que hacemos de este artículo, el 90 por ciento relativo al espacio publicitario ocupado o utilizado por la propaganda electoral en la campaña de 2007, se refiere a la totalidad de ese espacio publicitario, de ninguna manera se puede interpretar que se va aplicar un

criterio de acuerdo con los porcentajes utilizados en el año 2007, porque de esa manera se consagrará una gran desigualdad, ya que, de acuerdo con los informes que tenemos de la organización no gubernamental “El Ágora”, el actual Gobernador, por ejemplo, utilizó el 70,7 por ciento de la publicidad en medios televisivos, esto es, Canal 8, Canal 10 y Canal 12.

De tal manera que –esto lo queremos dejar bien claro para que no se preste a confusión– el 90 por ciento se considera sobre la totalidad del espacio utilizado en la campaña de 2007, y de ninguna manera esa interpretación permite una distribución sobre la base de los porcentajes utilizados en el 2007.

Las otras observaciones tienen que ver con la Ley de Partidos Políticos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el legislador Brügge.

Sr. Brügge.– Señor presidente: quiero hacer algunas breves consideraciones sobre el proyecto en tratamiento.

Especialmente, quiero señalar que toda reforma política es un verdadero proceso. Ese proceso que se inició –como ya se señalara– con la convocatoria que hizo el Gobernador, el año pasado, a la conformación de una Comisión de Expertos, y que, tiene un hito importante en el día de la fecha con la aprobación de la modificación del Código Electoral Provincial y la ley que regula el régimen de los partidos políticos a nivel provincial, y va a seguir –seguramente– el año que viene con la reglamentación de la Cámara Electoral ad hoc, con la reglamentación de las internas abiertas simultáneas y obligatorias para la elección de los candidatos a los cargos electivos en las elecciones de los partidos políticos y alianzas que intervienen como tal, y por supuesto, con la ley que va a regular lo atinente al software que se va a aplicar en las futuras elecciones y que ubica a Córdoba en un lugar preponderante a nivel provincial.

La modernización de nuestro régimen político debe ser el título de esta noche porque estamos avanzando en calidad institucional y democrática con los actuales proyectos en tratamiento.

Ello surge porque estamos abandonando una historia de varios años de un sistema electoral que nació en 1912, con la Ley Sáenz Peña, y que

ha demostrado tener una serie de vicios a los que hoy le ponemos fin. Como dije, es un salto importantísimo en la historia electoral y política de la Provincia de Córdoba.

De más está decir que todo régimen político es perfectible y debe ser útil. La utilidad de lo que hoy estamos aprobando la vamos a ver en las próximas elecciones, pero desde ya adelante que es una forma de ponerle claridad, transparencia y seguridad al ejercicio del sufragio del ciudadano. Se acaban las prácticas electorales que provocaban dudas e incertidumbre en la ciudadanía. Un solo ejemplo basta para demostrar el avance y la utilidad del proyecto que estamos tratando esta noche: la supresión de la sumatoria.

A efectos comparativos, mencionaré el avance que estamos haciendo en la Provincia de Córdoba, vía legislativa, comparado con la reciente reforma constitucional que se dio en la Provincia de Tucumán, y que fue una de las últimas de las reformas de las provincias argentinas. A pesar de que dicha provincia norteña fue víctima de uno de los sistemas más perversos, la Ley de Lemas, que llevó a que en la última elección en que se utilizó se implementaran 800 sublemas, no tuvieron mejor idea que poner en el texto de la Constitución la sumatoria de votos; precisamente, lo que nosotros vía legislativa estamos suprimiendo, en la Provincia de Tucumán, mediante una reforma constitucional, lo institucionalizan en el propio texto, lo cristalizan, lo ponen como un sistema rígido que, como sabemos, es una práctica errónea.

A los fines de no cansar con la exposición –ya han sido bastante extensas las de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra– basta remitirme a la lectura del artículo 43, inciso 12) del texto de la Constitución de Tucumán para verificar el salto comparativo que está haciendo la Provincia de Córdoba con la sanción de la modificación y supresión de la sumatoria, supresión que va unida a otro elemento fundamental como es la imposibilidad de ser candidato, al mismo tiempo, a diferentes cargos dentro de una misma lista. Esto también es un salto comparativo porque cuando la ciudadanía elige un gobernador, un legislador o un intendente lo está eligiendo no solamente por sus condiciones y capacidades sino dándole un mandato concreto. Cuando algunos candidatos se postulan simultáneamente a diferentes cargos, ob-

viamente, no sabemos a qué se postulan realmente ni tampoco cuáles son las capacidades y calidades que tienen como tales.

El proyecto de reforma del Código Electoral que hoy propugnamos es –como dije– una modernización de la legislación cordobesa; en especial en lo que hace a la Justicia Electoral se propicia y profundiza el funcionamiento y la incumbencia del juzgado electoral en todo el proceso electoral, a punto tal que la Justicia Electoral será la encargada de regular todo lo atinente al uso de los fondos y, sobre todo, a la contratación de la publicidad en los medios electrónicos para las campañas electorales, poniendo a Córdoba a la vanguardia en este aspecto.

Se crea una Cámara Electoral ad hoc asegurando así la segunda instancia, que hoy está en manos del Superior Tribunal de Justicia, pero entendemos que debe tener competencia ordinaria porque las reformas de la Constitución de los años '87 y 2001 le quitaron competencia ordinaria al Superior Tribunal en todo lo que hace a recursos. Por lo tanto, la creación de esta Cámara Electoral ad hoc pone en orden también las apelaciones y transparencia en el sistema de juzgamiento electoral.

Asimismo, se establece una adecuación de los plazos electorales ya que se pasa de lo que anacrónicamente se hablaba en horas a días, lo que fundamenta un proceso electoral transparente y es lo que acogemos de la jurisprudencia de la Cámara Electoral nacional como del Superior Tribunal de Justicia.

Se incorpora la posibilidad de tener un software electoral propio, elaborado en base a convenios con las universidades con asiento en la Provincia de Córdoba, sin desmerecer el desarrollo que viene teniendo como propio el Poder Judicial de la Provincia.

Aprovecho esta oportunidad al hablar de software, señor presidente; para señalar en lo referido a la instrumentación del sufragio o del voto no solamente damos un importante salto con la adopción de la boleta única sino que dejamos la puerta abierta y habilitamos al Juzgado Electoral para que en un futuro, no muy lejano, incorpore la votación por medio electrónico, lo que comúnmente se llama el voto electrónico, todo ello, previo a ensayos, a los ajustes, a los controles técnicos que aseguren que este sistema de votación tenga la transparencia y seguridad para todos los ciuda-

danos que asisten como tales.

Como también se dijo, se fortalecen las autoridades electorales del día del comicio. Los presidentes de mesa van a surgir de un universo conocido, y van a tener la capacitación debida a los fines que, siendo la máxima autoridad de la elección, puedan concretamente avanzar en un proceso electoral con la seguridad del caso y darles la garantía de que van a estar asistidos, como ya se señaló, por un Fiscal Electoral Público que va a oficiar de asistente administrativo en el proceso electoral.

En lo que respecta a los padrones electorales, queremos tener un Padrón Electoral Provincial. Nos parece que en pleno siglo XXI seguir dependiendo de la Justicia Federal y del Gobierno nacional en lo que hace a la confección y depuración de los padrones ya no es posible; que hoy en Córdoba están dadas las condiciones para que el Juzgado Electoral pueda tener sus propios padrones.

Quiero hacer referencia al avance y regulación en lo que hace a la votación de los extranjeros en el ámbito provincial, porque ya existía en el ámbito municipal. Quiero adelantar a este Cuerpo que el bloque de Unión por Córdoba va a aceptar la propuesta de que la votación de los extranjeros sea optativa y facultativa, por entender que es una tradición en el Derecho Municipal y que son estos extranjeros quienes, por distintas circunstancias, se comprometen con las instituciones y el pueblo de Córdoba, y lo hacen voluntariamente. Por lo tanto, debemos dejar abierta la puerta para que esta manifestación de voluntad sea optativa y no imponerles una obligación, ya que la obligación de la función electoral, la obligación de la carga necesaria para que se conforme un gobierno es de los argentinos; y los argentinos somos quienes tenemos que asumir esa responsabilidad y no trasladársela a los extranjeros, ya que lo que hacen ellos es sólo colaborar con el desarrollo y bien de nuestro país.

En este aspecto, señor presidente, no puedo dejar de resaltar que la adopción de la boleta única es un paso significativo y se han tomado los recaudos y la experiencia de los países que implementaron este sistema en América. No puede existir dudas sobre la forma de implementación de este sistema ni va a traer aparejado al ciudadano, al sufragante ningún tipo de inconveniente, tampoco van a existir barreras culturales o educativas

que puedan impedir el uso de este sistema.

Lo decimos porque en otros países, con índices de analfabetismo superiores a los de la República Argentina, el sistema funciona sin ningún tipo de inconveniente. Así también propiciamos que en el día de mañana –como ya lo he señalado– el voto electrónico sea incorporado en la Provincia de Córdoba, porque tampoco trae aparejado problemas ni existen barreras culturales, ya que el país hermano de la República Federativa del Brasil, en su gran geografía y diversidad poblacional, con un alto porcentaje de analfabetismo, lo puede llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente.

Señor presidente, aquellos que critican esta iniciativa ponen meras excusas, quizás porque son contrarios al cambio o quieren seguir manteniendo aspectos de la denominada vieja política que tal vez los favorezca, pero seguro que no favorece al pueblo en su conjunto.

Con referencia a la boleta única, como demócrata cristiano no puedo dejar de recordar que ya en el año 1959, el entonces diputado provincial por mi partido Teodosio Pizarro presentaba un proyecto para la incorporación en el Código Electoral de esa época de la boleta única, a la que el llamaba “cédula única”.

Finalizaba Teodosio Pizarro, en la fundamentación de su proyecto de ley el 16 de septiembre de 1959, señalando que: “La adopción del nuevo sistema representará seguridad en el sufragio, facilidad en el proceso eleccionario y economía en la actuación de los partidos políticos”. Estas palabras tienen plena vigencia para fundamentar el proyecto que hoy pretendemos incluir y que queremos aprobar como tal.

Señor presidente, debo agradecer la colaboración de todos los asesores, los representantes del Poder Judicial, los representantes de los partidos políticos, de los profesores universitarios, de los intendentes y de los ciudadanos comunes que en aquella maratónica pero rica Audiencia Pública participaron y brindaron sus aportes, los que fueron ampliamente receptados en el proyecto que hoy tenemos en tratamiento.

Quiero culminar con las palabras del humanista cristiano Jacques Maritain, que señala que: “Ante el desorden en una democracia materialista, es necesario construir un nuevo orden so-

cial basado en la justicia y la verdad para construir una sociedad de hombres libres y una autoridad que la dirija para alcanzar el bien común”.

No me quedan dudas, señor presidente, que con la aprobación de los proyectos de Código Electoral y de Reglamentación de la Ley de Partidos Políticos, Córdoba da el paso que la lleva hacia una provincia moderna, convirtiéndose también en un faro que va a guiar el desarrollo y la evolución del régimen político en la República Argentina.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).– Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.

Sr. Carbonetti.– Señor presidente: en esta oportunidad no voy a reiterar conceptos sobre el proyecto que está en tratamiento, porque creo que han sido largamente explicitados por los compañeros de mi bloque, que han hecho la fundamentación positiva del mismo. Creo que es oportuno evitar reiteraciones, ya que comparto totalmente los argumentos.

Sí me corresponde, en esta oportunidad, en nombre de las comisiones que han trabajado en estos proyectos, ser de alguna manera la síntesis de las propuestas que se han venido recogiendo en el curso del debate a los fines de que, en su momento, sean tenidas expresamente en consideración cuando se produzca la votación en particular de los artículos.

Y esta expresión viene a ratificar lo que se dijera al comienzo de esta sesión sobre la voluntad de generar una ley que reúna los mayores consensos en beneficio de todos los cordobeses.

Señor presidente, voy a referirme a las modificaciones de los artículos y después voy a hacer una síntesis -no leeré el texto final que creo obra en Secretaría-, para que en todo caso sean leídos en el momento de la votación.

En el artículo que se refiere a los extranjeros, que ha propuesto el bloque de Concertación Plural, respecto a la voluntariedad del registro en los ficheros, las comisiones han resuelto aceptar la propuesta hecha en el curso del debate. En ese sentido, se van a modificar los artículos 9, 17 –incorporando el inciso 7)- y el 20 –que establece la organización de los ficheros. Es decir, la propuesta efectuada es aceptada por las comisiones y el texto obra en poder de la Secretaría para que sea

leído oportunamente.

Con relación al artículo 53 -que contenía la posibilidad de incorporar a la boleta única el sticker- y su correlativo, artículo 57, la comisión va a aceptar la propuesta hecha en el sentido de eliminar el último párrafo del inciso 9), que establecía esa posibilidad. En ese sentido, quiero aclarar que no ha sido una incorporación ardidosa -así hubiera sido si se hubiera sustituido la forma que estaba plasmada en el texto de la ley-, sino que se decidió incorporar una opción más favorable para el elector. Pero, como ello ha generado algunas dudas, hemos resuelto aceptar que se excluya del texto del despacho la posibilidad de ejercer el voto completo a través del sticker. Por ello, se van a modificar el inciso 9) del artículo 53 y el artículo 57. Es una propuesta acompañada por todos los bloques.

Respecto al artículo 66, se presentó una propuesta del bloque de Concertación Plural modificando el inciso 4), en el sentido de suprimir los 100 metros. Las comisiones han aceptado la propuesta y la nueva redacción del inciso 4) se encuentra en Secretaría.

La legisladora Gladys Nieto ha formulado una propuesta, que la comisión ha entendido que debe aceptarse, en el sentido de modificar el último párrafo del artículo 81, sobre registro de los fiscales públicos electorales referido en el artículo 93 del presente proyecto de ley. El texto ha sido consensuado y obra en Secretaría.

El bloque del ARI ha formulado una propuesta en el sentido de incorporar al artículo 83 el inciso k), referido a un certificado que aluda expresamente a las autoridades de mesa que hayan incumplido con su obligación de la carga pública, y que sea elevado al Juzgado Federal. Las comisiones también han resuelto aprobar esta incorporación al artículo 83, como inciso k).

A propuesta del legislador Juan Brügge, se ha modificado el artículo 88 en el sentido que, en aquellos supuestos en que el fiscal público electoral no se presente o no concurra en oportunidad de abrirse el acto comicial, a los fines de que pueda designarse su reemplazante, se comunique al Juzgado Electoral. El texto consensuado también ha sido presentado.

A propuesta de todos los bloques, respecto al artículo 133, que habla de los reclamos y protestas post elecciones, las comisiones han resuelto aceptar las propuestas formuladas y consen-

suadas de eliminar el texto que habla de la solicitud de nulidad de una o varias mesas que debían estar cubiertas por fiscales de quien ejerciera la impugnación. En consecuencia, el nuevo texto -con la supresión de este párrafo- también ha sido consensuado.

En el caso de los artículos 164, 167 y 171, que hablan de las convocatorias, se han modificado a propuesta del bloque de Unión por Córdoba -Frente para la Victoria, elevando el mínimo a treinta días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y estableciendo como plazo máximo los ciento cincuenta días desde esa fecha.

También a propuesta del bloque de Unión por Córdoba - Frente para la Victoria, se incorpora al Título IX, del Libro Primero, dos artículos, uno de ellos, el 179, referido a la posibilidad de que el Juzgado Electoral acote los plazos cuando circunstancias de urgencia y necesidad así lo determinen. Podría ser el caso que la convocatoria no sea realizada por el Poder Ejecutivo sino que deba hacerla el Poder Legislativo dentro de los ochenta días; en ese caso, habría que reformular los plazos del cronograma, para lo cual hacía falta una norma que le permitiera al Juzgado Electoral adecuar estos plazos sin lesionar derechos ni garantías constitucionales.

Se ha propuesto incorporar también desde el momento que se ha reivindicado para la Provincia la posibilidad de que organice y confeccione sus propios ficheros, que la primera base de datos sea el padrón utilizado en la última elección provincial. A partir de allí, el Juzgado Electoral deberá actuar en los términos que dispone el artículo pertinente a la incorporación de la ficha de todos los electores.

A propuesta de los bloques -aunque inicialmente fue del ARI- se incorpora al Capítulo III, del Título II del Libro II, artículo 222, que habla del clientelismo político. Este texto ha sido consensuado, como lo ha expresado el legislador Ruiz. La comisión ha entendido que corresponde aceptarlo y, consecuentemente, incorpora al Título III, del Libro II, Capítulo Único, el artículo 244 que prevé las sanciones específicas para el caso que se de la conducta que enmarca el artículo 222 del clientelismo político.

Quiero salvar un error en el despacho. Las comisiones han tenido en cuenta, en la compatibilización del articulado, el proyecto 4883, del año 2004, rehabilitado el 19 de setiembre del 2008,

presentado por el legislador Sella.

Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.

Continúe en el uso de la palabra.

Sr. Carbonetti.- Señor presidente, para terminar quiero que se autorice a la Secretaría a efectuar la reenumeración del articulado, en virtud de las incorporaciones y modificaciones de incisos y del articulado, tal como se ha expresado, fruto del debate del día de la fecha.

Solicito que todo lo expuesto se tenga en cuenta al momento de la votación en particular. Nuestro bloque va a votar de manera afirmativa.

Sr. Presidente (Campana).- Al momento de la votación en particular, y previo a su aprobación, por Secretaría se dará lectura al texto definitivo con las modificaciones propuestas.

Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: dado que aún tenemos que someter a consideración dos proyectos de ley, sobre los cuales adelanto la moción de que sean tratados en conjunto, solicito que primero pasemos a la votación del proyecto de ley en tratamiento. Cuando sometamos a consideración los otros dos proyectos –conforme lo coordinado y consensuado con los otros bloques– hará uso de la palabra el legislador Ruiz, luego de quien, si usted me lo permite, señor presidente, haré lo propio.

Sr. Presidente (Campana).- Se lo permito; además, se pondrá en consideración su moción luego de la votación.

Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: nuestro bloque había propuesto que en el artículo 53, inciso 9), se suprimiera el casillero en blanco para la unción en sábana del voto. Asimismo, había solicitado que se dividieran las boletas únicas de acuerdo con los rangos electivos, es decir, Gobernador y Vicegobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas.

Quiero saber, señor presidente, si esto ha sido considerado y, en ese caso, si ha sido rechazado porque no ha sido mencionado.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti, que le responderá.

Sr. Carbonetti.- Señor presidente: las modificaciones que han aceptado las comisiones son las que textualmente expresé en mi mensaje, según los artículos y textos que han sido presentados y que obran en poder de la Secretaría Legislativa.

Sr. Presidente (Campana).- Quiero aclararle, legisladora Genesio de Stabio, que su primer cambio ha sido aceptado y el segundo no, y va a constar en actas lo que usted ha dicho al respecto.

Tiene la palabra, señora legisladora.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero saber bien cómo es la situación sobre este tema, para poder expresar nuestra posición en el momento de la votación de los artículos.

Sr. Presidente (Campana).- Usted ya conoce cuáles son las modificaciones a las que quiere oponerse; en su oportunidad, previa lectura, le daré la palabra y constará en actas su posición respecto de cada artículo en particular.

En consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión los proyectos compatibilizados 1861/L/08, 5661, 6254/L/04, 11646/L/07, 404, 407, 911, 1674, 1700, 1701, 1703, 1763, 1814, 1872, 1880/L/08, con las modificaciones propuestas, que serán leídas en oportunidad de la votación en particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

–CÁMARA EN SESIÓN–

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general los proyectos compatibilizados 1861/L/08, 5661, 6254/L/04, 11646/L/07, 404, 407, 911, 1674, 1700, 1701, 1703, 1763, 1814, 1872, 1880/L/08, incluido el 4483 –que acaba de mencionar el legislador Carbonetti–, tal como fueran despachados por la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.

La votación en particular se hará por Títulos, detallando los números de artículos que correspondan a cada uno de ellos, previa lectura por Secretaría de las modificaciones.

El Título I, incluye los artículos 1º al 39, con las modificaciones de los artículos 9º, 17 y 20 que, previo a la votación, serán leídas por el Secretario de Comisiones.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

El artículo 9º, primera parte, queda redactado de la siguiente forma: "Extranjeros: son también electores provinciales los extranjeros que, reuniendo los mismos requisitos establecidos en el artículo anterior y teniendo una residencia permanente y continua en la Provincia de Córdoba superior a cinco años, soliciten voluntariamente ante el Juzgado Electoral su incorporación en el fichero correspondiente".

El resto del artículo queda como estaba en el despacho.

Artículo 17, inciso 7)

Artículo 17: "Obligación de votar. Excepciones. Todo elector tiene el deber de votar en toda elección provincial, municipal o comunal que se realice en su circuito.

Inciso 7: "Quedan exentos de esta obligación, inciso 7) los extranjeros que no hubieran solicitado su incorporación en el fichero correspondiente".

Artículo 20. Se introdujo una modificación en el inciso 2).

Artículo 20: "Organización. El Juzgado Electoral organiza los ficheros de la siguiente manera: Inciso 2) El fichero de electores extranjeros contiene las fichas de todos los electores con domicilio en la jurisdicción que hubieran solicitado voluntariamente su incorporación al mismo y que acrediten cinco años de residencia continua y permanente en la Provincia, pudiendo ser dividido según el sexo. Las fichas se clasifican en dos subdivisiones, quedando el resto del articulado como obra en el despacho original.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración.

– Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º al 39, con las modificaciones propuestas.

– Se vota y aprueba el Título II, artículos 40 a 42, sin modificaciones.

Sr. Presidente (Campana).- El Título III incluye los artículos 43 al 63, y tiene modificaciones en los artículos 53 y 57.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

Se produce una eliminación en el segundo párrafo del inciso 9), del artículo 53. Voy a leer lo que se elimina.

Artículo 53, inciso 9), 2º parte: Se elimina: "Esta última opción podrá ejercerse a criterio exclusivo del elector mediante la adhesión de un sticker aprobado por el Juzgado Electoral, en la misma oportunidad en que se oficialice la boleta única de sufragio que contenga la sigla: monograma, logotipo, escudo, número, símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya registrado según el inciso 2) del presente artículo. La adhesión del referido sticker en cualquier lugar de la boleta única deberá imputarse como voto válido para la lista completa de candidatos oficializados." El resto del artículo queda como obraba en el despacho.

En el artículo 57 se elimina el segundo párrafo que reza: Artículo 57: "En esta oportunidad, los partidos, alianzas o confederaciones políticas podrán someter al Juzgado Electoral la aprobación del sticker mencionado en el artículo 53 de la presente ley que represente la opción de votos por lista completa", quedando el resto del artículo como obra en el despacho que está en Secretaría.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración.

– Se vota y aprueba el Título III, artículos 43 al 63, con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente, nosotros votamos en general este Título, con las observaciones que hicimos anteriormente vinculadas a nuestras propuestas de mesas únicas de votación, unificación de sexos en las mesas de votación y padrones, que la boleta única sea separada por categorías políticas –tal como dijo la legisladora Genesio de Stabio- y la reducción del casillero para el voto por lista completa.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, apoyamos en general este Capítulo, con la salvedad de la supresión del inciso 9), del artículo 53, del casillero en blanco, y de la división de boletas según el rango elegido.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.

Sra. Rivero.- Señor presidente, en el mismo sentido que acaban de exponer los bloques del Vecinalismo y del ARI, este bloque de Concer-

tación Plural hace expresa excepción de lo que tiene que ver con el modo de confección de la boleta única de sufragio -artículo 52-, y la constitución de las mesas por sexos -artículo 42.

Sr. Presidente (Campana).- Queda constancia de los votos negativos de los legisladores.

El Título IV incluye los artículos 64 a 121 inclusive, con modificaciones en los artículos 66, 81, 83 y 88, que se leen por Secretaría.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

En el artículo 66 se produce una modificación en el inciso 4).

Artículo 66.- Prohibiciones. Desde cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciación de los comicios quedan prohibidos los actos públicos de proselitismo. Desde la cero hora del día del comicio y hasta tres horas inmediatas posteriores al cierre queda prohibido:

4) Ofrecer o entregar a los electores facsímiles de boletas únicas.

El resto del artículo queda tal como obra en el despacho de Secretaría.

Con respecto al artículo 81, se modifica la última parte:

Artículo 81.- Designación. El Fiscal Público Electoral será designado del cuerpo de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Para el caso de no poder cubrirse las vacantes podrán ser designados como fiscales públicos electorales los profesionales o estudiantes de las carreras de abogacía, ciencias políticas o ciencias económicas que previamente se hayan capacitado y estuvieren acreditados en el registro al que se refiere el artículo 93 de la presente ley.

En el artículo 83 se propuso incorporar el inciso k).

Artículo 83.- Funciones. El Fiscal Público Electoral tiene bajo su estricta responsabilidad las siguientes funciones y deberes:

k) Emitir un certificado en el que conste la nómina de autoridades de mesa designadas que incumplieron con su obligación de asistencia el día del comicio, el que será remitido al Juzgado Electoral.

En el artículo 88 se propuso una modificación quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 88.- Inasistencia. Reemplazo. Si por cualquier causa el Fiscal Público Electoral designado para un centro de votación no se hiciera presente al momento de la apertura del acto electoral, el personal policial o de seguridad allí destacado comunicará, de forma inmediata, tal

circunstancia al Juzgado Electoral quien enviará un sustituto de la nómina de aspirantes a los efectos de asegurar el normal desarrollo del comicio.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título IV, artículos 64 a 121, inclusive, con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

El Título V incluye los artículos 122 al 145, con la supresión, en el artículo 133, que se lee por Secretaría.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

En el artículo 133 se propone eliminar el tercer párrafo, que paso a leer:

“Art. 133.- Reclamos y protestas.

Tercer párrafo: La solicitud de nulidad de una, varias o todas las mesas sólo podrá realizarse si el impugnante acredita la participación de sus fiscales en la o las mesas objetadas. Caso contrario, sólo podrá requerir la revisión de la documentación existente y que la misma sea puesta a su disposición a los fines de contactar el contenido”.

Queda el resto del artículo como obra en el despacho de Secretaría.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración.

– Se vota y aprueba el Título V, artículos 122 a 145 inclusive, con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

En consideración el Título VI.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título VI, artículos 146 a 162 inclusive, sin modificaciones.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

El Título VII incluye los artículos 163 a 173 inclusive, con modificaciones propuestas en los artículos 164, 167 y 171, que van a ser leídas por Secretaría.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

El artículo 164 quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 164.- Elecciones. La elección del Gobernador y Vicegobernador debe realizarse, como mínimo, con 30 días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo,

dentro de los 150 días de esa fecha.”

El artículo 167 quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 167.- Elecciones. La elección de los legisladores provinciales debe realizarse, como mínimo, con 30 días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los 150 días de esa fecha”.

El artículo 171 quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 171.- Elecciones. La elección de los miembros del Tribunal de Cuentas debe realizarse, como mínimo, con 30 días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los 150 días de esa fecha”.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente: tal cual lo adelanté, nuestro bloque no va a aprobar el Título VII, porque en éste se reafirma el sistema de elección de gobernador, vicegobernador y legisladores que cuestionamos y creemos que debe ser objeto de una reforma constitucional.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado.

En consideración.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título VII, artículos 163 al 173, inclusive, con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

En consideración el Título VIII.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título VIII, artículos 174 al 177, inclusive, sin modificaciones.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

El Título IX incluye artículos 178 al 184, con modificaciones propuestas a los artículos 179 y 180 que se van a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

Aquí se propuso incorporar en el Título IX del Libro Primero, como artículos 179 y 180, los siguientes textos:

“Artículo 179.- Modificación de Plazos. El Juzgado Electoral, sin afectar derechos ni garantías constitucionales, podrá acotar razonablemente los plazos previstos en esta ley cuando razones de urgencia, necesidad y/o de fuerza mayor hayan afectado el cronograma vigente y deba garantizarse el normal desarrollo del proceso electoral a su cargo”.

“Artículo 180.- Ficheros-Base de Datos Inicial. El padrón utilizado en la última elección provincial, de fecha 2 de septiembre del año 2007, constituirá la Base Inicial de Datos para la formación y organización de los Ficheros Electorales de la Provincia. A partir de esa fecha y de dicha Base, el Juzgado Electoral debe actualizarlo y depurarlo conforme lo establecido en el Capítulo 3º del Título I, del Libro Primero de la presente ley, a los fines que tales Ficheros sirvan de sustento para la elaboración de las listas provisionales y padrones a utilizar en todas las elecciones de renovación de autoridades de la Provincia de Córdoba”.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título IX, artículos 178 al 184, inclusive, con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

Quiero aclarar que todos estos artículos corresponden al Libro Primero, “Principios Electorales Fundamentales”.

Ahora pondremos en consideración el Libro Segundo, “Financiamiento de las Campañas Electorales”.

El Título I incluye los artículos 185 al 207, sin modificaciones.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título I, artículos 185 a 207, inclusive, sin modificación.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

El Título II incluye los artículos 208 al 238, con una modificación en el artículo 222, que se lee por Secretaría.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

Se ha propuesto incorporar al Capítulo 3º, del Título II, del Libro Segundo, como artículo 222, el siguiente: “Artículo 222.- Clientelismo político. Queda expresamente prohibido durante la campaña electoral y el acto comicial utilizar, facilitar o distribuir gratuitamente bienes y/o servicios de carácter social subvencionados, suministrados o provistos por el Estado provincial con el objeto de promocionar a un partido, alianza o confederación política o a los candidatos postulados por los mismos”.

Sr. Presidente (Campana).- El Título II incluye los artículos 208 al 238.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título II, artículos 208 a 238, inclusive, con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

El Título III incluye los artículos 239 a 248, con una modificación en el artículo 244, que se lee por Secretaría.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

En este Capítulo se ha propuesto incorporar como artículo 244, que se incorpora al Capítulo Único del Título III, del Libro Segundo, el siguiente texto: “Sanciones por Clientelismo Político: La violación de la prohibición establecida en el artículo 222 de la presente ley, si ello no tipificara un delito, será sancionada de la siguiente forma: Inciso 1º.- Si el responsable fuera un empleado o funcionario público, con multa equivalente a 5 (cinco) salarios mínimos, vitales y móviles, suspensión en el desempeño de su cargo e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de seis meses a un año.

Inciso 2º.- Si el responsable fuera un partido, alianza o confederación política, con multa equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el periodo de un año a quien ejerza la máxima conducción política de la agrupación infractora”.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título III, artículos 239 a 248, inclusive, con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

El Título IV incluye los artículos 249 a 252, sin modificaciones.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba el Título IV, artículos 249 a 252, inclusive, sin modificaciones.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

Siendo el artículo 253 de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunica al Poder Ejecutivo.

Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.

Sr. Carbonetti.- Señor presidente: creo que habría que votar la moción que hice para que se autorice a la Secretaría Legislativa a reformular los artículos, una vez que sean transcritos en el

despacho originario.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del legislador Carbonetti de autorizar a la Secretaría Legislativa a modificar el número de los artículos.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

**PROYECTO DE LEY - 01861/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

CÓDIGO ELECTORAL PROVINCIAL

**LIBRO PRIMERO
PRINCIPIOS ELECTORALES
FUNDAMENTALES**

**TÍTULO I
DEL CUERPO ELECTORAL**

**Capítulo I
Disposiciones Generales**

Artículo 1.- Derecho del sufragio. EL ejercicio de la emisión del sufragio es un derecho-deber político individual, por el cual los ciudadanos que forman parte del cuerpo electoral, participan directamente en la designación de las autoridades electivas instituidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, en las consultas populares y en los referéndum, a través de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 2.- Características. EL sufragio es universal, obligatorio, directo, igual, secreto, personal e intransferible. En caso de duda en la interpretación de este Código se estará siempre a lo que sea favorable a la validez del voto, a la vigencia del régimen democrático en el que está inspirado y a asegurar la expresión de la auténtica voluntad popular.

Ninguna autoridad, persona, corporación, partido o agrupación de cualquier índole puede obligar al elector a votar en grupos o de determinada manera, manifestar su voto, emitir el sufragio por él o impedir que sufrague.

Artículo 3.- Imparcialidad de los organismos. LA imparcialidad de todos los organismos del Estado es la norma de conducta a la cual deben ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales.

Artículo 4.- Responsabilidad electoral. LA res-

ponsabilidad del desarrollo y vigilancia del proceso electoral corresponde al Juzgado Electoral, quien puede requerir la colaboración a los Poderes del Estado Provincial, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general, en la forma y términos que establece la presente Ley.

Capítulo II

Calidad, Deberes y Derechos del Elector

Artículo 5.- Electores. SON electores provinciales los ciudadanos argentinos con domicilio en la Provincia de Córdoba y los extranjeros con residencia continua en ella por más de cinco (5) años, mayores de dieciocho (18) años de edad, y que reúnan los requisitos exigidos por la presente Ley.

La residencia se acredita con un certificado expedido por el Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas en el que conste dicha circunstancia.

No pueden ser electores provinciales aquellos que posean alguna de las inhabilitaciones contempladas en la presente Ley.

Artículo 6.- Prueba. A los fines del sufragio la calidad de elector se prueba únicamente por su inclusión en el padrón electoral.

Artículo 7.- Inhabilitados. NO poseen calidad de elector:

- 1) Los dementes declarados tales en juicio;
- 2) Los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito;
- 3) Los condenados por sentencia firme, hasta la obtención de salidas transitorias del régimen de semilibertad, de la libertad condicional o, en su caso, de la libertad asistida;
- 4) Los declarados rebeldes en causa penal hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción, y
- 5) Los inhabilitados según las disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Artículo 8.- Procedimiento para las inhabilitaciones. LAS inhabilitaciones las determina el Juzgado Electoral -mediante un procedimiento sumario-, de oficio, por denuncia de cualquier elector o por querrela fiscal. La que fuere dispuesta por sentencia es asentada una vez que la resolución haya sido notificada oficialmente al Juzgado Electoral. Los magistrados de la causa, cuando el fallo queda firme, lo comunican al Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas y al Juzgado Electoral, con remisión de copia de la parte resolutive y la individualización del nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, número y clase de documento de identidad y oficina enroladora del inhabilitado.

Artículo 9.- Rehabilitación. LA rehabilitación es ordenada por el Juzgado Electoral:

- 1) A petición de parte, cuando después de un juicio sumario se compruebe y resuelva que ha desaparecido la causa que originó la inhabilitación, y
- 2) De oficio, cuando el Juzgado Electoral, previa

vista fiscal de los antecedentes obrantes en la causa, pueda determinar con seguridad que ha cesado la causa que originó la inhabilitación.

Artículo 10.- Inmunidad del elector. NINGUNA autoridad está facultada para privar de libertad al elector desde la cero (0:00) hora del día de la elección hasta la clausura de los comicios, salvo:

- 1) En caso de flagrante delito;
- 2) Cuando existiera orden de detención emanada de juez competente, o
- 3) Por contravención al Código de Faltas.

En este último caso se efectuará el procedimiento pertinente, otorgando de inmediato la libertad al elector a fin de no coartar el derecho al sufragio.

Fuera de estos supuestos no se obstaculizará al elector en el tránsito desde su domicilio hasta el lugar de los comicios, ni podrá ser molestado en el desempeño de su derecho cívico.

Artículo 11.- Facilitación de la emisión del voto. NINGUNA autoridad debe obstaculizar la actividad de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas, en lo que concierne a la instalación y funcionamiento de locales, suministro de información a los electores y facilitación de la emisión regular del voto, salvo que contraríen las disposiciones de esta Ley.

Artículo 12.- Electores que deben trabajar. LOS electores que por razones de trabajo estén ocupados durante las horas del acto electoral tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores, con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en los comicios, sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo o compensación de horario. Dicha licencia es de carácter obligatorio y no debe tener otro límite en el tiempo que el que requiera el ciudadano para ejercer su derecho cívico.

Artículo 13.- Amparo. EL elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, puede solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al Juzgado Electoral, a la Junta Electoral Municipal, a la Junta Electoral Comunal o al magistrado judicial más próximo, quienes están obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario.

Asimismo, el elector también puede pedir amparo al Juzgado Electoral o al magistrado judicial más próximo a su domicilio, para que le sea entregado su documento de identidad retenido indebidamente por un tercero.

Artículo 14.- Obligación de votar. TODO elector tiene el deber de votar en toda elección provincial, municipal o comunal que se realice en su circuito.

Quedan exentos de esa obligación:

- 1) Los mayores de setenta (70) años;
- 2) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de

esta Ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

3) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.

Tales ciudadanos se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extiende certificación escrita que acredite la comparecencia;

4) Los que por causa de alguna enfermedad o fuerza mayor se encuentren imposibilitados de asistir al acto comicial. Esta causal debe ser justificada por médico de establecimiento sanitario público -nacional, provincial o municipal- y en ausencia de éstos, por médicos particulares. Los profesionales de establecimientos públicos están obligados a responder, el día de los comicios, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado debiendo concurrir a su domicilio para verificar esa circunstancia y entregarle el certificado correspondiente;

5) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir a los comicios. En este caso el empleador o su representante legal deben elevar al Juzgado Electoral la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo por separado la pertinente certificación, y

6) Los miembros de las fuerzas de seguridad no empadronados en ninguna de las mesas del local asignado a su custodia.

La falsedad en las certificaciones aquí previstas hacen pasible a quienes la otorgan, de las penas establecidas en el Artículo 292 del Código Penal.

Artículo 15.- Personal policial. DIEZ (10) días antes de cada elección, las autoridades de la Policía de la Provincia, deben comunicar al Juzgado Electoral la nómina de los efectivos policiales que revistan a sus órdenes y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, inciso 6) de la presente Ley están exentos de la obligación de votar. Dicha lista debe consignar los siguientes datos: apellido, nombres, número de documento de identidad, clase, domicilio y el lugar asignado a la custodia.

La autoridad, preferentemente, debe asignar a los efectivos policiales la custodia de aquellos lugares donde se encuentren empadronados.

Cualquier modificación posterior en la nómina se la hace conocer al Juzgado Electoral inmediatamente de ocurrida y en la forma indicada.

Capítulo III

Formación de Ficheros

Artículo 16.- Ficheros. A los fines de la forma-

ción y fiscalización del registro de electores, el Juzgado Electoral confecciona los ficheros electorales provinciales, en base al padrón utilizado en la última elección, actualizado hasta ciento ochenta (180) días antes de la fecha del comicio, con la incorporación de los ciudadanos que cumplieran dieciocho (18) años de edad hasta el mismo día de la elección, ordenándolos de la siguiente manera:

- 1) Electores provinciales,
- 2) Electores extranjeros, y
- 3) Electores inhabilitados y excluidos.

Asimismo dispondrá los mecanismos adecuados para su actualización permanente, conforme lo previsto en la presente Ley.

Artículo 17.- Organización. EL Juzgado Electoral organiza los ficheros de la siguiente manera:

1) El fichero de electores provinciales contiene la ficha de todos los electores con domicilio en la jurisdicción y puede ser dividido según el sexo de los mismos. Las fichas se clasifican en tres (3) subdivisiones:

- a) Por orden alfabético;
- b) Por orden numérico de documento de identidad, con indicación de su tipo, y
- c) Por demarcaciones territoriales, o sea en departamentos o secciones electorales, en circuitos electorales y en mesas electorales.

2) El fichero de electores extranjeros contiene la ficha de todos los electores con domicilio en la jurisdicción, que acrediten cinco (5) años de residencia continua en la Provincia y puede ser dividido según el sexo de los mismos. Las fichas se clasifican en dos (2) subdivisiones:

- a) Por orden alfabético, y
- b) Por demarcaciones territoriales, o sea en departamentos o secciones electorales, en circuitos electorales y en mesas electorales.

3) El fichero de inhabilitados y excluidos, contiene la ficha de todos los electores inhabilitados y excluidos del Registro Electoral, domiciliados dentro de la jurisdicción y pueden ser divididos según el sexo de los mismos. Las fichas se clasifican en tres (3) subdivisiones:

- a) Por orden alfabético;
- b) Por orden numérico de documento de identidad, con indicación de su tipo, y
- c) Por orden cronológico de la cesación de la inhabilitación.

Artículo 18.- Actualización. LA actualización y depuración de los ficheros es permanente, y tiene por objeto:

- 1) Incluir los datos de los nuevos ciudadanos inscriptos;
- 2) Asegurar que en la base de datos no exista más de un registro válido para un mismo ciudadano;
- 3) Depurar los registros ya existentes por cambio

de domicilio de los ciudadanos;

4) Excluir de la lista índice de electores a los ciudadanos que estén inhabilitados para votar, y

5) Suprimir de las listas de electores a los fallecidos o declarados presuntamente fallecidos por sentencia judicial.

Cuando se hubiere convocado a elecciones y durante las etapas del procedimiento preelectoral, la actualización y depuración de los ficheros se hará conforme lo previsto en el Capítulo IV de la presente Ley.

Artículo 19.- Documentos de identidad. LA Libreta de Enrolamiento (Ley Nacional N° 11.386), la Libreta Cívica (Ley Nacional N° 13.010), y el Documento Nacional de Identidad (Ley Nacional N° 17.671) son documentos habilitantes a los fines de esta Ley, tanto para la inscripción en el padrón correspondiente, como para la emisión del voto.

Los electores extranjeros acreditarán su identidad mediante la presentación de la Cédula Federal correspondiente o de la libreta de votación que a tal efecto le extienda el Juzgado Electoral.

Artículo 20.- Nuevos ejemplares de documentos de identidad. Cambios de domicilio. CON las comunicaciones que al efecto le curse el Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el Juzgado Electoral ordena que se anoten en las fichas, las constancias de haberse extendido nuevos ejemplares de los documentos de identidad y los cambios de domicilio que se operen. En este último caso incluye la ficha dentro del circuito que corresponda y si el nuevo domicilio es de otro distrito lo remite al juez del mismo y dispone la baja del elector en su registro.

Artículo 21.- Actualización del fichero de inhabilitados. CON las informaciones de inhabilitados y excluidos que envía el juez de la causa, el Juzgado Electoral procede, en su caso, a ordenar se anote en las fichas las constancias pertinentes y el retiro de la inscripción en el fichero correspondiente, así como su inclusión en el de inhabilitados y excluidos, por el término que éstas duren.

Artículo 22.- Fallecimiento de electores. EL Juzgado Electoral solicita al Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la nómina de electores fallecidos y fotocopias certificadas de su respectivo documento de identidad.

Una vez realizadas las verificaciones del caso, el Juzgado Electoral ordena la baja y el retiro de las fichas.

El Juzgado Electoral, mensualmente, publica a través de su página web y pone a disposición de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas o que hayan solicitado su reconocimiento, la nómina de electores fallecidos.

Artículo 23.- Errores en la nómina de electores fallecidos. LOS interesados y los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas, pueden denunciar ante el Juzgado Electoral, las inscripciones múltiples, los errores o cualquier anomalía en la

nómina de electores fallecidos. Este reclamo debe efectuarse dentro de los diez (10) días corridos a partir de la recepción de la nómina mensual.

Capítulo IV Listas Provisorias

Artículo 24.- Impresión de listas provisorias. EL Juzgado Electoral es el responsable de la confección e impresión de las listas provisorias.

En estas listas son incluidas las novedades registradas en el Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas, hasta ciento ochenta (180) días antes de la fecha de elección, como así también las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad hasta el mismo día de los comicios.

En caso de contratar a un tercero para la ejecución de los trabajos de impresión, el Juzgado Electoral es responsable de supervisar e inspeccionar todo el proceso.

Las listas provisorias de electores contienen los siguientes datos: número y tipo de documento de identidad, clase, apellido, nombre, sexo, profesión y domicilio de los inscriptos.

Artículo 25.- Exhibición de listas provisorias. EL Juzgado Electoral debe disponer que las listas provisorias a que se refiere el artículo anterior tengan publicidad permanente en su página web, con resguardo de seguridad a fin de impedir su vulnerabilidad.

Asimismo, debe disponer la exhibición de las listas provisorias en soporte papel en todos los circuitos electorales y núcleos importantes de población, en los lugares públicos que el Juzgado Electoral o, en su defecto, las Juntas Electorales Municipales y Comunales estimen conveniente.

Los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas o que hubiesen solicitado su reconocimiento, podrán requerir copias certificadas de las mismas.

Cuando hubiere convocatoria a elecciones las listas serán distribuidas en soporte papel y digital u óptico -en número suficiente-, por lo menos noventa (90) días antes del acto comicial.

Artículo 26.- Reclamo de electores. Plazos. LOS electores que por cualquier causa no figuren en las listas provisorias o estuviesen anotados erróneamente, tienen derecho a reclamar ante el Juzgado Electoral hasta sesenta (60) días corridos antes del acto electoral.

El reclamo se formula personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, adjuntando prueba suficiente para que se subsane la omisión o el error.

El Juzgado Electoral debe devolver al elector reclamante, en un plazo no mayor de cinco (5) días de recibido el reclamo, la documental remitida por idéntica vía al último domicilio que registre el elector en su documento de identidad o el que hubiera fijado con motivo de esta presentación.

Las Juntas Electorales Municipales y Comunales pueden receptor los reclamos a los que se refiere este artículo para su comunicación al Juzgado Electoral.

Artículo 27.- Formulario de reclamos. Gratuidad del envío. EL reclamo se realiza en papel simple o en formularios provistos gratuitamente por las oficinas de correos, las distintas juntas electorales o la policía y debe ser firmado y signado con la impresión dígito pulgar del reclamante.

Todos los reclamos que formulan los ciudadanos en virtud de las disposiciones de esta Ley y dirigidos al Juzgado Electoral son transportados por el correo como piezas certificadas, con aviso de recepción y exentas de porte, conforme a la legislación nacional.

Artículo 28.- Procedimiento para la eliminación de electores. CUALQUIER elector, partido, alianza o confederación política reconocida o que hubiese solicitado su reconocimiento, tiene derecho a pedir que se eliminen o tachen los ciudadanos fallecidos, los inscriptos más de una vez o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta Ley.

El Juzgado Electoral dicta resolución, previa verificación sumaria de los hechos que se invoquen, consideración de las pruebas presentadas y realización de la audiencia que se conceda al ciudadano impugnado. Si hace lugar al reclamo dispone se anote la inhabilitación en la columna de observaciones de las listas existentes en el Juzgado. En cuanto a los fallecidos o inscriptos más de una vez, se eliminan de aquéllas dejándose constancia en las fichas.

Las solicitudes de impugnaciones o tachas deben ser presentadas durante un plazo de quince (15) días corridos a partir de la fecha de distribución de las listas provisionarias, prevista en el último párrafo del artículo 25 de la presente Ley. El impugnante puede tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y debe ser notificado al domicilio constituido al momento de la impugnación de la resolución definitiva.

Capítulo V Padrón Electoral

Artículo 29.- Padrón definitivo. LAS listas de electores depuradas constituyen el padrón electoral definitivo que tiene que estar impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección. Las listas que sirvieron para anotar las correcciones y reclamos quedan archivadas en el Juzgado Electoral.

El Juzgado Electoral debe disponer que el padrón electoral definitivo, se publique en su página web, con resguardo de seguridad a fin de impedir su vulnerabilidad y en los sitios web oficiales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Provinciales.

Asimismo, debe disponer la exhibición del padrón electoral a que se refiere este artículo, en soporte

papel en todos los circuitos electorales y núcleos importantes de población, en los lugares públicos que el Juzgado Electoral o, en su defecto, las Juntas Electorales Municipales y Comunales estimen conveniente.

El padrón es distribuido en número suficiente por lo menos treinta (30) días antes del acto comicial.

Artículo 30.- Impresión de ejemplares definitivos. EL Juzgado Electoral dispone la impresión de los ejemplares del padrón electoral definitivo que sean necesarios para las elecciones, en los que se incluyen, además de los datos requeridos por el artículo 24 de la presente Ley para las listas provisionarias, el número de orden del elector dentro de cada mesa y una columna para anotar el voto.

El padrón electoral definitivo destinado a los comicios, es siempre autenticado por el Juzgado Electoral y lleva al dorso las actas de clausura y apertura.

En el encabezamiento de cada uno de los ejemplares debe figurar -con caracteres sobresalientes- el departamento, el circuito y la mesa correspondientes.

Artículo 31.- Requisitos a cumplimentar en la impresión. LA impresión de las listas y registros se realiza cumplimentando todas las formalidades exigidas por la Ley de Contabilidad de la Provincia, la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado Provincial y demás disposiciones complementarias y especiales que se dicten para cada acto comicial, bajo la responsabilidad y fiscalización del Juzgado Electoral, auxiliado por el personal a sus órdenes y en la forma que prescribe esta Ley.

Artículo 32.- Distribución de ejemplares. EL padrón electoral definitivo y autenticado se distribuye de la siguiente forma:

- 1) Un (1) ejemplar a cada Junta Electoral Municipal y Comunal;
- 2) Tres (3) ejemplares al Ministerio de Gobierno, o al organismo que en el futuro lo sustituyere, que los conserva en sus archivos durante tres (3) años como mínimo, y
- 3) Dos (2) ejemplares a los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas que participen de la compulsa electoral.

Artículo 33.- Plazo para subsanar errores u omisiones. LOS ciudadanos están facultados para solicitar, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores u omisiones existentes en el padrón efectuando el reclamo por la vía establecida en el primer párrafo del artículo 26 de la presente Ley. El Juzgado Electoral dispone se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del Juzgado y en los que debe remitir para la elección a los presidentes de mesa.

Los reclamos que autoriza este artículo se limitan exclusivamente a la enmienda de errores u omisiones.

nes. En ningún caso son admisibles los reclamos e impugnaciones a que se refieren los artículos 26 y 28 de la presente Ley.

El Juzgado Electoral no puede dar órdenes directas de inclusión de electores en los ejemplares ya enviados a los presidentes de mesa.

Artículo 34.- Inhabilitaciones y ausencia con presunción de fallecimiento. Comunicación. TODOS los jueces de la Provincia, dentro de los cinco (5) días desde la fecha en que las sentencias que dicten pasen en autoridad de cosa juzgada, deben notificar por escrito al Juzgado Electoral el nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad, clase, sexo y domicilio de los electores inhabilitados por alguna de las causales previstas en el artículo 7º de la presente Ley, adjuntando a la notificación copia autenticada de la fecha y de la parte dispositiva de tales sentencias en la misma forma que se hacen al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria. Los mismos requisitos deben cumplir los magistrados que decreten ausencia con presunción de fallecimiento.

Artículo 35.- Tacha de electores inhabilitados. EL Juzgado Electoral dispone que sean tachados con una línea roja, los electores comprendidos en el artículo 7º de la presente Ley, en los ejemplares del padrón que se distribuyen, agregando además la palabra "Inhabilitado" y el artículo e inciso de la Ley que establezca la causa de la inhabilitación.

Artículo 36.- Copia para los partidos políticos. EL Juzgado Electoral debe entregar a los representantes de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas, la nómina de electores inhabilitados y declarados ausentes con presunción de fallecimiento conforme al procedimiento establecido en el artículo 34 de la presente Ley.

Los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas pueden denunciar por escrito las omisiones, errores o anomalías que observen.

TÍTULO II

DIVISIONES TERRITORIALES Y AGRUPACIÓN DE ELECTORES

Capítulo I

Divisiones Territoriales

Artículo 37.- Secciones electorales. A los fines electorales el territorio de la Provincia se divide en tantas secciones cuantos sean los Departamentos que la conforman.

Artículo 38.- Circuitos electorales. A los mismos fines previstos en el artículo anterior, las secciones se dividen en tantos circuitos cuantos sean los municipios y comunas que existan en la Provincia.

Los circuitos electorales son numerados correlativamente dentro de las secciones.

Capítulo II

Agrupación de Electores

Artículo 39.- Mesas electorales. CADA circuito se divide en mesas las que se constituyen con hasta trescientos cincuenta (350) electores inscriptos, agrupados por sexo y ordenados alfabéticamente. Si realizado tal agrupamiento de electores queda una fracción inferior a sesenta (60), esa fracción se incorpora a la mesa que el Juzgado Electoral determine.

Si resta una fracción de sesenta (60) o más, se forma con dicha fracción una nueva mesa electoral.

El Juzgado Electoral, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población están separados por largas distancias o accidentes geográficos que dificultan la concurrencia de los ciudadanos a los comicios, puede constituir mesas electorales en dichos núcleos de población, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios y por orden alfabético.

Asimismo, en circunstancias especiales, cuando el número de electores y la ubicación de sus domicilios así lo aconsejen, el Juzgado Electoral puede disponer la instalación de mesas receptoras mixtas. En tal caso se individualizan las Boletas Únicas de Sufragio de cada sexo y el escrutinio se hace por separado al igual que el acta respectiva.

Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenan alfabéticamente. Una vez realizada esta operación se procede a agruparlos en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.

En los casos en que funcionan mesas mixtas, las Boletas Únicas de Sufragio destinadas al voto de las mujeres son caracterizadas con la letra "F" sobreimpresa.

TÍTULO III

DE LOS ACTOS PREELECTORALES

Capítulo I

Convocatoria

Artículo 40.- Convocatoria. LA convocatoria a elecciones de Gobernador, Vicegobernador, integrantes del Tribunal de Cuentas y Legisladores Provinciales es de competencia del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Artículo 41.- Plazo y forma. LA convocatoria a elecciones debe hacerse con noventa (90) días, por lo menos, de anticipación al acto electoral.

Si el Poder Ejecutivo Provincial no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria debe ser realizada por el Poder Legislativo, mediante resolución tomada por lo menos con ochenta (80) días de anticipación al acto electoral.

La convocatoria debe expresar:

- 1) Fecha de la elección;
- 2) Clase y número de cargos a elegir;
- 3) Número de candidatos por los que puede votar el elector, y
- 4) Indicación del sistema electoral aplicable.

Capítulo II

Apoderados y fiscales de los Partidos Políticos

Artículo 42.- Apoderados de los partidos políticos. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas deben designar un apoderado general y un suplente que actúa sólo en caso de ausencia o impedimento del titular. Dichos apoderados son los representantes de los partidos, alianzas o confederaciones políticas a todos los fines establecidos por esta Ley. Cualquier modificación en la designación del apoderado titular o suplente debe ser comunicada al Juzgado Electoral.

Artículo 43.- Fiscales generales y fiscales de mesa de los partidos políticos. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas reconocidas en la Provincia y que se presentan a elección, pueden nombrar fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos.

También pueden designar fiscales generales de la sección con idénticas facultades, estando habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa.

La misión de estos auxiliares de los comicios es la de fiscalizar el acto electoral y formalizar los reclamos que estimen correspondientes en defensa del partido, alianza o confederación política que representan. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general, en ningún caso se permite la actuación simultánea en una mesa de más de un fiscal por partido, alianza o confederación política.

Los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben comunicar al Juzgado Electoral la nómina de fiscales generales, al menos cuarenta y ocho (48) horas antes de los comicios con indicación clara de apellido, nombre, número de documento de identidad y domicilio de cada uno de ellos y de sus suplentes.

Artículo 44.- Requisitos para ser fiscal. LOS fiscales de mesa y fiscales generales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben saber leer y escribir y ser electores de la sección en que pretenden actuar.

Los fiscales pueden votar en las mesas que fiscalizan aunque no estén inscriptos en ellas, siempre que lo estén en el circuito en que actúan. En ese caso se agrega el nombre del votante en la hoja del registro, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa en que está inscripto.

Artículo 45.- Otorgamiento de poderes a fiscales. LOS poderes de los fiscales de mesa y fiscales generales son otorgados por las autoridades partidarias y deben contener nombre y apellido completo, número de documento de identidad, indicación del partido, alianza o confederación política que representa y firma al pie del instrumento de la autoridad partidaria que lo otorga.

Estos poderes deben ser presentados a los presidentes de mesa para su reconocimiento en la apertura

de los comicios.

Capítulo III Oficialización de Listas

Artículo 46.- Registro de los candidatos y pedidos de oficialización de listas. DESDE la convocatoria a elecciones y hasta cincuenta (50) días antes al acto electoral, los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben registrar ante el Juzgado Electoral las listas de los candidatos públicamente proclamados, quienes deben reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

Las listas de candidatos deben ser integradas observando las prescripciones de la Ley N° 8901.

Los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben presentar, junto con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos, aceptación del cargo y el último domicilio electoral.

Artículo 47.- Candidatura única. NINGUNA persona podrá ser candidato al mismo tiempo y por igual o diferente cargo, en distintos partidos políticos, alianza o confederación de partidos políticos, que presenten listas para su oficialización.

Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes partidos políticos, alianzas o confederaciones de éstos. Su inobservancia será causal de rechazo del postulante, debiendo procederse en tal caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 de la presente Ley.

Ninguna persona podrá ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos.

Artículo 48.- Resolución judicial. DENTRO de los cinco (5) días subsiguientes a la presentación de listas de candidatos, el Juzgado Electoral dicta resolución fundada respecto de la calidad de los candidatos. La misma es apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante el Tribunal Superior de Justicia, el que resuelve en el plazo de tres (3) días.

Firme la resolución que establece que algún candidato no reúne las calidades necesarias, el Juzgado Electoral notifica al partido, alianza o confederación política que representa, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la notificación designe otro candidato para que ocupe el lugar vacante en la lista. Transcurrido dicho plazo sin que el partido, alianza o confederación política se manifieste expresamente, se corre automáticamente el orden de lista y se completa con los suplentes.

El partido, alianza o confederación política debe registrar en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas los suplentes necesarios para completar la lista.

Todas las resoluciones se notifican por cédula de notificación, quedando firmes después de cuarenta y ocho (48) horas de recibidas.

Capítulo IV Boleta Única de Sufragio

Artículo 49.- Confección. OFICIALIZADAS las listas de candidatos, el Juzgado Electoral ordenará confeccionar un modelo de Boleta Única de Sufragio, cuyo diseño y características deben respetar las especificaciones establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 50.- Requisitos. LA Boleta Única de Sufragio estará dividida en espacios, franjas o columnas de igual dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas. Los espacios, franjas o columnas contendrán:

- 1) El nombre del partido, alianza o confederación política;
 - 2) La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya solicitado utilizar al momento de registrar su lista de candidatos;
 - 3) Fotografía del candidato a cargo ejecutivo o unipersonal;
 - 4) El nombre y apellido completos de los candidatos a Gobernador y Vicegobernador;
 - 5) El nombre y apellido completos de los candidatos titulares y suplentes a Legislador por Distrito Único, debiendo estar resaltados con una tipografía mayor, los primeros tres (3) candidatos titulares;
 - 6) El nombre y apellido completos del candidato titular y suplente a Legislador Departamental;
 - 7) El nombre y apellido completos de los candidatos a Tribunales de Cuentas;
 - 8) Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia, y
 - 9) Un casillero en blanco, de mayores dimensiones que el especificado en el inciso anterior, ubicado en el margen superior derecho del espacio, franja o columna de cada una de las agrupaciones políticas intervinientes, para que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia por lista completa de candidatos.
- Cuando una Municipalidad o Comuna convoque a elecciones en forma simultánea o en la misma fecha fijada para la Provincia, la Boleta Única de Sufragio contendrá además:
- a) El nombre y apellido completos del candidato a intendente, concejales titulares y suplentes; o en su caso, de los candidatos a miembros titulares y suplentes de la comisión comunal;
 - b) El nombre y apellido completos de los candidatos a tribunales de cuentas, titulares y suplentes, y
 - c) Un casillero en blanco próximo a cada tramo

de cargo electivo, a efecto de que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia.

Artículo 51.- Diseño. LA Boleta Única de Sufragio debe ser confeccionada observando los siguientes requisitos en su contenido y diseño:

- 1) Anverso:
 - a) El año en que la elección se lleva a cabo;
 - b) La individualización de la Sección y Circuito Electoral;
 - c) La indicación del número de mesa, y
 - d) Las instrucciones para la emisión del voto.
- 2) Reverso: un casillero para que se inserten las firmas del presidente de mesa, Fiscal Público Electoral y fiscales de mesa de los partidos, alianzas o confederaciones políticas.
- 3) La impresión será en idioma español, con letra de tamaño 8 de mínima y 12 de máxima, en papel no transparente con la indicación de sus pliegues;
- 4) Tendrá una dimensión no inferior a los cuarenta y tres coma dieciocho centímetros (43,18 cm) de ancho por treinta y cinco coma cincuenta y seis centímetros (35,56 cm) de alto, quedando facultado el Juzgado Electoral a establecer el tamaño de acuerdo con el número de partidos, alianzas o confederaciones políticas que intervengan en la elección;
- 5) Al doblarse en cuatro (4) partes por los pliegues demarcados, debe pasar fácilmente por la ranura de la urna, y
- 6) Debe estar identificada con un código de barras de manera correlativa y adherida a un talón con igual identificación y contener las exigencias previstas en el inciso 1), subincisos a), b) y c) del presente artículo.

Artículo 52.- Diseño para no videntes. EL Juzgado Electoral dispondrá también la confección de plantillas idénticas a las mencionadas en los artículos 49 y 50 de la presente Ley, en papel transparente y alfabeto Braille, fáciles de colocar por sobre la Boleta Única y con ranuras sobre los casilleros, para que las personas discapacitadas visuales puedan ejercer su opción electoral.

Habrà ejemplares de este tipo en todos los centros de votación, para los electores que las soliciten.

Artículo 53.- Sorteo. EL Juzgado Electoral determinará el orden de precedencia de los espacios, franjas o columnas de cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas mediante un sorteo público.

Artículo 54.- Aprobación de las boletas. ELABORADO el modelo de Boleta Única de Sufragio, el Juzgado Electoral lo pondrá en conocimiento y consideración de los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas. No existiendo observaciones, el Juzgado Electoral aprobará el modelo propuesto y mandará a imprimir la Boleta Única de Sufragio oficializada, que será la única válida para la emisión del voto.

Artículo 55.- Publicidad. EL Juzgado Electoral

hará publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en un diario de circulación masiva de la Provincia, los facsímiles de la Boleta Única de Sufragio con las cuales se sufragará.

Artículo 56.- Impresión. LA impresión de las Boletas Únicas de Sufragio, del afiche con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que integran la Boleta Única de Sufragio y las actas de escrutinio y cómputo, es potestad exclusiva del Juzgado Electoral, el que adoptará las medidas de seguridad para garantizar la autenticidad de dicha documentación.

Artículo 57.- Cantidad. EL Juzgado Electoral mandará a imprimir las Boletas Únicas de Sufragio en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, con más un diez por ciento (10%) adicional para reposición.

En cada mesa electoral debe haber igual número de Boletas Únicas de Sufragio que de electores habilitados, cifra a la que se le adicionará el porcentaje establecido en el párrafo anterior para reposición.

Artículo 58.- Boletas adicionales. EL Juzgado Electoral debe confeccionar un excedente de boletas denominadas "Boletas Únicas de Sufragio Complementarias" en cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del total de Boletas Únicas de Sufragio originales. Para ello se confeccionarán talonarios diferenciados y con identificación codificada independiente.

Las Boletas Únicas de Sufragio Complementarias tendrán las mismas características que las originales, con la única diferencia que figurará, en lugar visible, la leyenda "Boleta Única de Sufragio Complementaria".

Estas boletas podrán utilizarse para los casos descriptos en los artículos 44, 67 y 84 de la presente Ley.

No se remitirán a la mesa específica que corresponda más de un total de Boletas Únicas de Sufragio Complementarias equivalentes al cinco por ciento (5%) de los empadronados en el lugar de votación.

El Juzgado Electoral también mandará a imprimir "Boletas Únicas de Sufragio Suplementarias" en cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de electores correspondientes al padrón electoral, las que serán utilizadas en caso de robo, hurto o extravío de las originales.

Artículo 59.- Plazo para la impresión. LA Boleta Única de Sufragio deberá estar impresa con una antelación no menor a los veinte (20) días del acto electoral.

Capítulo V

Distribución de Equipos y Útiles Electorales

Artículo 60.- Provisión. EL Juzgado Electoral, con la debida antelación, arbitrará los medios necesarios para disponer de urnas, padrones, formularios, boletas únicas de sufragio, plantillas para no videntes, sobres,

papeles especiales, sellos, útiles y demás elementos que deba hacerles llegar a los presidentes de mesa.

Artículo 61.- Nómina de documentos y útiles. EL Juzgado Electoral entrega al Fiscal Público Electoral, con destino a los presidentes de mesa, las urnas a utilizar el día del acto electoral. Las mismas deben ser identificadas con un número para determinar su lugar de destino, de lo cual lleva registro el Juzgado Electoral.

Las urnas contienen en su interior los siguientes documentos y útiles:

1) Tres (3) ejemplares del padrón electoral especial para cada mesa de electores, que van colocados dentro de un sobre rotulado con la inscripción "Ejemplares del Padrón Electoral" y con la indicación de la mesa a que corresponde;

2) Acta de apertura de los comicios y acta de cierre de los mismos;

3) Fajas de seguridad para el cierre de las urnas y para el sellado de las aberturas del cuarto oscuro;

4) Talonarios de Boletas Únicas de Sufragio originales, complementarias y suplementarias;

5) Plantillas confeccionadas en sistema Braille para discapacitados visuales;

6) Afiches con la publicación de las listas completas de los candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que integran la Boleta Única de Sufragio;

7) Sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, bolígrafos indelebles, papel, cola y otros elementos en cantidad que fuera menester;

8) Un (1) ejemplar de esta Ley, y

9) Una (1) gaceta de instrucciones elaborada por el Juzgado Electoral.

El traslado y entrega de las urnas debe efectuarse con la anticipación suficiente para que puedan ser recibidas en el lugar en que funciona la mesa, a la hora de apertura del acto electoral.

TÍTULO IV EL ACTO ELECTORAL

Capítulo I

Normas Especiales para su Celebración

Artículo 62.- Aglomeración de tropas y custodia policial. EL día de la elección queda prohibida la aglomeración de tropas o cualquier ostentación de fuerza armada.

El Juzgado Electoral dispone que el día de realización del acto electoral, se destinen efectivos policiales a los locales donde se celebran los comicios, con el objeto de asegurar la libertad y regularidad de la emisión del sufragio. Este personal de custodia sólo recibe órdenes del funcionario que ejerza la presidencia de la mesa, en aquellas cuestiones atinentes a la presente Ley.

El Juzgado Electoral puede solicitar, arbitrando

los mecanismos correspondientes, la presencia de fuerzas nacionales a los efectos de la custodia y seguridad de los comicios.

Artículo 63.- Miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. LOS jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y autoridades policiales no pueden encabezar grupos de ciudadanos durante la elección ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad de sufragio ni realizar reuniones con el propósito de influir en los actos comiciales.

Al personal retirado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Provincial, cualquiera fuera su jerarquía, se le prohíbe asistir al acto electoral vistiendo su uniforme y portando armas.

El personal de las fuerzas policiales y fuerzas armadas y de seguridad en actividad, pueden asistir al acto electoral portando sus armas reglamentarias.

Artículo 64.- Prohibiciones. DESDE cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciación de los comicios, quedan prohibidos los actos públicos de proselitismo.

Desde la cero (0:00) hora del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, queda prohibido:

1) La exhibición, el depósito y la portación de armas, aún en este último caso a personas autorizadas para ello por autoridad competente, en los lugares donde se realizan los comicios y hasta una distancia de ochenta (80) metros del perímetro de aquellos, a excepción del personal policial o de las fuerzas armadas o de seguridad asignado a la custodia del local donde se celebren los comicios;

2) Los espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral y que no esté expresamente autorizada por autoridad competente;

3) El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas;

4) Ofrecer o entregar a los electores facsímiles de Boletas Únicas de Sufragio dentro de un radio de ochenta (80) metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino;

5) A los electores, el uso de banderas, divisas u otros distintivos;

6) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta (80) metros del lugar en que se instalan mesas receptoras de votos. El Juzgado Electoral puede disponer el cierre transitorio de los locales que están en infracción a lo dispuesto precedentemente. No deben instalarse mesas receptoras a menos de ochenta (80) metros de la sede central en que se encuentre el domicilio legal de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, y

7) La publicación y difusión de resultados de encuestas en boca de urna o similares.

Capítulo II

Mesas Receptoras de Votos

Artículo 65.- Autoridades de mesa. CADA mesa electoral tiene como máxima autoridad un (1) ciudadano que actúa con el título de presidente de mesa. Se designa también un (1) presidente suplente, que auxilia al presidente y lo reemplaza en los casos en que esta Ley determina.

Todas las funciones que esta Ley atribuye a los electores, constituye una carga pública y son irrenunciables.

Los presidentes de las mesas receptoras de votos actuarán con entera independencia de toda autoridad y no obedecerán orden alguna que les impida el ejercicio de sus funciones.

Artículo 66.- Requisitos. LOS presidentes de mesa, titular y suplente, deben reunir los siguientes requisitos para el desempeño de esta función:

- 1) Ser elector hábil;
- 2) Estar domiciliado en el circuito electoral donde debe desempeñarse;
- 3) Ser docente provincial de cualquiera de los niveles de la enseñanza, empleado público o privado afectado a tareas administrativas, en actividad o jubilado; y
- 4) No ser candidato en esa elección.

A los efectos de verificar la concurrencia de estos requisitos, el Juzgado Electoral está facultado para solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes que estime necesarios.

Artículo 67.- Sufragio de las autoridades de la mesa. LOS presidentes de mesa, titular y suplente, a quienes corresponde votar en una mesa distinta a aquella en que ejercen sus funciones, pueden hacerlo en la que tienen a su cargo.

Al sufragar en tales condiciones dejan constancia de la mesa a que pertenecen.

Artículo 68.- Designación de las autoridades. EL Juzgado Electoral hace, con antelación no menor de treinta (30) días a la fecha prevista para los comicios, los nombramientos de presidente, titular y suplente, para cada mesa.

Las notificaciones de designación se realizan por vía judicial o por medio de los servicios especiales de comunicación que tienen los organismos de seguridad.

Artículo 69.- Capacitación. EL Juzgado Electoral, durante el año anterior a la realización de una elección, organizará el dictado de cursos de capacitación para todos aquellos que figuren inscriptos en el Registro de Aspirantes a Presidentes de Mesa creado por la presente normativa y para quienes voluntariamente deseen hacerlo, a fin de garantizar una sólida formación en la interpretación y aplicación de esta Ley, a quien ejercerá la autoridad de mesa en los actos eleccionarios.

Asimismo, con una antelación no menor de veinte (20) días a la fecha prevista para los comicios, realizará encuentros para instruir y coordinar a quienes actua-

rán como autoridades de mesa durante el acto electoral. La asistencia será obligatoria, bajo pena de sustitución.

Artículo 70.- Viáticos. CADA presidente de mesa como así también su suplente tienen derecho al cobro de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en concepto de viáticos. La liquidación de la presente compensación tendrá lugar dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha del acto electoral.

Artículo 71.- Refrigerio. EL Poder Ejecutivo garantizará el suministro del refrigerio para el desayuno, almuerzo y merienda del presidente de mesa, el suplente, el Fiscal Público Electoral y demás fiscales.

Artículo 72.- Excusación, excepciones y justificación. LA excusación de quienes resulten designados se formula dentro de los tres (3) días de notificados y únicamente pueden invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor, debidamente justificadas, o estar incurso en algunas de las causales de inhabilitación previstas en el artículo 7º de la presente Ley. Transcurrido este plazo sólo pueden excusarse por causas sobrevinientes, las que son objeto de consideración especial por el Juzgado Electoral.

Es causal de excepción desempeñar funciones de organización o dirección de un partido, alianza o confederación política, o ser candidato y se acredita mediante certificación de las autoridades del respectivo partido, alianza o confederación.

A los efectos de la justificación por los presidentes o suplentes de mesa de la enfermedad que les impide concurrir al acto electoral, se exige que los certificados sean extendidos por médicos de la sanidad nacional, provincial o municipal. En ausencia de los profesionales indicados, la certificación puede ser extendida por un médico particular, pudiendo el Juzgado Electoral hacer verificar la exactitud de la misma por facultativos especiales. Si se comprueba falsedad, pasan los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines que hubiere lugar.

Artículo 73.- Obligaciones del presidente de mesa y su suplente. EL presidente de mesa y/o su suplente deben estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo sus obligaciones las siguientes:

1) Comprobar la autenticidad de las credenciales de los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas;

2) Elaborar y firmar el acta de apertura, en la que constará el número de mesa, circuito electoral, lugar, fecha y hora del funcionamiento de la mesa, nombre y apellido de los miembros presentes, de los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y del Fiscal Público Electoral;

3) Colocar en lugar visible uno o más carteles

que lleven impreso el número de la mesa de sufragio, para su rápida ubicación;

4) Verificar si el recinto reservado para cuarto oscuro reúne las condiciones de seguridad y garantía para que el elector emita su voto;

5) Decidir en el acto todas las reclamaciones, consultas y dudas que se susciten, manteniendo el orden en el recinto donde se sufraga y, en su caso, recurrir a la fuerza pública para expulsar, sin perjuicio de las sanciones de la ley, a toda persona que realice cualquier acto o hecho que viole la libertad, pureza y garantía del sufragio;

6) Vigilar que los votantes depositen sus respectivas boletas en la urna correspondiente;

7) Hacer constar en las actas correspondientes las protestas de los apoderados o fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas;

8) Practicar el escrutinio, y

9) Toda otra tarea que contribuya a velar por el correcto y normal desarrollo del acto electoral.

Al reemplazarse entre sí las autoridades dejan constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo. En todo momento tiene que encontrarse en la mesa el suplente, para sustituir a quien actúa como presidente, si es necesario.

Artículo 74.- Ubicación de las mesas. CON más de treinta (30) días de anticipación a la fecha de los comicios, el Juzgado Electoral designa los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos, las que pueden habilitarse en establecimientos escolares, dependencias oficiales, locales de entidades de bien público, salas de espectáculos y otros que reúnan las condiciones indispensables.

A los efectos del cumplimiento de esta disposición, el Juzgado Electoral puede requerir la cooperación de la Policía de la Provincia y, de ser menester, de cualquier otra autoridad provincial o municipal.

Los jefes, directores, dueños y encargados de los locales indicados en el primer párrafo deben adoptar todas las medidas tendientes a facilitar el funcionamiento de los comicios, desde la hora señalada por la Ley, proveyendo las mesas y sillas que necesiten sus autoridades.

En un mismo local y siempre que su conformación y condiciones lo permitan, pueden funcionar más de una mesa, ya sea de varones o mujeres o de ambos.

Si no existen en el lugar locales apropiados para la ubicación de las mesas, el Juzgado Electoral debe designar el espacio que considere adecuado para tal fin.

Artículo 75.- Notificación. LA designación de los lugares en que funcionarán las mesas y la propuesta de nombramiento de sus autoridades, son notificadas por el Juzgado Electoral, dentro de los cinco (5) días de efectuada, a las Juntas Electorales Municipales y Comunales y al Ministerio de Gobierno, o al organismo que en el fu-

turo lo sustituyere, quienes deben arbitrar los medios necesarios para brindar una amplia difusión pública.

Artículo 76.- Cambios de ubicación. EN caso de fuerza mayor, ocurrida con posterioridad a la determinación de los centros de votación, el Juzgado Electoral puede variar su ubicación y, si por la premura del caso esto no es posible, lo determina el presidente de mesa al momento de la apertura de la mesa, debiendo notificar de ello al Juzgado Electoral a través del Fiscal Público Electoral.

Artículo 77.- Publicidad de la ubicación de las mesas y sus autoridades. LA designación de los presidentes y suplentes de las mesas y el lugar en que éstas funcionen, se hace conocer por lo menos quince (15) días antes de la fecha de la elección, por medio de carteles fijados en los lugares establecidos en el artículo 25 de la presente Ley. La publicación está a cargo del Juzgado Electoral, que también la pone en conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial, oficinas de correos, policías locales, juzgados letrados o de paz y de los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas concurrentes al acto electoral.

Las Juntas Electorales Municipales y Comunales son las encargadas de hacer fijar los carteles con las constancias de designación de autoridades de los comicios y ubicación de mesas en sus respectivas localidades.

El Ministerio de Gobierno, o el organismo que en el futuro lo sustituyere, conserva en sus archivos durante tres (3) años, las comunicaciones en que consten los datos precisados en el párrafo precedente.

Capítulo III

Fiscal Público Electoral

Artículo 78.- Definición. EL Juzgado Electoral designará, por cada mesa de votación, un funcionario o representante del Poder Judicial, que con el nombre de Fiscal Público Electoral actuará como nexo entre dicho Juzgado y la autoridad de mesa.

Artículo 79.- Designación. EL Fiscal Público Electoral será designado del cuerpo de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Para el caso de no poder cubrirse las vacantes, podrán ser designados como fiscales públicos electorales los profesionales o estudiantes de las carreras de Abogacía, Ciencias Políticas o Ciencias Económicas; que previamente se hayan capacitado y estuvieren acreditados en el registro creado a tal fin.

Artículo 80.- Requisitos. EL Fiscal Público Electoral debe reunir las calidades siguientes:

- 1) Ser elector hábil;
- 2) Ser funcionario o empleado del Poder Judicial o, en su defecto, profesional o estudiante de las carreras de Abogacía, Ciencias Políticas o Ciencias Económicas,
- 3) Estar domiciliado, en lo posible, en el circuito

electoral donde debe desempeñarse, y

- 4) No ser candidato a cargo electivo, titular ni suplente, en la elección de que se trate.

Artículo 81.- Funciones. EL Fiscal Público Electoral tiene bajo su estricta responsabilidad, las siguientes funciones:

a) Hacer entrega de la urna y demás documentación electoral, al presidente designado como titular de la mesa o al suplente;

b) Proceder a la designación del primer elector como autoridad de mesa, si previa espera de ley, el titular o suplente designado no se hubiere hecho presente en el lugar de votación impidiendo la apertura de la mesa por falta de autoridad;

c) Observar todo el desarrollo del acto electoral;

d) Asistir al presidente de mesa en caso de duda, frente a la resolución de los conflictos que se le pudiesen presentar;

e) Presenciar el acto de cierre y el escrutinio, pudiendo colaborar con el presidente de mesa en todos los aspectos que hacen al recuento y elaboración del acta de escrutinio;

f) Recibir del presidente de mesa, la urna cerrada y lacrada, y la copia del acta de escrutinio -suscripta por las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas acreditados en el centro de votación-;

g) Trasladar la urna cerrada y lacrada al lugar previsto por el Juzgado Electoral para su depósito y custodia;

h) Entregar la copia del acta de escrutinio rubricada por las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, al centro de recepción indicado por el Juzgado Electoral, para su cómputo o carga informática en el denominado escrutinio provisorio, y

i) Controlar y velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la presente Ley, especialmente lo dispuesto en el artículo 65 -in fine- de esta Ley.

Artículo 82.- Excepción. CUANDO en un circuito, hubiere solo un centro de votación con un número no superior a cuatro (4) mesas, el Juzgado Electoral podrá designar a un solo Fiscal Público Electoral, quien ejercerá el cargo y asumirá las funciones inherentes a su rol en todas las mesas allí habilitadas.

Artículo 83.- Obligación de denunciar. EL Fiscal Público Electoral deberá denunciar al Juzgado Electoral cualquier anomalía que observe en el desarrollo del acto comicial, a fin de actuar en consecuencia o proceder conforme a las directivas que el Tribunal interviniente le impartan.

Artículo 84.- Mesa de votación. LOS Fiscales Públicos Electorales pueden votar en las mesas que fiscalizan aunque no estén inscriptos en ellas, siempre que estén empadronados. En ese caso se agrega el nombre del votante en la hoja del registro, haciendo constar di-

cha circunstancia y la Mesa, Circuito y Seccional en que está inscripto.

Artículo 85.- Designación de Fiscal Público Electoral. EL Juzgado Electoral formula, con antelación no menor de treinta (30) días a la fecha prevista para los comicios, los nombramientos de los Fiscales Públicos Electorales.

La aceptación del cargo deberá formalizarse personalmente por ante el Juzgado Electoral.

Las disposiciones previstas en el artículo 72 de la presente Ley son de aplicación al Fiscal Público Electoral.

Artículo 86.- Inasistencia. Reemplazo. Si por cualquier causa el Fiscal Público Electoral designado para una mesa no se hiciere presente al momento de la apertura del acto electoral, será reemplazado -ipso facto- por el Fiscal Público Electoral que deba desempeñarse en la mesa con número inmediatamente siguiente o anterior, siempre que pertenezca al mismo centro de votación.

En tal supuesto, el reemplazante debe asumir la responsabilidad del ausente y comunicar tal circunstancia al Juzgado Electoral, quien podrá enviar un sustituto de la nómina de aspirantes.

Artículo 87.- Comunicación. EL Juzgado Electoral, desde los quince (15) días antes de la elección y hasta treinta (30) días después de su clausura, publicará a través de su página web y pondrá a disposición de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas o que hayan solicitado su reconocimiento, la nómina de fiscales públicos electorales designados.

Artículo 88.- Capacitación. EL Juzgado Electoral, durante el año anterior a la realización de una elección, organizará el dictado de cursos de capacitación para todos aquellos que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 80 de la presente Ley deseen inscribirse en el Registro de Aspirantes a Fiscales Públicos Electorales creado por la presente normativa, a fin de garantizar una sólida formación en la interpretación y aplicación de esta Ley.

Asimismo, con una antelación no menor de veinte (20) días a la fecha prevista para los comicios, convocará a quienes actuarán como Fiscales Públicos Electorales a fin de instruir y coordinar su labor. La asistencia será obligatoria, bajo pena de sustitución y sanción.

Artículo 89.- Viáticos. EL Fiscal Público Electoral tiene derecho al cobro de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en concepto de viáticos. La liquidación de la presente compensación tendrá lugar dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha del acto electoral.

El Juzgado Electoral podrá incrementar el porcentaje establecido como viático, cuando requiera de la

persona designada como Fiscal Público Electoral una mayor afectación horaria para la organización previa del acto comicial.

Capítulo IV Registros

Artículo 90.- Registro de Presidentes de Mesa. CRÉASE, en el ámbito del Juzgado Electoral, el Registro Provincial de Aspirantes a Presidentes de Mesa, donde serán incluidos todos aquellos ciudadanos que habiendo ejercido dicha función acrediten la capacitación prevista en la presente Ley. También podrán inscribirse todos aquellos ciudadanos que, reuniendo los requisitos exigidos por esta Ley, deseen ejercer dicha función en cualquier acto electoral que se desarrolle en el ámbito provincial.

Artículo 91.- Registro de Fiscales Públicos Electorales. CRÉASE, en el ámbito del Juzgado Electoral, el Registro Provincial de Aspirantes a Fiscales Públicos Electorales, donde serán incluidos todos aquellos ciudadanos que hubieren ejercido dicha función y donde podrán inscribirse todos los ciudadanos que reuniendo los requisitos exigidos por la presente Ley, deseen ejercer dicha función, en cualquier acto electoral que se desarrolle en el ámbito provincial.

Artículo 92.- Organización. LAS personas inscriptas en los Registros creados en los artículos anteriores, se clasificarán por archivos según el año de la elección y el sexo de las mismas. Cada archivo se dividirá por Departamento o Sección electoral y cada una de estas divisiones se subdividirá a su vez en Circuitos electorales.

Artículo 93.- Reconocimiento. LOS ciudadanos que participen de los actos electorales, como presidentes de mesa -titular o suplente- y como Fiscales Públicos Electorales, obtendrán una certificación del Juzgado Electoral que les asignará mérito o puntaje para su carrera administrativa, o bien para el ingreso a la Administración Pública Provincial.

Artículo 94.- Antecedentes. Los ciudadanos que no habiendo participado de la elección como autoridad de mesa o Fiscal Público Electoral se encuentren inscriptos en los registros respectivos y hubieren realizado los cursos de capacitación dictados por el Juzgado Electoral, obtendrán una certificación que les asignará mérito o puntaje para su carrera administrativa, o bien para el ingreso a la Administración Pública Provincial.

Capítulo V Apertura del Acto Electoral

Artículo 95.- Constitución de las mesas el día de los comicios. EL día señalado para la elección por la convocatoria respectiva deben encontrarse a las siete y treinta (07:30) horas, en el local en que funcione la me-

sa, el presidente de mesa, su suplente y el fiscal público electoral con las urnas que menciona el artículo 61 de la presente Ley y el personal de seguridad que deba estar a las órdenes de las autoridades de los comicios.

La autoridad a cargo de la seguridad adopta las previsiones necesarias para que los efectivos policiales afectados al servicio de custodia del acto, conozcan los domicilios de las autoridades designadas. En caso de inasistencia a la hora de apertura, la autoridad a cargo de la seguridad debe proceder a obtener por los medios más adecuados el comparendo de los titulares al desempeño de sus funciones.

Si hasta las ocho y treinta (08:30) horas no se han presentado los designados, el Fiscal Público Electoral, procederá a designar los reemplazos y a tomar las medidas conducentes para la habilitación de los comicios.

Las funciones que este artículo encomienda a la policía, son sin perjuicio de las que especialmente en cada elección se establecen en cuanto a su custodia y demás normas de seguridad.

Artículo 96.- Procedimientos a seguir. EL presidente de mesa debe:

1) Recibir la urna conteniendo los padrones, los talonarios de Boletas Únicas de Sufragio originales, complementarias y suplementarias, un afiche con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que integran dicha boleta, bolígrafo de tinta indeleble, útiles y demás elementos que le entregue el Fiscal Público Electoral, debiendo firmar recibo de ellos previa verificación;

2) Quitar de la urna todos los elementos que contenga;

3) Cerrar la urna poniéndole la faja de seguridad de tal manera que no impida la introducción de la Boleta Única de Sufragio, que debe ser firmada por el presidente, el suplente, el Fiscal Público Electoral y los fiscales que lo deseen;

4) Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna. Este local tiene que elegirse de modo que quede a la vista de todos, en lugar de fácil acceso; debiendo individualizarse en forma clara y visible el número que corresponde a cada mesa;

5) Depositar en forma contigua a la urna y en la misma mesa, los talonarios de Boletas Únicas de Sufragio originales, complementarias y suplementarias, remitidas por el Juzgado Electoral y entregadas por el Fiscal Público Electoral;

6) Habilitar otro recinto inmediato al de la mesa, también de fácil acceso, para que los electores marquen en la Boleta Única de Sufragio la opción electoral de su preferencia en absoluto secreto. Este recinto, que se denomina "Cuarto Oscuro", no debe tener más de una puerta utilizable, que sea visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las demás en presencia de los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, o de

dos (2) electores por lo menos, al igual que las ventanas, de tal forma que queda garantizada con la mayor seguridad el secreto del voto. Con idéntica finalidad el presidente de mesa coloca la faja de seguridad adherida y sellada en las puertas y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizan las fajas que provee el Juzgado Electoral y son firmadas por el presidente, el Fiscal Público Electoral y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que quieran hacerlo;

7) Poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa, uno de los ejemplares del padrón de electores con su firma y con la de los fiscales que lo deseen, para que sea consultado sin dificultad;

8) Poner sobre la mesa los otros dos (2) ejemplares del padrón electoral a los efectos del control de la emisión del sufragio. Las constancias que deben remitirse al Juzgado Electoral se asientan en uno solo de los ejemplares que reciben los presidentes de mesa;

9) Colocar en un lugar visible, dentro del cuarto oscuro, el afiche con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas, cuya confección seguirá el mismo orden de la Boleta Única de Sufragio, de manera que los ciudadanos puedan distinguir, con facilidad, a los candidatos de cada agrupación política, y

10) Verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que han asistido. Aquellos que no se encuentran presentes en el momento de apertura del acto electoral son reconocidos cuando acrediten, ante las autoridades de mesa, la representación que invoquen pero los actos que se hayan cumplido sin su presencia no son reeditados o reproducidos.

Artículo 97.- Carteles, inscripciones o insignias. QUEDA prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que esta Ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector.

Solo estarán permitidos los afiches con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que integran la Boleta Única de Sufragio.

Artículo 98.- Apertura del acto. A la hora ocho (08:00) el presidente de mesa declara abierto el acto electoral y labra el acta pertinente, llenando los claros del formulario impreso. El acta de apertura debe ser suscrita por el presidente de mesa, el suplente, el Fiscal Público Electoral y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas. Si alguno de ellos no está presente o no hay fiscales nombrados o se niegan a firmar, el presidente de mesa consigna tal circunstancia certificada por dos (2) electores presentes que firman juntamente con él.

Artículo 99.- Procedimiento. UNA vez abierto el acto, los electores se apersonan al presidente de mesa por orden de llegada, exhibiendo su documento de identidad.

El presidente de mesa, el suplente, el Fiscal Público Electoral y los fiscales acreditados ante la mesa y que están inscriptos en la misma son, en su orden, los primeros en emitir el voto.

Si el presidente de mesa, su suplente o el Fiscal Público Electoral no están inscriptos en la mesa en que actúan, se agrega en la hoja del registro el nombre del votante así como la mesa en que está registrado.

Los fiscales o autoridades de mesa que no están presentes al abrirse el acto, sufragan a medida que se incorporan a la misma.

En ningún caso se puede agregar más de un (1) fiscal por partido, alianza o confederación política en la misma mesa receptora de votos, en las condiciones establecidas en el artículo 44 de la presente Ley.

Artículo 100.- Carácter del voto. EL voto es obligatorio y su emisión es secreta durante todo el desarrollo del acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo total o parcialmente de modo alguno la Boleta Única de Sufragio, ni formular durante su permanencia en el lugar cualquier manifestación que importe violar tal secreto.

Artículo 101.- Dónde y cómo pueden votar los electores. LOS electores pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuran asentados, con las excepciones previstas en esta Ley y con documento de identidad habilitante.

El presidente de mesa verifica si el ciudadano a quien pertenece el documento de identidad figura en el padrón electoral de la mesa. Para ello coteja si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas indicaciones contenidas en dicho documento.

Artículo 102.- Discrepancia de datos. CUANDO por error de impresión, alguna de las menciones del padrón no coincida exactamente con la de su documento de identidad, el presidente de mesa no puede impedir el voto del elector si existe coincidencia en las demás constancias. En estos casos se anotan las diferencias en la columna de observaciones.

Si por deficiencia del padrón, el nombre del elector no corresponde exactamente al de su documento de identidad, el presidente de mesa admite el voto siempre que, examinados debidamente el número y tipo de ese documento, clase y domicilio, sean coincidentes con los del padrón.

Tampoco se debe impedir la emisión del voto cuando:

1) El nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o algunos datos relativos al documento de identidad;

2) Falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste satisfactoriamente el interrogatorio minucioso que le formule el presidente de mesa sobre los datos personales y cualquier otra circunstancia que tienda a la debida identificación;

3) Se encuentren llenas la totalidad de las casillas destinadas a asentar la emisión del sufragio, en cuyo caso se habilitan a tal efecto las páginas en blanco del documento de identidad;

4) El elector concurra a sufragar con un documento de identidad posterior a aquel con el que figura inscripto en el padrón, y

5) El elector concurra a sufragar con un documento que contenga anotaciones de instituciones u organismos oficiales o referidas al grupo sanguíneo.

Artículo 103.- Inadmisibilidad del voto. NO le es admitido el voto al elector cuando:

1) Exhiba un documento de identidad anterior al que consta en el padrón, y

2) Presente libreta cívica o de enrolamiento y figure en el registro con documento nacional de identidad.

El presidente de mesa deja constancia en la columna de observaciones del padrón, de las circunstancias a que se refieren las disposiciones del artículo 121 de esta Ley.

Ninguna autoridad, ni aún el fiscal público electoral, puede ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral, excepto en los casos previstos en los artículos 44, 67 y 84 de la presente Ley.

Artículo 104.- Derecho del elector a votar. TODO aquel que figura en el padrón y exhiba su documento de identidad tiene el derecho a votar y nadie puede ni debe cuestionarlo en el acto del sufragio.

Los presidentes de mesa no aceptan impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el padrón electoral. Está excluido del mismo quien se encuentra tachado con tinta roja en el padrón de la mesa, no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se alegare error.

Artículo 105.- Orden de la votación. LOS electores votan en el orden de su llegada a la mesa correspondiente, a cuyo efecto deben formar fila de a uno. La mesa dará preferencia a:

1) Mujeres embarazadas;

2) Minusválidos y enfermos, y

3) Electores mayores de setenta (70) años.

Artículo 106.- Verificación de la identidad del elector. COMPROBADO que el documento de identidad presentado pertenece al mismo ciudadano que aparece registrado como elector, el presidente de mesa procede a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento. Ante cualquier discrepancia u objeción escucha sobre el punto al Fiscal

Público Electoral y a los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y procede conforme previenen los artículos siguientes.

Artículo 107.- Derecho a interrogar al elector. QUIEN ejerce la presidencia de la mesa, por iniciativa propia o a pedido de los fiscales, tiene derecho a interrogar al elector sobre las diversas referencias y anotaciones del documento de identidad.

Artículo 108.- Impugnación de la identidad del elector. EL presidente de mesa o los fiscales tienen derecho a impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio haya falseado su identidad. En esta alternativa se debe exponer concretamente el motivo de la impugnación, labrándose un acta firmada por el presidente de mesa y el o los impugnantes y tomándose nota sumaria en la columna de observaciones del padrón.

Artículo 109.- Procedimiento en caso de impugnación. EN caso de impugnación el presidente de mesa lo hace constar en el sobre correspondiente. De inmediato anota el nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad y clase y toma la impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario respectivo, que es firmado por el presidente de mesa y por el o los fiscales impugnantes. Si alguno de ellos se niega el presidente de mesa deja constancia, pudiendo hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los electores presentes.

La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importa el desistimiento y anulación de la impugnación, pero basta que uno solo firme para que subsista.

Luego coloca este formulario dentro del mencionado sobre, que entrega abierto al ciudadano, junto con la Boleta Única de Sufragio y lo invita a pasar al cuarto oscuro. El elector no puede retirar del sobre el formulario; si lo hace constituye prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acreditación en contrario. Luego, la Boleta Única de Sufragio del elector es colocada en el sobre de voto impugnado.

Después que el compareciente impugnado haya sufragado, si el presidente de mesa considera fundada la impugnación, está habilitado para ordenar que sea arrestado a su orden.

Artículo 110.- Entrega de la Boleta Única de Sufragio al elector. Si la identidad no es impugnada, el presidente de mesa entrega al elector una Boleta Única de Sufragio firmada por él, por el Fiscal Público Electoral y por los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que deseen hacerlo -en el casillero habilitado a tal efecto- y lo invita a pasar al cuarto oscuro para marcar la opción electoral de su preferencia.

La Boleta Única de Sufragio entregada debe tener los casilleros en blanco y sin marcar y estar acompañada de un bolígrafo con tinta indeleble que permita al elector marcar la opción electoral de su preferencia.

Cuando los fiscales firmen una Boleta Única de Sufragio están obligados a firmar varias a los fines de

evitar la identificación del votante.

Artículo 111.- Emisión del voto. EN el cuarto oscuro, el elector marca la opción electoral de su preferencia en la Boleta Única de Sufragio con una cruz, tilde o símbolo similar dentro de los recuadros impresos en ella, según corresponda. Dicho símbolo puede sobrepasar el respectivo recuadro, sin que ello invalide la preferencia.

La Boleta Única de Sufragio debidamente doblada por sus pliegues es depositada por el elector en la urna. El presidente de mesa, por propia iniciativa o a pedido fundado del Fiscal Público Electoral o de los fiscales, puede ordenar se verifique si la Boleta Única de Sufragio que trae el elector es la misma que se le entregó.

Será obligación del presidente de mesa corroborar que la Boleta Única de Sufragio esté doblada en forma tal que resulte absolutamente imposible conocer la preferencia marcada por el elector.

Artículo 112.- Personas con discapacidades. LOS no videntes son acompañados hasta el cuarto oscuro por el presidente de mesa y el Fiscal Público Electoral, quienes le entregarán conjuntamente con su Boleta Única de Sufragio una plantilla de alfabeto Braille, fácil de colocar sobre la Boleta Única de Sufragio, a fin de que puedan ejercer su opción electoral; seguidamente se retiran para que el elector realice su elección.

Para el caso de que hubiera algún elector con una discapacidad que le impida ejercer el voto, el presidente de mesa deberá acompañarlo y colaborar con los pasos necesarios hasta la introducción de la Boleta Única de Sufragio en la urna.

Artículo 113.- Constancia de la emisión del voto. EL presidente de mesa procede, inmediatamente, a anotar en el padrón de electores de la mesa, a la vista de los fiscales y del elector mismo, la palabra "Votó" en la columna respectiva en la fila del nombre del sufragante. La misma anotación, fechada, sellada y firmada, se debe hacer en su documento de identidad en el lugar expresamente destinado a ese efecto o en el lugar establecido en el artículo 102 inciso 3) de la presente Ley.

Artículo 114.- Constancia en el padrón y acta. EN los casos de los artículos 44, 67 y 84 de la presente Ley, deben agregarse el o los nombres y demás datos del padrón de electores y dejarse constancia en el acta respectiva. El Juzgado Electoral debe, una vez concluido el acto electoral, efectuar un control específico de los electores agregados en el padrón de cada mesa, a los efectos de verificar que no se haya incurrido en una doble emisión del sufragio.

Capítulo VII

Funcionamiento del Cuarto Oscuro

Artículo 115.- Inspección. EL presidente de mesa examina el cuarto oscuro a pedido de los fiscales o cuando lo estima necesario con el objeto de cerciorarse que esté de acuerdo con lo previsto en el artículo 96, incisos 5) y 8) de la presente Ley.

Capítulo VIII Clausura del Acto

Artículo 116.- Interrupción de las elecciones. LAS elecciones no pueden ser interrumpidas y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresa en acta separada el tiempo que haya durado la interrupción y la causa de ella.

Artículo 117.- Clausura de los comicios. EL acto electoral finaliza a las dieciocho (18:00) horas, momento en que el presidente de mesa ordena se clausure el acceso a los comicios pero debe continuar recibiendo el voto de los electores que estén en el interior del recinto donde se encuentra la mesa, esperando su turno.

Concluida la recepción de estos sufragios, tacha del padrón los nombres de los electores que no hayan comparecido y hace constar al pie el número de los sufragantes. Este número debe coincidir con el número de Boletas Únicas de Sufragio entregadas a los electores.

Asimismo asentará las protestas que hayan formulado los fiscales.

En los casos previstos en los artículos 44, 67 y 84 de la presente Ley, se deja constancia del o de los votos emitidos en esas condiciones.

Una vez clausurado el comicio, sobre las Boletas Únicas de Sufragio sobrantes y las complementarias y suplementarias no utilizadas, se estampará el sello “Sobrante” y las firmará el presidente de mesa, el Fiscal Público Electoral y los fiscales que quieran hacerlo. Luego, dentro de un sobre identificado al efecto, se introducirán en la urna, junto a la documentación y demás elementos utilizados para el comicio.

Capítulo IX Disposiciones Comunes

Artículo 118.- Inmunidad de detención. EL personal administrativo afectado a tareas electorales, los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, los integrantes de las mesas receptoras de votos y los fiscales partidarios, gozan de inmunidad el día del acto comicial y no podrán ser detenidos ni molestados por ninguna autoridad, de no mediar flagrancia en la comisión de un delito de acción penal.

Artículo 119.- Información. EL día de los comicios, el Fiscal Público Electoral podrá arbitrar mecanismos de información en los locales de votación a los efectos de que los electores puedan identificar la mesa en la que votan.

TÍTULO V ESCRUTINIO

Capítulo I Escrutinio de la Mesa

Artículo 120.- Calificación de los sufragios. LOS sufragios tienen las siguientes categorías:

1) Votos válidos:

a) Los emitidos mediante la Boleta Única de Sufragio oficializada, entregada por la autoridad de mesa, en la que inequívocamente se halla expresada la voluntad del elector mediante la inserción de una cruz, tilde o símbolo similar en el casillero correspondiente para cada categoría de candidatos, y

b) Los emitidos mediante la Boleta Única de Sufragio oficializada, entregada por la autoridad de mesa, en la que inequívocamente se halla expresada la voluntad del elector mediante la inserción de una cruz, tilde o símbolo similar en el casillero correspondiente al partido, alianza o confederación política, entendiéndose que dicha expresión resulta válida para todas las categorías de candidatos presentados por esa agrupación política.

2) Votos nulos:

a) Los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio no oficializada o con papel de cualquier color o con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza;

b) Los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio oficializada que contenga inscripciones o leyendas de cualquier tipo;

c) Los emitidos en Boleta Única de Sufragio oficializada que contenga dos (2) o más marcas de distinto partido. Alianza o confederación política para la misma categoría de candidatos;

d) Los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio oficializada que presente destrucción parcial, defectos o tachaduras.

3) Votos en blanco: los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio oficializada en la cual todos los casilleros destinados a insertar una cruz, tilde o símbolo similar, se encuentren en blanco, y

4) Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal debe fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asientan sumariamente en formulario especial que provee el Juzgado Electoral. Dicho formulario se adjunta a la Boleta Única de Sufragio y lo suscribe el fiscal cuestionante, consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento de identidad, domicilio y partido, alianza o confederación política a la que pertenece. Ese voto se anota en el acta de cierre de los comicios como “voto recurrido” y es escrutado oportunamente por el Juzgado Electoral, que decide sobre su validez o nulidad. El escrutinio de los votos recurridos declarados válidos por el Juzgado Electoral se hace en la forma prevista en el artículo 139 de la presente Ley.

5) Votos impugnados: son aquellos en que se ataca la identidad del elector, conforme al procedimiento establecido por los artículos 108 y 109 de la presente Ley.

Artículo 121.- Procedimiento. EL presidente de mesa, auxiliado por el suplente, con vigilancia policial o militar en el acceso y en presencia del Fiscal Público Electoral y los fiscales o apoderados acreditados que lo soliciten, hace el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:

1) Abre la urna, de la que extrae todas las Boletas Únicas de Sufragio y las cuenta, confrontando su número con el de los sufragantes consignados al pie del padrón. El resultado debe ser igual; en caso contrario, tal circunstancia debe asentarse en el acta de escrutinio;

2) Verifica que cada Boleta Única de Sufragio esté correctamente rubricada con su firma en el casillero habilitado a tal efecto;

3) Desdobra cada Boleta Única de Sufragio y lee en voz alta el voto consignado en cada uno de los casilleros habilitados para tal fin, identificando la categoría de candidatos y el partido, alianza o confederación política al que corresponda. El Fiscal Público Electoral y los fiscales acreditados ante la mesa de sufragios tienen el derecho de examinar el contenido de la Boleta Única de Sufragio leída.

4) El resultado expresado a viva voz se irá anotando en el formulario provisto a tal efecto;

5) Inmediatamente se sellarán las Boletas Únicas de Sufragio con un sello que dirá "Escrutada".

Cuando una o varias Boletas Únicas de Sufragio fueren recurridas, se labrará acta consignando los motivos que fundamentan la observación. Estas boletas junto al acta respectiva se colocarán en un sobre especial que se enviará al Juzgado Electoral para que resuelva al respecto.

La iniciación de las tareas del escrutinio no puede tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las dieciocho (18:00) horas, aún cuando hubiera sufragado la totalidad de los electores.

El escrutinio de los votos obtenidos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas se hace bajo la vigilancia permanente del Fiscal Público Electoral y los fiscales partidarios, de manera que puedan lograr su cometido con facilidad y sin impedimento alguno.

Artículo 122.- Acta de escrutinio. CONCLUIDA la tarea del escrutinio el presidente de mesa consigna en el acta de cierre de los comicios lo siguiente:

1) La hora del cierre de los comicios, número de sufragios emitidos, cantidad de Boletas Únicas de Sufragio utilizadas y no utilizadas, cantidad de Boletas Únicas de Sufragio complementarias y suplementarias utilizadas y no utilizadas, cantidad de votos impugnados, diferencia si la hubiere entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados en el registro de electores, todo ello asentado en letras y números;

2) Cantidad de votos, en letras y números, logrados por cada uno de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y en cada una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, recurridos y en blanco;

3) El nombre del presidente de mesa, del suplente, del Fiscal Público Electoral y fiscales que actuaron en la mesa, con mención de los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio;

4) La mención de las protestas que formulan los fiscales sobre el desarrollo del acto electoral y las que hagan con referencia al escrutinio;

5) La nómina de los efectivos policiales, individualizados con el número de identificación, que se desempeñaron a las órdenes de las autoridades de los comicios hasta la terminación del escrutinio, y

6) La hora de finalización del escrutinio.

Además del acta de cierre referida y con los resultados extraídos de la misma, el presidente de mesa extiende, en formulario que se remite al efecto, un certificado de escrutinio que debe ser suscrito por él, por el suplente, por el Fiscal Público Electoral y los fiscales partidarios.

El presidente de mesa extiende y entrega a los fiscales que lo soliciten un certificado de escrutinio, que debe ser suscrito por las mismas personas mencionadas en el párrafo anterior.

Si los fiscales o alguno de ellos no quieren firmar el o los certificados de escrutinio, se hace constar en los mismos esta circunstancia.

En el acta de cierre de los comicios se deben consignar los certificados de escrutinios pedidos y quienes los recibieron, así como la circunstancia de los casos en que no fueron suscritos por los fiscales y el motivo de ello.

Artículo 123.- Guarda de boletas y documentos. UNA vez suscrita el acta referida en el artículo anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositan:

a) Dentro de la urna, las Boletas Únicas de Sufragio, un certificado de escrutinio y en sobre especial las Boletas Únicas de Sufragio originales, complementarias y suplementarias que no hayan sido utilizadas, y

b) Fuera de la urna, en el sobre especial que remite el Juzgado Electoral, el padrón electoral con las actas de apertura y de cierre firmadas, los votos recurridos y los votos impugnados, el que debe ser lacrado, sellado y firmado por las autoridades de mesa, el Fiscal Público Electoral y los fiscales partidarios.

Artículo 124.- Cierre de la urna y sobre especial. EL cierre de la urna se debe realizar colocándose una faja especial que tape su boca o ranura, cubriéndose totalmente la tapa, frente y parte posterior, que asegura y firma el presidente de mesa, el suplente, el Fiscal Público Electoral y los fiscales que lo deseen.

Seguidamente el presidente de mesa hace entrega inmediata de la urna y del sobre especial indicado en el anterior, en forma personal, al Fiscal Público Electoral, quien extenderá el recibo correspondiente, con indicación de la hora y les ordenará a los efectivos policiales, fuerzas de seguridad o militares que presten la cus-

todia necesaria al Fiscal Público Electoral, hasta que la urna y el sobre pertinente se trasladen al lugar indicado por el Juzgado Electoral para su depósito.

Artículo 125.- Entrega del Acta de Escrutinio al Juzgado Electoral. INMEDIATAMENTE de finalizado el acto electoral, el Fiscal Público Electoral hará entrega de la copia del acta de escrutinio rubricada por las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, en el centro de recepción indicado por el Juzgado Electoral, para su cómputo o carga informática en el denominado escrutinio provisorio, en la forma que se le hubiere ordenado.

Artículo 126.- Custodia de las urnas y su documentación. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas pueden vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se entregan al Fiscal Público Electoral hasta que son recibidas por el Juzgado Electoral.

El transporte y entrega de las urnas al Juzgado Electoral, se hace sin demora alguna en relación a los medios de movilidad disponibles.

Cuando las urnas y documentos deban permanecer en depósito, se colocarán en un cuarto en el que las puertas, ventanas y cualquier otra abertura, estén cerradas y selladas en presencia de los fiscales que decidan estar presentes, quienes pueden custodiar las puertas de entrada durante el tiempo que las urnas permanezcan en dicho lugar.

Capítulo II

Escrutinio del Juzgado Electoral

Artículo 127.- Plazos. EL Juzgado Electoral efectúa con la mayor celeridad las operaciones que se indican en esta Ley. A los fines de este capítulo, todos los plazos se computan en días corridos.

Artículo 128.- Designación de fiscales. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos pueden designar fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio a cargo del Juzgado Electoral, así como a examinar la documentación correspondiente.

Artículo 129.- Control y fiscalización. EL control de los comicios por los partidos, alianzas o confederaciones políticas comprende, además, la recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio de y a los centros establecidos para su cómputo, y al procesamiento informático de los resultados provisorios y definitivos, incluyendo el sistema informático utilizado. Este último es verificado por el Juzgado Electoral que mantiene una copia bajo resguardo y permite a los partidos, alianzas o confederaciones políticas las comprobaciones que requieran del sistema empleado, que debe estar disponible, a esos fines, con suficiente antelación.

Artículo 130.- Recepción de la documentación.

EL Juzgado Electoral recibe todos los documentos vinculados a la elección que le entrega el Fiscal Público Electoral. Concentra esta documentación en lugar visible y permite la fiscalización por los partidos, alianzas o confederaciones políticas.

Artículo 131.- Reclamos y protestas. DURANTE las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la elección, el Juzgado Electoral recibe las protestas y reclamos de cualquier ciudadano, que versen sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se admite reclamo alguno.

En igual plazo también recibe de los organismos directivos de los partidos, alianzas o confederaciones políticas las protestas y reclamos contra la elección.

Las protestas o reclamos que realicen los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben cumplir, bajo pena de inadmisibilidad, con las siguientes formalidades:

- 1) Ser formulada por el apoderado del partido, alianza o confederación impugnante, por escrito, y
- 2) Acompañar o indicar los elementos probatorios, cualquiera sea su naturaleza, salvo cuando la demostración -de los reclamos o protestas- surjan de los documentos que obran en el Juzgado Electoral.

Artículo 132.- Procedimiento para el escrutinio. VENCIDO el plazo establecido en el artículo anterior, el Juzgado Electoral realiza el escrutinio definitivo, el que debe quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto se habilitan los días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción.

El escrutinio definitivo se ajusta, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar:

- 1) Si hay indicios de que haya sido adulterada;
- 2) Si no tiene defectos sustanciales de forma;
- 3) Si viene acompañada de las demás actas y documentos que el presidente de mesa haya producido o recibido con motivo del acto electoral y escrutinio de la mesa;
- 4) Si admite o rechaza las protestas;
- 5) Si el número de ciudadanos que sufragaron según el acta, coincide con el número de Boletas Únicas de Sufragio remitidas por el presidente de mesa, verificación que sólo se lleva a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido, alianza o confederación política actuante en la elección, y
- 6) Si existen votos recurridos, los considera para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por circuito electoral.

Realizadas las verificaciones preestablecidas, el Juzgado Electoral se limita a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que medie reclamo de algún partido, alianza o confederación política actuante en la elección.

Artículo 133.- Validez. EL Juzgado Electoral tiene por válido el escrutinio de mesa que se refiera a los votos no sometidos a su consideración.

Artículo 134.- Declaración de nulidad. EL Juzgado Electoral declara nula la votación realizada en una mesa, aunque no medie petición de ciudadano, partido, alianza o confederación política cuando:

1) No haya acta de cierre de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autoridades de los comicios y el Fiscal Público Electoral;

2) Haya sido maliciosamente adulterada el acta o, a falta de ella, el certificado de escrutinio no cuente con los recaudos mínimos preestablecidos, y

3) El número de sufragantes consignados en el acta o, en su defecto, en el certificado de escrutinio difiera en dos por ciento (2%) o más del número de Boletas Únicas de Sufragio originales y adicionales utilizadas y remitidas por el presidente de mesa.

Artículo 135.- Comprobación de irregularidades. A petición de los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, el Juzgado Electoral puede anular la elección practicada en una mesa cuando:

1) Se compruebe que la apertura tardía o la clausura anticipada de los comicios privó maliciosamente a los electores de emitir su voto, y

2) No aparezca la firma del presidente de mesa - titular o suplente- en el acta de apertura o de clausura o, en su caso, en el certificado de escrutinio.

Artículo 136.- Recuento de sufragios por errores en la documentación. EN caso de evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio consignados en la documentación de la mesa o en el supuesto de no existir esta documentación específica, el Juzgado Electoral puede no anular el acto comicial y realizar integralmente el escrutinio con las respectivas Boletas Únicas de Sufragio remitidas por el presidente de mesa.

Artículo 137.- Convocatoria a complementarias. SI no se efectuó la elección en alguna o algunas mesas o se hubiese anulado alguna de ellas, el Juzgado Electoral puede requerir del Poder Ejecutivo Provincial que convoque a los electores respectivos a elecciones complementarias, para lo cual es indispensable que al menos un partido, alianza o confederación política, de los que hayan participado en los comicios, lo solicite dentro de los tres (3) días de sancionada la nulidad o fracasada la elección.

Artículo 138.- Efectos de la anulación de mesas. SE considera que no existió elección en un circuito o una sección, cuando la mitad del total de las mesas hayan sido anuladas por el Juzgado Electoral, en cuyo caso el Juez comunica dicha circunstancia al Poder Ejecutivo Provincial.

Declarada la nulidad se procederá a una nueva convocatoria, con sujeción a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 139.- Votos impugnados. Procedimien-

to. EN el examen de los votos impugnados se procede de la siguiente manera:

1) De los sobres se retira el formulario previsto en el artículo 109 de la presente Ley y se envía al Juzgado Electoral para que, después de cotejar la impresión dígito pulgar y demás datos con los existentes en la ficha del elector cuyo voto ha sido impugnado, informe sobre la identidad del mismo;

2) Si la identidad del elector no resultase probada, el voto no es tenido en cuenta en el cómputo. Si resultase probada, el voto debe ser computado y el Juez ordena la inmediata libertad si se hallase arrestado. Tanto en un caso como en otro, los antecedentes se pasan a la fiscalía con competencia electoral, para que sea evaluada la responsabilidad del elector o del impugnante falso;

3) Si el elector ha retirado el formulario, su voto se declara anulado, destruyéndose el sobre que lo contiene, y

4) El escrutinio de los sufragios impugnados declarados válidos por el Juzgado Electoral se hace reuniendo todos los correspondientes a cada circuito electoral y procediendo a la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado en una urna o caja cerrada, a fin de impedir la individualización de la mesa y del votante.

Artículo 140.- Cómputo final. EL Juzgado Electoral suma los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras consignadas en las actas, a las que se adicionan los votos que hayan sido recurridos y resulten válidos y los indebidamente impugnados y declarados válidos, de los que se deja constancia en el acta final.

Finalizadas estas operaciones el Juzgado Electoral pregunta a los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas si hay protestas que formular contra el escrutinio. No habiendo protestas o después de resueltas las que se presenten, el Juzgado Electoral acuerda un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.

Artículo 141.- Proclamación de los electos. EL Juzgado Electoral proclama a los que resultan electos y les entrega los documentos que acrediten su condición.

Artículo 142.- Destrucción de boletas. EN presencia de los apoderados o fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que deseen concurrir al acto, el Juzgado Electoral procede a la destrucción de las Boletas Únicas de Sufragio, con excepción de aquellas a las que se hayan negado validez o hayan sido objeto de algún reclamo, las que se unen al acta que alude el artículo 140 de la presente Ley, rubricada por los concurrentes a este acto.

Artículo 143.- Acta del escrutinio. Testimonios. EL Juzgado Electoral debe enviar testimonio del acta final al Poder Ejecutivo Provincial y a los partidos, alianzas o confederaciones políticas intervinientes.

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Cór-

doba, o el organismo que en el futuro lo sustituyere, conserva durante cuatro (4) años los testimonios de las actas que le remite el Juzgado Electoral.

TÍTULO VI VIOLACIÓN DE LA LEY ELECTORAL PENAS Y RÉGIMEN PROCESAL

Capítulo I

Faltas Electorales y Sanciones

Artículo 144.- No concurrencia de autoridades de mesa. LA persona designada como autoridad de mesa que, injustificadamente o con justificativo falso, no concurriera a desempeñar dicha función o hiciera abandono de ella, incurrirá en falta grave y será sancionada con:

1) Una multa equivalente de hasta un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por un período de seis (6) meses a un (1) año a partir del día de la elección; o

2) Suspensión de hasta treinta (30) días sin goce de haberes en el cargo que estuviere ejerciendo, si fuere funcionario o empleado público.

Artículo 145.- No concurrencia del Fiscal Público Electoral. LA persona designada como Fiscal Público Electoral que, injustificadamente o con justificativo falso, no concurriera a desempeñar dicha función o hiciera abandono de ella, incurrirá en falta grave y será sancionada con:

1) Una multa equivalente de hasta dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis (6) meses a un (1) año a partir del día de la elección, o

2) Suspensión de hasta sesenta (60) días -sin goce de haberes- en el cargo que estuviere ejerciendo, si fuere funcionario o empleado público.

Artículo 146.- No emisión del voto. EL elector que no emita su voto y no se justifique ante el Juzgado Electoral, dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección, por alguna de las causas mencionadas en el artículo 14 de la presente Ley, será sancionado con multa equivalente al diez por ciento (10%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis (6) meses a un (1) año a partir del día de la elección.

Artículo 147.- Denegación de licencias. EL empleador que no conceda la licencia establecida en el artículo 12 de la presente Ley, será sancionado con multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 148.- Exhibición y portación de armas. EL que exhiba o porte armas desde la cero (0:00) hora del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, siempre que el hecho no importe

una falta o delito conminado con una sanción mayor, será reprimido con arresto de hasta diez (10) días o multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 149.- Realización de espectáculos públicos. EL que realice espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reuniones públicas que no estuviesen previamente autorizados, desde la cero (0:00) hora del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, será reprimido con arresto de hasta cinco (5) días o multa equivalente a un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 150.- Exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios. Propaganda política. EL que exhiba banderas o divisas y otros distintivos partidarios o efectúe públicamente cualquier propaganda política, desde la cero (0:00) hora del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, siempre que el hecho no importe una falta o delito conminado con sanción mayor, será reprimido con arresto de hasta cinco (5) días o multa equivalente al diez por ciento (10%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 151.- Difusión de encuestas. EL que publicitare o difundiere el resultado de encuestas o sondeos de opinión en boca de urna hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, siempre que el hecho no importe una falta o delito conminado con sanción mayor, será reprimido con multa equivalente a cincuenta (50) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil o hasta sesenta (60) días de arresto.

Artículo 152.- Sanciones mínimas: El que cometiére cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 64 de la presente Ley y que no tuviere una sanción específica, será reprimido con arresto de hasta cinco (5) días o multa equivalente al diez por ciento (10%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 153.- Pago de las multas. EL pago de las multas debe efectivizarse dentro de los diez (10) días hábiles de dictada la sentencia que la imponga mediante depósito bancario en la cuenta que al efecto habilite el Banco de la Provincia de Córdoba, con entrega de comprobantes al Juzgado Electoral.

Artículo 154.- Conversión: SI la multa no fuera abonada en el plazo establecido y la falta estuviere también sancionada con privación de la libertad, se producirá su conversión en arresto, a razón de un diez por ciento (10%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada día de arresto, siempre que no supere el máximo correspondiente a la falta de que se tratare.

La pena de arresto por conversión de una multa cesará por su pago total. En este caso se descontará la parte proporcional al tiempo de arresto sufrido.

Artículo 155.- Constancia de no emisión del voto

en el documento de identidad. EL empleador o representante legal de organismos y empresas públicas y privadas prestadoras de servicios públicos, como así también la autoridad policial y autoridades judiciales, deben concurrir en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles antes de la celebración del acto electoral, al Juzgado Electoral a los efectos de retirar constancia que certifique la autorización para no emitir el voto a todos aquellos electores comprendidos en el artículo 14, incisos 2), 5) y 6) de la presente Ley.

Conforme a la autorización expedida por el Juzgado Electoral, los empleadores o representantes legales y autoridades mencionadas en el párrafo anterior proceden, el día siguiente al acto electoral, a dejar constancia de la no emisión del sufragio, con sello especial y firma en el lugar destinado a anotar la emisión del voto en los documentos cívicos de sus dependientes, siendo suficiente esto para no considerarlo infractor.

En el caso del artículo 146 de la presente Ley, justificada debidamente la no emisión del voto o efectivizado el pago de la multa, el Juzgado Electoral lo asienta en el lugar destinado a la constancia de emisión del voto del documento de identidad del elector.

Capítulo II Delitos Electorales

Artículo 156.- Denunciante. CUALQUIER elector o los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidos pueden denunciar ante el Juzgado Electoral o el Magistrado competente, los delitos tipificados en el Código Electoral Nacional.

Capítulo III Procedimiento

Artículo 157.- Resoluciones recurribles. LAS resoluciones dictadas por el Juzgado Electoral son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia por vía de los recursos de apelación y nulidad, según corresponda a la naturaleza del agravio invocado. Ambos recursos se interponen ante el Juzgado Electoral, conjuntamente, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución y el Juzgado Electoral resuelve el otorgamiento o no de los recursos, dentro de los tres (3) días siguientes. Si no los concede, queda al interesado la posibilidad de interponer recurso directo o de queja ante el Tribunal Superior de Justicia.

Son de aplicación en todo lo que no esté específicamente previsto en esta Ley Electoral, las disposiciones que sobre cada caso estén contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 158.- Delitos y faltas electorales. LOS delitos y faltas electorales se sustancian conforme al procedimiento regulado en el Código Procesal Penal, siendo recurrible en los casos y por las vías previstas en dicho cuerpo legal.

Artículo 159.- Procedimiento especial en la ac-

ción de amparo del elector. Sustanciación. AL efecto de sustanciar la acción de amparo a que se refiere el artículo 13 de la presente Ley, los funcionarios y magistrados resuelven inmediatamente en forma verbal. Sus decisiones se cumplen sin más trámite por intermedio de la fuerza pública, si es necesario, y en su caso son comunicadas en forma inmediata al Juzgado Electoral. A este fin los magistrados judiciales mantienen abiertas sus oficinas durante el transcurso del acto electoral.

Artículo 160.- Juntas Electorales Municipales y Comunales. LAS Juntas Electorales Municipales y Comunales, el día de la elección, son los organismos encargados de colaborar con el Fiscal Público Electoral y velar por el cumplimiento de las órdenes que dicte el Juzgado Electoral.

TÍTULO VII SISTEMA ELECTORAL PROVINCIAL

Capítulo I Elección de Gobernador y Vicegobernador

Artículo 161.- Forma. EL gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. Cada elector sufra por una fórmula indivisible de candidatos a ambos cargos.

Artículo 162.- Elección. LA elección del gobernador y vicegobernador debe realizarse, como mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los ciento veinte (120) días de esa fecha.

Artículo 163.- Imposibilidad de asumir del gobernador y vicegobernador electos. EN caso de muerte, dimisión, ausencia u otro impedimento de carácter permanente para asumir el cargo del electo gobernador, asume en su reemplazo como titular del Poder Ejecutivo el electo vicegobernador. Si el impedimento fuera temporal, asume en su reemplazo el electo vicegobernador hasta que cese dicho impedimento.

En caso de muerte, renuncia o imposibilidad de ocupar el cargo los ciudadanos electos gobernador y vicegobernador, se procede, en el plazo de treinta (30) días, a una nueva elección de gobernador y vicegobernador.

Capítulo II Elección de Legisladores Provinciales

Artículo 164.- Forma. LOS legisladores provinciales son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia y de los departamentos, según corresponda, de la manera que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 165.- Elección. LA elección de los legisladores provinciales debe realizarse, como mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los ciento veinte (120) días de esa fecha.

Artículo 166.- Integración. LA Legislatura de la Provincia de Córdoba se integra de la siguiente forma:

1) Por veintiséis (26) legisladores elegidos directamente por el pueblo, a pluralidad de sufragios y a razón de uno (1) por cada uno de los departamentos en que se divide la Provincia, considerando a éstos como distrito único, y

2) Por cuarenta y cuatro (44) legisladores elegidos directa y proporcionalmente por el pueblo, tomando a toda la Provincia como distrito único.

La distribución de estas bancas se efectúa de la siguiente manera:

a) El total de los votos obtenidos por cada una de las listas se divide por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al número total de las bancas a cubrir;

b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de la que provengan, se ordenan de mayor a menor hasta llegar al número cuarenta y cuatro (44);

c) Si hubiere dos (2) o más cocientes iguales, se los ordena en relación directa con el total de los votos obtenidos por las listas respectivas, y si éstas hubiesen logrado igual número de votos, el ordenamiento definitivo de los cocientes empatados resulta de un sorteo que a tal fin debe practicar el Juzgado Electoral, y

d) A cada lista le corresponden tantas bancas como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento de las cuarenta y cuatro (44) bancas.

Capítulo III

Elección de Convencionales Constituyentes

Artículo 167.- Forma. LOS convencionales constituyentes de la Provincia son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia en la forma y número que establece el artículo 198 de la Constitución Provincial.

Capítulo IV

Elección del Tribunal de Cuentas

Artículo 168.- Forma. LOS miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, con representación de las minorías.

Artículo 169.- Elección. LA elección de los miembros del Tribunal de Cuentas debe realizarse, como mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los ciento veinte (120) días de esa fecha.

Capítulo V

Disposiciones especiales

Artículo 170.- Consulta Popular y Referéndum. CUANDO alguna cuestión deba someterse a consulta popular o referéndum son de aplicación las disposiciones de esta Ley y la Ley N° 7811 y sus modificatorias.

Artículo 171.- Prohibición de encuestas. DURANTE los diez (10) días anteriores a la fecha establecida para la concreción de una consulta popular o de un referéndum, queda prohibida la publicación, difusión total o parcial o comentarios de resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión, que estén directa o indirectamente relacionados con la consulta sometida a votación.

TÍTULO VIII DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Artículo 172.- Recursos. EL Poder Ejecutivo Provincial compromete y aporta todos los recursos económicos, que el Juzgado Electoral requiera, para garantizar el íntegro cumplimiento de todos los aspectos contemplados en las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 173.- Cuenta Especial. A los fines de atender el aporte económico comprometido por el Poder Ejecutivo en el artículo precedente, se dispone la creación de una cuenta especial en el Presupuesto General de la Provincia.

Artículo 174.- Presupuesto. EL Juzgado Electoral debe elevar al Poder Ejecutivo Provincial, antes del 31 de octubre de cada año, un informe sobre el programa a desarrollar en el año calendario inmediato siguiente y su costo económico estimado, a los fines de realizar anualmente las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de esta normativa, aún cuando no se hubiere convocado a elecciones, ni se pudiera prever su realización.

TÍTULO IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo Único

Artículo 175.- Simultaneidad. PARA el caso de simultaneidad de elecciones en el orden nacional y provincial el Juzgado Electoral, mediante resolución, arbitra los medios para hacer efectivo el ejercicio del derecho al voto de quienes conforme al Código Electoral Nacional se encuentren inhabilitados y que según la presente Ley están en condiciones de sufragar.

Artículo 176.- Software. TODO el sistema de procesamiento de datos electorales vía electrónica (software) que debe ser utilizado y operado por el Juzgado Electoral en la aplicación de esta normativa, será diseñado por las universidades con asiento en la Provincia de Córdoba que firmen convenio con el Poder Ejecutivo Provincial. El Estado Provincial será el propietario del software y proveerá todos los recursos económicos que demande su desarrollo.

Artículo 177.- Juzgado Electoral. Estructura. UNA ley especial dotará al Juzgado Electoral de la estructura funcional y profesional necesaria a los fines de dar cumplimiento a todas las obligaciones que la presente Ley y el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos le imponen.

Artículo 178.- Cámara Electoral ad-hoc. UNA ley especial creará una Cámara Electoral ad-hoc y determinará su integración, competencia, roles y funciones que deberá tener a los fines de controlar y asistir al Juzgado Electoral en la aplicación de todos los aspectos regulados por la presente normativa y por el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.

Artículo 179.- Voto Electrónico. Implementación. LO establecido en la presente normativa no es obstáculo para que el Juzgado Electoral, evaluando el comportamiento cívico frente al nuevo sistema eleccionario, propenda a implementar en forma progresiva y sistemática las acciones necesarias tendientes a impulsar un mecanismo electrónico de emisión del sufragio.

Previo a su implementación, el Juzgado Electoral debe realizar pruebas pilotos en circuitos o secciones electorales, a fin de evaluar la eficacia del sistema y la aceptación por parte del electorado.

Artículo 180.- Norma derogatoria. DERÓGASE la Ley N° 8767.

LIBRO SEGUNDO FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

TÍTULO I MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

Capítulo I Principios Generales

Artículo 181.- Finalidad. EL Estado Provincial garantiza el desarrollo y fortalecimiento del sistema republicano de gobierno y de los partidos políticos, a través del financiamiento de las campañas electorales.

Artículo 182.- Objetivo. SON objetivos de la presente Ley, establecer, definir, regular y controlar los aportes que el Estado Provincial y los particulares realizan a fin de contribuir al financiamiento de las campañas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral.

Artículo 183.- Financiamiento. Clases. LAS campañas electorales de los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral se financian con fondos:

1) Públicos: constituidos por el aporte del Estado Provincial destinado a la contratación de espacios publicitarios en medios electrónicos de comunicación -radio y televisión- para la publicidad y propaganda electoral, y

2) Privados: constituidos por toda contribución, donación o aporte en dinero o susceptible de apreciación

en dinero, cualquiera sea el hecho o acto jurídico -a título gratuito- por el cual se materialice, con destino a publicidad, propaganda y gastos electorales, con las limitaciones impuestas por la presente Ley.

Capítulo II

Financiamiento Público Provincial

Artículo 184.- Fondo Permanente. CRÉASE el "Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales", el que está integrado con los recursos que anualmente destine la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial. Dicha afectación no puede ser inferior a la suma equivalente al dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la última elección provincial y está destinada a financiar la publicidad y propaganda electoral en medios electrónicos de comunicación -radio y televisión- públicos y privados, provinciales y locales.

Artículo 185.- Depósito. LOS recursos que integran el Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales son depositados en una cuenta especial abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, a la orden del Juzgado Electoral, con la obligación de la afectación específica.

Artículo 186.- Contratación de espacios publicitarios. EL Juzgado Electoral arbitra los medios conducentes para contratar los espacios publicitarios en los medios electrónicos de comunicación -radio y televisión-, públicos y privados, provinciales y locales, para la publicidad y propaganda electoral, con la finalidad de promover a sus candidatos a cargos electivos y difundir las propuestas programáticas, planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral.

Artículo 187.- Tarifas publicitarias. LOS medios electrónicos de comunicación -radiales y televisivos-, no pueden cotizar ni exigir como precio por el segundo o minuto de espacio, un monto superior al valor promedio facturado en los últimos ciento veinte (120) días para publicitar el producto de cualquier empresa de nuestro medio, en correlación con el horario de que se trate.

En el supuesto de comprobarse la cotización de tarifas superiores al promedio referenciado precedentemente, el medio infractor será sancionado conforme lo establece esta Ley.

Artículo 188.- Distribución de espacios publicitarios. EL Juzgado Electoral distribuirá los espacios publicitarios entre los partidos, alianzas y confederaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos electivos provinciales, de la siguiente manera:

1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la contienda electoral, y

2) El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos que el

partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones provinciales inmediatamente anteriores, siempre que hayan alcanzado, al menos, el cuatro por ciento (4%) del total de votos válidamente emitidos.

Artículo 189.- Disposición de los espacios publicitarios. EL Juzgado Electoral realiza las contrataciones de espacios publicitarios a fin de que los partidos, alianzas o confederaciones políticas puedan disponer de los mismos durante los últimos treinta (30) días de campaña, antes de la veda electoral.

Artículo 190.- Modo de Contratación. Límite. EL Juzgado Electoral como mínimo sesenta (60) días antes del inicio de la campaña electoral, determinará la cantidad de minutos diarios que se podrán ocupar con publicidad y propaganda electoral en los medios electrónicos de comunicación públicos y privados, provinciales y locales, el que no podrá superar el noventa por ciento (90%) del total de espacio publicitario ocupado o utilizado por la propaganda electoral en la campaña del año 2007.

De la totalidad de los espacios publicitarios fijados, el Juzgado Electoral, contratará el cincuenta por ciento (50%) y los distribuirá entre todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen de la elección conforme lo establecido en el artículo 188 de la presente Ley y por sorteo.

Artículo 191.- Partidos nuevos. PARA el caso de aquellos partidos políticos que no registren referencia electoral anterior, se les adjudicará -únicamente- el espacio publicitario que se distribuya igualitariamente para cada uno de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, conforme a lo dispuesto en el artículo 188, inciso 1) de la presente Ley.

Artículo 192.- Alianzas y confederaciones nuevas. PARA el caso de las alianzas y confederaciones políticas que no hayan participado en la última elección provincial, se les adjudicará:

1) El espacio publicitario previsto en el artículo 188, inciso 1) de esta Ley, y

2) La suma de los espacios publicitarios que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 188, inciso 2) de la presente Ley, le corresponda a cada uno de los partidos que la integran, conforme a los votos que hubieren obtenido en la última elección provincial.

Artículo 193.- Límite. PARA el caso de alianzas o confederaciones nuevas, el espacio publicitario que le corresponda no puede ser superior al espacio publicitario adjudicado al partido, alianza o confederación política que hubiera resultado ganadora en la última elección provincial.

Artículo 194.- Alianzas disueltas. PARA el caso de aquellos partidos políticos que hubieran concurrido a la última elección provincial integrando una alianza que no se hubiera reinscripto para la nueva convocatoria a elecciones, el espacio publicitario correspondiente se

distribuirá entre los partidos miembros, en la proporción que establecía el acuerdo suscripto por los partidos al momento de solicitar el reconocimiento como alianza.

Artículo 195.- Confederaciones disueltas o extinguidas. PARA el caso de las confederaciones que hubieren resultado disueltas o extinguidas, el espacio publicitario público que le hubiere correspondido o al que se hubiere hecho acreedor, se considerará extinguido y será distribuido en la forma y proporción establecida en el artículo 188 de la presente normativa.

Si alguna fuerza política de las que formaban parte de la confederación solicitare el reconocimiento como partido en la Justicia Electoral y decidiera participar en la elección convocada, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 191 de esta Ley.

Artículo 196.- Retiro de candidatos. SI el partido, alianza o confederación política retirara sus candidatos y no se presentara a la elección, debe restituir, en el término de sesenta (60) días de realizado el comicio, el monto equivalente al espacio publicitario utilizado.

Caso contrario, se le deducirá el importe correspondiente del Fondo Partidario Permanente creado en la ley que regula el régimen jurídico de los partidos políticos.

Artículo 197.- Comunicación. EN el primer mes de cada año, el Juzgado Electoral informa a los partidos políticos el monto de los recursos que integran el Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, existentes al día 31 de diciembre del año anterior.

Capítulo III Financiamiento Privado

Artículo 198.- Aportantes. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden obtener para el financiamiento de sus campañas electorales, con las limitaciones previstas en la presente Ley, los siguientes aportes del sector privado:

- 1) De sus afiliados, de acuerdo a lo que prescriban sus cartas orgánicas;
- 2) De otras personas físicas no afiliadas;
- 3) De las personas jurídicas, y
- 4) Del rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades.

Artículo 199.- Topes individuales. NINGUNA persona física puede efectuar contribuciones, donaciones o aportes a un mismo candidato y para la misma campaña electoral, superiores a la suma equivalente a cinco (5) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Artículo 200.- Prohibiciones. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas no pueden aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de:

- 1) Personas anónimas. No puede imponerse a

las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;

2) Entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestatales, binacionales, multilaterales o municipales;

3) Empresas concesionarias de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales;

4) Personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;

5) Personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;

6) Personas físicas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;

7) Gobiernos o entidades extranjeras, y

8) Asociaciones sindicales, patronales o profesionales.

Artículo 201.- Máximo para espacios publicitarios. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden -con recursos propios- contratar en medios electrónicos -radio y televisión- para publicidad y propaganda electoral, como máximo, la misma cantidad de espacios publicitarios recibidos del Juzgado Electoral, en virtud de lo establecido en los artículos 188 y 190 de la presente Ley.

Si alguno de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participan de la contienda electoral, no hiciera uso de esta facultad, ese espacio no utilizado podrá ser adjudicado por el Juzgado Electoral a quienes deseen adquirirlo y en la misma proporción de distribución señalada en el apartado anterior.

Artículo 202.- Contratación Privada. Control. A los fines del control sobre el porcentaje de contratación máximo establecido en el artículo anterior, los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben presentar ante el Juzgado Electoral el programa de contrataciones, indicando el nombre del medio y la cantidad de espacio a contratar, el que en conjunto no podrá superar el máximo permitido.

De conformidad con la nómina presentada, el Juzgado Electoral extenderá las autorizaciones correspondientes para ser entregadas a los medios respectivos, indicando el máximo de espacio que puede venderle al partido, alianza o confederación política que lo requiera.

Artículo 203.- Gastos Electorales. Tope. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas que participan de la compulsa electoral no pueden superar, individualmente y para gastos electorales, la suma equivalente al dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la elección. Quedan comprendidos en dichos gastos electorales los siguientes:

1) Alquiler de locales para la celebración de actos de la campaña electoral;

2) Remuneraciones del personal que presta ser-

vicios para las candidaturas;

3) Gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que propicia candidaturas y del personal afectado a tales servicios;

4) Correspondencia, franqueo y servicios telegráficos, telefónicos y otros que utilicen la red nacional o internacional de comunicaciones, y

5) Todo otro gasto necesario para la organización y funcionamiento de la campaña electoral.

Artículo 204.- Información del tope. EL Juzgado Electoral con una antelación de treinta (30) días al inicio de la campaña electoral informará a los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral, el límite de gastos electorales que pueden realizar, publicando esa información en su sitio web.

TÍTULO II CAMPAÑAS ELECTORALES

Capítulo I Consideraciones Generales

Artículo 205.- Definición. A los efectos de esta ley, se entiende por campaña electoral al conjunto de actividades realizadas por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral, con el propósito de promover la participación del electorado y la captación del sufragio a favor de los candidatos a cargos públicos electivos y/o de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en el acto comicial.

Las actividades académicas, debates, conferencias, presentación de planes y proyectos y la realización de congresos o simposios, no son considerados como partes integrantes de una campaña electoral.

Artículo 206.- Plazos. LAS campañas electorales para la elección de gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales y miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, tienen una duración de cuarenta y cinco (45) días corridos antes de la fecha fijada para la veda electoral.

El plazo establecido en el párrafo precedente se reduce a treinta (30) días corridos para los comicios internos de las agrupaciones políticas -para cargos partidarios o electivos-.

Capítulo II Publicidad y Propaganda Electoral

Artículo 207.- Objeto. EL objeto de la publicidad y propaganda electoral es la promoción de los candidatos a ocupar cargos electivos, la difusión de la plataforma electoral y los planes y programas de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, con la finalidad de concitar la adhesión del electorado durante las campañas electorales.

Artículo 208.- Responsabilidades democráticas. ES responsabilidad de las agrupaciones políticas que propician las candidaturas, cuidar que el contenido de los mensajes constituya una alta expresión de adhesión a los valores del sistema republicano y democrático y contribuya a la educación cívica del pueblo.

Artículo 209.- Pautas publicitarias. TODA propaganda que realicen los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben individualizar claramente:

1) Su nombre en términos que no provoquen confusión gráfica o fonética, y

2) El nombre del o los candidatos y el o los cargos a los que aspiran ocupar, cuidando no inducir a engaños o confundir al electorado.

Si tal hecho ocurriese, el partido, alianza o confederación política afectado por los mensajes de esa propaganda, puede recurrir al Juzgado Electoral solicitando se suspenda o impida su continuidad.

El Juez, previa vista al fiscal electoral y sin más trámite, dictará resolución en un término perentorio no mayor de veinticuatro (24) horas.

Artículo 210.- Publicidad y propaganda prohibida. QUEDA absolutamente prohibida la publicidad y propaganda electoral, cuyos mensajes propugnen:

1) La incitación a la violencia;

2) La discriminación por razones de clase, raza, sexo o religión;

3) La animosidad y los estados emocionales o pasionales que inciten a la destrucción de bienes o atente contra la integridad física de las personas;

4) La instigación a la desobediencia colectiva al cumplimiento de las leyes o de las decisiones judiciales o a las disposiciones adoptadas para salvaguardar el orden público;

5) Las injurias y calumnias, y

6) El desaliento a la participación;

Artículo 211.- Franja horaria. LA franja horaria dentro de la cual se emitirá la publicidad y propaganda electoral de los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral, está comprendida entre las siete (07:00) horas y las veintidós (22:00) horas para los espacios radiales y de doce (12:00) horas a veintitrés (23:00) horas para los espacios televisivos.

Artículo 212.- Espacios gratuitos. A los efectos de contribuir con los procesos democráticos y la consiguiente educación cívica del pueblo, los medios electrónicos locales de comunicación -radiales y televisivos- deben destinar, sin costo alguno, un adicional del diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios que les hubiera contratado el Juzgado Electoral, para la divulgación de las propuestas programáticas, planes de trabajo y plataforma electoral de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en las elecciones, du-

rante los últimos diez (10) días corridos anteriores a la veda electoral.

A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos de edición provincial destinarán media (1/2) página por edición.

La distribución del espacio publicitario es realizada por el Juzgado Electoral en la forma prevista en el artículo 188 de la presente Ley.

Artículo 213.- Prohibición para terceros. QUEDA expresamente prohibida la contratación de espacios publicitarios en los medios electrónicos de comunicación -radio y televisión-, públicos y privados, provinciales y locales, para la publicidad y propaganda electoral por cuenta de terceros.

Sólo pueden contratar los espacios publicitarios destinados a propaganda y publicidad electoral, el Juzgado Electoral y los Responsables Políticos de Campañas Electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral.

Queda prohibido a los medios electrónicos de comunicación, la venta de espacios o segundos de aire a quienes no ostenten las calidades señaladas.

Artículo 214.- Publicidad en la vía pública. A los efectos de la propaganda en la vía pública, los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en las elecciones deben adecuar sus programas de propaganda y publicidad electoral a las disposiciones que las municipalidades y comunas tengan en vigencia.

Artículo 215.- Publicidad en consultas populares. DURANTE las campañas de propaganda para consultas populares o referéndum, cuya duración no puede ser superior a los treinta (30) días anteriores al acto, los medios electrónicos de comunicación locales deben conceder espacios gratuitos iguales para quienes apoyen las propuestas del "SI" o del "NO".

Artículo 216.- Encuestas. QUEDA prohibida la difusión de resultados de encuestas de opinión desde los quince (15) días inmediatamente anteriores al día de las elecciones y la difusión de resultados de sondeos de boca de urna, hasta tres (3) horas después del cierre del acto electoral.

Capítulo III Abstenciones

Artículo 217.- Publicidad oficial. QUEDA prohibida la realización de publicidad oficial durante los últimos treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha prevista para una elección.

Artículo 218.- Actos inaugurales. QUEDA prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, durante los quince (15) días inmediatos anteriores a la fecha fijada para la celebración de un comicio.

Capítulo IV

Responsable Político de Campaña Electoral

Artículo 219.- Nombramiento. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas que participan en una compulsa electoral, deben designar un Responsable Político de Campaña Electoral y un suplente, quienes deben tener domicilio en la Provincia de Córdoba, no ser candidatos en la elección y estar afiliados al partido que los designa.

Artículo 220.- Subadministradores. EL Responsable Político de Campaña Electoral puede designar subadministradores departamentales de las respectivas campañas electorales locales, quienes deben tener domicilio en la sección en la que actúen, no ser candidatos en la elección y estar afiliados al partido al que pertenece el Responsable Político que los designa.

Artículo 221.- Comunicación. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas deben comunicar al Juzgado Electoral los datos personales y profesionales del Responsable Político de Campaña Electoral, su suplente y de los subadministradores, con una antelación no menor a los cincuenta (50) días corridos antes de la fecha fijada para el comicio para el caso de los dos (2) primeros y no inferior a los treinta (30) días corridos para los subadministradores.

Artículo 222.- Responsabilidad. EL Responsable Político de Campaña Electoral, el suplente y los subadministradores son los responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y de las demás disposiciones legales vigentes en materia tributaria.

Artículo 223.- Cuentas Bancarias. EL Responsable Político de Campaña Electoral debe abrir una cuenta especial en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre del partido, alianza o confederación que lo hubiera designado y a la orden conjunta de él y del tesorero, donde se deben depositar todas los recursos destinados a afrontar los gastos electorales.

Las cuentas bancarias deben cerrarse a los treinta (30) días de realizada la elección.

Artículo 224.- Obligaciones. EL Responsable Político de Campaña Electoral y el suplente tienen las siguientes obligaciones:

1) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación de origen y destino de los mismos, fecha de la operación y nombre y domicilio de las personas intervinientes;

2) Elevar en término al Juzgado Electoral la documentación e información requerida por la presente Ley;

3) Efectuar todos los gastos electorales con cargo a la cuenta bancaria correspondiente al partido, alianza o confederación política, y

4) Conservar la documentación e información durante los cuatro (4) años siguientes al acto electoral.

Artículo 225.- Constancia de operación. TODO gasto que se efectúe con motivo de una campaña electoral superior a un (1) salario mínimo, vital y móvil debe documentarse, sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales ordinarios, a través de una "Constancia de Operación de Campaña Electoral" en la que deben figurar los siguientes datos:

- 1) Identificación tributaria del partido, alianza o confederación política y de la parte cocontratante;
- 2) Importe de la operación;
- 3) Número de la factura correspondiente, y
- 4) Número de cuenta y del cheque destinado al pago.

Las "Constancias de Operación de Campaña Electoral" son numeradas correlativamente para cada campaña y deben registrarse en los libros contables de los partidos, alianzas o confederaciones políticas.

Artículo 226.- Informe previo. LOS Responsables Políticos de Campaña Electoral deben elevar al Juzgado Electoral, con quince (15) días de antelación a la celebración de un comicio, un informe detallado de los aportes privados recibidos, con indicación del origen, monto y destino de los mismos.

Artículo 227.- Informe final. LOS Responsables Políticos de Campaña Electoral deben elevar al Juzgado Electoral, dentro de los sesenta (60) días siguientes a las elecciones, cuenta documentada de todos los ingresos y gastos irrogados por la campaña electoral.

Independientemente de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir los Responsables Políticos de Campaña Electoral y su suplente, la falta de remisión de tales resultados al Juzgado Electoral, determina la cesación de todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado hacia el partido político que hubiere incumplido con la obligación.

En el caso de alianzas o confederaciones dicha sanción se hará extensiva a los partidos que las integran.

Artículo 228.- Gastos anticipados. LAS compras o contrataciones que se realicen con anterioridad al comienzo de una campaña electoral deben ser comunicadas por el Responsable Político de Campaña Electoral al Juzgado Electoral en los informes previstos en los artículos 226 y 227 de la presente Ley.

Capítulo V Control

Artículo 229.- Auditoria. EL Juzgado Electoral tiene la responsabilidad de auditar los medios electrónicos de comunicación a efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. A tal fin puede contratar un servicio de auditoría de medios electrónicos de comunicación.

El Poder Ejecutivo debe proveer los fondos necesarios a efectos de que el Juzgado Electoral haga frente a tales erogaciones.

Artículo 230.- Publicidad de informe final. EL

Juzgado Electoral ordena la publicación del informe previsto en el artículo 227 de la presente Ley en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en su sitio web.

Artículo 231.- Documentación. Permanencia. Todos los informes referidos a los gastos de campañas electorales, de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participaron en la elección, deben permanecer en el Juzgado para conocimiento de los interesados y del Ministerio Fiscal, durante treinta (30) días hábiles.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho término no se hicieron observaciones, el Juzgado ordena su archivo.

Si se formularen observaciones por violación de las disposiciones legales o de la carta orgánica, el Juzgado Electoral resuelve, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Artículo 232.- Acceso de terceros. CUALQUIER ciudadano sin limitación alguna y sin necesidad de acreditar interés legítimo puede tener acceso a los informes obrantes en el Juzgado Electoral referidos a gastos de campañas electorales.

Artículo 233.- Solicitud de información. EL Juzgado Electoral puede, en cualquier momento, exigir la presentación de todas las informaciones referidas al manejo de fondos electorales a los respectivos Responsables Políticos de Campaña Electoral.

Artículo 234.- Informe final de campaña. EL Juzgado Electoral tiene un plazo máximo de noventa (90) días desde la fecha de recepción del informe final establecido en el artículo 227 de la presente Ley, para realizar el Informe Final de Campaña, el que será notificado a los partidos, alianzas y confederaciones políticas participantes del acto electoral, quienes tendrán diez (10) días para efectuar las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. El Juzgado Electoral resolverá en definitiva en el plazo de diez (10) días.

TÍTULO III RÉGIMEN SANCIONATORIO

Capítulo Único Infracciones y Sanciones

Artículo 235.- Tarifas sobrevaluadas. SERÁN sancionados con multa equivalente de hasta doscientos (200) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los medios electrónicos de comunicación -radiales y televisivos- que establecieran tarifas superiores a las normales -en violación a lo dispuesto en el artículo 187 de la presente Ley-.

Artículo 236.- Incumplimiento de los medios de comunicación. Serán sancionados con multa equivalente de hasta cien (100) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los medios electrónicos de comunicación que alterasen el precio de sus tarifas normales durante el desarrollo de

una campaña electoral, favoreciendo a un partido, alianza o confederación política, y discriminando en perjuicio de otro.

Artículo 237.- Ventas irregulares. SERÁN sancionados con multa equivalente de hasta doscientos (200) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los medios electrónicos de comunicación que:

1) Vendieren espacios publicitarios, sin la presentación de la autorización o constancia extendida por el Juzgado Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la presente Ley, y

2) Vendieran espacios publicitarios a quienes no ostenten las calidades señaladas en el artículo 213 de esta Ley.

Artículo 238.- Violación al contenido publicitario. EL contenido del material de propaganda concebido en violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 210 de la presente Ley, hará pasible a sus autores o al partido, alianza o confederación política que lo propicie, a ser sancionados con multa equivalente de hasta cincuenta (50) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Artículo 239.- Pérdida de derecho a espacios publicitarios. SERÁN sancionados con la pérdida del derecho a recibir el espacio publicitario que distribuye el Juzgado Electoral, por una (1) o dos (2) elecciones, los partidos, alianzas o confederaciones políticas que:

1) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto equivalente al espacio publicitario utilizado, en los términos del artículo 196 de la presente Ley;

2) Recibieran contribuciones o donaciones en violación a lo dispuesto en el artículo 200 de la presente Ley;

3) Realizaran gastos en violación a lo previsto en los artículos 201 y 203 de la presente Ley;

4) Recibieran o depositaran fondos en cuentas bancarias distintas de las previstas en el artículo 223 de la presente Ley, y

5) Realizaran contrataciones en medios electrónicos de comunicación sin contar con la autorización o constancia emanada del Juzgado Electoral, conforme lo establece el artículo 202 de la presente Ley.

Artículo 240.- Infracciones del Responsable Político de Campaña Electoral. LOS Responsables Políticos de Campaña Electoral y los suplentes que no cumplieran con las obligaciones previstas en los artículos 220, 221 y 222 de la presente Ley, serán pasibles, además de las sanciones penales que pudieran corresponderles, de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio de sus derechos a elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos provinciales, municipales o comunales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos en los que estuvieren afiliados.

Artículo 241.- Infracciones de terceros. LOS ter-

ceros que efectúen contribuciones o donaciones o realicen contrataciones en violación a lo dispuesto en los artículos 200 y 213 de la presente Ley, serán sancionados con multa equivalente de hasta el décuplo de la contribución o donación efectuada o la contratación realizada.

Las personas físicas que incurran en la conducta señalada en el presente artículo serán pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos provinciales, municipales o comunales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos.

Artículo 242.- Extensión de la sanción. Solidaridad. PARA los casos en que las infracciones previstas en la presente normativa fueren cometidas por personas jurídicas, la sanción que se imponga tendrá alcance solidario para con las personas físicas que ostenten el cargo de director, socio gerente, gerente, administrador o similar de la empresa que se trate. Asimismo, de corresponder, la persona física será pasible de la sanción accesoria de inhabilitación.

Artículo 243.- Reincidencia. Para los casos de reincidencia en la comisión de cualquiera de las infracciones establecidas en la presente Ley, los máximos previstos para la sanción se incrementan en un cincuenta por ciento (50%).

Artículo 244.- Sanciones. Graduación. EL Juzgado Electoral debe merituar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen a la infracción cometida como asimismo las condiciones personales del/de los supuesto/s infractor/es a fin de graduar la sanción.

TÍTULO IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo Único Consideraciones finales

Artículo 245.- Carácter. LA presente Ley es de orden público y ninguna persona física ni jurídica puede alegar -en su contra- derechos irrevocablemente adquiridos.

Artículo 246.- Interpretación. TODO conflicto normativo relativo a su interpretación y aplicación debe resolverse a favor de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 247.- Vigencia. LA presente Ley entra en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 248.- Derogación normativa. DEROGASE la Ley N° 8767.

Artículo 249.- De Forma. COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

Bloque Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, Bloque de la Concertación Plural.

FUNDAMENTOS

En la sesión inaugural del presente período legislativo, el Gobernador de la Provincia planteaba la necesidad de avanzar en la reforma político - electoral, sosteniendo que la misma era una exigencia social ineludible y que tendía a mejorar el funcionamiento institucional.

Es así que es creada la Comisión Consultiva de Expertos (CCE) mediante Decreto N° 2192/07 del Poder Ejecutivo que emitió un dictamen - "Así no va más" - en el que se realiza un pormenorizado diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema político - electoral de la Provincia.

Así mismo, dicho trabajo, expone una serie de propuestas de reformas tendientes a modernizar y fortalecer dicho sistema. La relevancia de esas propuestas, radica justamente en el carácter plural e imparcial en que fueron efectuadas, lo cual se manifiesta, en algunos tópicos, en miradas distintas y diferentes -pero igualmente enriquecedoras- sobre la problemática abordada.

Más allá de lo expuesto, es justamente este Poder Legislativo la institución dotada constitucionalmente de las atribuciones necesarias para poder llevar adelante una reforma de esta naturaleza.

Se conformó así la Comisión Especial para la Reforma Política en el seno de esta Legislatura, la cual fue avanzando en la discusión de diversos temas relacionados con el sistema político electoral (boleta única, voto electrónico, autonomía municipal, eliminación de sumatorias, etc.) y en la participación de intendentes, académicos, integrantes del Poder Judicial, entre otros, que fue permitiendo conocer diferentes opiniones sobre la temática.

Así han surgido una serie de proyectos de distintos bloques parlamentarios y de distintos legisladores de esos bloques, sobre diversas cuestiones referidas a la materia en tratamiento.

El bloque de UPC, trabajando sobre el diagnóstico formulado por la CCE, presenta el presente proyecto tendiente a lograr un sistema electoral moderno y fortalecido, con fuerte incidencia en el tema del control.

Entrando en la presentación del proyecto en sí, denominado "Código Electoral Provincial", el mismo cuenta con dos libros, el primero de los cuales contempla "los principios electorales fundamentales" y el segundo "el financiamiento de las campañas electorales".

El primer libro introduce dos novedades, no sólo para nuestra provincia, sino también a nivel de la legislación nacional.

La primera de ellas es la Boleta Única de Sufragio poner algo acá

La misma estará dividida en espacios, franjas o columnas de igual dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas, estableciéndose el contenido y diseño de las mismas.

EL Juzgado Electoral mandará a imprimir las Boletas Únicas de Sufragio en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, con

más un diez por ciento (10%) adicional para reposición. En cada mesa electoral debe haber igual número de Boletas Únicas de Sufragio que de electores habilitados, cifra a la que se le adicionará el porcentaje establecido en el párrafo anterior para reposición.

EL Juzgado Electoral debe confeccionar un excedente de boletas adicionales: las "Boletas Únicas de Sufragio Complementarias" en una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del total de Boletas Únicas de Sufragio originales. Para ello se confeccionarán talonarios diferenciados y con identificación codificada independiente.

El Juzgado Electoral también mandará a imprimir "Boletas Únicas de Sufragio Suplementarias" en cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de electores correspondientes al padrón electoral, las que serán utilizadas en caso de robo, hurto o extravío de las originales.

El segundo aspecto novedoso de este proyecto radica en la figura del Fiscal Público Electoral quien será designado por el Juzgado Electoral a razón de uno por cada mesa de votación, quien actuará como nexo entre dicho Juzgado y la autoridad de mesa.

Sus funciones serán: hacer entrega de la urna y demás documentación electoral al presidente designado como titular de la mesa o al suplente; proceder a la designación del primer elector como autoridad de mesa, si previa espera de ley, el titular o suplente designado no se hubiere hecho presente en el lugar de votación impidiendo la apertura de la mesa por falta de autoridad; observar todo el desarrollo del acto electoral; asistir al presidente de mesa en caso de duda, frente a la resolución de los conflictos que se le pudieren presentar; presenciar el acto de cierre y el escrutinio, pudiendo colaborar con el presidente de mesa en todos los aspectos que hacen al recuento y elaboración del acta de escrutinio; recibir del presidente de mesa, la urna cerrada y lacrada, y la copia del acta de escrutinio -suscripta por las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas acreditados en el centro de votación-; trasladar la urna cerrada y lacrada al lugar previsto por el juzgado electoral para su depósito y custodia; entregar la copia del acta de escrutinio rubricada por las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, al centro de recepción indicado por el juzgado electoral, para su cómputo o carga informática en el denominado escrutinio provisorio y controlar y velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta nueva normativa.

Los requisitos para desempeñar esta función: ser elector hábil; ser funcionario o empleado del poder judicial o, en su defecto, profesional o estudiante de las carreras de abogacía, ciencias políticas o ciencias económicas, estar domiciliado, en lo posible, en el circuito electoral donde debe desempeñarse, y no ser candidato a cargo electivo, titular ni suplente, en la elección de que

se trate.

Asimismo, se establece la capacitación de quienes actuarán como Fiscal Público Electoral y los viáticos a percibir por la función desempeñada.

Otros aspectos abordados en el presente proyecto se refieren al fortalecimiento de las autoridades de mesa. Para ello, el Juzgado Electoral, durante el año anterior a la realización de una elección, organizará el dictado de cursos de capacitación para todos aquellos que figuren inscriptos en el Registro de Aspirantes a Presidentes de Mesa y para quienes voluntariamente deseen hacerlo, a fin de garantizar una sólida formación en la interpretación y aplicación de las normas electorales.

También se establece para cada presidente de mesa como así también su suplente el derecho al cobro de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en concepto de viáticos.

Finalmente, el Poder Ejecutivo garantizará el suministro del refrigerio para el desayuno, almuerzo y merienda del presidente de mesa, el suplente, el fiscal público electoral y demás fiscales partidarios.

Asimismo, se crean dos Registros: en uno de ellos serán incluidos todos aquellos ciudadanos que habiendo ejercido como autoridades de mesa acrediten la capacitación prevista en la nueva normativa. También podrán inscribirse todos aquellos ciudadanos que, reuniendo los requisitos exigidos, deseen ejercer dicha función en cualquier acto electoral que se desarrolle en el ámbito provincial.

El otro es el Registro Provincial de Aspirantes a Fiscales Públicos Electorales, donde serán incluidos todos aquellos ciudadanos que hubieren ejercido dicha función y donde podrán inscribirse todos los ciudadanos que reuniendo los requisitos exigidos, deseen ejercer dicha función, en cualquier acto electoral que se desarrolle en el ámbito provincial. Ambos serán creados en el ámbito del Juzgado Electoral.

Finalmente se establece el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones a las disposiciones del Libro Primero.

El Libro Segundo del presente proyecto está destinado al financiamiento de las campañas electorales. En tal sentido, el rol protagónico de los partidos políticos fue introducido expresamente por los Constituyentes de 1994 en el texto de la Carta Magna Nacional, al sostener el artículo 38 que "los Partidos Políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático", estableciéndose asimismo que el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.

Nuestra Constitución Provincial también hace referencia explícita a estas instituciones, al sostener en el artículo 33 "que todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos políticos democráticos y pluralistas".

En definitiva, en la vida en democracia, los partidos políticos, más allá de sus roles de promotores de la participación de la sociedad civil en el sistema democrático y de su función insustituible de plasmar la representación popular, son el principal vínculo, los intermediadores fundamentales, de la relación Gobierno-Ciudadanos.

No obstante esta relevancia, las sociedades muestran una gran desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas en general, y muy especialmente en los partidos políticos, desconfianza muchas veces generada en los problemas de financiamiento -tanto de los partidos propiamente dichos como de las campañas electorales- que han surgido, los que no hacen otra cosa que profundizar el sentimiento de resquemor que grandes sectores de la ciudadanía sienten actualmente respecto de los partidos políticos.

En los últimos años -a nivel municipal, provincial y nacional- hemos asistido a campañas electorales con desmedidos gastos, inversiones costosas y abundante publicidad gráfica, exposición mediática permanente, todo lo cual ha repercutido negativamente en la ciudadanía.

Frente a esta realidad, es de fundamental trascendencia para el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos, que su origen sea legal y transparente, con límites precisos, con controles activos y meticulosos, con un Poder Judicial con las herramientas e instrumentos necesarios para cumplir su rol de controlador y con un Estado provincial presente, responsable y equitativo en la distribución de los fondos.

Este proyecto de ley, profundizando esos conceptos, otorga al Estado Provincial un rol protagónico en el financiamiento de las campañas electorales sin prescindir pero controlando a los aportes privados. En términos generales, el Libro Segundo del proyecto está destinado a establecer, definir, regular y controlar los aportes que el Estado Provincial y los particulares realizan a fin de contribuir al financiamiento de las campañas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de la compulsa electoral.

A tal fin se adopta una fórmula o sistema mixto de aportes públicos y privados. Este sistema mixto ya reconoce antecedente prácticamente en todos los países de América Latina, países donde los partidos políticos reciben fondos públicos como privados para financiar y sufragar sus campañas electorales.

Respecto a los aportes públicos, se crea el Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, el que estará integrado con los recursos que anualmente destine la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial y estará destinado a financiar la publicidad y propaganda electoral en medios electrónicos -radio y televisión- públicos y privados, provinciales y locales.

En ese sentido, será el Juzgado Electoral quien arbitrará los medios conducentes para contratar los espacios publicitarios en los medios electrónicos señala-

dos, los que se distribuirán en un treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la contienda electoral y el setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones provinciales inmediatamente anteriores, siempre que hayan alcanzado al menos el cuatro por ciento (4%) del total de votos válidamente emitidos.

El financiamiento público es una manera de disminuir la incidencia de intereses particulares o corporativos privados en el desempeño de las funciones partidarias. Así, el objetivo que se persigue con ello es, por un lado, lograr condiciones más equitativas durante la competencia electoral entre los diversos actores políticos, al mismo tiempo que una mayor transparencia en materia de financiación.

Por otra parte, con el mecanismo propuesto, el Estado asegura que los partidos, alianzas o confederaciones dispongan del apoyo y los recursos necesarios para llevar adelante sus campañas electorales. La necesidad de financiar a los partidos políticos con fondos públicos está inspirada en la necesidad de democratizar las campañas electorales corrigiendo los desfases y problemas que podrían generarse con un financiamiento exclusivamente privado.

De esta manera se facilita la competencia democrática, se la hace más equitativa y se logra que exista una competencia real, es decir que los distintos partidos que participan tengan reales posibilidades de acceder al gobierno o a las legislaturas. En ese sentido la designación del Juzgado Electoral justamente está destinada a maximizar los instrumentos de control, asegurar la equitativa distribución de los espacios y constituirse en una garantía para la sociedad.

Como se señalara, el proyecto también contempla la posibilidad del financiamiento privado de las campañas electorales, pudiendo ser aportantes: los afiliados, las personas físicas no afiliadas, las personas jurídicas estando previstos también los recursos provenientes del rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades, fijándose también las prohibiciones para recibir aportes.

Asimismo, se establecen tres límites: el primero referido a las personas físicas que no podrán efectuar contribuciones, donaciones o aportes superiores a la suma equivalente a cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; el segundo referido a los espacios publicitarios electrónicos respecto a los cuales los partidos, alianzas y confederaciones solo podrán destinar hasta un monto máximo equivalente cincuenta por ciento del aporte efectuado por el sector público y el tercero referido a gastos electorales respecto a los cuales no se podrá superar, individualmente, la suma equivalente al dos por mil (2%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la elección.

De esta forma se busca poner en conocimiento de la ciudadanía qué fondos no pueden recibir los parti-

dos políticos y que fondos sí pueden recibir pero con que limitaciones.

El presente Proyecto de Ley busca otorgar a nuestra Provincia una legislación amplia, equilibrada y transparente en materia de financiamiento de campañas electorales de los Partidos Políticos, creando certidumbre no solo a los partidos sino a la ciudadanía en general.

Por otra parte, y como hemos afirmado, la importancia del financiamiento mixto radica en que se logra un equilibrio positivo. Este es un aspecto a los que este proyecto hecha mano para la construcción de escenarios equitativos de competencia, evitándose que sea la diferencia de recursos económicos lo que incline la balanza en uno u otro sentido.

En definitiva, por este medio también se busca mejorar la imagen que la sociedad tiene de los partidos, toda vez que el despilfarro y el dispendio de recursos son negativamente percibidos por los electores en particular y la sociedad en general.

Respecto al régimen de sanciones, es necesario remarcar que su existencia se justifica en la medida en que toda trasgresión a un marco normativo, obliga a la aplicación de medidas correctivas.

En conclusión, no parece haber una fórmula de financiamiento ideal en abstracto, debe corresponder en cada caso al contexto político, al nivel de desarrollo relativo, al desarrollo del sistema de partidos y a otros factores, por ello, y en congruencia con las democracias representativas que más han madurado, el presente Proyecto de Ley busca el máximo equilibrio entre el financiamiento público y el privado, a la vez que tiende a evitar la existencia de espacios que permitan la filtración de actos ilegales.

La decisión de optar por un financiamiento mixto, obedece a que se busca un equilibrio en materia de financiamiento dirigido a evitar, por un lado, la excesiva dependencia de los partidos respecto del Estado y por tanto su consiguiente burocratización y alejamiento de la sociedad y, por el otro lado, a impedir la influencia excesiva de sujetos o corporaciones sobre los partidos o candidatos a los que apoyan, así como el fenómeno del financiamiento ilegal.

Pero esta búsqueda de mayor transparencia, supone reconocer que las normas aisladas no son la solución del problema. La transparencia, la honestidad, la razón habilidad del financiamiento mixto depende en gran medida de la conducta de los dirigentes, la actitud cívica y el control de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales.

Como sostiene Ferreira Rubio, “desde el punto de vista de las leyes, el desafío consiste en imponer normas razonables y controles efectivos -y esta lo es-. Desde el punto de vista de los organismos de control, el reto consiste en aplicar esos controles adecuadamente.

Desde el punto de vista de los dirigentes políticos y los financistas, el problema es mucho más arduo y profundo: consiste en actuar honestamente. Finalmente, corresponde a la ciudadanía una actitud atenta y militante en pro del control y sanción de cualquier abuso”.

Este proyecto, en definitiva, está destinado a convertirse en una ley clara, sencilla y con prescripciones factibles de ser aplicadas, cumplidas y controladas.

Esto es así pues plasma un sistema de financiamiento que tiende a fortalecer a la democracia y a sus instituciones, pues garantiza una competencia libre, abierta y equitativa, de forma tal de recuperar la confianza pública en los partidos políticos. Un sistema de financiamiento mixto (público – privado) como el aquí propuesto, con divulgación, órgano de control y un régimen de sanciones, son requisitos para el éxito de esta reforma.

Por estas y otras razones que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley.

Bloque Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, Bloque de la Concertación Plural.

**PROYECTO DE LEY – 5661/L/04
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Sustitúyanse los arts. 43 y 44 del Capítulo IV, Título III de la Ley 8767, quedando redactados de la siguiente forma:

Capítulo IV: De la boleta de sufragio

Plazo. Requisitos.

Artículo 43.- Inmediatamente oficializadas las listas de candidatos, el Juez Electoral ordenará confeccionar una boleta de sufragio por cada circunscripción, única válida para la emisión del voto, la cual contendrá:

a) La totalidad de los partidos políticos reconocidos y alianzas electorales que cuenten con lista de candidatos oficializados.

b) Las categorías de candidatos comprendidas en la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras u otras indicaciones que permitan individualizar suficientemente la categoría a candidatos a elegir.

c) Los nombres y apellidos de los candidatos titulares y suplentes, diferenciados topográficamente, según su orden de colocación en la lista correspondiente a cada partido o alianza electoral.

d) La sigla o monograma o logotipo o escudo o símbolo o emblema que la agrupación política haya solicitado utilizar al momento de registrar su lista de candidatos.

e) La fotografía del candidato a cargo ejecutivo o del candidato que encabeza la lista, si la agrupación política solicitó su utilización al momento de registrar su lista.

f) El recuadro que preceda al nombre de cada candidato o lista de candidatos, a los efectos de que el votante marque con una cruz el correspondiente al candidato o lista de candidatos por el cual votará.

g) Instrucciones para la emisión del voto.

h) Signos o indicaciones que permitan emitir el sufragio a personas discapacitadas visuales.

El orden de ubicación de los partidos políticos y alianzas electorales no atenderá a orden alfabético o numérico alguno y se determinará en público sorteo previo a la confección del modelo de boleta de sufragio.

El Juez Electoral arbitrará los medios necesarios para que el diseño y contenido de la boleta electoral sea lo más sencillo posible para el correcto entendimiento del elector.

Aprobación de la boleta

Artículo 44.- Elaborado el modelo de boleta de sufragio, el juez electoral convoca a los apoderados de los partidos políticos y oídos éstos, dicta resolución aprobando el modelo oficial.

Aprobado el modelo de boleta de sufragio, el mismo es mandado a imprimir.

La administración garantizará el suministro en cantidad suficiente a las mesas receptoras de votos para el normal desarrollo del acto electoral.

El juez electoral se encuentra facultado para disponer medidas que impidan maniobras de sustracción de boletas y su posterior utilización para el voto a favor de determinado candidato o agrupación política, las cuales serán puestas en conocimiento de las autoridades de mesa.

Artículo 2.- Elimínase el punto 6 del Art. 46 de la Ley 8767.-

Artículo 3.- Elimínase el inciso 5 del Art. 61 de la Ley 8767.-

Artículo 4.- Sustituyese el Art. 73 de la Ley 8767 por el siguiente:

Entrega del sobre al elector

Artículo 73.- Si la identidad no es impugnada, el presidente de mesa entrega al elector un sobre abierto y vacío firmado en el acto de su puño y letra; una boleta de sufragio sin utilizar, y lo invita a pasar al cuarto oscuro para emitir y ensobrar su voto.

Los fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar el sobre en la misma cara en que lo hace el presidente de mesa y deben asegurarse que el que se va a depositar en la urna es el mismo que le fue entregado al elector.

Cuando los fiscales firmen un sobre están obligados a firmar varios a los fines de evitar la identificación del votante.

Artículo 5.- Sustituyese el Art. 74 de la Ley 8767

por el siguiente:

Emisión del voto

Artículo 74.- En el cuarto oscuro y cerrada la puerta, el elector marca en el recuadro habilitado a tal efecto los candidatos a los cuales desea votar y coloca en el sobre su boleta de sufragio, volviendo inmediatamente a la mesa.

El sobre cerrado es depositado por el elector en la urna. El presidente de mesa, por propia iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, puede ordenar se verifique si el sobre que trae el elector es el mismo que le entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales y municipales, se utiliza un solo sobre para depositar todas las boletas.

Los no videntes son acompañados por el presidente de mesa y los fiscales que quieran hacerlo, quienes se retiran cuando el ciudadano haya sido informado sobre las características de la boleta y quede en condiciones de practicar a solas la emisión del sufragio.

Artículo 6.- Sustituyese el Art. 78 de la Ley 8767 por el siguiente:

Verificación del cuarto oscuro

Artículo 78.- El presidente de mesa no debe admitir en el cuarto oscuro, otros elementos que los permitidos por el Juzgado Electoral y esta Ley.

Artículo 7.- Sustituyese el Art. 81 de la Ley 8767 por el siguiente:

Calificación de los sufragios

Artículo 81.- Los sufragios tienen las siguientes categorías:

1. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada, aún cuando tengan candidatos agregados, sustituidos o tachados.

2. Votos nulos: son los emitidos:

a) Mediante boleta no oficializada o con papel de cualquier color o con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza;

b) Mediante boleta oficializada que contenga inscripciones o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del inc. 1 del presente artículo;

c) Mediante dos o más marcas de distinto partido para la misma categoría de candidatos;

d) Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defectos o tachaduras, no contenga por lo menos, sin rotura (seccionado total) o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos elegidos;

e) Cuando en el sobre, junto con la boleta electoral, se hayan incluido objetos extraños a ella.

3. Votos en blanco: cuando el sobre estuviera vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones ni imagen alguna.

4. Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal debe fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asientan sumariamente en volante especial que provee el Juzgado

Electoral. Dicho volante se adjunta a la boleta y sobre respectivo y lo suscribe el fiscal cuestionarte, consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento cívico, domicilio y partido político a que pertenece. Ese voto se anota en el acta de cierre de los comicios como “voto recurrido” y es escrutado oportunamente por el juez electoral, que decide sobre su validez o nulidad. El escrutinio de los votos recurridos declarados válidos por el juez electoral provincial se hace en la forma prevista en el Art. 99 de la presente Ley.

5. Votos impugnados: son aquellos en que se ataca la identidad del elector, conforme al procedimiento registrado por los arts. 71 y 72 de la presente Ley.

Artículo 8.- Sustituyese el Art. 84 de la Ley 8767 por el siguiente:

Guarda de boletas y documentos

Artículo 84.- Una vez suscripta el acta referida en el artículo anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositan dentro de la urna las boletas utilizadas, los sobres utilizados y un certificado de escrutinio. Las boletas sobrantes son inutilizadas con el instrumental suministrado a tal fin e introducidas en la urna en sobre especial. El padrón electoral con las actas de apertura y de cierre firmadas, los votos recurridos y los votos impugnados se guardan en el sobre especial que remite el Juzgado Electoral, el que lacrado, sellado y firmado por las autoridades de mesa y fiscales, se entrega al empleado postal designado al efecto, simultáneamente con la urna.

Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Marcelo Guzmán, José Maiocco, Jorge Valinotto.

FUNDAMENTOS

Constituye una constante de la democracia el elaborar métodos y sistemas que la perfeccionen para así legitimarla con la sociedad de la cual se nutre y a la cual se debe. Nuestra democracia es representativa y por lo tanto siempre deberán transparentarse y avanzar los mecanismos que permitan un acabado cumplimiento de ese principio.

Actualmente el sistema de boletas de sufragio que existe puede ser calificado de: caro, ineficiente y perverso.

Caro, porque obliga al desembolso de importantes sumas de dinero a los partidos políticos; siendo que únicamente los mayoritarios pueden imprimir la cantidad de votos que necesitan, incluso más.

Ineficiente, porque responsabiliza al partido político de que en el cuarto oscuro se encuentren sus boletas de candidatos, poniéndose acento en ellos cuando la ley debería tener más en cuenta la necesidad del ciudadano de expresarse mediante su voto, por encima del in-

terés partidario de colocar una boleta en el cuarto oscuro.

Perverso, porque favorece la creación y supervivencia de un sistema que recluta personas y personajes que hacen del clientelismo y de la estructura comúnmente denominada como “punteros” su método de subsistencia.

Estos elementos atacan los cimientos mismos de la democracia representativa y coadyuvan a la supervivencia en el tiempo de opciones políticas mayoritarias viciosas cada vez más vacías de contenido ideológico.

La reforma que se propone transfiere al Estado, a través de la autoridad judicial encargada del comicio, la responsabilidad de confeccionar y suministrar en cantidad suficiente las boletas que serán utilizadas el día del comicio.

Esta modificación transparente, de un modo sencillo y económico, la emisión del sufragio, evitando manipulaciones inaceptables y antidemocráticas por parte de las actuales estructuras partidarias.

Pero no es únicamente eso: lo más importante reside en que se contempla utilizar una sola boleta, con las necesarias variaciones según sea el caso (Ej.: distinto departamento provincial), la cual contendrá todas las agrupaciones políticas (ordenadas por sorteo público) y sus candidatos, a los efectos de que el elector “marque” con una cruz a quien desea votar.

Sostengo que con este sencillo método, eliminamos de cuajo un sinnúmero de corruptelas y mecanismos denigrantes que lo único que hacen es atacar la credibilidad de un sistema democrático representativo republicano, y conllevan a su sustitución por modos “aparentes” de expresión popular.

La ley propuesta reducirá gastos; evitará el robo de boletas en los cuartos oscuros; otorgará posibilidad de participar realmente a toda agrupación política que no cuente con la infraestructura suficiente de fiscales (la cual no es solamente humana sino también económica); y simplificará la tarea del Juzgado Electoral, que no se verá sometido a las maratónicas audiencias de exhibición de votos y emisión de innumerables resoluciones.

Entendiendo que los Sres. Legisladores velan por el constante perfeccionamiento de nuestra democracia y contribuyen a llenar de contenido la misma, es que solicito la aprobación del presente proyecto.

Marcelo Guzmán, José Maiocco, Jorge Valinotto.

**PROYECTO DE LEY – 06254/L/04
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Refórmese la Ley 8767, a continuación del artículo 126, con la incorporación del título Título IX, denominado "Sufragio y Escrutinio Electrónico".

TÍTULO IX

"Sufragio y Escrutinio Electrónico"

Instrumentación

Artículo 134: El Juez Electoral implementará, en forma progresiva y sistemática, las acciones necesarias tendientes a implementar en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, un mecanismo electrónico de emisión y escrutinio de sufragios.

Dicho proceso deberá estar concluido en el plazo de cuatro años desde la puesta en vigencia del presente.

El Juez Electoral podrá previa su implementación definitiva instrumentar pruebas pilotos en circuitos o secciones electorales que a tal efecto se determinen, y que permitan comprobar la idoneidad del sistema instrumentado y corregir las dificultades que se observen.

Asesoramiento y convenios

Artículo 135: Para el logro de lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad electoral podrá suscribir convenios con municipios, estados provinciales, organismos o empresas (internacionales, nacionales, provinciales o municipales, públicos o privados) ONGs, Universidades, tanto estatales como privadas (internacionales, nacionales, provinciales o municipales, públicos o privados).-

Garantías del sistema

Artículo 136: El sistema de emisión y escrutinio de sufragios deberá garantizar:

- a) La seguridad, inviolabilidad, individualidad, universalidad y secreto del sufragio;
- b) El control suficiente por parte de los partidos políticos, confederaciones, alianzas, de todas las etapas del proceso informático, tanto con en el desarrollo del software electoral, como en la emisión del voto y del escrutinio propiamente dicho;
- c) La posibilidad de poder optar por voto en blanco;
- d) Simplicidad en todo el conjunto de operaciones que deba realizar el elector destinadas a emitir su voto;
- e) Claridad necesaria que posibilite y permita la indubitable identificación del partido, alianza o confederación, tanto por su nombre, número de registración ante la autoridad electoral, símbolos, emblema/s o imagen de candidatos y líderes partidarios;
- f) Que los partidos, alianzas, confederaciones en forma previa y posterior a cada acto electoral, puedan conocer y auditar por sí o a través de empresas contratadas a tales fines —a su cargo y debidamente autorizadas por la autoridad electoral— aspectos tales como el proceso de carga de información al sistema, los dispositivos tecnológicos internos de la maquinaria a utilizar y que los mismos se adecuen a los principios establecidos

por la presente y a la normativa que se dicte, las características técnicas del programa, las funciones, componentes y los gerenciadores de dispositivos utilizados, que los programas fuentes y los medios magnéticos —según se trate— se encuentren debidamente lacrados, encriptados o certificados;

g) Adecuados soportes magnéticos de seguridad.

Comisión Asesora

Artículo 137:

1. La autoridad electoral podrá contar con el apoyo de técnicos especializados, con los que podrá conformar una Comisión Asesora, cuyo funcionamiento deberá ser garantizado por aquella brindándole los medios y apoyo material y necesario a los fines de lograr su cometido, el que será solicitado y diagramado por la autoridad electoral. Dicha comisión será presidida por el Juez Electoral quien determinará su conformación.

La Comisión Asesora, una vez convocada y conformada dictará un reglamento de funcionamiento, al que deberán someterse sus integrantes una vez aprobado por mayoría simple de sus miembros.

El Secretario del Juzgado Electoral actuará como coordinador de la Comisión Asesora.

Los integrantes de la Comisión Asesora desarrollarán sus funciones con carácter ad honorem.

Artículo 138: La autoridad electoral determinará y evaluará la modalidad del sistema electrónico a utilizar para la emisión y escrutinio de sufragios, las características técnicas y dispositivos de equipamiento necesarios según sea el sistema que se adopte así como la necesidad o no de respaldos alternativos en la registración de datos y toda otra cuestión que se vincule con el tipo y tecnología de mecanismo o sistema electrónico a utilizar.

Una vez seleccionada la modalidad del sistema electrónico a instrumentar, deberá confeccionar una detallada regulación del procedimiento de emisión y escrutinio electrónico de sufragios, la cual será elevada al Poder Ejecutivo Provincial a fin que éste elabore y eleve a la Legislatura Provincial un proyecto de reforma al Código Electoral Provincial a fin de incorporar dicha metodología en el mismo.

Software electoral

Artículo 139: La autoridad electoral deberá aprobar la validez, eficiencia y eficacia del funcionamiento del software electoral y elaborar para cada una de las mesas electorales la personalización del mismo.

Capacitación

Artículo 140: La autoridad electoral, previo a instrumentar el sistema electrónico de emisión y escrutinio de sufragio, incluso en la fase experimental, deberá disponer las más amplias medidas necesarias para capacitar a la ciudadanía en la utilización del mismo, de tal manera que aspectos instrumentales, culturales o intelectuales no se constituyan en obstáculos al pleno ejercicio de los derechos electorales. Podrá para lograr este fin

disponer de todos los medios de difusión que se crean convenientes.

Artículo 2.- Incorpórese como artículo 108 bis de la Ley 8767 el siguiente:

Daños al sistema voto electrónico

Artículo 108 bis: “El que instale equipamiento para obtener o intentar obtener acceso al sistema de tratamiento electrónico de los datos electorales con el propósito de alterar el escrutinio o el recuento de votos u obtener información o el que viole el sistema informático de procesamiento de votos introduciendo un programa capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, grabar o transmitir datos, o provocar cualquier otro resultado diferente del previsto conforme el procedimiento regular en el sistema establecido por la presente ley, siempre que las acciones descritas no configuren otro delito tipificado, y por lo tanto susceptible de la sanción penal que la normativa específica imponga, será reprimido con arresto de hasta sesenta (90) días o multa de hasta Trescientos mil pesos (\$ 300.000.-).”

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo Provincial, a petición de la Justicia Electoral y por la vía correspondiente, deberá garantizar la asignación de las partidas presupuestarias necesarias a fin del cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4.- En Caso de simultaneidad de elecciones Nacionales y Provinciales, se deberá, vía convenio con el Gobierno Federal coordinar la utilización del Voto Electrónico: “Sufragio y Escrutinio Electrónico”, con el sistema tradicional de votación.

Artículo 5.- Invítese a las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Enrique Gastaldi, Santiago Solari.

FUNDAMENTOS

La experiencia histórica nos indica que la única manera de aspirar a que todos los ciudadanos de un país puedan disfrutar de paz, de libertad, de seguridad y de una prosperidad creciente y con igualdad de oportunidades es construyendo instituciones políticas sólidas, eficaces y eficientes.

Las instituciones deben mantener y consolidar reglas del juego para que la sociedad promueva comportamientos, plasme valores, y, a su vez, contribuya a reproducirlos positivamente.

La sociedad reclama el cambio y el saneamiento institucional. Las sociedades son dinámicas, cambian, y con ellas también las demandas de la ciudadanía, las amenazas y los desafíos del su entorno, y, ciertamente sus percepciones y referencias.

Aun los países más desarrollados y democráti-

cos están permanentemente obligados a modificar parcial o totalmente sus instituciones, sus regulaciones, y los organismos que las instrumentan y sostienen.- Por ello, es imprescindible ir adaptando las instituciones a estas transformaciones, ya sean económicas, sociales, culturales, tecnológicas y políticas.

Para que el cambio institucional sea legítimo, logre la confianza y reconocimiento de la ciudadanía tiene que ser absolutamente transparente y permitir que las mismas sean sometidas a un control férreo, exhaustivo y permanente por medio de mecanismos idóneos e invulnerables a las presiones de los actores poderosos y tener un basamento en la misma sociedad.

Creemos, sin duda, que la institución que hoy esta requiriendo con mayor urgencia su transformación es aquella que define la esencia misma de la democracia: la representatividad.

Es imperioso reconstruir de una manera clara, transparente, y eficiente el sistema por medio del cual los representados eligen sus representantes.

El sistema electoral más idóneo será aquel que cree y recree las condiciones para que lucha por el poder sea lo más abierta, clara y competitivamente posible, permitiendo así su aceptación social, sin generar la mínima desconfianza en él.

El voto, como se sabe, es una manifestación insoslayable de la democracia. Puesto que, se nos ha cercenado este derecho en reiteradas oportunidades, los argentinos tenemos marcada a fuego la importancia de este instrumento en la construcción de una sociedad mejor, que es lo que queremos, que es lo que deseamos, y para ello, hacemos nuestro aporte con la presentación de este Proyecto, al que desde ya, y por considerarlo vital, pedimos su aprobación, para darle, así anclaje legislativo a esta superación en la forma que nos permitirá otorgar total transparencia a este proceso.

Votar es de vital importancia.- La innovación tecnológica nos permite hoy acceder a un sistema moderno, seguro, eficiente y ágil para emitir el sufragio. Se trata del voto electrónico. Con ello garantizaremos seriamente este cometido, estando a la altura de dicha importancia.

El voto electrónico es una innovación, pero su relevancia no se limita al mero salto tecnológico; encierra, además, el germen de una profunda renovación de las prácticas políticas. Votar será más simple y, entonces, se podrá votar con más seguridad. La democracia incorporará nuevos canales de participación y la sociedad podrá opinar con mayor habitualidad, más allá de la elección de candidatos.

Voto electrónico significa más y mejor democracia.

La tecnología se ha convertido en un elemento clave para llevar adelante tanto la administración, la organización como la realización del proceso electoral. En alguna medida, en la actualidad diversas etapas del pro-

ceso electoral se han informatizado. Un ejemplo de ello, lo son los padrones electorales, ellos son confeccionados informáticamente.

La apropiada aplicación de la tecnología a los procesos electorales permite aumentar la eficiencia administrativa, reducir los costos a largo plazo y fortalecer la transparencia política.

La incorporación de estas nuevas tecnologías al proceso electoral debe asegurar que se conserve sin excepción alguna el respeto al voto universal, libre, igual, secreto y directo, con este Proyecto que hoy proponemos creemos que estos preceptos se cumplirán cabalmente.

Por otro lado, este sistema debe ser superador del mecanismo utilizado actualmente, pero además debe lograr una mayor participación ciudadana y aumentar la garantía de la transparencia de los actos comiciales.

En vista de lo mencionado y buscando efficientizar todo el conjunto, uno de los desafíos que se imponen es la implementación del voto electrónico.

Votar electrónicamente implica, en un sentido amplio, emitir el voto a través de medios informáticos, tales como una computadora, una urna electrónica con teclado y/o pantalla o, el recuento automatizado del voto al momento de ser emitido, entre algunas de las opciones tecnológicas disponibles. También, voto electrónico, se refiere a la tecnología aplicada en las etapas que se desarrollan el día de los comicios; tales como, el registro y la verificación de la identidad del elector, la emisión del voto, el recuento de votos y la transmisión de los resultados. Incorporar el voto electrónico puede abarcar una o todas estas etapas, así lo proponemos, por ser este un sistema que debe ser usado en todo el proceso, desde la confección de los padrones, pasando por la emisión del sufragio y terminando en algo no menos importante que es la etapa del escrutinio final.

En un sentido estricto, significa eliminar el paso que media entre la materialización de la voluntad del votante y el registro de esa voluntad mediante nuevos procedimientos tecnológicos.

El objetivo central es claro: la votación electrónica implica un paso más hacia la modernización; por lo tanto, debe ser igual o más ágil, precisa, confiable y transparente que la votación tradicional.

Los sistemas electrónicos de votación, al igual que los sistemas manuales tradicionales, deben contemplar una serie de elementos que aseguren los principios básicos de una votación.

La incorporación de tecnología debe presentar ventajas al menos equiparables a las que proporciona el sistema que se intenta reemplazar, aunque estamos seguros de que es superador, como lo demuestran los procesos electorales que en otros países que lo han utilizado. En otras palabras, de ninguna manera puede aceptarse un sistema electrónico de votación, si éste no cumple con los siguientes requisitos: voto secreto y universal; elegibilidad y autenticidad; integridad del sistema

y de los votos; confiabilidad; auditabilidad; y simplicidad. Este nuevo sistema que proponemos no solo que garantiza tales requisitos, sino que les suma eficiencia y eficacia.

Son innumerables las ventajas de los sistemas electrónicos de votación. Varían entre las distintas categorías de ellos. Sin embargo, las ventajas de estos mecanismos saltan a la vista.

Entre sus fortalezas se destaca que permiten un sistema electoral más transparente y participativo. Transparencia, puesto que los fraudes electorales, sea cual fuese el sistema electrónico elegido desaparecen completamente.

En este sentido, la necesidad de centralizar el padrón electoral implica la depuración del mismo, y con ello, se acabarán las reiteradas denuncias de que "votan los muertos", o la imposibilidad de determinar cuantos DNI con el mismo número y en diferentes personas cumplen con las obligaciones electorales.

Es dable destacar que la informatización desarrollada hace imposible asociar el voto con el votante porque el sistema no permite un registro por elector sino un total por candidato, esto da seguridad a esta nueva forma de votar. Como dato adicional, se debe saber que no hay manera de adulterar el sistema para que "redireccione" votos.

Todo sistema electrónico de votación lleva implícito el principio "un hombre, un voto". Se asegura así la igualdad del sufragio.

En segundo lugar, al desaparecer la "boleta de candidatura", se eliminan aquellos fraudes vinculados con la existencia de ellas. Esto es, por ejemplo el voto cadena, voto comprado, etc. De esta manera el elector cuando ingresa al cuarto oscuro, luego de que las autoridades hayan determinado con certeza su identidad, está en libertad y sin posibilidad de coacción, para ejercer plenamente el derecho de sufragio. El voto emitido solo es fruto de su propia voluntad. Esta es quizás la mayor contribución al sistema democrático. Asegurando la libre elección de los ciudadanos, se recompone casi en su totalidad la representatividad democrática. Se reafirma el voto libre y secreto.

Es importante destacar que entre las opciones del elector se mantiene la posibilidad de los votos en blanco.

Esta situación no solo produce sus efectos en los actos comiciales. Además elimina en gran medida el clientelismo político ligado los mismos.

Los votos electrónicos aceleran el proceso de conteo. Sin duda, y revisando experiencias en otros países, los resultados de las elecciones son casi inmediatos al cierre del acto electoral. Las computadoras han demostrado mayor celeridad y con ella mayor precisión en el conteo de los votos. Desaparecen los escrutinios provisionales y la manipulación de la información. Las variaciones se producirán dependiendo del sistema electrónico que se utilice.

Asimismo reduce los tiempos de la votación. Puesto que las alternativas están concentradas en un solo lugar, como por ejemplo una pantalla al tacto, el elector solo ocupa su tiempo en precisar su preferencia. Estudios realizados comprueban que el tiempo promedio es de 40 segundos por elector. Esto trae aparejado que se reducen la cantidad de mesas y lugares de votación. Las mesas habilitadas pueden asistir a mayor cantidad de ciudadanos.

Se destaca su bajo costo. Llegado el momento de las elecciones se deberá “invertir” en la capacitación de la ciudadanía para que se genere confianza en el sistema, y en las urnas electrónicas. Invertir por contraposición al no hacerlo. La capacitación con el tiempo tendrá una curva decreciente, convirtiéndose los capacitados en difusores del procedimiento eleccionario. En cuanto a las urnas electrónicas, el mundo ha ensayado distintas alternativas en referencia a ellas, en algunos casos han desarrollado o comprado las urnas, en otros se terceriza el servicio a empresas disponibles en el mercado. También existe la posibilidad de préstamo, por parte de otros países u organizaciones internacionales. Todos estos mecanismos hacen que el proceso eleccionario sea menos oneroso tanto para los ciudadanos, como para las fuerzas políticas, permitiendo mayor participación de ellas en las contiendas electorales.

Los sistemas electrónicos de votación son más participativos. Permiten fácilmente el ejercicio del sistema de preferencia. Asimismo generan mayor igualdad entre los ciudadanos. Sin excepción, todos los sistemas contemplan el voto para personas no videntes, puesto que disponen de un teclado numérico con indicaciones en idioma braille, en el que las personas no videntes pueden digitar el nº de la boleta de su elección, sin necesidad de ver menoscabada o coaccionada su libertad de sufragio.

Las personas analfabetas también están incluidas para que puedan ejercer su derecho a votar. Los partidos políticos en campaña deberán identificarse con un color y un número. Al momento de sufragar la persona analfabeta, puede identificar su preferencia por la asociación entre la misma y el color y número de candidato a elegir. La eliminación de las boletas, de color blanco y negro, y la posibilidad de visualizar en una pantalla las candidaturas, facilitan la tarea. Se asegura así, la universalidad del sufragio.

No menos relevante es la seguridad del sistema. Algunos sistemas son más seguros que otros, puesto que contienen dispositivos de constatación de huellas digitales o registro del iris de las personas que se presentan a votar. Es escasa su aplicación puesto que son todavía muy onerosos. El método tradicional de constatación de la identidad del elector sigue siendo el más utilizado, es decir aquel en que se realiza por medio del DNI. Sin embargo, este proceso puede ser informatizado

según el sistema electrónico de votación que se aplique.

En otro sentido, el sistema es seguro puesto que sus mecanismos están diseñados para funcionar sólo el día de las elecciones y deja de operar si se intenta una alteración en sus programas. No permiten fraudes, sabotajes o accidentes.

Comparado con el sistema tradicional, los sistemas electrónicos de votación son más seguros. Sin embargo, no podemos negar la posibilidad de que ocurran delitos vinculados a ellos. En este caso, la implementación de un sistema electrónico de votación debe ir acompañada con la determinación de que si tal delito se ocurriese, la sanción penal aplicable debe ser excesiva y ejemplificadora, así lo proponemos.

Para los partidos políticos representa una enorme posibilidad. Al reducir los costos, la competencia entre los mismos es mas igualitaria, con el consiguiente beneficio para la ciudadanía.

Por otro lado, como el sistema en si mismo elimina los fraudes, hace que los partidos puedan prescindir de fiscales partidarios, tan escasos para las fuerzas minoritarias.

Entre las ventajas también contamos la eliminación de las llamadas listas sabanas horizontales, esto si la legislación electoral lo contemplara, es decir el sistema se adapta a la legislación electoral de fondo. Si bien debe existir la posibilidad de votar a lista completa, el sistema permite votar por tramos con mayor facilidad. En consecuencia conlleva mayor representatividad, puesto que los partidos políticos deberán esforzarse más en dar a conocer a todos sus candidatos.

El éxito o el fracaso del implementación del los sistemas electrónicos de votación dependerá de la confianza que los ciudadanos depositen en ellos. Debemos nosotros, los que tenemos responsabilidad de gobierno bregar para que se extiendan y difundan profundamente en la sociedad estos valores de confianza necesarios para la adecuada aceptación por parte de la ciudadanía de este nuevo y superador sistema.

Las nuevas tecnologías no aportan por sí mismas la predisposición a votar pero para poder implementar el voto electrónico es necesaria la confianza de los electores en el sistema. Por esta razón la información sobre ellos, debe ser clara, sencilla y completa. La incertidumbre sobre los nuevos medios pueden derivar en la abstención del voto, eliminarla es nuestra obligación, como así también combatir a los que escondidos detrás de falsas premisas quieren generar rechazo a esta idea, pero en el fondo lo que quieren es lo de siempre, la desestabilización del sistema democrático.

Uno de los primeros pasos para establecer en forma masiva el voto electrónico entre los ciudadanos es destinar y no escatimar esfuerzos necesarios para delinear campañas educativas que ayuden a moderar las dudas y fortalezcan los conocimientos de los actores, pa-

ra que todos sean capaces de utilizar el sistema sin dificultad.

Se deberá disponer de diversos elementos, que ya hayan demostrado ser eficientes en la transmisión de la información: campañas en los medios masivos de comunicación, los folletos informativos con instrucciones, fotos y gráficos de los aparatos de votación, números de teléfono gratuitos para asistencia y evacuación de dudas, páginas web, etc.

Asimismo toda la información referida al sistema debe estar expresada claramente. No pueden ser inconsistentes, ni contener frases ambiguas que planteen dudas, no deben adolecer de falta de información sobre cada aspecto del proceso. El mensaje debe ser claro y preciso alertando sobre los problemas y situaciones que eventualmente pueden presentarse.

Otra herramienta que ha comprobado su validez es la existencia de máquinas de simulación, instaladas con anterioridad en sitios claves, para que los ciudadanos puedan practicar antes de emitir su voto, y sumando a ello, la presencia de los técnicos en el lugar. Hecho que incrementa la sensación de invulnerabilidad del sistema.

La incorporación de voto electrónico a los procesos electorales debe ser de forma constante y progresiva para que los votantes se acostumbren a usarla venciendo el letargo de los viejos sistemas. La experiencia en otros países y en el nuestro nos indica que el mejor procedimiento en la implementación del voto electrónico es aquel que sea gradual, que permita la desarrollo de pruebas pilotos, seleccionadas con criterio demográficos, geográficos y políticos, que a la postre puedan demostrar la superación de este sistema comparado con el tradicional.

Asimismo puede ser provechoso el aporte que realicen los especialistas en el tema sean éstos ONGs, técnicos informáticos, juristas etc.

En síntesis, la tecnología puede resultar ampliamente beneficiosa, pero los resultados positivos dependen directamente del tipo de sistema electrónico de votación que se decida introducir y como se lleve ello adelante.

Votar electrónicamente significa más y mejor democracia. Las ventajas que presentan los sistemas electrónicos de votación son numerosas y todas conducen a sanar nuestro sistema electoral y a las instituciones de la democracia toda.

Los desafíos de su implementación no debe inhibirnos de llevar adelante el proceso que concluirá con la implementación del sistema, que en el mundo entero está demostrado ser más seguro, más participativo y transparente.

El presente proyecto busca, con pequeñas modificaciones, rescatar la idea y proyecto que oportunamente presentara sobre el particular el legislador demócrata cristiano Juan Carlos de la Peña.

Es por ello que solicito a mis pares la aprobación

del presente proyecto de ley en la seguridad que con ello contribuiremos a no solo mejorar, sino a perfeccionar, y en forma adecuada, desde lo formal, un tema de fondo como es el sistema democrático.

Enrique Gastaldi, Santiago Solari.

**PROYECTO DE LEY - 011646/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Modifícase el Inciso 3 del Artículo 3º de la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Inhabilitados

Artículo 3: No poseen calidad de elector:

3- Los condenados por sentencia firme, hasta la obtención de salidas transitorias del régimen de semilibertad, de la libertad condicional o, en su caso, de la libertad asistida;

Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, los detenidos por comisión de infracciones, faltas y/o sanciones disciplinarias tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos electorarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.

El Juzgado Electoral Provincial tendrá a su cargo la confección del Registro de Electores Privados de la Libertad, el cual contendrá los datos necesarios según la información de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención o lugares en donde se encuentren alojadas las personas privadas de su libertad y designará a sus autoridades.

Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda podrán votar en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus votos se adjudicarán al Distrito en el que estén empadronados.

Artículo 2.- Incorpórase el inciso 3 al artículo 13 de la Ley 8767 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Ficheros

Artículo 13.- A los fines de la formación y fiscalización del Registro de Electores, el Juez Electoral de la Provincia gestiona la reproducción de los ficheros confeccionados por la Justicia Electoral Federal correspondientes a la Provincia de Córdoba, organizándolos de la siguiente manera:

- 1- Electores de Provincia;
- 2- Electores inhabilitados y excluidos;
- 3- Electores Privados de la Libertad.

Asimismo concierta los mecanismos adecuados

para su actualización.

Artículo 3.- Incorpórase el inciso 3 al artículo 14 de la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Organización

Artículo 14.- EL Juez Electoral organiza los ficheros de la siguiente manera:

1- El fichero de electores de la Provincia contiene la ficha de todos los electores con domicilio en la jurisdicción y puede ser dividido según el sexo de los mismos.

Las fichas se clasifican en tres subdivisiones:

1.1- Por orden alfabético;

1.2- Por orden numérico de documento cívico, con indicación de su tipo;

1.3- Por demarcaciones territoriales, o sea: en departamentos o secciones electorales, en circuitos electorales y en mesas electorales.

2- El fichero de inhabilitados y excluidos, contiene la ficha de todos los electores inhabilitados y excluidos del Registro Electoral, domiciliados dentro de la jurisdicción y pueden ser divididos según el sexo de los mismos. Las fichas se clasifican en tres subdivisiones:

2.1- Por orden alfabético;

2.2- Por orden numérico de documento cívico, con indicación de su tipo;

2.3- Por orden cronológico de la cesación de la inhabilitación

3- El fichero de electores privados de la Libertad, contiene la ficha de todos los electores que se encuentren privados de su libertad y que resulten incorporados al Registro de Electores Privados de la Libertad, domiciliados dentro de la jurisdicción y podrán ser divididos según el sexo de aquellos. Las fichas se clasifican en dos subdivisiones:

3.1- Por orden alfabético;

3.2- Por orden numérico de documento cívico, con indicación de su tipo;

3.3- Por establecimientos de detención y/o lugares en donde se encuentren alojadas las personas privadas de su libertad.

Artículo 4.- Modifícase el artículo 34 de la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Mesas electorales

Artículo 34.- Cada circuito se divide en mesas, las que se constituyen con hasta cuatrocientos cincuenta (450) electores inscriptos, ordenados alfabéticamente. Si realizado tal agrupamiento de electores queda una fracción inferior a sesenta (60), se incorpora a la mesa que el Juez determina.

Si resta una fracción de sesenta (60) o más, se forma con la misma una mesa electoral.

El Juez Electoral, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población están separados por largas distancias o accidentes geográficos que dificultan la concurrencia

de los ciudadanos a los comicios, puede constituir mesas electorales en dichos núcleos de población, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios y por orden alfabético.

Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenan alfabéticamente, debiendo inmediatamente proceder a agruparlos en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.

El Juzgado Electoral adoptará las medidas necesarias a los fines de establecer mesas electorales móviles, a los fines de la emisión del sufragio de las personas que se encuentren internadas en los hospitales y/o centros de salud.

Artículo 5.- Modifícase el artículo 41 de la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Registro de los candidatos y pedidos de oficialización de listas

Artículo 41.- Desde la convocatoria a elecciones y hasta cincuenta (50) días antes al acto electoral, los partidos políticos deben registrar ante el Juez Electoral Provincial las listas de los candidatos públicamente proclamados, quienes deben reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

Las listas de candidatos deben ser integradas observando las prescripciones de la Ley 8365 y sus modificatorias.

En ningún caso un mismo candidato podrá figurar en dos o más listas pertenecientes a distintos partidos políticos para una elección, de manera paralela y simultánea.-

Los partidos políticos deben presentar junto con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos, aceptación del cargo y el último domicilio electoral.

Artículo 6.- Modifícase el artículo 43 de la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43.- Los partidos políticos reconocidos que hayan presentado candidatos deben someter a la aprobación del Juez Electoral, por lo menos treinta (30) días antes de la elección, modelos exactos del símbolo o figura con el que se identifiquen durante el proceso o contienda electoral destinadas a ser utilizadas en los comicios, a los fines de la confección de la Boleta Única.-

Las boletas deben ser confeccionadas observando los siguientes requisitos:

1- No es menor que las dimensiones del formato A5;

2- Tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones políticas, las letras y números que se impriman para identificación de los partidos políticos deberán guardar características similares en cuanto a su tamaño y forma;

3- Podrá incluir la fotografía de los candidatos a

Gobernador de la Provincia, del candidato que ocupa el primer lugar en las listas de candidatos a Legisladores de Distrito y Departamental.

4- En las boletas se incluyen en tinta negra la nómina de candidatos, y la designación del partido político la cual podrá ser de color. La categoría de cargos se imprime en letras destacadas debiendo llevar impreso el número de identificación del partido al que pertenece.

5- Sólo las fotografías, sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo o emblema del partido político podrá ser realizada multisigno y multicolor.

6- Los modelos de boletas presentados por cada partido político deben contener diferencias tipográficas que los haga inconfundibles entre sí, a simple vista, aun para los electores analfabetos.

Cuando no se cumplan estos requisitos, el Juez Electoral debe requerir de los apoderados de los partidos la reforma inmediata de los mismos.

El diseño de la franja, utilizando los colores, signos y/o símbolos aceptados en el reconocimiento de la personalidad jurídica del Partido Político es facultad privativa de la Justicia Electoral, la cual establece las medidas de las boletas, conforme las categorías de candidatos que comprenda la elección y según las prescripciones de la presente ley;

Artículo 7.- Incorpórase el artículo 43 BIS a la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43 bis: La boleta única de sufragio podrá ser multicolor y multisigno, y se compondrá de la siguiente manera:

a) Para la elección de Gobernador y Vicegobernador estará dividida horizontalmente en dos partes iguales, que contendrán franjas de igual dimensión para cada partido político, que participe en la elección. Llevarán los colores, símbolos partidarios y el nombre de cada partido político o alianza; asimismo llevarán el nombre y la fotografía del candidato por cada partido político o alianza.

Las franjas de la mitad superior llevarán el nombre y la fotografía del candidato a gobernador y vicegobernador por cada partido político, o alianza.

b) Para la elección de Legislador provincial por Departamento y miembros del Tribunal de Cuentas las franjas de la mitad inferior llevarán el nombre y solo la fotografía del candidato a Legislador Departamental. En la misma franja se incorporará el nombre de los integrantes del Tribunal de Cuentas.

c) Para la elección de legisladores de Distrito al dorso de la boleta única se incorporarán los nombres y apellidos de los candidatos titulares y suplentes, diferenciados topográficamente, divididos horizontalmente en partes iguales para cada partido.

d) En caso de que algún partido político no presentara candidato, la franja correspondiente quedará en blanco.

e) El número de orden de inclusión y ubicación

de los partidos políticos será realizada conforme al número inscripto en la Justicia Electoral.

Artículo 8.- Modifícase el artículo 44 de la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Aprobación de las boletas

Artículo 44.- Cumplido el trámite de presentación y verificación de las boletas, el Juez Electoral convoca a los apoderados de los partidos políticos y oídos éstos, dicta resolución aprobando o no los modelos o diseños de boletas.

En caso de rechazo del diseño y siempre que no satisfaga los requisitos legales o pueda inducir a confusión a los electores, por presentar identidad o semejanza con los registrados por otros partidos políticos, se emplazará al apoderado del Partido Político para que en el plazo de 48 hs. cumplimente en forma la presentación.

Aprobados por el Juez Electoral los modelos presentados, serán adheridos a una hoja que firmarán los representantes de cada una de las organizaciones, debiendo ser autenticadas por aquel.

Artículo 9.- Incorpórase el artículo 44 bis a Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Impresión de Boletas

Artículo 44 Bis.- La impresión de las boletas de sufragio y las actas de escrutinio y cómputo es potestad exclusiva del Juzgado Electoral, el que deberá adoptar las medidas máximas de seguridad para garantizar la autenticidad de aquellas.

El Poder Ejecutivo Provincial garantizará los fondos necesarios a los fines de la impresión de las boletas de sufragio, en cantidad necesaria para el acto electoral que corresponda.

Artículo 10.- Modifícase el art. 46 de la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Nómina de documentos y útiles

Artículo 46.- El Juzgado Electoral Provincial entrega al servicio oficial de correos, con destino a los Presidentes de Mesa, las urnas a utilizar el día del acto electoral. Las mismas deben ser identificadas con un número para determinar su lugar de destino, de lo cual lleva registro el Juez Electoral Provincial.

Las urnas contienen en su interior los siguientes documentos y útiles:

1- Tres (3) ejemplares del padrón electoral especial para cada mesa de electores, que van colocados dentro de un sobre rotulado con la inscripción "Ejemplares del Padrón Electoral" y con la indicación de la mesa a que corresponde;

2- Acta de apertura de los comicios y acta de cierre de los mismos;

3- Fajas de seguridad para el cierre de las urnas y para el sellado de las aberturas del cuarto oscuro;

4- Sobres para el voto. Éstos deben ser opacos.

5- Un ejemplar de la boleta oficializada, sellada y rubricada por el Secretario Electoral;

6- Boletas de sufragio para su posterior distribu-

ción en la cantidad del padrón, con un diez por ciento más.

7- Sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, lapiceras, papel, cola y otros elementos en cantidad que fuera menester;

8- Un ejemplar de esta Ley.

La entrega de las urnas debe efectuarse con la anticipación suficiente para que puedan ser recibidas en el lugar en que funciona la mesa, a la hora de apertura del acto electoral.

Artículo 11.- Incorpórase como Capítulo VI del Título III, de la Ley 8767 los artículos 46 bis, 46 ter, 46 quater, 46 quinquies, y 46 sexies, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Capítulo VI

Campaña Electoral

Duración de la Campaña Electoral

Artículo 46 bis.- A los fines de la presente Ley se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades llevadas a cabo con el propósito de promover o desalentar expresamente la captación del sufragio, sean estas a favor, o en contra, de candidatos oficializados a cargos públicos electivos provinciales, como asimismo toda propaganda que realicen los partidos, confederaciones, alianzas, candidatos a cargos electivos locales y quienes los apoyen a efectos de la captación de sufragios.

La campaña electoral para la elección de Legisladores provinciales, Miembros del Tribunal de Cuentas y Convencionales Constituyentes sólo podrá iniciarse sesenta (60) días corridos anteriores a la fecha establecida para la realización del comicio. Cuando se trate de la elección de Gobernador y Vicegobernador, la campaña sólo podrá iniciarse noventa (90) días antes de la fecha fijada para el comicio.

Publicidad en medios de comunicación:

Artículo 46 ter.- Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación de sufragio para candidatos a cargos públicos electivos provinciales antes de los treinta y dos (32) días previos a la fecha fijada para la realización del comicio.

Publicidad de los actos de gobierno

Artículo 46 quater.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental.

Quedan exceptuadas del párrafo anterior, las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Queda prohibido durante los diez (10) días anteriores a la fecha fijada para la celebración del comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el

lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos provinciales.

Publicidad televisiva gratuita.

Artículo 46 quinquies.- Los canales de televisión de aire y radios difusoras de amplitud modulada que transmitan en la Provincia de Córdoba, deberán destinar, durante los diez (10) días inmediatos anteriores a la finalización de la campaña electoral, hasta 10 minutos (10) diarios de sus transmisiones, discontinuos e intermitentes, a propaganda electoral de manera gratuita.

Le corresponderá a cada Partido Político un tiempo proporcional a los votos válidos obtenidos en la última elección de Gobernador y Vicegobernador.

En el supuesto de que un Partido Político no haya participado para dichos cargos, se otorgará el mismo tiempo que le corresponde al Partido Político que hubiera obtenido menos votos en aquella.-

El Estado Provincial compensará a los canales de televisión de libre recepción provinciales con una asignación que no podrá superar el 30 por ciento de la pauta publicitaria para dicho año electoral.-

El Poder Ejecutivo provincial reglamentará la distribución equitativa entre la totalidad de los partidos políticos que se presenten al acto eleccionario.

Debate de candidatos

Artículo 46 sexies. Dentro de los veinte (20) días anteriores a la elección, los candidatos a Gobernador que hayan oficializado su lista ante la Justicia con competencia electoral deberán someterse a un debate televisivo y radial público.

El mismo será transmitido obligatoriamente en vivo y en directo, de manera simultánea por los canales de televisión de aire y radiales de amplitud modulada que emitan su programación desde el territorio de la Provincia de Córdoba.

El moderador deberá ser un profesional de reconocida trayectoria en el ámbito del periodismo político o docente universitario de reconocida trayectoria, quien desempeñará su rol con imparcialidad y objetividad, quien se abstendrá de emitir opinión alguna sobre los temas sometidos a debate, los cuales deberán ser consensuados entre los participantes del mismo.

Artículo 12.- Modifícase el artículo 49 de la Ley Nº 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Prohibiciones

Artículo 49.- Queda prohibido:

1) Desde las cuarenta y ocho (48) horas antes a la de iniciación de los comicios, y hasta dos (2) horas posteriores al cierre del mismo, los actos públicos de proselitismo y la publicación y difusión de encuestas y sondeos preelectorales;

2) Desde las cero (0) horas del día de los comicios y hasta dos (2) horas inmediatas posteriores al cierre:

a- La exhibición, el depósito y la portación de armas, aun en este último caso a personas autorizadas para ello por autoridad competente, en los lugares donde se realizan los comicios y hasta una distancia de ochenta (80) metros del perímetro de aquellos, a excepción del personal policial asignado a la custodia del local donde se celebren los comicios;

b- Los espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral;

c- El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas;

d- Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta (80) metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino;

e- A los electores, el uso de banderas, divisas u otros distintivos;

f- La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta (80) metros del lugar en que se instalan mesas receptoras de votos. El Juez Electoral Provincial puede disponer el cierre transitorio de los locales que están en infracción a lo dispuesto precedentemente. No deben instalarse mesas receptoras a menos de ochenta (80) metros de la sede central en que se encuentre el domicilio legal de los partidos políticos.

3) Durante la realización del comicio y hasta dos (2) horas posteriores a su cierre, la publicación o difusión de encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo hará incurrir a los infractores y/o responsables en el doble de la pena prevista en el Artículo 107 y la del Artículo 108 bis de la presente Ley, según corresponda.

Artículo 13.- Modificase el artículo 50 de la Ley 8767, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Autoridades de la mesa

Artículo 50.- Cada mesa electoral tiene como máxima autoridad un funcionario que actúa con el título de Presidente de Mesa. Se designan también dos (2) suplentes, que auxilian al Presidente y lo reemplazan por el orden de su designación en los casos en que esta Ley determina.

Todas las funciones que esta Ley atribuye a los electores, constituye una carga pública y son irrenunciables.

Los ciudadanos que cumplan funciones como autoridades de mesa recibirán una compensación consistente en:

a) Un franco compensatorio, para el caso de los funcionarios y empleados públicos provinciales;

b) Una suma fija en concepto de viático, para el caso de los que no sean ni funcionarios ni empleados

públicos provinciales.

Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el comicio, el Ministerio de Gobierno determinará la suma que se liquidará en concepto del viático establecido en el inciso b) del presente artículo. La resolución será comunicada de inmediato al Juzgado Electoral.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones, el plazo y la forma en que se harán efectivas las compensaciones que establece este artículo, en el plazo de 60 días.

Artículo 14.- Incorpórase el artículo 53 bis a la Ley N° 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Capacitación

Artículo 53 bis.- El Juzgado Electoral garantiza la capacitación obligatoria a las autoridades de mesa, a través de la realización de cursos presenciales o virtuales sobre Derecho Electoral, a los fines del adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 15.- Modificase el artículo 73 de la Ley 8767, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Entrega de la boleta al elector

Artículo 73.- Si la identidad no es impugnada, el Presidente de Mesa entrega al elector la boleta de votación y un sobre firmado en el acto de su puño y letra y lo invita a pasar al cuarto oscuro para emitir su voto.

Los fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar el sobre en la misma cara en que lo hace el Presidente de Mesa y deben asegurarse que el que se va a depositar en la urna es el mismo que le fue entregado al elector.

Cuando los fiscales firmen un sobre están obligados a firmar varios a los fines de evitar la identificación del votante.

Artículo 16.- Modificase el artículo 74 de la Ley 8767 el que quedara redactado de la siguiente manera:

Emisión del voto

Artículo 74.- En el cuarto oscuro y cerrada la puerta, el elector marcará su boleta de sufragio según su elección con un signo visible e inequívoco en la franja correspondiente al partido político de su preferencia y vuelve inmediatamente a la mesa.

El votante deberá marcar en la boleta de sufragio, con un signo visible e inequívoco, la franja correspondiente al Partido Político de su preferencia de la siguiente manera:

a) Por el candidato a Gobernador y Vicegobernador en la mitad superior de la boleta;

b) Por el candidato a Legislador Departamental en la mitad inferior de la boleta;

c) Por el candidato a Legislador de Distrito en la mitad inferior de la boleta;

d) Por el candidato al Tribunal de Cuentas en la mitad inferior del frente de la boleta

La validez del voto en cada mitad de la boleta será individual. La nulidad en uno de los votos descritos

en los incisos anteriores, no importará la nulidad del otro. Asimismo, el voto en blanco en uno de los casos descritos en los incisos a), b), y c) no afectará al otro.

La boleta de sufragio es ensobrada por el elector a los fines de su depósito en la urna.

El Presidente de Mesa, por propia iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, puede ordenar se verifique si el sobre que trae el elector es el mismo que le entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales y municipales, se utiliza un solo sobre para depositar todas las boletas.

Artículo 17.- Modifícase el artículo 78 de la Ley 8767 el que quedara redactado de la siguiente manera:

Verificación de existencia de boletas

Artículo 78.- El Presidente de Mesa verifica que en el cuarto oscuro existan en todo momento los modelos de boletas con indicaciones e instrucciones necesarias para la identificación por parte del elector.

El Presidente de Mesa no debe admitir en el cuarto oscuro, otras boletas que las aprobadas por el Juzgado Electoral.

Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 81 de la Ley 8767, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Calificación de los sufragios

Artículo 81.- Los sufragios tienen las siguientes categorías:

1. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada, aún cuando tengan candidatos agregados, sustituidos o tachados.

2. Votos nulos: son los emitidos:

a) Mediante boleta no oficializada por el Juzgado Electoral;

b) Mediante boleta oficializada que contenga inscripciones o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del inc. 1 del presente artículo;

c) Mediante dos o más marcas de distinto partido para la misma categoría de candidatos;

d) Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defectos o tachaduras, no contenga por lo menos, sin rotura alguna o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos elegidos;

e) Cuando en el sobre, junto con la boleta electoral, se hayan incluido objetos extraños a ella.

3. Votos en blanco: cuando el sobre estuviera vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones ni imagen alguna.

4. Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal debe fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asientan sumariamente en volante especial que provee el Juzgado Electoral. Dicho volante se adjunta a la boleta y sobre respectivo y lo suscribe el fiscal cuestionante, consignándose el nombre y apellido, el número de documento cívico, domicilio y partido político al que pertenece. Ese

voto se anota en el acta de cierre de los comicios como “voto recurrido” y es escrutado oportunamente por el Juez Electoral, que decide sobre su validez o nulidad. El escrutinio de los votos recurridos declarados válidos por el juez electoral se hace en la forma prevista en el Art. 99 de la presente Ley.

5. Votos impugnados: son aquellos en que se ataca la identidad del elector, conforme al procedimiento registrado por los arts. 71 y 72 de la presente Ley.

Artículo 19.- Modifícase el artículo 84 de la Ley 8767 el que quedara redactado de la siguiente manera:

Guarda de boletas y documentos

Artículo 84.- Una vez suscrita el acta referida en el artículo anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositan dentro de la urna las boletas compiladas, los sobres utilizados y un certificado de escrutinio.

El padrón electoral con las actas de apertura y de cierre firmadas, los votos recurridos y los votos impugnados se guardan en el sobre especial que remite el Juzgado Electoral, el que lacrado, sellado y firmado por las autoridades de mesa y fiscales, se entrega al empleado postal designado al efecto, simultáneamente con la urna.

Artículo 20.- Incorpórase el artículo 108 bis a la Ley N° 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Actos de proselitismo. Publicación y/o difusión de resultados.

Artículo 108 bis.- El que violare las disposiciones contenidas en el inciso 1 y 3 del artículo 49 de la presente Ley, será reprimida con arresto de hasta diez (10) días o multa de pesos tres mil (\$ 3.000) a pesos diez mil (\$ 10.000), según corresponda.

Artículo 21.- Incorpórase el artículo 108 ter a la Ley N° 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Publicidad en medios de comunicación.

Artículo 108 ter.- El que violare las disposiciones contenidas en el artículo 46 ter de la presente Ley, será pasible de las siguientes sanciones:

1) Al partido político, la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de dos (2) a cuatro (4) años, así como también todo fondo destinado al financiamiento de campaña por una (1) a tres (3) elecciones;

2) A las personas físicas arresto de hasta diez (10) días o multa de pesos tres mil (\$ 3.000) a pesos diez mil (\$ 10.000);

3) A las personas jurídicas, multa de pesos tres mil (\$ 3.000) a pesos diez mil (\$ 10.000).

4) A los titulares y/o responsables jurídicos del medio de comunicación televisivo o radial, o gráfico, mul-

ta equivalente al valor total de los segundos o centímetros de publicidad, según corresponda de uno (1) hasta cuatro (4) días en la franja horaria de mayor costo en comercialización (prime time) o ubicación de mayor costo (hojas pares) en la tirada, conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquél en que se produzca la infracción.

Artículo 22.- Incorpórase el artículo 108 quater a la Ley Nº 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Publicidad de actos de gobierno.

Artículo 108 quater.- Se impondrá multa de pesos seis mil (\$ 6000) hasta diez mil (\$ 10.000) al partido político integrante de la mayoría, en cuanto se violente las disposiciones establecidas ene. Artículo 46 quater de la presente Ley, además se perderá el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público y privado, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a tres (3) elecciones."

Artículo 23.- Incorpórase el artículo 111 bis a la Ley 8767, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 111 Bis.- Todo ciudadano que resulte elegido por un partido político o alianza, deberá actuar a nombre de aquellas y mantener su calidad de miembro, hasta la terminación del mandato constitucional para el que resultó electo.

La violación a las presentes disposiciones será sancionada con la pérdida de la banca asignada o cargo respectivo.

Dicha vacante será reemplazada según lo prescripto por el artículo 80 de la Constitución provincial.-

Artículo 24.- Modifícase el Artículo 119 de la Ley 8767, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Forma

Artículo 119.- Los Legisladores provinciales son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia.

Los candidatos a Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, serán, al mismo tiempo, candidatos a Legisladores provinciales por Distrito Único, y no existiere impedimento alguno.-

Artículo 25.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 6875, el quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2.- Los partidos políticos reconocidos tienen personalidad jurídico-política. Son, además, personas de derecho privado, de acuerdo con las disposiciones de la legislación común y del presente ordenamiento.

Los partidos pueden libremente integrar alianzas y fusionarse, sin embargo les está expresamente prohibido proponer candidatos comunes para la misma o distinta categoría de cargos electivos, en dos o más listas pertenecientes a distintos partidos políticos para una elección, de manera paralela y simultánea.-

Artículo 26.- Incorpórase el Artículo 38 bis a la

6875, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 38 Bis.- Elecciones Partidarias Internas Abiertas y Simultáneas.

La elección de los candidatos a Gobernador, Vicegobernador, Legisladores provinciales, Miembros del Tribunal de Cuentas se realizará a través de elecciones internas, abiertas y simultáneas, salvo lo dispuesto en el artículo 32 inciso 3 de la presente Ley.

La fecha de realización de la elección interna abierta y simultánea deberá ser comunicada por el Juzgado Electoral, arbitrando los mecanismos necesarios para su efectiva realización.-

Artículo 27.- De Forma.

Dante Rossi.

FUNDAMENTOS

Las elecciones democráticas se presentan como aquel acto jurídico político por el cual los ciudadanos con derecho a voto eligen a sus autoridades en elecciones libres y transparentes, mediante el sufragio universal.

En este punto, LOEWENSTEIN sostiene que "las elecciones sirven, en primer lugar, para que el electorado designe a los detentadores del poder en el gobierno y en el parlamento [...] el electorado, que en una sociedad de masas sigue necesariamente las directrices de los partidos, determina por medio de la elección directa la persona que ocupará el cargo... "y agrega "El electorado participa en el proceso político bien indirectamente al elegir personas individuales [...] a los que confía la toma de decisiones políticas".

En nuestro sistema democrático la totalidad del pueblo organizado como electorado participa libremente en el proceso del poder. El electorado "adquiere con esto la categoría del detentador supremo del poder" [...] "este objetivo fue alcanzado con la progresiva ampliación del sufragio y del acceso a los cargos políticos que dejó de estar confinado en las clases privilegiadas y se extendió a la población adulta".

El acto eleccionario es el pleno ejercicio de educación cívica que involucra no sólo a ciudadanos individualmente considerados, sino que también nos involucra como sociedad

Esta sociedad es la que ha planteado desde hace varios años una demanda de reforma, una demanda ante los gobernantes y los partidos políticos tendiente fundamentalmente a achicar la brecha que existe entre representantes y representados, además de la tan mentada transparencia.

De ahí radica la necesidad de avanzar en un proyecto integral de reforma política, el cual trate de alguna manera de modificar o incorporar algunos institutos que han sido criticados y que a la larga han demostrado su poca eficacia, así como garantizar un sistema de gobierno que garantice a través del respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, el cumplimiento de tres prin-

cipios: libertad, igualdad y justicia.-

No hay reforma política verdadera si el eje no se pone en los cambios que deben darse dentro de los partidos políticos y en la relación de éstos con la sociedad. Los argentinos han reconocido mayoritariamente que si fueran magos eliminarían la corrupción de los partidos políticos (Barómetro Global de la Corrupción 2003 de Transparency International). La eliminarían simplemente porque reconocen que no hay democracia sin ellos (Ver los resultados de Latinobarómetro 2002).

Los partidos políticos le preocupan a la sociedad. Sólo el 8 % de los argentinos confía en ellos (Latinobarómetro, 2003). Los argentinos exigen cambios profundos para su mejoramiento, su recuperación como espacios para el debate ideológico, la integración y la expresión, la incorporación y la capacitación de líderes y representantes, y, un mínimo de disciplina partidaria que haga a la previsibilidad y la gobernabilidad del sistema para que ofrezcan a esta democracia una mejor oferta electoral y un debate público maduro e informado.

Desde la incorporación de mesas electorales mixtas, la existencia de mesas móviles, la implementación de la boleta única, la legislación sobre las campañas electorales y la sanción del denominado transfuguismo, tratamos de poner en debate aquellos temas que requieren un llamado de atención, ello sin dejar de tener en cuenta que la idea central que funda al presente, es el fortalecimiento de los Partidos Políticos, pilar fundamental de nuestro sistema democrático.

A los fines de una cabal consideración de los temas propuestos en el presente proyecto de Ley, es que fundamentamos los mismos según su incorporación en la parte resolutive del mismo.

TEMAS PROPUESTOS:

VOTO DE DETENIDOS:

Los artículos 1, 2 y 3 del presente Proyecto de Ley, sientan las bases sobre las cuales debe organizarse el Registro de Electores, el cual es formado y fiscalizado por el Juez Electoral, quien asume de esta manera la responsabilidad de su organización y actualización a los fines de la posterior confección del padrón electoral, todo ello en pos de garantizar el voto de los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, los detenidos por comisión de infracciones, faltas y/o sanciones disciplinarias.-

En el sentido de la Ley 25.858 y Decreto 1291/2006 se incorporan como categoría diferenciada la de los "procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, los detenidos por comisión de infracciones, faltas y/o sanciones disciplinarias" quienes tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos electorarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.

De manera significativa se garantiza el ejercicio del derecho del sufragio, a cualquier persona que se en-

cuentre detenida, bajo cualquier tipo de modalidad, con la excepción ya consagrada por el primer párrafo del inciso 3 del artículo 3 de la Ley 8767.

En este punto necesariamente debemos remitirnos a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual goza de raigambre constitucional según el artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna, y que prescribe en su Artículo 23.2 que "Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos (...) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas (...) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia (...) o condena por juez competente en proceso penal".

Como la convención tiene jerarquía constitucional, ésta impera sobre cualquier norma infra constitucional, avalando la necesidad de que se garantice a los detenidos sin sentencia firme, la emisión del sufragio, razón por la cual deben arbitrase los mecanismos necesarios a los fines de reglamentar dichas prescripciones.-

A partir de la incorporación del artículo 3 bis al Código Electoral y su reglamentación, la Cámara Nacional Electoral realizó el Registro de Electores Privados de la Libertad, estando habilitados para las recientes elecciones presidenciales llevadas a cabo en el mes de octubre del año 2007, mas de 20 mil presos en prisión preventiva.

Es necesario que la Ley 8767 establezca los mecanismos necesarios para garantizar a todas las personas detenidas el ejercicio del derecho al sufragio, adoptando todas aquellas medidas tendientes a la creación de un registro que determine la población en condiciones de emitir su sufragio, así como también su ubicación, caso contrario se estaría incorporando un nuevo impedimento que violenta no solo a la Constitución Nacional y Pacto de San José de Costa Rica, sino a la propia ley 8767.

MESAS MIXTAS:

El artículo 4 del presente proyecto de ley, avanza en una profunda modificación en lo atinente a la conformación de las mesas electorales, las cuales en la actualidad se constituyen teniendo en cuenta no solo el domicilio de los electores, sino también el sexo.

Al considerar dicha distinción o criterio de selección abiertamente discriminatorio, como así también carente de fundamento jurídico y político, es que proponemos la constitución de mesas electorales mixtas, es decir que al momento de su conformación el único elemento válido para su distribución será el domicilio del elector.

Es precisamente el objetivo de la presente ley, el receptor los principios de equiparación de derechos entre hombres y mujeres, tal como lo recepta la C.N y la Ley 8365, además de simplificar el acto electoral, como ejercicio de madurez cívica a fin de posibilitar la creación de mesas mixtas.

En esencia el proyecto propone la supresión en el texto del Código Electoral provincial de las distinciones por sexo al momento de la constitución de las mesas electorales, según lo establecía la Ley 9105, teniendo en cuenta a partir de la aprobación del presente proyecto solo el domicilio de los electores.

Tal es, por otra parte, la tendencia internacional, al igual que varias provincias las que han adaptado el criterio de instalación de mesas mixtas pudiendo citarse a Tierra del Fuego, que realiza desde el año 1999 sus elecciones de autoridades locales con mesas mixtas de votación tanto de electores nacionales como extranjeros, y a otras provincias como Catamarca y Córdoba en las que suelen funcionar mesas mixtas de electores extranjeros.

En el mismo orden, debe destacarse que aunque en el orden nacional se constituyen mesas diferentes para mujeres y hombres, el Código Electoral Nacional admite la posibilidad de mesas mixtas en circunstancias especiales (art. 41, párrafo cuarto), como que existen proyectos específicos que propugnan la conformación de un único padrón electoral mixto y la consecuente unificación de mesas de votación de electores nacionales, por entender que la diferenciación resulta hoy anacrónica.

Como antecedentes o iniciativas que regularon el tema de las mesas mixtas, y de manera enunciativa citamos por ejemplo: Proyecto de Ley N° S-795/05 de la senadora nacional Mabel Hilda Muller, ingresado en el Senado de la Nación el 12/4/05, D.A.E. N° 42; Proyecto de Ley N° 5.556-D/01 del diputado nacional Simón Fermín Hernández, ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación en agosto de 2001, T.P. N° 124; Expte. 260-D/ 2003 presentado por la Diputada Nacional Rosana Bertone, en CABA los proyectos de ley de los diputados de la Ciudad Silvia Gottero (Expediente N° 593-D/03) y Norberto La Porta (Expediente N° 2.080-D/04), en los que no se prevé padrones electorales y mesas de votación diferenciados por sexo.

En el ámbito de derecho comparado citamos los ejemplos de Perú, Uruguay, Brasil, México, Panamá en los cuales no existe diferenciación de mesas en atento el sexo de los electores.

Los derechos políticos femeninos aparecen en la actualidad como incuestionables, pero fueron necesarios muchos años de lucha para que las argentinas pudieran votar y ser elegidas, esta lucha se ve reflejada tenuemente en diferentes provincias, las cuales van aceptando gradualmente la incorporación de las mesas mixtas.

Es entonces idea del presente proyecto colaborar con la equiparación plena de los derechos políticos de hombres y mujeres, camino abierto con la reforma constitucional de 1994 la cual introduce, en la segunda parte del artículo 37, el concepto de "acciones positivas" para asegurar la igualdad real de oportunidades, entre varones y mujeres, respecto del acceso a cargos electivos y partidarios, el punta pie inicial para que nuestro país se coloque a la vanguardia de la igualdad de géne-

ro.

Como una extensión de este concepto, también se puede entender que esa igualdad debe aplicarse a las modalidades para la emisión del sufragio. Esta interpretación cobra mayor vigor si tenemos en cuenta la primera parte del mismo artículo 37, cuando a las características tradicionales del sufragio universal, secreto y obligatorio, incorpora el concepto de "igual", idea que tomó en nuestra provincia la Ley 8365 al buscar a través de determinadas acciones consideradas positivas, la igualdad de hombres y mujeres.

El proyecto de eliminar la distinción por sexo para padrones y unificar los listados y mesas de votación que se propone, pretende dar un paso más en la modernización de la estructura electoral en Córdoba eliminando de esta manera los criterios de diferenciación que dificultan la integración del género a la sociedad.

El ejercicio del voto, como la más alta expresión de los derechos políticos, es común a hombres y mujeres. La existencia de padrones y mesas separadas, en razón del sexo, constituye una rémora de viejos criterios que el tiempo y la cultura contemporánea han superado.

A los fines de garantizar el derecho al sufragio, la Justicia Electoral deberá establecer todos aquellos recaudos tendientes a la implementación de mesas móviles para que toda persona que no se encuentre inhabilitada legalmente, y que por razones de salud tenga su capacidad ambulatoria restringida por encontrarse internada en un nosocomio, pueda ejercer el derecho político por excelencia: el sufragio.

PROHIBICION DE LA DENOMINADA SUMATORIA DE VOTOS:

El artículo 5 del presente proyecto de Ley, pone fin a una herramienta de creación "pretoriana" ante la falta de regulación expresa en nuestro sistema normativo, y que ha dado lugar incluso a su reconocimiento por parte de diferentes fallos de nuestros tribunales.

Las elecciones acaecidas en la Provincia de Córdoba el pasado 2 de septiembre del corriente año, han demostrado como el vacío legal o la falta de previsión expresa sobre determinados institutos, da lugar a la especulación por parte no solo de los Partidos Políticos sino también de los candidatos, ya que no podemos desconocer que dicho acto eleccionario estuvo signado por una gran desorganización, durante la jornada electoral y durante el recuento provisorio.-

Uno de los factores que llevaron a dicho desorden fue el generado por la inusual cantidad de boletas a causa de la vigencia del sistema de sumatoria de votos.

Mas de treinta boletas en el cuarto oscuro sirvieron para que el elector se encontrara desorientado, votando en algunos casos candidatos que desconocía.

Si bien en autos "Villa Yacanto-Departamento Calamuchita-Partido Justicialista-Oficialización de listas y Sumatorias-Recurso de Apelación" (Expediente Letra "V", N° 5/06) el Tribunal Superior de Justicia ha dicho

que en materia electoral, “el principio de participación se erige en el principio rector que debe guiar cualquier decisión en el marco de un proceso determinado...”, ello no debe realizarse en detrimento de la transparencia del ejercicio del derecho político por excelencia, cual es la emisión del sufragio; el derecho al voto de manera clara y transparente.

La falta de prohibición expresa sobre al utilización de las denominadas “sumatoria de votos” y la primacía del principio que determina “que lo que no está prohibido, está permitido”, nos ha llevado a desvirtuar el verdadero sentido de las alianzas programáticas de los Partidos Políticos, toda vez que esta se convierte en una verdadera herramienta electoral, siempre que consideremos a la “ Alianza electoral” en la unión temporaria de dos o más partidos políticos con el fin de concurrir unidos a la competencia electoral, presentando la misma candidatura en todos o algunos de los niveles de gobierno (federal o nacional, provincial, local) y en todas o algunas de las categorías de cargos a elegir. (Delia Ferrera Rubio).-

La alianza tiene una finalidad esencialmente electoral, por eso su formación y registro se vincula a un determinado acto electoral (vgr. Argentina, Brasil, México, Perú, República Dominicana), y que genera como consecuencia directa la maximización de las posibilidades de éxito de los partidos que la integran en una determinada elección, ya por una decisión de estrategia política, ya porque el propio sistema electoral genera incentivos a la formación de bloques.

Sin embargo en Argentina, su utilización se refiere casi exclusivamente a fines electoralistas, destinados a la cooptación del voto, careciendo de algún programa específico de acción política conjunta, o base ideológica que los agrupe.

En definitiva esta unificación de candidaturas bajo la presentación paralela y simultánea de listas solo ha logrado confundir al electorado, quien es movilizad por un solo candidato el que generalmente encabeza la lista.

Solo sirve para acumular votos para el candidato común, ya que objetivamente y atento el grado de confusión y reglas poco claras, la “sumatoria de votos”, no permite discriminar el aporte real en votos de cada uno de los partidos miembros, además de ser utilizada por algunas agrupaciones políticas como salvaguarda o garantía de perdurabilidad sobre un Partido Político, quien evita la cancelación o caducidad de su personería, beneficiándose del caudal total de votos que obtiene la sumatoria a los fines de determinar el caudal mínimo de votos exigido para mantener la personería o registro (vgr. Argentina), esta situación es generada debido a la confusión imperante en el cuarto oscuro en donde conviven demasiadas boletas con idénticos candidatos.-

Algunas legislaciones excluyen expresamente la posibilidad de sumatorias o alianzas, o disminuyen los

incentivos para que los partidos conformen alianzas con este fin.

Así, por ejemplo, en México la legislación establece que en caso de alianzas, los partidos miembros conservarán su registro «si la votación de la coalición es equivalente a la suma de los porcentajes del 2% de la votación emitida, que requiere cada uno de los partidos políticos coaligados». Asimismo establece que el acuerdo de coalición debe fijar el orden de prelación de los partidos para la conservación del registro en caso de que no se alcance el porcentaje de votos necesarios para que todos los miembros conserven el registro. En Guatemala, la ley determina que el total de votos obtenidos por la coalición se divide entre los partidos coaligados, para determinar si cada uno de ellos obtuvo el porcentaje de votos necesarios para mantener su registro.

Otras legislaciones prohíben expresamente esta mecánica; por ejemplo, la ley dominicana dispone que «a los partidos y agrupaciones que no hayan hecho pacto de alianza o coalición, no podrán sumárseles los votos para los fines de una elección aunque hubiesen presentado los mismos candidatos».

En Argentina, el tema no está regulado expresamente. Córdoba tampoco ha previsto dicha maniobra electoral, sin embargo en ambos casos ha sido la Justicia quien ha dotado de legalidad a dichas “alianzas coyunturales”.

Un problema interesante que plantean tanto las alianzas, como las sumatorias de votos, cuando se trata de elecciones a cuerpos deliberativos, es la relacionada con la bancada o grupo parlamentario al que se incorporan los electos.

En algunos países, la legislación contempla expresamente la situación. El código mexicano dispone que terminada la elección y disuelta automáticamente la coalición, «los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición». Otra solución es la conformación de un grupo parlamentario representativo de la alianza (vgr. Argentina).

Esta solución resulta particularmente importante en los casos en que se toma en cuenta el número de integrantes de los grupos parlamentarios a los efectos, por ejemplo, de la asignación de cargos en el cuerpo colegiado.

En Córdoba, hemos visto como a través de la sumatoria de votos se han erigido en mayorías o primeras minorías, a los fines de la obtención de cargos, comisiones o simplemente su reconocimiento como tal. Sin embargo a pocos meses de la elección dichas coaliciones se desintegran o separan, sin que dicha realidad pueda ser reflejada en el pleno.

“La constitución de una alianza es una decisión de máxima trascendencia para un partido político, ya que

afecta directamente no sólo sus chances electorales, sino su propio perfil programático o ideológico”, (Delia Ferreira) razón por la cual debe legislarse de manera exhaustiva sobre el tema, evitando que sea la Justicia quien debe decidir sobre temas de profunda connotación política.

En la Ciudad de Villa María se ha legislado sobre el tema, los convencionales constituyentes de la Ciudad de Carlos Paz han logrado el consenso necesario para incluir la prohibición expresa de dicho instituto. Córdoba no puede dejar de reflejar en sus normas todas aquellas medidas necesarias a los fines de conseguir la deseada transparencia en los actos electorales.

BOLETA ÚNICA:

Los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 16 a 19 inclusive del presente proyecto de Ley, incorporan el sistema de boleta única como medio de emisión del sufragio.

Las elecciones presidenciales del pasado 2 de octubre del corriente año, han dejado un sabor amargo a la hora de analizar la forma en que se llevó adelante el acto eleccionario.

Las miles de denuncias formuladas, que fueran receptadas no solo por los partidos políticos, sino también por las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, nuevamente ponen en debate la necesidad de implementar un nuevo sistema de votación.

En este punto los defensores del Voto electrónico se enfrentan a los defensores del voto presencial, sin que este resultado el dilema, tratamos de incorporar un sistema que garantice al menos un efectivo ejercicio del derecho al voto para los electores.

Todo ello sin perder de vista tres objetivos fundamentales:

- Garantizar el voto universal, libre, igual, secreto y directo
- Lograr una mayor participación ciudadana.
- Asegurar la transparencia de los actos comiciales.

En América Latina la mayoría de los países han receptado el sistema de voto único o denominado “australiano”

El sistema de boleta australiana emplea una papeleta o boleta oficial uniforme en el que se imprimen las opciones electorales por cargo. Los votantes registran su elección, en privado, marcando con una cruz alineado al nombre del partido o alianza para ubicarlo luego en el sobre y finalmente, en la urna. Este sistema fue adoptado por primera vez en Australia en 1856. El Estado de New York comenzó a utilizar este sistema en 1889. Podemos mencionar la avanzada legislación de Perú, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, entre otras, las cuales han logrado implementar el sistema de boleta única.

La discusión que se presenta en cada año electoral es sobre las posibilidades de implementar el denominado voto electrónico, considerando a este sistema como el fin de todo dilema, sin embargo debemos estar

alertas a una de las mayores objeciones que presenta y que ya ha sido analizado por los especialistas, quienes alertan “que el voto electrónico puede tener un impacto negativo al aumentar la brecha digital entre ricos – pobres, urbanidad – ruralidad, mujeres - hombres, jóvenes – mayores, consolidando desigualdades ya existentes y provocando nuevas en el nivel nacional entre los ciudadanos de las provincias y dentro de ellas”.

Asimismo el voto electrónico aumentaría exponencialmente los costos de organización del proceso electoral. Existen sistemas alternativos que no sólo bajarían aun más los costos de un sistema ya barato, sino que también tenderían a una reducción del clientelismo y a la absoluta destrucción del llamado ‘voto cadena’.

El presente proyecto propone como herramienta idónea la implementación del sistema de boleta única o australiano. Bajo este sistema, sólo la Justicia Electoral imprimirá las boletas únicas, las cuales no podrán ser distribuidas ni impresas por los partidos políticos antes del comicio.

Las boletas únicas - 450 por mesa, o sea una por elector - serán entregadas dentro de la urna a la autoridad de mesa quien entregará a cada elector una boleta que contenga todas las opciones. El elector deberá marcar con un círculo o una cruz en el cuarto oscuro. Dentro del cuarto oscuro figurarán colgadas en las paredes las listas completas de cada partido y alianza oficializada a fin de que el elector lea los nombres de los candidatos y decida marcando su opción en la boleta única.

La boleta única es ensobrada para su posterior introducción en la urna, a los fines de resguardar el carácter de secreto del voto.-

El sistema australiano - aplicado en la mayoría de las democracias modernas, inclusive en todas las latinoamericanas - baja exponencialmente los costos de impresión de boletas, impide que los partidos distribuyan papeletas influyendo en la decisión del elector o promoviendo el voto cadena, y, rompe con los efectos negativos de la ‘sábana horizontal’.

Hemos tomado en cuenta los antecedentes de Perú, Bolivia, Panamá, Ecuador y Costa Rica, los cuales han regulado de manera exhaustiva sobre la boleta o papeleta única, a ellos nos remitimos a los fines de comprender el alcance y la necesidad de su implementación.

CAMPAÑA ELECTORAL:

El artículo 11 del presente proyecto de Ley recepta conceptos y principios imperantes en materia electoral, los cuales deben regir para toda contienda que se encuadre en las directrices que da el propio artículo 46 bis, y que se encuentra regulado en el Código Electoral Nacional, así como también en Perú, Bolivia, Costa Rica, Chile, entre otros y que han servido de fuente al momento de llevar adelante el estudio del instituto que nos ocupa.

Además de conceptualizar a la “Campaña Electoral”, es necesario acotar la misma en el tiempo, según sea elección para Legisladores provinciales, miembros

del Tribunal de Cuentas, Convencionales Constituyentes o Gobernador y Vicegobernador de la Provincia.-

Además de su regulación temporal, y en consonancia con la legislación comparada, se ha contemplado la publicidad de aquella, para evitar abusos y manejos desmedidos de quines generalmente acceden a los medios de comunicación.-

Para evitar justamente la confusión del electorado, hemos tomado la fuente de España y Canadá, los cuales llegan incluso a prohibir de manera absoluta la publicidad de actos de gobierno, ya que es público y notoria que la misma se intensifica en periodos electorales, llegando a confundir al electorado quien ve condicionado su voto ante la inauguración de una ruta.

La iniciativa puesta a consideración de mis pares, incorpora la prohibición absoluta de llevar adelante cualquier tipo de publicidad de los actos de gobierno del partido gobernante, evitando de esta manera la publicidad electoralista, la cual se ve solapada con inauguraciones de caminos, escuelas, etc. confundiendo al electorado.

En Canadá, por ejemplo, rige la suspensión de toda la publicidad oficial durante las elecciones generales, desde la convocatoria a los comicios hasta la asunción del nuevo gobierno. Sólo se permite en los casos en que existan obligaciones legales de informar, peligros a la salud pública, seguridad o medio ambiente, o cuando se trate de publicaciones de avisos de empleos (Ver Communications Policy of the Government of Canada).

En el mismo sentido en España, la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional prohíbe la realización de campañas entre el llamado a elecciones y el mismo día de la votación, con excepción de las campañas relacionadas “con la información a los ciudadanos sobre la inscripción en las listas del censo electoral” o “las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.-

Tomamos además un instituto ya consagrado en la ley de radiodifusión, el que recientemente ha sido reglamentado por el Gobierno nacional y que contempla la posibilidad de avanzar en publicidad televisiva, radial y escrita gratuita.

En este punto se limita la misma a los diez días anteriores a la finalización de la campaña electoral, en un total de hasta 10 minutos diarios en el caso de radio y televisión, además de poner en cabeza del Poder Ejecutivo provincial el deber de reglamentar dicha norma de manera tal que garantice la distribución equitativa de la publicidad.-

El debate obligatorio se convierte en materia esencial e imprescindible en toda campaña política, la cual debe educar e informar al electorado a través de herramientas televisivas que ponen al acceso de todos las propuestas y ejes de campaña.

La experiencia de Córdoba frente a las elecciones del 2 de septiembre del año 2007 ha generado la necesidad de regular sobre el tema.-

AUTORIDADES DE MESA: CAPACITACIÓN Y COMPENSACION.

El artículo 13 y 14 de la presente ley garantizan la presencia de autoridades de mesa capacitadas en cada acto electoral.

La valoración del tiempo de cada autoridad, sin dejar de tener presente el carácter de carga cívica de su función, además de una efectiva capacitación la cual está en manos de órganos idóneos, nos inducen a pensar que la realización del comicio no presentará los problemas que existieron en las últimas elecciones provinciales y que llevaron a un descrédito generalizado de un acto trascendente para nuestro sistema democrático.-

En este punto la experiencia a nivel nacional, luego de su incorporación en el Código Electoral Nacional ha disminuido los niveles de deserción de aquellos ciudadanos que han sido sorteados para ejercer tan digno cargo.

TRANSFUGUISMO:

El artículo 23 de la presente ley incorpora y regula las sanciones que corresponden al autor del denominado “transfuguismo”, figura que ha tomado envergadura atento su reiteración dentro de los ámbitos políticos.

Acceder a un cargo político en representación de un partido político y cambiarse a otro antes o al poco tiempo de iniciar funciones es tema conocido en la República Argentina. Córdoba no escapa a ello.

La infidelidad partidaria ha merecido sanciones y rechazos no solo por la sociedad en su conjunto, sino que encontramos altos tribunales de justicia de países latinoamericanos que cuestionan tales prácticas. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha recomendado a través de una reciente resolución, a todos los políticos electos a cargos de representación popular a mantenerse en las filas de la fuerza por la que se postularon. “La soberanía del voto popular es ejercida para sufragar candidatos partidarios, no individuales”, advirtió el TSE.

El fallo luego fue ratificado por el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) de dicho país.

A raíz de ese fallo se encuentra con media sanción del Congreso, un proyecto de ley que sanciona con la pérdida de la banca, al político que asumiendo por un partido político, se enrola en otro, durante la vigencia de su mandato. A este ejemplo debemos mencionar los existentes en Perú, Ecuador y Costa Rica, los cuales sancionan con la pérdida de la banca a los responsables y autores del engaño a un electorado que vota a un candidato de un partido político, cuya ambición es mas importante que su compromiso con la sociedad.

Tradicionalmente en Argentina, la clase política cambia sin mayores trámites legales, de partido tras una

elección. Generalmente migran a grupos aliados al gobierno de turno, porque así mantienen su influencia, tienen mayores posibilidades de conseguir presupuestos oficiales para sus proyectos y puestos para sus simpatizantes.

El resonante caso de Eduardo Lorenzo "Borocotó", y su polémico traspaso al oficialismo después de haber ganado una banca en la Legislatura porteña por el partido de Mauricio Macri (Pro), ha dado lugar a un sinnúmero de proyectos que tratan de impedir dicha práctica.

Según el análisis de Sergio Berensztein (Encuestadora Poliarquía), los cambios de colores políticos no son nuevos, sino que se han dado en toda la historia política del país. "El fenómeno de la borocotización no es nuevo en la Argentina. En tal caso, hoy se ve con mayor exageración y los medios lo ponen más en evidencia. Pero, a decir verdad, juzgar sólo a Borocotó por este caso sería injusto, cuando vemos en la historia argentina que ya hubo transfuguismo político desde la época de Perón, Menem y Alfonsín",

La falta de recepción en nuestro sistema normativo de una sanción a dicho fenómeno, no implica automáticamente que se trate de un escenario normal y aceptable para una democracia como la de la Argentina. Por el contrario, demuestra un escenario político deteriorado a tal extremo, que las ideologías han pasado al olvido.

La existencia de este fenómeno de manera habitual entre nuestros representantes, revela con mayor claridad el deterioro en aumento de los partidos políticos, la ausencia de ideas fundacionales y la imposición de candidatos cargados de personalismo y carisma. Atrás de eso, no hay nada.

La presente iniciativa tiende a la sanción de dichas prácticas, imponiendo la pérdida de la banca para la cual fue electo el candidato, debiendo avanzarse en la proclamación del suplente según lo prescribe la Constitución Provincial.

INTERNAS ABIERTAS Y SIMULTÁNEAS:

El instituto de internas abiertas fue utilizado en nuestro País a tenor de la Ley 25.611, la cual modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, Número 23.298, incorporando la obligatoriedad de utilizar el mecanismo de democracia interna de los partidos políticos de manera simultánea para ellos, con la posibilidad de garantizar el voto tanto a afiliados como a ciudadanos independientes.

Debemos legislar sobre este proceso trascendental para la vida interna de los partidos políticos, reclamando de éstos la efectiva vigencia de la democracia interna, optimizando el control de los recursos destinados a financiar las campañas internas, así como también garantizar y fomentar un espacio de participación de la ciudadanía, la cual en el caso de ser independiente, desconoce los candidatos, fechas, etc, de dichas elecciones internas, motivos que nos llevan a modificar la Ley Or-

gánica de Partidos Políticos en el sentido propuesto por el artículo 26 del presente proyecto de Ley.-

Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de Ley es que solicito de mis pares la aprobación del mismo.-

Dante Rossi.

PROYECTO DE LEY - 0404/L/08

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1.- Incorporase el artículo 49 bis de la Ley 8767 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Desde los seis (6) días anteriores a la iniciación del comicio y hasta tres (3) horas después de su finalización, queda prohibida la difusión, publicación, comentarios o referencias, por cualquier medio, de los resultados de encuestas electorales o proyecciones sobre el escrutinio."

Artículo 2.- Incorporase el artículo 49 ter a la Ley 8767 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Entre el día de la convocatoria y el de la celebración de las elecciones se aplica el siguiente régimen de publicación de encuestas, sondeos y estudios de opinión electorales:

a) Denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada o de la persona física que haya realizado el sondeo, así como de la que haya encargado su realización.

b) Características técnicas del sondeo, que incluyan necesariamente los siguientes extremos: costo total del estudio, sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo.

c) Texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas.

d) Los medios informativos que hayan publicado o difundido un sondeo, violando las disposiciones de la presente Ley, están obligados a publicar y difundir en el plazo de tres días las rectificaciones necesarias, anunciando su procedencia y el motivo de la rectificación, utilizándose a estos fines el mismo espacio o página en la que se haya publicado dicho estudio de opinión.

Artículo 3.- Incorporase el artículo 49 quater a la Ley 8767 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Los medios informativos que no cumplieren, por cualquier causa, con lo prescripto en los artículos 49 bis y 49 ter de esta Ley serán pasibles de una multa del treinta (30) al cincuenta (50) por ciento de:

El valor total del centimetraje de publicidad de un día, correspondiente al medio en que se hubiere publicado la encuesta, cuando se tratase de un medio gráfico;

El valor total de los minutos de publicidad de un día, correspondiente al medio en que se hubiere difundido la encuesta, cuando se tratare de un medio de radio-difusión;

El valor total de los segundos de publicidad de un día correspondiente al medio en que se hubiere difundido, la encuesta, cuando se tratare de un medio de teledifusión.

El tribunal con competencia electoral en la Provincia de Córdoba conoce de las cuestiones que suscite la aplicación de la presente Ley e impone las correspondientes sanciones.

El producido por las multas antes mencionadas serán destinadas a campañas de información y educación democrática a cargo del tribunal con competencia electoral de la Provincia de Córdoba.

Artículo 4.- Queda derogada toda disposición que se oponga a la presente.

Artículo 5.- De forma.

Ana Dressino, Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Alfredo Cugat, Alicia Cargnelutti, Alejandra Matar, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.

FUNDAMENTOS

Se propone la aprobación del presente proyecto a fin de atender una arista de un tema de gran actualidad e importancia para el régimen democrático como lo es la difusión y publicación de sondeos de opinión y, en particular, la de las llamadas “encuestas a boca de urna” o “exit polls”.

En todo el mundo es esta una problemática esta siendo debatida intensamente. Lograr el equilibrio entre el ejercicio libre de los derechos políticos y la libertad de expresión y de información, parece ser el desafío en el que se encuentran inmersas todas las democracias modernas, ante el enorme avance de las tecnologías de información así como de los medios masivos de comunicación.

Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos advierte que “la formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información. Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para

votar”.

Del mismo modo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido en el Caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica de 1987, que los dos derechos están interrelacionados y que la libertad de expresión es una de las “condiciones” necesarias para “asegurar la libre expresión de opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo”. Sin embargo, ha reconocido que en ciertas circunstancias ambos derechos pueden entrar en conflicto. Y que puede ser necesario establecer ciertas restricciones – que en otras situaciones serían inaceptables – sobre la libertad de expresión, para asegurar la libertad de los ciudadanos en sus decisiones. La Corte ha postulado que – al balancear ambos derechos – los Estados miembros tienen un margen de apreciación.

Conceptualmente, una encuesta es una técnica de investigación social que permite conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario que se aplica a un reducido y representativo grupo de sus integrantes al que se denomina “muestra”. Los sondeos de boca de urna son encuestas conducidas el mismo día de las elecciones para mostrar cómo la gente ha votado, y pudiendo, además, sugerir el resultado final de los comicios.

Las encuestas de opinión cumplen importantes funciones en las sociedades modernas. En primer lugar, informan sobre lo que piensan los hombres y mujeres de un lugar determinado y brindan herramientas para la toma de decisiones, tanto por parte de los políticos y funcionarios públicos como de los ciudadanos. Pero además, las encuestas pueden contribuir al control de la autoridad al someter a los políticos y a las medidas de gobierno al examen de la opinión pública. Durante las elecciones, además, los sondeos de boca de urna sirven para que los ciudadanos, al informarse por otras vías, puedan fiscalizar a las autoridades y exigirles explicaciones a ellas y a las empresas encuestadoras en caso de variaciones en los resultados.

Existe, en este sentido, una gran discusión con respecto al uso de las técnicas estadísticas como forma de manipulación de la opinión pública o, incluso, como una técnica de campaña proselitista disfrazada de estudio científico.

Se ha sostenido que la manipulación de los sondeos de opinión influye indebidamente generando diversos efectos en el electorado. Se sostiene, por ejemplo, que la difusión de las mediciones puede favorecer al candidato que marcha en primer lugar (bandwagon effect), o que pueden hacer crecer a su inmediato perseguidor en desmedro de otras alternativas (voto táctico o voto útil).

El investigador finlandés Pertti Suhonen lo explica de esta manera: “las encuestas de opinión son como esos espejos de una cara. Cuando (con creciente frecuencia) los medios publican noticias acerca de investi-

gaciones que rastrean la opinión de los ciudadanos, colocan un espejo enfrente de la gente. Las noticias ofrecen entonces un retrato en gran escala de la población y sus subgrupos. Comparándose a sí mismos con ese retrato, la gente construye sus propias identidades y fortalece o quizá coteja sus aptitudes y opiniones".

En relación a este fenómeno es que gran cantidad de países han regulado legalmente la publicación de encuestas electorales: Bolivia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Eslovaquia, Francia, Israel, Italia, entre otros, han establecido diferentes plazos de prohibición de su difusión que van desde un día previo al comicio, como en el caso de nuestro país, hasta treinta, como el caso de Luxemburgo. Algunos de estos países, además, exigen publicar distintas especificaciones técnicas conjuntamente con la difusión de los sondeos, como tamaño de la muestra, margen de error, etc.

Incluso algunos medios de comunicación han optado por autorregularse en cuanto a la publicación de sondeos. Un claro esto se encuentra en la BBC (Corporación Británica de Radiodifusión), uno de los medios de comunicación más prestigioso, que cuenta con claros lineamientos internos para la elaboración de informes sobre encuestas de opinión y la publicación de sondeos de boca de urna. Entre otras cuestiones, las pautas de la BBC incluyen: no encabezar una noticia simplemente con el resultado de la encuesta; contextualizar los resultados en relación con las tendencias y no publicar encuestas de opinión el día de las elecciones hasta el cierre de los comicios, y, en el caso de elecciones europeas, hasta el cierre de los comicios en toda la Unión Europea.

En el caso específico de las "bocas de urna" se aplican distintas restricciones legales sobre su publicación, ya que algunos países vedan la difusión de estos resultados hasta que se hayan cerrado los comicios o hasta cierto tiempo después de que se hayan cerrado. Los plazos, nuevamente, varían de acuerdo al país. En este caso, las razones que se esgrimen tienen que ver con dar herramientas para garantizar la tranquilidad del acto electoral, evitar las tensiones que podrían provocar las informaciones contradictorias, prevenir que los electores se confundan con resultados que luego podrían cambiar o que resultados no oficiales influyan en las decisiones de los electores que aún no han votado.

El Consejo Europeo, por ejemplo, recomienda que los Estados miembros limiten la difusión de los resultados hasta que hayan cerrado los comicios en todo el país.

En 2005, nuestra Corte Suprema de Justicia analizó la validez de una ley que limita temporalmente la difusión de encuestas preelectorales y prohíbe la divulgación de encuestas sobre el cierre de los comicios. La decisión versó sobre el artículo 5º de la ley 268 de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que "desde las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la iniciación del

comicio y hasta tres (3) horas después de su finalización, queda prohibida la difusión, publicación, comentarios o referencias, por cualquier medio, de los resultados de encuestas electorales".

En cuanto a la prohibición de la difusión de las encuestas de boca de urna, la Corte Suprema sostuvo que la norma busca evitar que se altere el acto electoral antes de su finalización y garantizar el derecho de quienes aun están votando. "La prohibición de las tres horas posteriores al cierre del comicio busca evitar la reivindicación de ganadores en base a datos que luego podrían resultar erróneos, o que para el caso de resultar ciertos, puedan influir indebidamente al electorado", dijo el tribunal. Además de preservar a los votantes de las influencias de las encuestas, la norma aspira a evitar las tensiones "que puede generar informaciones contradictorias, como así también la confusión entre información real oficial y las meras especulaciones, que a la postre sólo sirven para dar menor credibilidad a la información oficial final si contradicen los resultados de boca de urna. Por esas razones, la Corte concluyó en que la "brevísima" limitación a la difusión de bocas de urna no violaba la libertad de expresión. "La importantísima función que la prensa cumple en el desarrollo del proceso electoral no se ve afectada por aquella limitación, mucho más si se tiene en cuenta que la cobertura de las elecciones no puede confundirse con la de una carrera de caballos o un partido de fútbol en cuanto a la importancia o necesidad de la "instantaneidad" en la transmisión del dato", opinó uno de los jueces en su voto.

En este sentido es que nuestro Código Electoral Nacional ha incorporado a su artículo 71, el inciso h, que prohíbe: "Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre".

Para finalizar es pertinente citar a la Corte Suprema de la República de Colombia, la que al rechazar una solicitud de inconstitucionalidad sobre una norma similar sostuvo "es evidente que la divulgación de encuestas y proyecciones sobre el comportamiento electoral el día de las elecciones puede interferir el desarrollo normal y espontáneo del respectivo certamen y dar lugar a equívocos o informaciones que desorientan o desalientan a los votantes. El día de las elecciones en el que los ciudadanos ejercen secretamente su derecho al sufragio y se define el rumbo democrático del país, deberán acallarse todas las voces que no sean la voz del pueblo".

Por todo esto es que recomendamos la aprobación de este proyecto de ley.

Ana Dressino, Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, Alejandra Matar, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Desde la convocatoria a elecciones y hasta finalizado el comicio, el Gobierno de la Provincia, no podrá realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto. Asimismo no puede promocionarse candidatura alguna con motivo o en ocasión de actividades oficiales. Queda prohibido, en este periodo, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la publicidad de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos.

Artículo 2.- Quedan exceptuadas de la disposición anterior las campañas relacionadas con la información a los ciudadanos sobre el proceso electoral o las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.

Artículo 3.- Los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial o Nacional que aspirasen a ocupar cargos públicos electivos deberán solicitar licencia a dichos cargos desde el momento de la oficialización de las listas que los contengan como candidatos.

Artículo 4.- Quienes autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación a la prohibición del artículo 1º de la presente Ley serán pasibles de inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos.

Artículo 5.- De forma.

Ana Dressino, Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Alfredo Cugat, Alicia Cargnelutti, María Matar, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.

FUNDAMENTOS

La presente ley pretende regular un aspecto de la publicidad institucional del Estado que es un elemento más de la comunicación pública que sirve para intercambiar y compartir información de utilidad para los ciudadanos.

La comunicación es indispensable en la actividad de las instituciones públicas dado que, por un lado, es necesario para el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas y porque además contribuye a construir una imagen de eficacia, credibilidad y coherencia de dichas instituciones.

Por otra parte es preciso que exista una separación clara entre la publicidad política vinculada a los procesos electorales, la publicidad que desarrollan las instituciones públicas con el objetivo de promover y defender

los valores de la sociedad como la justicia o la seguridad y la publicidad de carácter meramente administrativo, que cumple la función de comunicación pública.

La publicidad oficial no debe promover -explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión.

Diversos organismos han manifestado la necesidad de otorgarle un marco legal a la utilización de la publicidad oficial, como la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Relatoría para la libertad de Expresión, en su informe del cuarto trimestre de 2006, al abordar el capítulo argentino, pidió al Congreso Nacional que avance en legislar sobre la materia.

En el mismo sentido, La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en su documento "Principios básicos para la regulación de la Publicidad Oficial" se refirió a la necesidad de que se dicte una legislación clara y específica a nivel nacional y local que establezca un marco sólido para la producción, distribución y control de la publicidad del sector público. Sostiene esta asociación que una buena opción -establecida en leyes de varios países- es fijar normas que regulen la suspensión de la publicidad por un tiempo razonable durante las campañas políticas y los comicios, salvo en casos en los que exista un deber legal de informar o situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencia deben estar bien definidas para evitar posibles abusos. Además sugiere un plazo de 90 días antes de la fecha fijada para los comicios, que es el tiempo que otorga el Código Nacional Electoral para realizar las campañas presidenciales y el plazo mínimo para realizar la convocatoria a elecciones.

La mayoría de las regulaciones comparadas tiene, de algún modo, prevenciones para que la publicidad estatal no sea utilizada como propaganda encubierta. Por ejemplo, la Política de Comunicaciones del Gobierno de Canadá prohíbe contratar publicidad oficial en apoyo de un partido político y rige la suspensión de toda la publicidad oficial durante las elecciones generales, desde la convocatoria a los comicios hasta la asunción del nuevo gobierno. Sólo se permite en los casos en que existan obligaciones legales de informar, peligros a la salud pública, seguridad o medioambiente, o cuando se trate de publicaciones de avisos de empleos. En la provincia de Ontario, en el mismo país, la ley establece que los avisos del gobierno no deben tener como propósito crear una imagen positiva del partido gobernante o generar una impresión negativa de una persona o entidad crítica del gobierno (2004). En España, la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional prohíbe la realización de campañas entre el llamado a elecciones y el mismo día de la votación, con excepción de las campañas relacionadas "con la información a los ciudadanos sobre la inscripción en las listas del censo electoral" o "las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del

interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos” además impide específicamente contratar campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno. En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que “la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”.

En períodos de campañas electorales los avisos gubernamentales pueden, en particular, confundirse o ser usados con fines de propaganda partidaria. Para evitarlo, es conveniente que se dispongan mecanismos que impidan el uso propagandístico de la publicidad oficial.

Es por todo esto que recomendamos la aprobación de este proyecto de Ley.

Ana Dressino, Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Alfredo Cugat, Alicia Cargnelutti, María Matar, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.

**PROYECTO DE LEY - 0911/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Período Electoral. La campaña electoral tendrá vigencia a partir de los treinta (30) días anteriores y corridos a contar desde la fecha fijada para la elección y no podrá extenderse después de las cuarenta y ocho (48) horas previas a la iniciación del comicio.

Artículo 2.- Franja Electoral. Los canales de televisión y emisoras radiales de libre recepción que emitan su programación desde el territorio provincial, deberán destinar gratuitamente, durante los diez (10) días finales de la campaña electoral, veinte (20) minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral, divididos en dos franjas o segmentos de diez (10) minutos cada uno, uno a emitirse en horario matutino y otro a emitirse en horario vespertino.

A cada Partido Político le corresponderá un tiempo proporcional a los votos obtenidos en la última elección a Gobernador y Vicegobernador, o en caso de que no hubiere participado en ellas, tendrá el mismo tiempo que le corresponda al partido político que hubiere obtenido menos votos.

Los canales de televisión y emisoras de radio sólo podrán transmitir propaganda electoral en los términos previstos en el presente artículo.

El Estado Provincial compensará a los canales de televisión y emisoras de radio de libre recepción provinciales con una asignación equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la pauta publicitaria ocupada.

Artículo 3.- Prohibición de Encuestas. Queda

prohibida la difusión y publicación de resultados de encuestas de opinión durante el período oficial de campaña hasta el día siguiente a la fecha de la elección, siempre y cuando el resultado esté consolidado y no hubiera necesidad de elecciones complementarias.

Artículo 4.- Publicidad Institucional. Queda prohibida la emisión y difusión de publicidad institucional durante el período oficial de campaña hasta el día siguiente a la fecha de la elección, siempre y cuando el resultado esté consolidado y no hubiera necesidad de elecciones complementarias.

Queda prohibido, en este período, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de programas, planes o proyectos de gobierno de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda tener consecuencias en este sentido.

Asimismo, queda prohibida la manipulación de los programas de asistencia social con fines clientelares.

Se exceptúan las campañas que se realizan con el objetivo de promover, incentivar el derecho al sufragio, a la elección de representantes, sin proponer el apoyo explícito o implícito a determinada opción política-electoral.

Artículo 5.- Incumplimiento Partidario. El partido político que incumpliera los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en televisión, radio y medios gráficos, perderá el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones.

Artículo 6.- Incumplimiento de Persona Física o Jurídica. La persona física o jurídica que incumpliera los límites de emisión a la expresión política previstos en la presente ley, en medios gráficos, radiales y televisivos, será pasible de una multa de entre diez mil (\$) 10.000) y cien mil pesos (\$) 100.000).

Artículo 7.- Sanciones. La persona física o jurídica que explote un medio de comunicación que violare la prohibición establecida en el artículo 2º de la presente Ley, será pasible de la siguiente sanción:

1) Multa equivalente al valor total de los segundos de publicidad de uno (1) hasta cuatro (4) días, conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquél en que se produzca la infracción, si se trata de un medio televisivo o radial.

2) Multa equivalente al valor total de los centímetros de publicidad de uno (1) hasta cuatro (4) días, conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquél en que se produzca la infracción, si se trata de un medio gráfico.

Artículo 8.- Inhabilitación. Quienes incumplieran lo dispuesto en el Art. 4º de la presente Ley serán pasibles de inhabilitación de uno a diez años para ejercer cargos públicos.

Artículo 9.- Derogación. Queda derogada toda disposición que se oponga a la presente.

Artículo 10.- Reglamentación. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a la reglamentación de la presente, la que deberá hacer en el plazo de treinta (30) días a partir de la sanción.

Artículo 11.- De forma.

Alfredo Cugat.

FUNDAMENTOS

La presente ley pretende regular aspectos muy importantes en materia electoral, delicado tema que afecta el funcionamiento de la democracia.

Por medio de este proyecto, deseamos complementar la Ley Nº 8767 (Código Electoral Provincial).

Para nosotros esto no es un problema solamente técnico-jurídico. Es un problema sociológico, político, cultural, etc. que afecta a los ciudadanos en general.

En estos momentos, lo que está en crisis es la percepción de la ciudadanía sobre la utilidad del sistema político-electoral.

Una de las características persistentes en la cultura política argentina es la reticencia de los sectores políticos dominantes a introducir reformas institucionales profundas. En general, se observa un tipo de cambio cosmético, que más que modificar el sistema, se dirige a tranquilizar a la opinión pública. La respuesta de los sectores dirigentes ha sido dejar pasar el tiempo, con la esperanza de un aquietamiento de las demandas por cansancio ciudadano.

El caso argentino es un curioso ejemplo de una democracia sin instituciones sólidas. La democracia parece haberse consolidado, pero no ha evolucionado hacia formas poliárquicas (Robert Dahl), características de los países desarrollados, sino que se ha conformado una democracia delegativa (Guillermo O'Donnell) que pone en primer plano la necesidad de un urgente incremento en la calidad. Este mejoramiento de la calidad tiene que ver con una mayor accountability (rendición de cuentas) horizontal y vertical de los representantes y con un incremento de la eficacia del sistema judicial.

Las características del entramado institucional argentino han causado históricamente una baja calidad, coherencia y durabilidad de las políticas públicas; lo cual se combina para formar un sistema de escasa predictibilidad y bajos niveles de consenso intrasistema.

Córdoba atraviesa una crisis sistémica para cuya superación no existen atajos o soluciones parciales provistas por líderes cortoplacistas.

Hoy por hoy, el desafío consiste en crear una nueva relación entre Estado y sociedad, para lo cual es condición sine qua non una profunda reforma institucional. Esta nueva relación debe tener como propósito me-

jorar la calidad de las reglas que rigen el funcionamiento del sistema político argentino, de modo que sea más fuerte, inclusivo, justo y transparente. La resultante será una interacción más participativa entre las partes, donde la voluntad popular pueda ser traducida de manera más efectiva.

No puede haber transformación cierta y significativa alguna de la política sin una coalición política con voluntad reformadora, un Estado moderno que los lleve a cabo y una sociedad que los refrende por vía del consenso.

La democracia argentina se encuentra en un proceso de consolidación que presenta grandes desafíos a afrontar, entre ellos el de implementar una reforma política que vuelva a disminuir la brecha que separa a los representantes de sus representados, es decir, a reconstruir el vínculo de representación democrática.

En el caso de la reforma política, son los mismos políticos los que deben iniciar y llevar adelante el proceso transformador, por ello consideramos que se debe realizar una reforma desde lo posible, aunque sin perder de vista un horizonte estratégico de cambios mayores a conseguir mediante consensos sociales extendidos en el largo plazo.

La reforma política debe ser conducida a través de un enfoque consensuado e iniciada desde el interior del propio sistema político. Reforma “desde adentro” y consenso social son condiciones para garantizar cambios sistémicos y de largo plazo.

Ninguna reforma política puede estar dirigida a renunciar a la política o a destruirla. Ninguna reforma que se plantee debería apuntar a tener menos política, sino a una política mejor.

El núcleo de la reforma política debe ser la construcción de un sistema de responsabilidad claro y transparente. El objetivo es el mejoramiento integral del sistema; esto es, no es sólo los partidos, sino también de las instituciones políticas, de los mecanismos de financiación pública y de los dispositivos de participación ciudadana.

Una verdadera reforma debe llegar a ser una nueva conciencia política, una nueva comprensión de los problemas y de las soluciones y que esto hace necesario crear un apoyo transversal que involucre no sólo a los partidos políticos y a los políticos, sino también a los distintos actores sociales. Surge como necesaria una visión global, la idea de que la reforma no puede ser una serie de indicaciones y sugerencias, sino que el cambio real sólo estará dado por la integralidad del proceso. Sin embargo, no puede esperarse que la verdadera reforma se produzca de un instante para otro y de una vez y para siempre.

La consideración de una reforma necesaria pero al mismo tiempo posible.

Una de las principales funciones que cumplen

las campañas electorales es la de generar legitimación para el sistema político. La segunda función importante es la de proporcionar información a los electores. La tercera misión que cumplen las campañas es la de persuadir al electorado para que se incline por una determinada opción política al emitir su voto.

Planteamos la necesidad de volver a privilegiar la faz arquitectónica de la política de la que hablaba Marcel Prelot y no sólo la faz agonal de la política.

Es necesario buscar fortalecer las instituciones y a la ciudadanía en general.

Para nosotros, resulta fundamental reducir los tiempos y los costos de las campañas electorales.

Con el Art. 1° se busca la limitación del período oficial de campaña electoral. En este proyecto, limitamos el período a treinta (30) días. Como antecedente, podemos citar en el mismo sentido a la ley electoral israelí.

En el artículo 3° planteamos la prohibición de publicar los resultados de encuestas de opinión durante el período oficial de campaña y durante la veda electoral hasta el fin del escrutinio provisorio.

Los efectos de “vagón de cola” (bandwagon) y del “candidato no favorecido” (underdog) son sólo algunas de las hipótesis que describen los efectos posibles de la publicación en los medios de difusión de las encuestas de opinión en épocas de elecciones.

El primero de estos efectos, el “vagón de cola”, afirma que al conocerse los resultados de las encuestas, el público indeciso o independiente suele volcarse al carro del vencedor. Esto perjudicaría notablemente al candidato que marcha en segundo lugar. La segunda hipótesis señala lo contrario, que muchos se volcarán hacia el candidato menos favorecido, perjudicando así al que marcha primero, o simplemente, dejarán de votar, ya que perciben a la encuesta como la predicción de lo que realmente sucederá. Los investigadores no logran ponerse de acuerdo acerca de cuál de estos dos efectos actúa con más fuerza.

Porque estamos convencidos que la difusión de resultados de sondeos de opinión en períodos preelectorales y electorales son utilizados muchas veces como herramientas para captar votos y para modificar las opiniones, actitudes y conductas de los ciudadanos, sobre todo de los indecisos. Al respecto, hemos consultado más de 53 legislaciones a nivel internacional. Nosotros planteamos el silencio durante todo el período electoral, como ocurre en Turquía, Lituania, Singapur. Luxemburgo plantea el silencio durante el último mes; Sudáfrica durante las últimas 6 semanas, Corea del Sur 60 días antes de la elección.

Para nosotros, la opinión pública no puede ser reducida a la pragmática de las encuestas.

El propósito es impedir la confusión, neutralizar posibles impactos de datos publicados en decisiones individuales y contrarrestar el periodismo que trata a las elecciones como “carreras de caballo” y que se rige por encuestas, tendencia imperante a nivel mundial. Tam-

bién se busca impedir que los propios equipos de campaña utilicen resultados o tendencias que aparentemente les son favorables para captar votos.

Con el proyecto se busca la prohibición de las proyecciones electorales tempranas que muchas veces son engañosas y tendenciosas, que generan “guerras de encuestas, encuestadores y equipos” en el medio de una campaña electoral, que muchas veces ensombrecen las elecciones y provocan serios daños a la credibilidad de los medios, así como a la integridad de la administración electoral.

En este sentido, traemos a colación lo que afirman Rey Lennon y Piscitelli Murphy, cuando analizan la banalización de las campañas electorales; “cuando los medios de comunicación caen en lo que la literatura anglosajona ha bautizado como ‘carrera de caballos’, sólo interesa mostrar cómo se va perfilando la carrera hacia la presidencia, quién va primero, quién segundo, a cuántos ‘metros’ de distancia. Una cobertura más digna de la sección deportiva que de la política”.

Creemos que en el mediano plazo, este efecto de las encuestas de opinión tiende a generar mayor grado de desinterés en la elección y hacia la política en general. Autores como Ludolfo Paramio llaman a esto desafección política. Para Pipa Norris, “cinismo político”. Así, para Capella, “el centro del cinismo es la ausencia de confianza”.

También se busca prohibir las proyecciones electorales tempranas, las famosas “boca de urna”, que muchas veces fueron erróneas. Valen como ejemplos las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre de 2000, cuyas bocas de urna declararon al ganador de la contienda electoral al que luego resultaría segundo, en el mismo sentido, muchas boca de urna en algunas provincias y municipios argentinos en el año 1999, equivocaron a los vencedores, etc. En varios países latinoamericanos encontramos esta misma prohibición (ejemplo: Colombia).

Respecto del caso argentino, traemos a colación lo expresado por el periodista Pablo Mendelevich en el diario Clarín del día martes 26 de octubre de 1999: “Algo no funcionó bien el domingo (se refiere al domingo 24 de octubre de 1999, la aclaración es nuestra) con las encuestas en boca de urna en la elección de gobernador bonaerense. Los encuestadores que compiten por revelar qué hay adentro de las urnas antes de abrirlas se equivocaron por márgenes de entre 6 y 15 puntos. Cinco meses atrás, en Tucumán la prensa en su conjunto había confiado en encuestas en boca de urna para decir que Ricardo Bussi era el ganador. Un primer gran fiasco: al día siguiente se supo que Bussi había perdido en manos del PJ”.

Continúa Mendelevich: “Zambullida en las proyecciones provinciales, la TV sugirió el domingo que contar las mesas de a una –o de a diez o de a cien– frente a la luz pública es una antigüedad”.

Consideramos necesario alentar una vuelta a la

transparencia informativa.

En el Art. 4° se plantea la prohibición de emitir publicidad oficial (institucional, gubernamental, de gestión) durante el período oficial de campaña así como también durante la veda electoral hasta el fin del escrutinio provisorio. En el mismo sentido, queda prohibido, en este período, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento de programas, planes o proyectos de gobierno.

En tiempos de campaña permanente, muchos gobiernos utilizan la pauta oficial, la publicidad institucional como herramienta de acción política, intentando favorecer a los candidatos oficialistas, utilizando inauguraciones oficiales para pedir el apoyo, el voto al gobierno o a los candidatos del partido que rige los destinos del país, la provincia o el municipio. Es en este sentido que proponemos la prohibición de la emisión de publicidad oficial, para evitar la inducción del voto por parte del gobierno, que evidentemente cuenta con mayores recursos (económicos, técnicos, humanos, etc.) que los partidos políticos de la oposición.

Para el consultor político argentino, Hugo Haime, “el instrumental que se utiliza en la comunicación de gobierno no es técnicamente distinto al de campaña”.

También compartimos lo dispuesto en varios proyectos en tratamiento en esta Legislatura respecto de la propaganda electoral. Creemos necesario asegurar un acceso igualitario a las propaganda por radio y televisión, ya que son los medios más caros y los más decisivos, en esta era de videopolítica, al decir del politólogo italiano Giovanni Sartori.

Propiciamos la asignación de segmentos gratuitos de televisión y radio por igual a todos los partidos políticos registrados que están haciendo campaña electoral. El espacio gratuito sólo se dará exclusivamente a los partidos políticos. Consideramos que se debe brindar a los partidos políticos un horario gratuito electoral en todos los canales de TV y emisoras de radio. La franja electoral debería salir al aire simultáneamente en todos los canales de televisión y radio en dos horarios pautados previamente en horas del mediodía y de la noche.

La publicidad política está permitida sólo diez (10) días antes del día de la elección y los canales de televisión y las emisoras radiales están obligados a brindar veinte (20) minutos de aire gratis por día, divididos en dos franjas o segmentos de diez (10) minutos cada uno, uno a emitirse al mediodía y el otro a emitirse a la noche.

Esta es una práctica común en los países vecinos como Chile y Brasil. Brasil prohíbe la propaganda electoral en la televisión, garantizando a los partidos una franja diaria de publicidad gratuita durante la campaña electoral. Chile, por su lado, prohíbe la contratación en televisión abierta, en donde otorga la franja gratuita, pero es posible contratar propaganda electoral en radioemisoras, televisión por cable y prensa escrita. En Chile, la

llamada franja electoral gratuita consiste en que los canales de televisión de libre recepción deben destinar gratuitamente minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral, distribuidos en partes iguales a cada uno de los candidatos a Presidente de la República y en forma proporcional para el caso de elecciones de diputados y senadores.

En el derecho comparado latinoamericano, la regulación del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, específicamente para los casos de radio y televisión ha adquirido cuatro formas diferentes: una franja diaria gratuita (Brasil y Chile), un sistema combinado con acceso gratuito pero sobre todo con la posibilidad de contratar en forma privada espacios en los medios de comunicación (Argentina), ilimitado acceso pagado en forma privada (Guatemala, Honduras) y acceso pagado pero limitado (Costa Rica, Ecuador, Bolivia).

Con respecto a la fórmula de distribución de tiempos y espacios, consideramos que deben distribuirse por igual entre los partidos reconocidos oficialmente. La asignación de los espacios políticos será distribuida en partes iguales para todos los partidos políticos que compiten en la elección.

Lo que buscamos por medio de la presente es que la publicidad política sea emitida sin cargo para los partidos políticos, creando así igualdad de oportunidades para todos los actores políticos involucrados en la contienda electoral.

El tema de los medios de comunicación está ligado a dos principios democrático-electorales básicos: la equidad y el derecho a la información. Por una parte, todos los partidos deben tener la oportunidad de llegar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, con el objetivo de presentar sus candidatos, sus propuestas, sus programas electorales. Por otra parte, los electores deben tener la posibilidad de informarse adecuadamente acerca de las diferentes opciones electorales, como una base mínima para realizar una ‘elección informada’, como postula Goodwin-Gill.

El proyecto que se pone a consideración se inscribe en la necesidad de avanzar en la regulación del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación durante campañas electorales.

En suma, el proyecto que se pone a consideración se inscribe en los avances de la legislación vigente en la regulación del acceso a los medios de comunicación, incorporando una respuesta adecuada y equilibrada a uno de los aspectos centrales de una verdadera reforma política.

Creemos fervientemente en los partidos políticos como principales articuladores y aglutinadores de los intereses de la sociedad. En palabras de Zovatto, “desempeñan un papel fundamental en la función de la representación, la agregación y la canalización de los intere-

ses de la ciudadanía. Es innegable su importancia cada vez mayor para las funciones de gobierno, como también lo es la crisis de legitimidad que atraviesan”.

A pesar de lo descripto precedentemente, consideramos que la nominación para ocupar cargos electivos es potestad de los partidos políticos. En este sentido, el monopolio de los partidos políticos también está presente en la legislación de El Salvador, Panamá, Perú, Guatemala, Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Nicaragua y Uruguay.

Uno de los problemas que afectan a los partidos políticos y a los principios de representación y gobernabilidad del sistema democrático es el denominado transfuguismo, entendido éste como aquella forma de comportamiento en la que un individuo, caracterizado como representante del pueblo, democráticamente elegido, abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a engrosar las filas de otra (Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Universidad Complutense de Madrid).

El transfuguismo es un fenómeno que viene cobrando una importancia creciente en América Latina en los últimos años.

En este sentido, compartimos la opinión de Miguel Ángel Presno Linera: “la pretensión de asegurar al máximo la fidelidad partidaria es una exigencia consustancial al sistema representativo democrático”.

Para nosotros, el transfuguismo produce una modificación en la legitimidad otorgada por los electores.

En la práctica, el comportamiento del transfuga debilita el sistema de partidos, afecta la credibilidad del sistema político en su conjunto, deteriora la cultura cívica, distorsiona la representatividad surgida de las elecciones.

El especialista español Reniu y Vilamala, citado por Zovatto, plantea, entre otras cosas, que el transfuguismo constituye una especie de estafa política al ciudadano que ve modificada la expresión de su voluntad política.

En Brasil, por ejemplo, se planteó el concepto de “fidelidad partidista”, para obligar a los políticos a mantenerse en un mismo partido al menos durante una misma legislatura. En Perú se discute la necesidad de incorporar la figura del transfuguismo político como una falta que merece ser sancionada. En Argentina hay varios proyectos en el mismo sentido, incluyendo multas pecuniarias y la inhabilitación de entre cuatro a diez años a los que se cambian de partido. Los únicos países latinoamericanos que regulan expresamente el tema de los transfugas son Bolivia y Ecuador.

Para Lipset, los partidos son centrales y claves para el buen funcionamiento de la democracia.

En palabras de Zovatto, “hay que reformar las instituciones y las reglas, hay que crear ciudadanía, pero también hay que ayudar a cambiar, y para bien a la clase política. La sostenibilidad de la democracia, su profundización y consolidación, demandan el fortalecimiento e

institucionalización de los partidos políticos, no su extinción. Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos, no con outsiders, con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de mejorar su calidad, de hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, pero sobre todas las cosas, de reconectarla con la gente. Hay que poner fin, y de manera urgente, a este proceso perverso y absurdo de una política vaciada de sociedad y de una sociedad vaciada de política. Es urgente y prioritario construir ‘capital político’”.

Para concluir, traemos a colación las palabras de Sergio Berensztein: “El consenso y el compromiso de los actores implicados en la reforma política representa una condición sine qua non para el éxito del proceso, sin la cual hasta las reformas mejor diseñadas resultarán ino cuas o no pasarán de ser un conjunto de buenas intenciones”.

Las cuestiones que debe resolver el país, las provincias, los municipios no se reducen solamente a la ingeniería electoral, al financiamiento de los partidos o al reclutamiento de nuevos líderes.

Para Berensztein, incrementar la capacidad del Estado es un problema político, no sólo una cuestión de generar un marco de incentivos racional y adecuado.

Los sistemas electorales son andamiajes de varias dimensiones y no se puede analizarlos tomando aisladamente una de ellas.

En el actual contexto de crisis de legitimidad, se deben evitar aquellas reformas que por sus características contribuyan al debilitamiento de los partidos políticos, ya que esto sólo profundizaría aún más la crisis de gobernabilidad, de la que solamente es posible salir con partidos políticos sólidos.

En definitiva, los sistemas electorales y los experimentos de ingeniería institucional que con ellos se hace, reflejan el conflicto interpartidario e intrapartidario, los cuales se reflejan en el momento de decidir el mejor sistema electoral en las legislaturas. Pero lo más importante a tener en cuenta es que para que los sistemas electorales generen los resultados teóricamente esperados, en la práctica, deben estar arraigados en la sociedad que los vivencia.

Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Alfredo Cugat.

**PROYECTO DE LEY - 01674/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Refórmese la Ley N° 8767 (Código Electoral Provincial), con las modificaciones introducidas

por las leyes N° 8972 y 9105, conforme a las disposiciones que se establecen a continuación:

Artículo 2.- Modifíquese el artículo 39° el cual quedará redactado como sigue:

Requisitos para ser fiscal. Los fiscales o fiscales generales de los partidos políticos deberán saber leer y escribir, y ser electores de la sección electoral en que pretendan actuar.

Los fiscales no podrán votar en las mesas en que actúen salvo que estén inscriptos en ellas. Siempre que estén en la sección a la que pertenecen los fiscales podrán votar en el circuito donde fiscalizan. A los fines de que los fiscales puedan ejercer su voto se habilitará en cada lugar de votación, entre las mesas dispuestas una mesa específica donde, a los talonarios de Boletas Únicas, se le adicionarán Boletas Únicas complementarias. En ese caso se agregará el nombre del votante en la hoja del Registro, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa en que está inscripto.

Las mesas específicas a que hace referencia el párrafo anterior deberán escogerse entre las mesas habilitadas que tengan el menor número de electores empadronados. En caso de resultar la paridad de electores entre las mesas dispuestas se sorteará entre éstas a cual habrá de asignarse la mesa específica.

Los fiscales deberán utilizar para votar únicamente la Boleta Única complementaria habilitada para tal fin.

Artículo 3.- Modifíquese el artículo 42°, el cual quedará redactado como sigue:

Registro de los candidatos a oficializar en la Boleta Única.

Desde la convocatoria a elecciones y hasta cincuenta (50) días antes al acto electoral, los partidos políticos deben registrar ante el Juez Electoral Provincial las listas de los candidatos públicamente proclamados, quienes deben reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

Al momento de la inscripción de las listas de candidatos los partidos deberán proporcionar para su incorporación a la boleta única, además de la listas de candidatos, el símbolo o figura partidaria, así como la denominación que los identificará durante el proceso electoral. De igual modo la fotografía del candidato.

Dentro de los cinco días subsiguientes el Juez dictará resolución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos, así como del símbolo o figura partidaria, denominación, y fotografía entregada. En igual plazo asignará por sorteo el número de orden que definirá la ubicación que tendrá asignada cada partido, alianza o confederación de partidos en la boleta única, sorteo al que podrán asistir los apoderados de los aquéllos, para lo cual deberán ser notificados fehacientemente. La

misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, la que resolverá en el plazo de tres días por decisión fundada.

Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se correrá el orden de lista de los titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de ésta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.

En la misma forma se sustanciarán las nuevas sustituciones.

En caso de muerte o renuncia de cualquiera de los candidatos de la fórmula a Gobernador y Vicegobernador, los partidos políticos o alianzas electorales a las que pertenezcan, deberán registrar a otros candidatos en su lugar en el término de siete (7) días corridos.

En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de 72 horas para realizar los cambios o las modificaciones propuestas.

Vencido este plazo, en la Boleta Única se incluirá solo la denominación del partido dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.

Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.

Artículo 4.- Modifíquese el Título del Capítulo IV perteneciente al Título III "De los actos preelectorales" el cual quedará redactado como sigue:

De la Boleta Única

Artículo 5.- Modifíquese el artículo 43° el cual quedará redactado como sigue:

Características de la Boleta Única. La Boleta Única deberá integrarse con las siguientes características en su diseño y contenido:

a) Se confeccionará una Boleta Única para cada categoría de cargo electivo: una para el cargo de Gobernador y Vicegobernador, otra para Legisladores Provinciales por Departamento, otra para Legisladores Provinciales por Distrito Único, otra para Tribunal de Cuentas Provincial.

b) Para la elección de Legisladores Provinciales por Departamento, la Boleta Única contendrá el nombre y la fotografía del candidato titular de cada partido.

c) Para la elección de Legisladores Provinciales por Distrito Único, la Boleta Única contendrá únicamente el nombre de los primeros seis candidatos titulares. Las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes serán publicadas en el afiche de exhibición obligatoria al que se refiere el inciso 6 del artículo 46°;

d) No ser menor que las dimensiones 21,59 cm. de ancho y 35,56 cm. de alto propias del tamaño del pa-

pel oficio;

e) Los espacios en cada Boleta Única deberán distribuirse homogéneamente entre las distintas listas de candidatos oficializadas de acuerdo con las figuras o símbolos que los identifican. Las letras que se impriman para identificar a los partidos deben guardar características idénticas en cuanto a su tamaño y forma;

f) En cada Boleta Única al lado derecho del número de orden asignado aleatoriamente por sorteo para cada partido, alianza o confederación de partidos se ubicarán la figura o símbolo partidario y la denominación utilizada en el proceso electoral. Para la elección de Gobernador y Vicegobernador se intercalará, entre el número de orden asignado y la figura o símbolo partidario, la fotografía del candidato a la Gobernación.

g) Ser impresa en idioma español, en forma legible, papel no transparente, y contener la indicación de sus pliegues;

h) Estar adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del cual serán desprendidas. Tanto en este talón como en la Boleta Única deberá constar la información relativa a la sección electoral, circunscripción, número de mesa a la que se asigna, y la elección a que corresponde. Además en la Boleta Única deberá establecerse un casillero que permita individualizar el sexo del elector.

i) A continuación del nombre del candidato se ubicará el casillero en blanco para efectuar la opción electoral;

j) Prever un casillero propio para la opción de voto en blanco;

l) En forma impresa la firma legalizada del juez Electoral;

k) Un casillero habilitado para que el Presidente de mesa pueda firmar al momento de entregar la Boleta Única que correspondiere al elector.

Artículo 6.- Modifíquese el artículo 44º, el cual quedará redactado como sigue:

La Boleta Única complementaria a la que hacen referencia los artículos 39 y 100 deberán ser individualizadas con esta condición: formarán parte de un mismo talonario con las Boletas Únicas, y tendrán las mismas características de diseño y contenido que éstas.

La condición de complementaria se individualizará incluyendo dicha expresión sobre la Boleta Única destinada al efecto y en lugar visible de la misma.

El Juez Electoral hará publicar facsímiles de la Boleta Única correspondiente al cargo de Gobernador y Vicegobernador, Tribunal de Cuentas Provincial y Legisladores Provinciales por Distrito Único en dos medios de alcance provincial. El mismo facsímil junto al de las Boletas Únicas destinadas a los demás cargos se hará en dos medios con alcance en las secciones respectivas. La publicación se hará el quinto día anterior a que se realice el acto electoral.

En estas publicaciones se señalarán las características materiales con que se han confeccionado cada

Boleta Única, indicando con toda precisión los datos que permitan al elector individualizarla.

Para facilitar el voto de los no videntes, se confeccionarán plantillas facsímiles de cada Boleta Única en material transparente y alfabeto Braille, que llevarán una ranura en el lugar destinado al casillero para ejercer la opción electoral, que sirva para marcar la preferencia que se desee, sobreponiendo la plantilla a la Boleta Única. La plantilla llevará rebordes que permitan fijar la Boleta Única a fin de que cada ranura quede sobre cada línea, y será de un material que no se marque, en un uso normal, con el bolígrafo empleado por el elector. Habrá plantillas disponibles en cada lugar de votación donde funcionen mesas electorales, para su uso por los electores no videntes que la requieran.

Artículo 7.- Incorpórase como artículo 44º bis el cual quedará redactado como sigue:

Número de Boletas Únicas. En cada mesa electoral deberá haber igual número de Boletas Únicas que de electores habilitados. No se habilitarán en la mesa específica que corresponda más de un total de Boletas Únicas complementarias equivalentes al 20 % de los empadronados en el lugar de votación. En caso de ser insuficientes, los votantes mencionados en los artículos 39 y 100 deberán sufragar, siempre que se trate de la misma sección, en la mesa específica más cercana.

En caso de robo, hurto o pérdida del talonario de Boletas Únicas, éste será reemplazado por un talonario suplementario de igual diseño y con igual número de boletas donde se hará constar con caracteres visibles dicha condición. Tendrán serie y numeración independiente respecto de los talonarios de Boletas Únicas, además de casilleros donde anotar la sección, circuito y mesa en que serán utilizados. No se imprimirán más de un total de Boletas Únicas Suplementarias equivalentes al 5 % de los inscriptos en el padrón provincial, quedando los talonarios en poder exclusivamente del Juez Electoral quien los distribuirá en los casos que correspondan.

En el escrutinio parcial llevado a cabo por las autoridades de mesa el número de votantes deberá coincidir con el número total de Boletas Únicas utilizadas o de Boletas Únicas Suplementarias si fuera el caso y, si a la vez se tratase de una mesa específica, de Boletas Únicas Complementarias utilizadas.

Artículo 8.- Modifíquese el artículo 45º el cual quedará redactado como sigue:

Su provisión. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, adoptará las providencias que fueran necesarias para remitir con la debida antelación al Juez Electoral las urnas, formularios, sobres, Boletas Únicas, bolígrafos con tinta indeleble y sellos que éstas deban hacer llegar a los presidentes de mesa.

A tal fin el Juez Electoral informará al Poder Ejecutivo los modelos y la cantidad de Boletas Únicas, Boletas Únicas Complementarias y Boletas Únicas Suplementarias cuya impresión deberá ordenar, dentro del

plazo de cinco días de haber quedado firmes las resoluciones adoptadas conforme al artículo 42°.

Artículo 9.- Modifíquense los incisos 4, 5 y 6 del artículo 46° quedando redactados como sigue:

4. Sobres para el voto. Los sobres a utilizarse serán opacos.

5. Los talonarios de Boletas Únicas necesarios para cumplir con el acto electoral.

La cantidad de Boletas Únicas disponibles en cada mesa de votación no podrán superar el número de electores habilitados en ella.

6. Un afiche que contendrá de manera visible y clara las listas de candidatos propuestos por los partidos políticos que integran cada Boleta Única. Esté cartel estará oficializado, rubricado y sellado por el Secretario del Juzgado Electoral. El Juez Electoral hará fijar, al menos durante los diez días anteriores a la elección, carteles en lugares de afluencia pública con el facsímil de la Boleta Única utilizada en cada elección.

Se entregará a los partidos políticos un número de afiches a determinar por las Juntas Electorales.

Artículo 10.- Deróguese el inciso 4 del artículo 49°.

Artículo 11.- Modifícase el penúltimo párrafo del artículo 49°, el que quedará redactado como sigue:

Queda prohibida la publicación y/o difusión de resultado de encuestas en boca de urna o similares, durante el acto electoral y hasta tres horas posteriores a su culminación.

Artículo 12: Modifíquese el artículo 52° el cual quedará redactado como sigue:

Sufragio de las autoridades de la mesa. Los presidentes y suplentes a quienes corresponda votar en una mesa distinta a aquella en que ejercen sus funciones podrán hacerlo en la mesa específica mencionada en el artículo 39°. Al sufragar en tales condiciones dejarán constancia de la mesa a que pertenecen.

A los efectos de emitir su voto los presidentes y suplentes mencionados en el párrafo anterior utilizarán la Boleta Única Complementaria de conformidad con el artículo 44° bis.

Artículo 13.- Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo 61° quedando redactados como sigue:

4. A habilitar otro inmediato al de la mesa, también de fácil acceso, para que los electores marquen en cada Boleta Única la opción electoral de su preferencia en absoluto secreto.

Este recinto, que se denominará cuarto oscuro, no tendrá más de una puerta utilizable, que sea visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las demás en presencia de los fiscales de los partidos o de dos electores, por lo menos, al igual que las ventanas que tuviere, de modo de rodear de las mayores seguridades el secreto del voto.

Con idéntica finalidad colocará una faja de papel adherida y sellada en las puertas y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán las fajas que proveerá el Juez Electoral y serán firmadas por el Presidente y los fiscales de los partidos políticos que quieran hacerlo.

5. A colocar en un lugar visible, dentro del cuarto oscuro, el afiche mencionado en el inciso 6 del artículo 46° con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos políticos que integran cada Boleta Única de la correspondiente sección electoral, asegurándose que no exista alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras clases en aquéllas.

Artículo 14.- Modifíquese el artículo 65° el cual quedará redactado como sigue:

Carácter del voto. El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa formulando cualquier tipo de manifestación que importe violar tal secreto.

Artículo 15.- Modifíquese el artículo 73° el cual quedará redactado como sigue:

Entrega del sobre junto a la Boleta Única al elector. Si la identidad no es impugnada el Presidente entregará al elector un sobre abierto y vacío, firmado en el acto de su puño y letra. Junto con el sobre entregará una Boleta Única por categoría de cargo electivo también firmada en el acto de su puño y letra, en el casillero habilitado a tal efecto. La Boleta Única entregada debe tener los casilleros en blanco y sin marcar, y estar acompañada de un bolígrafo con tinta indeleble que permita al elector marcar la opción electoral de su preferencia.

Hecho lo anterior, lo invitará a pasar al cuarto oscuro a encerrar su voto en aquél.

Los fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar el sobre en la misma cara que lo hizo el presidente de mesa; en ningún caso podrán firmar la Boleta Única.

Si así lo resuelven, todos los fiscales de la mesa podrán firmar los sobres, siempre que no se ocasione un retardo manifiesto en la marcha del comicio.

Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán obligados a firmar varios, a los fines de evitar la identificación del votante.

Artículo 16.- Modifíquese el artículo 74° el cual quedará redactado como sigue:

Emisión del voto. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta, el elector colocará en el sobre la o las Boletas Únicas asignadas donde quedarán registradas su preferencias electorales y volverá inmediatamente a la mesa. El sobre cerrado será depositado por el elector en la urna. El Presidente por propia iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar que se verifique si el sobre que trae el elector es el

mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales y/o municipales, se utilizará un sólo sobre para depositar todas las boletas.

Los no videntes que desconozcan el alfabeto Braille serán acompañados por el presidente y los fiscales que deseen hacerlo, quienes se retirarán cuando el ciudadano haya comprobado la ubicación de las distintas opciones electorales propuestas por los partidos políticos en la Boleta Única y quede en condiciones de practicar a solas la elección de la suya.

Las personas que tuvieren alguna imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto oscuro, donde a solas con el ciudadano elector, colaborará con los pasos necesarios hasta la introducción del voto, en la medida que la discapacidad lo requiera.

Artículo 17.- Modifíquese el artículo 77º el cual quedará redactado como sigue:

Inspección del cuarto oscuro. El presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro a pedido de los fiscales o cuando lo estime necesario con el objeto de cerciorarse que funciona de acuerdo con lo previsto en los incisos 4, 5 y 6 del artículo 61º.

Artículo 18.- Deróguese el artículo 76º.

Artículo 19.- Modifíquese el artículo 100º el cual quedará redactado como sigue:

Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho horas, en cuyo momento el presidente ordenará que se clausure el acceso al comicio, pero continuará recibiendo el voto de los electores presentes que aguardan turno a quienes deberá darse ingreso al lugar de votación. Concluida la recepción de estos sufragios, tachará del padrón los nombres de los electores que no hayan comparecido y hará constar al pie el número de los sufragantes. Este número debe coincidir con el número de Boletas Únicas entregadas a los electores, conforme surge de la numeración correlativa del talonario de Boletas Únicas, y asentarse en el mismo padrón por categoría de cargo electivo. Asimismo asentará las protestas que hubieren formulado los fiscales.

Tratándose también de una mesa específica, en los casos previstos en el artículo 39º, se dejará constancia en el padrón del o de los votos emitidos en esas condiciones el cual debe coincidir con el número de Boletas Únicas complementarias utilizadas que también deberá quedar asentado en el padrón. Una vez clausurado el comicio, sobre las Boletas Únicas complementarias sin utilizar, se estampará el sello "SOBRANTE" y las firmará cualquiera de las autoridades de mesa.

Se contarán las Boletas Únicas sin utilizar para corroborar que coincidan con el número en el respectivo padrón de ciudadanos que "no voto" y se asentará en éste su número por categoría de cargo electivo. A continuación, al dorso, se le estampará el sello

"SOBRANTE", y las firmará cualquiera de las autoridades de mesa.

Luego se empaquetarán junto al talonario respectivo, al igual que las Boletas Únicas complementarias no utilizadas, en un sobre identificado al efecto, y previo lacrado, se remitirán al Juez Electoral provincial.

Artículo 20.- Modifíquese el artículo 82º el cual quedará redactado como sigue:

Procedimiento. Acto seguido el presidente de mesa, auxiliado por los suplentes, con vigilancia de las fuerzas de seguridad en el acceso y ante la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:

1.- Abrirá la urna, de la que extraerá todos los sobres y los contará confrontando su número con los talones utilizados pertenecientes a las Boletas Únicas más, si fuera el caso, los talones pertenecientes a las Boletas Únicas complementarias. El resultado deberá ser igual al número de sufragantes consignados al pie de la lista electoral, en caso contrario el resultado deberá asentarse en el acta de escrutinio. A continuación, se asentará en la misma acta por escrito y en letras, el número de sufragantes, el número de Boletas Únicas, y si correspondiere, el de Boletas Únicas complementarias que no se utilizaron.

2. Examinará los sobres separando, de la totalidad de los votos emitidos, los que correspondan a votos impugnados.

3. Practicadas tales operaciones procederá a la apertura de los sobres.

4. Luego verificará que cada Boleta Única esté correctamente rubricada con su firma en el casillero habilitado al efecto.

5. Leerá en voz alta el voto consignado en cada Boleta Única pasándosela al resto de las autoridades de mesa quienes, a su vez y uno por uno, leerán también en voz alta dicho voto y harán las anotaciones pertinentes en los formularios que para tal efecto habrá en cada mesa habilitada. Inmediatamente se sellarán las Boletas Únicas una a una con un sello que dirá "ESCRUTADO".

6. Los fiscales acreditados ante la mesa de sufragios tienen el derecho de examinar el contenido de la Boleta Única leída y las autoridades de mesa tienen la obligación de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo responsabilidad.

Si alguna autoridad de mesa o fiscal acreditado ante ella impugna de forma verbal una o varias Boletas Únicas, dicha impugnación deberá constar de forma expresa en el acta de escrutinio. En este caso la Boleta Única en cuestión no será escrutada y se colocará en un sobre especial que se enviará a la Junta Electoral para que decida sobre la validez de voto.

Si el número de Boletas Únicas fuera menor que el de votantes, indicado en el acta de escrutinio, se procederá al escrutinio sin que se anule la votación.

Son votos nulos:

a) Aquellos en el que el elector ha marcado más de una opción electoral por cada Boleta Única o no ha marcado ninguna;

b) Los que lleven escrito el nombre, la firma o el número de Documento Nacional de Identidad del elector;

c) Los emitidos en Boletas Únicas no entregadas por las autoridades de mesa y las que no lleven la firma del presidente de mesa o la autoridad de mesa en ejercicio del cargo;

d) Aquellos emitidos en Boletas Únicas en las que se hubiese roto alguna de las partes y esto impidiera establecer cuál ha sido la opción electoral escogida; o en Boletas Únicas a las que faltaren algunos de los datos visibles en el talón correspondiente fuera de la numeración correlativa;

e) Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones políticas, listas independientes o nombres de candidatos a los que ya están impresos;

f) Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral;

g) Si se encontraren por sobre, dos o más Boletas Únicas de una misma categoría de cargo electivo;

h) La ausencia de Boleta Única para el cargo respectivo.

La marca o cualquier otro signo colocado o repetido sobre la fotografía del candidato a la Presidencia es un voto válido a favor del candidato respectivo. La marca o cualquier otro signo colocado o repetido sobre el símbolo o figura partidaria, número de orden o denominación utilizada en el proceso electoral, también es un voto válido a favor de la lista respectiva.

El número de votos válidos será el resultado de restar los votos nulos a la totalidad de los votos emitidos.

Serán considerados votos en blanco solo aquellos que se manifiesten expresamente por dicha opción en cada Boleta Única.

La iniciación de las tareas del escrutinio de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las dieciocho horas, aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los electores.

El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo la vigilancia permanente de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar su cometido con facilidad y sin impedimento alguno.

Artículo 21.- Modifíquese los incs. 1) y 2) del artículo 83º los cuales quedarán redactados como sigue:

1) La hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de Boletas Únicas utilizadas y no utilizadas por cada categoría de cargo electivo y, si correspondiere, de Boletas Únicas complementarias utilizadas y no utilizadas, cantidad de votos impugnados, diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados en el registro de electores; todo ello asentado en letras y números;

2) Cantidad también en letras y números de los

sufragios logrados por cada uno de los respectivos partidos y en cada una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, y en blanco;

Artículo 22.- Modifíquese el artículo 84º el cual quedará redactado como sigue:

Guarda de Boletas Únicas y documentos. Una vez suscripta el acta referida en el artículo anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositarán dentro de la urna: las Boletas Únicas y las Boletas Únicas complementarias utilizadas, el sobre lacrado con las no utilizadas, los sobres utilizados, y un "certificado de escrutinio".

El registro de electores con las actas "de apertura" y "de cierre" firmadas, los votos impugnados se guardarán en el sobre especial que remitirá la junta electoral el cual lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se entregará al empleado postal designado al efecto simultáneamente con la urna.

Artículo 23.- Modifíquese el inciso 5 del artículo 93º el cual quedará redactado como sigue:

5. Si el número de ciudadanos que sufragaron según el acta de escrutinio coincide con el número de sobres remitidos por el presidente de la mesa, así como si el número de Boletas Únicas y Boletas Únicas Complementarias, cuando correspondiere, en la urna coinciden con el de los votantes. Esta verificación sólo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido político actuante en la elección.

Artículo 24.- Deróguese el inciso 6 del artículo 93º.

Artículo 25.- Modifíquese el artículo 97º el cual quedará redactado como sigue:

Recuento de sufragios por errores u omisiones en la documentación.

En casos de evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio consignados en la documentación de la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, el Juzgado Electoral Provincial podrá no anular el acto comicial, avocándose a realizar íntegramente el escrutinio con las respectivas Boletas Únicas remitidas por el presidente de mesa.

Artículo 26.- Modifíquese el primer párrafo del artículo 100º el cual quedará redactado como sigue:

Cómputo final. El Juez electoral sumará los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras consignadas en las actas a las que se adicionarán los votos indebidamente impugnados y declarados válidos, de los que se dejará constancia en el acta final, acordando luego un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.

Artículo 27.- Deróguese el artículo 102º.

Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Omar Ruiz.

FUNDAMENTOS

En las elecciones del 2 de septiembre y 28 de octubre de 2007, se impuso la "viveza criolla" por sobre la transparencia y la libertad de elección de los votantes. Electores y Candidatos, sufrieron las consecuencias de un sistema electoral de "boleta por partido" que la propia Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Política, calificó de "obsoleto y fuente de numerosos problemas".

Esta Comisión Consultiva de Expertos recomienda en su dictamen por decisión de siete (7) de ocho (8) de sus miembros, "adoptar la boleta única de sufragio (también llamada boleta australiana, ya que fue utilizada por vez primera en Australia), vigente actualmente en casi la totalidad de los países latinoamericanos, y cuyo diseño, impresión y distribución debería quedar exclusivamente a cargo del organismo electoral competente.

En este sentido, deberá considerarse la necesidad de completar tantas boletas únicas como elecciones de diferente jerarquía institucional se convoquen para una misma fecha. De esta forma, en el caso de que la elección fuese simultánea (provincial y municipal), deberán completarse dos modelos de boletas únicas: una para la elección de los partidos/candidatos provinciales, y otra para sus partes municipales.

Con este mecanismo se superarían las deficiencias diagnosticadas respecto del sistema actual y, al mismo tiempo, se daría respuesta al reclamo fundado de "desvincular" los tramos provinciales y municipales con el propósito de impedir el efecto arrastre y el efecto arrastre invertido, que desvirtúa la libre manifestación de la voluntad popular ciudadana.

La puesta en marcha de este sistema demanda, asimismo, poner atención a una cuestión insoslayable que habrá que completar legalmente, a saber: cuando la convocatoria a elecciones municipales y/o provinciales se realice de manera simultánea con la de los comicios nacionales, las boletas de sufragio a utilizar no coincidirán por responder a diseños diferentes. No obstante, con la correspondiente participación del organismo electoral local en el diseño y suministro de las boletas únicas, se estaría subsanando dicho inconveniente, toda vez que, en lugar de concurrir partidos y alianzas a la audiencia de oficialización de boletas de sufragios -cada uno con su propio modelo-, el organismo electoral local competente debería hacerse cargo de esa etapa del proceso electoral, procediendo a entregar las boletas en cantidades suficientes para cada mesa en la oportunidad procesal pertinente.

Entre las principales ventajas de este sistema, corresponde mencionar:

La disminución del gasto electoral, ya que se imprime un número de boletas apenas superior a la cantidad total de electores, suficientes para cubrir a todos los

votantes.

La Justicia Electoral se convierte en el garante de que la sociedad pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa.

No hay posibilidad de listas "colectoras", puesto que en la boleta única sólo puede ir un candidato por partido político o alianza, como manda la Constitución.

Pone fin a la distribución previa de boletas, situación que genera malas prácticas, entre ellas la del "voto cadena".

Por otra parte, una adecuada regulación de la boleta única demanda que los legisladores definan, de manera precisa, un número determinado de cuestiones entre las que destacan, por su importancia, las siguientes:

El nivel en cuyo ámbito se legislará sobre esta materia (Constitución Provincial, Ley electoral, etcétera);

La autoridad que tendrá a su cargo la impresión de las boletas;

El tipo de papel de seguridad que se utilizará para su confección, así como los Códigos de seguridad que se emplearán para evitar su falsificación;

La autoridad que tendrá a su cargo la aprobación final de las mismas; y

La autoridad responsable de su distribución.

Existe, asimismo, un conjunto de cuestiones más específicas que los legisladores deberían contemplar:

Garantizar que el papel no sea transparente, para que no se viole el secreto del voto;

Precisar quién determina, y con base en qué criterio, la cantidad de boletas que se deben imprimir;

Definir los requisitos necesarios en relación con las firmas o sellos, o bien firmas de las boletas; y

Establecer o no la numeración de las boletas.

Es importante, también, garantizar que las boletas únicas sean claras y de fácil comprensión para el elector, quien debe comprender, de manera rápida y con la mayor claridad, en qué tipo de elección vota (presidencial, legislativa, provincial, municipal, etc.) y por cuáles partidos y candidatos. Esta cuestión va unida a la del régimen del uso de los atributos partidarios, cuya finalidad es ayudar a los electores a identificar, con la mayor celeridad y certeza posible, a los partidos y candidatos.

Sobre este último punto, es de particular relevancia que los legisladores determinen quién es la autoridad competente, y con base en qué criterios (sorteo, etc.) se habrá de definir el orden de los partidos o candidatos en las boletas. Se trata de un punto fundamental, ya que el orden de presentación de los partidos y candidatos en la boleta puede influir en la selección del elector".

En este sentido, y, como mencionan los Senadores Nacionales S. Cabanchik, R. Giustiniani, C. Rossi y E. Sanz en los fundamentos de su proyecto sobre Boleta Única, un reciente informe de la Cámara Nacional Electoral pone de manifiesto con respecto al proceso electoral del pasado mes de octubre que: "no puede dejar de

señalarse los inconvenientes con que se enfrentaron muchos votantes, debido principalmente a nuestro sistema de múltiples boletas, es decir, una por cada uno de los partidos o alianzas intervinientes, lo que trae como consecuencia su proliferación y las dificultades que puede tener el elector en el momento de emitir su voto". Dicho informe concluye: "Creemos que ha llegado el momento de mencionar y reflexionar sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta única suministrada por el tribunal electoral, en la cual el votante marca la opción elegida y que, por otra parte, es el que se utiliza en nuestro país para los electores privados de libertad y para los argentinos residentes en el exterior".

Dentro de la Reforma Electoral, la "boleta única" es una pieza fundamental, que debe ser acompañada de la eliminación de las sumatorias de boletas, establecimiento de un piso electoral, profesionalización del control de la elección, promoviendo un sistema que reduzca la cantidad de partidos políticos en Córdoba y que consolide los suficientes para representar las distintas opciones político-electorales de los cordobeses y cordobesas.

La "boleta única o australiana" se aplica en todos los países de Latinoamérica (a excepción de Argentina y Uruguay) y Córdoba tiene la oportunidad de ser la primera Provincia Argentina en adoptarla.

¿Cómo funciona en la práctica?, se trata de una sola boleta (35 x 23 cm. aprox.) donde están todos los candidatos para cada categoría. El presidente de mesa la entrega a cada elector al momento de votar, éste ingresa con ella al cuarto oscuro, pone una cruz en su candidato, la guarda en el sobre, y la coloca en la urna.

¿Qué ventajas tiene? a) El Estado garantiza que la gente pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa, impidiendo así el robo de boletas dentro del cuarto oscuro, b) Desaparecen las "listas colectoras", ya que sólo puede ir un candidato por partido político o alianza, en una boleta única por cada categoría (una para Gobernador y otra para Legisladores), c) Desaparecen también las "listas espejo o sumatorias", en la que dos o más partidos diferentes llevan a un mismo candidato, d) Se prohíbe la distribución previa de votos, achicando los márgenes del clientelismo político, e) Disminuye el gasto electoral ya que sólo se imprimen en la misma cantidad de electores habilitados a votar, f) Los Partidos Políticos no tienen que dedicarse al diseño, impresión y distribución (queda prohibida), con lo cual se desarticula el voto cautivo y se promueve que los P.P. dediquen su tiempo a difundir propuestas y debatir las mismas.

Los Senadores mencionados fundamentan la propuesta de adopción de la Boleta Única expresando: "El sistema de Boleta Única encuentra un referente en el sistema australiano el cual emplea una "papeleta oficial uniforme" en el que se imprimen las opciones electorales por cargo. Los votantes registran su elección en privado,

marcando con una cruz alineada al nombre del partido o alianza. Este sistema fue adoptado por primera vez en Australia en 1856. El Estado de New York comenzó a utilizar este sistema en 1889.

El sistema australiano –de amplia recepción como vemos en América Latina- baja exponencialmente los costos de impresión de boletas, impide que los partidos distribuyan papeletas influyendo en la decisión del elector o promoviendo el voto cadena, y rompe con los efectos negativos de la "sábana horizontal". La implementación de una Boleta Única impide, además, la práctica ilegal pero habitual, en nuestro país, del robo de boletas".

¿Qué precauciones hay que tener? a) que el papel no sea transparente, b) adoptar un criterio aleatorio para la ubicación del número y símbolo partidario en la boleta, c) determinar quien imprime, aprueba y distribuye las mismas, d) claridad y fácil comprensión para el elector y e) concientización y difusión del nuevo sistema.

La propuesta que presentamos tiene en cuenta el voto de los no videntes considerando para su implementación el alfabeto Braille.

Se propone además la unificación del padrón electoral provincial superando la distinción por sexo, siguiendo el criterio constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres.

Desde la Oposición queremos contribuir a una buena reforma electoral, debatir una reforma política vinculada a la participación ciudadana y al control del gobierno y además promover una Consulta Popular por una Reforma Constitucional.

Oposición y Oficialismo debemos ganar para que de esa manera gane toda la sociedad. Córdoba necesita avances institucionales, salir de la lógica amigo-enemigo y reconstruir desde la política, puentes de confianza con los ciudadanos, que nos entusiasmen con una Córdoba mejor.

La propuesta que presentamos desde el bloque Ari – Coalición Cívica, ha tomado como base en su redacción, las características y diseño expresado en el proyecto de ley nacional presentado por los Senadores Nacionales Samuel Cabanchik, Rubén Giustiniani, Carlos Rossi y Ernesto Sanz y ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Política.

Por las razones expuestas solicito a los Sres. Legisladores Provinciales, que de compartir esta propuesta, la acompañen en el recinto.

Omar Ruiz.

**PROYECTO DE LEY - 01700/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE**

LEY:

Artículo 1.- Independencia y separación de elecciones. No podrán realizarse elecciones simultáneas en todo el territorio de la Provincia, ya sean éstas nacionales, provinciales, municipales o comunales, incluidas las elecciones para convencionales constituyentes.

Artículo 2.- De forma.

Modesta Genesio de Stabio.

FUNDAMENTOS

Este Bloque en su momento expresó que "La única norma vigente en materia de simultaneidad de elecciones es la ley nacional 15.262 del año 1.959 reglamentada por decreto 17.265. La Provincia de Córdoba no tiene una legislación al respecto. Este artículo de ningún modo viola la autonomía municipal consagrada en el artículo 180 de la Constitución. Por el contrario serviría para realizarse en materia de competencia y escrutinio, jerarquizando además la independencia y la decisión de los municipios y comunas. No creemos que elecciones independientes llevaría a la indiferencia y abstención para el electorado, sino todo lo contrario, los ciudadanos se verán incentivados por la participación. Las elecciones simultáneas no contribuyen a la transparencia de los procesos electorales. El ciudadano se ve sorprendido y confundido por campañas electorales simultáneas, el debate de los candidatos pierde profundidad y claridad porque sus conclusiones abarcan ámbitos y realidades diferentes...Se quiebra una de las principales reglas de la democracia: la igualdad. Por todas estas razones se proponen elecciones independientes y separadas, aunque el gasto pueda ser mayor, creemos que favorecerá para la construcción de una democracia con más conciencia y participación que beneficiará a todos."

Creemos que en el extracto se encuentra expuesto con claridad meridiana el pensamiento del Vecinalismo Independiente sobre el tema por lo que no se hace necesario abundar sobre el mismo.

Modesta Genesio de Stabio.

PROYECTO DE LEY - 01701/L/08

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE**

LEY:

Artículo 1.- Publicidad oficial. La difusión de las acciones de gobierno se realiza con fines informativos, educativos y de prevención y no tiene finalidad partidaria o electoral. La información pública es un bien social que debe ser preservado de cualquier connotación propagandística, es generada por el Gobierno de la Provincia a través de la publicidad oficial y destinada a la difusión de actividad inherente y de servicios de interés público.

Artículo 2.- Limitación de la publicidad oficial.

Treinta (30) días corridos previos a las elecciones provinciales, sólo se podrá comunicar actos de carácter general y de interés público previa aprobación de la Legislatura.

Artículo 3.- De forma.

Modesta Genesio de Stabio.

FUNDAMENTOS

Como este Bloque expresara en su proyecto de declaración de reforma constitucional se busca "jerarquizar la publicidad y no confundirla con la propaganda, tratando así de evitar que el poder de turno tenga ventajas realizando 'Propaganda Electoral' como si fuera publicidad oficial y además usando dinero que corresponda."

Es menester destacar que en el artículo 2º del proyecto se requiere que el Gobierno solicite autorización a la Legislatura para hacer publicidad de sus actos de gobierno. Con ello se busca dotar de una mayor transparencia la publicidad oficial cercana a los actos electorarios.

Modesta Genesio de Stabio.

PROYECTO DE LEY - 01703/L/08

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Los Legisladores Provinciales son reelegibles por una sola vez de manera consecutiva.

Artículo 2.- De forma.

Modesta Genesio de Stabio.

FUNDAMENTOS**a) Marco normativo.**

Se ha interpretado que el artículo 83 de la constitución provincial establece que los legisladores duran cuatro años en sus funciones y que son reelegibles indefinidamente.

Sin embargo, el Bloque del Vecinalismo Independiente piensa que dicha interpretación es un tanto excesiva, que no se deduce de la normativa existente y que se puede limitar las veces en que un legislador puede ser reelegido.

En efecto, el artículo 5º de la Constitución Nacional garantiza la autonomía institucional provincial siempre y cuando se organice bajo el sistema representativo y republicano y el artículo 2º de la Constitución de la Provincia de Córdoba prescribe, en consecuencia, que la Provincia se organiza bajo la forma de gobierno republicana.

De ambas normas surge sin lugar a dudas que la Provincia de Córdoba debe organizarse bajo la forma republicana y es a la luz de dicha forma de gobierno que

debe interpretarse las instituciones creadas por ella.

Un gobierno republicano supone, entre otras cuestiones, la periodicidad de las funciones políticas. El Bloque del Vecinalismo Independiente cree que aplicar tal principio sólo al Poder Ejecutivo no obedece a una lectura sistemática y coherente de la constitución provincial.

Por tanto, por más que la Constitución Provincial no lo diga expresamente, resulta lógico que un legislador solo pueda ser reelegido una sola vez para, así, concretar la forma republicana de gobierno.

Es importante tener presente que este Bloque en su proyecto de declaración de necesidad de reforma constitucional había propuesto darle rango constitucional a esta norma pero ello no obsta que la misma no pueda ser establecida por medio de una ley.

b) Conveniencia política y social.

Como este bloque mencionó en la oportunidad de efectuar su propuesta de reforma constitucional “creemos que la tarea no es solamente un cargo, sino una continuidad de estudios, trabajos y proyectos, esa continuidad no debe ser personalista sino institucional para que los proyectos sean política de estado y no políticas personales, partidarias o elitistas. Creemos que este cambio que prohíbe la elección indefinida de legisladores está en plena sintonía con la voluntad de la ciudadanía y del pueblo de la provincia.”

Modesta Genesisio de Stabio.

PROYECTO DE LEY - 01763/L/08 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

LEY DE REGULACIÓN DE PUBLICIDAD OFICIAL

Capítulo I: Objeto, Objetivos, Definiciones y Ámbito de Aplicación

Artículo 1.- Objeto: es objeto de la presente Ley regular los contenidos, producción, diseño, distribución, control, procedimientos, gastos y contrataciones relativos a la publicidad oficial en los que el sector público de la Provincia de Córdoba contrate directa o indirectamente espacios publicitarios susceptibles de apreciación pecuniaria en medios gráficos, radiales, televisivos, vía pública, Internet y formatos Web, folletería o en cualquiera de sus formas, independientemente que dicho contrato sea oneroso o gratuito. Debe garantizar el principio de efectividad del mensaje y el principio de razonabilidad en la inversión de la publicidad del sector público protegiendo en particular los derechos y garantías de los ciudadanos cordobeses, de acuerdo al artículo 15 de la Constitución Provincial.

Artículo 2.- Objetivos: Son objetivos de la Ley:

a) Garantizar la difusión de los actos de Gobierno.

b) Legitimar el uso de los fondos públicos para la publicidad.

c) Aumentar los niveles de transparencia de los procedimientos y gasto público en las actividades de información y campañas publicitarias.

d) Asegurar la distribución NO DISCRECIONAL de la pauta publicitaria oficial.

e) Garantizar que la publicidad oficial no tenga fines contrarios al bienestar general de la comunidad.

f) Difundir entre la población los actos de gobierno comunicando cuestiones de interés público de forma clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público.

g) Prohibir la promoción de publicidad oficial que explícita o implícitamente promueva como objetivo central la difusión de los logros de la gestión de gobierno y / o la difusión de intereses específicamente partidarios.

h) Facilitar el control ciudadano sobre las estrategias de difusión de la acción de gobierno.

i) Difundir Publicidad Oficial sin contenidos ideológicos partidarios ni persuasivos como lo especificado en el inciso j) del presente artículo.

j) Garantizar la comunicación e información de todos los actos de gobierno que afecten a los habitantes de la Provincia de Córdoba, sus Municipios y Comunas y/o a las zonas geográficas a las que se encuentra dirigida.

k) Evitar confundir el concepto y uso de publicidad oficial por el de propaganda política o partidaria.

l) Garantizar que la Publicidad Oficial no interfiera sobre el derecho de libertad de expresión de las personas, periodistas y medios.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. Se considera como ámbito de aplicación de la presente Ley al Sector Público Provincial compuesto por: Administración General, Agencias, Sociedades y Entidades Centralizadas y Descentralizadas, Administración Provincial de Seguridad Social (APROSS); Banco de la Provincia de Córdoba S.A.; Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.; Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC); Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y todos los organismos que en el futuro los reemplazaren.

Artículo 4.- Definiciones. A los fines de la presente Ley se entiende por:

Publicidad Oficial: todo espacio contratado directa o indirectamente por el sector público en cualquier medio de comunicación con el objetivo de difundir y publicitar actos y/o acciones de gobierno en cualquiera de los formatos especificados en el artículo 1º de la presente Ley.

Gasto en Publicidad Oficial: gastos de diseño,

producción y colocación o contratación de la publicidad en cualquiera de los formatos señalados en artículo 1º de la presente Ley.

Propaganda Política: uso deliberado, planeado y sistemático de símbolos e instrumentos como la sugestión y otras técnicas convexas, con el propósito, en primer lugar, de alterar y controlar opiniones, ideas, valores, y en último término modificar la acción manifiesta según ciertas líneas predeterminadas ideológicas y/o políticas.

Planificación de la Publicidad Oficial: implica que las áreas de la administración pública, sus organismos descentralizados u autónomos y empresas del sector público deben establecer un plan anual con su correspondiente presupuesto. El plan debe contener el detalle de las campañas que se desarrollarán, sus objetivos y necesidades, debidamente fundamentados. Exceptuando lo establecido en el Art. 9 de la presente Ley.

Capítulo II: Planificación de la Publicidad Oficial

Artículo 5.- Plan Anual. A los fines de dar cumplimiento con el objeto y objetivos de la presente Ley, facilitar su regulación y control, se establece que todos los organismos provinciales comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, deberán confeccionar un Plan Anual de publicidad oficial.

Dicho plan deberá contar con un detalle de las campañas publicitarias a desarrollar, sus objetivos y necesidades debidamente fundamentadas, y el correspondiente cálculo del presupuesto a ejecutar.

Queda exceptuado de esta planificación lo establecido en el art. 9 de la presente Ley.

Artículo 6.- Clasificación de la Publicidad Oficial. Establécese la siguiente clasificación de la publicidad oficial:

I) Campañas de Prevención: vacunación, prevención de enfermedades, prevención de accidentes de tránsito, prevención de accidentes domésticos, medidas para prevenir delitos, alertas meteorológicas, prevención de abusos y actos de violencia contra Mujeres, Niños, Niños, Adolescentes y Ancianos.

II) Campañas de concientización: educación, cuidado de los espacios públicos, derechos del consumidor, educación vial, promoción y lucha contra el fuego, tratamiento y recolección de residuos, promoción de derechos.

III) Actos de Gestión: inauguración o reapertura de nuevos espacios públicos, promoción de planes sociales, presentación de planes de Gobierno, eventos culturales, eventos turísticos, eventos deportivos, difusión de convenios con otras jurisdicciones, promoción de Jornadas y Congresos de Interés Público, presentación de Obras Públicas.

IV) Comunicaciones e información del Gobierno (prensa, difusión y folletería).

V) Anuncios de compras, contrataciones y licitaciones. Información respecto de los trámites.

Artículo 7.- Parámetros y Pautas de la Publicidad Oficial. La estrategia para la contratación de la publicidad oficial se deberá regir por los siguientes parámetros y pautas:

a) Procurar la máxima efectividad en comunicación bajo determinados criterios de audiencia, segmentación, efectividad y eficiencia según la temática de la campaña.

b) La publicidad oficial deberá distribuirse con estrictos criterios equitativos entre los distintos medios de comunicación, respetando la pluralidad ideológica, confesional, política y/o partidaria.

c) Evitar el uso de criterios de "premios y castigos" que signifiquen para los distintos oferentes, beneficios y/o perjuicios económicos financieros.

d) La Publicidad Oficial debe asignarse de forma transparente y a los mejores precios disponibles.

e) La Publicidad Oficial debe suministrarse en plazos breves, oportunos y razonables.

f) Ninguna publicidad regulada por la presente Ley podrá tener un costo superior a lo que paga el sector privado por similar producto en el mercado.

Artículo 8.- Procedimientos y Límites de Contratación y Adjudicación de la Publicidad Oficial. La contratación y la adjudicación de la publicidad oficial se deberá realizar por procedimientos de licitación, no sólo de costos sino también de propuestas (diseño de contenido y/o diseño comunicacional), asegurando lo establecido en el Art. 7º de la presente Ley y los principios fijados en el Art. 108 de la Ley 7631.

Los límites para la contratación, autorización y adjudicación serán los fijados en la Ley 5901 (T.O. Ley 6300) Normativa de Ejecución del Presupuesto.

Artículo 9.- Los llamados a licitación se publicarán durante 7 (siete) días como mínimo en el Boletín Oficial, y en la página Web oficial de la Provincia, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto.

Artículo 10.- Contratación Directa. Elimínese el inc. 13 del Art. 110 de la Ley 7631. Establécese como mecanismo de contratación directa sólo en los siguientes casos:

a) Ante grave emergencia nacional, regional, provincial o local.

b) A requerimiento de autoridades de Defensa Civil de la Provincia.

A este fin los medios y servicios de radiodifusión deberán realizar transmisiones sin cargo hasta 1 (un) minuto y 30 (treinta) segundos por hora.

Artículo 11.- Período de Prohibición de Contratación. La contratación de la Publicidad Oficial: estará prohibida en períodos preelectorales donde estén en juego la elección de cargos provinciales, desde 30 (treinta) días corridos antes de la celebración del comicio y

hasta 15 (quince) días después de haberse llevado a cabo el mismo. En caso de ser necesaria la contratación de Publicidad Oficial durante este tiempo se deberá publicar y difundir en los medios que se considere pertinente, en función de lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley, las razones, justificaciones y/o condiciones que a ello conduzcan.

Artículo 12.- Distribución de la Publicidad Oficial. La distribución de la Publicidad Oficial se deberá distribuir de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Se contratará hasta el 90% de la pauta total prevista en el presupuesto para medios de cada soporte (gráfico, radial, televisivo, digital, vía pública u otros). En primer lugar, la asignación se efectuará siguiendo criterios de target o grupos específicos de población según perfil socioeconómico, etario, de género, cobertura geográfica o pertenencia a grupos étnicos o religiosos específicos, etc., a los que la publicidad oficial procure impactar y según el soporte de los medios priorizando el objetivo de la campaña. En segundo término, la asignación se realizará teniendo en cuenta criterios de circulación y audiencia, según corresponda al soporte de los medios.

b) Se contratará el 10% restante de la pauta total prevista en el presupuesto para medios vecinales o regionales o alternativos de cada soporte (gráfico, radial, televisivo, digital, vía pública u otros). En primer lugar, la asignación se efectuará siguiendo criterios de target o grupos específicos de población según perfil socioeconómico, etario, de género, cobertura geográfica o pertenencia a grupos étnicos o religiosos específicos, etc., a los que la publicidad oficial procure impactar y según el soporte de los medios priorizando el objetivo de la campaña. En segundo término, la asignación se realizará teniendo en cuenta criterios de circulación y audiencia, según corresponda al soporte de los medios.

c) Se permitirá a grupos de medios realizar ofertas para los incisos a) y b) del presente artículo siempre que acrediten como mínimo de 1 (uno) a 3 (tres) años de permanencia en la actividad.

d) Toda contratación y adjudicación de la Publicidad Oficial deberá realizarse en el marco del "Plan Anual" de Publicidad Oficial definido en el Art. 5º de la presente Ley, a excepción de lo establecido en el art. 10.

e) Los incisos a), b), c) y d) del presente artículo deberán respetar en su aplicación el derecho de libertad de expresión de personas, periodistas y medios y garantizar la pluralidad informativa.

f) Toda contratación y adjudicación de la Publicidad Oficial realizada a través de Agencias de Publicidad o de Productoras de Medios y Contenidos deberá seguir los criterios establecidos en los incisos precedentes. Las Agencias de Publicidad y/o las Productoras de Medios y Contenidos deberán especificar en su oferta en qué medios de los diferentes soportes contratarán la Publicidad Oficial asignada.

Capítulo III: Autoridad de Aplicación

Artículo 13.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Secretaría General de la Gobernación según lo dictaminado por el artículo 32 incisos 17, 19, 20 y 21 del Decreto 2357/07 anexo de la Ley 9454.

Artículo 14.- Responsabilidades de la Autoridad de Aplicación:

a) Contratar la producción, diseño y asignación de la Publicidad Oficial a través de lo establecido en los artículos 8º y 10 de la presente Ley.

b) Asignar la pauta publicitaria de acuerdo a los criterios establecidos en los Arts. 7º y 11 de la presente Ley con previo presupuesto asignado.

c) Elaborar el Plan Anual de Publicidad Oficial del Estado Provincial.

d) Crear un Registro de todos los Medios de Comunicación y Agencias de Publicidad o Productores de Medios o Contenidos que produzcan, diseñen o difundan publicidad oficial actualizándolo cada 1 (un) año, sin excepción, no pudiendo ingresar ningún medio que no lo haya hecho en tiempo y forma, hasta transcurrido dicho lapso.

El Registro de los Medios de Comunicación deberá contener los siguientes datos:

- i. Rubro
- ii. Medio. datos del mismo, incluyendo nombre, dirección, C.U.I.T o C.U.I.L y nombre de lo/s propietario/s.
- iii. Zona de influencia. En el caso de medio televisivo o radial alcance de la señal, en el caso de tratarse de una radio si es AM o FM y si es gráfica discriminar la cantidad de ejemplares que distribuye y la zona de cobertura.
- iv. Mensaje difundido. Metas
- v. Población objetivo. Cantidad potencial de destinatarios.
- vi. Fecha de contratación.
- vii. Tipo de contrato.
- viii. Duración del contrato.
- ix. Monto del contrato.
- x. Empresas contratadas. Justificación en la selección del medio a utilizar y la empresa a contratar.
- xi. Número de resolución que autorizó el gasto en publicidad oficial.
- xii. El registro debe ser de acceso al público y estar disponible en la página Web del Gobierno.
- xiii. Tipo de Medio: Provincial; Regional; Vecinal; Alternativo.

En caso de las Agencias de Publicidad o Productores de Medios o Contenidos el Registro deberá contener:

- i. Datos del mismo, incluyendo nombre, dirección, C.U.I.T o C.U.I.L y nombre de lo/s propietario/s.
- ii. Zona de Influencia.

iii. Fecha de contratación.
 iv. Tipo de contrato.
 v. Duración del contrato.
 vi. Monto del contrato.
 vii. Empresas contratadas. Justificación en la selección del medio a utilizar y la empresa a contratar.
 viii. Número de resolución que autorizó el gasto de publicidad oficial.
 ix. El registro debe ser de acceso al público y estar disponible en la página Web del Gobierno.

e) Informar trimestralmente a la Legislatura de la Provincia de Córdoba todo lo relacionado con los incisos b), c) y d) del presente artículo, y presentar toda la documentación necesaria que facilite el control y seguimiento de la contratación y adjudicación de la Publicidad Oficial.

Artículo 15.- La Autoridad de Aplicación deberá presentar ante el Poder Legislativo de Córdoba en forma anual, un informe acerca de la inversión en Publicidad Oficial realizada durante el ejercicio anterior al 30 (treinta) de marzo de cada año, sin perjuicio de lo establecido en el inciso e) del Art. 14 de la presente Ley.

Artículo 16.- El informe a que se refiere el artículo precedente deberá especificar:

- a) Identificación de los medios en los que el sector público contrató publicidad;
- b) Nombre y domicilio de la agencia o agente de publicidad por cuyo intermedio se haya cursado las respectivas órdenes de emisión, publicación o similares;
- c) Monto invertido, discriminando los diferentes rubros por compañía contratada.
- d) Ubicación geográfica y área de cobertura o tiraje, según corresponda, del medio en el que se realizó la publicidad;
- e) Producto o tema central del mensaje publicitario difundido;
- f) Razones que hayan justificado la selección de ese medio o programa con exclusión de otros;
- g) Copia de la resolución por la que se autorizó el gasto respectivo.

Artículo 17.- Los medios de comunicación, las agencias de publicidad o las productoras de medios o contenidos que no estén debidamente registrados no podrán recibir publicidad oficial.

Capítulo IV: Control de la Publicidad Oficial

Artículo 18.- Créase en el ámbito del Poder Legislativo la Comisión de Control de la Comunicación Gubernamental y Distribución de la Publicidad Oficial, la que tendrá por objeto el control y el seguimiento de todo lo relacionado a la publicidad oficial dispuesto en la presente Ley.

Artículo 19.- La Comisión creada en el artículo precedente estará conformada por todos los Legisladores que integran la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

y por 3 (tres) miembros representantes cada uno de organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica, especializadas en derecho de información, libertad de expresión y/o acceso a la información pública y áreas específicas. La conformación de esta Comisión deberá garantizar la pluralidad de las representaciones.

En caso de existir más de 3 (tres) organizaciones de la sociedad civil con intención de participar de esta Comisión, todos los miembros de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda las elegirán a través del mecanismo de votación por simple mayoría.

Artículo 20.- Atribuciones de la Comisión. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
- b) Considerar todos los temas vinculados con la publicidad oficial, pudiendo elevar propuestas ante la Autoridad de Aplicación.
- c) Evaluar los informes periódicos establecidos en los Art. 14 inc. e) y Art. 15 de la presente Ley que envíe la Autoridad de Aplicación.
- d) Seguimiento y control sistemático y continuo del grado de correspondencia entre la asignación de la publicidad oficial conforme lo establece el artículo 7º de la presente Ley.
- e) Analizar los contratos de publicidad oficial y la inversión presupuestaria correspondiente.
- f) Controlar que no se difunda publicidad oficial en periodos electorales.
- g) Elevar denuncias ante los organismos pertinentes frente a la detección de anomalías e incumplimientos y/o ante la recepción de denuncias por parte de particulares.
- h) La Comisión de Control de la Comunicación Gubernamental deberá denunciar ante la Autoridad de Aplicación el incumplimiento de lo establecido por la presente Ley exigiendo que se inicien los procesos administrativos de sumarios correspondientes sobre el/los responsables. Se deberá dejar constancia del sumario administrativo generado y las sanciones que correspondieran aplicarse.
- i) Controlar el curso de las denuncias realizadas y su correspondiente sanción.

Artículo 21.- Sobre el incumplimiento. Si se aceptara por parte de la Autoridad de Aplicación, según lo establecido en el inciso h) del artículo 20, que se ha incurrido en incumplimiento de lo establecido por la presente Ley, la Comisión de Control de la Comunicación Gubernamental puede:

- a) Publicar por los medios que se considere pertinente el acto de incumplimiento especificando Nombre, Apellido y Cargo de lo/s responsables que incurrieron en dicha acción.
- b) Proponer el desplazamiento del cargo a el/los responsables del incumplimiento, imposibilitando que pudieran ocupar otro cargo en la Administración Pública

Provincial.

Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Augusto Varas, Miguel Ortíz Pellegrini, Roberto Birri.

FUNDAMENTOS

La forma republicana de gobierno, consagrada en el artículo primero de nuestra Constitución Nacional se ha delineado tradicionalmente a través de ciertos caracteres. Ellos son la división de poderes, la elección popular de los gobernantes, la temporalidad en el ejercicio de sus funciones, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los gobernantes por esos mismos actos, y la igualdad de los individuos. Estos seis caracteres se encuentran íntimamente relacionados entre sí y confluyen en lo que se da a llamar “representatividad”, es decir, el gobierno de un pueblo a través de sus representantes. Dice Germán Bidart Campos, sistematizando estas características, que “la República requiere el origen o la formación de los órganos de poder (gobernantes) a través de la elección por parte del pueblo; la renovación temporal; el control popular de la gestión administrativa, que presupone conocerla (publicidad) y el hacerla responsable”.

También merece mencionar que La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “... La libertad de expresión y el derecho a la información es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática e indispensable para la formación de opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre”.

En este contexto, la publicidad oficial cumple con una finalidad política válida, la cual consiste en difundir los actos de gobierno y mantener informado a los ciudadanos sobre la marcha administrativa pública, pues quienes gobiernan en nombre del pueblo, legitimados por el voto, deben dar cuenta a sus mandantes de las acciones que en función de la representación desarrollan. El pueblo tiene el derecho fundamental de ser informado sobre asuntos que competen a la gestión de los intereses comunes, lo que implica necesariamente una comunicación veraz, objetiva, oportuna y transparente de los actos que constituyen dicha gestión.

Como se sabe la comercialización del espacio que otorgan los medios para difundir los actos del gobierno no es una práctica nueva sino que se remonta a siglos atrás. Desde entonces y hasta nuestros días, destinar parte del presupuesto del Estado para difundir actos de gobierno a través de la publicidad oficial en los medios de comunicación, se ha convertido en una práctica común en la mayoría de los países democráticos y con ello también su abuso y desvirtuación.

La transparencia y la austeridad se convierten así en una línea rectora que debe regir la regulación, contratación y la adjudicación de la publicidad oficial, pero también debe ser su estricto control y fiscalización, roles que pretendemos aplicar con la presente ley.

Se puede pensar entonces en este marco, que la distribución de la publicidad puede suponer por sí misma una fuente de poder que eventualmente – y sin una legislación que la regule – puede ser utilizada para satisfacer intereses ajenos al bien común o ser mal interpretado el criterio de asignación publicitaria a tal o cual medio, y convertirse fácilmente en lo que se conoce como Propaganda Política.

Es por estos motivos, que la implementación de una Ley que regule la publicidad oficial es un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismo políticos pero especialmente para lograr una mayor transparencia y un mejor control en la asignación de los fondos públicos para este destino, sobre todo en periodos electorales, que es cuando la línea que divide la difusión de los actos de gobierno a través de la publicidad oficial y la propaganda política partidaria termina siendo muy fina e incluso imperceptible.

Sobre el creciente gasto en publicidad oficial en Córdoba, los siguientes cuadros son elocuentes, demostrando como este gasto ha venido subiendo cada año, incluso en mayor medida que el total de gasto, lo que ha provocado una mayor participación dentro de las erogaciones de la administración provincial y de sus distintos organismos:

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PUBLICIDAD OFICIAL ENTRE 2004 Y 2007

En millones de pesos corrientes

GRAF1.bmp

Fuente: Cuentas de Inversión 2004/07, Ejecuciones Presupuestarias 2004/07 y Cuadros de Resultados 2004/07

Notas: la Administración General comprende a los tres Poderes del Estado, más el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.

El gasto en publicidad del Fondo de Prevención y Lucha contra el Fuego se obtuvo de datos de la ejecución de la Cuenta Especial del mismo nombre.

No se pudo acceder a datos sobre gasto en publicidad de la Caja de Jubilaciones por no encontrarse discriminados y ni tampoco del Ersep.

PARTICIPACION DEL GASTO EN PUBLICIDAD EN EL GASTO TOTAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL En millones de pesos corrientes y en porcentajes

GRAF2.bmp

Fuente: Cuentas de Inversión 2003/07 * Incluye al Fondo de Lucha contra el Fuego

Como puede apreciarse en el primer cuadro el sector público cordobés gastó en los últimos cuatro años 235 millones de pesos, sin saber los representantes del pueblo como, de que manera y quienes fueron los beneficiarios de semejante gasto, el cual, como se dijo, ha venido adquiriendo año tras año una creciente participación en el gasto total de la administración, como se observa en el segundo cuadro.

Por otra parte, en los primeros 6 meses de este año, el gasto comprometido de la Administración General en publicidad insumió 13,2 millones de pesos, además de solicitar la Secretaría General un incremento de 12 millones en la partida presupuestada, pasando de los 21 millones originales a los 33 millones en junio de 2008. Todo dentro del marco de crisis financiera y fiscal que admitiera incluso el propio gobierno provincial para justificar aumentos de impuestos y recortes en las jubilaciones.

De allí que regular, controlar y fiscalizar no solo la distribución de la pauta publicitaria oficial, si no también y muy específicamente los mecanismos de contratación y el monto gastado en la misma se ha convertido en una imperiosa necesidad y en una asignatura pendiente de todo Estado moderno.

No por nada el objetivo central de esta ley es regular de modo transparente, serio y ordenado el manejo de los gastos y fondos aplicados en publicidad oficial, además de sus mecanismos de contratación y adjudicación, elementos que en la Provincia de Córdoba en particular han estado ausentes. Estamos convencidos que es tiempo que Córdoba sancione una ley en este sentido, de modo de convertirse en una de las primeras provincias en el país en contar con una norma específica de regulación de la publicidad oficial de los actos de gobierno.

Asimismo se contemplan otros objetivos estratégicos que creemos hacen a una mejor asignación de la publicidad oficial, que son los que se enuncian a continuación:

- garantizar que cada ciudadano este informado sobre los derechos, garantías, obligaciones y beneficios que el Estado le provee, siendo la publicidad oficial el canal de comunicación entre ambas partes.

- Todos los contribuyentes podrían tener acceso a la información sobre los gastos que demanda la publicidad oficial asegurando la transparencia de las cuentas públicas.

- Garantizar la difusión de los actos de Gobierno.
- Legitimar el uso de los fondos públicos para la publicidad.

- Aumentar los niveles de transparencia de los procedimientos y gasto público en las actividades de información y campañas publicitarias.

- Asegurar la distribución NO DISCRECIONAL de la pauta publicitaria oficial.

- Garantizar que la publicidad oficial no tenga fines contrarios al bienestar general de la comunidad.

- Prohibir la promoción de publicidad oficial que explicita o implícitamente promueva como objetivo central la difusión de los logros de la gestión de gobierno y/o la difusión de intereses específicamente partidarios.

- Garantizar la comunicación e información de todos los actos de gobierno que afecten a los habitantes de la Provincia de Córdoba, sus Municipios y Comunas y/o a las Zonas Geográficas a las que se encuentra dirigida el tema de la campaña.

- Evitar confundir el concepto y uso de publicidad oficial por el de propaganda política o partidaria entendiéndose ésta como el uso deliberado, planeado y sistemático de símbolos e instrumentos como la sugestión y otras técnicas convexas, con el propósito, en primer lugar, de alterar y controlar opiniones, ideas, valores, y en último termino modificar la acción manifiesta según ciertas líneas predeterminadas ideológicas y/o políticas.

La concepción sobre establecer una correcta regulación de la publicidad oficial parte de la idea que los medios de comunicación han tenido históricamente un rol fundamental en la construcción de las democracias modernas. Han sido uno de los instrumentos centrales por los que la ciudadanía ha ejercido un control sobre los gobernantes, donde constituyen su base de información sobre la cual elaboran sus juicios de valor sobre la política, la gestión, la sociedad y el mundo.

La regulación que crea esta Ley no sólo va dirigida a especificar los objetivos de la pauta publicitaria, a saber: informar al público sobre servicios gubernamentales como así también sobre derechos y responsabilidades; alcanzar la máxima efectividad en comunicación bajo determinados criterios de audiencia, segmentación y efectividad según se considere necesario de acuerdo a la temática de la campaña; distribución regulada entre los medios de comunicación respetando la pluralidad de medios, con criterios equitativos de distribución, evitando beneficios, marginaciones y/o perjuicios y prácticas monopólicas fundadas en razones ideológicas, confesionales, políticas y/o partidarias; asignación transparente y a los mejores precios disponibles, suministrando la publicidad oficial en plazos breves, oportunos y razonables; sino que también va direccionada a la progresiva inclusión de pequeños grupos de medios ante la distribución de pauta publicitaria instalando, además del criterio de audiencia, otros criterios de contratación de medios para la difusión oficial.

Insistimos en una redistribución equitativa al momento de la contratación de publicidad oficial por parte del gobierno. Las razones son numerosas: los medios vecinales o regionales o alternativos de cada soporte (gráfico, radial, televisivo, digital, vía pública u otros) deben también garantizarse un lugar en la distribución y asignación de la pauta publicitaria oficial cuando se siguen criterios de target o grupos específicos de población según perfil socioeconómico, etario, de género, co-

bertura geográfica, o pertenencia a grupos étnicos o religiosos específicos, etc., donde la publicidad oficial procura impactar de algún modo específico.

Finalmente estamos convencidos que la publicidad oficial debe ser considerada y garantizada como un mecanismo que resguarde, reglamente y garantice el derecho a la información de los ciudadanos, que además racionalice el gasto y la proporcionalidad en relación a los fines de la difusión (exenta de banderías políticas), y que asegure la utilización transparente de los recursos públicos posibilitando la participación de todos los medios de difusión que se consideren necesarios según el criterio y objetivo de difusión, junto a una opinión pública real y concreta respecto del bienestar que produce o no una determinada gestión sobre los ciudadanos cordobeses.

Por las razones expuestas, y por las que oportunamente se brindarán al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Ley.

Augusto Varas, Miguel Ortíz Pellegrini, Roberto Birri.

**PROYECTO DE LEY – 01814/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Refórmese la Ley 8767, a continuación del artículo 126, con la incorporación del título “Título IX”, denominado “SUFRAGIO Y ESCRUTINIO ELECTRÓNICO”.

TITULO IX

**“SUFRAGIO y ESCRUTINIO ELECTRÓNICO”
Instrumentación**

Artículo 134.- El Juez Electoral implementará, en forma progresiva y sistemática, las acciones necesarias tendientes a implementar en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, un mecanismo electrónico de emisión y escrutinio de sufragios.

Dicho proceso deberá estar concluido en el plazo de cuatro años desde la puesta en vigencia del presente.

El Juez Electoral podrá previa su implementación definitiva instrumentar pruebas pilotos en circuitos o secciones electorales que a tal efecto se determinen, y que permitan comprobar la idoneidad del sistema instrumentado y corregir las dificultades que se observen.

Asesoramiento y convenios

Artículo 135.- Para el logro de lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad electoral podrá suscribir convenios con municipios, Estados provinciales, organismos o empresas (internacionales, nacionales, provin-

ciales o municipales, públicos o privados) ONGs, Universidades, tanto estatales como privadas (internacionales, nacionales, provinciales o municipales, públicos o privados).-

Garantías del sistema

Artículo 136.- El sistema de emisión y escrutinio de sufragios deberá garantizar:

- a) La seguridad, inviolabilidad, individualidad, universalidad y secreto del sufragio;
- b) El control suficiente por parte de los partidos políticos, confederaciones, alianzas, de todas las etapas del proceso informático, tanto como en el desarrollo del software electoral, como en la emisión del voto y del escrutinio propiamente dicho;
- c) La posibilidad de poder optar por voto en blanco;
- d) Simplicidad en todo el conjunto de operaciones que deba realizar el elector destinadas a emitir su voto;

e) Claridad necesaria que posibilite y permita la indubitable identificación del partido, alianza o confederación, tanto por su nombre, número de registración ante la autoridad electoral, símbolos, emblema/s o imagen de candidatos y líderes partidarios;

f) Que los partidos, alianzas, confederaciones en forma previa y posterior a cada acto electoral, puedan conocer y auditar por sí o a través de empresas contratadas a tales fines -a su cargo y debidamente autorizadas por la autoridad electoral- aspectos tales como el proceso de carga de información al sistema, los dispositivos tecnológicos internos de la maquinaria a utilizar y que los mismos se adecuen a los principios establecidos por la presente y a la normativa que se dicte, las características técnicas del programa, las funciones, componentes y los gerenciadore de dispositivos utilizados, que los programas fuentes y los medios magnéticos -según se trate- se encuentren debidamente lacrados, encriptados o certificados;

g) Adecuados soportes magnéticos de seguridad.

Comisión Asesora

Artículo 137.- La autoridad electoral podrá contar con el apoyo de técnicos especializados, con los que podrá conformar una Comisión Asesora, cuyo funcionamiento deberá ser garantizado por aquélla brindándole los medios y apoyo material y necesario a los fines de lograr su cometido, el que será solicitado y diagramado por la autoridad electoral. Dicha comisión será presidida por el Juez Electoral quien determinará su conformación.

La Comisión Asesora, una vez convocada y conformada dictará un reglamento de funcionamiento, al que deberán someterse sus integrantes una vez aprobado por mayoría simple de sus miembros.

El Secretario del Juzgado Electoral actuará como coordinador de la Comisión Asesora.

Los integrantes de la Comisión Asesora desarrollarán sus funciones con carácter ad honorem.

Artículo 138.- La autoridad electoral determinará y evaluará la modalidad del sistema electrónico a utilizar para la emisión y escrutinio de sufragios, las características técnicas y dispositivos de equipamiento necesarios según sea el sistema que se adopte así como la necesidad o no de respaldos alternativos en la registración de datos y toda otra cuestión que se vincule con el tipo y tecnología de mecanismo o sistema electrónico a utilizar.

Una vez seleccionada la modalidad del sistema electrónico a instrumentar, deberá confeccionar una detallada regulación del procedimiento de emisión y escrutinio electrónico de sufragios, la cual será elevada al Poder Ejecutivo Provincial a fin que éste elabore y eleve a la Legislatura Provincial un proyecto de reforma al Código Electoral Provincial a fin de incorporar dicha metodología en el mismo.

Software electoral

Artículo 139.- El software es elaborado por convenio con las universidades públicas y privadas de la Provincia de Córdoba, siendo su propiedad de ésta. La autoridad electoral deberá aprobar la validez, eficiencia y eficacia del funcionamiento del software electoral y elaborar para cada una de las mesas electorales la personalización del mismo.

Capacitación

Artículo 140.- La autoridad electoral, previo a instrumentar el sistema electrónico de emisión y escrutinio de sufragio, incluso en la fase experimental, deberá disponer las más amplias medidas necesarias para capacitar a la ciudadanía en la utilización del mismo, de tal manera que aspectos instrumentales, culturales o intelectuales no se constituyan en obstáculos al pleno ejercicio de los derechos electorales. Podrá para lograr este fin disponer de todos los medios de difusión que se crean convenientes.

Artículo 2.- Incorpórese como artículo 108 bis de la Ley 8767 el siguiente:

Daños al sistema voto electrónico

Artículo 108 bis.- "El que instalare equipamiento para obtener o intentar obtener acceso al sistema de tratamiento electrónico de los datos electorales con el propósito de alterar el escrutinio o el recuento de votos u obtener información o el que viole el sistema informático de procesamiento de votos introduciendo un programa capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, grabar o transmitir datos, o provocar cualquier otro resultado diferente del previsto conforme el procedimiento regular en el sistema establecido por la presente ley, siempre que las acciones descriptas no configuren otro delito tipificado, y por lo tanto susceptible de la sanción penal que la normativa específica imponga, será reprimido con arresto de hasta sesenta (60) días o multa de hasta Trescientos mil pesos (\$ 300.000.-)."

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo Provincial, a peti-

ción de la Justicia Electoral y por la vía correspondiente, deberá garantizar la asignación de las partidas presupuestarias necesarias a fin del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 4.- En caso de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales, se deberá, vía convenio con el Gobierno Federal coordinar la utilización del Voto Electrónico: "SUFRAGIO y ESCRUTINIO ELECTRÓNICO", con el sistema tradicional de votación.

Artículo 5.- Invítase a las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 6.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir convenios de colaboración con las Universidades Nacionales Públicas y Privadas con sede en la Provincia de Córdoba, a los fines de la elaboración del software a utilizarse en el proceso de votación electrónica.

Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan Brügge.

FUNDAMENTOS

La experiencia histórica nos indica que la única manera de aspirar a que todos los ciudadanos de un país puedan disfrutar de paz, de libertad, de seguridad y de una prosperidad creciente y con igualdad de oportunidades es construyendo instituciones políticas sólidas, eficaces y eficientes.

Las instituciones deben mantener y consolidar reglas del juego para que la sociedad promueva comportamientos, plasme valores, y, a su vez, contribuya a reproducirlos positivamente.

La sociedad reclama el cambio y el saneamiento institucional. Las sociedades son dinámicas, cambian, y con ellas también las demandas de la ciudadanía, las amenazas y los desafíos del su entorno, y, ciertamente sus percepciones y referencias.

Aun los países más desarrollados y democráticos están permanentemente obligados a modificar parcial o totalmente sus instituciones, sus regulaciones, y los organismos que las instrumentan y sostienen.- Por ello, es imprescindible ir adaptando las instituciones a estas transformaciones, ya sean económicas, sociales, culturales, tecnológicas y políticas.

Para que el cambio institucional sea legítimo, logre la confianza y reconocimiento de la ciudadanía tiene que ser absolutamente transparente y permitir que las mismas sean sometidas a un control férreo, exhaustivo y permanente por medio de mecanismos idóneos e invulnerables a las presiones de los actores poderosos y tener un basamento en la misma sociedad.

Creemos, sin duda, que la institución que hoy esta requiriendo con mayor urgencia su transformación es aquella que define la esencia misma de la democracia: la representatividad.

Es imperioso reconstruir de una manera clara,

transparente, y eficiente el sistema por medio del cual los representados eligen sus representantes.

El sistema electoral más idóneo será aquel que cree y recree las condiciones para que lucha por el poder sea lo más abierta, clara y competitivamente posible, permitiendo así su aceptación social, sin generar la mínima desconfianza en él.

El voto, como se sabe, es una manifestación insoslayable de la democracia. Puesto que, se nos ha cercenado este derecho en reiteradas oportunidades, los argentinos tenemos marcada a fuego la importancia de este instrumento en la construcción de una sociedad mejor, que es lo que queremos, que es lo que deseamos, y para ello, hacemos nuestro aporte con la presentación de este Proyecto, al que desde ya, y por considerarlo vital, pedimos su aprobación, para darle, así anclaje legislativo a esta superación en la forma que nos permitirá otorgar total transparencia a este proceso.

Votar es de vital importancia.- La innovación tecnológica nos permite hoy acceder a un sistema moderno, seguro, eficiente y ágil para emitir el sufragio. Se trata del voto electrónico. Con ello garantizaremos seriamente este cometido, estando a la altura de dicha importancia.

El voto electrónico es una innovación, pero su relevancia no se limita al mero salto tecnológico; encierra, además, el germen de una profunda renovación de las prácticas políticas. Votar será más simple y, entonces, se podrá votar con más seguridad. La democracia incorporará nuevos canales de participación y la sociedad podrá opinar con mayor habitualidad, más allá de la elección de candidatos.

Voto electrónico significa más y mejor democracia.

La tecnología se ha convertido en un elemento clave para llevar adelante tanto la administración, la organización como la realización del proceso electoral. En alguna medida, en la actualidad diversas etapas del proceso electoral se han informatizado. Un ejemplo de ello, lo son los padrones electorales, ellos son confeccionados informáticamente.

La apropiada aplicación de la tecnología a los procesos electorales permite aumentar la eficiencia administrativa, reducir los costos a largo plazo y fortalecer la transparencia política.

La incorporación de estas nuevas tecnologías al proceso electoral debe asegurar que se conserve sin excepción alguna el respeto al voto universal, libre, igual, secreto y directo, con este Proyecto que hoy proponemos creemos que estos preceptos se cumplirán cabalmente.

Por otro lado, este sistema debe ser superador del mecanismo utilizado actualmente, pero además debe lograr una mayor participación ciudadana y aumentar la garantía de la transparencia de los actos comiciales.

En vista de lo mencionado y buscando eficiente-

zar todo el conjunto, uno de los desafíos que se imponen es la implementación del voto electrónico.

Votar electrónicamente implica, en un sentido amplio, emitir el voto a través de medios informáticos, tales como una computadora, una urna electrónica con teclado y/ o pantalla o, el recuento automatizado del voto al momento de ser emitido, entre algunas de las opciones tecnológicas disponibles. También, voto electrónico, se refiere a la tecnología aplicada en las etapas que se desarrollan el día de los comicios; tales como, el registro y la verificación de la identidad del elector, la emisión del voto, el recuento de votos y la transmisión de los resultados. Incorporar el voto electrónico puede abarcar una o todas estas etapas, así lo proponemos, por ser este un sistema que debe ser usado en todo el proceso, desde la confección de los padrones, pasando por la emisión del sufragio y terminando en algo no menos importante que es la etapa del escrutinio final.

En un sentido estricto, significa eliminar el paso que media entre la materialización de la voluntad del votante y el registro de esa voluntad mediante nuevos procedimientos tecnológicos.

El objetivo central es claro: la votación electrónica implica un paso más hacia la modernización; por lo tanto, debe ser igual o más ágil, precisa, confiable y transparente que la votación tradicional.

Los sistemas electrónicos de votación, al igual que los sistemas manuales tradicionales, deben contemplar una serie de elementos que aseguren los principios básicos de una votación.

La incorporación de tecnología debe presentar ventajas al menos equiparables a las que proporciona el sistema que se intenta reemplazar, aunque estamos seguros de que es superador, como lo demuestran los procesos electorales que en otros países que lo han utilizado. En otras palabras, de ninguna manera puede aceptarse un sistema electrónico de votación, si éste no cumple con los siguientes requisitos: voto secreto y universal; elegibilidad y autenticidad; integridad del sistema y de los votos; confiabilidad; auditabilidad; y simplicidad. Este nuevo sistema que proponemos no solo que garantiza tales requisitos, sino que les suma eficiencia y eficacia.

Son innumerables las ventajas de los sistemas electrónicos de votación. Varían entre las distintas categorías de ellos. Sin embargo, las ventajas de estos mecanismos saltan a la vista.

Entre sus fortalezas se destaca que permiten un sistema electoral más transparente y participativo. Transparencia, puesto que los fraudes electorales, sea cual fuese el sistema electrónico elegido desaparecen completamente.

En este sentido, la necesidad de centralizar el padrón electoral implica la depuración del mismo, y con ello, se acabarán las reiteradas denuncias de que "votan

los muertos", o la imposibilidad de determinar cuantos DNI con el mismo número y en diferentes personas cumplen con las obligaciones electorales.

Es dable destacar que la informatización desarrollada hace imposible asociar el voto con el votante porque el sistema no permite un registro por elector sino un total por candidato, esto da seguridad a esta nueva forma de votar. Como dato adicional, se debe saber que no hay manera de adulterar el sistema para que "redireccione" votos.

Todo sistema electrónico de votación lleva implícito el principio "un hombre, un voto". Se asegura así la igualdad del sufragio.

En segundo lugar, al desaparecer la "boleta de candidatura", se eliminan aquellos fraudes vinculados con la existencia de ellas. Esto es, por ejemplo el voto cadena, voto comprado, etc. De esta manera el elector cuando ingresa al cuarto oscuro, luego de que las autoridades hayan determinado con certeza su identidad, está en libertad y sin posibilidad de coacción, para ejercer plenamente el derecho de sufragio. El voto emitido solo es fruto de su propia voluntad. Esta es quizás la mayor contribución al sistema democrático. Asegurando la libre elección de los ciudadanos, se recompone casi en su totalidad la representatividad democrática. Se reafirma el voto libre y secreto.

Es importante destacar que entre las opciones del elector se mantiene la posibilidad de los votos en blanco.

Esta situación no solo produce sus efectos en los actos comiciales. Además elimina en gran medida el clientelismo político ligado los mismos.

Los votos electrónicos aceleran el proceso de conteo. Sin duda, y revisando experiencias en otros países, los resultados de las elecciones son casi inmediatos al cierre del acto electoral. Las computadoras han demostrado mayor celeridad y con ella mayor precisión en el conteo de los votos. Desaparecen los escrutinios provisionales y la manipulación de la información. Las variaciones se producirán dependiendo del sistema electrónico que se utilice.

Asimismo reduce los tiempo de la votación. Puesto que las alternativas están concentradas en un solo lugar, como por ejemplo un pantalla al tacto, el elector solo ocupa su tiempo en precisar su preferencia. Estudios realizados comprueban que el tiempo promedio es de 40 segundos por elector. Esto trae aparejado que se reducen la cantidad de mesas y lugares de votación. Las mesas habilitadas pueden asistir a mayor cantidad de ciudadanos.

Se destaca su bajo costo. Llegado el momento de las elecciones se deberá "invertir" en la capacitación de la ciudadanía para que se genere confianza en el sistema, y en las urnas electrónicas. Invertir por contraposición al no hacerlo. La capacitación con el tiempo tendrá un curva decreciente, convirtiéndose los capacitados en difusores del procedimiento electoral. En cuanto a las

urnas electrónicas, el mundo ha ensayado distintas alternativas en referencia a ellas, en algunos casos han desarrollado o comprado las urnas, en otros se terceriza el servicio a empresas disponibles en el mercado. También existe la posibilidad de préstamo, por parte de otros países u organizaciones internacionales. Todos estos mecanismos hacen que el proceso electoral sea menos oneroso tanto para los ciudadanos, como para las fuerzas políticas, permitiendo mayor participación de ellas en las contiendas electorales.

Los sistemas electrónicos de votación son más participativos. Permiten fácilmente el ejercicio del sistema de preferencia. Asimismo generan mayor igualdad entre los ciudadanos. Sin excepción, todos los sistemas contemplan el voto para personas no videntes, puesto que disponen de un teclado numérico con indicaciones en idioma braille, en el que las personas no videntes pueden digitar el nº de la boleta de su elección, sin necesidad de ver menoscabada o coaccionada su libertad de sufragio.

Las personas analfabetas también están incluidas para que puedan ejercer su derecho a votar. Los partidos políticos en campaña deberán identificarse con un color y un número. Al momento de sufragar la persona analfabeta, puede identificar su preferencia por la asociación entre la misma y el color y número de candidato a elegir. La eliminación de las boletas, de color blanco y negro, y la posibilidad de visualizar en una pantalla las candidaturas, facilitan la tarea. Se asegura así, la universalidad del sufragio.

No menos relevante es la seguridad del sistema. Algunos sistemas son más seguros que otros, puesto que contienen dispositivos de constatación de huellas digitales o registro del iris de la personas que se presentan a votar. Es escasa su aplicación puesto que son todavía muy onerosos. El método tradicional de constatación de la identidad del elector sigue siendo el más utilizado, es decir aquel en que se realiza por medio del DNI. Sin embargo, este proceso puede ser informatizado según el sistema electrónico de votación que se aplique.

En otro sentido, el sistema es seguro puesto que sus mecanismos están diseñados para funcionar sólo el día de las elecciones y deja de operar si se intenta una alteración en sus programas. No permiten fraudes, sabotajes o accidentes.

Comparado con el sistema tradicional, los sistemas electrónicos de votación son más seguros. Sin embargo, no podemos negar la posibilidad de que ocurran delitos vinculados a ellos. En este caso, la implementación de un sistema electrónico de votación debe ir acompañada con la determinación de que si tal delito se ocurriese, la sanción penal aplicable debe ser excesiva y ejemplificadora, así lo proponemos.

Para los partidos políticos representa un enorme posibilidad. Al reducir los costos, la competencia entre los mismos es mas igualitaria, con el consiguiente beneficio para la ciudadanía.

Por otro lado, como el sistema en si mismo elimina los fraudes, hace que los partidos puedan prescindir de fiscales partidarios, tan escasos para las fuerzas minoritarias.

Entre las ventajas también contamos la eliminación de las llamadas listas sabanas horizontales, esto si la legislación electoral lo contemplara, es decir el sistema se adapta a la legislación electoral de fondo. Si bien debe existir la posibilidad de votar a lista completa, el sistema permite votar por tramos con mayor facilidad. En consecuencia conlleva mayor representatividad, puesto que los partidos políticos deberán esforzarse más en dar a conocer a todos sus candidatos.

El éxito o el fracaso del implementación del los sistemas electrónicos de votación dependerá del la confianza que los ciudadanos depositen en ellos. Debemos nosotros, los que tenemos responsabilidad de gobierno bregar para que se extiendan y difundan profundamente en la sociedad estos valores de confianza necesarios para la adecuada aceptación por parte de la ciudadanía de este nuevo y superador sistema.

Las nuevas tecnologías no aportan por sí mismas la predisposición a votar pero para poder implementar el voto electrónico es necesaria la confianza de los electores en el sistema. Por esta razón la información sobre ellos, debe ser clara, sencilla y completa. La incertidumbre sobre los nuevos medios pueden derivar en la abstención del voto, eliminarla es nuestra obligación, como así también combatir a los que escondidos detrás de falsas premisas quieran generar rechazo a esta idea, pero en el fondo lo que quieren es lo de siempre, la desestabilización del sistema democrático.

Uno de los primeros pasos para establecer en forma masiva el voto electrónico entre los ciudadanos es destinar y no escatimar esfuerzos necesarios para delinear campañas educativas que ayuden a moderar las dudas y fortalezcan los conocimientos de los actores, para que todos sean capaces de utilizar el sistema sin dificultad.

Se deberá disponer de diversos elementos, que ya hayan demostrado ser eficientes en la transmisión de la información: campañas en los medios masivos de comunicación, los folletos informativos con instrucciones, fotos y gráficos de los aparatos de votación, números de teléfono gratuitos para asistencia y evacuación de dudas, páginas web, etc.

Asimismo toda la información referida al sistema debe estar expresada claramente. No pueden ser inconsistentes, ni contener frases ambiguas que planteen dudas, no deben adolecer de falta de información sobre cada aspecto del proceso. El mensaje debe ser claro y preciso alertando sobre los problemas y situaciones que eventualmente pueden presentarse.

Otra herramienta que ha comprobado su validez es la existencia de máquinas de simulación, instaladas

con anterioridad en sitios claves, para que los ciudadanos puedan practicar antes de emitir su voto, y sumando a ello, la presencia de los técnicos en el lugar. Hecho que incrementa la sensación de invulnerabilidad del sistema.

La incorporación de voto electrónico a los procesos electorales debe ser de forma constante y progresiva para que los votantes se acostumbren a usarla venciendo el letargo de los viejos sistemas. La experiencia en otros países y en el nuestro nos indica que el mejor procedimiento en la implementación del voto electrónico es aquel que sea gradual, que permita la desarrollo de pruebas pilotos, seleccionadas con criterio demográficos, geográficos y políticos, que a la postre puedan demostrar la superación de este sistema comparado con el tradicional.

Asimismo puede ser provechoso el aporte que realicen los especialistas en el tema sean éstos ONGs, técnicos informáticos, juristas etc.

En síntesis, la tecnología puede resultar ampliamente beneficiosa, pero los resultados positivos dependen directamente del tipo de sistema electrónico de votación que se decida introducir y como se lleve ello adelante.

Votar electrónicamente significa más y mejor democracia. Las ventajas que presentan los sistemas electrónicos de votación son numerosas y todas conducen a sanar nuestro sistema electoral y a las instituciones de la democracia toda.

Los desafíos de su implementación no debe inhibirnos de llevar adelante el proceso que concluirá con la implementación del sistema, que en el mundo entero está demostrado ser más seguro, más participativo y transparente.

El presente proyecto busca, con pequeñas modificaciones, rescatar la idea y proyecto que oportunamente presentara sobre el particular los legisladores demócratas cristianos Juan Carlos de la Peña y Santiago Soler junto a Enrique Gastaldi.

Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Juan Brügge.

**PROYECTO DE LEY - 01872/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 117 de la Ley N° 8767 -Ley Electoral Provincial- por el siguiente:

“Artículo 117: LA elección debe realizarse el primer domingo de octubre del último año del mandato de la gestión del Gobernador y Vicegobernador en ejerci-

cio.”

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 120 de la Ley Nº 8767 -Ley Electoral Provincial- por el siguiente:

“Artículo 120: LA elección debe realizarse el primer domingo de octubre del año de finalización del mandato de los Legisladores Provinciales.”

Artículo 3.- De forma.

Hipólito Faustinelli.

FUNDAMENTOS

El sufragio es sin lugar a dudas, la voluntad del ciudadano y la expresión más acabada de su manifestación de libertad de decisión. Por ello la misma debe estar rodeada del más amplio escenario de transparencia y certeza y lejos de cualquier indicio de manipulación y especulación con la utilización de argumentos que so pretexto de garantizarla no hacen otra cosa de desviar su verdadera definición.

Es menester asegurar que todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba sepan que el primer domingo de Octubre de cada año electoral provincial se procederá a elegir los integrantes gubernamentales, se procederá a emitir el voto que significará la decisión de los cordobeses, cumpliendo con su deber-derecho de votar.

El sentido de este Proyecto de Ley tiende a asegurar que la fecha del acto eleccionario no será motivo de especulación política y temporal para adecuarlo solo a la certeza y a la independencia de manipulación alguna.

Por las razones expuestas y por las que al momento de su tratamiento abundaré solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.

Hipólito Faustinelli.

PROYECTO DE LEY - 01880/L/08 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1.- Modifícase el artículo 35 de la Ley Nº 8767 -Ley Electoral de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Convocatoria

Artículo 35.- La convocatoria a elecciones de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales y miembros del Tribunal de Cuentas es de competencia del Poder Ejecutivo de la Provincia y se realizará en forma conjunta.

Artículo 2.- Modifícase el artículo 36 de la Ley Nº 8767 -Ley Electoral de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Plazo y forma

Artículo 36.- La convocatoria a elecciones deberá hacerse con noventa (90) días, por lo menos, de antici-

pación al acto electoral. Si el Poder Ejecutivo Provincial no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria debe ser realizada por el Poder Legislativo, mediante resolución tomada por lo menos con ochenta (80) días de anticipación al acto electoral.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 117 de la Ley Nº 8767 -Ley Electoral de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 117.- La elección de Gobernador y Vicegobernador debe realizarse el primer domingo del mes de octubre del año en que finalizan los mandatos las anteriores autoridades.”

Artículo 4.- Modifícase el artículo 120 de la Ley Nº 8767 -Ley Electoral de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 120.- La elección de Legisladores Provinciales debe realizarse el primer domingo de octubre del año en que finalizan sus mandatos los legisladores electos.”

Artículo 5.- Modifícase el artículo 125 de la Ley Nº 8767 -Ley Electoral de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 125.- La elección de los miembros del Tribunal de Cuentas debe realizarse el primer domingo de octubre del año en que finalizan sus mandatos los tribunos electos.”

Artículo 6.- De forma.

José Maiocco.

FUNDAMENTOS

En la búsqueda permanente de un sistema electoral moderno, transparente y fortalecido, es que consideramos además de los puntos consensuados en la Comisión de Reforma Política la incorporación de modificaciones a los fines de hacer más perfectible estas normativas.

La Comisión Consultiva de Expertos (CCE) mediante Decreto Nº 2192/07 del Poder Ejecutivo emitió un dictamen - “Así no va más” - en el que se realiza un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema político - electoral actual de la Provincia, realizando una serie de propuestas de reformas tendientes a modernizar y fortalecer dicho sistema, entre ellas:

“la CCE recomienda por unanimidad de sus miembros establecer una fecha fija para el acto electoral, eliminando de este modo toda posible discrecionalidad en esta materia. Con esta medida, se estaría colocando a todas las fuerzas políticas interesadas en participar en la consulta electoral en paridad de condiciones, a la vez que se le daría a la población certeza – con suficiente anticipación – respecto al momento que he de ser convocada para manifestar su voluntad.”

La Ley nacional 19.945 y modificatorias, en su Art. 53 del Código Electoral Nacional determina que el 4º domingo de Octubre inmediatamente anterior a la finali-

zación de los mandatos, como fecha de los comicios Presidenciales.

El ciudadano cordobés vive en campaña electoral permanente, como consecuencia de las elecciones en distintos tiempos y cargos, lo cual conduce por un lado, a discutir las fechas y la simultaneidad de esas elecciones. Nos inclinamos por una fecha fija para las elecciones provinciales, separadas de las elecciones nacionales y municipales. A nuestro entender, una fecha cierta, trae como consecuencia una campaña cierta.

El punto que quedaría a discutir es sobre las elecciones separadas o no, quizás sería posible establecer una fecha única para todos los municipios juntos, separadas de las elecciones provinciales. En suma, el tema es evitar situaciones como las registradas en algunos municipios, en los que se anticiparon varios meses, incluso hasta un año antes de la finalización del mandato del intendente en ejercicio, por especulaciones de coyuntura.

Por otro lado también y con los mismos objetivos es importante, siempre dentro de la misma temática, establecer el llamado a elecciones en conjunto de los diferentes cargos electivos provinciales, es decir: a) Gobernador y Vicegobernador, b) legisladores por lista uninominal, c) Legisladores Departamentales y d) Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Por todo lo precedentemente expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.

José Maiocco.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de **ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA**, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 1861/L/08, iniciado por los Bloques de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, de la Concertación Plural y de RECREAR para el Crecimiento, por el que establece el Código Electoral Provincial y deroga la Ley N° 8767 -Código Electoral-, COMPATIBILIZADO con los Proyectos de Ley N° 5661/L/04, iniciado por los Legisladores Guzmán (M/C), Valinotto (M/C), Eduardo Fernández (M/C) y Maiocco, por el que modifica y deroga diversos artículos de la Ley N° 8767 -Código Electoral de la Provincia-; N° 06254/L/04, iniciado por los Legisladores Gastaldi (M/C) y Soleri (M/C), por el que incorpora artículos a la Ley N° 8767 -Código Electoral-, referido al sufragio y escrutinio electrónico; N° 11646/L/07, iniciado por el Legislador

Rossi, por el que modifica diversos artículos de la Leyes N° 8767 -Código Electoral Provincial- y N° 6875 -Ley Orgánica de Partidos Políticos-; N° 0404/L/08, iniciado por los Legisladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que incorpora artículos a la Ley N° 8767 -Código Electoral-, referidos a los llamadas encuestas a boca de urna; N° 0407/L/04, iniciado por los Legisladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que regula la publicidad institucional del Estado antes de las elecciones; N° 0911/L/08, iniciado por el Legislador Cugat, por el que establece régimen y modalidad de las campañas electorales; N° 1674/L/08, iniciado por el Legislador Ruiz, por el que modifica, incorpora y deroga diversos artículos de la Ley N° 8767 -Código Electoral Provincial- y sus modificatorias Leyes N° 8972 y 9105, referidos a la incorporación de la boleta única y al acto electoral; N° 1700/L/08, iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que establece la independencia y separación de la fecha de elecciones nacionales, provinciales y municipales o comunales; N° 1701/L/08, iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que establece formas y tiempo de publicidad oficial en período electoral; N° 1703/L/08, iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que establece que los legisladores provinciales pueden ser reelectos por un período consecutivo; N° 1763/L/08, iniciado por los Legisladores Varas, Ortiz Pellegrini y Birri, por el que regula la publicidad oficial; N° 1814/L/08, iniciado por el Legislador Brügge, por el que modifica la Ley N° 8767, incorporando artículos y título referidos al sufragio y escrutinio electrónico; N° 1872/L/08, iniciado por el Legislador Faustinelli, por el que modifica los artículos 117 y 120 de la Ley N° 8767 -Ley Electoral Provincial-, referidos a fecha de elección de gobernador y vicegobernador y de legisladores provinciales, respectivamente y N° 1880/L/08, iniciado por el Legislador Maiocco, por el que modifica los artículos 35, 36, 117, 120 y 125 de la Ley N° 8767 -Ley Electoral Provincial-, referidos a fecha de convocatorias y realización de elecciones de gobernador, vicegobernador, tribunos de cuentas y legisladores provinciales, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

CÓDIGO ELECTORAL PROVINCIAL

**LIBRO PRIMERO
PRINCIPIOS ELECTORALES FUNDAMENTALES**

TÍTULO I DEL CUERPO ELECTORAL

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Derecho del sufragio. EL ejercicio de la emisión del sufragio es un derecho-deber político individual, por el cual los ciudadanos que forman parte del cuerpo electoral, participan directamente en la designación de las autoridades electivas instituidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, a través de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y en los institutos de democracia directa y semidirecta, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 2º.- Características. EL sufragio es universal, obligatorio, directo, igual, secreto, libre, personal e intransferible.

Artículo 3º.- Prohibición. NINGUNA autoridad, persona, corporación, partido o agrupación de cualquier índole puede obligar al elector a votar en grupos o de determinada manera, manifestar su voto, emitir el sufragio por él o impedir que sufrague.

Artículo 4º.- Interpretación. EN caso de duda o conflicto normativo relativo a la interpretación y aplicación de la presente Ley, deberá resolverse en forma favorable a la validez del voto, a la vigencia del régimen democrático en el que está inspirado y a asegurar la expresión de la auténtica voluntad popular.

Artículo 5º.- Facilitación de la emisión del voto. A los fines de facilitar la emisión regular del sufragio, las autoridades deben suministrar a los electores toda la información que resulte necesaria y, correlativamente, deben abstenerse de entorpecer u obstaculizar la actividad de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas, en todo lo que concierne a información, instalación y funcionamiento de locales, salvo que contraríen las disposiciones de esta Ley.

Artículo 6º.- Imparcialidad de los organismos. LA imparcialidad de todos los organismos del Estado es la norma de conducta a la cual deben ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales.

Artículo 7º.- Responsabilidad electoral. LA responsabilidad del desarrollo y vigilancia del proceso electoral corresponde al Juzgado Electoral, quien puede requerir la colaboración a los Poderes del Estado Provincial, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general, en la forma y términos que establece la presente Ley.

Capítulo II

Calidad, Deberes y Derechos del Elector

Artículo 8º.- Electores. SON electores provinciales los ciudadanos argentinos con domicilio en la Provincia de Córdoba, mayores de dieciocho (18) años de edad hasta el día del comicio y que reúnan los requisitos exi-

gidos por la presente Ley.

Artículo 9º.- Extranjeros. SON también electores provinciales los extranjeros que reúnan los mismos requisitos establecidos en el artículo anterior y, además, tengan una residencia permanente y continua en la Provincia de Córdoba superior a cinco (5) años.

La residencia se acredita con un certificado expedido por el organismo oficial en el que conste -en forma indubitada y fehaciente- dicha circunstancia.

No pueden ser electores provinciales aquellos que posean alguna de las inhabilitaciones contempladas en la presente Ley.

Artículo 10.- Prueba. LA calidad de elector, tanto del ciudadano argentino cuanto del extranjero -a los fines de emitir el sufragio- se prueba, única y exclusivamente, por la inclusión de los mismos en el padrón electoral.

Artículo 11.- Inhabilitados. NO poseen calidad de elector:

- 1) Los dementes declarados tales en juicio o cuando -sin estarlo- se encuentren recluidos en establecimientos públicos;
- 2) Los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito;
- 3) Los condenados por sentencia firme, hasta la obtención de salidas transitorias del régimen de semilibertad, de la libertad condicional o, en su caso, de la libertad asistida;
- 4) Los declarados rebeldes en causa penal hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción, y
- 5) Los inhabilitados según las disposiciones que establece la Ley que regula el régimen de los partidos políticos o los que resultaren privados del ejercicio de sus derechos políticos en virtud de otras normas legales.

Artículo 12.- Procedimiento para las inhabilitaciones. LAS inhabilitaciones las determina el Juzgado Electoral -mediante un procedimiento sumario-, de oficio, por denuncia de cualquier elector o por querrela fiscal. La que fuere dispuesta por sentencia es asentada una vez que la resolución haya sido notificada oficialmente al Juzgado Electoral. Los magistrados de la causa, cuando el fallo queda firme, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, lo comunican al Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas y al Juzgado Electoral, con remisión de copia de la parte resolutive y la individualización del nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, número y clase de documento de identidad y oficina enroladora del inhabilitado.

Artículo 13.- Rehabilitación. LA rehabilitación del ciudadano inhabilitado se tramitará mediante un procedimiento sumarísimo, iniciado de oficio o a petición de parte, a los fines que el Juzgado Electoral compruebe si ha desaparecido -o no- la causa que originó la inhabilitación, y -en su caso- ordene el cese de la exclusión que se hubiere dispuesto, en virtud de los artículos precedentes.

Artículo 14.- Inmunidad del elector. NINGUNA

autoridad está facultada para privar de libertad al elector desde la cero (0:00) hora del día de la elección hasta la clausura de los comicios, salvo:

- 1) En caso de flagrante delito;
- 2) Cuando existiera orden de detención emanada de autoridad competente, o
- 3) Por contravención al Código de Faltas.

En este último caso se efectuará el procedimiento pertinente, otorgando de inmediato la libertad al elector a fin de no coartar el derecho al sufragio. Si no hubiera tiempo material, se permitirá votar al elector en primer término y luego se hará el procedimiento.

Fuera de estos supuestos no se obstaculizará al elector en el tránsito desde su domicilio hasta el lugar de los comicios, ni podrá ser molestado en el desempeño de su derecho cívico.

Artículo 15.- Electores que deben trabajar. LOS electores que por razones de trabajo estén ocupados durante las horas del acto electoral tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores, con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en los comicios, sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo o compensación de horario. Dicha licencia es de carácter obligatorio y no debe tener otro límite en el tiempo que el que requiera el ciudadano para ejercer su derecho cívico.

Exceptúase de la licencia dispuesta precedentemente a los integrantes de las fuerzas de seguridad y de la administración electoral, en tanto se encuentren afectados al desarrollo del acto comicial.

Artículo 16.- Amparo. EL elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, puede solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al Juzgado Electoral o al magistrado judicial más próximo, quienes, si comprueban la ilegalidad o arbitrariedad invocada por el elector, deben -obligatoriamente- hacer cesar en forma inmediata y urgente el impedimento denunciado.

Asimismo, el elector también puede pedir amparo al Juzgado Electoral o al magistrado judicial más próximo a su domicilio, para que le sea entregado su documento de identidad retenido indebidamente por un tercero.

Artículo 17.- Obligación de votar. Excepciones. TODO elector tiene el deber de votar en toda elección provincial, municipal o comunal que se realice en su circuito.

Quedan exentos de esa obligación:

- 1) Los mayores de setenta (70) años;
- 2) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta Ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

3) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.

Tales ciudadanos se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extiende certificación escrita que acredite la comparecencia;

4) Los que por causa de alguna enfermedad o fuerza mayor se encuentren imposibilitados de asistir al acto comicial. Esta causal debe ser justificada por médico de establecimiento sanitario público -nacional, provincial o municipal- y en ausencia de éstos, por médicos particulares. Los profesionales de establecimientos públicos están obligados a responder, el día de los comicios, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado debiendo concurrir a su domicilio para verificar esa circunstancia y entregarle el certificado correspondiente;

5) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir a los comicios. En este caso el empleador o su representante legal deben elevar al Juzgado Electoral la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo por separado la pertinente certificación, y

6) Los miembros de las fuerzas de seguridad no empadronados en ninguna de las mesas del local asignado a su custodia.

La falsedad en las certificaciones aquí previstas hacen pasible a quienes la otorgan, de las penas establecidas en el Artículo 292 del Código Penal.

Artículo 18.- Personal policial. LA autoridad, preferentemente, debe asignar a los efectivos policiales la custodia de aquellos lugares donde se encuentren empadronados.

Dentro de los veinte (20) días antes de cada elección, las autoridades de la Policía de la Provincia, deben comunicar al Juzgado Electoral la nómina de los efectivos policiales que revistan a sus órdenes y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, inciso 6) de la presente Ley están exentos de la obligación de votar. Dicha lista debe consignar los siguientes datos: apellido, nombres, número de documento de identidad, clase, domicilio y el lugar asignado a la custodia.

Cualquier modificación posterior en la nómina se la hace conocer al Juzgado Electoral inmediatamente de ocurrida y en la forma indicada.

Capítulo III

Formación de Ficheros

Artículo 19.- Ficheros. A los fines de la formación y fiscalización del registro de electores, el Juzgado Electoral confecciona los ficheros electorales provincia-

les, en base al padrón utilizado en la última elección, actualizado hasta ciento ochenta (180) días antes de la fecha del comicio, con la incorporación de los ciudadanos que cumplieran dieciocho (18) años de edad hasta el mismo día de la elección, ordenándolos de la siguiente manera:

- 1) Electores provinciales,
- 2) Electores extranjeros, y
- 3) Electores inhabilitados y excluidos.

Asimismo dispondrá los mecanismos adecuados para su actualización permanente, conforme lo previsto en la presente Ley.

Artículo 20.- Organización. EL Juzgado Electoral organiza los ficheros de la siguiente manera:

1) El fichero de electores provinciales contiene la ficha de todos los electores con domicilio en la jurisdicción y puede ser dividido según el sexo de los mismos. Las fichas se clasifican en tres (3) subdivisiones:

- a) Por orden alfabético;
- b) Por orden numérico de documento de identidad, con indicación de su tipo, y
- c) Por demarcaciones territoriales, o sea en departamentos, secciones o circuitos electorales.

2) El fichero de electores extranjeros contiene la ficha de todos los electores con domicilio en la jurisdicción, que acrediten cinco (5) años de residencia continua en la Provincia y puede ser dividido según el sexo de los mismos. Las fichas se clasifican en dos (2) subdivisiones:

- a) Por orden alfabético, y
- b) Por demarcaciones territoriales, o sea en departamentos, secciones o circuitos electorales.

3) El fichero de inhabilitados y excluidos, contiene la ficha de todos los electores inhabilitados y excluidos del Registro Electoral, domiciliados dentro de la jurisdicción y pueden ser divididos según el sexo de los mismos. Las fichas se clasifican en tres (3) subdivisiones:

- a) Por orden alfabético;
- b) Por orden numérico de documento de identidad, con indicación de su tipo, y
- c) Por orden cronológico de la cesación de la inhabilitación.

Artículo 21.- Actualización. LA actualización y depuración de los ficheros es permanente, y tiene por objeto:

- 1) Incluir los datos de los nuevos ciudadanos inscriptos;
- 2) Asegurar que en la base de datos no exista más de un registro válido para un mismo ciudadano;
- 3) Depurar los registros ya existentes por cambio de domicilio de los ciudadanos;
- 4) Excluir de la lista índice de electores a los ciudadanos que estén inhabilitados para votar, y
- 5) Suprimir de las listas de electores a los fallecidos o declarados presuntamente fallecidos por senten-

cia judicial.

Artículo 22.- Documentos de identidad. LA Libreta de Enrolamiento (Ley Nacional Nº 11.386), la Libreta Cívica (Ley Nacional Nº 13.010), y el Documento Nacional de Identidad (Ley Nacional Nº 17.671) son documentos habilitantes a los fines de esta Ley, tanto para la inscripción en el padrón correspondiente, como para la emisión del voto.

Los electores extranjeros acreditarán su identidad mediante la presentación de la Cédula Federal o pasaporte, previa inscripción en el registro provincial de electores extranjeros correspondiente.

Artículo 23.- Nuevos ejemplares de documentos de identidad. Cambios de domicilio. CON las comunicaciones que al efecto le curse el Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el Juzgado Electoral ordena que se anoten en las fichas, las constancias de haberse extendido nuevos ejemplares de los documentos de identidad y los cambios de domicilio que se operen. En este último caso incluye la ficha dentro del circuito que corresponda y si el nuevo domicilio es de otro distrito lo remite al Juez Federal con competencia electoral y dispone la baja del elector en su registro.

Artículo 24.- Actualización del fichero de inhabilitados. CON las informaciones de inhabilitados y excluidos que envía el juez de la causa, el Juzgado Electoral procede, en su caso, a ordenar se anote en las fichas las constancias pertinentes y el retiro de la inscripción en el fichero correspondiente, así como su inclusión en el de inhabilitados y excluidos, por el término que éstas duren.

Artículo 25.- Fallecimiento de electores. EL Juzgado Electoral solicita al Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la nómina de electores fallecidos y fotocopias certificadas de su respectiva partida de defunción.

Una vez realizadas las verificaciones del caso, el Juzgado Electoral ordena la baja y el retiro de las fichas.

El Juzgado Electoral, mensualmente, publica a través de su página web y pone a disposición de los partidos o confederaciones políticas reconocidas la nómina de electores fallecidos.

Artículo 26.- Inscripción múltiple y errores. LOS interesados y los apoderados de los partidos o confederaciones políticas reconocidas podrán reclamar ante el Juzgado Electoral todos los casos de inscripciones múltiples u otros errores en los ficheros. Este reclamo debe efectuarse dentro de los treinta (30) días contados a partir de la carga en la página web o de comunicada la resolución de inhabilitación o exclusión.

Capítulo IV Listas Provisorias

Artículo 27.- Impresión de listas provisorias. EL Juzgado Electoral es el responsable de la confección e impresión de las listas provisorias.

En estas listas son incluidas las novedades re-

gistradas en el Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas, hasta ciento ochenta (180) días antes de la fecha de elección, como así también las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad hasta el mismo día de los comicios.

Las listas provisorias de electores contienen los siguientes datos: número y tipo de documento de identidad, apellido, nombre, sexo, grado de instrucción, profesión y domicilio de los inscriptos, número de orden y una columna para observaciones.

Artículo 28.- Exhibición de listas provisorias. EL Juzgado Electoral debe disponer que las listas provisorias a que se refiere el artículo anterior tengan publicidad permanente en su página web, con resguardo de seguridad a fin de impedir su vulnerabilidad.

Asimismo, con una anticipación mínima a los ochenta (80) días a la fecha del comicio que se hubiera convocado, el Juzgado Electoral debe disponer la exhibición de las listas provisorias impresas en papel en todas las municipalidades, comunas, reparticiones y lugares públicos que estime necesario, oportuno y/o conveniente.

Cuando hubiere convocatoria a elecciones las listas provisorias serán distribuidas en soporte digital u óptico -en número suficiente-, a todos los partidos o confederaciones políticas reconocidas o que hubiesen solicitado su reconocimiento, por lo menos ochenta (80) días antes del acto comicial.

Artículo 29.- Reclamo de electores. Plazos. LOS electores que por cualquier causa no figuren en las listas provisorias o estuviesen anotados erróneamente, tienen derecho a reclamar ante el Juzgado Electoral dentro de los quince (15) días a partir de la publicación de las listas provisorias en la página web y/o exhibición en las municipalidades, comunas, reparticiones y lugares públicos que se hubiera dispuesto.

El reclamo se formula personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, adjuntando prueba suficiente para que se subsane la omisión o el error.

El Juzgado Electoral debe devolver al elector reclamante, en un plazo no mayor de cinco (5) días de recibido el reclamo, la documental remitida por idéntica vía al último domicilio que registre el elector en su documento de identidad o el que hubiera fijado especialmente con motivo de esta presentación.

Dentro del mismo plazo, las Juntas Electorales Municipales y Comunales pueden receptar los reclamos a los que se refiere este artículo, los que deben comunicarse -dentro de los dos (2) días hábiles de recibido- al Juzgado Electoral.

Artículo 30.- Formulario de reclamos. Gratuidad del envío. EL reclamo se realiza en papel simple o en formularios provistos gratuitamente por las oficinas de correos, las distintas juntas electorales o la policía y de-

be ser firmado y signado con la impresión dígito pulgar del reclamante.

Todos los reclamos que formulan los ciudadanos en virtud de las disposiciones de esta Ley y dirigidos al Juzgado Electoral son transportados por el correo como piezas certificadas, con aviso de recepción y exentas de porte para el requirente, con cargo al Estado Provincial.

Artículo 31.- Procedimiento para la eliminación de electores. CUALQUIER elector, partido, alianza o confederación política reconocida o que tuviese en trámite su reconocimiento, tiene derecho a pedir que se eliminen o tachen los ciudadanos fallecidos, los inscriptos más de una vez o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta Ley.

El Juzgado Electoral dicta resolución, previa verificación sumaria de los hechos que se invoquen, consideración de las pruebas presentadas y realización de la audiencia que se conceda al ciudadano impugnado. Si hace lugar al reclamo dispone se anote la inhabilitación en la columna de observaciones de las listas existentes en el Juzgado. En cuanto a los fallecidos o inscriptos más de una vez, se eliminan de aquéllas dejándose constancia en las fichas.

Las solicitudes de impugnaciones o tachas deben ser presentadas durante un plazo de quince (15) días corridos a partir de la fecha de exhibición de las listas provisorias, previstas en el artículo 28 de la presente Ley. El impugnante puede tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y debe ser notificado al domicilio constituido al momento de la impugnación de la resolución definitiva.

Capítulo V Padrón Electoral

Artículo 32.- Padrón definitivo. LAS listas de electores depuradas constituyen el padrón electoral definitivo que tiene que estar impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección. Las listas que sirvieron para anotar las correcciones y reclamos quedan archivadas en el Juzgado Electoral.

El Juzgado Electoral debe disponer que el padrón electoral definitivo, se publique en su página web, con resguardo de seguridad a fin de impedir su vulnerabilidad y en los sitios web oficiales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Provinciales.

Asimismo, con una anticipación mínima a los treinta (30) días aniversarios a la fecha del comicio que se hubiera convocado, el Juzgado Electoral debe disponer la exhibición del padrón electoral definitivo impreso en papel en todas las municipalidades, comunas, reparticiones y lugares públicos que estime necesario, oportuno y/o conveniente.

El padrón es distribuido en número suficiente por lo menos veinticinco (25) días antes del acto comicial.

Artículo 33.- Impresión de ejemplares definitivos. EL Juzgado Electoral dispone la impresión de los ejemplares del padrón electoral definitivo que sean necesarios para las elecciones, en los que se incluyen, además de los datos requeridos por el artículo 27 de la presente Ley para las listas provisionales, una columna para anotar la emisión del voto.

El padrón electoral definitivo destinado a los comicios, es siempre autenticado por el Juzgado Electoral y lleva al dorso las actas de clausura y apertura.

En el encabezamiento de cada uno de los ejemplares debe figurar -con caracteres sobresalientes- el departamento, el circuito y la mesa correspondientes.

Artículo 34.- Requisitos a cumplimentar en la impresión. LA impresión de las listas y registros la realiza el Poder Judicial de la Provincia en función de la normativa vigente que resulte aplicable.

Artículo 35.- Distribución de ejemplares. EL padrón electoral definitivo y autenticado se distribuye en soporte papel, digital u óptico, de la siguiente forma:

1) Un (1) ejemplar a cada Junta Electoral Municipal y Comunal;

2) Dos (2) ejemplares al Ministerio de Gobierno, o al organismo que en el futuro lo sustituyere en su competencia, que los conserva en sus archivos durante tres (3) años como mínimo;

3) Un (1) ejemplar, como mínimo, a cada uno de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas que participen de la compulsa electoral, y

4) Un (1) ejemplar al Consejo de Partidos Políticos.

Artículo 36.- Plazo para subsanar errores u omisiones. LOS ciudadanos están facultados para solicitar, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores u omisiones existentes en el padrón efectuando el reclamo por la vía establecida en el primer párrafo del artículo 29 de la presente Ley. El Juzgado Electoral dispone se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del Juzgado y en los que debe remitir para la elección a los presidentes de mesa.

Los reclamos que autoriza este artículo se limitan exclusivamente a la enmienda de errores u omisiones. En ningún caso son admisibles los reclamos e impugnaciones a que se refieren los artículos 29 y 31 de la presente Ley.

El Juzgado Electoral, ni ningún otro organismo del Estado, partido político o particular, puede dar órdenes directas o indirectas de inclusión de electores en los ejemplares ya enviados a los presidentes de mesa.

Artículo 37.- Inhabilitaciones y ausencia con presunción de fallecimiento. Comunicación. TODOS los jueces de la Provincia, dentro de los cinco (5) días desde la fecha en que las sentencias que dicten pasen en autoridad de cosa juzgada, deben notificar por escrito al Juzgado Electoral el nombre, apellido, número y tipo de do-

cumento de identidad, clase, sexo y domicilio de los electores inhabilitados por alguna de las causales previstas en el artículo 11 de la presente Ley, adjuntando a la notificación copia autenticada de la fecha y de la parte dispositiva de tales sentencias, en la misma forma que se hacen al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria. Los mismos requisitos deben cumplir los magistrados que decreten ausencia con presunción de fallecimiento.

Artículo 38.- Tacha de electores inhabilitados. EL Juzgado Electoral dispone que sean tachados con una línea roja, los electores comprendidos en el artículo 11 de la presente Ley, en los ejemplares del padrón que se distribuyen, agregando además la palabra "Inhabilitado" y el artículo e inciso de la Ley que establezca la causa de la inhabilidad.

Artículo 39.- Copia para los partidos políticos. EL Juzgado Electoral debe entregar a los representantes de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas, la nómina de electores inhabilitados y declarados ausentes con presunción de fallecimiento conforme al procedimiento establecido en el artículo 37 de la presente Ley.

Los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas pueden denunciar por escrito las omisiones, errores o anomalías que observen.

TÍTULO II

DIVISIONES TERRITORIALES Y AGRUPACIÓN DE ELECTORES

Capítulo I

Divisiones Territoriales

Artículo 40.- Secciones electorales. A los fines electorales el territorio de la Provincia se divide en tantas secciones cuantos sean los Departamentos que la conforman.

Artículo 41.- Circuitos electorales. A los mismos fines previstos en el artículo anterior, se reconocen tantos circuitos como municipios y comunas existan en la Provincia.

Los circuitos electorales son numerados correlativamente dentro de las secciones.

Capítulo II

Agrupación de Electores

Artículo 42.- Mesas electorales. CADA circuito se divide en mesas las que se constituyen con hasta trescientos cincuenta (350) electores inscriptos, agrupados por sexo y ordenados alfabéticamente. Si realizado tal agrupamiento de electores queda una fracción inferior a sesenta (60), esa fracción se incorpora a la mesa que el Juzgado Electoral determine.

Si resta una fracción de sesenta (60) o más, se forma con dicha fracción una nueva mesa electoral.

El Juzgado Electoral, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población están separados por largas distan-

cias o accidentes geográficos que dificultan la concurrencia de los ciudadanos a los comicios, puede constituir mesas electorales en dichos núcleos de población, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios y por orden alfabético.

Asimismo, en circunstancias especiales, cuando el número de electores y la ubicación de sus domicilios así lo aconsejen, el Juzgado Electoral puede disponer la instalación de mesas receptoras mixtas.

Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenan alfabéticamente. Una vez realizada esta operación se procede a agruparlos en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.

TÍTULO III DE LOS ACTOS PREELECTORALES

Capítulo I Convocatoria

Artículo 43.- Convocatoria. LA convocatoria a elecciones de Gobernador, Vicegobernador, integrantes del Tribunal de Cuentas y Legisladores Provinciales es de competencia del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Artículo 44.- Plazo y forma. LA convocatoria a elecciones debe hacerse con noventa (90) días, por lo menos, de anticipación al acto electoral, debiendo indicarse el sistema electoral aplicable.

Sí el Poder Ejecutivo Provincial no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria debe ser realizada por el Poder Legislativo, mediante resolución tomada por lo menos con ochenta (80) días de anticipación al acto electoral.

La convocatoria debe expresar:

- 1) Fecha de la elección;
- 2) Clase y número de cargos a elegir;
- 3) Número de candidatos por los que puede votar el elector, y
- 4) Indicación del sistema electoral aplicable.

Capítulo II Apoderados y fiscales de los Partidos Políticos

Artículo 45.- Apoderados de los partidos políticos. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas deben designar un apoderado general y un suplente que actúa sólo en caso de ausencia o impedimento del titular. Dichos apoderados son los representantes de los partidos, alianzas o confederaciones políticas a todos los fines establecidos por esta Ley. Cualquier modificación en la designación del apoderado titular o suplente debe ser comunicada al Juzgado Electoral.

Artículo 46.- Fiscales generales y fiscales de mesa de los partidos políticos. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas reconocidas en la Provincia y que se presentan a elección, pueden nombrar fiscales

para que los representen ante las mesas receptoras de votos.

También pueden designar fiscales generales de la sección con idénticas facultades, estando habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa.

La misión de estos auxiliares de los comicios es la de fiscalizar el acto electoral y formalizar los reclamos que estimen correspondientes en defensa del partido, alianza o confederación política que representan. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general, en ningún caso se permite la actuación simultánea en una mesa de más de un fiscal por partido, alianza o confederación política.

Los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben comunicar al Juzgado Electoral la nómina de fiscales generales, al menos dos (2) días antes de los comicios con indicación clara de apellido, nombre, número de documento de identidad y domicilio de cada uno de ellos y de sus suplentes.

Artículo 47.- Requisitos para ser fiscal. LOS fiscales de mesa y fiscales generales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben saber leer y escribir y ser electores del circuito o de la sección en que pretenden actuar, según corresponda.

Los fiscales pueden votar en las mesas que fiscalizan aunque no estén inscriptos en ellas, siempre que lo estén en el circuito en que actúan. En ese caso se agrega el nombre del votante en la hoja del registro, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa en que está inscripto.

Artículo 48.- Otorgamiento de poderes a fiscales. LOS poderes de los fiscales de mesa y fiscales generales son otorgados por las autoridades partidarias y deben contener nombre y apellido completo, número de documento de identidad, indicación del partido, alianza o confederación política que representa y firma al pie del instrumento de la autoridad partidaria que lo otorga.

Estos poderes deben ser presentados a los presidentes de mesa para su reconocimiento en la apertura de los comicios.

Capítulo III Oficialización de Listas

Artículo 49.- Registro de los candidatos y pedidos de oficialización de listas. DESDE la convocatoria a elecciones y hasta cincuenta (50) días antes al acto electoral, los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben registrar ante el Juzgado Electoral las listas de los candidatos públicamente proclamados, quienes deben reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

Las listas de candidatos deben ser integradas

observando las prescripciones de la ley de participación equivalente de género vigente.

Los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben presentar, junto con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos, aceptación del cargo y el último domicilio electoral.

Artículo 50.- Candidatura única. NINGUNA persona podrá ser candidato al mismo tiempo y por igual o diferente cargo, en distintos partidos políticos, alianza o confederación de partidos políticos, que presenten listas para su oficialización.

Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes partidos políticos, alianzas o confederaciones de éstos, ni de listas entre sí. Su inobservancia será causal de rechazo del postulante, debiendo procederse en tal caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 51 de la presente Ley.

Ninguna persona podrá ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos. Dicha prohibición se hará extensiva para los candidatos a cargos nacionales, provinciales y municipales, cuando haya simultaneidad electoral o se hubiere fijado la misma fecha para la realización del comicio.

Artículo 51.- Resolución judicial. DENTRO de los cinco (5) días subsiguientes a la presentación de listas de candidatos, el Juzgado Electoral dicta resolución fundada respecto de la calidad de los candidatos.

Dicha resolución es apelable en forma fundada, dentro de los tres (3) días, ante la Cámara Electoral ad hoc, por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que hayan presentado listas. El Tribunal de Alzada, previa vista -por el término de dos (2) días- al o a los partidos, alianzas o confederaciones políticas cuyas listas sean cuestionadas, debe resolver en el plazo de tres (3) días. El recurso será concedido con efecto devolutivo.

Firme la resolución que establece que algún candidato no reúne las calidades necesarias, el Juzgado Electoral notifica al partido, alianza o confederación política que representa, para que dentro de dos (2) días de recibida la notificación designe otro candidato para que ocupe el lugar vacante en la lista. Transcurrido dicho plazo sin que el partido, alianza o confederación política se manifieste expresamente, se corre automáticamente el orden de lista y se completa con los suplentes.

El partido, alianza o confederación política debe registrar en el plazo de dos (2) días los suplentes necesarios para completar la lista, bajo apercibimiento de resolverse la oficialización o el rechazo de acuerdo al número de candidatos hábiles subsistentes.

Todas las resoluciones se notificarán por diligencia o por cédula de notificación, quedando firmes después de dos (2) días de practicadas o de recibidas.

Boleta Única de Sufragio

Artículo 52.- Confección. OFICIALIZADAS las listas de candidatos, el Juzgado Electoral ordenará confeccionar un modelo de Boleta Única de Sufragio, cuyo diseño y características deben respetar las especificaciones establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 53.- Requisitos. LA Boleta Única de Sufragio estará dividida en espacios, franjas o columnas de igual dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas. Los espacios, franjas o columnas contendrán:

1) El nombre del partido, alianza o confederación política;

2) La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya solicitado utilizar al momento de registrar su lista de candidatos;

3) Fotografía color del candidato a cargo ejecutivo o unipersonal;

4) El nombre y apellido completos de los candidatos a gobernador y vicegobernador;

5) El nombre y apellido completos de los candidatos titulares y suplentes a legislador por distrito único, debiendo estar resaltados con una tipografía mayor, los primeros tres (3) candidatos titulares;

6) El nombre y apellido completos del candidato titular y suplente a legislador departamental;

7) El nombre y apellido completos de los candidatos a miembros del tribunal de cuentas de la Provincia, titulares y suplentes;

8) Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia, y

9) Un casillero en blanco, de mayores dimensiones que el especificado en el inciso anterior, ubicado en el margen superior derecho del espacio, franja o columna de cada una de las agrupaciones políticas intervinientes, para que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia por lista completa de candidatos. Esta última opción podrá ejercerse -a criterio exclusivo del elector-, mediante la adhesión de un sticker aprobado por el Juzgado Electoral en la misma oportunidad en que se oficialice la Boleta Única de Sufragio, que contenga la sigla, monograma, logotipo, escudo, número, símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya registrado, según el inciso 2) del presente artículo. La adhesión del referido sticker, en cualquier lugar de la Boleta Única de Sufragio deberá computarse como voto por la lista completa de candidatos oficializados de la agrupación política de que se trate.

Cuando una Municipalidad o Comuna convoque a elecciones en forma simultánea o en la misma fecha fijada para la Provincia, la Boleta Única de Sufragio contendrá además:

a) El nombre y apellido completos del candidato a intendente, del viceintendente si lo hubiere, concejales titulares y suplentes; o en su caso, de los candidatos a miembros titulares y suplentes de la comisión comunal;

b) El nombre y apellido completos de los candidatos a miembros del tribunal de cuentas, titulares y suplentes, y

c) Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia.

Artículo 54.- Diseño. LA Boleta Única de Sufragio debe ser confeccionada observando los siguientes requisitos en su contenido y diseño:

1) Anverso:

a) El año en que la elección se lleva a cabo;

b) La individualización de la Sección y Circuito Electoral;

c) La indicación del número de mesa, y

d) Las instrucciones para la emisión del voto.

2) Reverso: un espacio demarcado para que inserten las firmas las autoridades de mesa y los fiscales de mesa de los partidos, alianzas o confederaciones políticas;

3) La impresión será en idioma español, con letra tipo "Arial", de tamaño 8 de mínima y 12 de máxima, en papel no transparente con la indicación gráfica de sus pliegues, pudiendo resaltarse en mayor tamaño el nombre y apellido del candidato a: gobernador, primer legislador por distrito único, legislador por departamento y primer candidato a miembro del tribunal de cuentas, primer candidato a convencional constituyente e intendente municipal o presidente comunal, en su caso;

4) Tendrá una dimensión no inferior a los cuatrocientos veinte milímetros (420 mm) de ancho por doscientos noventa y siete milímetros (297 mm) de alto, quedando facultado el Juzgado Electoral a establecer el tamaño máximo de acuerdo con el número de partidos, alianzas o confederaciones políticas que intervengan en la elección;

5) Al doblarse en cuatro (4) partes por los pliegues demarcados, debe pasar fácilmente por la ranura de la urna, y

6) Debe estar identificada con un código de barras de manera correlativa y adherida a un talón con igual identificación y contener las exigencias previstas en el inciso 1), subincisos a), b) y c) del presente artículo.

Cuando el acto electoral deba realizarse como consecuencia del ejercicio de los institutos de democracia semidirecta, el Juzgado Electoral queda facultado para diseñar la boleta de sufragio con una dimensión inferior a la prevista en el inciso 4) del presente artículo y con un tamaño de letra superior al establecido en el inciso 3) del mismo.

Artículo 55.- Diseño para no videntes. EL Juz-

gado Electoral dispondrá también la confección de plantillas idénticas a las mencionadas en los artículos 52 y 53 de la presente Ley, en papel transparente y alfabeto Braille, fáciles de colocar por sobre la Boleta Única y con ranuras sobre los casilleros, para que las personas discapacitadas visuales puedan ejercer su opción electoral.

Habrán ejemplares de este tipo en todos los centros de votación, para los electores que las soliciten.

Artículo 56.- Sorteo. EL Juzgado Electoral determinará el orden de precedencia de los espacios, franjas o columnas de cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas mediante un sorteo público.

Todos los partidos, alianzas o confederaciones políticas formarán parte del sorteo; si resueltas las cuestiones recursivas alguna fuerza política quedase fuera del proceso, se realizará el corrimiento respectivo, en el orden correlativo, a fin de evitar espacios en blanco.

Artículo 57.- Aprobación de las boletas. ELABORADO el modelo de Boleta Única de Sufragio, el Juzgado Electoral lo pondrá en conocimiento y consideración de los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y fijará una audiencia a los fines de receptar las observaciones que formulen las fuerzas políticas participantes, las que son resueltas previa vista al observado.

En esta oportunidad los partidos, alianzas o confederaciones políticas podrán someter al Juzgado Electoral la aprobación del sticker mencionado en el artículo 53 de la presente Ley, que represente la opción de voto por lista completa.

No existiendo observaciones o resueltas las formuladas, el Juzgado Electoral aprobará el modelo propuesto y mandará a imprimir la Boleta Única de Sufragio oficializada, que será la única válida para la emisión del voto.

Artículo 58.- Publicidad. EL Juzgado Electoral hará publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en un diario de circulación masiva de la Provincia, los facsímiles de la Boleta Única de Sufragio con las cuales se sufragará.

Artículo 59.- Impresión. LA impresión de las Boletas Únicas de Sufragio, del afiche con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que integran la Boleta Única de Sufragio y las actas de escrutinio y cómputo, es potestad exclusiva del Juzgado Electoral, el que adoptará las medidas de seguridad para garantizar la autenticidad de dicha documentación.

Artículo 60.- Cantidad. EL Juzgado Electoral mandará a imprimir las Boletas Únicas de Sufragio en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, con más un diez por ciento (10%) adicional para reposición.

En cada mesa electoral debe haber igual número de Boletas Únicas de Sufragio que de electores habilitados, cifra a la que se le adicionará el porcentaje establecido en el párrafo anterior para reposición.

Artículo 61.- Plazo para la impresión. LA Boleta Única de Sufragio deberá estar impresa con una antelación no menor a los quince (15) días del acto electoral.

Capítulo V

Distribución de Equipos y Útiles Electorales

Artículo 62.- Provisión. EL Juzgado Electoral, con la debida antelación, arbitrará los medios necesarios para disponer de urnas, padrones, formularios, boletas únicas de sufragio, plantillas para no videntes, sobres, papeles especiales, sellos, útiles y demás elementos que deba hacerles llegar a los presidentes de mesa.

Asimismo dispondrá la contratación del servicio para el traslado de los Fiscales Públicos Electorales y de todo el material electoral a los centros de votación habilitados, a fin de garantizar el normal desarrollo de la elección en los tiempos previstos en esta Ley.

Artículo 63.- Nómina de documentos y útiles. EL Juzgado Electoral entrega al Fiscal Público Electoral, con destino a los presidentes de mesas, las urnas a utilizar el día del acto electoral. Las mismas deben ser identificadas con un número para determinar su lugar de destino, de lo cual lleva registro el Juzgado Electoral.

Las urnas contienen en su interior los siguientes documentos y útiles:

1) Tres (3) ejemplares originales del padrón electoral para cada mesa de electores, que van colocados dentro de un sobre rotulado con la inscripción "Ejemplares del Padrón Electoral" y con la indicación de la mesa a que corresponde;

2) Acta de apertura de los comicios y acta de cierre de los mismos;

3) Formularios preimpresos para votos recurridos;

4) Formularios preimpresos para conformar el resultado del escrutinio;

5) Formulario preimpreso para incorporación tardía, rotación y reemplazo de autoridades de mesa y fiscales partidarios;

6) Formulario preimpreso para consignar los datos que identifiquen a los electores que, conforme a las previsiones de la presente Ley, puedan ser agregados al padrón de mesa; este formulario contendrá un casillero adjunto a los datos donde el votante incorporado dejará su impresión dígito pulgar derecha;

7) Certificado preimpreso para entregar a quienes concurren a votar y no figuran en el padrón de la mesa o se encontraren excluidos mediante tacha o cuando por errores en el documento le impidieren sufragar;

8) Dos (2) hojas tamaño A-4, impresas con el número de la mesa de votación y el apellido y nombre

correspondiente al primer y último elector habilitado en la misma, a efectos de fijarlos en lugar visible para facilitar a los electores la ubicación de su mesa;

9) Sobres con la leyenda "Votos Recurridos";

10) Fajas de seguridad para el cierre de las urnas y para el sellado de las aberturas del cuarto oscuro;

11) Talonarios de Boletas Únicas de Sufragio;

12) Plantillas confeccionadas en sistema Braille para discapacitados visuales;

13) Afiches con la publicación de las listas completas de los candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que integran la Boleta Única de Sufragio;

14) Sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, bolígrafos indelebles, papel, cola y otros elementos en cantidad que fuera menester;

15) Un (1) ejemplar de esta Ley, y

16) Una (1) gacetilla de instrucciones elaborada por el Juzgado Electoral.

El traslado y entrega de las urnas debe efectuarse con la anticipación suficiente para que puedan ser recibidas en el lugar en que funciona la mesa, a la hora de apertura del acto electoral.

TÍTULO IV EL ACTO ELECTORAL

Capítulo I

Normas Especiales para su Celebración

Artículo 64.- Aglomeración de tropas y custodia policial. EL día de la elección queda prohibida la aglomeración de tropas o cualquier ostentación de fuerza armada.

El Juzgado Electoral dispone que el día de realización del acto electoral, se destinen efectivos policiales a los locales donde se celebran los comicios, con el objeto de asegurar la libertad y regularidad de la emisión del sufragio. Este personal de custodia sólo recibe órdenes del funcionario que ejerza la presidencia de la mesa, en aquellas cuestiones atinentes a la presente Ley.

El Juzgado Electoral puede solicitar, arbitrando los mecanismos correspondientes, la presencia de fuerzas nacionales a los efectos de la custodia y seguridad de los comicios.

Artículo 65.- Miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. LOS jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y autoridades policiales no pueden encabezar grupos de ciudadanos durante la elección ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad de sufragio ni realizar reuniones con el propósito de influir en los actos comiciales.

Al personal retirado de las Fuerzas Armadas y de seguridad -nacional o provincial-, cualquiera fuera su jerarquía, se le prohíbe asistir al acto electoral vistiendo su uniforme y portando armas.

El personal de las fuerzas policiales y fuerzas

armadas y de seguridad en actividad, pueden asistir al acto electoral portando sus armas reglamentarias.

Artículo 66.- Prohibiciones. DESDE cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciación de los comicios, quedan prohibidos los actos públicos de proselitismo.

Desde la cero (0:00) hora del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, queda prohibido:

1) La exhibición, el depósito y la portación de armas, aún en este último caso a personas autorizadas para ello por autoridad competente, en los lugares donde se realizan los comicios y hasta una distancia de cien (100) metros del perímetro de aquellos, a excepción del personal policial o de las fuerzas armadas o de seguridad asignado a la custodia del local donde se celebren los comicios;

2) Los espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral y que no esté expresamente autorizada por autoridad competente;

3) El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas;

4) Ofrecer o entregar a los electores facsímiles de Boletas Únicas de Sufragio dentro de un radio de cien (100) metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino;

5) A los electores, el uso de banderas, divisas u otros distintivos;

6) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de cien (100) metros del lugar en que se instalan mesas receptoras de votos. El Juzgado Electoral puede disponer el cierre transitorio de los locales que están en infracción a lo dispuesto precedentemente. No deben instalarse mesas receptoras a menos de cien (100) metros de la sede central en que se encuentre el domicilio legal de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, y

7) La publicación y difusión de resultados de encuestas en boca de urna o similares.

Capítulo II

Mesas Receptoras de Votos

Artículo 67.- Autoridades de mesa. CADA mesa electoral tiene como máxima autoridad un (1) ciudadano que actúa con el título de presidente de mesa. Se designa también un (1) presidente suplente, que auxilia al presidente y lo reemplaza en los casos en que esta Ley determina.

Todas las funciones que esta Ley atribuye a los electores, constituye una carga pública y son irrenunciables.

Los presidentes de las mesas receptoras de votos actuarán con entera independencia de toda autoridad

y no obedecerán orden alguna que les impida el ejercicio de sus funciones.

Artículo 68.- Requisitos. LOS presidentes de mesa, titular y suplente, deben reunir los siguientes requisitos para el desempeño de esta función:

1) Ser elector hábil;

2) Estar domiciliado en el circuito electoral donde debe desempeñarse y preferentemente en la mesa en la que vota;

3) Ser docente de cualquiera de los niveles de la enseñanza, empleado público o privado afectado a tareas administrativas, en actividad o jubilado; y

4) No ser candidato en esa elección.

A los efectos de verificar la concurrencia de estos requisitos, el Juzgado Electoral está facultado para solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes que estime necesarios.

Artículo 69.- Sufragio de las autoridades de la mesa. LOS presidentes de mesa, titular y suplente, a quienes corresponde votar en una mesa distinta a aquella en que ejercen sus funciones, pueden hacerlo en la que tienen a su cargo.

Al sufragar en tales condiciones dejan constancia de la mesa a que pertenecen.

Artículo 70.- Designación de las autoridades. EL Juzgado Electoral hace, con antelación no menor de treinta y cinco (35) días a la fecha prevista para los comicios, el nombramiento de presidente, titular y suplente, para cada mesa.

Las notificaciones de designación se realizan por vía judicial o por medio de los servicios especiales de comunicación que tienen los organismos de seguridad.

Artículo 71.- Capacitación. EL Juzgado Electoral, durante el año anterior a la realización de una elección, organizará el dictado de cursos de capacitación para todos aquellos que figuren inscriptos en el Registro de Aspirantes a Presidentes de Mesa creado por la presente normativa y para quienes voluntariamente deseen hacerlo, a fin de garantizar una sólida formación en la interpretación y aplicación de esta Ley, a quien ejercerá la autoridad de mesa en los actos eleccionarios.

Asimismo, con una antelación no menor de veinte (20) días a la fecha prevista para los comicios, realizará encuentros para instruir y coordinar a quienes actuarán como autoridades de mesa durante el acto electoral. La asistencia será obligatoria, bajo pena de sanción.

Artículo 72.- Viáticos. CADA presidente de mesa como así también su suplente tienen derecho al cobro de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en concepto de viáticos. La liquidación de la presente compensación tendrá lugar dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha del acto electoral.

Artículo 73.- Refrigerio. EL Poder Ejecutivo ga-

rantizará el suministro del refrigerio para el desayuno, almuerzo y merienda del presidente de mesa, el suplente, el Fiscal Público Electoral y demás fiscales.

Artículo 74.- Excusación, excepciones y justificación. LA excusación de quienes resulten designados se formula dentro de los tres (3) días de notificados y únicamente pueden invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor, debidamente justificadas, o estar incurso en algunas de las causales de inhabilitación previstas en el artículo 11 de la presente Ley. Transcurrido este plazo sólo pueden excusarse por causas sobrevenientes, las que son objeto de consideración especial por el Juzgado Electoral.

Es causal de excepción desempeñar funciones de organización o dirección de un partido, alianza o confederación política, o ser candidato en la elección de que se trate y se acredita mediante certificación de las autoridades del respectivo partido, alianza o confederación.

A los efectos de la justificación por los presidentes o suplentes de mesa de la enfermedad que les impide concurrir al acto electoral, se exige que los certificados sean extendidos por médicos del sistema de salud nacional, provincial o municipal. En ausencia de los profesionales indicados, la certificación puede ser extendida por un médico particular, pudiendo el Juzgado Electoral hacer verificar la exactitud de la misma por facultativos especiales. Si se comprueba falsedad, pasan los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines que hubiere lugar.

Artículo 75.- Obligaciones del presidente de mesa y su suplente. EL presidente de mesa y/o su suplente deben estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo sus obligaciones las siguientes:

1) Comprobar la autenticidad de las credenciales de los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas;

2) Elaborar y firmar el acta de apertura, en la que constará el número de mesa, circuito electoral, lugar, fecha y hora del funcionamiento de la mesa, nombre y apellido de los miembros presentes y de los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas;

3) Colocar en lugar visible uno o más carteles que lleven impreso el número de la mesa de sufragio, consignando el apellido y nombre correspondiente al primer y último elector habilitado en la misma, para su rápida ubicación;

4) Verificar si el recinto reservado para cuarto oscuro reúne las condiciones de seguridad y garantía para que el elector emita su voto;

5) Decidir en el acto todas las reclamaciones, consultas y dudas que se susciten, manteniendo el orden en el recinto donde se sufraga y, en su caso, recurrir a la fuerza pública para expulsar, sin perjuicio de las sanciones de la ley, a toda persona que realice cualquier acto o hecho que viole la libertad, pureza y garantía del

sufragio;

6) Verificar que los votantes depositen sus respectivas boletas en la urna correspondiente;

7) Hacer constar en las actas correspondientes las protestas de los apoderados o fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas;

8) Practicar el escrutinio de mesa, y

9) Toda otra tarea que contribuya a velar por el correcto y normal desarrollo del acto electoral.

Al reemplazarse entre sí las autoridades dejan constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo, a cuyo fin deben labrar el acta correspondiente en el formulario preimpreso. En lo posible, en todo momento, tiene que encontrarse en la mesa el suplente, para sustituir a quien actúa como presidente, si es necesario.

Artículo 76.- Ubicación de las mesas. CON más de treinta (30) días de anticipación a la fecha de los comicios, el Juzgado Electoral designa los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos, las que pueden habilitarse en establecimientos escolares, dependencias oficiales, locales de entidades de bien público, salas de espectáculos y otros que reúnan las condiciones indispensables.

A los efectos del cumplimiento de esta disposición, el Juzgado Electoral puede requerir la cooperación de la Policía de la Provincia y, de ser menester, de cualquier otra autoridad provincial o municipal.

Los jefes, directores, dueños y encargados de los locales indicados en el primer párrafo deben adoptar todas las medidas tendientes a facilitar el funcionamiento de los comicios, desde la hora señalada por la Ley, proviendo las mesas y sillas que necesiten sus autoridades.

En un mismo local y siempre que su conformación y condiciones lo permitan, pueden funcionar más de una mesa, ya sea de varones o mujeres o de ambos.

Si no existen en el lugar locales apropiados para la ubicación de las mesas, el Juzgado Electoral debe designar el espacio que considere adecuado para tal fin.

Artículo 77.- Notificación. LA designación de los lugares en que funcionarán las mesas y la propuesta de nombramiento de sus autoridades, son notificadas por el Juzgado Electoral, dentro de los cinco (5) días de efectuada, a las Juntas Electorales Municipales y Comunes y al Ministerio de Gobierno, o al organismo que en el futuro lo sustituyere, debiendo arbitrar los medios necesarios para brindar una amplia difusión pública.

Artículo 78.- Cambios de ubicación. EN caso de fuerza mayor, ocurrida con posterioridad a la determinación de los centros de votación, el Juzgado Electoral puede variar su ubicación y, si por la premura del caso esto no es posible, lo determina el presidente de mesa al momento de la apertura de la mesa, debiendo notificar de ello al Juzgado Electoral a través del Fiscal Público Electoral.

Artículo 79.- Publicidad de la ubicación de las

mesas y sus autoridades. LA designación de los presidentes y suplentes de las mesas y el lugar en que éstas funcionen, se hace conocer por lo menos quince (15) días antes de la fecha de la elección, por medio de carteles fijados en los lugares establecidos en el artículo 28 de la presente Ley. La publicación está a cargo del Juzgado Electoral, que también la pone en conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial, oficinas de correos, policías locales, juzgados letrados o de paz y de los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas concurrentes al acto electoral.

Las Juntas Electorales Municipales y Comunes son las encargadas de hacer fijar los carteles con las constancias de designación de autoridades de los comicios y ubicación de mesas en sus respectivas localidades.

El Ministerio de Gobierno, o el organismo que en el futuro lo sustituyere, conserva en sus archivos durante tres (3) años, las comunicaciones en que consten los datos precisados en el párrafo precedente.

Capítulo III

Fiscal Público Electoral

Artículo 80.- Definición. EL Juzgado Electoral designará, por cada centro de votación, un funcionario o representante del Poder Judicial, que con el nombre de Fiscal Público Electoral actuará como nexo entre dicho Juzgado y la autoridad de mesa.

Artículo 81.- Designación. EL Fiscal Público Electoral será designado del cuerpo de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Para el caso de no poder cubrirse las vacantes, podrán ser designados como fiscales públicos electorales los profesionales o estudiantes de las carreras de Abogacía, Ciencias Políticas o Ciencias Económicas; que previamente se hayan capacitado y estuvieren acreditados en el registro creado a tal fin.

Artículo 82.- Requisitos. EL Fiscal Público Electoral debe reunir las calidades siguientes:

- 1) Ser elector hábil;
- 2) Ser funcionario o empleado del Poder Judicial o, en su defecto, profesional o estudiante de las carreras de Abogacía, Ciencias Políticas o Ciencias Económicas,
- 3) Estar domiciliado, en lo posible, en el circuito electoral donde debe desempeñarse, y
- 4) No ser candidato a cargo electivo, titular ni suplente, en la elección para la cual ha sido designado.

Artículo 83.- Funciones. EL Fiscal Público Electoral tiene bajo su estricta responsabilidad, las siguientes funciones y deberes:

- a) Representar al Juzgado Electoral frente a las autoridades de mesa y fiscales partidarios;
- b) Ordenar a las fuerzas de seguridad afectadas

al centro de votación, para que organicen el ingreso y egreso de electores, y a las dieciocho (18:00) horas el cierre de las instalaciones donde se desarrolle el acto electoral;

c) Hacer entrega de la urna y demás documentación electoral, al presidente designado como titular de la mesa o al suplente, a las siete y cuarenta y cinco (07:45) horas;

d) Proceder a la designación del primer elector que concurriera y presuntivamente reuniera algunas de las condiciones que exige esta normativa, como autoridad de mesa, si previa espera de ley, el titular o suplente designado no se hubiere hecho presente en el lugar de votación impidiendo la apertura de la mesa por falta de autoridad;

e) Hacer conocer e instrumentar las órdenes que el Juzgado Electoral le imparta durante el desarrollo del comicio;

f) Asegurar la regularidad del comicio y asistir al presidente de mesa en caso de duda, frente a la resolución de los conflictos que se le pudieren presentar y en todo lo que le solicite;

g) Controlar la distribución del refrigerio previsto en el artículo 73 de la presente Ley;

h) Recepcionar del presidente de mesa, la urna cerrada y lacrada, y la copia del acta de escrutinio - suscripta por las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas acreditados en el centro de votación-;

i) Trasladar o hacer entrega para su traslado la urna cerrada y lacrada al lugar previsto por el Juzgado Electoral para su depósito y custodia;

j) Enviar o entregar copia del acta de escrutinio rubricada por las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, al centro de recepción indicado por el Juzgado Electoral, para su cómputo o carga informática en el denominado escrutinio provisorio, y

k) Controlar y velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la presente Ley, especialmente lo dispuesto en el artículo 67 -in fine-.

Artículo 84.- Excepción. CUANDO en un mismo centro de votación existiere un número superior a diez (10) mesas, el Juzgado Electoral designará un Fiscal Público Electoral por cada diez (10) mesas o fracción mayor a cuatro (4), para que ejerzan proporcional y coordinadamente el cargo y asuman las funciones inherentes a su rol, efectuando una cobertura en todas las mesas allí habilitadas.

Artículo 85.- Obligación de denunciar. EL Fiscal Público Electoral deberá denunciar al Juzgado Electoral cualquier anomalía que observe en el desarrollo del acto comicial, a fin de actuar en consecuencia o proceder conforme a las directivas que el Tribunal interviniente le impartan.

Artículo 86.- Mesa de votación. LOS Fiscales Públicos Electorales pueden votar en cualquiera de las mesas habilitadas en el centro de votación que fiscalizan, aunque no estén inscriptos en ellas, siempre que estén empadronados. En ese caso se agrega el nombre del votante en la hoja del registro, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa, circuito y sección en que está inscripto.

Artículo 87.- Designación de Fiscal Público Electoral. EL Juzgado Electoral formula, con antelación no menor de treinta (30) días a la fecha prevista para los comicios, los nombramientos de los Fiscales Públicos Electorales.

La función para la que es designado es una carga pública, de la que sólo podrá excusarse por las causas y a través del procedimiento establecido en el artículo 74 de la presente Ley.

Artículo 88.- Inasistencia. Reemplazo. Si por cualquier causa el Fiscal Público Electoral designado para una mesa no se hiciere presente al momento de la apertura del acto electoral, será reemplazado -ipso facto- por el Fiscal Público Electoral que deba desempeñarse en la mesa con número inmediatamente siguiente o anterior, siempre que pertenezca al mismo centro de votación.

En tal supuesto, el reemplazante debe asumir la responsabilidad del ausente y comunicar tal circunstancia al Juzgado Electoral, quien podrá enviar un sustituto de la nómina de aspirantes.

Artículo 89.- Comunicación. EL Juzgado Electoral publicará a través de su página web, durante los quince (15) días anteriores a la elección, el listado de los designados como Fiscal Público Electoral y durante los treinta (30) días posteriores al comicio, la nómina de quienes efectivamente hubieran desempeñado el cargo, y en los mismos plazos los pondrá a disposición de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que hayan participado en el acto electoral.

Artículo 90.- Capacitación. EL Juzgado Electoral, durante el año anterior a la realización de una elección, organizará el dictado de cursos de capacitación para todos aquellos que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 82 de la presente Ley deseen inscribirse en el Registro de Aspirantes a Fiscales Públicos Electorales creado por la presente normativa, a fin de garantizar una sólida formación en la interpretación y aplicación de esta Ley.

Asimismo, con una antelación no menor de veinte (20) días a la fecha prevista para los comicios, convocará a quienes actuarán como Fiscales Públicos Electorales a fin de instruir y coordinar su labor. La asistencia será obligatoria, bajo pena de sanción.

Artículo 91.- Viáticos. EL Fiscal Público Electoral tiene derecho al cobro de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en concepto de viáticos. La liquidación de la presente

compensación tendrá lugar dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha del acto electoral.

El Juzgado Electoral podrá incrementar el porcentaje establecido como viático, cuando requiera de la persona designada como Fiscal Público Electoral una mayor afectación horaria para la organización previa del acto comicial.

Capítulo IV Registros

Artículo 92.- Registro de Presidentes de Mesa. CRÉASE, en el ámbito del Juzgado Electoral, el Registro Provincial de Aspirantes a Presidentes de Mesa, donde serán incluidos todos aquellos ciudadanos que habiendo ejercido dicha función acrediten la capacitación prevista en la presente Ley. También podrán inscribirse todos aquellos ciudadanos que, reuniendo los requisitos exigidos por esta Ley, deseen ejercer dicha función en cualquier acto electoral que se desarrolle en el ámbito provincial.

Artículo 93.- Registro de Fiscales Públicos Electorales. CRÉASE, en el ámbito del Juzgado Electoral, el Registro Provincial de Aspirantes a Fiscales Públicos Electorales, donde serán incluidos todos aquellos ciudadanos que hubieren ejercido dicha función y donde podrán inscribirse todos los ciudadanos que reuniendo los requisitos exigidos por la presente Ley, deseen ejercer dicha función, en cualquier acto electoral que se desarrolle en el ámbito provincial.

Artículo 94.- Organización. LAS personas inscriptas en los Registros creados en los artículos anteriores, se clasificarán por archivos según el año de la elección y el sexo de las mismas. Cada archivo se dividirá por Departamento o Sección electoral y cada una de estas divisiones se subdividirá a su vez en Circuitos electorales.

Artículo 95.- Reconocimiento. LOS ciudadanos que participen de los actos electorales, como presidentes de mesa -titular o suplente- y como Fiscales Públicos Electorales, obtendrán una certificación del Juzgado Electoral que les asignará mérito o puntaje para su carrera administrativa, o bien para el ingreso a la Administración Pública Provincial.

Artículo 96.- Antecedentes. Los ciudadanos que no habiendo participado de la elección como autoridad de mesa o Fiscal Público Electoral se encuentren inscriptos en los registros respectivos y hubieren realizado los cursos de capacitación dictados por el Juzgado Electoral, obtendrán una certificación que les asignará mérito o puntaje para su carrera administrativa, o bien para el ingreso a la Administración Pública Provincial, el que será sensiblemente menor al que se le otorgue a quienes ejerzan efectivamente el cargo.

Capítulo V**Apertura del Acto Electoral**

Artículo 97.- Constitución de las mesas el día de los comicios. EL día señalado para la elección por la convocatoria respectiva deben encontrarse a las siete y treinta (07:30) horas, en el local en que funcione la mesa, el presidente de mesa, su suplente y el Fiscal Público Electoral con las urnas que menciona el artículo 63 de la presente Ley y el personal de seguridad que deba estar a las órdenes de las autoridades de los comicios.

Si hasta las ocho y treinta (08:30) horas no se han presentado los designados, el Fiscal Público Electoral, procederá a designar los reemplazos y a tomar las medidas conducentes para la habilitación de los comicios.

Las funciones que este artículo encomienda a la policía, son sin perjuicio de las que especialmente en cada elección se establecen en cuanto a su custodia y demás normas de seguridad.

Artículo 98.- Procedimientos a seguir. EL presidente de mesa debe:

1) Recibir la urna conteniendo los padrones, los talonarios de Boletas Únicas de Sufragio, un afiche con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que integran dicha boleta, bolígrafo de tinta indeleble, útiles y demás elementos que le entregue el Fiscal Público Electoral, debiendo firmar recibo de ellos previa verificación;

2) Quitar de la urna todos los elementos que contenga;

3) Cerrar la urna poniéndole la faja de seguridad de tal manera que no impida la introducción de la Boleta Única de Sufragio, que debe ser firmada por el presidente de mesa y los fiscales partidarios que lo deseen;

4) Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna. Este local tiene que elegirse de modo que quede a la vista de todos, en lugar de fácil acceso; debiendo individualizarse en forma clara y visible el número que corresponde a cada mesa;

5) Depositar en forma contigua a la urna y en la misma mesa, los talonarios de Boletas Únicas de Sufragio, remitidas por el Juzgado Electoral y entregadas por el Fiscal Público Electoral;

6) Habilitar otro recinto inmediato a la mesa, o bien un espacio cerrado por un biombo o tabique en el recinto donde se encuentre la mesa receptora, de fácil y único acceso, para que los electores marquen en la Boleta Única de Sufragio la opción electoral de su preferencia en absoluto secreto. Este recinto, que se denomina "Cuarto Oscuro", no debe tener más de una puerta utilizable, que sea visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las demás aberturas que tuviere, en presencia de los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones

políticas, o de dos (2) electores por lo menos, de tal forma que quede garantizado con la mayor seguridad el secreto del voto. Con idéntica finalidad el presidente de mesa coloca la faja de seguridad adherida y sellada en las puertas y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizan las fajas que provee el Juzgado Electoral y son firmadas por el presidente y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que quieran hacerlo;

7) Poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa, uno de los ejemplares del padrón de electores con su firma y con la de los fiscales que lo deseen, para que sea consultado sin dificultad;

8) Poner sobre la mesa los otros dos (2) ejemplares del padrón electoral a los efectos del control de la emisión del sufragio. Las constancias que deben remitirse al Juzgado Electoral se asientan en uno solo de los ejemplares que reciben los presidentes de mesa;

9) Colocar en un lugar visible, dentro o fuera del cuarto oscuro, el afiche con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas, cuya confección seguirá el mismo orden de la Boleta Única de Sufragio, de manera que los ciudadanos puedan distinguir, con facilidad, a los candidatos de cada agrupación política, y

10) Verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que han asistido. Aquellos que no se encuentran presentes en el momento de apertura del acto electoral son reconocidos cuando acrediten, ante las autoridades de mesa, la representación que invoquen pero los actos que se hayan cumplido sin su presencia no son reeditados o reproducidos.

Artículo 99.- Carteles, inscripciones o insignias. QUEDA prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que esta Ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector.

Solo estarán permitidos los afiches con la publicación de las listas completas de candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que integran la Boleta Única de Sufragio.

Artículo 100.- Apertura del acto. A la hora ocho (08:00) el presidente de mesa declara abierto el acto electoral y labra el acta pertinente, llenando los claros del formulario impreso. El acta de apertura debe ser suscripta por el presidente de mesa, el suplente y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas. Si alguno de ellos no está presente o no hay fiscales nombrados o se niegan a firmar, el presidente de mesa consigna tal circunstancia certificada por dos (2) electores presentes que firman juntamente con él.

Cuando el acto electoral deba ser abierto por un presidente designado por el Fiscal Público Electoral, éste rubricará conjuntamente con aquél el acta de apertura.

Capítulo VI

Emisión del Sufragio

Artículo 101.- Procedimiento. UNA vez abierto el acto, los electores se apersonan al presidente de mesa por orden de llegada, exhibiendo su documento de identidad.

El presidente de mesa, el suplente y los fiscales acreditados ante la mesa y que están inscriptos en la misma son, en su orden, los primeros en emitir el voto.

Si el presidente de mesa, su suplente o el Fiscal Público Electoral no están inscriptos en la mesa en que actúan, se agrega en la hoja del registro el nombre del votante así como la mesa en que está registrado y se consigna dicho extremo en el formulario preimpreso, donde además de los datos que identifican al elector agregado, en el casillero correspondiente dejará su impresión dígito pulgar derecha.

Los fiscales o autoridades de mesa que no están presentes al abrirse el acto, sufragan a medida que se incorporan a la misma.

En ningún caso se puede agregar más de un (1) fiscal por partido, alianza o confederación política en la misma mesa receptora de votos, en las condiciones establecidas en el artículo 47 de la presente Ley.

Artículo 102.- Carácter del voto. EL voto es obligatorio y su emisión es secreta durante todo el desarrollo del acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo total o parcialmente de modo alguno la Boleta Única de Sufragio, ni formular durante su permanencia en el lugar cualquier manifestación que importe violar tal secreto.

Artículo 103.- Dónde y cómo pueden votar los electores. LOS electores pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuran asentados, con las excepciones previstas en esta Ley y con documento de identidad habilitante.

El presidente de mesa verifica si el ciudadano a quien pertenece el documento de identidad figura en el padrón electoral de la mesa. Para ello coteja si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas indicaciones contenidas en dicho documento.

Artículo 104.- Discrepancia de datos. CUANDO por error de impresión, alguna de las menciones del padrón no coincida exactamente con la de su documento de identidad, el presidente de mesa no puede impedir el voto del elector si existe coincidencia en las demás constancias. En estos casos se anotan las diferencias en la columna de observaciones.

Si por deficiencia del padrón, el nombre del elector no corresponde exactamente al de su documento de identidad, el presidente de mesa admite el voto siempre que, examinados debidamente el número y tipo de ese documento, clase y domicilio, sean coincidentes con los del padrón.

Tampoco se debe impedir la emisión del voto cuando:

1) El nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o algunos datos relativos al documento de identidad;

2) Falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste satisfactoriamente el interrogatorio minucioso que le formule el presidente de mesa sobre los datos personales y cualquier otra circunstancia que tienda a la debida identificación;

3) Se encuentren llenas la totalidad de las casillas destinadas a asentar la emisión del sufragio, en cuyo caso se habilitan a tal efecto las páginas en blanco del documento de identidad;

4) El elector concorra a sufragar con un documento de identidad posterior a aquel con el que figura inscripto en el padrón, y

5) El elector concorra a sufragar con un documento que contenga anotaciones de instituciones u organismos oficiales o referidas al grupo sanguíneo.

Artículo 105.- Inadmisibilidad del voto. NO le es admitido el voto al elector cuando:

1) Exhiba un documento de identidad anterior al que consta en el padrón, y

2) Presente libreta cívica o de enrolamiento y figure en el registro con documento nacional de identidad.

El presidente de mesa deja constancia en la columna de observaciones del padrón, de las circunstancias a que se refieren las disposiciones del artículo 104 de esta Ley.

Ninguna autoridad, ni aún el Fiscal Público Electoral, puede ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral, excepto en los casos previstos en los artículos 47, 69 y 86 de la presente Ley.

Artículo 106.- Derecho del elector a votar. TODO aquel que figura en el padrón y exhiba su documento de identidad tiene el derecho a votar y nadie puede ni debe cuestionarlo en el acto del sufragio.

Los presidentes de mesa no aceptan impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el padrón electoral. Está excluido del mismo quien se encuentra tachado con tinta roja en el padrón de la mesa, no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se alegare error.

Artículo 107.- Orden de la votación. LOS electores votan en el orden de su llegada a la mesa correspondiente, a cuyo efecto deben formar fila de a uno. La mesa dará preferencia a:

1) Mujeres embarazadas;

2) Minusválidos y enfermos;

3) Electores mayores de setenta (70) años, y

4) Electores que deben trabajar durante la jornada electoral y acrediten dicho extremo con certificado emitido por la patronal, en un todo de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la presente Ley.

Artículo 108.- Verificación de la identidad del elector. COMPROBADO que el documento de identidad

presentado pertenece al mismo ciudadano que aparece registrado como elector, el presidente de mesa procede a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento. Ante cualquier discrepancia u objeción escucha sobre el punto al Fiscal Público Electoral y a los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y procede conforme previenen los artículos siguientes.

Artículo 109.- Derecho a interrogar al elector. QUIEN ejerce la presidencia de la mesa, por iniciativa propia o a pedido de los fiscales, tiene derecho a interrogar al elector sobre las diversas referencias y anotaciones del documento de identidad.

Artículo 110.- Impugnación de la identidad del elector. EL presidente de mesa o los fiscales tienen derecho a impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio haya falseado su identidad. En esta alternativa se debe exponer concretamente el motivo de la impugnación, labrándose un acta firmada por el presidente de mesa y el o los impugnantes y tomándose nota sumaria en la columna de observaciones del padrón.

Artículo 111.- Procedimiento en caso de impugnación. EN caso de impugnación el presidente de mesa lo hace constar en el sobre correspondiente. De inmediato anota el nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad y clase y toma la impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario respectivo, que es firmado por el presidente de mesa y por el o los fiscales impugnantes. Si alguno de ellos se niega el presidente de mesa deja constancia, pudiendo hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los electores presentes.

La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importa el desistimiento y anulación de la impugnación, pero basta que uno solo firme para que subsista.

Luego coloca este formulario dentro del mencionado sobre, que entrega abierto al ciudadano, junto con la Boleta Única de Sufragio y lo invita a pasar al cuarto oscuro. El elector no puede retirar del sobre el formulario; si lo hace constituye prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acreditación en contrario. Luego, la Boleta Única de Sufragio del elector es colocada en el sobre de voto impugnado.

Después que el compareciente impugnado haya sufragado, si el presidente de mesa considera fundada la impugnación, está habilitado para ordenar que sea arrestado a su orden.

Artículo 112.- Entrega de la Boleta Única de Sufragio al elector. Si la identidad no es impugnada, el presidente de mesa entrega al elector una Boleta Única de Sufragio firmada por él y por los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que deseen hacerlo -en el espacio demarcado habilitado a tal efecto- y lo invita a pasar al cuarto oscuro para definir la opción electo-

ral de su preferencia.

La Boleta Única de Sufragio entregada debe tener los casilleros en blanco y sin marcar y estar acompañada de un bolígrafo con tinta indeleble que permita al elector marcar la opción electoral de su preferencia.

Cuando los fiscales firmen una Boleta Única de Sufragio están obligados a firmar varias a los fines de evitar la identificación del votante.

Artículo 113.- Emisión del voto. EN el cuarto oscuro, el elector define la opción electoral de su preferencia en la Boleta Única de Sufragio mediante la adhesión del sticker previsto en el artículo 53 de la presente Ley, o con una cruz, tilde o símbolo similar dentro de los recuadros impresos en ella, según su opción. Dicho símbolo puede sobrepasar el respectivo recuadro, sin que ello invalide la preferencia.

La Boleta Única de Sufragio debidamente doblada por sus pliegues es depositada por el elector en la urna. El presidente de mesa, por propia iniciativa o a pedido fundado del Fiscal Público Electoral o de los fiscales, puede ordenar se verifique si la Boleta Única de Sufragio que trae el elector es la misma que se le entregó.

Será obligación del presidente de mesa corroborar que la Boleta Única de Sufragio esté doblada en forma tal que resulte absolutamente imposible conocer la preferencia definida por el elector.

Artículo 114.- Personas con discapacidades. LOS no videntes son acompañados hasta el cuarto oscuro por el presidente de mesa y el Fiscal Público Electoral, quienes le entregarán conjuntamente con su Boleta Única de Sufragio una plantilla de alfabeto Braille, fácil de colocar sobre la Boleta Única de Sufragio, a fin de que puedan ejercer su opción electoral; seguidamente se retiran para que el elector realice su elección.

Para el caso de que hubiera algún elector con una discapacidad que le impida ejercer el voto, el presidente de mesa deberá acompañarlo y colaborar con los pasos necesarios hasta la introducción de la Boleta Única de Sufragio en la urna.

Artículo 115.- Constancia de la emisión del voto. EL presidente de mesa procede, inmediatamente, a anotar en el padrón de electores de la mesa, a la vista de los fiscales y del elector mismo, la palabra "Votó" en la columna respectiva en la fila del nombre del sufragante. La misma anotación, fechada, sellada y firmada, se debe hacer en su documento de identidad en el lugar expresamente destinado a ese efecto o en el lugar establecido en el artículo 104 inciso 3) de la presente Ley.

Artículo 116.- Constancia en el padrón y acta. EN los casos de los artículos 47, 69 y 86 de la presente Ley, deben agregarse el o los nombres y demás datos del padrón de electores y dejarse constancia en el acta respectiva. El Juzgado Electoral debe, una vez concluido el acto electoral, efectuar un control específico de los

electores agregados en el padrón de cada mesa, a los efectos de verificar que no se haya incurrido en una doble emisión del sufragio.

Capítulo VII

Funcionamiento del Cuarto Oscuro

Artículo 117.- Inspección. EL presidente de mesa examina el cuarto oscuro a pedido de los fiscales o cuando lo estima necesario con el objeto de cerciorarse que esté de acuerdo con lo previsto en el artículo 98, incisos 6) y 9) de la presente Ley.

Capítulo VIII

Clausura del Acto

Artículo 118.- Interrupción de las elecciones. LAS elecciones no pueden ser interrumpidas y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresa en acta separada el tiempo que haya durado la interrupción y la causa de ella. En tal circunstancia el Fiscal Público Electoral suscribirá el acta de cada una de las mesas, junto a las autoridades de mesa y fiscales partidarios que correspondan.

Artículo 119.- Clausura de los comicios. EL acto electoral finaliza a las dieciocho (18:00) horas, momento en que el presidente de mesa ordena se clausure el acceso a los comicios pero debe continuar recibiendo el voto de los electores que estén en el interior del recinto donde se encuentra la mesa, esperando su turno.

Concluida la recepción de estos sufragios, tacha del padrón los nombres de los electores que no hayan comparecido y hace constar al pie el número de los sufragantes. Este número debe coincidir con el número de Boletas Únicas de Sufragio entregadas a los electores.

Asimismo asentará las protestas que hayan formulado los fiscales, mediante acta suscripta por todos los acreditados en la mesa.

En los casos previstos en los artículos 47, 69 y 86 de la presente Ley, se deja constancia del o de los votos emitidos en esas condiciones.

Una vez clausurado el comicio, sobre las Boletas Únicas de Sufragio no utilizadas, se estampará el sello "Sobrante" y las firmará el presidente de mesa y los fiscales que quieran hacerlo. Luego, dentro de un sobre identificado al efecto, se introducirán en la urna, junto a la documentación y demás elementos utilizados para el comicio.

Capítulo IX

Disposiciones Comunes

Artículo 120.- Inmunidad de detención. EL personal administrativo afectado a tareas electorales, los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, los integrantes de las mesas receptoras de votos y los fiscales partidarios, gozan de inmunidad el día del acto comicial y no podrán ser detenidos ni molestados por ninguna autoridad, de no mediar flagrancia en la

comisión de un hecho legalmente tipificado como delito.

Artículo 121.- Información. EL día de los comicios, el Fiscal Público Electoral podrá arbitrar mecanismos de información en los locales de votación a los efectos de que los electores puedan identificar la mesa en la que votan.

TÍTULO V ESCRUTINIO

Capítulo I

Escrutinio de la Mesa

Artículo 122.- Calificación de los sufragios. LOS sufragios tienen las siguientes categorías:

1) Votos válidos:

a) Los emitidos mediante la Boleta Única de Sufragio oficializada, entregada por la autoridad de mesa, en la que inequívocamente se halla expresada la voluntad del elector mediante la inserción de una cruz, tilde o símbolo similar en el casillero correspondiente para cada categoría de candidatos;

b) Los emitidos mediante la Boleta Única de Sufragio oficializada, entregada por la autoridad de mesa, en la que inequívocamente se halla expresada la voluntad del elector mediante la inserción de una cruz, tilde o símbolo similar en el casillero correspondiente al partido, alianza o confederación política, entendiéndose que dicha expresión resulta válida para todas las categorías de candidatos presentados por esa agrupación política, y

2) Votos nulos:

a) Los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio no oficializada o con papel de cualquier color o con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza;

b) Los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio oficializada que contenga inscripciones o leyendas de cualquier tipo;

c) Los emitidos en Boleta Única de Sufragio oficializada que contenga dos (2) o más marcas de distinto partido, alianza o confederación política para la misma categoría de candidatos, limitándose la nulidad al tramo de candidatura en que se hubiese producido la repetición de opciones del elector;

d) Los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio oficializada que presente destrucción parcial o tachaduras.

3) Votos en blanco: los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio oficializada en la cual todos los casilleros destinados a insertar una cruz, tilde o símbolo similar, se encuentren en blanco, y tampoco se hubiere adherido el sticker que prevé el artículo 53 de esta Ley;

4) Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal debe fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asientan sumariamente en formulario especial que provee el Juzgado Electoral. Dicho formulario se adjunta a la Boleta Única

ca de Sufragio y lo suscribe el fiscal cuestionante, consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento de identidad, domicilio y partido, alianza o confederación política a la que pertenece. Ese voto se anota en el acta de cierre de los comicios como "voto recurrido" y es escrutado oportunamente por el Juzgado Electoral, que decide sobre su validez o nulidad. Todos los votos recurridos se ingresan en el sobre especial identificado con la leyenda "votos recurridos". El escrutinio de los votos recurridos declarados válidos por el Juzgado Electoral se hace en la forma prevista en el artículo 141 de la presente Ley.

5) Votos impugnados: son aquellos en que se ataca la identidad del elector, conforme al procedimiento establecido por los artículos 110 y 111 de la presente Ley y cuyo escrutinio final queda reservado sólo al Juzgado Electoral.

Artículo 123.- Procedimiento. EL presidente de mesa, auxiliado por el suplente, con vigilancia policial o militar en el acceso y los fiscales acreditados en la mesa o en su defecto los apoderados acreditados que los reemplacen, hace el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:

1) Abre la urna, de la que extrae todas las Boletas Únicas de Sufragio y las cuenta, confrontando su número con el de los sufragantes consignados al pie del padrón. El resultado debe ser igual; en caso contrario, tal circunstancia debe asentarse en el acta de escrutinio;

2) Verifica que cada Boleta Única de Sufragio esté correctamente rubricada con su firma en el casillero habilitado a tal efecto;

3) Desdobra cada Boleta Única de Sufragio y lee en voz alta el voto consignado en cada uno de los casilleros habilitados para tal fin, identificando la categoría de candidatos y el partido, alianza o confederación política al que corresponda. Los fiscales acreditados ante la mesa de sufragios tienen el derecho de examinar el contenido de la Boleta Única de Sufragio leída.

4) El resultado expresado a viva voz se irá anotando en el formulario provisto a tal efecto;

5) Inmediatamente se sellarán las Boletas Únicas de Sufragio con un sello que dirá "Escrutada".

Cuando una o varias Boletas Únicas de Sufragio fueren recurridas, se labrará acta consignando los motivos que fundamentan la observación. Estas boletas junto al acta respectiva se colocarán en un sobre especial que se enviará al Juzgado Electoral para que resuelva al respecto.

La iniciación de las tareas del escrutinio no puede tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las dieciocho (18:00) horas, aún cuando hubiera sufragado la totalidad de los electores.

El escrutinio de los votos obtenidos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas se hace bajo la vigilancia permanente del Fiscal Público Electoral y los

fiscales partidarios, de maneras que puedan lograr su cometido con facilidad y sin impedimento alguno.

Artículo 124.- Acta de escrutinio. CONCLUIDA la tarea del escrutinio el presidente de mesa consigna en el acta de cierre de los comicios lo siguiente:

1) La hora del cierre de los comicios, número de sufragios emitidos, cantidad de Boletas Únicas de Sufragio no utilizadas, cantidad de votos impugnados, diferencia si la hubiere entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados en el registro de electores, todo ello asentado en letras y números;

2) Cantidad de votos, en letras y números, logrados por cada uno de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y en cada una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, recurridos y en blanco;

3) El nombre, tipo y número de documento del presidente de mesa, del suplente y fiscales que actuaron en la mesa, con mención de los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio;

4) La mención de las protestas que formulan los fiscales sobre el desarrollo del acto electoral y las que hagan con referencia al escrutinio;

5) La nómina de los efectivos policiales, individualizados con el número de identificación, que se desempeñaron a las órdenes de las autoridades de los comicios hasta la terminación del escrutinio, y

6) La hora de finalización del escrutinio.

Además del acta de cierre referida y con los resultados extraídos de la misma, el presidente de mesa extiende, en formulario que se remite al efecto, un certificado de escrutinio que debe ser suscrito por él, por el suplente y por los fiscales partidarios.

El presidente de mesa extiende y entrega a los fiscales que lo soliciten un certificado de escrutinio, que debe ser suscrito por las mismas personas mencionadas en el párrafo anterior.

Si los fiscales o alguno de ellos no quieren firmar el o los certificados de escrutinio, se hace constar en los mismos esta circunstancia.

En el acta de cierre de los comicios se deben consignar los certificados de escrutinios pedidos y quienes los recibieron, así como la circunstancia de los casos en que no fueron suscritos por los fiscales y el motivo de ello.

Artículo 125.- Guarda de boletas y documentos. UNA vez suscripta el acta referida en el artículo anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositan:

a) Dentro de la urna: las Boletas Únicas de Sufragio escrutadas, un certificado de escrutinio y en sobre especial las Boletas Únicas de Sufragio que no hayan sido utilizadas, y

b) Fuera de la urna: en el sobre especial que remite el Juzgado Electoral, el padrón electoral con las actas de apertura y de cierre firmadas, los votos recurridos

y los votos impugnados, el que debe ser lacrado, sellado y firmado por las autoridades de mesa y los fiscales partidarios que deseen hacerlo.

Artículo 126.- Cierre de la urna y sobre especial. EL cierre de la urna se debe realizar colocándose una faja especial que tape su boca o ranura, cubriéndose totalmente la tapa, frente y parte posterior, que asegure y firma el presidente de mesa, el suplente y los fiscales que lo deseen.

Seguidamente el presidente de mesa hace entrega inmediata de la urna y del sobre especial indicado en el artículo anterior, en forma personal, al Fiscal Público Electoral, quien extenderá el recibo correspondiente, con indicación de la hora y les ordenará a los efectivos policiales, fuerzas de seguridad o militares que presten la custodia necesaria al Fiscal Público Electoral, hasta que la urna y el sobre pertinente se trasladen al lugar indicado por el Juzgado Electoral para su depósito.

Artículo 127.- Entrega del Acta de Escrutinio al Juzgado Electoral. INMEDIATAMENTE de finalizado el acto electoral, el Fiscal Público Electoral hará entrega de la copia del acta de escrutinio rubricada por las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, en el centro de recepción indicado por el Juzgado Electoral, para su cómputo o carga informática en el denominado escrutinio provisorio, en la forma que se le hubiere ordenado.

Artículo 128.- Custodia de las urnas y su documentación. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas pueden vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se entregan al Fiscal Público Electoral hasta que son recibidas por el Juzgado Electoral.

El transporte y entrega de las urnas al Juzgado Electoral, se hace sin demora alguna en relación a los medios de movilidad disponibles.

Cuando las urnas y documentos deban permanecer en depósito, se colocarán en un cuarto en el que las puertas, ventanas y cualquier otra abertura, estén cerradas y selladas en presencia de los fiscales que decidan estar presentes, quienes pueden vigilar las puertas de entrada durante el tiempo que las urnas permanezcan en dicho lugar.

Capítulo II

Escrutinio del Juzgado Electoral

Artículo 129.- Plazos. EL Juzgado Electoral efectúa con la mayor celeridad las operaciones que se indican en esta Ley. A los fines de este capítulo, todos los plazos se computan en días corridos, salvo que expresamente se indique que su cómputo sea en días hábiles.

Artículo 130.- Designación de fiscales. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos pueden designar fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escru-

tinio a cargo del Juzgado Electoral, así como a examinar la documentación correspondiente.

Artículo 131.- Control y fiscalización. EL control de los comicios por los partidos, alianzas o confederaciones políticas comprende, además, la recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio de y a los centros establecidos para su cómputo, y al procesamiento informático de los resultados provisorios y definitivos, incluyendo el sistema informático utilizado. Este último es verificado por el Juzgado Electoral que mantiene una copia bajo resguardo y permite a los partidos, alianzas o confederaciones políticas las comprobaciones que requieran del sistema empleado, que debe estar disponible, a esos fines, con suficiente antelación.

Artículo 132.- Recepción de la documentación. EL Juzgado Electoral recibe todos los documentos vinculados a la elección que le entrega el Fiscal Público Electoral, labrándose acta al respecto suscripta por quien recibe, por quien entrega y por aquellos que hubieren intervenido en el transporte y/o resguardo de las urnas y de la documentación electoral.

Concentra esta documentación en lugar visible y permite la fiscalización por los partidos, alianzas o confederaciones políticas.

Artículo 133.- Reclamos y protestas. DURANTE los dos (2) días siguientes a la elección, el Juzgado Electoral recibe las protestas y reclamos de cualquier ciudadano, que versen sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas, los que deben ser por escrito, fundados y acompañados de las pruebas en que se basan, bajo pena de inadmisibilidad. Transcurrido ese lapso no se admite reclamo alguno.

En igual plazo también recibe de los organismos directivos de los partidos, alianzas o confederaciones políticas las protestas y reclamos contra la elección.

La solicitud de nulidad de una, varias o todas las mesas sólo podrá realizarse si el impugnante acredita la participación de sus fiscales en la o las mesas objetadas. Caso contrario sólo podrá requerir la revisión de la documentación existente y que la misma sea puesta a su disposición a los fines de constatar el contenido.

Las protestas o reclamos que realicen los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben cumplir, bajo pena de inadmisibilidad, con las siguientes formalidades:

1) Ser formulada por el apoderado del partido, alianza o confederación impugnante, por escrito y fundado, y

2) Acompañar copia juramentada del correspondiente certificado de escrutinio de la o las mesas impugnadas u objetadas, salvo cuando la demostración -de los reclamos o protestas- surjan de los documentos que obran en el Juzgado Electoral.

El Juzgado Electoral, previa vista -por dos (2) días- a los partidos, alianzas o confederaciones políticas intervinientes en el proceso electoral, resolverá sobre los

reclamos e impugnaciones formuladas en un plazo no mayor de cinco (5) días.

Artículo 134.- Procedimiento para el escrutinio. VENCIDO el plazo establecido en el artículo anterior, el Juzgado Electoral realiza el escrutinio definitivo, el que debe quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto se habilitan los días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción.

El escrutinio definitivo se ajusta, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar:

- 1) Si hay indicios de que haya sido adulterada;
- 2) Si no tiene defectos sustanciales de forma;
- 3) Si viene acompañada de las demás actas y documentos que el presidente de mesa haya producido o recibido con motivo del acto electoral y escrutinio de la mesa;
- 4) Si admite o rechaza las protestas;
- 5) Si el número de ciudadanos que sufragaron según el acta, coincide con el número de Boletas Únicas de Sufragio remitidas por el presidente de mesa, verificación que sólo se lleva a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido, alianza o confederación política actuante en la elección y que acredite la presencia de su fiscal en esa mesa, y
- 6) Si existen votos recurridos, los considera para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por circuito electoral.

Realizadas las verificaciones preestablecidas, el Juzgado Electoral se limita a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que medie reclamo de algún partido, alianza o confederación política actuante en la elección.

Artículo 135.- Validez. EL Juzgado Electoral tiene por válido el escrutinio de mesa que se refiera a los votos no sometidos a su consideración.

Artículo 136.- Declaración de nulidad. EL Juzgado Electoral declara nula la votación realizada en una mesa, aunque no medie petición de ciudadano, partido, alianza o confederación política cuando:

- 1) No haya acta de cierre de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autoridades de los comicios;
- 2) Haya sido maliciosamente adulterada el acta o, a falta de ella, el certificado de escrutinio no cuente con los recaudos mínimos preestablecidos, y
- 3) El número de sufragantes consignados en el acta o, en su defecto, en el certificado de escrutinio difiera en dos por ciento (2%) o más del número de Boletas Únicas de Sufragio utilizadas y remitidas por el presidente de mesa.

Artículo 137.- Comprobación de irregularidades. A petición de los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, el Juzgado Electoral puede

anular la elección practicada en una mesa cuando:

1) Se compruebe que la apertura tardía o la clausura anticipada de los comicios privó maliciosamente a los electores de emitir su voto, y

2) No aparezca la firma del presidente de mesa - titular o suplente- en el acta de apertura o de clausura o, en su caso, en el certificado de escrutinio.

Artículo 138.- Recuento de sufragios por errores en la documentación. EN caso de evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio consignados en la documentación de la mesa o en el supuesto de no existir esta documentación específica, el Juzgado Electoral puede no anular el acto comicial y realizar integralmente el escrutinio con las respectivas Boletas Únicas de Sufragio remitidas por el presidente de mesa.

Artículo 139.- Convocatoria a complementarias. Si no se efectuó la elección en alguna o algunas mesas o se hubiese anulado alguna de ellas, el Juzgado Electoral puede requerir del Poder Ejecutivo Provincial que convoque a los electores respectivos a elecciones complementarias, para lo cual es indispensable que al menos un partido, alianza o confederación política, de los que hayan participado en los comicios celebrados en dicha mesa, lo solicite dentro de los tres (3) días de sancionada la nulidad o fracasada la elección.

Artículo 140.- Efectos de la anulación de mesas. SE considera que no existió elección en un circuito o una sección, cuando la mitad del total de las mesas hayan sido anuladas por el Juzgado Electoral, en cuyo caso el Juez comunica dicha circunstancia al Poder Ejecutivo Provincial.

Declarada la nulidad se procederá a una nueva convocatoria, con sujeción a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 141.- Votos impugnados. Procedimiento. EN el examen de los votos impugnados se procede de la siguiente manera:

1) De los sobres se retira el formulario previsto en el artículo 111 de la presente Ley para que, después de cotejar la impresión dígito pulgar y demás datos con los existentes en la ficha del elector cuyo voto ha sido impugnado, informe sobre la identidad del mismo;

2) Si la identidad del elector no resultase probada, el voto no es tenido en cuenta en el cómputo. Si resultase probada, el voto debe ser computado, para lo cual debe consignarse inmediatamente en el sobre que contiene el sufragio, el número de mesa a la que pertenece y el Juez ordena la inmediata libertad si se hallase arrestado. Tanto en un caso como en otro, los antecedentes se pasan a la fiscalía con competencia electoral, para que sea evaluada la responsabilidad del elector o del impugnante falso;

3) Si el elector ha retirado el formulario, su voto se declara anulado, destruyéndose el sobre que lo con-

tiene, y

4) El escrutinio de los sufragios impugnados declarados válidos por el Juzgado Electoral se hace reuniendo todos los correspondientes a cada circuito electoral y procediendo a la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado en una urna o caja cerrada, a fin de impedir la individualización de la mesa y del votante.

Artículo 142.- Cómputo final. EL Juzgado Electoral suma los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras consignadas en las actas, a las que se adicionan los votos que hayan sido recurridos y resulten válidos y los indebidamente impugnados y declarados válidos, de los que se deja constancia en el acta final.

Finalizadas estas operaciones el Juzgado Electoral pregunta a los apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas si hay protestas que formular contra el escrutinio. No habiendo protestas o después de resueltas las que se presenten, el Juzgado Electoral acuerda un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.

Artículo 143.- Proclamación de los electos. EL Juzgado Electoral proclama a los que resultan electos y les entrega los documentos que acrediten su condición.

Artículo 144.- Destrucción de boletas. EN presencia de los apoderados o fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que deseen concurrir al acto, el Juzgado Electoral procede a la destrucción de las Boletas Únicas de Sufragio, con excepción de aquellas a las que se hayan negado validez o hayan sido objeto de algún reclamo, las que se unen al acta que alude el artículo 142 de la presente Ley, rubricada por los concurrentes a este acto.

Artículo 145.- Acta del escrutinio. Testimonios. EL Juzgado Electoral debe enviar testimonio del acta final al Poder Ejecutivo Provincial y a los partidos, alianzas o confederaciones políticas intervinientes.

Asimismo, enviará copia certificada del acta de escrutinio, adjudicación de cargos y bancas y proclamación de los electos al Poder Legislativo Provincial, quien debe conservar esa documentación durante cuatro (4) años.

TÍTULO VI VIOLACIÓN DE LA LEY ELECTORAL PENAS Y RÉGIMEN PROCESAL

Capítulo I

Faltas Electorales y Sanciones

Artículo 146.- No concurrencia de autoridades de mesa. LA persona designada como autoridad de mesa que, injustificadamente o con justificativo falso, no concurriera a desempeñar dicha función o hiciera abandono de ella, incurrirá en falta grave y será sancionada con:

- 1) Una multa equivalente de hasta un (1) Salario

Mínimo, Vital y Móvil e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por un período de seis (6) meses a un (1) año a partir del día de la elección; o

2) Suspensión de hasta treinta (30) días sin goce de haberes en el cargo que estuviere ejerciendo, si fuere funcionario o empleado público.

Igual sanción les corresponderá a los presidentes de mesa y suplentes designados que injustificadamente no concurrieran a los cursos de instrucción y capacitación previstos como obligatorios en el segundo párrafo del artículo 71 de esta Ley.

Artículo 147.- No concurrencia del Fiscal Público Electoral. LA persona designada como Fiscal Público Electoral que, injustificadamente o con justificativo falso, no concurriera a desempeñar dicha función o hiciera abandono de ella, incurrirá en falta grave y será sancionada con:

1) Una multa equivalente de hasta dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis (6) meses a un (1) año a partir del día de la elección, o

2) Suspensión de hasta sesenta (60) días -sin goce de haberes- en el cargo que estuviere ejerciendo, si fuere funcionario o empleado público.

Igual sanción les corresponderá a los Fiscales Públicos Electorales designados que injustificadamente no concurrieran a los cursos de instrucción y capacitación previstos como obligatorios en el segundo párrafo del artículo 90 de esta Ley.

Artículo 148.- No emisión del voto. EL elector que no emita su voto y no se justifique ante el Juzgado Electoral, dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección, por alguna de las causas mencionadas en el artículo 17 de la presente Ley, será sancionado con multa equivalente al diez por ciento (10%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis (6) meses a un (1) año a partir del día de la elección.

Artículo 149.- Denegación de licencias. EL empleador que no conceda la licencia establecida en el artículo 15 de la presente Ley, será sancionado con multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 150.- Exhibición y portación de armas. EL que exhiba o porte armas desde la cero (0:00) hora del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, siempre que el hecho no importe una falta o delito conminado con una sanción mayor, será reprimido con arresto de hasta diez (10) días o multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 151.- Realización de espectáculos públicos. EL que realice espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reuniones públicas que no estuviesen previamente autorizados, desde la cero

(0:00) hora del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, será reprimido con arresto de hasta cinco (5) días o multa equivalente a un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 152.- Exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios. Propaganda política. EL que exhiba banderas o divisas y otros distintivos partidarios o efectúe públicamente cualquier propaganda política, desde la cero (0:00) hora del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, siempre que el hecho no importe una falta o delito conminado con sanción mayor, será reprimido con arresto de hasta cinco (5) días o multa equivalente al diez por ciento (10%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 153.- Difusión de encuestas: EL que publicitare o difundiere el resultado de encuestas o sondeos de opinión en boca de urna hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, siempre que el hecho no importe una falta o delito conminado con sanción mayor, será reprimido con multa equivalente a cincuenta (50) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil o hasta sesenta (60) días de arresto.

Artículo 154.- Sanciones mínimas: El que cometiére cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 66 de la presente Ley y que no tuviere una sanción específica, será reprimido con arresto de hasta cinco (5) días o multa equivalente al diez por ciento (10%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Artículo 155.- Pago de las multas. EL pago de las multas debe efectivizarse dentro de los diez (10) días hábiles de dictada la sentencia que la imponga mediante depósito bancario en la cuenta que al efecto habilite el Banco de la Provincia de Córdoba, con entrega de comprobantes al Juzgado Electoral.

Artículo 156.- Conversión: SI la multa no fuera abonada en el plazo establecido y la falta estuviere también sancionada con privación de la libertad, se producirá su conversión en arresto, a razón de un diez por ciento (10%) de un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada día de arresto, siempre que no supere el máximo correspondiente a la falta de que se tratare.

La pena de arresto por conversión de una multa cesará por su pago total. En este caso se descontará la parte proporcional al tiempo de arresto sufrido.

Artículo 157.- Constancia de no emisión del voto en el documento de identidad. EL empleador o representante legal de organismos y empresas públicas y privadas prestadoras de servicios públicos, como así también la autoridad policial y autoridades judiciales, deben concurrir en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles antes de la celebración del acto electoral, al Juzgado Electoral a los efectos de retirar constancia que certifique la autorización para no emitir el voto a todos aquellos electores comprendidos en el artículo 17, incisos 2), 5) y 6) de la

presente Ley.

Conforme a la autorización expedida por el Juzgado Electoral, los empleadores o representantes legales y autoridades mencionadas en el párrafo anterior proceden, el día siguiente al acto electoral, a dejar constancia de la no emisión del sufragio, con sello especial y firma en el lugar destinado a anotar la emisión del voto en los documentos cívicos de sus dependientes, siendo suficiente esto para no considerarlo infractor.

En el caso del artículo 148 de la presente Ley, justificada debidamente la no emisión del voto o efectivizado el pago de la multa, el Juzgado Electoral lo asienta en el lugar destinado a la constancia de emisión del voto del documento de identidad del elector.

Capítulo II Delitos Electorales

Artículo 158.- Denunciante. CUALQUIER elector o los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas pueden denunciar ante el Juzgado Electoral o el Magistrado competente, los delitos tipificados en el Código Electoral Nacional.

Capítulo III Procedimiento

Artículo 159.- Resoluciones recurribles. LAS resoluciones dictadas por el Juzgado Electoral son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia por vía de los recursos de apelación y nulidad, según corresponda a la naturaleza del agravio invocado. Ambos recursos se interponen ante el Juzgado Electoral, conjuntamente, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución y el Juzgado Electoral resuelve el otorgamiento o no de los recursos, dentro de los tres (3) días siguientes. Si no los concede, queda al interesado la posibilidad de interponer recurso directo o de queja ante el Tribunal Superior de Justicia.

Son de aplicación en todo lo que no esté específicamente previsto en esta Ley Electoral, las disposiciones que sobre cada caso estén contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 160.- Delitos y faltas electorales. LOS delitos y faltas electorales se sustancian conforme al procedimiento regulado en el Código Procesal Penal, siendo recurrible en los casos y por las vías previstas en dicho cuerpo legal.

Artículo 161.- Procedimiento especial en la acción de amparo del elector. Sustanciación. AL efecto de sustanciar la acción de amparo a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley, los funcionarios y magistrados resuelven inmediatamente en forma verbal. Sus decisiones se cumplen sin más trámite por intermedio de la fuerza pública, si es necesario, y en su caso son comunicadas en forma inmediata al Juzgado Electoral. A este

fin los magistrados judiciales mantienen abiertas sus oficinas durante el transcurso del acto electoral.

Artículo 162.- Juntas Electorales Municipales y Comunales. LAS Juntas Electorales Municipales y Comunales, el día de la elección, son los organismos encargados de colaborar con el Fiscal Público Electoral y velar por el cumplimiento de las órdenes que dicte el Juzgado Electoral.

TÍTULO VII SISTEMA ELECTORAL PROVINCIAL

Capítulo I

Elección de Gobernador y Vicegobernador

Artículo 163.- Forma. EL gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. Cada elector sufraga por una fórmula indivisible de candidatos a ambos cargos.

Artículo 164.- Elección. LA elección del gobernador y vicegobernador debe realizarse, como mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los ciento veinte (120) días de esa fecha.

Artículo 165.- Imposibilidad de asumir del gobernador y vicegobernador electos. EN caso de muerte, dimisión, ausencia u otro impedimento de carácter permanente para asumir el cargo del electo gobernador, asume en su reemplazo como titular del Poder Ejecutivo el electo vicegobernador. Si el impedimento fuera temporal, asume en su reemplazo el electo vicegobernador hasta que cese dicho impedimento.

En caso de muerte, renuncia o imposibilidad de ocupar el cargo los ciudadanos electos gobernador y vicegobernador, se procede, en el plazo de treinta (30) días, a una nueva elección de gobernador y vicegobernador.

Capítulo II

Elección de Legisladores Provinciales

Artículo 166.- Forma. LOS legisladores provinciales son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia y de los departamentos, según corresponda, de la manera que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 167.- Elección. LA elección de los legisladores provinciales debe realizarse, como mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los ciento veinte (120) días de esa fecha.

Artículo 168.- Integración. LA Legislatura de la Provincia de Córdoba se integra de la siguiente forma:

1) Por veintiséis (26) legisladores elegidos directamente por el pueblo, a pluralidad de sufragios y a razón de uno (1) por cada uno de los departamentos en que se divide la Provincia, considerando a éstos como distrito único, y

2) Por cuarenta y cuatro (44) legisladores elegidos directa y proporcionalmente por el pueblo, tomando a toda la Provincia como distrito único.

La distribución de estas bancas se efectúa de la siguiente manera:

a) El total de los votos obtenidos por cada una de las listas se divide por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al número total de las bancas a cubrir;

b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de la que provengan, se ordenan de mayor a menor hasta llegar al número cuarenta y cuatro (44);

c) Si hubiere dos (2) o más cocientes iguales, se los ordena en relación directa con el total de los votos obtenidos por las listas respectivas, y si éstas hubiesen logrado igual número de votos, el ordenamiento definitivo de los cocientes empatados resulta de un sorteo que a tal fin debe practicar el Juzgado Electoral, y

d) A cada lista le corresponden tantas bancas como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento de las cuarenta y cuatro (44) bancas.

Capítulo III

Elección de Convencionales Constituyentes

Artículo 169.- Forma. LOS convencionales constituyentes de la Provincia son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia en la forma y número que establece el artículo 198 de la Constitución Provincial.

Capítulo IV

Elección del Tribunal de Cuentas

Artículo 170.- Forma. LOS miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, con representación de las minorías.

Artículo 171.- Elección. LA elección de los miembros del Tribunal de Cuentas debe realizarse, como mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los ciento veinte (120) días de esa fecha.

Capítulo V

Disposiciones especiales

Artículo 172.- Consulta Popular y Referéndum. CUANDO alguna cuestión deba someterse a consulta popular o referéndum son de aplicación las disposiciones de esta Ley y la Ley N° 7811 y sus modificatorias.

Artículo 173.- Prohibición de encuestas. DURANTE los diez (10) días anteriores a la fecha establecida para la concreción de una consulta popular o de un referéndum, queda prohibida la publicación, difusión total o parcial o comentarios de resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión, que estén directa o indirectamente relacionados con la consulta sometida a votación.

TÍTULO VIII DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Artículo 174.- Recursos. EL Poder Ejecutivo Provincial compromete y aporta todos los recursos económicos, que el Juzgado Electoral requiera, para garantizar el íntegro cumplimiento de todos los aspectos contemplados en las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 175.- Cuenta Especial. A los fines de atender el aporte económico comprometido por el Poder Ejecutivo en el artículo precedente, se dispone la creación de una cuenta especial en el Presupuesto General de la Provincia.

Artículo 176.- Presupuesto. EL Poder Judicial debe elevar al Poder Ejecutivo Provincial, en ocasión de remitir el presupuesto anual, un informe sobre el programa a desarrollar por el Juzgado Electoral en el año calendario inmediato siguiente y su costo económico estimado, a los fines de realizar anualmente las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de esta normativa, aún cuando no se hubiere convocado a elecciones, ni se pudiera prever su realización.

Artículo 177.- Contratación. Requisitos. LA adquisición de bienes y/o contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de todas las obligaciones que le impone esta Ley al Juzgado Electoral, se realizará a través del servicio administrativo del Poder Judicial, conforme a la normativa vigente aplicable.

TÍTULO IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo Único

Artículo 178.- Simultaneidad. PARA el caso de simultaneidad de elecciones en el orden nacional y provincial el Juzgado Electoral, mediante resolución, arbitra los medios para hacer efectivo el ejercicio del derecho al voto de quienes conforme al Código Electoral Nacional se encuentren inhabilitados y que según la presente Ley están en condiciones de sufragar.

Artículo 179.- Modificación de plazos. EL Juzgado Electoral podrá acotar razonablemente y sin afectar derechos y garantías constitucionales, los plazos previstos en esta Ley, en aras de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral a su cargo.

Artículo 179.- Software. TODO el sistema de procesamiento de datos electorales vía electrónica (software) que debe ser utilizado y operado por el Juzgado Electoral en la aplicación de esta normativa, será diseñado por las universidades con asiento en la Provincia de Córdoba que firmen convenio con el Poder Ejecutivo Provincial, en el que participará el Poder Judicial provin-

cial aportando la experiencia y los antecedentes recogidos en virtud de la aplicación de su software propio. El Estado Provincial será el propietario del software y proveerá todos los recursos económicos que demande su desarrollo.

Artículo 180.- Juzgado Electoral. Estructura. EN oportunidad del informe previsto en el artículo 176 de la presente Ley, el Poder Judicial debe presupuestar el costo económico para dotar al Juzgado Electoral de la estructura funcional y profesional necesaria a los fines de dar cumplimiento a todas las obligaciones que la presente Ley y el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos le imponen.

Artículo 181.- Cámara Electoral ad-hoc. UNA ley especial creará una Cámara Electoral ad-hoc y determinará su integración, competencia, roles y funciones que deberá tener a los fines de controlar y asistir al Juzgado Electoral en la aplicación de todos los aspectos regulados por la presente normativa y por el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.

Artículo 182.- Voto Electrónico. Implementación. LO establecido en la presente normativa no es obstáculo para que el Juzgado Electoral, evaluando el comportamiento cívico frente al nuevo sistema eleccionario, propenda a implementar en forma progresiva y sistemática las acciones necesarias tendientes a impulsar un mecanismo electrónico de emisión del sufragio.

Previo a su implementación, el Juzgado Electoral debe realizar pruebas pilotos en circuitos o secciones electorales, a fin de evaluar la eficacia del sistema y la aceptación por parte del electorado.

LIBRO SEGUNDO FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

TÍTULO I MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

Capítulo I Principios Generales

Artículo 183.- Finalidad. EL Estado Provincial garantiza el desarrollo y fortalecimiento del sistema republicano de gobierno y de los partidos políticos, a través del financiamiento de las campañas electorales.

Artículo 184.- Objetivo. SON objetivos de la presente Ley, establecer, definir, regular y controlar los aportes que el Estado Provincial y los particulares realizan a fin de contribuir al financiamiento de las campañas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral.

Artículo 185.- Financiamiento. Clases. LAS campañas electorales de los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen de una compulsa

electoral se financian con fondos:

1) Públicos: constituidos por el aporte del Estado Provincial destinado a la contratación de espacios publicitarios en medios electrónicos de comunicación -radio y televisión- para la publicidad y propaganda electoral, y

2) Privados: constituidos por toda contribución, donación o aporte en dinero o susceptible de apreciación en dinero, cualquiera sea el hecho o acto jurídico -a título gratuito- por el cual se materialice, con destino a publicidad, propaganda y gastos electorales, con las limitaciones impuestas por la presente Ley.

Capítulo II

Financiamiento Público Provincial

Artículo 186.- Fondo Permanente. CRÉASE el "Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales", el que está integrado con los recursos que anualmente destine la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial. Dicha afectación no puede ser inferior a la suma equivalente al dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la última elección provincial y está destinada a financiar la publicidad y propaganda electoral en medios electrónicos de comunicación -radio y televisión- públicos y privados, provinciales y locales.

Artículo 187.- Depósito. LOS recursos que integran el Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales son depositados en una cuenta especial abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, a la orden del Poder Judicial, con la obligación de la afectación específica.

Artículo 188.- Contratación de espacios publicitarios. EL Poder Judicial arbitra los medios conducentes para contratar los espacios publicitarios en los medios electrónicos de comunicación -radio y televisión-, públicos y privados, provinciales y locales, para la publicidad y propaganda electoral, con la finalidad de promover a los candidatos a cargos electivos y difundir las propuestas programáticas, planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral.

Artículo 189.- Distribución de espacios publicitarios. EL Juzgado Electoral distribuirá los espacios publicitarios entre los partidos, alianzas y confederaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos electivos provinciales, de la siguiente manera:

1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la contienda electoral, y

2) El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones provinciales -para legisladores por distrito único- inmediatamente anteriores siempre que hayan alcanzado, al menos, el tres por ciento (3%) del total

de votos válidamente emitidos.

Artículo 190.- Disposición de los espacios publicitarios. EL Juzgado Electoral, por medio de los mecanismos administrativos y contables previstos en el ámbito del Poder Judicial, realiza las contrataciones de espacios publicitarios a fin de que los partidos, alianzas o confederaciones políticas puedan disponer de los mismos durante los últimos treinta (30) días de campaña, antes de la veda electoral.

Artículo 191.- Modo de Contratación. Límite. EL Juzgado Electoral como mínimo sesenta (60) días antes del inicio de la campaña electoral, determinará la cantidad de minutos diarios que se podrán ocupar con publicidad y propaganda electoral en los medios electrónicos de comunicación públicos y privados, provinciales y locales, el que no podrá superar el noventa por ciento (90%) del total de espacio publicitario ocupado o utilizado por la propaganda electoral en la campaña del año 2007.

De la totalidad de los espacios publicitarios fijados, el Juzgado Electoral, contratará el cincuenta por ciento (50%) y los distribuirá entre todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen de la elección conforme lo establecido en el artículo 190 de la presente Ley y por sorteo.

Artículo 192.- Partidos nuevos. PARA el caso de aquellos partidos políticos que no registren referencia electoral anterior, se les adjudicará -únicamente- el espacio publicitario que se distribuya igualitariamente para cada uno de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, conforme a lo dispuesto en el artículo 190, inciso 1) de la presente Ley.

Artículo 193.- Alianzas y confederaciones nuevas. PARA el caso de las alianzas y confederaciones políticas que no hayan participado en la última elección provincial, se les adjudicará:

1) El espacio publicitario previsto en el artículo 190, inciso 1) de esta Ley, y

2) La suma de los espacios publicitarios que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 190, inciso 2) de la presente Ley, le corresponda a cada uno de los partidos que la integran, conforme a los votos que hubieren obtenido en la última elección provincial para legisladores por distrito único.

Artículo 194.- Límite. PARA el caso de alianzas o confederaciones nuevas, el espacio publicitario que le corresponda no puede ser superior al espacio publicitario adjudicado al partido, alianza o confederación política que hubiera resultado ganadora en la última elección provincial para gobernador y vicegobernador.

Artículo 195.- Alianzas disueltas. PARA el caso de aquellos partidos políticos que hubieran concurrido a la última elección provincial integrando una alianza que no se hubiera reinscripto para la nueva convocatoria a elecciones, el espacio publicitario correspondiente se distribuirá entre los partidos miembros, en la proporción que establecía el acuerdo suscripto por los partidos al

momento de solicitar el reconocimiento como alianza.

Artículo 196.- Confederaciones disueltas o extinguidas. PARA el caso de las confederaciones que hubieren resultado disueltas o extinguidas, el espacio publicitario público que le hubiere correspondido o al que se hubiere hecho acreedor, se considerará extinguido y será distribuido en la forma y proporción establecida en el artículo 190 de la presente normativa.

Si alguna fuerza política de las que formaban parte de la confederación solicitare el reconocimiento como partido en la Justicia Electoral y decidiera participar en la elección convocada, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 193 de esta Ley.

Artículo 197.- Retiro de candidatos. Si el partido, alianza o confederación política retirara sus candidatos y no se presentara a la elección, debe restituir, en el término de sesenta (60) días de realizado el comicio, el monto equivalente al espacio publicitario utilizado.

Caso contrario, se le deducirá el importe correspondiente del Fondo Partidario Permanente creado en la ley que regula el régimen jurídico de los partidos políticos.

Artículo 198.- Comunicación. EN el primer mes de cada año, el Juzgado Electoral informa a los partidos políticos el monto de los recursos que integran el Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, existentes al día 31 de diciembre del año anterior.

Capítulo III

Financiamiento Privado

Artículo 199.- Aportantes. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden obtener para el financiamiento de sus campañas electorales, con las limitaciones previstas en la presente Ley, los siguientes aportes del sector privado:

- 1) De sus afiliados, de acuerdo a lo que prescriban sus cartas orgánicas;
- 2) De otras personas físicas no afiliadas;
- 3) De las personas jurídicas, y
- 4) Del rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades.

Artículo 200.- Topes individuales. NINGUNA persona física puede efectuar contribuciones, donaciones o aportes a un mismo candidato y para la misma campaña electoral, superiores a la suma equivalente a cinco (5) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Artículo 201.- Prohibiciones. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas no pueden aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de:

- 1) Personas anónimas. No puede imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;

2) Entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestatales, binacionales, multilaterales o municipales;

3) Empresas concesionarias de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales;

4) Personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;

5) Personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;

6) Personas físicas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;

7) Gobiernos o entidades extranjeras, y

8) Asociaciones sindicales, patronales o profesionales.

Artículo 202.- Máximo para espacios publicitarios. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden –con recursos propios- contratar en medios electrónicos -radio y televisión- para publicidad y propaganda electoral, como máximo, la misma cantidad de espacios publicitarios recibidos del Juzgado Electoral, en virtud de lo establecido en los artículos 190 y 192 de la presente Ley.

Si alguno de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participan de la contienda electoral, no hiciera uso de esta facultad, ese espacio no utilizado podrá ser adjudicado por el Juzgado Electoral a quienes deseen adquirirlo y en la misma proporción de distribución señalada en el apartado anterior.

Artículo 203.- Contratación Privada. Control. A los fines del control sobre el porcentaje de contratación máximo establecido en el artículo anterior, los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben presentar ante el Juzgado Electoral el programa de contrataciones, indicando el nombre del medio y la cantidad de espacio a contratar, el que en conjunto no podrá superar el máximo permitido.

De conformidad con la nómina presentada, el Juzgado Electoral extenderá las autorizaciones correspondientes para ser entregadas a los medios respectivos, indicando el máximo de espacio que puede venderle al partido, alianza o confederación política que lo requiera.

Artículo 204.- Gastos Electorales. Tope. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas que participan de la compulsa electoral no pueden superar, individualmente y para gastos electorales, la suma equivalente al dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la elección. Quedan comprendidos en dichos gastos electorales los siguientes:

- 1) Alquiler de locales para la celebración de actos de la campaña electoral;
- 2) Remuneraciones del personal que presta ser-

vicios para las candidaturas;

3) Gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que propicia candidaturas y del personal afectado a tales servicios;

4) Correspondencia, franqueo y servicios telegráficos, telefónicos y otros que utilicen la red nacional o internacional de comunicaciones, y

5) Todo otro gasto necesario para la organización y funcionamiento de la campaña electoral.

Artículo 205.- Información del tope. EL Juzgado Electoral con una antelación de treinta (30) días al inicio de la campaña electoral informará a los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral, el límite de gastos electorales que pueden realizar, publicando esa información en su sitio web.

TÍTULO II CAMPAÑAS ELECTORALES

Capítulo I

Consideraciones Generales

Artículo 206.- Definición. A los efectos de esta ley, se entiende por campaña electoral al conjunto de actividades realizadas por los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral, con el propósito de promover la participación del electorado y la captación del sufragio a favor de los candidatos a cargos públicos electivos y/o de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en el acto comicial.

Las actividades académicas, debates, conferencias, presentación de planes y proyectos y la realización de congresos o simposios, no son considerados como partes integrantes de una campaña electoral.

Artículo 207.- Plazos. LAS campañas electorales para la elección de gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales y miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, tienen una duración de cuarenta y cinco (45) días corridos antes de la fecha fijada para la veda electoral.

Capítulo II

Publicidad y Propaganda Electoral

Artículo 208.- Objeto. EL objeto de la publicidad y propaganda electoral es la promoción de los candidatos a ocupar cargos electivos, la difusión de la plataforma electoral y los planes y programas de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, con la finalidad de concitar la adhesión del electorado durante las campañas electorales.

Artículo 209.- Responsabilidades democráticas. ES responsabilidad de las agrupaciones políticas que propician las candidaturas, cuidar que el contenido de los mensajes constituya una alta expresión de adhesión a

los valores del sistema republicano y democrático y contribuya a la educación cívica del pueblo.

Artículo 210.- Pautas publicitarias. TODA propaganda que realicen los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben individualizar claramente:

1) Su nombre en términos que no provoquen confusión gráfica o fonética, y

2) El nombre del o los candidatos y el o los cargos a los que aspiran ocupar, cuidando no inducir a engaños o confundir al electorado.

Si tal hecho ocurriese, el partido, alianza o confederación política afectado por los mensajes de esa propaganda, puede recurrir al Juzgado Electoral solicitando se suspenda o impida su continuidad.

El Juez, previa vista al fiscal electoral y sin más trámite, dictará resolución en un término perentorio no mayor de dos (2) días.

Artículo 211.- Publicidad y propaganda prohibida. QUEDA absolutamente prohibida la publicidad y propaganda electoral, cuyos mensajes propugnen:

1) La incitación a la violencia;

2) La discriminación por razones de clase, raza, sexo o religión;

3) La animosidad y los estados emocionales o pasionales que inciten a la destrucción de bienes o atente contra la integridad física de las personas;

4) La instigación a la desobediencia colectiva al cumplimiento de las leyes o de las decisiones judiciales o a las disposiciones adoptadas para salvaguardar el orden público;

5) Las injurias y calumnias, y

6) El desaliento a la participación;

Artículo 212.- Franja horaria. LA franja horaria dentro de la cual se emitirá la publicidad y propaganda electoral de los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral, está comprendida entre las siete (07:00) horas y las veintidós (22:00) horas para los espacios radiales y de doce (12:00) horas a veintitrés (23:00) horas para los espacios televisivos.

Artículo 213.- Espacios gratuitos. A los efectos de contribuir con los procesos democráticos y la consiguiente educación cívica del pueblo, los medios electrónicos locales de comunicación -radiales y televisivos- deben destinar, sin costo alguno, un adicional del diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios que les hubiera contratado el Juzgado Electoral, para la divulgación de las propuestas programáticas, planes de trabajo y plataforma electoral de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en las elecciones, durante los últimos diez (10) días corridos anteriores a la veda electoral.

A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos de edición provincial destinarán media (1/2) página por edición.

La distribución del espacio publicitario es reali-

zada por el Juzgado Electoral en la forma prevista en el artículo 190 de la presente Ley.

Artículo 214.- Prohibición para terceros. QUEDA expresamente prohibida la contratación de espacios publicitarios en los medios electrónicos de comunicación - radio y televisión-, públicos y privados, provinciales y locales, para la publicidad y propaganda electoral por cuenta de terceros.

Sólo pueden contratar los espacios publicitarios destinados a propaganda y publicidad electoral, el Juzgado Electoral y los Responsables Políticos de Campañas Electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral.

Queda prohibido a los medios electrónicos de comunicación, la venta de espacios o segundos de aire a quienes no ostenten las calidades señaladas.

Artículo 215.- Publicidad en la vía pública. A los efectos de la propaganda en la vía pública, los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en las elecciones deben adecuar sus programas de propaganda y publicidad electoral a las disposiciones que las municipalidades y comunas tengan en vigencia.

Artículo 216.- Publicidad en consultas populares. DURANTE las campañas de propaganda para consultas populares o referéndum, cuya duración no puede ser superior a los treinta (30) días anteriores al acto, los medios electrónicos de comunicación locales deben conceder espacios gratuitos iguales para quienes apoyen las propuestas del “SI” o del “NO”.

Artículo 217.- Encuestas. QUEDA prohibida la difusión de resultados de encuestas de opinión desde los diez (10) días inmediatamente anteriores al día de las elecciones y la difusión de resultados de sondeos de boca de urna, hasta tres (3) horas después del cierre del acto electoral.

Capítulo III Abstenciones

Artículo 218.- Publicidad oficial. QUEDA prohibida la realización de publicidad oficial durante los últimos treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha prevista para una elección.

Artículo 219.- Actos inaugurales. QUEDA prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, durante los quince (15) días inmediatos anteriores a la fecha fijada para la celebración de un comicio.

Capítulo IV

Responsable Político de Campaña Electoral

Artículo 220.- Nombramiento. LOS partidos, alianzas o confederaciones políticas que participan en una compulsa electoral, deben designar un Responsable

Político de Campaña Electoral y un suplente, quienes deben tener domicilio en la Provincia de Córdoba, no ser candidatos en la elección y estar afiliados al partido que los designa.

Artículo 221.- Subadministradores. EL Responsable Político de Campaña Electoral puede designar subadministradores departamentales de las respectivas campañas electorales locales, quienes deben tener domicilio en la sección en la que actúen, no ser candidatos en la elección y estar afiliados al partido al que pertenece el Responsable Político que los designa.

Artículo 222.- Comunicación. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas deben comunicar al Juzgado Electoral los datos personales y profesionales del Responsable Político de Campaña Electoral, su suplente y de los subadministradores, con una antelación no menor a los cincuenta (50) días corridos antes de la fecha fijada para el comicio para el caso de los dos (2) primeros y no inferior a los treinta (30) días corridos para los subadministradores.

Artículo 223.- Responsabilidad. EL Responsable Político de Campaña Electoral, el suplente y los subadministradores son los responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y de las demás disposiciones legales vigentes en materia tributaria.

Artículo 224.- Cuentas Bancarias. EL Responsable Político de Campaña Electoral debe abrir una cuenta especial en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre del partido, alianza o confederación que lo hubiera designado y a la orden conjunta de él y del tesorero, donde se deben depositar todas los recursos destinados a afrontar los gastos electorales.

Las cuentas bancarias deben cerrarse a los treinta (30) días de realizada la elección.

Artículo 225.- Obligaciones. EL Responsable Político de Campaña Electoral y el suplente tienen las siguientes obligaciones:

- 1) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación de origen y destino de los mismos, fecha de la operación y nombre y domicilio de las personas intervinientes;
- 2) Elevar en término al Juzgado Electoral la documentación e información requerida por la presente Ley;
- 3) Efectuar todos los gastos electorales con cargo a la cuenta bancaria correspondiente al partido, alianza o confederación política, y
- 4) Conservar la documentación e información durante los cuatro (4) años siguientes al acto electoral.

Artículo 226.- Constancia de operación. TODO gasto que se efectúe con motivo de una campaña electoral superior a un (1) salario mínimo, vital y móvil debe documentarse, sin perjuicio de la emisión de los instru-

mentos fiscales ordinarios, a través de una "Constancia de Operación de Campaña Electoral" en la que deben figurar los siguientes datos:

- 1) Identificación tributaria del partido, alianza o confederación política y de la parte cocontratante;
- 2) Importe de la operación;
- 3) Número de la factura correspondiente, y
- 4) Número de cuenta y del cheque destinado al pago.

Las "Constancias de Operación de Campaña Electoral" son numeradas correlativamente para cada campaña y deben registrarse en los libros contables de los partidos, alianzas o confederaciones políticas.

Artículo 227.- Informe previo. LOS Responsables Políticos de Campaña Electoral deben elevar al Juzgado Electoral, con quince (15) días de antelación a la celebración de un comicio, un informe detallado de los aportes privados recibidos, con indicación del origen, monto y destino de los mismos.

Artículo 228.- Informe final. LOS Responsables Políticos de Campaña Electoral deben elevar al Juzgado Electoral, dentro de los sesenta (60) días siguientes a las elecciones, cuenta documentada de todos los ingresos y gastos irrogados por la campaña electoral.

Independientemente de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir los Responsables Políticos de Campaña Electoral y su suplente, la falta de remisión de tales resultados al Juzgado Electoral, determina la cesación de todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado hacia el partido político que hubiere incumplido con la obligación.

En el caso de alianzas o confederaciones dicha sanción se hará extensiva a los partidos que las integran.

Artículo 229.- Gastos anticipados. LAS compras o contrataciones que se realicen con anterioridad al comienzo de una campaña electoral deben ser comunicadas por el Responsable Político de Campaña Electoral al Juzgado Electoral en los informes previstos en los artículos 228 y 229 de la presente Ley.

Capítulo V Control

Artículo 230.- Auditoría. EL Juzgado Electoral tiene la responsabilidad de auditar los medios electrónicos de comunicación a efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. A tal fin puede contratar un servicio de auditoría de medios electrónicos de comunicación.

El Poder Ejecutivo debe proveer los fondos necesarios a efectos de que el Juzgado Electoral haga frente a tales erogaciones.

Artículo 231.- Publicidad de informe final. EL Juzgado Electoral ordena la publicación del informe previsto en el artículo 229 de la presente Ley en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en su sitio web.

Artículo 232.- Documentación. Permanencia.

Todos los informes referidos a los gastos de campañas electorales, de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participaron en la elección, deben permanecer en el Juzgado para conocimiento de los interesados y del Ministerio Fiscal, durante treinta (30) días hábiles.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho término no se hicieren observaciones, el Juzgado ordena su archivo.

Si se formularen observaciones por violación de las disposiciones legales o de la carta orgánica, el Juzgado Electoral resuelve, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Artículo 233.- Acceso de terceros. CUALQUIER ciudadano sin limitación alguna y sin necesidad de acreditar interés legítimo puede tener acceso a los informes obrantes en el Juzgado Electoral referidos a gastos de campañas electorales.

Artículo 234.- Solicitud de información. EL Juzgado Electoral puede, en cualquier momento, exigir la presentación de todas las informaciones referidas al manejo de fondos electorales a los respectivos Responsables Políticos de Campaña Electoral.

Artículo 235.- Informe final de campaña. EL Juzgado Electoral tiene un plazo máximo de noventa (90) días desde la fecha de recepción del informe final establecido en el artículo 229 de la presente Ley, para realizar el Informe Final de Campaña, el que será notificado a los partidos, alianzas y confederaciones políticas participantes del acto electoral, quienes tendrán diez (10) días para efectuar las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. El Juzgado Electoral resolverá en definitiva en el plazo de diez (10) días.

TÍTULO III RÉGIMEN SANCIONATORIO

Capítulo Único Infracciones y Sanciones

Artículo 236.- Tarifas sobrevaluadas. SERÁN sancionados con multa equivalente de hasta doscientos (200) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los medios electrónicos de comunicación —radiales y televisivos— que establecieren tarifas superiores a las normales —en violación a lo dispuesto en el artículo 189 de la presente Ley.

Artículo 237.- Incumplimiento de los medios de comunicación. Serán sancionados con multa equivalente de hasta cien (100) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los medios electrónicos de comunicación que alterasen el precio de sus tarifas normales durante el desarrollo de una campaña electoral, favoreciendo a un partido, alianza o confederación política, y discriminando en perjuicio de otro.

Artículo 238.- Ventas irregulares. SERÁN sancionados con multa equivalente de hasta doscientos

(200) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los medios electrónicos de comunicación que:

1) Vendieren espacios publicitarios, sin la presentación de la autorización o constancia extendida por el Juzgado Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la presente Ley, y

2) Vendieran espacios publicitarios a quienes no ostenten las calidades señaladas en el artículo 215 de esta Ley.

Artículo 239.- Violación al contenido publicitario. EL contenido del material de propaganda concebido en violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 212 de la presente Ley, hará pasible a sus autores o al partido, alianza o confederación política que lo propicie, a ser sancionados con multa equivalente de hasta cincuenta (50) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Artículo 240.- Pérdida de derecho a espacios publicitarios. SERÁN sancionados con la pérdida del derecho a recibir el espacio publicitario que distribuye el Juzgado Electoral, por una (1) o dos (2) elecciones, los partidos, alianzas o confederaciones políticas que:

1) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto equivalente al espacio publicitario utilizado, en los términos del artículo 198 de la presente Ley;

2) Recibieran contribuciones o donaciones en violación a lo dispuesto en el artículo 202 de la presente Ley;

3) Realizaran gastos en violación a lo previsto en los artículos 203 y 205 de la presente Ley;

4) Recibieran o depositaran fondos en cuentas bancarias distintas de las previstas en el artículo 225 de la presente Ley, y

5) Realizaran contrataciones en medios electrónicos de comunicación sin contar con la autorización o constancia emanada del Juzgado Electoral, conforme lo establece el artículo 204 de la presente Ley.

Artículo 241.- Infracciones del Responsable Político de Campaña Electoral. LOS Responsables Políticos de Campaña Electoral y los suplentes que no cumplieran con las obligaciones previstas en los artículos 222, 223 y 224 de la presente Ley, serán pasibles, además de las sanciones penales que pudieran corresponderles, de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio de sus derechos a elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos provinciales, municipales o comunales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos en los que estuvieren afiliados.

Artículo 242.- Infracciones de terceros. LOS terceros que efectúen contribuciones o donaciones o realicen contrataciones en violación a lo dispuesto en los artículos 202 y 215 de la presente Ley, serán sancionados con multa equivalente de hasta el décuplo de la contribución o donación efectuada o la contratación realizada.

Las personas físicas que incurran en la conducta señalada en el presente artículo serán pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos provinciales, municipales o comunales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos.

Artículo 243.- Extensión de la sanción. Solidaridad. PARA los casos en que las infracciones previstas en la presente normativa fueren cometidas por personas jurídicas, la sanción que se imponga tendrá alcance solidario para con las personas físicas que ostenten el cargo de director, socio gerente, gerente, administrador o similar de la empresa que se trate. Asimismo, de corresponder, la persona física será pasible de la sanción accesoria de inhabilitación.

Artículo 244.- Reincidencia. Para los casos de reincidencia en la comisión de cualquiera de las infracciones establecidas en la presente Ley, los máximos previstos para la sanción se incrementan en un cincuenta por ciento (50%).

Artículo 245.- Sanciones. Graduación. EL Juzgado Electoral debe merituar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen a la infracción cometida como asimismo las condiciones personales del/de los supuesto/s infractor/es a fin de graduar la sanción.

TÍTULO IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo Único Consideraciones finales

Artículo 246.- Carácter. LA presente Ley es de orden público y ninguna persona física ni jurídica puede alegar -en su contra- derechos irrevocablemente adquiridos.

Artículo 247.- Interpretación. TODO conflicto normativo relativo a su interpretación y aplicación debe resolverse a favor de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 248.- Vigencia. LA presente Ley entra en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 249.- Derogación normativa. DEROGASE la Ley Nº 8767.

Artículo 250.- De Forma. COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

- 16 -

A) RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

B) LEY Nº 8102, ORGÁNICA MUNICIPAL. RENOVACIÓN DE AUTORIDADES, ELECCIONES, CAMPAÑAS ELECTORALES,

PUBLICIDAD OFICIAL Y ACTOS INAUGURALES DE OBRAS. ARTÍCULOS 143 Y 218. MODIFICACIÓN. TÍTULO VIII, CAPÍTULO VII. INCORPORACIÓN.

Tratamiento conjunto sobre tablas

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo que planteé antes de realizarse la votación del proyecto tratado anteriormente, propongo que pongamos a consideración los dos proyectos de ley para que sean tratados en conjunto y, tal cual lo hemos pautado con el resto de los bloques, que se le de el uso de la palabra primero al legislador Ruiz y luego a mí.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del legislador Passerini.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley 1860/L/08. Régimen Jurídico de los Partidos Políticos, compatibilizado con los proyectos 11308, 11647/L/07 y 1733/E/08, que cuenta con despacho de comisión.

A continuación, por Secretaría será leída la nota mocionando el tratamiento sobre tablas, conjuntamente con el proyecto 1897, que modifica artículos de la Ley 8102 e incorpora el Capítulo VII del Título VIII, para ser tratados en conjunto con votación por separado.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

Sr. Héctor Campana
S. / D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1860/L/08, iniciado por los bloques de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, Concertación Plural y Recrear para el Crecimiento, compatibilizado con los proyectos de ley referidos al mismo tema, cuyos números serán leídos por Se-

cretaría, por el que establece el Régimen Jurídico de Partidos Políticos y deroga la Ley N° 6879, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, para ser tratados en conjunto con el proyecto de ley 1897/L/08, iniciado por los legisladores Passerini y Fortuna, por el que modifica los artículos 143 y 218 e incorpora el Título VII al Título VIII de la Ley 8102, Orgánica Municipal, referida a renovación de autoridades, elecciones, campañas electorales, publicidad oficial y actos inaugurales de obras.

Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Economía, Presupuesto y Hacienda, y tras la Audiencia Pública realizada el pasado lunes 24 de noviembre, se considera oportuno el tratamiento de dichos expedientes en la presente sesión ordinaria.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Daniel Passerini

Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente: en forma muy breve, quiero decir que la Ley de Partidos Políticos en tratamiento, como lo han expresado distintos bloques, tiene como objetivo fundamental fortalecer los partidos políticos en la Provincia de Córdoba, apuntar a un sistema de partidos de menos expresiones políticas pero mucho más representativas del sentir y del pensar político-ideológico de los cordobeses y cordobesas y, además, promover el asociacionismo político con la formación de coaliciones o frentes políticos. Esto va de la mano con la prohibición de las sumatorias -a las que ya se ha hecho referencia- que significa un importante avance, el establecimiento de candidaturas únicas y la prohibición del transfuguismo electoral, que refiere a aquellos candidatos que pierden en una elección interna y pasan a ser candidatos de otro partido político.

También es importante destacar, en este proyecto de ley de partidos políticos, el punto referido a los fondos públicos que el Estado provincial compromete para el financiamiento de los partidos y, en particular, la obligación de destinar el 30 por

ciento a la capacitación de los partidos políticos.

Voy a presentar una propuesta de agregado, que ya ha sido sometida a consideración de la Cámara en comisión. Se refiere al artículo 100, Personería Provincial a Partidos de Distrito, y establece lo siguiente: “Los partidos políticos que hubieran obtenido personería jurídico-política como partidos de distrito, de conformidad a las prescripciones de la Ley Orgánica de Partidos Políticos nacional, no estarán obligados a satisfacer los requisitos exigidos en el artículo 14. Para obtener su reconocimiento definitivo como partido provincial, deberán acompañar con su petición los siguientes elementos: testimonio de la resolución que le reconoce personería jurídico-política como partido de distrito, declaración de principios y bases de acción política y Carta Orgánica, acta de elección de autoridades, domicilio partidario, acta de designación de apoderados y nómina de la totalidad de afiliados en la Provincia.”

A continuación, desde nuestro bloque queremos hacer algunas consideraciones sobre algunos artículos de esta ley que, desde nuestro punto de vista, deberían ser modificados, lo que ya ha sido analizado en comisión.

En el artículo 1º -y ya lo expresamos en comisión- entendemos que los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público, no estatal, con capacidad para actuar en el derecho privado.

En el artículo 2º, creemos que es muy importante agregar una cláusula de salvaguarda de las asociaciones de vecinos que participan en las comunas sin constituirse como partidos políticos.

Hasta el momento, la Ley Orgánica Municipal permite la formación de asociación de vecinos para participar en las elecciones comunales, y esto debe ser perfectamente aclarado para que la constitución de partidos comunales no signifique la eliminación de las asociaciones de vecinos.

En el artículo 11, no nos parece razonable exigir sino solamente facultar a los partidos políticos a que en sus Cartas Orgánicas partidarias permitan candidaturas extrapartidarias.

En el artículo 30, agregar entre los requisitos sustanciales, la prohibición de defender o encubrir a los afiliados o dirigentes partidarios que hubieren incurrido en actos de corrupción tanto en la función pública como la privada.

En el artículo 32, inciso 1º, debería agregarse que las autoridades partidarias no pueden ser reelectas más de una vez, salvo un intervalo de tiempo.

En el artículo 39, falta colocar como causal de extinción de la afiliación el fallecimiento del afiliado.

En el artículo 64, inciso 2º, cuestionamos la posibilidad contemplada de que los partidos puedan recibir donaciones de personas jurídicas, ya que entendemos que solamente se tienen que sostener con aportes privados limitados a personas físicas; es decir, no estamos de acuerdo con el financiamiento de personas jurídicas.

En el artículo 66, proponemos extender la prohibición de recibir contribuciones de todas las sociedades, sean nacionales o extranjeras; agregar en el inciso 8º, la prohibición de contribución por parte de obras sociales a los partidos políticos.

Finalmente, desde nuestro punto de vista, en este último artículo habría que agregar un inciso que recepte el principio del artículo 36 de la Constitución nacional, que señala que atenta contra el orden constitucional el partido que encubre o facilita actos de corrupción. Esta sería la clave para salvar la omisión del proyecto.

Todo el texto se va a pasar al Cuerpo de Taquígrafos.

Con el segundo proyecto, vinculado a la reforma de la Ley Orgánica Municipal, estamos de acuerdo en establecer plazos máximos y mínimos de convocatoria a elecciones municipales y comunales; acordábamos con el primer proyecto presentado por el boque oficialista en el sentido de establecer estos plazos entre 30 y 120 días.

Finalmente, quiero decir que nos parece muy importante que las disposiciones sobre la prohibición de publicidad oficial treinta días anteriores a las elecciones; la prohibición de inauguración de obras quince días antes de las elecciones y el establecimiento de las campañas políticas en cuarenta y cinco días, pasen a formar parte de la Ley Orgánica municipal.

Muchas gracias.

**INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL
LEGISLADOR RUIZ
OBSERVACIONES AL APROYECTO DE LEY
DE PARTIDOS POLITICOS**

ART. 1 Agregar en definición Personas Jurídicas de Derecho Público no estatal, para estar a tono

con la definición de la Corte Suprema y la doctrina.

ART. 2 Agregar cláusula de salvaguarda de las asociaciones de vecinos que participan en las comunas sin constituirse como partido político.

ART 4 Inc. 2 Agregar al final valores ...de las Const. Nacional y provincial

ART. 10 La redacción apropiada sería hacer punto aparte en el segundo párrafo quedan prohibidas, además, las sumatorias de listas entre sí. El párrafo tercero no debería extender la prohibición a cargos nacionales porque ello es facultad federal, legislar sobre ello invadiría atribuciones del Congreso.

ART. 11 No parece razonable exigir sino solo facultar a los partidos a que sus cop permitan candidaturas de extrapartidarios.

Art. 12 Inc. 2, Revisar posibilidad que se afilien electores provinciales con la nueva ley lo son los extranjeros que se inscriban en el registro electoral creado para extranjeros. ¿pueden afiliarse a los partidos?

Art. 30 Agregar entre los requisitos sustanciales la prohibición de defender o encubrir a los afiliados o dirigentes partidarios que hubieren incurrido en actos de corrupción tanto en la función pública como la privada

Art. 32 Inc. 1, Debería agregarse que las autoridades partidarias no pueden ser reelectas mas de una vez, salvo un intervalo.

Art. 33 Sustituir el verbo el jep no debe aprobar sino solo verificar que las cop respeten los preceptos de los art. 30 y 32. Lo contrario supone demasiada injerencia judicial en la vida de los partidos que no deben ser aprobados sino solo reconocidos.

Art. 36 inc. 2 para que la norma guarde coherencia con el resto del sistema legal debe exigirse siempre documentos reconocidos a los fines electorales para la afiliación, es decir, DNI, LC o LE. Solo ello, con copia

Para el archivo del partido, para seguir los criterios pretorianos de la cámara nacional electoral y evitar abusos de afiliaciones involuntarias

Art. 37 Pensar si pueden ser afiliados los extranjeros o no

Art. 39 Falta causal de extinción de afiliación por fallecimiento del afiliado

Art. 43 No es clara la redacción, no se entiende si alcanza el piso de votantes en la interna a los partidos municipales o solo a los provinciales. habría que reformular el texto

Art. 64 Inc. 2. Cuestionar la posibilidad contemplada de que los partidos puedan recibir donaciones de personas jurídicas. sostener solo aportes privados o limitados a personas físicas

Art. 65 Ayer se debatió en las comisiones su redacción no es clara no se entiende cual es el límite de gastos permitidos, en comisión se propuso modificar el texto fijando limites a las donaciones en función de los ingresos o utilidades de los donante, y mediante una declaración jurada del mismo.

Art. 66 Podríamos proponer extender la prohibición de recibir contribuciones de las todas las sociedades, sean nacionales o extranjeras. (inc. 6) también agregar la prohibición de contribuir que alcance a las obras sociales. (inc. 8).

Art. 70 Inc. 2 Alude con imprecisión a radio y tv por aire o cable de carácter provincial o local.

Se trata de una expresión incorrecta, dado que no existen tales medios provinciales o locales.

Conforme la ley de radiodifusión vigente debe precisarse si lo que se pretende es que los partidos provinciales accedan a los medios que tienen sus plantas emisoras en el territorio provincial o sus repetidoras, dado que hay medios que emiten sus señales desde otros territorios que también son receptados en la provincia.

Si no se aclara el texto propuesto, probablemente traerá graves problemas interpretativos que harán de difícil cumplimiento los objetivos que la ley se propone.

Art. 82 Inc. 3 Exige como condición para mantener la personería jurídico política obtener 2% de votos durante dos elecciones generales consecutivas para legisladores provinciales

Habría que aclarar que se trata de leg por distrito único o bien en al menos un departamento para ese rango. Dado que si un partido tiene gran desarrollo solo en uno o más dptos no debería perder su personería.

Art. 86 Falta agregar un inc. que recepte el principio del art. 36 cn

Atenta contra el orden constitucional el partido que encubre o facilita actos de corrupción creo que es clave salvar esta omisión del proyecto

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: dado lo productivo de esta sesión en términos de los contenidos políticos que hemos discutido y de la inquebrantable voluntad de los aquí presentes de buscar los consensos, pero fomentando el debate como único instrumento para ejercer la política en este recinto -y, ojalá, a partir de hoy en todos los ámbitos, porque no hay instrumento más poderoso para buscar consensos o profundizar la diferencias de ideas dentro del ámbito de la democracia, que el debate civilizado- hoy estamos aprobando instrumentos legales que, como dijo el doctor

Francisco Fortuna al inicio de esta sesión, en su doble rol de Presidente Provisorio y presidente de la Comisión de Reforma, el doctor Francisco Fortuna al inicio de esta sesión, estamos dando a luz un texto legislativo de los más importantes en materia de proyección hacia el futuro que tiene esta Legislatura.

En este proceso de reforma político electoral, y a un año –el 10 de diciembre vamos a cumplirlo- de haber iniciado todos los que estamos aquí nuestro trabajo legislativo, prácticamente y de manera simultánea –recordarán- que el Gobernador Schiaretti juraba y asumía el compromiso de llevar adelante este proceso –que lejos de cerrarse hoy, es un grave error pensarlo-, estamos dando apertura a una etapa de profundos cambios, de la cual esta Legislatura tiene un enorme compromiso de llevar adelante y, sobre todo, en la tarea de promover, divulgar y –por qué no- ampliar las reformas que hoy hemos propuesto y que –soy reiterativo y seguiré siéndolo toda la noche, porque quiero celebrar este término- hemos “consensuado”.

Se inicia una nueva etapa, por lo quiero formular una propuesta, no como una moción sino como una idea para todos: en pocos días estaremos votando el Presupuesto para el año 2009 y creo que los legisladores nos merecemos, dentro de los apéndices de programas que tiene esta Legislatura, crear el Programa de la Reforma Política para que todos tengamos la posibilidad, a partir del 1º de enero de 2009, de comenzar a trabajar en todo el ámbito provincial, en cada uno de nuestros territorios, promoviendo la discusión, y que sobre todo nos comprometamos –he tomado esto de uno de los disertantes que asistió a la Audiencia Pública- a divulgar la Constitución de la Provincia en todo el ámbito de Córdoba, porque entiendo que es una tarea que va a reforzar la discusión de esta reforma.

Así como hace un año iniciamos este compromiso –no quiero extenderme demasiado en mi discurso-, también planteamos desde nuestro bloque que debemos tener quizás tres banderas inquebrantables en esta Legislatura: el respeto al disenso, la tolerancia y la irrestricta defensa de la libertad. Hoy esas banderas están bien altas, producto del compromiso de los legisladores que estamos hoy aquí presentes, aun con disensos y con

diferencias, pero que hemos dado hoy un enorme paso para darles ejemplo a los intolerantes, a los que promueven el discurso de la antipolítica dentro de la política, controversia que realmente va quedando cada vez más al desnudo, cuando vemos los hechos que pasan en la realidad y cómo se contraponen los discursos con las acciones.

Creo que hoy hemos dado un ejemplo de tolerancia, de voluntad de consenso; por un lado, hemos reforzado el concepto de que debemos tener todo derecho de disentir en las ideas, pero –como les he dicho a muchos legisladores de la oposición, en reuniones previas a esta discusión legislativa- creo que también tenemos la obligación de defender los mismos valores, y hoy lo estamos demostrando.

Creo que tenemos el enorme compromiso, señor presidente, de entender también que, además de legisladores –esto siempre lo digo- somos dirigentes políticos; y frente los que hacen el discurso de la antipolítica dentro de la política, a los que promueven la crítica destructiva y la amenaza permanente, la descalificación de la persona por encima de las ideas –porque es más corto el camino: si descalifico a la persona, queda automáticamente descalificado todo lo que dice-, reivindicamos hoy el firme compromiso de fortalecer la democracia de la mejor manera, esto es, jerarquizando la política.

A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Domingo Carbonetti, que es quien va a efectuar la lectura de los despachos de las dos leyes que serán puestas a consideración.

Por último, debo decir que como cordobés, como legislador y como dirigente político –no quiero ser reiterativo en los agradecimientos-, estoy orgulloso de que hoy hayamos tenido una enorme victoria frente a los intolerantes, frente a los que apuestan a esconderse cuando hay que poner la cara, y a los que prefieren la mentira a la verdad. Hoy, señor presidente, ganó la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.

Sr. Carbonetti.- Señor presidente: en oportunidad de tratarse la votación de los dos proyectos que hoy están en consideración –siguiendo la misma mecánica a la que hice referencia en el tratamiento del proyecto anterior-, las comisiones

que han trabajado sobre estos despachos han consensuado también la modificación en lo que hace a la reforma de la Ley Orgánica Municipal 8102, proponiendo la modificación tanto en el caso del artículo 143, que es el artículo 1º del despacho, como en el artículo 218, que es el artículo 2º del despacho, fijando en 30 días mínimos y 150 días antes de la expiración de los mandatos para fijar la fecha de elecciones de renovación de autoridades. Ambos textos obran en poder de la Secretaría Legislativa.

Por supuesto, anticipo la ratificación del voto positivo de nuestro bloque y quiero dejar, en esta oportunidad, unas breves reflexiones sobre un tema que, a partir de esta significativa y emblemática reforma que esta Legislatura aprobó en el día de la fecha, vamos a continuar trabajando en un viejo proyecto que se refiere a la reivindicación de que las bancas son de los partidos y no del trasfuguismo político. No lo pudimos hacer antes porque las sumatorias lo impedían.

La circunstancia de que los candidatos vieran por distintos partidos impedía tener una óptica clara respecto a la sanción de este tipo de conductas, pero desaparecidas éstas –ya que a partir de hoy se firmó la partida de defunción de las sumatorias- comprometemos nuestro esfuerzo y dedicación para trabajar firmemente en el desarrollo de este proyecto para que el año que viene, junto con la creación de la Cámara Electoral y de las internas abiertas, podamos someter a consideración del pueblo de Córdoba esta ley que consideramos de suma importancia.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.

Sr. Faustinelli.- Señor presidente, no quiero ser reiterativo, pero tengo que manifestar que el radicalismo rechaza los proyectos presentados por el oficialismo. Ya lo manifestamos al fundamentar el anterior proyecto, porque consideramos que nuestro partido conceptualmente también son nuestros intendentes municipales y muchos de ellos están prestigiando el partido con sus gobiernos.

En defensa de esa bandera: el radicalismo de las autonomías municipales y la Ley Orgánica Municipal, es que rechazamos enfáticamente los proyectos en cuestión.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Asbert.

Sr. Asbert.- Señor presidente, al estar sucediendo en la palabra al presidente de la bancada del radicalismo, desde este bloque de Concertación Plural, queremos agradecer expresamente su presencia en este recinto, pese a conocer todos los integrantes de este Cuerpo Legislativo que el radicalismo disienta en cuanto a la puesta en marcha de esta reforma política. Entendemos que es una demostración de republicanismo y del afán democrático del sostenimiento de las instituciones.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general los proyectos compatibilizados números 1860/L/08, 11.308, 11647/L/07, 1733/L/08, tal como fueran despachados por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Asuntos Institucionales y de Economía.

Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados en general.

A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por Títulos, constando los números de los artículos que incluyen.

Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.

– Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º al 11, sin modificaciones.

– Se vota y aprueba el Título II, artículos 12 al 28, sin modificaciones

– Se vota y aprueba el Título III, artículos 29 al 35, sin modificaciones

– Se vota y aprueba el Título IV, artículos 36 al 59, sin modificaciones

– Se vota y aprueba el Título V artículos 60 al 79, sin modificaciones.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.

Sr. Brügge.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la votación del artículo 81, inciso 3), donde se señala que es causal de extinción cuando en dos elecciones generales consecutivas para legisladores provinciales no se alcance a obtener el dos por ciento de la totalidad de los votos válidos emitidos.

Solicito la abstención atento a que las autoridades del partido al cual pertenezco, la Democracia Cristiana, con quienes comparto el criterio, no son partidarios básicamente de este inciso y de esa limitación.

Sr. Presidente (Campana).- En considera-

ción el pedido de abstención formulado por el legislador Brügge.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

Queda constancia de su abstención.

– Se vota y aprueba el Título VI, artículos 80 a 85 inclusive, sin modificaciones.

– Se vota y aprueba el Título VII, artículos 86 a 88 inclusive, sin modificaciones.

– Se vota y aprueba el Título VIII, artículos 89 a 91 inclusive, sin modificaciones.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto en general en este proyecto de ley, con las observaciones a los artículos que formulé precedentemente.

Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.

– Se vota y aprueba el Título IX, artículos 92 al 96 inclusive, sin modificaciones.

Sr. Presidente (Campana).- El artículo 97 es de forma, queda aprobado en general y particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Tiene la palabra el señor legislador Brügge.

Sr. Brügge.- Señor presidente: quiero recordar que cuando se le cedió el uso de la palabra al legislador Ruiz, hizo la propuesta –que fue consensuada- de agregar un artículo, que sería el 100, referente al tracto abreviado que se le da a los partidos políticos con personería jurídica de distrito para que puedan solicitar la personería jurídica a nivel provincial. Creo que hizo llegar el texto a la Secretaría para que fuera incluido como tal.

Sr. Presidente (Campana).- No se hizo llegar ningún pedido de modificación a la Secretaría, el despacho reservado en Secretaría solamente consta de 97 artículos.

Pasamos a un breve cuarto intermedio para definir esta situación.

– Es la hora 23 y 44.

– Siendo la hora 23 y 46:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.

En primer término, vamos a poner en consideración la moción del legislador Brügge de reconsideración de los Títulos VIII y IX de la presente ley.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.

Sr. Carbonetti.- Señor presidente: hemos analizado la propuesta que, por un error involuntario, no había sido entregada a la Secretaría Legislativa, y tratándose de un procedimiento abreviado para aquellos partidos que ya tienen el reconocimiento en el orden de la Justicia Federal, entendemos que debe aprobarse su incorporación.

Ya estaba vigente en la ley anterior que se deroga, por cuya razón y obrando el texto en poder de Secretaría Legislativa, previo a someterse nuevamente a votación el Título, con la aclaración y la lectura del texto que se propone incorporar, y una vez que terminemos la votación puntual, mociono expresamente, al igual que en el proyecto anterior, que la Secretaría Legislativa reformule numéricamente el ordenamiento por la incorporación y el desfase que va a producir la incorporación de este artículo.

Nada más.

Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título VIII, artículos 89 al 92 inclusive, con la incorporación del artículo 91 que se leerá por Secretaría.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

Se propone incorporar al Título VIII, Capítulo 2, el artículo 91 que reza:

“Artículo 91.- Personería Provincial a partir de Distrito. Los partidos políticos que hubieran obtenido personería jurídico-política como partidos de distrito, de conformidad a las prescripciones de la Ley Orgánica de Partidos Políticos Nacional, no estarán obligados a satisfacer los requisitos exigidos en el artículo 14. Para obtener su reconocimiento definitivo como partido provincial, deberá acompañar con su petición los siguientes elementos: 1) Testimonio de la resolución que le reconoce personería jurídico-política como partido distrito. 2) Declaración de principios y base de acción política y Carta Orgánica. 3) Acta de elec-

ción de Autoridades. 4) Domicilio partidario. 5) Acta de designación de apoderados. 6) Nómina de la totalidad de afiliados en la Provincia".

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el Título VIII, artículos 89 al 92, inclusive.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

En consideración el Título IX, artículos 93 al 97, inclusive.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

En consideración la moción del legislador Carbonetti en el sentido de facultar a la Secretaría Legislativa a reenumerar los artículos que hayan quedado desfasados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

El artículo 98 es de forma.

Queda aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En consideración en general el proyecto 1897/L/08, modificación a la Ley 8.102, Orgánica Municipal, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, con las modificaciones que se van a leer en la votación en particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.

A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

Por Secretaría se van a leer las modificaciones del artículo 1º.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

Con la modificación formulada queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo 1º.- Modifícase el artículo 143 del Capítulo 6º del Título VIII de la Ley 8102, Orgánica Municipal, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 143.- Las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales tendrán lugar entre 30 y 150 días antes de la expiración

del mandato.

Las elecciones extraordinarias motivadas por vacantes producidas dentro del periodo ordinario se efectuarán el día que decida la convocatoria anunciada con 15 días de anticipación como mínimo".

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el artículo 1º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

Las modificaciones del artículo 2º se van a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

Modificación propuesta al artículo 2º del despacho.

"Artículo 2º.- Modifícase el artículo 218 del Capítulo 4º del Título XII de la Ley 8102, Orgánica Municipal, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 218.- Las elecciones deben realizarse entre 30 y 150 días antes de la finalización de cada período. Serán convocadas por el presidente de la comisión o por la Junta Electoral en los casos establecidos en la presente Ley.

En lo referido a campañas electorales, será de aplicación lo establecido en el Capítulo 7º del Título VIII de esta normativa".

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el artículo 2º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

En consideración el artículo 3º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY - 01860/L/08

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

TÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES

Capítulo 1

Conceptos básicos

Artículo 1.- Definición. Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público, constituidas como asociaciones voluntarias de ciudadanos que a través de su doctrina propenden al bien común, respetando el sistema democrático, representativo y republicano de gobierno, conforme a los principios y derechos constitucionalmente consagrados, cuya finalidad fundamental es contribuir de manera participativa y pluralista a la formulación y realización de la política provincial o municipal, orientando a la opinión pública y contribuyendo a la formación de la voluntad del pueblo para la integración de los gobiernos provincial, municipales o comunales.

Artículo 2.- Garantía de asociación política. Todo ciudadano con domicilio en la Provincia de Córdoba tiene el derecho de asociarse y conformar partidos políticos democráticos -provinciales, municipales o comunales- para participar en la vida política del Estado.

Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho a obtener la personería jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los departamentos, municipios o comunas de la Provincia, de acuerdo con las disposiciones y los requisitos que establece esta Ley.

Artículo 3.- Persona Jurídica de Derecho Privado. Los partidos políticos reconocidos tienen personalidad jurídico-política. Son, además, personas de derecho privado, de acuerdo con las disposiciones de la legislación común, pudiendo adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo al régimen dispuesto por el Código Civil y el presente ordenamiento.

Artículo 4.- Requisitos sustanciales. La existencia de los partidos políticos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

- 1) Comunidad de ciudadanos, unidos por un vínculo político perdurable;
- 2) Compromiso expreso de sostener una política provincial y/o municipal que promueva el bien comunitario, propugne la defensa de las instituciones republicanas, representativas, democráticas y participativas y sostenga las autonomías provincial y municipal, conforme a los valores, derechos y garantías consagrados por la Constitución de la Provincia;
- 3) Organización y funcionamiento estables y regulados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma específica que establezca cada partido y observando, en su caso, las normas establecidas en esta

Ley, y

- 4) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que importa su inscripción en el registro público correspondiente.

Capítulo 2

Funciones, Derechos y Obligaciones

Artículo 5.- Funciones. Los partidos políticos, a quienes les incumbe en forma exclusiva la postulación de los candidatos idóneos para cargos públicos electivos, tienen además las siguientes funciones:

- 1) Contribuir en la educación del ciudadano para el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos;
- 2) Propender a la defensa irrestricta de la institucionalidad condenando todas las formas de corrupción, deshonestidad y falta de ética pública;
- 3) Concurrir a la formación y capacitación de dirigentes que se encuentren en condiciones de desempeñar con idoneidad los cargos públicos para los cuales sean eventualmente electos o designados
- 4) Formar y encauzar la opinión pública sobre los asuntos de interés general que hacen a la marcha del gobierno;
- 5) Receptar las demandas de la sociedad en torno a las cuestiones públicas;
- 6) Velar por la plena vigencia de los principios democráticos, participativos y pluralistas, y por la real vigencia de los derechos humanos, con responsabilidad ética para con sus postulados y adherentes;
- 7) Propiciar la participación del ciudadano en la vida política de la sociedad, y
- 8) Proponer a la población programas de acción pública y de gobierno.

Artículo 6.- Derechos. Los partidos políticos gozan de los siguientes derechos:

- 1) Ejercer libremente las funciones partidarias de dirección y de candidaturas;
- 2) Desarrollar las actividades partidarias propias que no sean contrarias a las leyes ni a la Constitución Nacional o Provincial;
- 3) Defender la inviolabilidad de sus sedes partidarias;
- 4) Acceder a los medios de comunicación;
- 5) Disponer de franquicias impositivas para el ejercicio de sus funciones y sobre los bienes de que se vale para el logro de sus objetivos;
- 6) Confeccionar sus propios padrones de afiliados;
- 7) Acceder a las fuentes de información del Gobierno;
- 8) Ejercer plenamente la autodeterminación en la acción política, y
- 9) Autorizar a sus afiliados a aceptar cargos públicos no electivos en gobiernos ejercidos por otros parti-

dos políticos.

Artículo 7.- Obligaciones. Los partidos políticos deben respetar, cumplir o hacer cumplir las siguientes obligaciones:

- 1) Dar a publicidad por los medios masivos de comunicación el contenido de la carta orgánica partidaria y sus postulados y bases de acción política;
- 2) Respetar la voluntad de los afiliados y adherentes expresada libremente y de acuerdo a los mecanismos estatutarios respectivos;
- 3) Actuar con sentido, democrático, pluralista y de moralidad republicana en la acción pública;
- 4) Fomentar el respeto a la institucionalidad y la ética en la función pública;
- 5) Informar con responsabilidad cívica a la población sobre los asuntos de interés general;
- 6) Realizar elecciones periódicas de autoridades partidarias, y
- 7) Rendir cuenta en tiempo y forma de los aportes privados y públicos que reciban.

Capítulo 3

Consideraciones Generales

Artículo 8.- Orden público. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y se aplicarán a los partidos que intervengan en la elección de autoridades provinciales o municipales.

Artículo 9.- Contralor. Corresponde al Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba el control de la vigencia efectiva de los derechos, reconocimientos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, alianzas y confederaciones políticas, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

Artículo 10.- Candidatura única. Las personas postuladas a cargos públicos electivos lo pueden ser únicamente por un solo partido político, alianza o confederación de partidos políticos.

Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes partidos políticos, alianzas o confederaciones de éstos.

Ninguna persona puede ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos.

Artículo 11.- Candidatos. Generalidad. Las candidaturas de ciudadanos no afiliados, o con domicilio en extraña provincia o en distintos departamentos, municipios o comunas, podrán ser presentadas por los partidos y tal posibilidad deberá estar prevista en sus cartas orgánicas.

TÍTULO II DE LA FUNDACIÓN Y CONSTITUCIÓN

Capítulo 1

Requisitos para el Reconocimiento de la Personería Jurídico-Política

Artículo 12.- Solicitud de reconocimiento. Para que una agrupación sea reconocida como partido político provincial, municipal o comunal, debe cumplimentar los siguientes requisitos:

- 1) Presentar ante el Juez de aplicación la solicitud respectiva, adjuntando:
 - a) Acta de fundación y constitución en la que constará nombre y domicilio del partido;
 - b) Declaración de principios y bases de acción política;
 - c) Carta orgánica, y
 - d) Designación de autoridades promotoras y apoderados.
- 2) Instrumento que acredite un número de adherentes equivalentes a la cuarta parte del requerido en el artículo 14 de la presente Ley, o de quinientos (500) inscriptos si aquella resultara mayor, quienes deben reunir la calidad de electores, conforme al régimen electoral provincial y a los padrones utilizados en la última elección general.

El instrumento que acredite la adhesión del número mínimo de electores que habilita para iniciar el trámite, contendrá nombre y apellido, domicilio y matrícula de los adherentes, así como la certificación por la autoridad promotora de las firmas.

Cumplido el trámite precedente, el partido queda reconocido para realizar la afiliación mediante las fichas que entregará el Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 13.- Publicación. Observaciones. La solicitud de reconocimiento será publicada por la autoridad de aplicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término de cinco (5) días corridos. Dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la publicación mencionada, cualquier partido político reconocido legalmente, puede formular observaciones en forma fundada y por escrito a la solicitud de reconocimiento del nuevo partido.

Interpuesta la oposición se correrá vista a las autoridades promotoras del nuevo partido para que ejerzan su derecho de defensa en un plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la misma. Vencido este plazo, la autoridad de aplicación resolverá sobre las oposiciones, pronunciando su fallo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. La resolución es apelable dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de su notificación, en forma fundada, y por ante la autoridad administrativa y/o jurisdiccional correspondiente.

Artículo 14.- Reconocimiento Definitivo. Para obtener la personería definitiva se requiere acreditar la afiliación de un número mínimo de electores de acuerdo a lo siguiente:

- 1) Para partidos provinciales: el cuatro por mil (4‰) del total de inscriptos en el padrón del Registro Electoral de la Provincia;
- 2) Para los partidos municipales:

a) En municipios de hasta diez mil (10.000) habitantes, cincuenta (50) electores;

b) En municipios de hasta cien mil (100.000) habitantes, cien (100) electores y

c) En municipios de más de cien mil (100.000) habitantes, el cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el padrón respectivo.

Artículo 15.- Caducidad. El trámite para obtener la personería definitiva caduca de pleno derecho a los seis (6) meses contados desde el reconocimiento a que alude el último párrafo del artículo 12 de esta Ley.

Artículo 16.- Constitución de autoridades. Obtenido el reconocimiento definitivo, las autoridades promotoras deben, dentro de los noventa (90) días de notificado aquél, convocar y realizar las elecciones internas para constituir las autoridades definitivas del partido conforme a las disposiciones de sus respectivas cartas orgánicas. Realizada la elección en el plazo precedentemente establecido, el acta de la misma será presentada al juez de aplicación dentro de los diez (10) días de celebrada la elección.

Artículo 17.- Responsabilidad. Todos los trámites ante el Juzgado Electoral Provincial, hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias, serán efectuados por las autoridades promotoras o los apoderados, quienes son solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones, siendo pasibles de la responsabilidad que para el funcionario público establece la legislación penal si incurrieren en falsedad.

Capítulo 2

Denominación y Atributos de los Partidos

Artículo 18.- Tipos de partidos. Los partidos políticos, conforme al ámbito en que desarrollan su actividad partidaria, pueden ser:

1) Provinciales: son aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a cargos electivos para gobernador y vicegobernador, para legisladores provinciales, miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, convencionales constituyentes y para proponer intendentes municipales, concejales, miembros de la comisión comunal y miembros de tribunales de cuentas municipales y comunales, y

2) Municipales o Comunales: son aquellos que se encuentran habilitados solamente para postular candidatos a cargos electivos de intendentes municipales y concejales o miembros de la comisión comunal y miembros de tribunales de cuentas municipales o comunales.

Artículo 19.- Atributo exclusivo. El nombre constituye un atributo exclusivo del partido político que lo adopta. No puede ser usado por ningún otro, ni tampoco por asociación o entidad de cualquier naturaleza dentro del territorio de la Provincia de Córdoba. Será adoptado en el acto de constitución, sin perjuicio de su ulterior cambio o

modificación.

En los supuestos de alianzas o confederaciones de partidos políticos se debe anexar, al nombre utilizado por las mismas, la individualización e identificación de los partidos políticos que las integran.

Artículo 20.- Uso del término. La denominación “partido” puede ser utilizada únicamente por las agrupaciones reconocidas como tales, o en trámite de constitución.

Artículo 21.- Prohibiciones nominativas. El nombre del partido político no puede contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni las expresiones “argentino”, “provincial”, “nacional”, “internacional” ni sus derivados, ni aquellos cuyos significados afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la Nación, ni palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clases, religiosos o conduzcan a provocarlos.

Debe distinguirse razonable y claramente del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, en términos que no provoquen confusión gráfica o fonética. En caso de escisión, el grupo desprendido no tiene derecho a emplear, de manera total o parcial, el nombre originario del partido, ni aún con aditamentos o supresiones.

Artículo 22.- Prohibición de uso del nombre. Cuando por causa de caducidad se cancelare la personalidad política de un partido, o fuere declarado extinguido, su nombre no puede ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurridos cuatro (4) años en el primer caso y ocho (8) en el segundo, desde la sentencia firme respectiva.

Artículo 23.- Número de identidad electoral. Los partidos políticos tienen derecho al uso permanente y exclusivo de un número de identificación que será asignado y registrado por el Juzgado Electoral Provincial, adjudicándose en el orden en que obtengan su reconocimiento.

Artículo 24.- Símbolos y emblemas. Los partidos reconocidos tienen asimismo el derecho al registro y al uso exclusivo de sus insignias, símbolos y emblemas adoptados, con sujeción a las limitaciones análogas establecidas para el nombre y a lo establecido en el artículo 22 de la presente Ley. El número de identidad electoral del partido puede ser utilizado también como símbolo o emblema identificatorio.

Capítulo 3

Fusión de Partidos. Alianzas y Confederaciones

Artículo 25.- Fusión. Los partidos provinciales y municipales o comunales pueden fusionarse entre sí. El reconocimiento del nuevo partido resultante de la fusión debe solicitarse ante el Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 26.- Alianzas. Los partidos políticos provinciales y municipales o comunales reconocidos

pueden concertar alianzas de carácter transitorio y con fines electorales, siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen.

En los acuerdos o convenios que materialicen la decisión de conformar una alianza electoral, los partidos que participen deben consignar expresamente el porcentaje estimativo de voluntades electorales que aportan a ese proyecto, a fin de poder individualizar la cantidad de votos que le corresponden a cada partido -del total obtenido por la alianza en la elección de que se trate-, a los efectos del derecho de acceder a los fondos públicos de financiamiento de los partidos políticos y a los espacios públicos publicitarios de las campañas electorales.

La constitución de una alianza debe ser puesta en conocimiento del Juzgado Electoral Provincial con no menos de sesenta (60) días antes de la elección en que aquella se proponga intervenir. En esa oportunidad cumplirá con los siguientes requisitos:

- 1) Acreditar que la alianza fue decidida por los organismos máximos de cada partido;
- 2) Expresar el nombre adoptado y acompañar la plataforma electoral común;
- 3) Designar un (1) responsable económico financiero y un (1) responsable político de campaña, quienes son solidariamente responsables con el presidente, el tesorero y los candidatos de cada uno de los partidos integrantes de la alianza, por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, y

- 4) Designar apoderados comunes.

La resolución que reconozca la existencia legal de una alianza política debe ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y darse a conocer a la población por los medios masivos de comunicación.

Artículo 27.- Confederaciones. Los partidos políticos reconocidos pueden confederarse cumpliendo los siguientes requisitos:

- 1) Especificar los partidos políticos que se confederan y justificar la voluntad de formar la confederación con carácter permanente, expresado por los organismos partidarios competentes;
- 2) Acompañar testimonio de las resoluciones que reconocieron personería a cada uno de los partidos políticos que se confederan;
- 3) Nombre y domicilio central de la confederación en la Provincia, municipalidad o comuna;
- 4) Incluir la declaración de principios, bases de acción política y carta orgánica de la confederación y los de cada partido político, y
- 5) Adjuntar el acta de elección de las autoridades de la confederación y de la designación de los apoderados, y suministrar nómina de las autoridades de cada partido político.

Los partidos confederados tienen el derecho de secesión y podrán denunciar el acuerdo que los confederara. Sus organismos centrales carecen del derecho de intervención.

Artículo 28.- Secesión. Prohibición. Los partidos fusionados o aliados no tienen derecho de secesión.

TÍTULO III DE LA DOCTRINA Y ORGANIZACIÓN

Capítulo 1 Declaración de Principios

Artículo 29.- Bases de acción política. La declaración de principios y el programa o base de acción política de todo partido, debe sostener los fines de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y ajustarse de manera formal y real a las exigencias del artículo 4º inciso 2) de esta Ley, orientando la acción del partido.

Artículo 30.- Prohibiciones sustantivas. No cumplen con los requisitos del artículo anterior los partidos que por su doctrina o en su actuación -por vía de sus organismos o candidatos- lleven a la práctica en su organización y vida interna o en su acción exterior, la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza, la condena a la institucionalidad o la concentración personal del poder.

Capítulo 2 Carta Orgánica y Plataforma Electoral

Artículo 31.- Definición. La carta orgánica constituye la norma fundamental del partido, en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deben ajustar obligatoriamente su actuación.

Artículo 32.- Principios. La carta orgánica regula la organización y el funcionamiento del partido conforme con los siguientes principios:

- 1) Gobierno y administración, distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios: las convenciones, congresos o asambleas son los órganos de jerarquía superior del partido; la duración del mandato en los cargos partidarios no puede exceder de cuatro (4) años;
- 2) Sanción por los órganos partidarios de la declaración de principios, el programa o las bases de acción política;
- 3) Apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año durante el término mínimo de sesenta (60) días y anunciada con un (1) mes de anticipación;
- 4) Asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión vinculada con el derecho a la afiliación;
- 5) Participación y control de los afiliados y de las minorías en el gobierno y administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos;
- 6) Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de esta Ley;
- 7) Determinación de las causas y la forma de ex-

tinción del partido;

8) Conformar tribunales de disciplina, cuyos integrantes gocen de garantías que aseguren la independencia de su cometido, y

9) Capacitación de los cuadros partidarios en la problemática local, provincial, regional, nacional e internacional.

Artículo 33.- Sanción y modificación. La carta orgánica y sus modificaciones deben ser sancionadas por los órganos deliberativos del partido y aprobadas por el Juzgado Electoral Provincial, en lo concerniente a las exigencias del artículo 30 de esta Ley.

Artículo 34.- Documentación. La justificación de la documentación exigida en los títulos de esta Ley se hace mediante testimonio o copia autenticada por escribano público, sin perjuicio de que pueda ser requerida la documentación original.

Artículo 35.- Plataforma electoral. Con anterioridad a la elección de candidatos, los organismos partidarios competentes deben sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el programa o las bases de acción política.

Una copia de la plataforma, así como la constancia de la aceptación de las candidaturas por los candidatos, deben ser remitidas al juez de aplicación, en oportunidad de requerirse la oficialización de las listas.

TÍTULO IV DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS

Capítulo 1 Afiliación

Artículo 36.- Requisitos. Para afiliarse a un partido se requiere:

1) Estar domiciliado en el distrito en que se solicite la afiliación;

2) Comprobar la identidad con la libreta de enroalamiento o cívica o el documento nacional de identidad, y

3) Presentar por cuadruplicado una ficha de solicitud que contenga: nombre, domicilio, matrícula, clase, sexo, estado civil, profesión u oficio, y la firma o impresión digital.

La firma o impresión digital debe certificarse en forma fehaciente por funcionario público competente. Si la certificación es efectuada por escribano público, lo será al solo efecto de la autenticidad no siendo aplicables las exigencias de registración a los fines de acordar fecha cierta del acto.

También pueden certificar las firmas los integrantes de los organismos ejecutivos y la autoridad partidaria que éstos designen, cuya nómina debe ser remitida a el Juzgado Electoral Provincial.

La afiliación puede ser solicitada ante el Juzgado Electoral Provincial o por intermedio de la oficina de correos

de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de dicha oficina certificará la autenticidad de la firma o impresión digital.

Las fichas solicitud son suministradas sin cargo por el Juzgado Electoral Provincial a los partidos políticos reconocidos o en formación y a las oficinas de correos. Las fichas a que se hace referencia en el presente inciso son entregadas por el Juzgado Electoral Provincial con la identificación del partido. Si las autoridades partidarias al certificar sobre la autenticidad de las firmas de afiliación incurrieran en falsedad, serán pasibles de la responsabilidad que para el funcionario público establece la legislación penal.

Artículo 37.- Excepciones. No pueden ser afiliados:

1) Los excluidos del Registro Nacional de Electores como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

2) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio;

3) El personal superior o subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación y de las provincias en actividad o retirado llamado a prestar servicios, y

4) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial Nacional y Provincial.

Artículo 38.- Vigencia. La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprobaren la solicitud respectiva, los que deben expedirse dentro de los noventa (90) días a contar de la fecha de su presentación. Transcurrido dicho plazo sin que mediare decisión en contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Una ficha de afiliación se entrega al interesado, otra es conservada por el partido y las dos (2) restantes se remiten al Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 39.- Condiciones. Extinción. No puede haber más de una afiliación. La afiliación a un partido importa la renuncia a toda otra afiliación anterior.

La afiliación se extingue por renuncia, por expulsión, por incumplimiento o por violación de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la presente Ley.

La extinción de la afiliación, por cualquier causa, será comunicada al Juzgado Electoral Provincial por la autoridad partidaria dentro de los treinta (30) días de haberse conocido.

Artículo 40.- Registro. El registro de afiliados está constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores, el cual será llevado por los partidos políticos y por el Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 41.- Padrón partidario. El padrón partidario es público. Pueden confeccionarlo los partidos políticos o, a su pedido, el Juzgado Electoral Provincial, petición que debe ser formulada dos (2) meses antes del acto eleccionario. En el primer caso, actualizado y autenticado, debe remitirse al Juzgado Electoral Provincial treinta

(30) días antes de cada elección interna o cuando éste lo requiera. En el segundo, se confecciona en base al registro que lleva el Juzgado Electoral Provincial y se entrega sin cargo a los partidos políticos, con treinta (30) días de antelación a cada elección interna.

Capítulo 2

Elecciones Internas para Cargos Partidarios

Artículo 42.- Sistema. Los partidos políticos practicarán en su vida interna el sistema democrático a través de elecciones periódicas para la nominación y renovación de autoridades, mediante la participación de sus afiliados de conformidad con las prescripciones de su carta orgánica.

Los partidos que adoptaren el sistema de convenciones deben realizar la elección de las autoridades de distrito por el voto directo y secreto de sus afiliados.

Artículo 43.- Validez. Las elecciones internas para la designación de autoridades de distrito son consideradas válidas cuando votase un porcentaje de afiliados superior al diez por ciento (10%) del requisito mínimo establecido en el artículo 14, inciso 1) de la presente Ley.

De no alcanzarse tal porcentaje se debe efectuar una segunda elección dentro de los treinta (30) días que, a efectos de ser tenida por válida, debe cumplir los mismos requisitos.

La no acreditación de este requisito en elecciones de autoridades de distrito dará lugar a la caducidad de la personería jurídico-política del partido.

Artículo 44.- Eximición del acto eleccionario. En caso de oficializarse una sola lista para la elección de autoridades partidarias, puede prescindirse del acto eleccionario, siendo reemplazado el mismo por acta de proclamación realizada por la Junta Electoral.

Artículo 45.- Normativa. Las elecciones partidarias internas se rigen por la carta orgánica y lo dispuesto en la presente Ley, y subsidiariamente en lo que resulte aplicable, por la legislación electoral vigente en la Provincia.

Artículo 46.- Control. El Juzgado Electoral Provincial puede, de oficio o a pedido de parte, controlar la totalidad del proceso electoral interno, por medio de veedores designados al efecto, quienes confeccionarán un acta con los resultados obtenidos, suscripta por las autoridades partidarias.

Artículo 47.- Comunicación y publicación de resultados. El resultado de las elecciones partidarias internas es comunicado al Juzgado Electoral Provincial y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, dentro de los diez (10) días siguientes a la realización de la elección.

Artículo 48.- Acreditación de residencia. La residencia exigida por la Constitución Provincial o la ley como requisito para el desempeño de los cargos para los que se postulan los candidatos puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, excepto la testimonial, siempre

que figuren inscriptos en el registro de electores del distrito que corresponda.

Artículo 49.- Sufragante doloso. El ciudadano que en una elección partidaria interna suplantare a otro sufragante, o votare más de una vez o de cualquier otra manera sufragase sin derecho y dolosamente, será inhabilitado por seis (6) años para elegir y ser elegido, inclusive en las elecciones partidarias internas y para el desempeño de cargos públicos.

Capítulo 3

Titularidad de Derechos y Poderes Partidarios

Artículo 50.- Garantía funcional. Se garantiza a las autoridades constituidas el uso del nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno y administración del partido y, en general, el desempeño de todas las actividades inherentes al mismo de conformidad con esta Ley, demás disposiciones legales sobre la materia y la carta orgánica del partido.

Artículo 51.- Otras titularidades garantizadas. La titularidad de los derechos y poderes partidarios reglada en el artículo anterior, determina también la de los bienes, símbolos, emblemas, número, libros y documentación del partido.

Capítulo 4

Organización Contable

Artículo 52.- Miembros partidarios responsables. Los partidos políticos deben nombrar un (1) tesoro titular y un (1) suplente, o sus equivalentes de acuerdo a sus respectivas cartas orgánicas, con domicilio en el distrito correspondiente, debiendo ambos ser afiliados a esa agrupación política. Las designaciones con los respectivos datos de identidad y profesión deben ser comunicadas al Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 53.- Obligaciones del Tesorero. Son obligaciones del tesorero:

- 1) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen y destino de ellos, fecha de la operación y nombre y domicilio de las personas intervinientes;
- 2) Elevar en término a los organismos de control la información requerida por la presente Ley, y
- 3) Efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta única que dispondrá el partido político.

Artículo 54.- Depósito de fondos partidarios. Los fondos de los partidos políticos deben depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro (4) de sus miembros, de los cuales dos (2) deben ser el presidente y tesorero, o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente, debe suscribir los libramientos que se efectúan.

Artículo 55.- Documentación exigible. Sin perjuicio de los libros y documentos que prescriba la carta

orgánica, los partidos deben llevar en forma regular los siguientes libros rubricados y sellados por el juez de aplicación correspondiente:

- 1) Libro de inventario;
 - 2) Libro de caja, debiendo conservarse la documentación complementaria correspondiente por el término de tres (3) años, y
 - 3) Libro de actas y resoluciones en hojas fijas.
- Además, los organismos centrales llevarán el fichero de afiliados.

Artículo 56.- Rúbrica. Dentro de los sesenta (60) días posteriores a la notificación de reconocimiento del partido político, las autoridades promotoras deben hacer rubricar por el Juzgado Electoral Provincial los libros que establece el artículo anterior.

Capítulo 5

Actos que hacen a la Existencia Partidaria

Artículo 57.- Registro. El Juzgado Electoral Provincial lleva un registro, donde deben inscribirse:

- 1) Los partidos reconocidos y la ratificación de los partidos preexistentes;
- 2) El nombre partidario, sus cambios y modificaciones;
- 3) El nombre y domicilio de los apoderados;
- 4) Los símbolos, emblemas y números partidarios que se registren;
- 5) El registro de afiliados y los movimientos de nuevas afiliaciones, renunciaciones, cancelación o extinción de ellas;
- 6) Las confederaciones de partidos que se constituyan;
- 7) Las alianzas electorales que se formalicen;
- 8) La cancelación de la personería jurídica política partidaria;
- 9) Las infracciones y sanciones que se le hubieren impuesto por incumplimiento a las obligaciones prescriptas en la presente normativa y en la legislación electoral provincial, y
- 10) La extinción y la disolución partidarias.

El Registro podrá ser consultado por cualquier ciudadano, partido, alianza o confederación política, sin restricciones ni necesidad de acreditar interés legítimo.

Capítulo 6

Internas Abiertas para Cargos Electivos

Artículo 58.- Sistema. Para la selección de candidatos a cargos públicos determinados por el régimen electoral provincial, todos los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas legalmente en la Provincia de Córdoba, deben hacerlo mediante el sistema de "Elecciones Internas Abiertas".

Artículo 59.- Convocatoria. La convocatoria debe llevarse a cabo en un plazo de entre noventa (90) y

ciento ochenta (180) días anteriores a las elecciones generales para cubrir cargos públicos provinciales y realizarse entre sesenta (60) y noventa (90) días anteriores a la fecha prevista para la elección.

Artículo 60.- Presentación de listas. Una vez efectuada la convocatoria establecida en el artículo anterior, el partido o los partidos que conformen la alianza o confederación política deben convocar a sus afiliados para que dentro de los treinta (30) días procedan a presentar las listas respectivas ante las autoridades partidarias competentes. El procedimiento restante, se regirá por lo que determinen las respectivas cartas orgánicas de cada partido político y lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 61.- Remisión de listas. La junta electoral partidaria debe remitir al Juzgado Electoral Provincial las listas definitivas de candidatos por categoría para su conocimiento y registro.

Artículo 62.- Lista única. En caso de oficializarse una sola lista de candidatos para cargos electivos, puede prescindirse del acto eleccionario, siendo reemplazado el mismo por acta de proclamación realizada por la Junta Electoral.

Artículo 63.- Electores habilitados. En las Elecciones Internas Abiertas pueden votar los afiliados del partido o de los partidos que conformen la alianza o confederación política y los ciudadanos independientes inscriptos en el padrón del circuito electoral correspondiente.

Su emisión quedará registrada en la documentación electoral oficial sellada y suscripta por la autoridad de mesa.

Artículo 64.- Régimen electoral. Todo el proceso referido al acto electoral se lleva a cabo conforme las previsiones establecidas en la carta orgánica partidaria, en la presente Ley y en el régimen electoral de la Provincia de Córdoba.

Artículo 65.- Boletas de sufragio. Las boletas de sufragio son confeccionadas por el partido, alianza o confederación política ajustándose a los requisitos establecidos en el régimen electoral provincial, en cuanto a las características, papel, dimensiones y tipografía.

La provisión de las boletas de sufragio a las mesas receptoras de votos por cada lista interna partidaria, queda bajo exclusiva responsabilidad del partido, alianza o confederación política.

Artículo 66.- Consagración de candidatos. Finalizado el acto electoral de las Elecciones Internas Abiertas y definido el escrutinio, quedan consagrados candidatos oficiales por cada partido, alianza o confederación política los ciudadanos que se indican a continuación:

- 1) Para cargos unipersonales la lista que dentro de cada partido político hubiere obtenido la simple mayoría de sufragios, y

2) Para cargos colegiados la lista definitiva será confeccionada respetando el sistema de mayorías y minorías previsto en sus respectivas cartas orgánicas.

Artículo 67.- Candidaturas únicas y excluyentes. En las Elecciones Internas Abiertas los precandidatos sólo pueden serlo para un (1) único cargo electivo o categoría, a excepción de lo previsto por el artículo 14 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.

Los candidatos que cada partido, alianza o confederación política presenten para la elección general deben ser aquellos que resultaron electos y proclamados en la respectiva Elección Interna Abierta no pudiendo ser reemplazados por otros postulantes, salvo muerte, inhabilidad o incapacidad total sobreviniente del candidato, en cuyo caso es sustituido por aquel que designe el congreso partidario.

Los ciudadanos que participaron como candidatos de la Elección Interna Abierta y que no resultaron electos, quedan inhibidos para presentarse como candidatos de otro partido, alianza o confederación política para la elección general.

Artículo 68.- Campaña electoral. La campaña electoral para las Elecciones Internas Abiertas de los partidos, alianzas o confederaciones políticas debe ajustarse, en todos sus aspectos, a las previsiones establecidas en la legislación provincial que regula las campañas electorales para elecciones generales.

TÍTULO V DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

Capítulo 1 Bienes y Recursos

Artículo 69.- Recursos. Los partidos políticos obtienen sus recursos mediante el financiamiento público y privado, en las formas y condiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 70.- Integración. El patrimonio de los partidos políticos se integra con las contribuciones de sus afiliados, los fondos provenientes del Estado y los bienes y recursos que autorice la carta orgánica y que no prohíba la ley.

Artículo 71.- Bienes registrables. Los bienes registrables adquiridos con fondos partidarios, o que provinieren de donaciones efectuadas con tal objeto, deben inscribirse a nombre del partido en los registros correspondientes.

Artículo 72.- Exención impositiva. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos, los documentos y actuaciones a que dé lugar su constitución e inscripción y los que se relacionen con las modificaciones de sus estatutos, están exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras de orden provincial.

La exención alcanza a los bienes de renta del

partido, siempre que ésta fuere invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acrecentare, directa o indirectamente, el patrimonio de persona alguna, como así también a las donaciones en favor del partido y al papel destinado a uso del mismo.

Capítulo 2 Financiamiento Privado

Artículo 73.- Aportes permitidos. Los partidos políticos pueden obtener para su financiamiento, con las limitaciones previstas en esta Ley, los siguientes aportes del sector privado:

- 1) De sus afiliados, de forma periódica o extraordinaria, conforme a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
- 2) Donaciones de otras personas físicas -no afiliados- y personas jurídicas de origen nacional, y
- 3) De rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades.

Artículo 74.- Montos máximos admitidos. Los partidos políticos pueden recibir por año calendario las siguientes donaciones:

- 1) De una persona jurídica, un aporte que no supere el monto equivalente al dos por ciento (2%) del total de gastos permitidos, y
- 2) De una persona física, un aporte que no supere el monto equivalente al uno por ciento (1%) del total de gastos permitidos.

Los porcentajes mencionados se computarán sobre un límite de gastos equivalentes al dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada elector habilitado para votar en la última elección provincial.

El límite del inciso 2) será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de las cartas orgánicas partidarias, referidas a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos electivos.

La Justicia Electoral Provincial informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en su sitio web.

Artículo 75.- Aportes prohibidos. Los partidos políticos no pueden aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de:

- 1) Personas anónimas. No puede imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
- 2) Entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales, interestatales, binacionales, multilaterales o municipales;
- 3) Empresas concesionarias de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales;
- 4) Personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;
- 5) Gobiernos o entidades públicas extranjeras;
- 6) Personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;

7) Personas que hubieran sido obligadas por sus superiores jerárquicos o empleadores a efectuar la contribución, y

8) Asociaciones sindicales, patronales o profesionales.

Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.

Artículo 76.- Infracciones y sanciones a los partidos. Los partidos políticos que recibieran contribuciones o donaciones en violación a lo establecido en este Capítulo serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones.

Artículo 77.- Infracciones y sanciones a los donantes. Las personas físicas o jurídicas que efectúen las contribuciones o donaciones prohibidas en el presente Capítulo, serán sancionadas con una multa que tendrá como mínimo el monto aportado y como máximo el décuplo del mismo.

Además, las personas físicas como así también los propietarios, directores, gerentes o representantes de personas jurídicas que incurran en la conducta señalada en el párrafo anterior, serán pasibles de inhabilitación, por el término de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en elecciones a cargos públicos nacionales, provinciales, municipales, comunales o de autoridades de los partidos políticos y para el desempeño de cargos públicos y partidarios.

Artículo 78.- Destino de las multas. Todas las multas que se aplicaren en virtud de las disposiciones anteriores ingresarán al “Fondo Partidario Permanente” creado por el artículo 80 de la presente Ley.

Capítulo 3 Financiamiento Público

Artículo 79.- Objetivo. El Estado Provincial contribuye al sostenimiento de los partidos políticos reconocidos, garantizando:

1) El funcionamiento regular de los partidos políticos que mantengan vigente su personería jurídico-política, mediante aportes provenientes de la creación de un fondo específico, cuya fiscalización está a cargo del Consejo de Partidos Políticos, y

2) El acceso a los espacios publicitarios en medios electrónicos de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que hayan oficializado sus listas de candidatos en tiempo y forma, mediante aportes provenientes de un fondo específico cuya creación, administración y distribución está prevista en la ley que regula el régimen electoral y las campañas políticas de la Provincia de

Córdoba. A los fines de la aplicación de la presente Ley, se entiende por medios electrónicos a la radio y la televisión por aire o cable, de carácter provincial o local.

Artículo 80.- Fondo Partidario Permanente. Conforme a los objetivos previstos en el artículo anterior, créase el “Fondo Partidario Permanente”, el que está integrado por:

1) La partida presupuestaria que destine anualmente la Ley de Presupuesto General de la Provincia, la que garantizará un monto equivalente a un dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada voto válidamente emitido;

2) El dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta Ley y de la ley que establece el régimen electoral provincial;

3) El producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieren a los partidos políticos extinguidos;

4) Los legados y donaciones que efectúe el sector privado con ese destino y para el fortalecimiento del sistema democrático;

5) Los reintegros que efectúen los partidos, alianzas o confederaciones políticas, y

6) Los fondos remanentes de los asignados por esta Ley o por la Ley de Presupuesto General de la Provincia al Ministerio de Gobierno, o al organismo que en el futuro lo sustituyere, una vez realizadas las erogaciones para las que fueron previstos.

Artículo 81.- Afectación Presupuestaria. La Ley General de Presupuesto determina, anualmente, la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro “Fondo Partidario Permanente”.

Artículo 82.- Distribución del Fondo. El Ministerio de Gobierno, o el organismo que en el futuro lo sustituyere, distribuye anualmente -en tres (3) tramos cuatrimestrales- los recursos del Fondo Partidario Permanente, de la siguiente manera:

1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria entre todos los partidos provinciales y en forma proporcional entre los partidos municipales o comunales conforme lo decida el Juzgado Electoral Provincial, siempre que hubieren participado en la última elección de distrito o circuito, respectivamente, y

2) El setenta por ciento (70%) restante en forma proporcional a la cantidad de votos válidos obtenidos por el partido, alianza o confederación política de que se trate, en la última elección provincial.

El Consejo de Partidos Políticos fiscaliza su aplicación, a los efectos que determina la presente Ley y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Artículo 83.- Destino de los recursos. Los partidos políticos utilizan los recursos que destine el Estado Provincial para realizar las siguientes actividades:

1) Desarrollo institucional, entendiéndose como tal a todas las actividades institucionales y admi-

nistrativas, como compra de insumos, pago de personal, entre otros, derivadas del cumplimiento de la presente Ley y de la carta orgánica partidaria;

2) Capacitación y formación política, incluyendo actualización, sistematización y divulgación doctrinaria, y

3) Programas de capacitación y formación cívica para ciudadanos menores de treinta (30) años y para alumnos del nivel medio.

Artículo 84.- Distribución de los recursos. De los aportes que reciban anualmente los partidos políticos deben destinar, como mínimo:

1) El veinte por ciento (20%) para desenvolvimiento institucional, y

2) El treinta por ciento (30%) para actividades de capacitación para la función pública, formación para dirigentes e investigación.

Anualmente los partidos políticos enviarán al Consejo de Partidos Políticos de la Provincia, un plan con los temas, seminarios, foros, etc. que se desarrollarán en torno a la capacitación política y al finalizar el año presentarán un informe acompañado de imágenes o artículos publicados en la prensa, referidos a las propuestas previamente elevadas.

Capítulo 4

Control Patrimonial

Artículo 85.- Obligaciones contables. Los partidos a través del órgano que determine la carta orgánica deben:

1) Llevar la contabilidad de todo ingreso de fondos o especies, con indicación de la fecha del mismo y de los nombres y domicilios de las personas que los hubieren ingresado o recibido; esta contabilidad debe conservarse durante tres (3) ejercicios con todos sus comprobantes;

2) Dentro de los sesenta (60) días de finalizado cada ejercicio, presentar al Juzgado Electoral Provincial el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificados por contador público nacional o por los órganos de control del partido, y

3) Dentro de los sesenta (60) días de celebrado el acto electoral en que haya participado el partido, presentar al Juzgado Electoral Provincial la cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral.

Artículo 86.- Contenido de la rendición. En la rendición de cuentas los partidos políticos están obligados a discriminar detalladamente los siguientes rubros:

1) Ingresos de afiliados por aportes ordinarios y extraordinarios;

2) Aportes de funcionarios y miembros del Gobierno;

3) Aporte estatal proveniente del Fondo Partidario Permanente;

4) Donaciones y contribuciones de personas físicas y jurídicas, indicando el origen;

5) Ingresos provenientes del patrimonio partidario;

6) Aporte estatal para campaña electoral;

7) Aportes provenientes de organizaciones internacionales, y

8) Otros ingresos.

Artículo 87.- Presentación al Juzgado Electoral. LAS cuentas y documentos a que se refiere el artículo anterior deben estar en el Juzgado Electoral Provincial para conocimiento de los interesados y del Ministerio Fiscal, durante treinta (30) días hábiles.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho término no se hicieron observaciones, el Juzgado ordena su archivo. Si se formularen observaciones por violación de las disposiciones legales o de la carta orgánica, el Juzgado Electoral resuelve, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Los estados anuales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y durante ciento ochenta (180) días en la página web del Juzgado Electoral.

Artículo 88.- Auditorías contables. El Juzgado Electoral Provincial dispone del asesoramiento de los auditores contables que integran la Dirección de Administración del Poder Judicial, los que tienen un plazo máximo de ciento ochenta (180) días para la realización de la auditoría de los estados contables anuales de los partidos políticos.

Vencido dicho término el Juzgado Electoral Provincial, dentro del plazo de treinta (30) días, debe resolver, pudiéndose ampliar dicho plazo de mediar la necesidad de aclaraciones o nuevos informes por parte del partido político de que se trate.

TÍTULO VI

DE LA CADUCIDAD Y EXTINCIÓN DE LOS PARTIDOS

Capítulo 1

Causales. Procedimiento.

Artículo 89.- Causales de caducidad. Son causas de caducidad de la personería jurídico-política de los partidos:

1) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años consecutivos, excepto cuando se den los supuestos previstos en los artículos 44 y 62 de la presente Ley;

2) La no presentación en dos (2) elecciones consecutivas sin causa debidamente justificada, y

3) La violación de lo determinado en el artículo 14, incisos 3) y 4) y Artículo 55 de la presente Ley, previa intimación judicial.

La caducidad da lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de la personería jurídico-política.

Artículo 90.- Causales de extinción. Los parti-

dos se extinguen:

- 1) Por las causas que determine la carta orgánica;
- 2) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica;
- 3) Cuando en dos (2) elecciones generales consecutivas para legisladores provinciales no alcanzare a obtener el cuatro por ciento (4%) del total de votos válidamente emitidos;
- 4) Cuando la actividad del partido, a través de sus autoridades o candidatos no desautorizados por aquellas, fuera atentatoria de los principios fundamentales establecidos en los artículos 4º, 29 y 30 de la presente Ley, y
- 5) Por sentencia del Juzgado Electoral Provincial que así lo ordene por haber infringido las disposiciones sobre conductas antidemocráticas o sobre el financiamiento de los partidos políticos establecidas en la presente Ley.

La extinción pone fin a la existencia legal del partido y da lugar a su disolución.

Artículo 91.- Garantías del debido proceso. La cancelación de la personería jurídico-política y la extinción de los partidos son declaradas por sentencia del Juzgado Electoral Provincial, con todas las garantías del debido proceso legal, en que el partido será parte.

Artículo 92.- Publicidad de la sentencia. La sentencia firme -pasada en autoridad de cosa juzgada- ordenando la disolución del partido político se asienta al margen de su respectiva inscripción en el registro de partidos políticos y es publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en diarios de difusión masiva.

Capítulo 2

Bienes del Partido Extinguido.

Nuevo Reconocimiento

Artículo 93.- Destino de los bienes. Los bienes del partido extinguido tienen el destino establecido en la carta orgánica y, en el caso de que ésta no lo determine, ingresarán -previa liquidación- al "Fondo Partidario Permanente" sin perjuicio del derecho de los acreedores.

Los libros, archivos, ficheros y emblemas del partido extinguido quedan en custodia del Juzgado Electoral Provincial, el que, pasados seis (6) años y previa publicación por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, puede ordenar su destrucción.

Artículo 94.- Nuevo reconocimiento. En caso de declararse la caducidad de la personería jurídico-política de un partido reconocido, en virtud de las causas establecidas en esta Ley, previa intervención del interesado y del procurador fiscal, puede ser solicitada nuevamente después de celebrada la primera elección, cumpliendo con lo dispuesto en el Título II de la presente Ley.

El partido extinguido por sentencia firme no puede ser reconocido nuevamente con el mismo nombre, carta orgánica, declaración de principios, programa o bases de acción política, por el término de seis (6) años.

TÍTULO VII CONDUCTAS ANTIDEMOCRÁTICAS

Capítulo Único Tipificación y sanciones

Artículo 95.- Tipificación. Se consideran conductas antidemocráticas los siguientes hechos y actuaciones evidenciados por los partidos políticos:

- 1) Los que manifestamente procuren quebrantar el régimen constitucional y contradigan abiertamente el compromiso de lealtad al régimen democrático que todo partido político debe tener;
- 2) Los que atenten contra los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal y los Pactos Complementarios o en contra de las libertades y derechos constitucionalmente garantizados;
- 3) Las que consistan en el empleo de la violencia armada o inciten a ella, como asimismo las prácticas terroristas en cualquiera de sus formas, y
- 4) La constitución de grupos partidistas armados o sujetos a disciplina paramilitar y militar.

Artículo 96.- Sanciones. Los partidos políticos que incurran en conductas antidemocráticas deben ser sancionados por el Juzgado Electoral Provincial con alguna de las siguientes medidas:

- 1) Censura pública;
- 2) Multa de hasta un diez por ciento (10%) del importe correspondiente al Fondo Partidario Permanente para el financiamiento de los partidos políticos;
- 3) Privación del aporte estatal de financiamiento permanente y electoral, hasta un máximo de dos (2) años, y
- 4) Disolución.

Estas sanciones son aplicables sin perjuicio de las penas que correspondan de conformidad con la ley penal respectiva.

Artículo 97.- Denuncias. La denuncia por acciones antidemocráticas en contra de algún partido político, la puede realizar cualquier ciudadano, y en el proceso de juzgamiento se deben respetar todas las garantías constitucionales de derecho de defensa y debido proceso en juicio.

TÍTULO VIII RÉGIMEN PROCESAL

Capítulo 1 Principios Generales

Artículo 98.- El procedimiento ante el Juzgado

Electoral Provincial se rige por las siguientes normas:

1) Las actuaciones se tramitan en papel simple y están exentas del pago de la tasa de justicia. Las publicaciones contempladas en esta Ley se hacen en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y sin cargo;

2) La acreditación de la personería puede efectuarse mediante copia autenticada del acta de elección o designación de autoridades o apoderados o por poder otorgado mediante escritura pública;

3) Tienen personería para actuar ante el Juzgado Electoral Provincial los partidos políticos reconocidos o en trámite de reconocimiento, sus afiliados cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados por la carta orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias y el Fiscal Electoral en representación del interés u orden público;

4) En todo cuanto no se opongan a disposiciones específicas de la presente Ley serán de aplicación las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, y

5) Será de aplicación el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba para el juzgamiento de los delitos e infracciones contenidas en la presente Ley.

Capítulo 2

Procedimiento para el Reconocimiento

Artículo 99.- El proceso de reconocimiento de los partidos políticos y confederaciones se tramita de la siguiente manera:

1) La petición se formula de conformidad a lo que se dispone para la demanda verbal en el proceso civil y comercial, en cuanto le fuera aplicable. En el escrito de presentación se indican los elementos de información que quieran hacerse valer, en especial se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 12, 14 o 27 de la presente Ley, según fuere el caso;

2) El Juzgado Electoral Provincial, una vez cumplimentados los requisitos exigidos por la presente Ley, convoca a una audiencia que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes. A dicha audiencia deben concurrir inexcusablemente el peticionario, el Fiscal Electoral, y serán también convocados los apoderados de todos los partidos políticos reconocidos o en formación del ámbito de su jurisdicción o los de los otros que se hubieran presentado invocando interés legítimo. En este comparendo verbal pueden formularse observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley o referentes al derecho, al registro o uso del nombre si no lo hubiesen hecho antes o emblemas partidarios propuestos. Se presentará en el mismo acto la prueba en que se fundan tales observaciones. El Ministerio Público puede intervenir por vía de dictamen;

3) Celebrada tal audiencia, y habiéndose expedi-

do el Fiscal Electoral sobre el pedido de reconocimiento y las observaciones que pudieran haberse formulado, el juez resolverá dentro de los diez (10) días, y

4) La resolución que se dicte es apelable dentro del plazo de cinco (5) días y el recurso será concedido en relación.

Los comparecientes a la audiencia prevista en el inciso 2) están legitimados para interponer recurso de apelación en iguales términos.

Capítulo 3

Procedimiento Contencioso

Artículo 100.- Tramitación. Cuando la cuestión planteada fuese contenciosa se tramita por el proceso verbal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo Único

Artículo 101.- Adecuación de cartas orgánicas.

Los partidos, alianzas o confederaciones políticas que, a la fecha de sanción de esta norma, estén formalmente reconocidas en el ámbito de la Provincia de Córdoba, deben adecuar sus cartas orgánicas, estatutos y demás normas internas, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de su publicación.

Artículo 102.- Personería jurídica. Vigencia. Los partidos políticos provinciales, municipales o comunales y las confederaciones definitivamente reconocidas en virtud de las normas aplicables hasta la entrada en vigencia de la presente Ley, mantienen su personería jurídico-política bajo condición de cumplir los requisitos exigidos por esta norma en los plazos fijados para adecuarse a sus disposiciones.

Artículo 103.- Interpretación. Todo conflicto normativo relativo a su interpretación y aplicación, deberá resolverse a favor de la presente Ley.

Artículo 104.- Vigencia. La presente Ley entra en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 105.- Derogación normativa. Derógase la Ley N° 6875.

Artículo 106.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Bloque Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, Bloque de la Concertación Plural.

FUNDAMENTOS

Quando se habla de institución o instituciones, y más allá de cualquier tecnicismo político o sociológico, la sociedad visualiza en este concepto a cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado. Y habla-

mos de organizaciones fundamentales, cardinales, pues las mismas trascienden a los individuos e involucran a grupos de individuos que se relacionan a través de un conjunto de interacciones pautadas y regladas. De ahí la necesidad de todo Estado de contar con instituciones fuertes y consolidadas pero por sobre todo, instituciones confiables.

Es desde esta visión que adquieren relevancia los partidos políticos como instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático. Su origen -en nuestro país y en el mundo entero- es consecuencia de un fenómeno profundo y complejo: son genuinas creaciones sociales, nacidas de la voluntad de los ciudadanos de encauzar sus responsabilidades cívicas, sociales y políticas.

Más aún, los partidos políticos no deben su existencia a un reconocimiento constitucional explícito, ni han surgido como meras regulaciones de la ley. Sin embargo, esta falta de reconocimiento legislativo no impidió ni su formación, ni su influencia en el juego efectivo de las instituciones democráticas.

Es así que durante muchos años, las Constituciones guardaron silencio sobre estas organizaciones, que estaban destinadas a convertirse, con el transcurrir del tiempo, en pilares insustituibles del sistema democrático.

Recién los Constituyentes de 1994 fueron los que introdujeron expresamente a los Partidos Políticos en el texto de nuestra Carta Magna. Precisamente el artículo 38 de la Constitución Nacional reza: “los Partidos Políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los Partidos Políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”.

Este artículo implica un reconocimiento que la Constitución tenía que hacer en forma explícita a los partidos políticos, considerando que en varias etapas de la historia reciente, fueron objeto de ataques que llevaron, incluso, a la suspensión de sus actividades o a la proscripción de sus candidatos.

Congruentemente, nuestra Constitución Provincial también hace referencia explícita a estas instituciones, al sostener en el artículo 33 “que todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos políticos democráticos y pluralistas. La Provincia reconoce y garantiza la existencia y personería jurídica de aquellos que sustenten y respeten los principios republicanos, representativos, federales y democráticos esta-

blecidos por las Constituciones Nacional y Provincial. Son orientadores de la opinión pública y contribuyen a la formación de la voluntad política del pueblo. La ley establece el régimen de los Partidos Políticos que actúan en la Provincia y garantiza su libre creación, organización democrática y pluralista, la contribución económica del Estado a su sostenimiento y la rendición de cuentas sobre el origen de sus fondos. Asegura la libre difusión de sus ideas y un igualitario acceso a los medios de comunicación. Sólo a los partidos políticos compete postular candidatos para cargos públicos electivos. La ley garantiza la existencia de un Consejo de Partidos Políticos de carácter consultivos”.

Es decir, estamos en presencia de instituciones que constituyen una de las más relevantes manifestaciones del ejercicio de los derechos de asociación y de reunión, derechos que son ejercidos con la finalidad de construir acuerdos acerca de la mejor manera de dar respuesta al conjunto de necesidades y reclamos de la sociedad. Advertimos entonces, que los partidos políticos tienen el deber fundamental de balancear exigencias, a veces contradictorias, tratando de equilibrar los intereses particulares y los generales.

En definitiva, dentro del organigrama de la democracia, los partidos políticos deben cumplir tareas como catalizadores y canalizadores de diferentes valores, intereses, necesidades y expectativas. Más allá de sus roles indiscutibles de promotores de la participación de la sociedad civil en la vida democrática, de su contribución a la representación nacional y como organizadores de ciudadanos, los partidos políticos hoy son el principal vínculo, los intermediadores fundamentales de la relación Gobierno-Ciudadanos.

Por eso las funciones de ser nexo entre la opinión pública y el gobierno, receptáculo de las demandas de la sociedad, educadores cívicos, formadores de opinión sobre los asuntos que hacen a la vida política, social, institucional, económica y cultural de la comunidad, son algunas de las misiones que le competen en forma preferencial en nuestras democracias.

Sin embargo, la realidad actual nos muestra una gran desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas en general, y muy especialmente en los partidos políticos que son vistos por una porción importante de la sociedad como enclaves cerrados dominados por unos pocos y de difícil acceso para quienes quieren participar y, por otra parte, como generadores de corrupción.

Son estos escándalos continuos de corrupción, que se vinculan estrechamente con problemas de financiamiento, los que no hacen otra cosa que profundizar el sentimiento de desconfianza que grandes sectores de la ciudadanía sienten actualmente respecto de los partidos políticos. El desconocimiento público que caracteriza actualmente el funcionamiento de los partidos en general y específicamente su comportamiento financiero, rodea de

sospecha la actividad partidaria y el proceso democrático.

Es evidente que la relación entre el dinero y la política es uno de los problemas más importantes que enfrentan las democracias modernas. Detrás de éste vínculo, suelen esconderse situaciones de tráfico de influencias e intercambios de favores. Además, el flujo de dinero suele desequilibrar la competencia política favoreciendo a algunos partidos en desmedro de otros, violando un principio básico ostentado por la Constitución Nacional y también la Provincial: la garantía de igualdad de oportunidades entre los partidos en competencia.

Frente a esta realidad, es de fundamental trascendencia para el financiamiento de los partidos políticos -entendido como la política de ingresos y egresos de los partidos políticos tanto para sus actividades electorales como permanentes-, que su origen sea legal y transparente, así como que haya información pública de su utilización.

En este marco de profunda reforma política que se ha autoimpuesto este Gobierno Provincial, desde el momento mismo en que se hiciera cargo el pasado 10 de diciembre, ha entendido que siendo los partidos políticos uno de los pilares fundamentales de todo régimen democrático, debía sustituirse su régimen jurídico, ajustándolo a los tiempos que corren, teniendo en cuenta, además, que el actual régimen vigente fue sancionado todavía por un gobierno de facto, a comienzos del año 1983.

Además, en el propio dictamen elaborado por la Comisión Consultiva de Expertos se señala que "la mayoría de los estudiosos coinciden en que los partidos son parte integral de la democracia. Es por ello que regular adecuadamente su funcionamiento, se ha convertido en un ejercicio imperativo en la dinámica política actual, cuando se busca fortalecer la pluralidad, la representatividad, y atender las demandas de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente".

El régimen jurídico de los partidos políticos como uno de los sistemas pilares del orden constitucional, debe ser fundamentalmente reconocido y debidamente reglamentado, para la configuración de un verdadero Estado de Derecho.

El presente Proyecto de Ley da a nuestra Provincia una legislación amplia, equilibrada y transparente en materia de financiamiento de partidos políticos, creando un mecanismo para evitar que los fondos aportados a los partidos políticos se transformen en la antecámara de la corrupción.

En un país con una democracia consolidada, donde los actores políticos primarios son los partidos, sus miembros y los ciudadanos en general, es de fundamental trascendencia el financiamiento de las organizaciones políticas, que su origen sea legal y transparente, así como que haya plena información pública de su utilización. El financiamiento transparente de los partidos políticos es una herramienta indispensable y útil para el

fortalecimiento de la democracia, al financiar tanto sus actividades ordinarias como sus campañas electorales, de manera que puedan acceder a los medios indispensables que la misma sociedad contemporánea demanda, para hacer llegar el mensaje, las propuestas y en definitiva movilizar al cuerpo electoral.

Se han abordado aquí aspectos relevantes en materia de financiamiento: financiamiento mixto (público y privado) anual ordinario, financiamiento mixto (público y privado) de campañas electorales, los límites a los gastos de campaña, los límites a los montos de las donaciones privadas y a los tipos de donantes, los límites a la propaganda electoral en medios electrónicos de comunicación -radio y televisión, la publicidad de los balances, etc.

El tema central del financiamiento de los partidos políticos está en definir la clase de sistema que se va a adoptar. Estos pueden ser: exclusivamente público, exclusivamente privado o mixto. El presente proyecto adopta una fórmula mixta de aportes públicos y privados.

Al respecto, el financiamiento mixto se presenta como el sistema más adecuado para resolver esa dicotomía entre financiamiento público y privado. Más aún, en América Latina "predomina el sistema de financiamiento mixto, es decir, en el que los partidos políticos reciben fondos tanto del sector estatal como de los sectores privados para financiar sus campañas electorales y/o para sufragar los gastos de funcionamiento ordinario de dichas fuerzas. Lo mismo puede afirmarse de Estados Unidos y Canadá. La única excepción en el continente la constituye Venezuela, donde, mediante una reciente reforma política, se abolió todo tipo de financiamiento público.

El presente Proyecto, para una mejor comprensión y desarrollo de los temas fue dividido en nueve (9) Títulos, que a su vez se subdividen en una serie de Capítulos. Así el Título I se refiere a los Principios Generales que expresan los partidos políticos, encontrando en su Capítulo 1 los conceptos básicos, definiendo los requisitos sustanciales para su conformación.

En el Capítulo 2 se establecen las Funciones, Derechos y Obligaciones permanentes que le competen a los partidos políticos en nuestras democracias. En tal sentido, en el presente proyecto se han definido las funciones de los partidos políticos que, además de aquella considerada exclusiva cual es la de postulación de los candidatos idóneos para cargos públicos electivos, deben contribuir en la educación del ciudadano para el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, propendiendo a la defensa irrestricta de la institucionalidad, condenando todas las formas de corrupción, deshonestidad y falta de ética pública, aspectos éstos trascendentales para evitar que los partidos sean catalogados como simples maquinarias electorales, que se ponen en funcionamiento solamente antes de cada elección o comicio.

En el Capítulo 3, identificado como "Consideraciones Generales", se ha incluido un artículo específico

que merece un párrafo aparte en su fundamentación. En efecto, uno de los aspectos que generaron polémicas e inconvenientes fundamentalmente a la hora de efectuar el escrutinio en los diferentes centros de votación en las últimas elecciones celebradas en nuestro territorio provincial, indudablemente lo constituyeron la enorme cantidad de listas con las que el elector se encontraba al ingresar al cuarto oscuro para expresar su voluntad cívica.

Esas listas, en numerosos casos, correspondían a diferentes partidos pero que concurrían a la elección en sumatoria llevando los mismos candidatos en su integración, lo que provocaba incertidumbre y confusión a la hora de manifestar la preferencia del elector.

Esa situación era preciso corregirla, desterrando definitivamente la posibilidad de que una persona pueda ser al mismo tiempo candidato de varias fuerzas políticas a la vez, incorporando con meridiana claridad estos conceptos en el nuevo plexo normativo, disponiendo que las personas postuladas a cargos públicos electivos, lo podrán ser solo y únicamente por un partido político, alianza o confederación de partidos políticos, quedando prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes partidos políticos, alianzas o confederaciones de éstos.

Además, expresamente se impide la posibilidad que una persona pueda ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos.

En el Título II se establecen las pautas para la fundación y constitución de los partidos políticos, conteniendo su Capítulo 1 los requisitos para el reconocimiento de la Personería Jurídico-Política, mientras que la denominación y los atributos atinentes a los partidos, como son la elección de su nombre, la prohibición de utilización de ciertos vocablos, el número de identidad electoral y los símbolos y emblemas representativos, fueron desarrollados en su Capítulo 2.

En el Capítulo 3 se establecen las posibilidades y mecanismos para la fusión de los partidos y la conformación de alianzas y confederaciones políticas, determinándose que en estos últimos supuestos se deberá anejar al nombre utilizado por las mismas, la individualización e identificación de los distintos partidos políticos que las integran, por cuanto la mayoría de las veces, el elector desconoce la integración de estas fusiones de partidos y, por otro lado este aspecto tiene estrecha relación también con la eliminación de las sumatorias.

El Título III, denominado "De la Doctrina y Organización", contiene en su Capítulo 1 lo referido a las bases de acción política que sustenta una agrupación política, la declaración de principios y los programas, cuyos objetivos deben indudablemente contribuir al sostenimiento de los fines de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial.

En el Capítulo 2 se desarrollan las exigencias

que deben contener tanto las cartas orgánicas que rigen el funcionamiento de todo partido político, como así también las plataformas electorales que deben formular con anterioridad a una elección de candidatos a ocupar cargos públicos.

El Título IV expresa el modo de funcionamiento de los partidos, estableciendo las condiciones de afiliación a los mismos en su Capítulo 1, mientras que el Capítulo 2 está orientado a fijar el sistema de elecciones internas para la nominación y renovación de autoridades partidarias, resaltando las prácticas democráticas en su faz interna. Por su parte el Capítulo 3 garantiza la titularidad de derechos y poderes partidarios a las autoridades legítimamente constituidas y el Capítulo 4 regula la organización contable que debe respetar toda agrupación política reconocida formalmente, el manejo de los fondos que deben depositarse exclusivamente en una cuenta especial a abrirse en el Banco de la Provincia de Córdoba y las responsabilidades funcionales de las personas encargadas de administrar dichos fondos.

En el Capítulo 5 se establecen las formalidades que debe cumplir el Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, a efectos de registrar debidamente todos los actos que hacen a la existencia partidaria, como son la inscripción de los partidos, sus nombres, cambios y modificaciones, sus símbolos o emblemas, los registros de afiliados, las confederaciones que se constituyan, las alianzas electorales que se formalicen, la cancelación de la personería jurídico-política, la extinción y disolución de partidos y las infracciones en que hubieren incurrido, como así también las sanciones que se le hubieren impuesto.

En el siguiente Capítulo, que lleva el número 6, se establece el régimen para la selección de candidatos a cargos públicos electivos, mediante un mecanismo de Elecciones Internas Abiertas, armonizando todo el proceso en lo que hace a la oficialización de listas, utilización de boletas de sufragio, plazos de convocatoria y desarrollo de las campañas electorales, a lo que establece en tal sentido el régimen electoral provincial.

Uno de los aspectos más cuestionados en los últimos tiempos con relación a las funciones que les compete a los partidos políticos, lo es la nominación de los candidatos a los cargos de elección popular, en donde la participación del ciudadano común, no afiliado, se encuentra vedada en la práctica.

Por ello para rodear de una mayor transparencia la selección del candidato que nominará el partido político, se propicia la realización de elecciones internas abiertas, a fin de que el ciudadano independiente pueda emitir su opinión con relación a los postulantes respectivos.

Queda aquí plasmado también un impedimento para evitar el tan cuestionado transfuguismo político, estableciendo que los ciudadanos que participaron como

candidatos en una Elección Interna Abierta y no hayan resultado electos, quedan inhibidos para presentarse como candidatos de otro partido, alianza o confederación política para la posterior elección general.

El Título V resulta de vital importancia, toda vez que se refiere al patrimonio y al financiamiento de los partidos políticos, en donde se ha puesto énfasis tanto en el origen como en el destino de los fondos recibidos por las fuerzas políticas, para evitar influencias de la delincuencia, el narcotráfico o los sectores de poder que se enmascaran en asociaciones anónimas, determinando claramente en su Capítulo 1 los bienes y recursos que constituyen el patrimonio.

Queda aquí también reflejado en uno de sus artículos la contribución indirecta que efectúa el Estado Provincial, al establecer una serie de eximiciones impositivas, tanto sobre los bienes muebles como inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos, como también sobre los documentos y actuaciones a que dé lugar la constitución e inscripción de un partido político.

El Capítulo 2 aborda el tema del Financiamiento Privado, contemplando la transparencia sobre el origen de los fondos que reciben los partidos políticos, introduciendo conceptos éticos en la forma de hacer política y permitiéndole al ciudadano conocer a dónde recurren los partidos para financiar su accionar, fijando asimismo montos máximos admitidos y mecanismos de transparencia de la acción política, que seguramente permitirán acentuar las creencias sobre el sistema de partidos y en definitiva sobre el régimen democrático.

Claramente se determinan también los aportes que de ninguna manera pueden ser aceptados, directa o indirectamente, por los partidos políticos, cuando provengan de personas anónimas, de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, binacionales, multilaterales o municipales, de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Provincia o los municipios, de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar, de gobiernos o entidades públicas extranjeras, de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país, de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores o de asociaciones sindicales, patronales y profesionales.

Este artículo plasma con meridiana claridad uno de los propósitos fundamentales de la presente normativa, toda vez que con total nitidez indica de quienes no se podrá recibir dinero, transparentando el origen de los fondos, que es uno de los principales problemas que surgen de la relación dinero-política.

Todo ello también se complementa con un severo régimen de infracciones y sanciones para quienes infrinjan las normas contenidas en este capítulo, cuyas multas pasarán a integrar el Fondo Partidario Permanente. De esta forma se busca poner en conocimiento de la ciudadanía qué fondos no pueden recibir los partidos políticos, sumándose de esta forma a las demás herra-

mientas previstas en el Proyecto.

El Capítulo 3 se refiere al financiamiento público, respecto al cual cabe realizar algunas reflexiones. El financiamiento público es una manera de evitar o disminuir la incidencia de intereses particulares y poderes fácticos en el desempeño de las funciones partidarias. Así, el objetivo que se persigue con ello es, por un lado, lograr condiciones más equitativas durante la competencia electoral entre los diversos actores políticos, al mismo tiempo que una mayor transparencia en materia de financiación, orientada a mitigar los altos niveles de corrupción política generados por la búsqueda insaciable de fondos que le permita a los grupos partidarios solventar los gastos electorales y su funcionamiento ordinario.

Otra razón importante para la introducción del financiamiento público es la convicción de que los partidos políticos juegan un papel trascendental en los sistemas democráticos representativos, por lo que el Estado debe asegurar que ellos dispongan del apoyo y los recursos necesarios para su funcionamiento ordinario y/o electoral, y para su institucionalización y fortalecimiento democrático.

Se prevé aquí, para financiar en parte el sostenimiento de los partidos políticos reconocidos, garantizando su funcionamiento regular, la creación de un Fondo Partidario Permanente, que se integrará con la partida presupuestaria que destine anualmente la Ley de Presupuesto General de la Provincia, la que garantizará un monto equivalente a un dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada voto válidamente emitido, además del dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta Ley y de la ley que establece el régimen electoral provincial, el producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieran a los partidos políticos extinguidos, los legados y donaciones que efectúe el sector privado con ese destino y para el fortalecimiento del sistema democrático, los reintegros que efectúen los partidos, alianzas o confederaciones políticas y los fondos remanentes de los inicialmente asignados.

Por su parte, en el articulado de este Capítulo se establece la distribución de ese fondo, que se hará en un treinta por ciento (30%) en forma igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos que hubieren participado en la última elección y en un setenta por ciento (70%) en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido político hubiera obtenido en la última elección de legisladores provinciales.

Asimismo se determinan cómo deben distribuir esos recursos los partidos políticos, debiendo destinar, como mínimo, un veinte por ciento (20%) para desenvolvimiento institucional y un treinta por ciento (30%) para actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación. Es decir, este fondo se utiliza para entregar a los Partidos Políticos reconocidos los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Como se podrá advertir, la importancia del finan-

ciamiento mixto radica en que se logra un equilibrio positivo. En esta línea de pensamiento, debemos resaltar la importancia del financiamiento privado en la vida de nuestros partidos. Así, en primer lugar son los propios ciudadanos los aportantes, lo que no siempre debe ser observado como un medio de conseguir recompensas posteriores, sino como la forma de participar y sostener ideas, proyectos y acciones que se comparten, siempre claro está, con mecanismos de control efectivos -como los aquí previstos.

Además, la necesidad de recolectar fondos puede tener efectos positivos pues es una oportunidad para reclutar nuevos miembros y adherentes. Finalmente, se va consolidando un entretejido de simpatizantes que, en tiempos de campaña, estarán mejor preparados para cumplir tareas políticas. Es decir, los partidos políticos profundizan sus contactos y relaciones con la sociedad.

En conclusión, no parece haber una fórmula de financiamiento ideal en abstracto, debe corresponder en cada caso al contexto político, al nivel de desarrollo relativo, al desarrollo del sistema de partidos y a otros factores, por ello, y en congruencia con las democracias representativas que más han madurado, el presente Proyecto de Ley busca el máximo equilibrio entre el financiamiento público y el privado, a la vez que tiende a evitar la existencia de espacios que permitan la filtración de actos ilegales.

La decisión de optar por un financiamiento mixto, obedece a que se busca un equilibrio en materia de financiamiento dirigido a evitar, por un lado, la excesiva dependencia de los partidos respecto del Estado y por tanto su consiguiente burocratización y alejamiento de la sociedad y, por el otro lado, a impedir la influencia excesiva de sujetos o corporaciones sobre los partidos o candidatos a los que apoyan, así como el fenómeno del financiamiento ilegal.

En el Capítulo 4 se describen los mecanismos de control patrimonial y las obligaciones que deben asumir las fuerzas políticas respecto a la contabilidad de los ingresos y erogaciones y la presentación de sus estados contables ante el Juzgado Electoral, discriminando por rubros los distintos gastos efectuados, consignando separadamente los ingresos de sus afiliados, los aportes de los funcionarios del gobierno, el aporte estatal proveniente del Fondo Partidario Permanente, las donaciones y contribuciones de personas físicas y los aportes para campañas electorales, entre otros, quedando facultado el Juzgado Electoral para disponer auditorías contables mediante los funcionarios de la Dirección de Administración del Poder Judicial.

El Título VI, en su primer Capítulo establece los causales de caducidad y extinción de los partidos, garantizando el debido proceso legal cuando el Juzgado Electoral resuelva disponer la cancelación de la personería jurídico-política de un partido, mientras que el Capítulo 2

define el destino de los bienes del partido extinguido y las posibilidades de obtener un nuevo reconocimiento.

El Título VII se refiere a las conductas antidemocráticas que pueden llegar a evidenciar los partidos políticos, tipificando ese tipo de conductas e imponiendo las sanciones que correspondan en cada caso, remarcando que su existencia se justifica en la medida en que toda trasgresión a un marco normativo, obliga a la aplicación de medidas correctivas.

El Título VIII, en sus tres Capítulos, está dedicado al régimen procesal, fijando las normas generales de procedimiento a seguir ante el Juzgado Electoral, como así también aquellas referidas a la obtención del reconocimiento como partido político, estando previsto que cuando la cuestión planteada fuere de carácter contencioso, se tramitará por el proceso verbal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.

Por último, en el Título IX se plasmaron las normativas referidas a la adecuación de las cartas orgánicas a las disposiciones establecidas en este plexo legal, que deben realizar los partidos políticos, alianzas o confederaciones que a la fecha de sanción de este nuevo texto, estuvieren formalmente reconocidos en el ámbito provincial, requisito exigible para mantener la plena vigencia de la personería jurídico-política que ostenten, y se dispone también la derogación de la Ley N° 6875 - Orgánica de los Partidos Políticos-.

En síntesis, el presente Proyecto de Ley se sustenta sobre sólidas fuentes de justificación, como son evitar la corrupción, logrando el máximo de transparencia posible, a fin de que los partidos políticos cuenten con los fondos necesarios para desarrollar sus cometidos pero con el debido control, reduciendo así la ventaja política que representa el control de importantes recursos económicos y limitando o controlando los costos de la política.

Indudablemente este proyecto, en definitiva, está destinado a convertirse en una ley clara, sencilla, moderna y con prescripciones factibles de ser aplicadas, cumplidas y controladas.

Esto es así pues en él se plasman una serie de aspectos fundamentales en la vida de los partidos políticos, como es el régimen para la obtención, conservación y pérdida de la personería jurídico-política; el sistema de financiamiento que tiende a fortalecer a la democracia y a sus instituciones, pues garantiza una competencia libre, abierta y equitativa, de forma tal de recuperar la confianza pública en los partidos políticos, garantizando el sostenimiento de las estructuras partidarias y especialmente permitiendo la formación y capacitación de sus dirigentes, todo ello mediante mecanismos de consolidación de la democracia interna de los partidos políticos.

Por estas y otras razones que se darán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación del

presente Proyecto de Ley.

Bloque Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, Bloque de la Concertación Plural.

**PROYECTO DE LEY - 011308/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 6875 - Régimen Legal de los Partidos Políticos, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 2.- Los partidos políticos reconocidos tienen personalidad jurídico-política. Son, además, personas de derecho privado, de acuerdo con las disposiciones de la legislación común y del presente ordenamiento. Los partidos únicamente pueden integrar alianzas y/o fusionarse. Queda expresamente prohibida toda sumatoria de votos.

Artículo 2.- De forma.

Liliana Olivero.

FUNDAMENTOS

Las elecciones provinciales del 2 de septiembre pasado, han instalado en la ciudadanía de Córdoba la sospecha de fraude. Una sospecha fundada en la incertidumbre del destino del propio voto.

Es que el mecanismo de sumatoria de votos permitido en estas elecciones, convirtió el cuarto oscuro en un monumento a la confusión del elector, diversas listas, correspondientes a distintos partidos, con orientaciones ideológicas muy diferentes, proponían al mismo candidato para gobernador o intendente.

El resultado de esta modalidad electoral, es que terminan siendo votados candidatos desconocidos, que acceden a una banca legislativa como resultado de haber logrado confundir al elector, convirtiendo el acto electoral en un asalto a la buena fe del ciudadano.

Nuestra propuesta consiste en establecer fehacientemente en la legislación vigente, la prohibición de sumar los votos entre partidos en forma individual, o entre partidos y alianzas, o entre alianzas, salvo que los partidos reconocidos constituyan alianza o se fusionen entre sí.

Por los motivos expuestos y otros que daré en oportunidad del tratamiento de esta iniciativa, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto de Ley.

Liliana Olivero.

**PROYECTO DE LEY - 011647/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1.- Modifícase el artículo 43 de la Ley 6875, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43.- El patrimonio del partido se integrará con las contribuciones de sus afiliados, los subsidios del Estado y los bienes y recursos que autorice la carta orgánica y que no prohíba la ley.

Los bienes registrables que se adquieran con fondos del partido o que provinieran de contribuciones o donaciones deberán inscribirse a nombre del partido en el registro respectivo.

Los bienes, cuentas corrientes y actividades de los partidos reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional, incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.). Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato a los partidos siempre que se encuentren destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido y que los tributos estén a su cargo.

Quedan comprendidos en la exención los bienes de renta del partido con la condición de que aquella se invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y no acrecentare directa o indirectamente el patrimonio de persona alguna.

Artículo 2.- Incorpórese el artículo 43 bis a la Ley 6875, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43 Bis.- Los Partidos Políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento:

- a) Público;
- b) Privado.

Artículo 3.- Incorpórese el artículo 43 ter a la Ley 6875, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43 ter.- A los fines de obtener los recursos públicos el Estado provincial contribuirá al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos en las condiciones establecidas en la presente Ley.-

Con tales aportes los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:

- a) desenvolvimiento institucional;
- b) capacitación y formación política;
- c) campañas electorales generales.

Se entiende por desenvolvimiento institucional todas las actividades políticas, institucionales y administrativas derivadas del cumplimiento de la presente Ley y la Carta Orgánica Partidaria, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel nacional o internacional.

Artículo 4.- Incorpórese el artículo 43 quater a la Ley 6875, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43 quater.- Los partidos políticos podrán obtener para su financiamiento en concepto de aporte privado, con las limitaciones previstas en esta ley, los si-

güentes aportes de dicho sector:

- a) de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
- b) donaciones de otras personas físicas -no afiliados- y personas jurídicas;
- c) de rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades.

Artículo 5.- Modifícase el artículo 44 de la Ley 6875 el que quedara redactado de la siguiente manera:

Artículo 44.- Los partidos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:

- a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes no podrán imponer cargos de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la donación por tres (3) años;
- b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o provinciales, o de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas, o de empresas que exploten juegos de azar, o de gobiernos o entidades o empresas extranjeras;
- c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o de profesionales;
- d) Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en situación de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando aquellas le hubieren sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o empleadores.

Artículo 6.- Incorpórese el artículo 44 bis a la Ley 6875, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Artículo 44 bis.- Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario donaciones de:

- a) una persona jurídica, superiores al monto equivalente al uno por ciento (1%) del total de gastos permitidos;
- b) una persona física, superiores al monto equivalente al dos por ciento (2%) del total de gastos permitidos.

Los porcentajes mencionados se computarán, sobre el límite de gastos establecido en la presente Ley para elecciones de Legisladores provinciales y Gobernador Provincial.

Este límite no será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos electivos.

El Juzgado Electoral informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 7.- Modifícase el artículo 45 de la Ley 6875, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Artículo 45.- 1) Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en el artículo 44 de la presente Ley incurrirán en multa equivalente al doble de la donación o contribución ilícitamente aceptada.

2) La persona de existencia ideal que efectuare las contribuciones o donaciones prohibidas en el artículo anterior incurrirá en multa equivalente al décuplo del monto de la donación o contribución ilegítimamente realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

3) Las personas físicas que se enumeran a continuación, quedarán sujetas a inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones públicas y partidarias internas, como así para el desempeño de cargos públicos, por el término de dos (2) a seis (6) años;

a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones contempladas en el artículo 44 y, en general, todas las personas que contravinieren lo allí dispuesto;

b) Los afiliados que por sí o por interpósita persona aceptaren o recibieren a sabiendas donaciones o aportes para el partido, de las personas mencionadas en el inciso precedente, así como los afiliados que, por sí o por interpósita persona, solicitaren aquellas a sabiendas, donaciones para el partido o aceptaren o recibieren donaciones anónimas, en contra de lo prescripto por el artículo 43°.

c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervinieren directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus inferiores jerárquicos o empleados, para un partido, así como los afiliados que, a sabiendas, aceptaren o recibieren para el partido contribuciones o donaciones así obtenidas;

d) Los que utilizaren directa o indirectamente, fondos de un partido para influir en la nominación de cualquier persona en una elección partidaria interna.

Artículo 8.- Modifícase el artículo 50 de la Ley 6875, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Artículo 50.- El Estado Provincial contribuirá al sostenimiento de los partidos políticos reconocidos. Para ello, créase el “Fondo Partidario Permanente”.

El “Fondo Partidario Permanente”, se compondrá de:

a) la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro “Fondo Partidario Permanente” que determine de manera anual la Ley General de Presupuesto de la Provincia de Córdoba;

b) el dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley, y el Código Nacional Electoral;

c) el producto de las liquidaciones de bienes que

pertenecieran a los partidos políticos extinguidos;

d) los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado provincial;

e) los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas;

f) los aportes privados destinados a este fondo;

g) los fondos remanentes de los asignados por esta ley o por la ley de Presupuesto al Ministerio de Gobierno, para el Fondo Partidario Permanente y para gastos electorales, una vez realizadas las erogaciones para las que fueron previstos.

El Ministerio de Gobierno distribuirá dichos fondos y fiscalizará su aplicación, a los efectos que determina esta ley y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. Podrá hacer anticipos a los partidos en formación con arreglo a lo que determine el Decreto Reglamentario.

Artículo 9.- Incorpórese artículo 51 Bis, 51 ter, 51 quater, 51 quinquies y 51 sexies a la Ley 6875, los que quedaran redactados de la siguiente manera:

Artículo 51 bis.- En el mes de marzo de cada año el Ministerio de Gobierno informará a los partidos políticos y a la Justicia Electoral el monto de los recursos que integran el Fondo Partidario Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese monto, más los fondos asignados por la Ley de Presupuesto al Fondo Partidario Permanente compondrán los recursos a distribuir en concepto de aporte anual para el desenvolvimiento institucional de los Partidos Políticos.-

Artículo 51 ter.- Los recursos disponibles para el aporte anual para el desenvolvimiento institucional se distribuirán de la siguiente manera:

a) veinte por ciento (20%), en forma igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos.

b) ochenta por ciento (80%), en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de sufragios equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral.

Artículo 51 quater.- Para el caso de los partidos que hubieran concurrido a la última elección provincial conformando una alianza, la suma correspondiente a la misma, en virtud de lo establecido por el artículo 51 ter inciso "b" de la presente Ley, se distribuirá entre los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscripto entre los referidos partidos miembros al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza.

Artículo 51 quinquies.- Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20%) de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación.

Asimismo se establece que por lo menos un treinta por ciento (30%) del monto destinado a capacitación debe afectarse a las actividades de capacitación pa-

ra la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años.

De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los hará pasibles de la sanción prevista en la presente Ley.

Artículo 51 sexies.- El pago del aporte para el desenvolvimiento institucional sólo se efectuará si el partido ha presentado la documentación contable correspondiente al último ejercicio, en tiempo y forma de acuerdo al artículo 52 y stes.- de la presente ley y ante el juez provincial con competencia electoral correspondiente.

Artículo 10.- Modifícase el artículo 52 de la Ley 6875, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 52.- Los partidos, por el órgano que determine la carta orgánica deberán:

a) Llevar contabilidad de todo ingreso de fondos o especies, con indicación de la fecha del mismo y de los nombres y domicilios de las personas que los hubieren ingresado o recibido; esta contabilidad deberá conservarse durante tres (3) ejercicios con todos sus comprobantes.

b) Dentro de los sesenta (60) días de finalizado cada ejercicio, presentar al Juez de aplicación correspondiente el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificados por contador público nacional o por los órganos de control del partido.

c) Dentro de los sesenta (60) días de celebrado el acto electoral en que haya participado el partido, presentar al Juez de aplicación correspondiente cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral,

A los fines del cumplimiento de las disposiciones contenida en el presente artículo, el partido político deberá nombrar un tesorero titular y uno suplente, o sus equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, con domicilio en el distrito correspondiente, debiendo ambos ser afiliados. Las designaciones con los respectivos datos de identidad y profesión deberán ser comunicados al Juez Electoral y al Ministerio de Gobierno.

d) Los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta que se abrirá en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro (4) miembros del partido, de los cuales dos (2) deberán ser el presidente y tesorero, o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente, deberá suscribir los libramientos que se efectúen.

Las cuentas deberán registrarse en el Ministerio de Gobierno e informarse al juzgado con competencia electoral.

Artículo 11.- De forma.

Dante Rossi.

FUNDAMENTOS

Nuestra Ley Orgánica de Partidos Políticos, Número 6875 fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero de 1983, a partir de ese momento ha sufrido reformas necesarias a los fines de adecuar la organización y el funcionamiento de los partidos políticos a las necesidades de tiempos actuales.

Sin embargo dicha herramienta legal no ha contemplado algunos instrumentos básicos y fundamentales a la hora de analizar el financiamiento de aquellos.

Es decir que se deja de regular nada menos que lo atinente al dinero recaudado por los partidos y los candidatos para sustentar los gastos en las campañas electorales, así como el dinero que utiliza en actividades permanentes de los partidos políticos.

No es poca cosa, si tenemos en cuenta que la mayoría de los países han avanzado en una seria regulación de la materia, de manera tal de contener y controlar los fondos que perciben los partidos, ya sea por aportes privados o públicos.

La complejidad del financiamiento de la política es tal que la convierte en una actividad muy difícil de controlar mediante leyes y organismos de control oficiales, siendo objeto del presente proyecto avanzar en el tema, de manera tal de garantizar la responsabilidad de los funcionarios encargados de administrar los fondos, así como también transparentar el dinero que perciben.

De acuerdo a lo preceptuado por la Ley Nacional 26215 y la legislación comparada, se modifica el Fondo Partidario Permanente, dando un rol protagónico al Estado provincial al momento de garantizar el funcionamiento de los partidos políticos.

Los aportes están destinados al desenvolvimiento institucional y capacitación y formación política, y a las campañas electorales generales. El fondo se compone de los aportes que destine anualmente la Ley de presupuesto, las multas que se recauden por el cumplimiento de la ley, la liquidación de bienes de partidos extinguidos, los legados, donaciones y aportes que se destinen al Fondo, los reintegros que realicen los partidos, y los fondos remanentes.

Es administrado por el Ministerio de Gobierno, el cual se encuentra limitado a los fines de su administración por la propia ley de partidos políticos, la cual prescribe que aquel recibe el 20 % del mismo para otorgar franquicias, asignar el aporte para el desenvolvimiento institucional de aquellos partidos políticos reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo, y establecer el sistema de adelantos contra avales o contra cautelas en el caso de aquellos partidos o alianzas que no registren anterior referencia electoral.

Dante Rossi.

**PROYECTO DE LEY - 01733/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Financiamiento de los Partidos Políticos -Campañas electorales-

Composición.

Artículo 1.- El patrimonio del partido político se integrará con los bienes y recursos que autoricen la presente Ley y la respectiva Carta Orgánica, restándole las deudas que pesan sobre él.

Bienes registrables.

Artículo 2.- Los bienes registrables que se adquieran con fondos del partido o que provinieran de contribuciones o donaciones deberán inscribirse a nombre del partido en el registro respectivo.

Exención impositiva.

Artículo 3.- Los bienes, cuentas corrientes y actividades de los partidos reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución provincial. Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato a los partidos siempre que se encuentren destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido y que los tributos estén a su cargo.

Quedan comprendidos en la exención los bienes de renta del partido con la condición de que aquella se invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y no acrecentare directa o indirectamente el patrimonio de persona alguna.

Sección II: Recursos de los partidos políticos

Financiamiento partidario.

Artículo 4.- Los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento:

- a) Público: De acuerdo a lo establecido en esta Ley en los artículos 5º al 14.
- b) Privado: De acuerdo a lo establecido en esta Ley en los artículos 15 al 18.

Financiamiento público.

Artículo 5.- EL Estado Provincial contribuirá al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos en las condiciones establecidas en esta Ley.

Con tales aportes los partidos políticos deberán realizar las siguientes actividades:

- a) desenvolvimiento institucional;
- b) capacitación y formación política;
- c) campañas electorales generales.

Se entiende por desenvolvimiento institucional todas las actividades políticas, institucionales y administrativas derivadas del cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos (6875), la presente Ley y la Carta Orgánica Par-

tidaria, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel provincial nacional o internacional.

Capítulo Único
SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE
PARTIDOS POLÍTICOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES

Artículo 6.- Créase la Secretaría de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales. En adelante y a los efectos de la presente Ley "La Secretaría". Es un órgano dentro de la estructura del Juzgado Electoral Provincial, o el órgano que en el futuro lo reemplace, que tiene por objeto y función concentrar y distribuir el Fondo Partidario Permanente; el fondo destinado en la Ley de Presupuesto General para Campañas Electorales como así también todo otro fondo destinado por el Estado a los partidos políticos y campañas electorales. Ejerce el control amplio sobre el cumplimiento de la presente Ley, sin perjuicio de las facultades que detenta el Juzgado Electoral Provincial.

Está integrado por un Secretario, elegido de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente artículo la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

a) Amplias facultades de investigación y control de la presente Ley.

b) Receptar denuncias por incumplimientos de la presente Ley

c) Realizar e investigar denuncias e irregularidades detectadas por incumplimientos a la presente Ley poniéndolas en conocimiento del Juzgado Electoral Provincial.

d) Todos los organismos públicos, como así también cualquier persona física o jurídica, pública o privada, están obligados a prestar colaboración con la Secretaría. La Secretaría podrá cruzar datos con organismos públicos provinciales, nacionales o municipales.

e) Toda otra facultad que no haya sido conferida al Juzgado Electoral Provincial u a otro Órgano o Poder con motivo y ocasión de la presente u otras leyes.

Fondo Partidario Permanente.

Artículo 7.- El Fondo Partidario Permanente será administrado por la Secretaría, y estará constituido por:

a) el aporte que destine anualmente la Ley de Presupuesto General de la Provincia;

b) el dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta Ley, y la Ley Electoral Provincial;

c) el producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieren a los partidos políticos extinguidos;

d) los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado Provincial;

e) los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas;

f) los aportes privados destinados a este fondo;

g) los fondos remanentes de los asignados por esta Ley o por la Ley de Presupuesto General de la Provincia, a la Secretaría para el Fondo Partidario Permanente y para gastos electorales, una vez realizadas las erogaciones para las que fueron previstos.

Destino de los recursos asignados a la Secretaría de Financiamiento de los Partidos Políticos y Campañas Electorales.

Artículo 8.- La Secretaría recibirá el veinte por ciento (20%) de la partida presupuestaria asignada al Fondo Partidario Permanente en la Ley de Presupuesto General de la Provincia, previo a toda otra deducción con el objeto de:

a) otorgar las franquicias que autoriza la presente Ley y aportes extraordinarios para atender gastos no electorales a los partidos políticos reconocidos;

b) asignar el aporte para el desenvolvimiento institucional de aquellos partidos políticos reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo Partidario Permanente y aportes de campaña a partidos sin referencia electoral anterior.

Los fondos remanentes se integrarán al Fondo Partidario Permanente.

Artículo 9.- En el primer mes de cada año la Secretaría informará a los partidos políticos y a la Justicia Electoral el monto de los recursos que integran el Fondo Partidario Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese monto, más los fondos asignados por el Presupuesto General de la Provincia al Fondo Partidario Permanente, deducidos los porcentajes que indica el artículo anterior, serán los recursos a distribuir en concepto de aporte anual para el desenvolvimiento institucional.

Asignación Fondo Partidario Permanente.

Artículo 10.- Los recursos disponibles para el aporte anual para el desenvolvimiento institucional se distribuirán de la siguiente manera:

a) veinte por ciento (20%), en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos, previa deducción del costo de limpieza de la etapa post-electoral que será abonado al órgano que realice dicha tarea.

b) ochenta por ciento (80%), en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de Legisladores Provinciales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de sufragios equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral.

Distribución Fondo Partidario Permanente.

Artículo 11.- Para el caso de los partidos reconocidos para actuar en el orden provincial, una vez determinado el monto correspondiente a cada partido, de acuerdo al artículo anterior, se distribuirá directamente el cuarenta por ciento (40%) a los organismos partidarios de distrito y el sesenta por ciento (60%) restante a los organismos municipales.

Alianzas electorales.

Artículo 12.- Para el caso de los partidos que hubieran concurrido a la última elección provincial conformando una alianza, la suma correspondiente a la misma, en función de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 10, se distribuirá entre los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscripto entre los referidos partidos miembros al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza.

Capacitación.

Artículo 13.- Los partidos de distrito deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20%) de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación.

Asimismo se establece que por lo menos un treinta por ciento (30%) del monto destinado a capacitación debe afectarse a las actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años.

A principio de año los partidos enviarán al Consejo de Partidos Políticos de la Provincia, un plan de los temas, seminarios, foros, etc, que se desarrollarán en torno a la capacitación política. A fin de año presentarán un informe acompañado de imágenes o artículos en la prensa de los temas desarrollados.

De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los hará pasibles de la sanción prevista en el artículo 71 de la presente Ley.

Requisito.

Artículo 14.- El pago del aporte para el desenvolvimiento institucional sólo se efectuará si el partido ha presentado la documentación contable correspondiente al último ejercicio, en tiempo y forma de acuerdo a la presente Ley y ante el Juzgado Electoral Provincial.

Financiamiento privado.

Artículo 15.- Los partidos políticos podrán obtener para su financiamiento, con las limitaciones previstas en esta Ley, los siguientes aportes del sector privado:

- a) de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
- b) donaciones de otras personas físicas -no afiliados- y personas jurídicas argentinas.
- c) de rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades.

Prohibiciones.

Artículo 16.- Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:

- a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;

- b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provincia-

les, interestadales, binacionales o multilaterales, municipales o de la ciudad de Buenos Aires;

- c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires;

- d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;

- e) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras;

- f) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras.

- g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;

- h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales.

- i) contribuciones o donaciones de personas jurídicas constituidas de acuerdo a la Ley 19.550, fundaciones y asociaciones civiles.

Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.

Montos máximos.

Artículo 17.- Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario donaciones de:

- a) una persona jurídica, superiores al monto equivalente al uno por ciento (1%) del total de gastos permitidos;

- b) una persona física, superiores al monto equivalente al dos por ciento (2%) del total de gastos permitidos. Los porcentajes mencionados se computarán, sobre el límite de gastos establecido en el artículo 46.

- c) El límite del inciso "b" será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos electivos. La Justicia Electoral Provincial informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web del Poder Judicial de la Provincia puesto a disposición del fuero electoral.

Deducción impositiva.

Artículo 18.- Tanto el Fondo Partidario Permanente como el partido político que recibiere donaciones enviarán el registro en el que conste la donación recibida al órgano fiscal correspondiente provincial y nacional.

Capítulo II - Organización administrativo contable

Administración financiera.

Artículo 19.- El partido deberá nombrar un tesorero titular y uno suplente, o sus equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, con domicilio en el distrito corres-

pondiente, debiendo ambos ser afiliados. Las designaciones con los respectivos datos de identidad y profesión deberán ser comunicados al Juez Electoral con competencia electoral correspondiente.

Obligaciones del tesorero.

Artículo 20.- Son obligaciones del tesorero:

a) llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen y destino de los fondos y de la fecha de la operación y del nombre y domicilio de las personas intervinientes.

La documentación respaldatoria deberá conservarse durante diez (10) años;

b) elevar en término a los organismos de control la información requerida por la presente Ley;

c) efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta única correspondiente del partido.

Sección II: Movimientos de fondos

Cuenta corriente única.

Artículo 21.- Los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro (4) miembros del partido, de los cuales dos (2) deberán ser el presidente y tesorero, o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente, deberá suscribir los libramientos que se efectúen.

Los órganos nacionales del partido deberán abrir una cuenta única en el distrito de su fundación en el Banco de la Provincia de Córdoba, en similares términos a los del párrafo precedente.

Las cuentas deberán registrarse en la Secretaría e informarse al Juzgado Electoral Provincial.

Sección III: Registros exigidos

Libros contables rubricados.

Artículo 22.- Los partidos políticos deberán llevar, además de los libros prescriptos en el artículo 41 de la Ley 6875 de Partidos Políticos; el libro Diario y todo otro libro o registro que la agrupación estime menester para su mejor funcionamiento administrativo contable.

Todos los libros deben estar rubricados ante la Justicia Electoral Provincial correspondiente.

El incumplimiento de lo previsto en este artículo hará pasible al partido político de la caducidad de su personalidad política en concordancia con lo regulado por el artículo 55, inciso c), dispuesta por el Título VI de la Ley 6875.

Título II. Del control patrimonial anual

Capítulo I - Obligaciones de los partidos políticos

Ejercicio contable.

Artículo 23.- Los partidos políticos deberán es-

tablecer en sus cartas orgánicas la fecha adoptada para el cierre del ejercicio contable anual. Su omisión importará las sanciones previstas en el artículo 75 de la presente Ley.

Estados contables anuales.

Artículo 24.- Dentro de los noventa (90) días de finalizado cada ejercicio, los partidos políticos deberán presentar ante la Secretaría y el Juzgado Electoral Provincial el estado anual de su patrimonio o balance general y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, suscriptos por el presidente y tesorero del partido y por contador público matriculado en el distrito. El informe que efectúen los contadores públicos matriculados deberá contener un juicio técnico con la certificación correspondiente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de jurisdicción correspondiente.

Deberán poner a disposición de la Secretaría de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales y el Juzgado Electoral Provincial la correspondiente documentación respaldatoria.

Asimismo deberán presentar una lista completa de las personas físicas y jurídicas que hayan realizado aportes económicos en el período, detallando datos de identificación personal, identificación tributaria, monto y fecha del aporte.

Publicidad.

Artículo 25.- El Juez Electoral de competencia correspondiente, previa vista a la Secretaría, ordenará la publicación inmediata de la información contable mencionada en el artículo anterior en el sitio web del Poder Judicial de la Provincia y remitirá los estados contables anuales a los auditores contables de la Dirección de Administración del Poder Judicial para la confección del respectivo dictamen.

Los partidos políticos deberán difundir en un diario de circulación provincial el sitio web donde se encuentran publicados los estados contables anuales completos con los listados de donantes. Si la agrupación política no contase con sitio web, referenciará al sitio web del Poder Judicial de la Provincia.

Observaciones de terceros.

Artículo 26.- Los estados contables y demás informes podrán ser consultados en la sede del juzgado por cualquier ciudadano e incluso solicitar copia. La solicitud no requerirá expresión de causa y el costo de las copias estará a cargo del solicitante.

Las observaciones de los terceros podrán formularse durante el plazo que dure el proceso de contralor, ante la Secretaría, teniendo como fecha límite final la de la resolución emitida por el Juez respectivo.

De las presentaciones efectuadas se correrá traslado al partido por el término de cinco (5) días, a fin de ponerlo en conocimiento de lo impugnado. Dichas impugnaciones tendrán como único efecto el de poner en conocimiento de la Secretaría los hechos que a juicio del presentante deben ser investigados, sin que los im-

pugnantes tengan otra participación en la sustanciación del proceso.

Capítulo II - Fiscalización y control patrimonial anual

Plazos.

Artículo 27.- La Justicia Electoral dispondrá del asesoramiento de los auditores contables que integran la Dirección de Administración del Poder Judicial, los que tendrán un máximo de ciento ochenta (180) días para la realización de la auditoria de los estados contables anuales y treinta (30) días para la elaboración y notificación a los partidos políticos dichos informes.

Vencido dicho término el Juez Electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar un traslado al partido político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.

Título III. De las campañas electorales

Capítulo I – Concepto de campaña y obligaciones de los partidos políticos por campañas electorales

Artículo 28.- Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades que realizan los candidatos y los partidos con el propósito de promover o desalentar expresamente la captación del sufragio a favor, o en contra, de candidatos oficializados a cargos públicos electivos provinciales o municipales.

Las actividades académicas y la realización de congresos y simposios no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral. La campaña electoral no podrá iniciarse hasta cuarenta y cinco (45) días corridos antes de la fecha fijada para el comicio, ni extenderse cuarenta y ocho (48) horas previas a la iniciación del comicio.

Artículo 29.- Los candidatos no podrán iniciar campaña hasta tanto no esté aprobada su candidatura por parte de la Justicia Electoral Provincial.

Artículo 30.- Durante la campaña electoral queda prohibido al gobierno nacional, provincial, municipal, entidades descentralizadas de cualquier tipo total o parcialmente estatales, la publicidad de actos de gobierno. Queda también prohibido la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción o publicidad de programas, planes o proyectos institucionales, durante el plazo previsto para la realización de campaña electoral.

Artículo 31.- Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación de sufragios para partidos o candidatos a cargos públicos provinciales antes de los cuarenta y cinco (45) días previos a la fecha fijada para el comicio.

Responsables.

Artículo 32.- Al registrarse en el Juzgado Electoral para la elección a cargos públicos electivos, los partidos políticos que vayan a presentar candidaturas deberán designar un responsable económico-financiero y un responsable político de campaña, con los requisitos previstos en el artículo 19 de la presente Ley, quienes serán solidariamente responsables con el presidente, el tesoroero y los candidatos del partido por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas a la Secretaría y al Juez con competencia electoral correspondiente.

Fondos de campaña.

Constitución de fondo fijo.

Artículo 33.- Las erogaciones que por su monto, sólo puedan ser realizadas en efectivo, se instrumentarán a través de la constitución de un fondo fijo.

Dicho fondo no podrá ser superior a cinco mil pesos (\$ 5.000) por partido político o alianza electoral.

Cada gasto o erogación que se realice utilizando el fondo fijo deberá contar con la constancia prevista en el artículo siguiente y la documentación respaldatoria de dicho gasto.

Constancia de operación.

Artículo 34.- Todo gasto que se efectúe con motivo de la campaña electoral, superior a pesos un mil (\$ 1.000) deberá documentarse, sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales ordinarios, a través de una "Constancia de Operación para Campaña Electoral", en la que deberán constar los siguientes datos:

- a) identificación tributaria del partido o alianza y de la parte co-contratante;
- b) importe de la operación;
- c) número de la factura correspondiente;
- d) número del cheque destinado al pago.

Las "Constancias de Operación para Campaña Electoral" serán numeradas correlativamente para cada campaña y deberán registrarse en los libros contables.

Capítulo II - Alianzas electorales

Alianzas.

Artículo 35.- Los partidos políticos podrán constituir alianzas electorales de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6875. Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deberán designar un responsable económico financiero y un responsable político de campaña, con los requisitos previstos en el artículo 28, siendo solidariamente responsables con el presidente, el tesoroero y los candidatos de los partidos integrantes, por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Las designaciones deberán ser comunicadas a

la Secretaría y al Juzgado Electoral Provincial correspondiente.

Fondos electorales.

Artículo 36.- La alianza electoral deberá abrir una cuenta corriente única en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre de la alianza y a la orden conjunta del responsable económico y del responsable político de campaña. Dichas cuentas deben informarse al Juzgado Electoral Provincial y registrarse en la Secretaría.

Por esta cuenta ingresarán todos los aportes tanto públicos como privados y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña. La misma deberá cerrarse a los treinta (30) días de realizada la elección. De efectivizarse aportes públicos de campaña con posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos se depositarán directamente en la cuenta única de cada partido político integrante de la alianza y de acuerdo a la distribución de fondos suscripta para su conformación e inscripción en la justicia electoral.

Constancia de operación.

Artículo 37.- Este instrumento de respaldo de todo gasto deberá instrumentarse de acuerdo a lo prescripto en el artículo 34 de la presente Ley.

Capítulo III - Financiamiento público en campañas electorales

Aportes de campaña.

Artículo 38.- La Ley de Presupuesto General de la Provincia para el año en que deban desarrollarse elecciones provinciales determinará el monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.

Aporte impresión boletas.

Artículo 39.- El Juzgado Electoral de la Provincia tendrá la facultad de llamar a licitación pública para designar una empresa dedicada al rubro de la impresión que se encargue de la fabricación y confección de boletas, por dos (2) elecciones consecutivas, luego de las cuales se repetirá el proceso de licitación.

Distribución aportes.

Artículo 40.- Los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral, se distribuirán, entre los partidos y alianzas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección de cargos públicos electivos provinciales, de la siguiente manera:

a) cuarenta por ciento (40%) del monto asignado por el Presupuesto, en forma igualitaria entre las listas presentadas;

b) sesenta por ciento (60%) del monto asignado por el Presupuesto, en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de Legisladores Provinciales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de sufragios equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral en la última

elección de legisladores provinciales correspondiente.

Referencia electoral.

Artículo 41.- Para el supuesto de partidos que no registren referencia electoral anterior se equiparará al partido que haya participado en la última elección de legisladores provinciales y que le corresponda el menor monto de aporte. Para el caso de las alianzas se tendrá en cuenta la suma de votos obtenida en dicha elección por los partidos que la integran, o el aporte que les correspondiera.

Retiro de candidatos.

Artículo 42.- Si el partido o la alianza retirara sus candidatos y no se presentara a la elección deberá restituir, en el término de sesenta (60) días de realizada la elección el monto recibido en concepto de aporte para la campaña.

El presidente, el tesorero del partido y los candidatos, así como el responsable político y el responsable económico-financiero de la campaña serán responsables de la devolución de dichos fondos, habiéndose previsto las sanciones en el artículo 68 de la presente Ley.

Destino remanente aportes.

Artículo 43.- El remanente de los fondos públicos otorgados en concepto de aporte extraordinario para campaña electoral podrá ser conservado por los partidos exclusivamente para ser destinado a actividades de capacitación y formación política, debiendo dejarse constancia expresa de ello en el informe final de campaña. En caso contrario, deberá ser restituido dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral. La contravención a esta norma será sancionada en iguales términos que la sanción prevista para el incumplimiento del artículo 13 de la presente Ley.

Depósito del aporte.

Artículo 44.- El aporte público para la campaña electoral del artículo 40, deberá hacerse efectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha límite de oficialización definitiva de la lista.

Propaganda

Gráfica

Artículo 45.- Todos los carteles, avisos y propaganda gráfica en general que se utilicen con motivo de la campaña para promover o desacreditar a los candidatos o partidos políticos, deberán contener una identificación de la imprenta que los hizo, o del lugar en que los fabricaron.

Espacios en los medios de comunicación.

Artículo 46.- El Estado Provincial otorgará a los candidatos que hayan oficializado su candidatura, espacios en los medios de radiodifusión, para la transmisión de sus mensajes de campaña.

En los años en que se realicen elecciones para Gobernador, Vicegobernador, la provincia garantizará el uso de una franja horaria de sesenta (60) minutos durante diez (10) días antes de la fecha del comicio distribuida igualmente entre los candidatos oficializados; en el

caso de legisladores provinciales, la provincia garantizará el uso de una franja horaria de ochenta (80) minutos durante diez (10) días antes de la fecha del comicio distribuida igualitariamente entre los partidos oficializados.

Artículo 47.- Las encuestas electorales contratadas por partidos políticos deberán difundirse indicando expresamente la identificación de la persona física o jurídica que la realizó, la fuente de financiación y la persona que la encomendó, metodología empleada, tipo y tamaño de la muestra, tema concreto al que refiere, las preguntas específicas que se formularon, los candidatos por los que se indagó, área territorial o geográfica, fecha o período de tiempo en que se realizó y margen de error aceptado.

Capítulo IV - Financiamiento privado en campañas electorales

Artículo 48.- Los partidos podrán recibir aportes de personas jurídicas y físicas, con las limitaciones de los artículos 15 y 16 de la presente.

Tanto las personas físicas como las jurídicas que hicieron aportes no podrán celebrar contratos de ningún tipo con el gobierno provincial y municipal en los cuatro (4) años siguientes a la fecha del aporte realizado.

Las personas físicas que hicieron aportes para la campaña tendrán un crédito fiscal correspondiente al 25% del aporte realizado, para compensar con impuestos provinciales, siempre que estén al día en el pago de sus impuestos. Dentro de los dos (2) días de recibido el aporte, la persona autorizada a recibirlo debe depositarlo en la cuenta del partido o de la alianza.

Límite recursos privados.

Artículo 49.- Los partidos políticos o alianzas con motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta Ley y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al partido o alianza.

Capítulo V - Límites de gastos de campañas electorales

Límite de gastos.

Artículo 50.- En las elecciones provinciales, los gastos destinados a la campaña electoral que realice un partido, no podrán superar en conjunto, la suma equivalente a un peso (\$ 1,00) por elector habilitado a votar en la elección. Los partidos políticos que no respeten el límite previsto en este artículo serán pasibles de las sanciones del artículo 68 de la presente Ley.

Información límite.

Artículo 51.- El Juzgado Electoral Provincial o el

órgano que lo sustituya al iniciarse la campaña electoral, informará a los partidos políticos y alianzas o frentes electorales el límite de gastos y publicará esa información en el sitio web del Poder Judicial de la Provincia puesto a disposición del fuero electoral.

Adhesión.

Artículo 52.- Cuando un partido no presente candidatos o listas propias y adhiera a la candidatura presentada por otro partido o alianza, los gastos que realice se computarán, en conjunto dentro del límite establecido en el artículo 50.

Gastos en publicidad.

Artículo 53.- Quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña por cuenta de terceros.

Para la contratación de la publicidad electoral será excluyente la participación de los responsables políticos o responsables económicos de los partidos políticos, confederaciones y alianzas, debiendo refrendar las órdenes respectivas, quedando prohibido a los medios de comunicación, la venta de espacios o segundos de aire, a quienes no ostenten la calidad exigida.

La sanción correspondiente para el incumplimiento de lo regulado en este artículo se encuentra prevista en el artículo 74.

Terceros informantes.

Artículo 54.- Los medios de comunicación y los proveedores en general, de servicios o bienes útiles o muebles en el desarrollo de las campañas electorales de los partidos políticos están sometidos al régimen que esta Ley establece, debiendo facilitar los elementos y datos que les sean requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ley o contrato.

Diez (10) días antes del plazo de inicio para la campaña electoral los medios de comunicación tienen la obligación de presentar al Juzgado Electoral o el órgano que lo sustituya un informe detallado sobre las tarifas que aplicaran a los espacios de publicidad para campaña electoral. Dichas tarifas no podrán ser modificadas durante el curso de la campaña.

La sanción correspondiente para el incumplimiento de lo regulado en este artículo se encuentra prevista en el artículo 72.

Gastos realizados por anticipado.

Artículo 55.- Aquellas compras o contrataciones que se realicen con anterioridad al comienzo de la campaña deberán estar debidamente respaldadas e informadas en notas en los informes de los artículos 60 y 64 de la presente Ley.

Las sumas que representen estas adquisiciones formarán parte del límite de gastos previstos en el artículo 50.

Artículo 56.- Todo bien o servicio, de carácter comercial, destinado a campaña será considerado gasto o aporte, aunque el partido no haya realizado desembolso de dinero.

Artículo 57.- A los fines del cálculo del monto máximo de gastos y aportes previstos en la presente ley, los bienes y servicios serán computados conforme al valor y prácticas del mercado.

Título IV. Del control de financiamiento de campañas electorales

Auditoría de medios

Artículo 58.- El Gobierno de la Provincia licitará la contratación de un servicio de control de medios que verificará, en los medios de comunicación (televisión, radio y gráfica), el cumplimiento de esta Ley por parte de los candidatos, partidos, alianzas y entidades gubernamentales.

El servicio de control de medios se iniciará seis meses antes a la fecha del comicio. La empresa encargada de dicho servicio, entregará el informe correspondiente al Juzgado Electoral dentro de los diez (10) días posteriores a la realización del comicio. El Juzgado Electoral lo difundirá por diversos medios.

Información aportes.

Artículo 59.- En el plazo del artículo 60, la Secretaría deberá informar al Juzgado Electoral Provincial el monto de los aportes, subsidios y franquicias públicos a la campaña electoral, discriminados por rubro, monto y partido y con indicación de las sumas ya entregadas y las pendientes de pago. En este último caso, deberá indicarse la fecha estimada en que se harán efectivas y las causas de la demora.

Informe previo.

Artículo 60.- Diez (10) días antes de la celebración del comicio, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico financiero y político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la Secretaría y el Juzgado Electoral Provincial, un informe detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma.

Publicidad.

Artículo 61.- El Juez con competencia electoral correspondiente ordenará la publicación en el Boletín Oficial del sitio web donde puede consultarse el informe previo del artículo 60, en la semana previa a la fecha fijada para la realización del comicio.

Procedimiento de consulta.

Artículo 62.- El informe previo podrá ser consultado en la sede del juzgado sin limitación alguna de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 26 de la presente Ley.

Falta de información.

Artículo 63.- Todo partido político o alianza electoral que haya oficializado candidatos está obligado a presentar el informe previo aunque no haya recibido hasta el plazo que fija el artículo 60 de la presente Ley, aportes públicos ni privados. Esto no obsta a que presupueste lo que estime se gastará hasta el momento del comicio

Informe final.

Artículo 64.- Sesenta (60) días después de finalizada la elección, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico financiero y político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la Secretaría y el Juzgado Electoral Provincial un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral.

Deberá indicarse también la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña para el caso de las alianzas electorales, debiendo poner a disposición la correspondiente documentación respaldatoria.

Publicidad.

Artículo 65.- Respecto al informe final regulado en el artículo anterior se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 reemplazando a los estados contables anuales por el informe final de campaña.

Procedimiento de consulta y observaciones.

Artículo 66.- Se aplica el artículo 26 de la presente Ley para los informes previo y final previstos en este Título.

Plazos.

Artículo 67.- La Justicia Electoral Provincial tendrá un máximo de ciento ochenta (180) días para la realización de la auditoría de los informes finales de campaña y treinta (30) días para la elaboración y notificación a los partidos políticos del dictamen correspondiente.

Vencido dicho término el Juez con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar un traslado al partido político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.

Título V - De las sanciones

Artículo 68.- Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que:

- a) recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 21 y 36;
- b) habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte de campaña, en los términos del artículo 42;
- c) recibieran donaciones, aportes o contribucio-

nes en violación a lo dispuesto por los artículos 16 y 17;
d) realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 50 y 52;

e) incumplieran los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en televisión, radios y medios gráficos.

Artículo 69.- El presidente, tesorero del partido, los responsables políticos, económico-financiero de campaña y el candidato serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos provinciales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando:

a) recibiera donaciones o contribuciones en violación a lo dispuesto en los artículos 16 y 17.

b) Realizaran gastos en prohibición a los artículos 50 y 53.

c) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta Ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral.

d) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.

En el caso de que las autoridades mencionadas en el párrafo anterior ostenten el título de Contador Público la sanción importará la suspensión por dos años de la matrícula profesional.

Artículo 70.- Idénticas sanciones a las previstas en los artículos anteriores serán aplicables a las alianzas y a cada uno de los partidos políticos que las integran. Las agrupaciones políticas quedarán exceptuadas de las sanciones siempre que aleguen en su descargo los elementos suficientes que demuestren que ese incumplimiento no les es imputable.

Artículo 71.- La violación del cumplimiento del destino de los fondos del artículo 13, implicará una multa del doble del valor no asignado a la educación y formación en la próxima distribución del fondo partidario permanente.

Artículo 72.- Será sancionada con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establece el artículo 16 de la presente Ley.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto, los directores y gerentes o representantes de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente Ley. Igual sanción se aplicará para el caso de proveedores en general que violen lo dispuesto en el artículo 54.

Las personas físicas, así como los propietarios,

directores y gerentes o representantes de personas jurídicas que incurran en la conducta señalada en el presente artículo serán pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.

Artículo 73.- En el caso del segundo párrafo del artículo 48, el funcionario co-contratante será pasible de una inhabilitación de dos (2) a diez (10) años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos, y para el ejercicio de otros cargos públicos.

Artículo 74.- Publicidad en medios:

a) La persona física o jurídica que incumpliera los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en televisión, radio y medios gráficos será pasible de una multa de entre cincuenta mil (\$ 50.000) y cien mil (\$100.000) pesos.

b) La persona física o jurídica que explote un medio de comunicación y que violare la prohibición establecida en el artículo correspondiente de esta ley será pasible de la siguiente sanción: 1. Multa equivalente a, por lo menos, veinte (20) veces el valor del total de segundos al aire de la publicidad que se transmitió en prohibición a lo dispuesto por esta Ley, si se trata de un medio televisivo o radial. 2. Multa equivalente a, por lo menos, veinte (20) veces el valor de la publicidad impresa, en caso de tratarse de un medio gráfico.

Artículo 75.- El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de la información prevista en los artículos 23, 24, 60 y 64 facultará al Juez Electoral o al órgano que lo reemplace a aplicar una multa por presentación extemporánea equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%), por cada día de demora del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente.

Transcurridos noventa (90) días, del vencimiento del plazo de que se trate, el Juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su resolución a la Secretaría.

Artículo 76.- Se impondrán multas de hasta pesos \$ 100.000 a toda persona física o jurídica, y al partido político, que violare lo dispuesto en el artículo 47.

Artículo 77.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 78.- De forma.

Disposiciones Transitorias:

Primera: El Tribunal Superior de Justicia reglamentará por Acordada la organización administrativa y funcionamiento de la Secretaría de Financiamiento de

Partidos Políticos y Campañas Electorales establecida en el artículo 6º de la presente Ley.

Roberto Birri.

FUNDAMENTOS

En el marco de la Reforma Política que se ha planteado llevar adelante en la Provincia de Córdoba, el tratamiento de la problemática y posterior modificación de las leyes que establecen los mecanismos por los cuales se financian los partidos políticos, tanto en su vida ordinaria interna como en las campañas electorales, resulta un capítulo fundamental.

Según la especialista Delia M. Ferreyra Rubio, la relación dinero/política ocupa un lugar relevante en la agenda pública en la última década. Ante cada campaña electoral, o ante cada caso de corrupción que se conoce, se reaviva la preocupación por la falta de transparencia y la ineficiencia de los controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política. Ya Max Weber había sostenido que las finanzas de los partidos constituyen el capítulo menos claro de su historia, y sin embargo, uno de los más importantes, ya que las elecciones dependen crecientemente del dinero gastado en equipos profesionales, activistas y muy especialmente en cuántos espacios televisivos y de radio los candidatos y los partidos puedan pagar.

El tema adquiere nuevamente relevancia en las últimas semanas con motivo de los crímenes mafiosos cometidos en la Provincia de Buenos Aires, todos ellos relacionados presuntamente con el narcotráfico y, donde supuestamente alguna de las víctimas a través de sus empresas habría aportado a la campaña de algún candidato presidencial.

Por ello, el tema del Financiamiento, es un tema medular en el concierto de la reforma. Quizás haga falta debatir si son necesarios más recursos para sostener al sistema político, pero lo que no podemos permitir es que la política se transforme en el arte de lo imposible. Que de medio y solución se convierta en fin y problema. Pero para llegar a una solución hace falta debate y consenso.

El tema es tan complejo y profundo como la misma naturaleza humana. Y por lo tanto, necesita de un auténtico compromiso colectivo que permita generar un cambio en la política y la sociedad.

Una prueba empírica: muchas veces el presupuesto es manipulado y distorsionado en los años electorales; suele aumentar el gasto público en los meses previos a los comicios.

Algo tal vez inevitable porque la gestión del presupuesto es política, pero también hay cosas más obscuras y menos discutidas como la manipulación de los programas sociales -. Cuestiones objetivas como los indicadores de necesidades básicas insatisfechas son distorsionados por cuestiones políticas como el clientelis-

mo.

Las sucesivas reformas políticas implementadas en Argentina agrandaron la brecha entre quienes están en el poder y quienes no. Hoy los partidos se convirtieron en máquinas electorales que casi no tienen otro tipo de actividades.

Los distintos autores y analistas en la materia destacan que en los sistemas de financiamiento vigentes en la mayoría de los países latinoamericanos sus características más bien determinan un sistema que privilegia la regulación abundante, bajos niveles de transparencia, órganos de control débiles, un régimen de sanciones bastante ineficaz y una cultura proclive al incumplimiento. Factores como el régimen de gobierno, el sistema de partidos y la cultura política pesan en la determinación de las características fundamentales y en el funcionamiento de los sistemas nacionales de financiamiento.

El análisis de las principales características formales y reales de dichos sistemas arroja el siguiente balance:

1) En lo formal, un sistema predominantemente mixto, con una tendencia a favor del financiamiento público y una proclividad a acentuar los límites legales de las contribuciones privadas. Estos rasgos formales se contrastan, sin embargo, con la percepción generalizada de que estas últimas superan ampliamente a los fondos públicos en casi todos los países de la región; presunción que se ve reforzada por los frecuentes escándalos de corrupción, financiamiento ilegal, narcodinero, etcétera.

2) Debido a la combinación de múltiples factores tales como regulación inadecuada, ineficacia de los órganos de control y del régimen de sanciones y de prácticas políticas hasta ahora favorables a la trasgresión de las normas, el financiamiento público, más que un sustituto parcial del privado, ha funcionado, en muchos casos, como aditamento del mismo. Por ello, y pese a su contribución positiva, su impacto a la fecha ha sido limitado, con variaciones de país en país.

3) Existe una tendencia a favor de controlar los disparadores del gasto electoral, estableciendo topes y acortando campañas, con resultados disímiles en los diferentes países. Esta tendencia se ve acompañada de una reorientación en el uso de los recursos públicos, según el concepto de inversión electoral, destinados al fortalecimiento de los partidos políticos, mediante el apoyo de actividades de investigación y capacitación.

4) Mientras ciertos temas han sido tratados adecuadamente, otros, en cambio, como el acceso equitativo a los medios de comunicación, cuentan en la mayoría de los casos con una regulación precaria o inexistente. Este tema, y en particular lo que se refiere al acceso a la televisión, presenta uno de los mayores vacíos a escala regional, con la excepción de unos pocos países.

5) Los niveles de transparencia siguen siendo bajos, si bien es posible observar un mayor número de

reformas dirigidas a fortalecer la rendición de cuentas y a mejorar la divulgación. Se constata, asimismo, un papel creciente y positivo de los medios de comunicación y de la sociedad civil en este ámbito.

6) Sin perjuicio de reconocer ciertos avances, la gran mayoría de las reformas recientes no ha venido acompañada del necesario fortalecimiento de los órganos de control y del régimen de sanciones. Esta situación sigue siendo el talón de Aquiles de muchos de los sistemas de financiamiento de la región.

En general, todos los especialistas en la materia concuerdan en el diagnóstico referenciado, algunos más otros menos.

Los especialistas destacan cuatro consideraciones respecto de esta cuestión. La primera de ellas radica en destacar la importancia de examinar el sistema de financiamiento no sólo en función de los objetivos buscados por la reforma y en relación con los efectos deseados sobre el sistema político y el de partidos, sino también respecto del grado de eficacia de las normas, así como de los efectos indeseables o perversos, para evitar en todo momento caer en el error de llevar a cabo evaluaciones en abstracto y basadas en modelos ideales. La segunda pasa por la necesidad de insistir en que toda reforma al sistema de financiación sea parte integral de la reforma político - electoral en su conjunto, pues sus consecuencias afectan a aspectos de gran importancia, como la contienda interpartidista, las condiciones de la competencia, el sistema de partidos y, consecuentemente, la propia credibilidad y legitimidad de la democracia misma. La tercera consiste en comprender la verdadera naturaleza de esta problemática como la experiencia comparada lo enseña: un tema condenado a la sucesión de distintas reformas legales. De ahí la importancia de tener en cuenta su carácter fluctuante y coyuntural, pues la adopción de una solución suele engendrar efectos no buscados que deben ser nuevamente corregidos mediante otra reforma legal. No en vano en Alemania, país que viene prestando a este tema atención destacada en los últimos 50 años, se le denomina la "legislación interminable". Por último, la cuarta consideración aconseja evitar la regulación excesiva, legislando sólo aquello que pueda hacerse cumplir y que se pueda controlar. Experiencias tanto de países latinoamericanos como de Francia, Israel, España y Estados Unidos demuestran que la incapacidad de hacer cumplir las normas destruye las buenas intenciones de los reformadores.

Así, los procesos de reforma en materia de financiamiento político deben estar guiados por el objetivo básico de fomentar una competencia política abierta y libre, basada en condiciones de equidad y transparencia. El propósito fundamental pasa por lograr que sea el sistema el que controla al dinero y no el dinero al sistema. Por ello, toda reforma debe tener una brújula para no perder su norte, y ser realista y precisa en cuanto a sus

objetivos, para evitar buscar soluciones perfectas que suelen fracasar en la práctica.

El relato y diagnóstico anterior por supuesto es aplicable a nuestra ley 6874, la que hoy resulta insuficiente y debe ser superada por otra adaptada a las necesidades sociales, políticas y culturales que reclama la sociedad.

En ese sentido y, además de la modificación e introducción de institutos nuevos, se propone como novedoso la creación de la Secretaría de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales, un órgano que funcionará dentro de la estructura de la Justicia Electoral Provincial o el órgano que la reemplace en el futuro, teniendo como objetivo principal concentrar y distribuir el fondo partidario permanente, el Fondo destinado en la ley de Presupuesto general para campañas electorales y cualquier otro fondo destinado por el estado a los Partidos Políticos y/o campañas electorales. La Secretaría detendrá además funciones de control del cumplimiento de la ley, sin perjuicio de las asignadas al Juzgado electoral provincial por esta ley u otras. El objetivo del instituto es transparentar, controlar y limitar el financiamiento de los partidos políticos, excluyendo al Ministerio de Gobierno (órgano Político por excelencia) del manejo y distribución de aquellos fondos.

El tema en cuestión fue abordado por la Comisión de Expertos convocada por el Ejecutivo Provincial, la que en su largo informe realizó recomendaciones que compartimos y propiciamos con respecto al Financiamiento de los Partidos Políticos.

Tenemos la convicción de que por su importancia e incidencia el tema debe ser debatido y consensuado; propiciando una reforma que garantice mecanismos de control y cumplimiento de normas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Roberto Birri.

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestras **Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA**, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 1860/L/08, iniciado por los Legisladores de los Bloques de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, de la Concertación Plural y de RECREAR para el Crecimiento, por el que establece el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos y deroga la Ley N° 6875 -Ley Orgánica de los Partidos Políticos-, COMPATIBILIZADO con los Proyectos de Ley N°

11308/L/07, iniciado por los Legisladores Fonseca (M/C), Valinotto (M/C) y la Legisladora Olivero, por el que modifica el artículo 2º de la Ley N° 6875 -Régimen Legal de los Partidos Políticos, referido a sumatoria de votos; N° 11647/L/07, iniciado por el Legislador Rossi, por el que modifica diversos artículos de la Ley N° 6875 -Orgánica de los Partidos Políticos-, referidos al financiamiento de los partidos y N° 1733/L/08, iniciado por el Legislador Birri, por el que establece la forma de financiamiento de los partidos políticos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

**TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES**

**Capítulo 1
Conceptos básicos**

Artículo 1º.- Definición. LOS partidos políticos son personas jurídicas de derecho público, constituidas como asociaciones voluntarias de ciudadanos que a través de su doctrina propenden al bien común, respetando el sistema democrático, representativo y republicano de gobierno, conforme a los principios y derechos constitucionalmente consagrados, cuya finalidad fundamental es contribuir de manera participativa y pluralista a la formulación y realización de la política provincial o municipal, orientando a la opinión pública y contribuyendo a la formación de la voluntad del pueblo para la integración de los gobiernos provincial, municipales o comunales.

Artículo 2º.- Garantía de asociación política. TODO ciudadano con domicilio en la Provincia de Córdoba tiene el derecho de asociarse y conformar partidos políticos democráticos -provinciales, municipales o comunales- para participar en la vida política del Estado.

Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho a obtener la personería jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los departamentos, municipios o comunas de la Provincia, de acuerdo con las disposiciones y los requisitos que establece esta Ley.

Artículo 3º.- Persona Jurídica de Derecho Privado. LOS partidos políticos reconocidos tienen personalidad jurídico-política. Son, además, personas de derecho privado, de acuerdo con las disposiciones de la legislación común, pudiendo adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo al régimen dispuesto por el Código Civil y el presente ordenamiento.

Artículo 4º.- Requisitos sustanciales. LA existencia de los partidos políticos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

- 1) Comunidad de ciudadanos, unidos por un vínculo político perdurable;
- 2) Compromiso expreso de sostener una política provincial y/o municipal que promueva el bien comunitario, propugne la defensa de las instituciones republicanas, representativas, democráticas y participativas y sostenga las autonomías provincial y municipal, conforme a los valores, derechos y garantías consagrados por la Constitución de la Provincia;
- 3) Organización y funcionamiento estables y regulados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma específica que establezca cada partido y observando, en su caso, las normas establecidas en esta Ley, y
- 4) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que importa su inscripción en el registro público correspondiente.

**Capítulo 2
Funciones, Derechos y Obligaciones**

Artículo 5º.- Funciones. LOS partidos políticos, a quienes les incumbe en forma exclusiva la postulación de los candidatos idóneos para cargos públicos electivos, tienen además las siguientes funciones:

- 1) Contribuir en la educación del ciudadano para el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos;
- 2) Propender a la defensa irrestricta de la institucionalidad condenando todas las formas de corrupción, deshonestidad y falta de ética pública;
- 3) Concurrir a la formación y capacitación de dirigentes que se encuentren en condiciones de desempeñar con idoneidad los cargos públicos para los cuales sean eventualmente electos o designados
- 4) Formar y encauzar la opinión pública sobre los asuntos de interés general que hacen a la marcha del gobierno;
- 5) Receptar las demandas de la sociedad en torno a las cuestiones públicas;
- 6) Velar por la plena vigencia de los principios democráticos, participativos y pluralistas, y por la real vigencia de los derechos humanos, con responsabilidad ética para con sus postulados y adherentes;
- 7) Propiciar la participación del ciudadano en la vida política de la sociedad, y
- 8) Proponer a la población programas de acción pública y de gobierno.

Artículo 6º.- Derechos. LOS partidos políticos gozan de los siguientes derechos:

- 1) Ejercer libremente las funciones partidarias de dirección y de candidaturas;

2) Desarrollar las actividades partidarias propias que no sean contrarias a las leyes ni a la Constitución Nacional o Provincial;

3) Defender la inviolabilidad de sus sedes partidarias;

4) Acceder a los medios de comunicación;

5) Disponer de franquicias impositivas para el ejercicio de sus funciones y sobre los bienes de que se vale para el logro de sus objetivos;

6) Confeccionar sus propios padrones de afiliados;

7) Acceder a las fuentes de información del Gobierno;

8) Ejercer plenamente la autodeterminación en la acción política, y

9) Autorizar a sus afiliados a aceptar cargos públicos no electivos en gobiernos ejercidos por otros partidos políticos.

Artículo 7º.- Obligaciones. LOS partidos políticos deben respetar, cumplir o hacer cumplir las siguientes obligaciones:

1) Dar a publicidad por los medios masivos de comunicación el contenido de la carta orgánica partidaria y sus postulados y bases de acción política;

2) Respetar la voluntad de los afiliados y adherentes expresada libremente y de acuerdo a los mecanismos estatutarios respectivos;

3) Actuar con sentido, democrático, pluralista y de moralidad republicana en la acción pública;

4) Fomentar el respeto a la institucionalidad y la ética en la función pública;

5) Informar con responsabilidad cívica a la población sobre los asuntos de interés general;

6) Realizar elecciones periódicas de autoridades partidarias, y

7) Rendir cuenta en tiempo y forma de los aportes privados y públicos que reciban.

Capítulo 3

Consideraciones Generales

Artículo 8º.- Orden público. LAS disposiciones de esta Ley son de orden público y se aplicarán a los partidos que intervengan en la elección de autoridades provinciales o municipales.

Artículo 9º.- Contralor. CORRESPONDE al Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba el control de la vigencia efectiva de los derechos, reconocimientos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, alianzas y confederaciones políticas, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

Artículo 10.- Candidatura única. LAS perso-

nas postuladas a cargos públicos electivos lo pueden ser únicamente por un solo partido político, alianza o confederación de partidos políticos.

Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes partidos políticos, alianzas o confederaciones de éstos, ni de listas entre sí.

Ninguna persona puede ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos. Dicha prohibición se hará extensiva para los candidatos a cargos nacionales, provinciales y municipales, cuando haya simultaneidad electoral o se hubiere fijado la misma fecha para la realización del comicio.

Artículo 11.- Candidatos. Generalidad. LAS candidaturas de ciudadanos no afiliados, podrán ser presentadas por los partidos y tal posibilidad deberá estar prevista en sus cartas orgánicas.

TÍTULO II

DE LA FUNDACIÓN Y CONSTITUCIÓN

Capítulo 1

Requisitos para el Reconocimiento de la Personería Jurídico-Política

Artículo 12.- Solicitud de reconocimiento.

PARA que una agrupación sea reconocida como partido político provincial, municipal o comunal, debe cumplimentar los siguientes requisitos:

1) Presentar ante el Juez de aplicación la solicitud respectiva, adjuntando:

a) Acta de fundación y constitución en la que constará nombre y domicilio del partido;

b) Declaración de principios y bases de acción política;

c) Carta orgánica, y

d) Designación de autoridades promotoras y apoderados.

2) Instrumento que acredite un número de adherentes equivalentes a la cuarta parte del requerido en el artículo 14 de la presente Ley, o de quinientos (500) inscriptos si aquella resultara mayor, quienes deben reunir la calidad de electores, conforme al régimen electoral provincial y a los padrones utilizados en la última elección provincial.

El instrumento que acredite la adhesión del número mínimo de electores que habilita para iniciar el trámite, contendrá nombre y apellido, domicilio y matrícula de los adherentes, así como la certificación por la autoridad promotora de las firmas.

Cumplido el trámite precedente, el partido queda habilitado para realizar la afiliación mediante las fichas que entregará el Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 13.- Publicación. Observaciones. LA so-

licitud de reconocimiento será publicada por la autoridad de aplicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término de cinco (5) días corridos. Dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la publicación mencionada, cualquier partido político reconocido legalmente, puede formular observaciones en forma fundada y por escrito a la solitud de reconocimiento del nuevo partido.

Interpuesta la oposición se correrá vista a las autoridades promotoras del nuevo partido para que ejerzan su derecho de defensa en un plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la misma. Vencido este plazo, la autoridad de aplicación resolverá sobre las oposiciones, pronunciando su fallo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. La resolución es apelable dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de su notificación, en forma fundada, y por ante la autoridad administrativa y/o jurisdiccional correspondiente.

Artículo 14.- Reconocimiento Definitivo. PARA obtener la personería definitiva se requiere acreditar la afiliación de un número mínimo de electores de acuerdo a lo siguiente:

1) Para partidos provinciales: el cuatro por mil (4‰) del total de inscriptos en el padrón del Registro Electoral de la Provincia;

2) Para los partidos municipales:

a) En municipios de hasta diez mil (10.000) habitantes, cincuenta (50) electores;

b) En municipios de hasta cien mil (100.000) habitantes, cien (100) electores y

c) En municipios de más de cien mil (100.000) habitantes, el cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el padrón respectivo.

3) Para los partidos comunales: treinta (30) electores.

Artículo 15.- Caducidad. EL trámite para obtener la personería definitiva caduca de pleno derecho a los seis (6) meses contados desde el reconocimiento a que alude el último párrafo del artículo 12 de esta Ley.

Artículo 16.- Constitución de autoridades. OBTENIDO el reconocimiento definitivo, las autoridades promotoras deben, dentro de los noventa (90) días de notificado aquél, convocar y realizar las elecciones internas para constituir las autoridades definitivas del partido conforme a las disposiciones de sus respectivas cartas orgánicas. Realizada la elección en el plazo precedentemente establecido, el acta de la misma será presentada al juez de aplicación dentro de los diez (10) días de celebrada la elección.

Artículo 17.- Responsabilidad. TODOS los trámites ante el Juzgado Electoral Provincial, hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias, serán efectuados por las autoridades promotoras o los apoderados, quienes son solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones, siendo pasibles de la responsabilidad que para el funcionario público establece la legislación penal si incurrieren en falsedad.

Capítulo 2

Denominación y Atributos de los Partidos

Artículo 18.- Tipos de partidos. LOS partidos políticos, conforme al ámbito en que desarrollan su actividad partidaria, pueden ser:

1) Provinciales: son aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a cargos electivos para gobernador y vicegobernador, para legisladores provinciales, miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, convencionales constituyentes y para proponer intendentes municipales, concejales, miembros de la comisión comunal y miembros de tribunales de cuentas municipales y comunales, y

2) Municipales o Comunales: son aquellos que se encuentran habilitados solamente para postular candidatos a cargos electivos de intendentes municipales y concejales o miembros de la comisión comunal y miembros de tribunales de cuentas municipales o comunales, en aquellos municipios y/o comunas en los que obtuvieron su respectivo reconocimiento jurídico-político.

Artículo 19.- Atributo exclusivo. EL nombre constituye un atributo exclusivo del partido político que lo adopta. No puede ser usado por ningún otro, ni tampoco por asociación o entidad de cualquier naturaleza dentro del territorio de la Provincia de Córdoba. Será adoptado en el acto de constitución, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación.

En los supuestos de alianzas o confederaciones de partidos políticos se puede anexar, al nombre utilizado por las mismas, la individualización e identificación de los partidos políticos que las integran.

Artículo 20.- Uso del término. LA denominación "partido" puede ser utilizada únicamente por las agrupaciones reconocidas como tales, mientras que aquellas agrupaciones que se encuentren en trámite de constitución deben utilizar la denominación "partido -reconocimiento en trámite-".

Artículo 21.- Prohibiciones nominativas. EL nombre del partido político no puede contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni las expresiones "argentino", "comunal", "municipal", "provincial", "nacional", "internacional" ni sus derivados, ni aquellos cuyos significados afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la Nación, ni palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clases, religiosos o conduzcan a provocarlos.

Debe distinguirse razonable y claramente del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, en términos que no provoquen confusión gráfica o fonética. En caso de escisión, el grupo desprendido no tiene derecho a emplear, de manera total o parcial, el nombre originario del partido, ni aún con aditamentos o supresiones.

Artículo 22.- Prohibición de uso del nombre.

CUANDO por causa de caducidad se cancelare la personalidad política de un partido, o fuere declarado extinguido, su nombre no puede ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurridos cuatro (4) años en el primer caso y ocho (8) en el segundo, desde la sentencia firme respectiva.

Artículo 23.- Número de identidad electoral.

LOS partidos políticos tienen derecho al uso permanente y exclusivo de un número de identificación que será asignado y registrado por el Juzgado Electoral Provincial, adjudicándose en el orden en que obtengan su reconocimiento.

Artículo 24.- Símbolos y emblemas. LOS partidos reconocidos tienen asimismo el derecho al registro y al uso exclusivo de sus insignias, símbolos y emblemas adoptados, con sujeción a las limitaciones análogas establecidas para el nombre y a lo determinado en el artículo 22 de la presente Ley. El número de identidad electoral del partido puede ser utilizado también como símbolo o emblema identificatorio.

Capítulo 3

Fusión de Partidos. Alianzas y Confederaciones

Artículo 25.- Fusión. LOS partidos provinciales y municipales o comunales pueden fusionarse entre sí. El reconocimiento del nuevo partido resultante de la fusión debe solicitarse ante el Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 26.- Alianzas. LOS partidos políticos provinciales y municipales o comunales reconocidos pueden concertar alianzas de carácter transitorio y con fines electorales, siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen.

En los acuerdos o convenios que materialicen la decisión de conformar una alianza electoral, los partidos que participen de la alianza deben consignar expresamente el porcentaje en que se distribuirán los fondos públicos de financiamiento de los partidos políticos y los espacios públicos publicitarios de las campañas electorales.

La constitución de una alianza debe ser puesta en conocimiento del Juzgado Electoral Provincial, por escrito y mediante solicitud formal de reconocimiento e inscripción, con no menos de sesenta (60) días antes de la elección en que aquella se proponga intervenir. En esa oportunidad cumplirá con los siguientes requisitos:

- 1) Acreditar que la alianza fue decidida por los organismos máximos de cada partido;
- 2) Expresar el nombre adoptado y demás atributos para su identificación y participación en el proceso electoral;
- 3) Acompañar la plataforma electoral común;
- 4) Designar un (1) responsable económico finan-

ciero y un (1) responsable político de campaña, quienes son solidariamente responsables con el presidente, el tesorero y los candidatos de cada uno de los partidos integrantes de la alianza, por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, y

- 5) Designar apoderados comunes.

La resolución que reconozca la existencia legal de una alianza política debe ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y darse a conocer a la población por los medios masivos de comunicación, momento a partir del cual la alianza queda habilitada para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos.

Artículo 27.- Confederaciones. LOS partidos políticos reconocidos pueden confederarse cumpliendo los siguientes requisitos:

- 1) Especificar los partidos políticos que se confederan y justificar la voluntad de formar la confederación con carácter permanente, expresado por los organismos partidarios competentes;
- 2) Acompañar testimonio de las resoluciones que reconocieron personería a cada uno de los partidos políticos que se confederan;
- 3) Nombre y domicilio central de la confederación en la Provincia, municipalidad o comuna;
- 4) Incluir la declaración de principios, bases de acción política y carta orgánica de la confederación y los de cada partido político, y
- 5) Adjuntar el acta de elección de las autoridades de la confederación y de la designación de los apoderados, y suministrar nómina de las autoridades de cada partido político.

Los partidos confederados tienen el derecho de secesión y podrán denunciar el acuerdo que los confederara. Sus organismos centrales carecen del derecho de intervención.

Artículo 28.- Secesión. Prohibición. LOS partidos fusionados o aliados no tienen derecho de secesión.

TÍTULO III

DE LA DOCTRINA Y ORGANIZACIÓN

Capítulo 1

Declaración de Principios

Artículo 29.- Bases de acción política. LA declaración de principios y el programa o base de acción política de todo partido, debe sostener los fines de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y ajustarse de manera formal y real a las exigencias del artículo 4º inciso 2) de esta Ley, orientando la acción del partido.

Artículo 30.- Prohibiciones sustantivas. NO cumplen con los requisitos del artículo anterior los partidos que por su doctrina o en su actuación -por vía de sus organismos o candidatos- lleven a la práctica en su or-

ganización y vida interna o en su acción exterior, la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza, la condena o ataque injustificado a la institucionalidad o la concentración personal del poder.

Capítulo 2

Carta Orgánica y Plataforma Electoral

Artículo 31.- Definición. LA carta orgánica constituye la norma fundamental del partido y las confederaciones, en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deben ajustar obligatoriamente su actuación.

Artículo 32.- Principios. LA carta orgánica regula la organización y el funcionamiento del partido o confederación y el derecho de secesión de este último, conforme con los siguientes principios:

1) Gobierno y administración, distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios: las convenciones, congresos o asambleas son los órganos de jerarquía superior del partido; la duración del mandato en los cargos partidarios no puede exceder de cuatro (4) años;

2) Sanción por los órganos partidarios de la declaración de principios, el programa o las bases de acción política;

3) Apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año durante el término mínimo de sesenta (60) días y anunciada con un (1) mes de anticipación;

4) Asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión vinculada con el derecho a la afiliación;

5) Participación y control de los afiliados y de las minorías en el gobierno y administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos;

6) Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de esta Ley;

7) Determinación de las causas y la forma de extinción del partido;

8) Conformar tribunales de disciplina, cuyos integrantes gocen de garantías que aseguren la independencia de su cometido, y

9) Capacitación de los cuadros partidarios en la problemática local, provincial, regional, nacional e internacional.

Artículo 33.- Sanción y modificación. LA carta orgánica y sus modificaciones deben ser sancionadas por los órganos deliberativos del partido y aprobadas por el Juzgado Electoral Provincial, en lo concerniente a las exigencias de los artículos 30 y 32 de esta Ley.

Artículo 34.- Documentación. LA justificación de la documentación exigida en los títulos de esta Ley se hace mediante testimonio o copia autenticada por escribano público, sin perjuicio de que pueda ser requerida

la documentación original.

Artículo 35.- Plataforma electoral. CON anterioridad a la elección de candidatos, los organismos partidarios competentes deben sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el programa o las bases de acción política.

Una copia de la plataforma, así como la constancia de la aceptación de las candidaturas por los candidatos, deben ser remitidas al juez de aplicación, en oportunidad de requerirse la oficialización de las listas.

TÍTULO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS

Capítulo 1

Afiliación

Artículo 36.- Requisitos. PARA afiliarse a un partido se requiere:

1) Estar domiciliado en el territorio electoral en que se solicite la afiliación;

2) Comprobar la identidad con la libreta de enrocamiento o cívica, el documento nacional de identidad o cualquier otro documento electoral otorgado a los fines del ejercicio del derecho al sufragio, y

3) Presentar por triplicado la ficha de solicitud que a tal efecto elabore el Juzgado Electoral.

La firma o impresión digital debe certificarse en forma fehaciente por funcionario público competente. Si la certificación es efectuada por escribano público, lo será al solo efecto de la autenticidad no siendo aplicables las exigencias de registración a los fines de acordar fecha cierta del acto.

También pueden certificar las firmas los integrantes de los organismos ejecutivos y la autoridad partidaria que éstos designen, cuya nómina debe ser remitida previamente a el Juzgado Electoral Provincial.

La afiliación puede ser solicitada ante el Juzgado Electoral Provincial o por intermedio del Juzgado de Paz lego de la localidad del domicilio, en cuyo caso el Juez certificará la autenticidad de la firma o impresión digital.

Las fichas solicitud son suministradas sin cargo por el Juzgado Electoral Provincial a los partidos políticos reconocidos o en formación y a los Juzgados de Paz. Las fichas a que se hace referencia en el presente inciso son entregadas por el Juzgado Electoral Provincial con la identificación del partido. Si las autoridades partidarias al certificar sobre la autenticidad de las firmas de afiliación incurrieran en falsedad, serán pasibles de la responsabilidad que para el funcionario público establece la legislación penal.

Artículo 37.- Excepciones. NO pueden ser afiliados:

1) Los excluidos del Registro Nacional y Provincial de Electores como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

2) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro

cuando haya sido llamado a prestar servicio;

3) El personal superior o subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación y de las provincias en actividad o retirado llamado a prestar servicios, y

4) Los magistrados y funcionarios en actividad del Poder Judicial Nacional y Provincial.

Artículo 38.- Vigencia. LA calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprobaren la solicitud respectiva, los que deben expedirse dentro de los noventa (90) días a contar de la fecha de su presentación. Transcurrido dicho plazo sin que mediare decisión en contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Una ficha de afiliación se entrega al interesado, otra es conservada por el partido y la restante se remite al Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 39.- Condiciones. Extinción. NO puede haber más de una afiliación. La afiliación a un partido importa la renuncia a toda otra afiliación anterior.

La afiliación se extingue por renuncia, por expulsión, por una afiliación posterior a otro partido, por incumplimiento o por violación de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la presente Ley.

La extinción de la afiliación, por cualquier causa, será comunicada al Juzgado Electoral Provincial por la autoridad partidaria dentro de los treinta (30) días de haberse conocido.

Artículo 40.- Registro. EL registro de afiliados está constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación vigentes a que se refieren los artículos anteriores, el cual será llevado por los partidos políticos y por el Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 41.- Padrón partidario. EL padrón partidario es público. Pueden confeccionarlo los partidos políticos o, a su pedido, el Juzgado Electoral Provincial, petición que debe ser formulada dos (2) meses antes del acto eleccionario. En el primer caso, actualizado y autenticado, debe remitirse al Juzgado Electoral Provincial treinta (30) días antes de cada elección interna o cuando éste lo requiera. En el segundo, se confecciona en base al registro que lleva el Juzgado Electoral Provincial y se entrega sin cargo a los partidos políticos, con treinta (30) días de antelación a cada elección interna.

Capítulo 2

Elecciones Internas para Cargos Partidarios

Artículo 42.- Sistema. LOS partidos políticos practicarán en su vida interna el sistema democrático a través de elecciones periódicas para la nominación y renovación de autoridades, mediante la participación de sus afiliados de conformidad con las prescripciones de su carta orgánica y de la presente Ley.

Los partidos que adoptaren el sistema de convenciones deben realizar la elección de las autoridades por el

voto directo y secreto de sus afiliados.

Artículo 43.- Validez. LAS elecciones internas para la designación de autoridades son consideradas válidas cuando votase un porcentaje de afiliados superior al diez por ciento (10%) del requisito mínimo establecido en el artículo 14, inciso 1) de la presente Ley, excepto que hubiere una (1) sola lista.

De no alcanzarse tal porcentaje se debe efectuar una segunda elección dentro de los treinta (30) días que, a efectos de ser tenida por válida, debe cumplir los mismos requisitos.

La no acreditación de este requisito en elecciones de autoridades provinciales dará lugar a la caducidad de la personería jurídico-política del partido.

Artículo 44.- Eximición del acto eleccionario. EN caso de oficializarse una sola lista para la elección de autoridades partidarias, puede prescindirse del acto eleccionario, siendo reemplazado el mismo por acta de proclamación realizada por la junta electoral partidaria.

Artículo 45.- Normativa. LAS elecciones partidarias internas se rigen por la carta orgánica y lo dispuesto en la presente Ley, y subsidiariamente en lo que resulte aplicable, por la legislación electoral vigente en la Provincia.

Artículo 46.- Control. EL Juzgado Electoral Provincial puede, de oficio o a pedido de parte, controlar la totalidad del proceso electoral interno, por medio de veedores designados al efecto, quienes confeccionarán un acta con los resultados obtenidos, suscripta por las autoridades partidarias.

Artículo 47.- Comunicación y publicación de resultados. EL resultado de las elecciones partidarias internas es comunicado al Juzgado Electoral Provincial y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, dentro de los diez (10) días siguientes a la realización de la elección.

Artículo 48.- Acreditación de residencia. LA residencia exigida por la Constitución Provincial o la ley como requisito para el desempeño de los cargos para los que se postulan los candidatos puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, excepto la testimonial, siempre que figuren inscriptos en el registro de electores del lugar que corresponda.

Artículo 49.- Sufragante doloso. EL ciudadano que en una elección partidaria interna suplantare a otro sufragante, o votare más de una vez o de cualquier otra manera sufragase sin derecho y dolosamente, será inhabilitado por seis (6) años para elegir y ser elegido, inclusive en las elecciones partidarias internas y para el desempeño de cargos públicos.

Capítulo 3

Titularidad de Derechos y Poderes Partidarios

Artículo 50.- Garantía funcional. SE garantiza a las autoridades constituidas el uso del nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno y administración del partido o confederación y, en general, el desempeño de todas las actividades inherentes al mismo de conformidad con esta Ley, demás disposiciones legales sobre la materia y la carta orgánica del partido.

Artículo 51.- Otras titularidades garantizadas. LA titularidad de los derechos y poderes partidarios reglada en el artículo anterior, determina también la de los bienes, símbolos, emblemas, número, libros y documentación del partido.

Capítulo 4

Organización Contable

Artículo 52.- Miembros partidarios responsables. LOS partidos políticos deben nombrar un (1) tesoro titular y un (1) suplente, o sus equivalentes de acuerdo a sus respectivas cartas orgánicas, con domicilio en la Provincia, debiendo ambos ser afiliados a esa agrupación política. Las designaciones con los respectivos datos de identidad y profesión deben ser comunicadas al Juzgado Electoral Provincial.

Artículo 53.- Obligaciones del Tesorero. SON obligaciones del tesorero:

- 1) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen y destino de ellos, fecha de la operación y nombre y domicilio de las personas intervinientes;
- 2) Elevar en término a los organismos de control la información requerida por la presente Ley, y
- 3) Efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta única que dispondrá el partido político.

Artículo 54.- Depósito de fondos partidarios. LOS fondos de los partidos políticos deben depositarse en una única cuenta que se abrirá en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro (4) de sus miembros, de los cuales dos (2) deben ser el presidente y tesorero, o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente, debe suscribir los libramientos que se efectúen.

Artículo 55.- Documentación exigible. SIN perjuicio de los libros y documentos que prescriba la carta orgánica, los partidos deben llevar en forma regular los siguientes libros rubricados y sellados por el juez de aplicación correspondiente:

- 1) Libro de inventario;
 - 2) Libro de caja, debiendo conservarse la documentación complementaria correspondiente por el término de tres (3) años, y
 - 3) Libro de actas y resoluciones en hojas fijas.
- Además, los organismos centrales llevarán el fichero de afiliados.

Artículo 56.- Rúbrica. DENTRO de los sesenta (60) días posteriores a la notificación de reconocimiento

del partido político, las autoridades promotoras deben hacer rubricar por el Juzgado Electoral Provincial los libros que establece el artículo anterior, la que debe ser previa a cualquier actuación que pretenda asentarse.

Capítulo 5

Actos que hacen a la Existencia Partidaria

Artículo 57.- Registro. EL Juzgado Electoral Provincial lleva un registro, donde deben inscribirse:

- 1) Los partidos reconocidos y la ratificación de los partidos preexistentes;
- 2) El nombre partidario, sus cambios y modificaciones;
- 3) El nombre y domicilio procesal de los apoderados;
- 4) Los símbolos, emblemas y números partidarios que se registren;
- 5) El registro de afiliados y los movimientos de nuevas afiliaciones, renunciaciones, cancelación o extinción de ellas;
- 6) Las confederaciones de partidos que se constituyan;
- 7) Las alianzas electorales que se formalicen;
- 8) La cancelación de la personería jurídica política partidaria;
- 9) Las infracciones y sanciones que se le hubieren impuesto por incumplimiento a las obligaciones prescriptas en la presente normativa y en la legislación electoral provincial, y
- 10) La extinción y la disolución partidarias.

El registro es público y puede ser consultado por cualquier ciudadano, partido, alianza o confederación política, sin restricciones ni necesidad de acreditar interés legítimo.

Capítulo 6

Internas Abiertas para Cargos Electivos

Artículo 58.- Sistema. PARA la selección de candidatos a cargos públicos determinados por el régimen electoral provincial, todos los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas legalmente en la Provincia de Córdoba, deben hacerlo mediante el sistema de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias.

Artículo 59.- Régimen. UNA ley especial reglamentará todos los aspectos, alcances, plazos y condiciones sobre las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias.

TÍTULO V

DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

Capítulo 1

Bienes y Recursos

Artículo 60.- Recursos. LOS partidos políticos

obtienen sus recursos mediante el financiamiento público y privado, en las formas y condiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 61.- Integración. EL patrimonio de los partidos políticos se integra con las contribuciones de sus afiliados, los fondos provenientes del Estado y los bienes y recursos que autorice la carta orgánica y que no prohíba la ley.

Artículo 62.- Bienes registrables. LOS bienes registrables adquiridos con fondos partidarios, o que provinieren de donaciones efectuadas con tal objeto, deben inscribirse a nombre del partido en los registros correspondientes.

Artículo 63.- Exención impositiva. LOS bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos, los documentos y actuaciones a que dé lugar su constitución e inscripción y los que se relacionen con las modificaciones de sus estatutos, están exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras de orden provincial.

La exención alcanza a los bienes de renta del partido, siempre que ésta fuere invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acrecentare, directa o indirectamente, el patrimonio de persona alguna, como así también a las donaciones en favor del partido y al papel destinado a uso del mismo.

Invítase a los municipios y comunas a dictar la normativa que contemple la exención de tributos de orden local que puedan gravar los bienes de los partidos políticos.

Capítulo 2 Financiamiento Privado

Artículo 64.- Aportes permitidos. LOS partidos políticos pueden obtener para su financiamiento, con las limitaciones previstas en esta Ley, los siguientes aportes del sector privado:

- 1) De sus afiliados, de forma periódica o extraordinaria, conforme a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
- 2) Donaciones de otras personas físicas -no afiliados- y personas jurídicas de origen nacional, provincial, o municipal;
- 3) De rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades, y
- 4) Del Fondo de Financiamiento Permanente para los partidos políticos.

Artículo 65.- Montos máximos admitidos. LOS partidos políticos pueden recibir por año calendario las siguientes donaciones:

- 1) De una persona jurídica, un aporte que no supere el monto equivalente al dos por ciento (2%) del total de gastos permitidos, y
- 2) De una persona física, un aporte que no supere el monto equivalente al uno por ciento (1%) del total

de gastos permitidos.

Los porcentajes mencionados se computarán sobre un límite de gastos equivalentes al dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada elector habilitado para votar en la última elección provincial.

El límite del inciso 2) será de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de las cartas orgánicas partidarias, referidas a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos electivos.

La Justicia Electoral Provincial informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en su sitio web.

Artículo 66.- Aportes prohibidos. Los partidos políticos no pueden aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de:

- 1) Personas anónimas. No puede imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
- 2) Entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales, interestatales, binacionales, multilaterales o municipales;
- 3) Empresas concesionarias de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales;
- 4) Personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;
- 5) Gobiernos o entidades públicas extranjeras;
- 6) Personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;
- 7) Personas que hubieran sido obligadas por sus superiores jerárquicos o empleadores a efectuar la contribución, y
- 8) Asociaciones sindicales, patronales o profesionales.

Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.

Artículo 67.- Infracciones y sanciones a los partidos. LOS partidos políticos que recibieran contribuciones o donaciones en violación a lo establecido en este Capítulo serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones.

Artículo 68.- Infracciones y sanciones a los donantes. LAS personas físicas o jurídicas que efectuaran las contribuciones o donaciones prohibidas en el presente Capítulo, serán sancionadas con una multa que tendrá como mínimo el monto aportado y como máximo el décuplo del mismo.

Además, las personas físicas como así también los propietarios, directores, gerentes o representantes de

personas jurídicas que incurran en la conducta señalada en el párrafo anterior, serán pasibles de inhabilitación, por el término de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en elecciones a cargos públicos nacionales, provinciales, municipales, comunales o de autoridades de los partidos políticos y para el desempeño de cargos públicos y partidarios.

Artículo 69.- Destino de las multas. TODAS las multas que se aplicaren en virtud de las disposiciones anteriores ingresarán al "Fondo Partidario Permanente" creado por el artículo 80 de la presente Ley.

Capítulo 3

Financiamiento Público

Artículo 70.- Objetivo. EL Estado Provincial contribuye al sostenimiento de los partidos políticos reconocidos, garantizando:

1) El funcionamiento regular de los partidos políticos que mantengan vigente su personería jurídico-política, mediante aportes provenientes de la creación de un fondo específico, cuya fiscalización está a cargo del Consejo de Partidos Políticos, y

2) El acceso a los espacios publicitarios en medios electrónicos de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que hayan oficializado sus listas de candidatos en tiempo y forma, mediante aportes provenientes de un fondo específico cuya creación, administración y distribución está prevista en la ley que regula el régimen electoral y las campañas políticas de la Provincia de Córdoba. A los fines de la aplicación de la presente Ley, se entiende por medios electrónicos a la radio y la televisión por aire o cable, de carácter provincial o local.

Artículo 71.- Fondo Partidario Permanente. CONFORME a los objetivos previstos en el artículo anterior, créase el "Fondo Partidario Permanente", el que está integrado por:

1) La partida presupuestaria que destine anualmente la Ley de Presupuesto General de la Provincia, la que garantizará un monto equivalente a un dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada voto válidamente emitido;

2) El dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta Ley y de la ley que establece el régimen electoral provincial;

3) El producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieren a los partidos políticos extinguidos;

4) Los legados y donaciones que efectúe el sector privado con ese destino y para el fortalecimiento del sistema democrático;

5) Los reintegros que efectúen los partidos, alianzas o confederaciones políticas, y

6) Los fondos remanentes de los asignados por esta Ley o por la Ley de Presupuesto General de la Provincia al Ministerio de Gobierno, o al organismo que en el futuro lo sustituyere, una vez realizadas las erogaciones

para las que fueron previstos.

Artículo 72.- Afectación Presupuestaria. LA Ley General de Presupuesto determina, anualmente, la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro "Fondo Partidario Permanente".

Artículo 73.- Distribución del Fondo. EL Ministerio de Gobierno, o el organismo que en el futuro lo sustituyere, distribuye anualmente -en tres (3) tramos cuatrimestrales- los recursos del Fondo Partidario Permanente, de la siguiente manera:

1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria entre todos los partidos provinciales y en forma proporcional entre los partidos municipales o comunales conforme lo decida el Juzgado Electoral Provincial, siempre que hubieren participado en la última elección provincial o de circuito, respectivamente, y

2) El setenta por ciento (70%) restante en forma proporcional a la cantidad de votos válidos obtenidos por el partido, alianza o confederación política de que se trate, en la última elección provincial.

El Consejo de Partidos Políticos fiscaliza su aplicación, a los efectos que determina la presente Ley y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Artículo 74.- Destino de los recursos. LOS partidos políticos utilizan los recursos que destine el Estado Provincial para realizar las siguientes actividades:

1) Desarrollo institucional, entendiéndose como tal a todas las actividades institucionales y administrativas, como compra de insumos, pago de personal, entre otros, derivadas del cumplimiento de la presente Ley y de la carta orgánica partidaria;

2) Capacitación y formación política, incluyendo actualización, sistematización y divulgación doctrinaria, y

3) Programas de capacitación y formación cívica para ciudadanos menores de treinta (30) años y para alumnos del nivel medio.

Artículo 75.- Distribución de los recursos. DE los aportes que reciban anualmente los partidos políticos deben destinar, como mínimo:

1) El veinte por ciento (20%) para desarrollo institucional, y

2) El treinta por ciento (30%) para actividades de capacitación para la función pública, formación para dirigentes e investigación.

Anualmente los partidos políticos enviarán al Consejo de Partidos Políticos de la Provincia, un plan con los temas, seminarios, foros, etc. que se desarrollarán en torno a la capacitación política y al finalizar el año presentarán un informe acompañado de imágenes o artículos publicados en la prensa, referidos a las propuestas previamente elevadas.

Capítulo 4

Control Patrimonial

Artículo 76.- Obligaciones contables. LOS partidos a través del órgano que determine la carta orgánica

deben:

1) Llevar la contabilidad de todo ingreso de fondos o especies, con indicación de la fecha del mismo y de los nombres y domicilios de las personas que los hubieren ingresado o recibido; esta contabilidad debe conservarse durante tres (3) ejercicios con todos sus comprobantes;

2) Dentro de los sesenta (60) días de finalizado cada ejercicio, presentar al Juzgado Electoral Provincial el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificados por contador público nacional o por los órganos de control del partido, y

3) Dentro de los sesenta (60) días de celebrado el acto electoral en que haya participado el partido, presentar al Juzgado Electoral Provincial la cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral.

Artículo 77.- Contenido de la rendición. EN la rendición de cuentas los partidos políticos están obligados a discriminar detalladamente los siguientes rubros:

1) Ingresos de afiliados por aportes ordinarios y extraordinarios;

2) Aportes de funcionarios y miembros del Gobierno;

3) Aporte estatal proveniente del Fondo Partidario Permanente;

4) Donaciones y contribuciones de personas físicas y jurídicas, indicando el origen;

5) Ingresos provenientes del patrimonio partidario;

6) Aporte estatal para campaña electoral;

7) Aportes provenientes de organizaciones internacionales, y

8) Otros ingresos.

Artículo 78.- Presentación al Juzgado Electoral. LAS cuentas y documentos a que se refiere el artículo anterior deben estar en el Juzgado Electoral Provincial para conocimiento de los interesados y del Ministerio Fiscal, durante treinta (30) días hábiles.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho término no se hicieron observaciones, el Juzgado ordena su archivo. Si se formularen observaciones por violación de las disposiciones legales o de la carta orgánica, el Juzgado Electoral resuelve, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Los estados anuales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas deben publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y durante ciento ochenta (180) días en la página web del Juzgado Electoral.

Artículo 79.- Auditorías contables. EL Juzgado Electoral Provincial dispone del asesoramiento de los auditores contables que integran la Dirección de Administración del Poder Judicial, los que tienen un plazo má-

ximo de ciento ochenta (180) días para la realización de la auditoría de los estados contables anuales de los partidos políticos.

Vencido dicho término el Juzgado Electoral Provincial, dentro del plazo de treinta (30) días, debe resolver, pudiéndose ampliar dicho plazo de mediar la necesidad de aclaraciones o nuevos informes por parte del partido político de que se trate.

TÍTULO VI

DE LA CADUCIDAD Y EXTINCIÓN DE LOS PARTIDOS

Capítulo 1

Causales. Procedimiento.

Artículo 80.- Causales de caducidad. SON causas de caducidad de la personería jurídico-política de los partidos:

1) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años consecutivos, excepto cuando se de el supuesto previsto en el artículo 44 de la presente Ley;

2) La no presentación en dos (2) elecciones consecutivas sin causa debidamente justificada, y

3) La violación de lo determinado en el artículo 4, incisos 3) y 4) y artículo 55 de la presente Ley, previa intimación judicial.

La caducidad da lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de la personería jurídico-política.

Artículo 81.- Causales de extinción. LOS partidos se extinguen:

1) Por las causas que determine la carta orgánica;

2) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica;

3) Cuando en dos (2) elecciones generales consecutivas para legisladores provinciales no alcanzare a obtener el dos por ciento (2%) del total de votos válidamente emitidos;

4) Cuando la actividad del partido, a través de sus autoridades o candidatos no desautorizados por aquellas, fuera atentatoria de los principios fundamentales establecidos en los artículos 4º, 29 y 30 de la presente Ley, y

5) Por sentencia del Juzgado Electoral Provincial que así lo ordene por haber infringido las disposiciones sobre conductas antidemocráticas o sobre el financiamiento de los partidos políticos establecidas en la presente Ley.

La extinción pone fin a la existencia legal del partido y da lugar a su disolución.

Artículo 82.- Garantías del debido proceso. LA cancelación de la personería jurídico-política y la extinción de los partidos son declaradas por sentencia del

Juzgado Electoral Provincial, con todas las garantías del debido proceso legal, en que el partido será parte.

Artículo 83.- Publicidad de la sentencia. LA sentencia firme -pasada en autoridad de cosa juzgada- ordenando la disolución del partido político se asienta al margen de su respectiva inscripción en el registro de partidos políticos y es publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en diarios de difusión masiva.

Capítulo 2

Bienes del Partido Extinguido. Nuevo Reconocimiento

Artículo 84.- Destino de los bienes. LOS bienes del partido extinguido tienen el destino establecido en la carta orgánica y, en el caso de que ésta no lo determine, ingresarán -previa liquidación- al "Fondo Partidario Permanente" sin perjuicio del derecho de los acreedores.

Los libros, archivos, ficheros y emblemas del partido extinguido quedan en custodia del Juzgado Electoral Provincial, el que, pasados seis (6) años y previa publicación por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, puede ordenar su destrucción.

Artículo 85.- Nuevo reconocimiento. EN caso de declararse la caducidad de la personería jurídico-política de un partido reconocido, en virtud de las causas establecidas en esta Ley, previa intervención del interesado y del procurador fiscal, puede ser solicitada nuevamente después de celebrada la primera elección, cumpliendo con lo dispuesto en el Título II de la presente Ley.

El partido extinguido por sentencia firme no puede ser reconocido nuevamente con el mismo nombre, carta orgánica, declaración de principios, programa o bases de acción política, por el término de seis (6) años.

TÍTULO VII CONDUCTAS ANTIDEMOCRÁTICAS

Capítulo Único Tipificación y sanciones

Artículo 86.- Tipificación. SE consideran conductas antidemocráticas los siguientes hechos y actuaciones evidenciados por los partidos políticos:

1) Los que manifiestamente procuren quebrantar el régimen constitucional y contradigan abiertamente el compromiso de lealtad al régimen democrático que todo partido político debe tener;

2) Los que atenten contra los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal y los Pactos Complementarios o en contra de las libertades y derechos constitucionalmente garantizados;

3) Las que consistan en el empleo de la violencia armada o inciten a ella, como asimismo las prácticas terroristas en cualquiera de sus formas, y

4) La constitución de grupos partidistas armados o sujetos a disciplina paramilitar y militar.

Artículo 87.- Sanciones. LOS partidos políticos que incurran en conductas antidemocráticas deben ser sancionados por el Juzgado Electoral Provincial con alguna de las siguientes medidas:

1) Censura pública;

2) Multa de hasta un diez por ciento (10%) del importe correspondiente al Fondo Partidario Permanente para el financiamiento de los partidos políticos;

3) Privación del aporte estatal de financiamiento permanente y electoral, hasta un máximo de dos (2) años, y

4) Disolución.

Estas sanciones son aplicables sin perjuicio de las penas que correspondan de conformidad con la ley penal respectiva.

Artículo 88.- Denuncias. LA denuncia por acciones antidemocráticas en contra de algún partido político, la puede realizar cualquier ciudadano, y en el proceso de juzgamiento se deben respetar todas las garantías constitucionales de derecho de defensa y debido proceso en juicio.

TÍTULO VIII RÉGIMEN PROCESAL

Capítulo 1 Principios Generales

Artículo 89.- EL procedimiento ante el Juzgado Electoral Provincial se rige por las siguientes normas:

1) Las actuaciones se tramitan en papel simple y están exentas del pago de la tasa de justicia. Las publicaciones contempladas en esta Ley se hacen en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y sin cargo;

2) La acreditación de la personería puede efectuarse mediante copia autenticada del acta de elección o designación de autoridades o apoderados o por poder otorgado mediante escritura pública;

3) Tienen personería para actuar ante el Juzgado Electoral Provincial los partidos políticos reconocidos o en trámite de reconocimiento, sus afiliados cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados por la carta orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias y el Fiscal Electoral en representación del interés u orden público;

4) En todo cuanto no se opongan a disposiciones específicas de la presente Ley serán de aplicación las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, y

5) Será de aplicación el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba para el juzgamiento de los delitos e infracciones contenidas en la presente Ley.

Capítulo 2 Procedimiento para el Reconocimiento

Artículo 90.- EL proceso de reconocimiento de los partidos políticos y confederaciones se tramita de la siguiente manera:

1) La petición se formula de conformidad a lo que se dispone para la demanda verbal en el proceso civil y comercial, en cuanto le fuera aplicable. En el escrito de presentación se indican los elementos de información que quieran hacerse valer, en especial se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 12, 14 ó 27 de la presente Ley, según fuere el caso;

2) El Juzgado Electoral Provincial, una vez cumplimentados los requisitos exigidos por la presente Ley, convoca a una audiencia que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes. A dicha audiencia deben concurrir inexcusablemente el peticionario, el Fiscal Electoral, y serán también convocados los apoderados de todos los partidos políticos reconocidos o en formación del ámbito de su jurisdicción o los de los otros que se hubieran presentado invocando interés legítimo. En este comparendo verbal pueden formularse observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley o referentes al derecho, al registro o uso del nombre si no lo hubiesen hecho antes o emblemas partidarios propuestos. Se presentará en el mismo acto la prueba en que se fundan tales observaciones. El Ministerio Público puede intervenir por vía de dictamen;

3) Celebrada tal audiencia, y habiéndose expedido el Fiscal Electoral sobre el pedido de reconocimiento y las observaciones que pudieran haberse formulado, el juez resolverá dentro de los diez (10) días, y

4) La resolución que se dicte es apelable dentro del plazo de cinco (5) días y el recurso será concedido en relación.

Los comparecientes a la audiencia prevista en el inciso 2) están legitimados para interponer recurso de apelación en iguales términos.

Capítulo 3

Procedimiento Contencioso

Artículo 91.- Tramitación. CUANDO la cuestión planteada fuese contenciosa se tramita por el proceso verbal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo Único

Artículo 92.- Adecuación de cartas orgánicas. LOS partidos o confederaciones políticas que, a la fecha de sanción de esta norma, estén formalmente reconocidas en el ámbito de la Provincia de Córdoba, deben adecuar sus cartas orgánicas, estatutos y demás normas in-

ternas, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de su publicación.

Artículo 93.- Personería jurídica. Vigencia. LOS partidos políticos provinciales, municipales o comunales y las confederaciones definitivamente reconocidas en virtud de las normas aplicables hasta la entrada en vigencia de la presente Ley, mantienen su personería jurídico-política bajo condición de cumplir los requisitos exigidos por esta norma en los plazos fijados para adecuarse a sus disposiciones.

Artículo 94.- Interpretación. TODO conflicto normativo relativo a su interpretación y aplicación, deberá resolverse a favor de la presente Ley.

Artículo 95.- Vigencia. LA presente Ley entra en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 96.- Derogación normativa. DERÓGASE la Ley Nº 6875.

Artículo 97.- De forma. COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

PROYECTO DE LEY - 01897/L/08

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1.- Modifícase el artículo 143, del Capítulo VI del Título VIII de la Ley Nº 8102 Orgánica Municipal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“**Artículo 143** – Las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales tendrán lugar entre los treinta (30) y ciento veinte (120) días antes de la expiración del mandato.

Las elecciones extraordinarias motivadas por vacantes producidas dentro del período ordinario se efectuarán el día que decida la convocatoria anunciada con quince (15) días de anticipación como mínimo.”

Artículo 2.- Modifícase el artículo 218, del Capítulo IV del Título XII de la Ley Nº 8102 Orgánica Municipal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“**Artículo 218** – Las elecciones deberán realizarse entre los treinta (30) y ciento veinte (120) días de anticipación a la finalización de cada período.

Serán convocadas por el Presidente de la Comisión o por la Junta Electoral en los casos establecidos en la presente ley.

En lo referido a campañas electorales será de aplicación lo establecido en el Capítulo VII del Título VIII de esta normativa.”

Artículo 3.- Incorpórase como Capítulo VII del Título VIII de la Ley Nº 8102 Orgánica Municipal, el siguiente texto y articulado a saber:

“Capítulo VII

Campañas Electorales**Plazo**

Artículo 144 bis – Las campañas electorales para la elección de Intendente y Concejales y miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, tienen una duración de cuarenta y cinco (45) días corridos, antes de la fecha fijada para la veda electoral.

Prohibición de Publicidad Oficial

Artículo 144 ter – Queda prohibida la realización de publicidad oficial durante los últimos treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha prevista para una elección.

Prohibición de Actos Inaugurales

Artículo 144 quater - Queda prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, durante los quince (15) días inmediatos anteriores a la fecha fijada para la celebración de un comicio."

Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Daniel Passerini, Francisco Fortuna.

FUNDAMENTOS

La Ley Orgánica Municipal nº 8102 en su Título VIII, capítulo VI, regula lo atinente a las elecciones para renovación de autoridades municipales, estableciendo como requisito que el comicio deberá realizarse como mínimo treinta (30) días antes de la finalización del mandato, omitiendo fijar una fecha máxima para que se lleve a cabo dicho acto electoral, esta "omisión" permitió verdaderos excesos de muchos gobiernos locales que realizaron elecciones para renovación de Intendentes, Concejales y Miembros de Tribunales de Cuenta con una anticipación –exagerada- a la fecha prevista para la finalización de la gestión, en casos, llegando a superar el año calendario.

Este abuso, contraviene los principios elementales del sistema republicano y democrático, por lo que, entendemos, debe ser corregido por la legislación pendiendo un límite de tiempo máximo para la realización de una elección de renovación de autoridades.

Así es que, en ese sentido, como lo hiciéramos en el Proyecto de Ley de Código Electoral presentado en el marco de la Reforma Política para la Provincia de Córdoba, proponemos modificar el artículo 143 de la ley 8102 fijando en ciento veinte (120) días -antes de la finalización del mandato- como plazo máximo para que se lleve a cabo el acto eleccionario, respetando el plazo mínimo que el artículo mencionado establece. Lo propio sugerimos hacer con las comunas por lo que se propone la modificación al artículo nº 218 de la Ley 8102, incorporando el plazo máximo de ciento veinte (120) días antes de la finalización del periodo de gobierno.

También entendemos prudente incorporar a con-

tinuación del capítulo que regula sobre las elecciones para las autoridades municipales, un capítulo que llevaría el número VII y tendría como epígrafe "Campañas Electorales", con tres artículos que establezca el plazo de las mismas, cuarenta y cinco (45) días corridos antes de la veda electoral y las prohibiciones de realizar publicidad oficial por parte de los gobiernos locales durante los treinta (30) días anteriores a la fecha de una elección y, además, prohíba en los quince (15) días anteriores al acto comicial la realización de inauguraciones o anuncios oficiales, todo en consecuencia con lo establecido en el Proyecto de Ley que este bloque presentó oportunamente relacionado con la elección para renovación de autoridades provinciales.

Por los fundamentos expuestos y los que se expresarán en oportunidad de su tratamiento en el recinto, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el presente proyecto de ley.

Daniel Passerini, Francisco Fortuna.

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 1897/L/08, iniciado por los Legisladores Fortuna y Passerini, por el que modifica los artículos 143 y 218 e incorpora el Capítulo VII al Título VIII de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-, referidos a renovación de autoridades, elecciones, campañas electorales, publicidad oficial y actos inaugurales de obras, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 143, del Capítulo VI del Título VIII de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 143.- Las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales tendrán lugar entre treinta (30) y ciento veinte (120) días antes de la expiración del mandato.

Las elecciones extraordinarias motivadas por vacantes producidas dentro del período ordinario, se efectuarán el día que decida la convocatoria anunciada con quince (15) días de anticipación, como mínimo."

Artículo 2º.- MODIFÍCASE el artículo 218, del Capítulo IV del Título XII de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 218.- Las elecciones deben realizarse entre treinta (30) y ciento cincuenta (120) días antes de la finalización de cada período.

Serán convocadas por el Presidente de la Comisión o por la Junta Electoral en los casos establecidos en la presente Ley.

En lo referido a campañas electorales será de aplicación lo establecido en el Capítulo VII del Título VIII de esta normativa.”

Artículo 3º.- INCORPÓRASE como Capítulo VII del Título VIII de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-, el siguiente texto y articulado a saber:

**“Capítulo VII
Campañas Electorales**

Plazo

Artículo 144 bis.- LAS campañas electorales para la elección de intendente y concejales y miembros del tribunal de cuentas municipal, tienen una duración de cuarenta y cinco (45) días corridos, antes de la fecha fijada para la veda electoral.

Prohibición de Publicidad Oficial

Artículo 144 ter.- Queda prohibida la realización de publicidad oficial durante los últimos treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha prevista para una elección.

Prohibición de Actos Inaugurales

Artículo 144 quáter.- Queda prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, durante los quince (15) días inmediatos anteriores a la fecha fijada para la celebración de un comicio.”

Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.

Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Vásquez, Busso, Carbonetti, Graglia, Saieg, Sella, Falo, Heredia, Valarolo.

- 17 -

**A) REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
PROVINCIAL. NECESIDAD.**

**B) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.
REFORMA PARCIAL. NECESIDAD.
DECLARACIÓN.**

**C) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.
REFORMA PARCIAL. NECESIDAD.
DECLARACIÓN.**

D) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.

**REFORMA. NECESIDAD. CONSULTA POPULAR
NO VINCULANTE. CONVOCATORIA.**

**E) CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. REFORMA PARCIAL.
NECESIDAD. DECLARACIÓN.**

**F) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.
REFORMA PARCIAL. NECESIDAD.**

**G) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.
REFORMA PARCIAL. NECESIDAD.**

Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 153/L/08, 176/L/08, 1048/L/08, 1572/L/08, 1832/L/08, 1873/L/08 y 1877/L/08.

Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: por entender que la reforma política es un proceso, siendo nuestro bloque por historia y voluntad política profundamente reformista y estimando que debemos buscar los consensos necesarios para tratar los temas, solicito la vuelta a comisión de los proyectos que tratan de la reforma parcial de la Constitución provincial números 153/L/08, 176/L/08, 1048/L/08, 1572/L/08, 1832/L/08, 1873/L/08 y 1877/L/08.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Busso de volver a comisión los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Recuerdo a los señores legisladores que el próximo miércoles 10 vamos a hacer el homenaje a los veinticinco años de democracia, con la presencia de los diputados y senadores que fueron elegidos en el año '83 y que asumieron los mandatos.

Agradecemos especialmente la tarea de los taquígrafos, que están desde la mañana temprano, desde la Audiencia Pública hasta este momento; desde ya, muchísimas gracias. (Aplausos).

Desde la Presidencia agradezco la conducta de los señores legisladores para poder llevar adelante esta sesión y el trabajo que han realizado.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Daniel Passerini a arriar la

Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.

– Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.

– Es la hora 23 y 55.

Silvana Sabatini

Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo